

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA



TESIS DOCTORAL

**Los problemas de representación política y la socialdemocracia: los
casos de España y Francia (2000-2017)**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA

PRESENTADA POR

Cristina Fernández Rovira

Directores

**María Esther del Campo García
Ludolfo Paramio Rodrigo**

**Madrid
Ed. electrónica 2019**



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Universidad Complutense de Madrid
Programa Oficial de Doctorado en Sociología y
Antropología

**LOS PROBLEMAS DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y LA
SOCIALDEMOCRACIA.**

LOS CASOS DE ESPAÑA Y DE FRANCIA

(2000 - 2017)

Doctoranda

Cristina Fernández Rovira

Directores

Dra. María Esther del Campo García

Dr. Ludolfo Paramio Rodrigo

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Madrid, 2018

AGRADECIMIENTOS

La culminación de la tesis doctoral ha sido posible gracias a la ayuda de los directores que han brindado su apoyo desde el inicio del proyecto: Ludolfo Paramio, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Esther del Campo, Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Por eso, quiero mostrarles todo mi agradecimiento.

Asimismo, también quiero dar las gracias al director del Centro de investigación Émile Durkheim, perteneciente a la Université de Bordeaux y a Sciences Po Bordeaux (Institut d'études politiques), Xabier Itçaina, y al director de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique de Francia y profesor del Colegio de Europa, Olivier Costa, por permitirme realizar una estancia de investigación en Burdeos.

De la misma forma, quiero agradecer a todos los profesores y profesoras, en especial de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya y de la Universitat Autònoma de Barcelona que, de alguna u otra forma, han contribuido al proyecto con cartas, consejos, lecturas y revisiones.

Por todo su apoyo, quiero dar las gracias también a la familia y a los amigos, que desde cualquier rincón del mundo han tenido siempre una palabra amable.

Para los ausentes, por hacernos presentes.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Resumen/Abstract	10
Capítulo 1. Introducción	11
Capítulo 2. Problema de investigación y diseño metodológico	20
2.1. Presentación del problema de investigación	20
2.1.1. Objetivos de la investigación	21
2.1.2. Preguntas de investigación	21
2.1.3. Hipótesis y variables	22
2.1.4. Justificación del estudio	23
2.1.5. Viabilidad del estudio	25
2.1.6. Deficiencias en el conocimiento del problema	25
2.2. El diseño metodológico	26
2.2.1. El estudio de caso: España y Francia	26
2.2.2. Presentación y justificación de los casos de estudio	29
2.2.3. Diseño de la investigación y periodo de análisis	33
2.2.4. Fases y herramientas metodológicas	36
Capítulo 3. Marco teórico y conceptual	46
3.1. El concepto de representación política a lo largo de la historia	46
3.1.1. Los orígenes del concepto de representación política	49
3.1.2. El parlamentarismo	54
3.1.3. La representación política desde la segunda posguerra hasta hoy	74
3.2. La representación política y los modelos de democracia	77
3.3. El concepto de representación política en la actualidad	88
3.4. Problemas de representación política	97
3.5. La representación política en España y Francia	103
3.5.1. El caso español	103
3.5.1.1. Problemas específicos relacionados con la representación política en España	105
3.5.2. El caso francés	108
3.5.2.1. Problemas específicos relacionados con la representación política en Francia	110

Capítulo 4. Marco contextual	114
4.1. El tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales.	115
Cambios sociológicos	
4.1.1. Los cambios en la economía, el trabajo y el bienestar. El postfordismo	117
4.2. Transformaciones sociales. La sociedad de la información	133
4.3. La evolución de la socialdemocracia	141
4.3.1. Orígenes de la socialdemocracia moderna	141
4.3.2. Consenso socialdemócrata	142
4.3.3. Dilemas de la socialdemocracia	147
4.3.4. De la estanflación a la globalización: el auge neoliberal	148
4.3.5. La Tercera Vía: una redefinición de la socialdemocracia	157
4.3.6. El contexto supranacional: la Eurozona	159
4.4. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista francés (PS)	162
4.4.1. Primera etapa de gobiernos del PSOE (1982 - 1996)	163
4.4.2. Segunda etapa de gobierno del PSOE (2004 - 2011)	170
4.4.3. Primera etapa del PS en la presidencia de Francia (1981 - 1995)	173
4.4.4. Segunda etapa del PS en la presidencia de Francia (2002 - 2017)	180
4.5. La crisis económica de 2008	182
Capítulo 5. Problemas relacionados con la representación política y resultados electorales en España (2000 - 2017)	194
5.1. Descontento político	195
5.2. Alejamiento entre los representantes y los representados	208
5.3. Oligarquización	211
5.4. Desconfianza política	213
5.5. Desafección política	224
5.6. Corrupción	230
5.7. Credibilidad	232
5.8. Abstencionismo	234
5.9. Problemas y resultados electorales	243

Capítulo 6. Problemas relacionados con la representación política y resultados electorales en Francia (2000 - 2017)	250
6.1. Descontento político	250
6.2. Alejamiento entre los representantes y los representados	258
6.3. Oligarquización	261
6.4. Desconfianza política	263
6.5. Desafección política	277
6.6. Corrupción	282
6.7. Credibilidad	284
6.8. Abstencionismo	285
6.9. Problemas y resultados electorales	293
Capítulo 7. Discusión de resultados	301
7.1. Los problemas de representación política en España y Francia (2000 - 2017)	301
7.1.1. El descontento político	301
7.1.2. Alejamiento entre los representantes y los representados	304
7.1.3. Oligarquización	305
7.1.4. Desconfianza política	309
7.1.5. Desafección política	314
7.1.6. Corrupción	316
7.1.7. Credibilidad	318
7.1.8. Abstencionismo	319
7.2. Los problemas de representación política y los periodos socialistas	321
Capítulo 8. Conclusiones	328
8.1. Conclusiones generales de la investigación	328
8.2. Conclusiones metodológicas	335
8.3. Tendencias de futuro	336
Chapter 9. Conclusions – English Version	339
9.1. General conclusions of the investigation	339
9.2. Methodological conclusions	345
9.3. Future trends	346
Bibliografía	349

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Los casos de estudio y sus contextos	29
Figura 2. Fase 2 en la realización de la investigación. Categorías y problemas de representación	37
Figura 3. Categorías, problemas y atributos	39
Figura 4. Proceso de selección de datos secundarios	41
Figura 5. Categorías, problemas, atributos e instrumentos	42
Figura 6. Precedentes del concepto moderno de representación política	53
Figura 7. La representación política en los inicios del parlamentarismo	60
Figura 8. Síntesis de las principales características de la representación política en los inicios del parlamentarismo	61
Figura 9. La representación política desde las perspectivas liberal y utilitarista	69
Figura 10. Evolución de la problemática	86
Figura 11. Marco conceptual de la representación política	96
Figura 12. Problemas relacionados con la representación política	97
Figura 13. Principales problemas de representación política en España y Francia	113
Figura 14. Características básicas de la ideología socialdemócrata en sus diferentes etapas	161
Figura 15. Ejes y problemas de los gobiernos del PSOE entre 1982 y 1996	169
Figura 16. Ejes y problemas de los gobiernos del PSOE entre 2004 y 2011	173
Figura 17. Ejes y problemas de los gobiernos del PS entre 1981 y 1995	179
Figura 18. Ejes y problemas de los gobiernos del PS entre 2012 y 2017	181
Figura 19. Nivel de confianza en las instituciones francesas	274

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Trabajadores del sector servicios y ventas en España y Francia	118
Gráfico 2. Operarios y técnicos en España y Francia	119
Gráfico 3. Porcentaje del PIB destinado a gasto social	122
Gráfico 4. Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial en España y Francia	124
Gráfico 5. Porcentaje de trabajadores temporales en España y Francia	125
Gráfico 6. Porcentaje de trabajo precario en España y Francia	126
Gráfico 7. Media de ganancias netas anuales en España y Francia	127
Gráfico 8. Porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza en España y Francia	127
Gráfico 9. Porcentaje de desempleo del total de la población activa en España y Francia	129
Gráfico 10. Porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social	131
Gráfico 11. Desigualdad según el coeficiente de Gini	132
Gráfico 12. Porcentaje de uso de internet por individuos	138
Gráfico 13. Deuda gubernamental durante la Gran Recesión	185
Gráfico 14. Evolución del desempleo anual entre 2000 y 2007	188
Gráfico 15. Evolución del desempleo anual durante la Gran Recesión	188
Gráfico 16. Tasa de riesgo de pobreza entre 2007 y 2015	189
Gráfico 17. Personas en riesgo de pobreza o exclusión social durante la Gran Recesión	190
Gráfico 18. Desigualdad en la distribución de la renta	191
Gráfico 19. Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España	195
I	
Gráfico 20. Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España	198
II	
Gráfico 21. Nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno en España	203
Gráfico 22. Porcentaje de personas que creen que la política es demasiado complicada de entender	209
Gráfico 23. Confianza en el parlamento nacional en España I	213
Gráfico 24. Confianza en el parlamento nacional en España II	215
Gráfico 25. Confianza en los políticos	218
Gráfico 26. Confianza en los partidos políticos en España I	219
Gráfico 27. Confianza en los partidos políticos en España II	221

Gráfico 28. Confianza en el gobierno nacional en España	222
Gráfico 29. Evolución del indicador de confianza política del CIS	223
Gráfico 30. Interés por la política en España	226
Gráfico 31. Toma de conciencia sobre asuntos políticos en España	228
Gráfico 32. Identificación de los principales problemas para los españoles	231
Gráfico 33. Porcentaje de personas que indican que fueron a votar en las últimas elecciones en España	235
Gráfico 34. Resultados de las elecciones generales entre 2000 y 2017	236
Gráfico 35. Intención de voto en España	238
Gráfico 36. Principales partidos votados en las últimas elecciones estatales en España	241
Gráfico 37. Cercanía a un partido en particular y a qué partido	242
Gráfico 38. Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Francia I	252
Gráfico 39. Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Francia II	253
Gráfico 40. Opinión sobre el funcionamiento de la democracia en Francia	255
Gráfico 41. Nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno nacional en Francia	256
Gráfico 42. Opinión sobre si la política es demasiado complicada de entender	259
Gráfico 43. Opinión sobre si los representantes franceses tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía	260
Gráfico 44. Confianza en el parlamento nacional en Francia I	264
Gráfico 45. Confianza en el parlamento nacional en Francia II	266
Gráfico 46. Confianza en el gobierno nacional en Francia	267
Gráfico 47. Confianza en los políticos	269
Gráfico 48. Confianza en los partidos políticos en Francia I	270
Gráfico 49. Confianza en los partidos políticos en Francia II	272
Gráfico 50. Interés por la política en Francia I	278
Gráfico 51. Interés por la política en Francia II	280
Gráfico 52. Toma de conciencia sobre asuntos políticos en Francia	281
Gráfico 53. Resultados de las elecciones presidenciales francesas (2ª vuelta)	287
Gráfico 54. Porcentaje de encuestados que indican que fueron a votar en las últimas elecciones en Francia	288

Gráfico 55. Grado declarado de movilización en las elecciones francesas	289
Gráfico 56. Principales partidos votados en las últimas elecciones en Francia (1ª vuelta)	290
Gráfico 57. Cercanía a un partido en particular y a qué partido en Francia	292
Gráfico 58. Opinión sobre si el sistema político permite a la ciudadanía tener influencia en Francia y en España (2014)	307
Gráfico 59. Opinión sobre si el sistema político permite a la ciudadanía tener algo que decir en Francia y España (2014)	308
Gráfico 60. Desconfianza hacia el parlamento nacional en 2000 y 2017	310
Gráfico 61. Desconfianza en el gobierno nacional en 2001 y 2017	311
Gráfico 62. Desconfianza en los partidos políticos en 2000 y 2017	313
Gráfico 63. Facilidad para participar en política (2014)	316
Gráfico 64. Puntuación en el Índice de Corrupción de Transparency International de España y de Francia	317

RESUMEN

La tesis doctoral titulada *Los problemas de representación política y la socialdemocracia. Los casos de España y de Francia (2000 - 2017)* aborda la relación entre los resultados electorales de los partidos socialdemócratas clásicos de España y de Francia, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista francés (PS), con los problemas de representación política, tales como el descontento político, el alejamiento entre los representantes y los representados, la oligarquización, la desconfianza política, la desafección política, la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo. El periodo de análisis se extiende entre los años 2000 y 2017.

La investigación se articula como un estudio de caso en que las dos unidades de análisis se analizan teniendo en cuenta el contexto sociohistórico de transformaciones sociales y de la evolución de la socialdemocracia. Además, el trabajo se sustenta en las bases teóricas del concepto de representación política a lo largo de la historia.

ABSTRACT

The doctoral thesis entitled *The problems of political representation and socialdemocracy. The cases of Spain and France (2000 - 2017)* deals with the relationship between the electoral results of the classic social democratic parties of Spain and France, the Spanish Socialist Workers Party (PSOE) and the French Socialist Party (PS), with the problems of political representation, such as political discontent, distance between representatives and those represented, oligarchization, political distrust, political disaffection, corruption, lack of credibility and abstention. The period of analysis extends between the years 2000 and 2017.

The research is articulated as a case study in which the two units of analysis are studied taking into account the sociohistorical context of social transformations and the evolution of socialdemocracy. In addition, the work is based on the theoretical basis of the concept of political representation throughout history.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

La segunda década del siglo XXI empezaba con lo que parecía ser un nuevo dilema para la socialdemocracia europea, hacer frente a una crisis económica en un mundo en que las políticas keynesianas se creían obsoletas. Al mismo tiempo, las sociedades llamadas avanzadas o de capitalismo tardío vivían altas cotas de desconfianza y descontento político, que afectaban de especial manera a los partidos políticos, así como a otras instituciones representativas. A este cóctel, se añadió, al comienzo de la segunda década del nuevo siglo, la Gran Recesión y sus consecuencias. La opción por la austeridad, la creciente desconfianza política y la caída del apoyo electoral de partidos socialistas que otrora habían sido hegemónicos han marcado gran parte de los últimos años. En España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) vivió sus peores resultados en 2016, al Partido Socialista (PS) francés le pasó lo mismo en 2017 y el PASOK, su equivalente griego, había tocado fondo en 2015.

El desplome de los resultados electorales de los principales partidos representantes de la socialdemocracia clásica ponía en jaque a una de las fuerzas políticas que ayudó a construir las señas de identidad europea, como la integración y el modelo social, y que contribuyó en gran medida a construir el Estado de bienestar allí donde gobernó desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Todo lo que la crisis económica de 2008 amenazaba. En paralelo, en los últimos años, la opinión pública ha reflejado una creciente radicalización por opciones tendentes a la desconfianza política y el descontento hacia sus representantes públicos y sus instituciones. Todo ello, además, se da un contexto de tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales, que añade un alto grado de incertidumbre al respecto de cómo evolucionarán las democracias posmodernas.

A través de los elementos apenas enunciados, la caída del apoyo electoral y el auge de los problemas de representación política en un contexto de profundos cambios sociales, la presente tesis doctoral explora los casos de España y de Francia.

Así, el estudio se inscribe en el debate sobre el futuro de la socialdemocracia tradicional, representada por los principales partidos socialistas de cada país, y aún la preocupación por la creciente desconfianza política, así como por otros problemas relacionados con la representación política que manifiesta la ciudadanía.

Por ello, la investigación pretende profundizar en las relaciones que se dan entre estos dos fenómenos coincidentes en el tiempo: la pérdida de apoyo electoral de la socialdemocracia europea y la subida en la percepción ciudadana de distintos problemas de representación

política. Todo ello sucede, además, en un contexto general de grandes cambios sociológicos, unas transformaciones que desde finales del siglo XX han alterado en gran medida el factor trabajo, tradicionalmente ligado a la socialdemocracia, y en un contexto particular, el de la Gran Recesión y sus consecuencias sociales.

De esta forma, la investigación se acota a dos países de la Unión Europea que comparten los mismos fenómenos, aunque mantienen también sus particularidades: España y Francia, que constituyen las unidades de análisis. Ambas sociedades muestran en varias encuestas oficiales una creciente desconfianza política, así como otros problemas relacionados con la representación política, y las dos cuentan también con partidos socialistas que habían gobernado durante décadas en sus respectivos países: el PSOE y el PS, dos organizaciones políticas que han vivido en las últimas elecciones sus peores resultados electorales y cuyos periodos de gobierno en el siglo XXI han sido atravesados bien por el estallido de la crisis económica o bien por sus consecuencias.

El análisis se circunscribe al siglo XXI, de manera que el estudio abarca del año 2000 al 2017. La elección de las fechas responde a la voluntad de caracterizar el fenómeno estudiado de la forma más actual posible, con los datos disponibles más recientes al respecto. Asimismo, es en este periodo temporal cuando sucede el problema analizado y, por tanto, cuando puede empezar a ser estudiado.

El problema de investigación, por tanto, se centra en describir y analizar la relación entre los problemas relacionados con la representación política en las actuales sociedades de capitalismo avanzado, en especial de España y de Francia, y la disminución del apoyo electoral a los partidos que representan la ideología socialdemócrata clásica de ambos países entre los años 2000 y 2017.

La investigación se articula a partir de la respuesta a las distintas preguntas de investigación y la consecución de los objetivos del estudio. De esta forma, el objetivo general de la investigación es determinar la relación entre los problemas de representación política y la disminución del apoyo electoral a los partidos socialdemócratas tradicionales de España (PSOE) y de Francia (PS) entre el año 2000 y el 2017. En cuanto a los objetivos específicos, se delimitan seis:

1. Identificar y describir los problemas clave relacionados con la representación política en el capitalismo avanzado y en las democracias occidentales. Especialmente, de España y Francia durante el periodo de análisis.

2. Determinar las distintas percepciones de la ciudadanía con respecto a los problemas relacionados con la representación política encontrados, tanto en el caso español como el francés.
3. Identificar y describir las transformaciones sociológicas de las sociedades postindustriales con respecto a las industriales.
4. Realizar un análisis sociohistórico de la evolución de la socialdemocracia y de los años de gobierno del PSOE y del PS.
5. Caracterizar la disminución del apoyo popular o electoral a los partidos socialdemócratas a partir de la descripción y comparación de los resultados electorales de los partidos que conforman el estudio de caso.
6. Realizar una lectura longitudinal de los resultados de los casos de estudio identificando tendencias, similitudes y diferencias entre los países analizados, mediante su comparación.

A los objetivos del estudio se unen las correspondientes preguntas de investigación, que se relacionan directamente con ellos y que se concretan en:

1. ¿Cuáles son los problemas clave de la representación política en las sociedades actuales, especialmente en España y Francia?
 - 1.1. ¿Los problemas relacionados con la representación política están correlacionados con la pérdida de apoyo electoral al PSOE y al PS?
2. ¿Cómo percibe la ciudadanía de España y de Francia los problemas relacionados con la representación política?
3. ¿Cuáles son las principales transformaciones sociológicas de las sociedades postindustriales con respecto a las industriales que pueden influir en el objeto de estudio?
4. ¿Cómo ha evolucionado la socialdemocracia moderna?
 - 4.1. ¿Cómo ha sido el desempeño del PSOE y del PS cuando han estado en el gobierno dentro del periodo de análisis?
5. ¿Cuáles han sido los resultados electorales del PSOE y del PS dentro del periodo de análisis?
6. ¿Qué tendencias se observan a partir de los resultados de los casos de estudio?

La investigación toma la forma de un estudio de caso, centrado en el problema de estudio, en que España y Francia son las dos unidades de análisis. Las mismas se pretenden entender de manera holística. El estudio de caso combina, además, datos cualitativos y cuantitativos para conseguir una aproximación más profunda y veraz al objeto de investigación.

Para dar respuesta a las distintas incógnitas, el trabajo se construye a partir de la indagación teórica sobre la representación política y sus problemas, el análisis sociohistórico de la evolución de la socialdemocracia y la construcción de un marco contextual que pone en valor los distintos cambios tecnológicos, políticos, económicos y sociales que dan forma a las sociedades posmodernas. Es por ello por lo que la parte cualitativa y teórica del estudio resulta fundamental para poder proceder al posterior análisis de los datos cuantitativos.

De hecho, en el marco teórico se define, en una aproximación histórica que se remonta a los últimos trescientos años, el concepto de representación política a partir de distintos autores.

De la misma manera, el marco teórico integra la definición de los principales problemas relacionados con la representación política que se dan en las sociedades actuales y, especialmente, los que aquejan a España y a Francia. Así, la investigación ha permitido establecer ocho problemas relacionados con la representación política: el descontento político, el alejamiento entre los representantes y los representados, la oligarquización, la desconfianza política, la desafección política, la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo. De igual manera, también se han podido encontrar tres categorías, en las que clasificar los distintos problemas: la *responsiveness*, la *accountability* y la *responsibility*; y, diversos atributos que caracterizan a los problemas de representación política.

El marco teórico se complementa con el marco contextual de la investigación, que sitúa el problema de estudio en su dimensión más actual y abarca las transformaciones de la socialdemocracia y del tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales. El marco contextual resulta de gran importancia porque pone de relieve las circunstancias en que se desarrolla el problema de estudio y los factores que pueden influir en él, aunque la delimitación completa de todos los elementos que afectan a un fenómeno social resulta imposible de alcanzar y queda fuera del alcance de esta investigación. Por eso, esta parte del estudio se centra en cómo cambian las sociedades posmodernas, de qué manera ha evolucionado la socialdemocracia y en cómo el periodo de análisis se encuentra atravesado por la crisis financiera y económica que llegó a Europa en 2008.

La siguiente parte fundamental de la investigación es la recolección y el tratamiento de datos secundarios, que provienen de distintas fuentes oficiales. Ello permite la profundización en el estudio de caso y la caracterización del problema de estudio para cada unidad de análisis. Así, la sistematización de los datos que describen la opinión pública de los dos países durante el periodo de análisis al respecto del fenómeno estudiado y de los datos sobre los resultados electorales permiten dimensionar el objeto de la investigación. Además, su tratamiento y

análisis permite concebir conocimiento nuevo al respecto de la relación entre los problemas de representación política y la evolución de la socialdemocracia, así como la comparación entre los dos países.

De este modo, los elementos clave de la investigación se concentran en la combinación de los elementos heurísticos para la comprensión del problema y la construcción de las bases de la investigación, y la recogida de datos estadísticos agregados que permiten conocer la situación de cada país y, posteriormente, su comparación.

El estudio ha permitido comprobar las hipótesis planteadas, que se basan en que los problemas clave relacionados con la representación política inciden negativamente en los resultados electorales del PSOE y del PS; en que las transformaciones sociológicas que se dan en el tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales pueden agravar los problemas de representación política y dificultar la aceptación de la oferta socialdemócrata clásica; y, en que los problemas de representación política son percibidos tanto en España como en Francia por sus respectivas ciudadanías y se han agravado con la Gran Recesión.

De esta manera, la investigación ha podido demostrar que los distintos problemas relacionados con la representación política se dan tanto en las opiniones públicas de España como de Francia y en qué grado se han percibido a lo largo del periodo de análisis, y, en especial, en los periodos socialistas de gobierno. Por tanto, el estudio muestra un análisis longitudinal y, específicamente, aborda las etapas socialdemócratas en cada unidad de análisis. La investigación ha comprobado que las tendencias en ambos lugares son similares, pero en España se da una mayor radicalización de las opiniones negativas o actitudes tendentes a la desconfianza política durante el periodo de análisis. Igualmente, se ha podido observar qué problemas inciden más negativamente en las fases socialistas de gobierno y, como, especialmente, el abstencionismo ha perjudicado a los partidos socialdemócratas en ambos países.

Asimismo, el estudio ha permitido ver que los cambios sociológicos que afectan a toda la sociedad tienen una mayor vinculación con elementos que conforman la socialdemocracia clásica, como la clase trabajadora, con el advenimiento del postfordismo. En la investigación, gracias al enfoque longitudinal, se aprecia cómo el estallido de la crisis económica coincide con el agravamiento de los problemas de representación.

Por todo ello, la investigación aporta conocimiento nuevo a partir de datos existentes, ya que su principal novedad radica en establecer los distintos problemas de representación que aquejan a cada país del análisis; en recopilar y analizar los datos más actuales al respecto; y, en relacionarlos con la evolución de la socialdemocracia clásica y el desempeño de los partidos

socialistas de España y de Francia durante el periodo de análisis. Ello constituye una nueva aportación tanto al debate académico abierto sobre los problemas de representación en las sociedades occidentales de capitalismo tardío, como al debate académico sobre el futuro de la socialdemocracia en Europa.

Así, el alcance descriptivo de la investigación caracteriza el problema de investigación, actualizando el conocimiento previo y sistematizando los datos disponibles para el siglo XXI, y, el alcance relacional aúna las piezas angulares del estudio: los problemas relacionados con la representación política y la socialdemocracia. El alcance explicativo, parcialmente conseguido en la investigación, abre el camino a la indagación profunda sobre el devenir tanto de los problemas de representación como de los partidos socialistas en Europa. La profundización en la explicación de un fenómeno social con tantos ángulos queda, sin embargo, fuera de los límites del presente trabajo. Aun así, la investigación puede abrir vías de futuro para seguir explorando el problema de investigación, tanto ampliando el estudio a otros países con similares situaciones como continuando con el estudio longitudinal a medida que se produzcan más elecciones.

La estructura formal de la tesis titulada *Los problemas de representación política y la socialdemocracia. Los casos de España y de Francia (2000 - 2017)*, está compuesta por ocho capítulos. Seguidamente al *Capítulo 1*, que es la presente *Introducción*, el documento sigue con el *Capítulo 2, Problema de investigación y diseño metodológico*. El segundo capítulo se divide en dos partes, de forma que en la primera se detalla el problema de investigación a partir de la explicación de los objetivos, las preguntas, las hipótesis, la justificación y la viabilidad del estudio, así como también se señalan las deficiencias del conocimiento del problema. En la segunda parte se explica el diseño metodológico de la investigación, a partir del estudio de caso de España y de Francia, cuya elección se justifica, al igual que se detalla el diseño de la investigación y el periodo de análisis, y se explican las fases y las herramientas metodológicas. La voluntad del capítulo es, pues, situar, aclarar y delimitar el problema de investigación y la metodología que permite desarrollar el estudio.

Una vez concretado el problema de investigación, el documento prosigue con el *Capítulo 3. Marco teórico y conceptual*, que resulta imprescindible para la elaboración teórica de la investigación y para desarrollar el análisis. De esta forma, en el tercer capítulo se aborda el concepto de representación política a lo largo de la historia, desde los orígenes del concepto hasta hoy, pasando por el parlamentarismo; se habla de la representación política y de los modelos de democracia; y, del concepto de representación política en la actualidad. Después, se pasa a la explicación de los problemas relacionados con la representación política, y, con

especial énfasis, se ponen de manifiesto las problemáticas que afectan a los casos español y francés. Este capítulo sienta las bases teóricas sobre las que descansa el estudio y permite desarrollar las categorías, los problemas y los atributos sobre los que se construye el análisis.

A continuación en la tesis, se encuentra el *Capítulo 4. Marco contextual*. El cuarto capítulo se compone, a su vez, de tres partes diferenciadas. En primer lugar, se puede encontrar la explicación y caracterización del contexto más amplio y general, en el que se habla del tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales y de los cambios sociológicos que este camino lleva aparejados, al tiempo que se da especial importancia al postfordismo y a la sociedad de la información. En segundo lugar, se aborda la evolución de la socialdemocracia para ofrecer un contexto más acotado al objeto de estudio. De esta manera, se elabora un recorrido histórico a partir de los orígenes de la socialdemocracia moderna, para hablar del consenso socialdemócrata, de los dilemas de esta ideología y de las vicisitudes que ha atravesado, como el auge neoliberal, la redefinición de la Tercera Vía y el ámbito supranacional. El contexto sobre la socialdemocracia se estrecha hasta concretarse en el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista francés, de forma que se traza un breve recorrido por sus años de gobierno a finales del siglo XX y principios del XXI. El capítulo cuatro termina con un apunte contextual sobre la crisis económica de 2008, por ser esta una coyuntura que atraviesa el periodo de análisis y que puede afectar al problema de estudio.

Una vez establecido el contexto general y el concreto en que se desarrolla el problema de investigación, la tesis prosigue con el *Capítulo 5. Problemas relacionados con la representación política y resultados electorales en España 2000 - 2017* y el *Capítulo 6. Problemas relacionados con la representación política y resultados electorales en Francia 2000 - 2017*. Se trata de dos capítulos similares en su estructura, que constituyen el corazón del análisis, ya que representan la profundización del estudio de caso. En cada uno de ellos, se pueden encontrar todos los datos referentes a cada unidad de análisis. De este modo, se observa cada problema y sus atributos para después explorar su relación con los resultados electorales de cada país dentro del periodo de estudio.

Los dos capítulos cumplen la función fundamental de caracterizar el problema de investigación en cada unidad de análisis y de relacionarlo con los respectivos resultados electorales, pero, además, sirven de eje para construir el siguiente capítulo.

El *Capítulo 7. Discusión de resultados* recoge y amplía el análisis precedente para poner en comparación las dos unidades de análisis. Así, a partir de los datos recolectados se genera nuevo conocimiento y, al análisis longitudinal, se añade el análisis específico de las etapas socialistas

en ambos países. Mediante el método comparativo, se caracteriza el fenómeno y los grados de los distintos atributos de los problemas de representación para las dos unidades de análisis. De la misma forma, se ponen a dialogar los resultados obtenidos en los capítulos precedentes para hallar las diferencias y las tendencias comunes. El capítulo se organiza a partir de la comparación durante el periodo de análisis de los distintos problemas encontrados en los dos países, y continúa con un apartado sobre los problemas de representación política y los periodos socialistas. De ahí que se haya comprobado que el caso español presenta una mayor radicalización de los problemas y que tanto España como Francia comparten las mismas problemáticas de caída de las posiciones moderadas, así como la evolución al alza de los problemas relacionados con la representación política a lo largo del periodo de análisis, y, en especial, en los últimos años; y, la misma tendencia a la baja en el apoyo electoral a los partidos socialdemócratas.

La realización del capítulo 7 conduce al *Capítulo 8. Conclusiones*, en que el estudio finaliza poniendo en claro los logros de la investigación y, también, sus limitaciones. De esta manera, las conclusiones se organizan en tres partes.

En primer lugar, se establecen las conclusiones generales de la investigación, al comprobar las hipótesis, responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos planteados. En segundo lugar, se ponen de manifiesto las conclusiones metodológicas, sobre las técnicas empleadas para llevar a cabo el estudio. En tercer lugar, para terminar las conclusiones, se apuntan las tendencias de futuro sobre la investigación y el fenómeno estudiado. A través de los ocho capítulos descritos se pretende ordenar y arrojar luz sobre el fenómeno de estudio elegido, con la finalidad de que resulte útil para futuras investigaciones y constituya un eslabón más en el debate académico.

La tesis aborda, pues, dos fenómenos que están vinculados a la actualidad como son la pérdida de apoyos electorales por parte de la socialdemocracia clásica y la radicalización de las opiniones negativas con respecto a los problemas relacionados con la representación política. Se trata de un fenómeno que se ha desarrollado en los últimos años, pero que todavía lo está haciendo, igual que evoluciona el contexto de cambios sociológicos en los que se inscribe. Por este motivo, es una problemática social de la cual todavía no existe la suficiente perspectiva histórica para hallar explicaciones profundas y para determinar cómo va a evolucionar, de ahí también que se trate de un fenómeno complejo a la hora de ser investigado.

Sin embargo, sí resulta imprescindible la caracterización pormenorizada del problema de estudio tal y como se desarrolla en la actualidad y, por supuesto, tratar de hallar algunas explicaciones, aunque sean parciales, al fenómeno investigado.

CAPÍTULO 2

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO

El segundo capítulo de la tesis doctoral se divide en dos partes. Por un lado, se especifican los componentes del problema de estudio, de modo que se abordan las preguntas, los objetivos y las hipótesis de la investigación; y, por otro lado, se detalla la metodología del trabajo, así como las fases que se han seguido para su consecución y las técnicas utilizadas.

2.1. Presentación del problema de investigación

El problema de investigación se inscribe en el área de las ciencias sociales, concretamente en el ámbito de la sociología política, ya que se quiere investigar sobre la relación de los problemas de representación política con los resultados electorales de los partidos socialdemócratas. Para ello, además, se atiende al contexto social, político y económico que rodea al objeto de estudio y que, en mayor o menor medida, también le influye.

Específicamente, la investigación pretende describir y analizar la relación entre los problemas relacionados con la representación política en las actuales sociedades de capitalismo avanzado, previamente delimitados a través de la revisión y análisis de la literatura, y la disminución del apoyo electoral a los partidos que representan a la ideología socialdemócrata clásica de España y de Francia entre los años 2000 y 2017. El fenómeno no es exclusivo de estos dos países, sino que es compartido por otras sociedades europeas, donde se ha observado la caída del apoyo electoral a los partidos socialdemócratas y el aumento en la percepción ciudadana de problemas relacionados con la representación política, como podrían ser Italia o Grecia. Sin embargo, para el presente estudio y en aras de los recursos disponibles se tienen en cuenta dos de los países que se encuentran entre las primeras cinco economías de la Unión Europea: España y Francia.

Por tanto, el problema de investigación se concreta en la pregunta: ¿Qué relación existe entre los distintos problemas relacionados con la representación política en España y Francia y los resultados electorales obtenidos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista (PS) francés entre los años 2000 y 2017?

2.1.1. Objetivos de la investigación

Los objetivos de la investigación son los propósitos del estudio, aquello que se pretende investigar y concretan aquello a lo que aspira la investigación.

En el estudio que nos ocupa, los objetivos de la investigación se dividen entre uno general y seis objetivos específicos.

De este modo, el objetivo general de la investigación es:

- Determinar la relación entre los problemas de representación política en el capitalismo avanzado y la disminución del apoyo popular o electoral a los partidos socialdemócratas tradicionales de España (PSOE) y de Francia (PS) entre 2000 y 2017.

Por lo que se refiere a los objetivos específicos de la investigación, éstos se concretan en:

1. Identificar y describir los problemas clave relacionados con la representación política en el capitalismo avanzado y en las democracias occidentales. Especialmente, de España y Francia durante el periodo de análisis.
2. Determinar las distintas percepciones de la ciudadanía con respecto a los problemas relacionados con la representación política encontrados, tanto en el caso español como el francés.
3. Identificar y describir las transformaciones sociológicas de las sociedades postindustriales con respecto a las industriales.
4. Realizar un análisis sociohistórico de la evolución de la socialdemocracia y de los años de gobierno del PSOE y del PS.
5. Caracterizar la disminución del apoyo popular o electoral a los partidos socialdemócratas a partir de la descripción y comparación de los resultados electorales de los partidos que conforman el estudio de caso.
6. Realizar una lectura transversal y longitudinal de los resultados de los casos de estudio identificando tendencias, similitudes y diferencias entre los países analizados, mediante su comparación.

2.1.2. Preguntas de investigación

A partir de los objetivos de investigación señalados, y directamente relacionadas con ellos, se desprenden distintas preguntas de investigación, que se formulan a continuación. Las preguntas pretenden clarificar y orientar el estudio, así como delimitar su alcance.

De esta manera, se parte de seis preguntas principales con dos subpreguntas, que se van respondiendo en los subsiguientes apartados y capítulos del trabajo.

1. ¿Cuáles son los problemas clave de la representación política en las sociedades actuales, especialmente en España y Francia?
 - 1.1. ¿Los problemas relacionados con la representación política están correlacionados con la pérdida de apoyo electoral al PSOE y al PS?
2. ¿Cómo percibe la ciudadanía de España y de Francia los problemas relacionados con la representación política?
3. ¿Cuáles son las principales transformaciones sociológicas de las sociedades postindustriales con respecto a las industriales que pueden influir en el objeto de estudio?
4. ¿Cómo ha evolucionado la socialdemocracia moderna?
 - 4.1. ¿Cómo ha sido el desempeño del PSOE y del PS cuando han estado en el gobierno dentro del periodo de análisis?
5. ¿Cuáles han sido los resultados electorales del PSOE y del PS dentro del periodo de análisis?
6. ¿Qué tendencias se observan a partir de los resultados de los casos de estudio?

Como se puede observar, la formulación de las preguntas de investigación obedece al desarrollo del estudio puesto que se desconocen las respuestas y pueden ser respondidas con evidencia empírica y mediante procedimientos éticos (León y Montero, 2013). Además, la resolución de las mismas pretende aportar conocimiento sustancial acerca del fenómeno investigado.

2.1.3. Hipótesis y variables

En la investigación realizada se presentan tres hipótesis o explicaciones tentativas del fenómeno estudiado. Las hipótesis se refieren a una situación real, la relación entre las variables es verosímil y las variables son medibles con técnicas disponibles para desarrollar el estudio (Hernández, Fernández y Baptista (2006).

Así, las hipótesis y sus respectivas variables que se plantean en la investigación son las siguientes:

H₁: Los problemas clave relacionados con la representación política inciden negativamente en los resultados electorales de las opciones socialdemócratas clásicas de España y de Francia.

H₂: Las transformaciones sociológicas que se dan en el tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales pueden agravar los problemas de representación política y dificultar la aceptación de la oferta socialdemócrata clásica.

H₃: Los problemas de representación política son percibidos tanto en España como en Francia por sus respectivas ciudadanías a lo largo del periodo de análisis (2000 – 2017) y se han agravado a partir de la Gran Recesión (2008).

Las variables que forman las hipótesis de la investigación son:

H₁: Variable dependiente: resultados electorales del PSOE y del PS entre 2000 y 2017.

Variable independiente: problemas clave relacionados con la representación política.

H₂: Variable dependiente: resultados electorales del PSOE y del PS entre 2000 y 2017.

Variable independiente: contexto de transformaciones sociológicas.

H₃: Variable dependiente: los problemas relacionados con la representación política.

Variable independiente: los años de estudio, antes (2000 – 2008), durante (2008 – 2015) o después de la Gran Recesión (2015 – 2017).

2.1.4. Justificación del estudio

La investigación se propone para ayudar a arrojar luz sobre el fenómeno de los problemas vinculados con la representación política y su relación con la pérdida de apoyo electoral de las propuestas socialdemócratas tradicionales, encarnadas en los países de estudio en los partidos políticos PSOE y PS. En un contexto de cambio debido al advenimiento de las sociedades postindustriales, cuyas transformaciones afectan de manera muy particular a las bases socialdemócratas clásicas, y de cambios también debidos a la crisis iniciada en 2008, tanto la sociedad española como la francesa presentan problemas similares de descontento político, desafección y desconfianza política, así como otros problemas relacionados con la representación política, que pueden estar vinculados con la pérdida de votos que tanto el PSOE como el PS han experimentado en las elecciones de los últimos años.

Las percepciones ciudadanas en cuanto al respaldo al sistema democrático, a su funcionamiento y la confianza depositada en las distintas instituciones representativas, entre otras, resultan piezas clave para entender de qué manera las democracias modernas pueden evolucionar, puesto que esas percepciones se relacionan con el comportamiento electoral. Por otro lado, la ideología socialdemócrata, que había sido hegemónica en la Europa occidental, vive en la actualidad importantes retrocesos electorales. Todo ello ocurre en paralelo con distintos fenómenos, cuya explicación profunda se escapa a los límites del presente trabajo, como son la

transformación del proletariado en clase media o, de forma más general, los cambios suscitados en el factor trabajo por la llegada de la sociedad de la información, entre otros sustanciales cambios sociales que están teniendo lugar a día de hoy. Asimismo, la evolución de la socialdemocracia europea ha corrido paralela a todas esas transformaciones contextuales, cuando no ha contribuido a llevarlas a cabo.

Por tanto, el problema de investigación se sitúa como un asunto de plena actualidad dentro de un amplio debate sobre la representación política en las democracias avanzadas y, de forma más específica, del futuro de la socialdemocracia europea. Se aúnan, pues, dos importantes debates vigentes en la ciencia política y en la sociología política, debido a lo cual, la conveniencia y pertinencia del tema de estudio se hace patente y resulta novedoso.

De lo anterior se desprende también la relevancia social de la investigación, puesto que la percepción ciudadana de los problemas de representación política afecta directamente a su relación con el sistema político y, por ende, al devenir mismo del funcionamiento de la democracia en un contexto de transformaciones sociales profundas. De la misma forma, la socialdemocracia es una ideología que ha ayudado a conformar las sociedades de los países que forman el análisis, a través de sus respectivos partidos políticos, con el desarrollo de múltiples políticas públicas y que ha representado durante mucho tiempo los intereses de gran parte de la ciudadanía. Por tanto, su evolución y reacción hacia los cambios y problemas de representación política resulta también de gran importancia para entender hacia dónde pueden dirigirse estas fuerzas políticas y si pueden conseguir de nuevo el apoyo electoral que tuvieron en el pasado. Esto último toma su relevancia social en tanto que también moldearía el futuro de las democracias avanzadas, que podrían tomar un cariz más o menos social.

Con lo anterior, si bien el estudio por sí solo no puede resolver el problema de la pérdida de apoyo electoral de los partidos socialdemócratas ni devolver la confianza ciudadana hacia las principales instituciones de representación política, lo cual tampoco es objetivo de la presente investigación científica, sí puede ayudar a crear un conocimiento fidedigno sobre la situación del objeto de estudio en el siglo XXI, y actualizar así el debate académico con esta nueva aportación, ya que se podrá conocer mejor la caracterización del fenómeno de análisis con los últimos y más recientes datos al respecto.

La investigación resulta, pues, novedosa al poner en relación dos importantes y actuales debates académicos —los problemas relacionados con la representación política y el devenir de la socialdemocracia moderna—; además, tiene proyección social en cuanto pretende ayudar a caracterizar y comprender mejor el futuro de las democracias avanzadas en relación a las variables del estudio; y, puede contribuir a hacer avanzar el debate académico sobre la materia.

2.1.5. Viabilidad del estudio

Los recursos económicos, materiales y humanos determinan cualquier investigación científica. Por ello, al tratarse este estudio de una tesis doctoral elaborada con recursos propios y por una persona durante el periodo de tres cursos académicos se ha considerado viable presentar el estudio tal y como se ha hecho. Por ello, se ha tenido que acotar el estudio de caso a dos países y limitar los atributos de los problemas de representación política que se podían poner en relación con los resultados electorales de los partidos socialdemócratas. Del mismo modo, otros factores que podrían intervenir en el estudio se han considerado como marco contextual, ante la imposibilidad de poder ponderar todos los factores que influyen en el problema de investigación. Es por ello que la factibilidad del estudio es posible, debido a que se ha hecho todo lo posible por resolver los objetivos de investigación con los recursos disponibles.

El problema de investigación se ha diseñado de acuerdo a los recursos de que dispone la investigadora, por lo cual se ha tenido que delimitar y acotar la idea inicial (que abarcaba más países para el análisis y más variables de estudio). De la misma forma, también se ha limitado el número de problemas y de atributos que es viable analizar a través de los datos disponibles para el periodo de análisis, puesto que no todos los atributos cuentan con los mismos instrumentos para ser caracterizados.

La factibilidad del estudio resulta un elemento clave para la utilidad de la investigación, puesto que el estudio debe ser realista y acorde con las posibilidades existentes.

2.1.6. Deficiencias en el conocimiento del problema

Los elementos que forman el problema de estudio han sido abordados por separado por la mayoría de la literatura existente, por lo que la novedad de la presente investigación radica en ponerlos en relación. De la misma manera, el hecho de analizar los datos más actuales al respecto y centrarse en el siglo XXI como periodo de estudio también constituye una novedad relevante. Sin embargo, las limitaciones del estudio —mediadas por los recursos disponibles— impiden profundizar en otros factores que podrían afectar al problema de estudio, como el cambio en el régimen de acumulación desde la crisis de 2008 o los problemas de los partidos socialdemócratas clásicos para conciliar los problemas de las clases bajas y las clases medias y ofrecer soluciones conjuntas, o, incluso, el problema de la agregación de intereses en las sociedades cambiantes y las identidades líquidas actuales.

De igual manera, el problema de investigación podría ser mejor abordado con una muestra más amplia de países, algo que se prefiguró al inicio del proceso de investigación, pero que se tuvo que descartar ante la imposibilidad de llevarlo a cabo. Con un estudio más amplio de países, en referencia a las percepciones de sus respectivas sociedades sobre los problemas de representación política y los resultados electorales, se podría observar si las tendencias halladas se repiten o si existe la posibilidad de establecer patrones a nivel más amplio, quizás europeo, algo que bien puede constituir un proyecto de investigación a futuro.

Así, aunque la investigación se concibe prestando especial atención al nivel descriptivo para conocer en profundidad el problema de estudio, resulta inalcanzable poder explicitar todas las aristas del problema en el presente estudio, pues es imposible tener en cuenta todos los factores que se relacionan con un hecho social, que sucede contemporáneamente y cuyas fronteras son difusas y cambiantes.

Por tanto, pese a que la presente investigación trata de producir un conocimiento más detallado y novedoso sobre el tema de estudio, también se presentan deficiencias en el conocimiento del mismo, sobre todo en lo que se refiere a alcanzar un nivel explicativo menos parcial del fenómeno en cuestión.

2.2. El diseño metodológico

2.2.1. El estudio de caso: España y Francia

La investigación se plantea a partir de un diseño de estudio de casos cuantitativo, por el tipo de datos que utiliza, no experimental y longitudinal de tendencia. Sin embargo, en la parte contextual y teórica se aprecia el enfoque cualitativo, que es el que servirá para construir el diálogo posterior con los datos cuantitativos. Por tanto, la investigación se constituye con un enfoque mixto que fortalece la amplitud y profundidad del estudio. Además, se ofrece también un análisis comparado de los resultados obtenidos.

Los estudios de casos han sido definidos como un método para aprender respecto a una instancia compleja (US General Accounting Office, 1990), a partir de un entendimiento comprensivo de esta instancia como un todo y su contexto, mediante datos e información obtenidos por descripciones extensivas (Mertens, 2005). Similarmente, Gillham (2000) considera que un estudio de caso debe contener una unidad relacionada con alguna actividad humana incrustada en el mundo real, que solo puede ser entendida en su contexto, que existe en el presente y que se mezcla con el contexto de tal manera que resulta complicado precisar

sus fronteras. Siguiendo a Mertens (2005), el estudio de caso se entiende como una investigación sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que se analiza como una entidad. Según Wiersma y Jurs (2005), el estudio de caso es el examen detallado de algo y para Williams, Grinnell y Unrau (2005), se concentra en una unidad de análisis. Para esta investigación, resulta especialmente relevante la definición que ofrece Yin (2014) al referirse al estudio de caso como una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, principalmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. De hecho, el método del estudio de caso se hace más relevante cuanto mayor sea la necesidad de describir un fenómeno social (Yin, 2014), como pasa en la presente investigación.

Algunos autores (Mertens, 2005 y Williams, Grinnell y Unrau, 2005) consideran el estudio de caso como un tipo de diseños, que pueden ser experimentales, no experimentales y cualitativos, mientras que otros (León y Montero, 2003) lo ven como una clase de diseño experimental o un diseño etnográfico (Creswell, 2005). Gerring (2007) lo ve como un trabajo, entre otras características, cuyo método es cualitativo, holístico, que ofrece una examinación comprehensiva de un fenómeno, que utiliza un tipo de evidencia particular y que usa la triangulación de datos. Incluso existen autores (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) para los que el estudio de caso es un asunto de muestreo o un método (Yin, 2014). Según Lee y Saunders (2017: 49), los estudios de caso pueden presentar una aproximación ortodoxa, cuando tienden a la generalización y usan con mayor frecuencia evidencia cualitativa, aunque pueden usarla cuantitativa; o, emergentes, cuando tienden con mayor frecuencia a la particularización y usan datos cualitativos, aunque con menor frecuencia pueden usar evidencia cuantitativa. Estos últimos puede también enfocarse a la generalización, aunque de forma más infrecuente, usando datos cualitativos y, en menor frecuencia, cuantitativos. Para la Lee y Saunders (2017), la diferencia entre los estudios de caso ortodoxos y emergentes reside en la presentación y desarrollo de los mismos, mientras que los primeros son secuenciales y lineales, los segundos son fluidos y progresivos, con estructuras superpuestas.

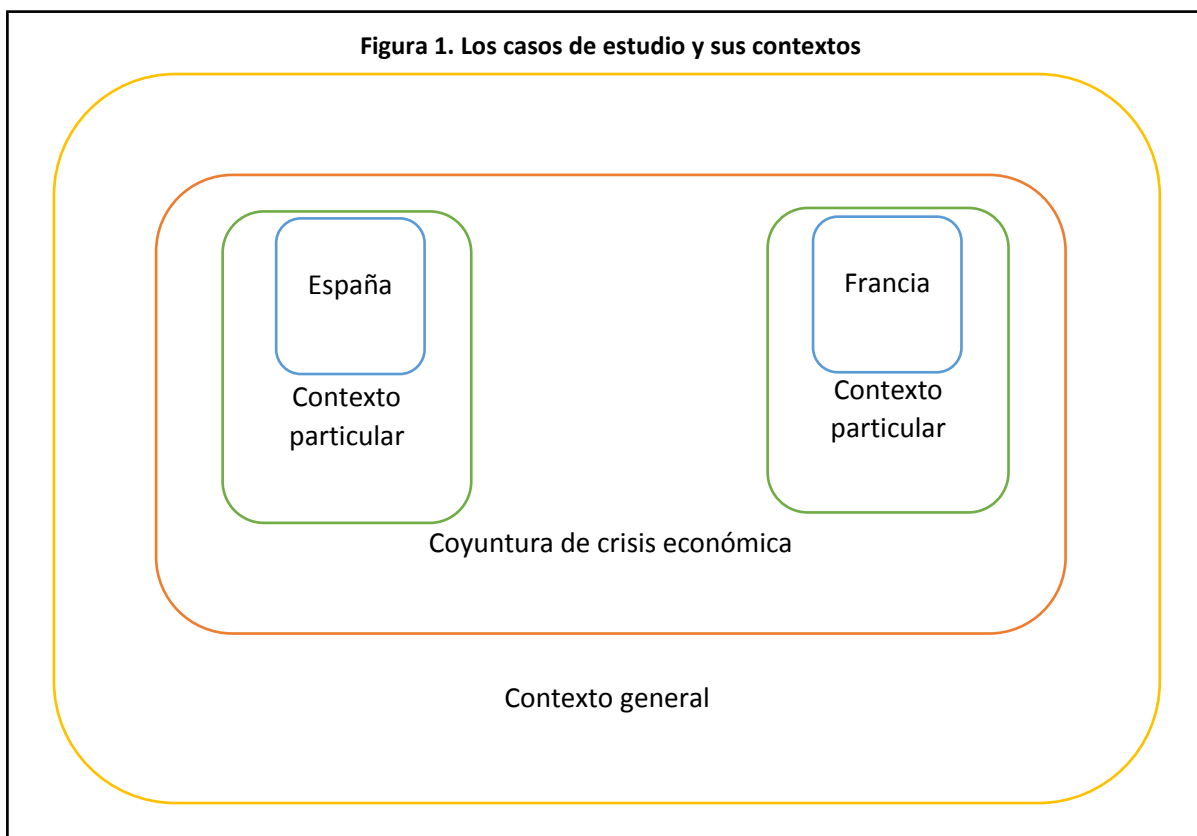
De todas formas, los estudios de caso poseen sus propios procedimientos y clases de diseños y se podrían definir como “estudios que, al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta, analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Según Gerring (2007: 28), los diseños de investigación de los casos de estudio pueden abarcar uno o varios casos. En el caso de analizar una sola unidad se puede hacer de forma diacrónica o sincrónica o incluso combinando las dos opciones. Mientras que, si se analizan distintas unidades, se impone el método comparativo o comparativo-histórico. Así pues, en el presente estudio se ofrece también la comparación del objeto de estudio de los dos casos que conforman la investigación durante el periodo de análisis. Además, siguiendo a Yin (2014) el estudio de caso se centra en el cómo y el porqué de un fenómeno social y se focaliza en un acontecimiento contemporáneo, tal y como hace la presente investigación al centrarse en los problemas de representación política actuales de dos sociedades y ponerlos en relación con los resultados electorales en dichas sociedades.

El estudio en profundidad de los casos de España y de Francia con respecto a las variables comentadas se presenta como el mejor método para poder comparar países que comparten los mismos fenómenos (pérdida de apoyos electorales de los partidos socialdemócratas clásicos), en un contexto general común (las transformaciones de las sociedades postindustriales) y con coyunturas similares (la Gran Recesión iniciada en 2008) dentro del periodo de análisis. Así, el estudio está formado por las unidades de análisis conformadas por las sociedades española y francesa, con sus respectivos partidos políticos representantes de la socialdemocracia tradicional: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista (PS) francés en atención a los problemas de representación política que los aquejan.

Siguiendo la clasificación de Yin (2014), el estudio de caso se presenta en forma holística y múltiple. Es decir, el estudio se compone de dos casos, de dos unidades, que son analizadas separadamente como un todo para después establecer una comparación.

Así, la investigación se conforma por los casos (unidades de análisis) de España y de Francia, tomando las sociedades como un todo, de las cuales interesa extraer los datos que caracterizan a los distintos problemas de representación política y el comportamiento electoral.



Fuente: elaboración propia.

En la figura 1, puede observarse la ubicación de los casos de estudio en relación con su contexto particular, la coyuntura económica de crisis que atraviesa el periodo de análisis y el contexto general de transformaciones sociológicas que afectan a los casos de estudio.

2.2.2. Presentación y justificación de los casos de estudio

Las unidades de análisis del trabajo se componen de las sociedades española y francesa en cuanto a las variables comentadas con respecto a los problemas de representación política y los resultados electorales, especialmente los obtenidos por los partidos socialdemócratas. Por tanto, gracias a la obtención de datos estadísticos agregados, se toma la opinión pública (en relación con los temas concretos que nos ocupan) de España y de Francia como un todo, así como los resultados electorales de los comicios celebrados entre el año 2000 y el 2017 en ambos países. Aunque tienen sistemas políticos y culturas políticas diferentes, los dos países son relevantes para la investigación y también comparten rasgos comunes.

En cuanto al sistema político, en el caso de España, tal y como recoge la Constitución de 1978, existe una Monarquía parlamentaria. Las Cortes Generales representan al pueblo y están formadas por el Congreso de los Diputados (que está, a su vez, compuesto por un mínimo de 300 diputados y un máximo 400, y que en la actualidad tiene 350 escaños) y por el Senado (definido por la Carta Magna como la Cámara de representación territorial). Ambas cámaras se eligen por un periodo de 4 años, los diputados al Congreso se votan por sufragio universal, y los senadores se eligen por sufragio universal y por designación autonómica. El sistema político español es parlamentario.

Por lo que se refiere al sistema de partidos, en España rige un sistema multipartidista, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal. Según Urquizu (2016), nos encontramos en la actualidad ante un colapso del sistema de partidos tradicional, que había sido de bipartidismo imperfecto, al contar con la aparición de nuevos partidos a nivel estatal. En el pasado, justo después de la Transición democrática, el PSOE había gozado de la condición de partido hegemónico hasta los años noventa del siglo XX.

Sin embargo, en el momento de escribir esta tesis, dejando a un lado los partidos regionales, el panorama político español está dominado por cuatro partidos de ámbito estatal: el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos y Ciudadanos (C's).

El Partido Popular, con posiciones que oscilan entre la derecha y la centroderecha, adoptó su nombre actual en 1989, al sustituir la denominación de Alianza Popular, partido fundado por Manuel Fraga. Dentro del periodo de estudio (2000 - 2017), el PP ha disfrutado del poder en dos legislaturas, la VII legislatura entre el año 2000 y 2004, que constituyó el segundo gobierno de José María Aznar; y, de la X legislatura, entre los años 2011 y 2015, que representan la vuelta al poder del partido, y el primer gobierno de Mariano Rajoy. Las legislaturas XI y XII (desde finales de 2015 y 2016) han estado protagonizadas por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy. El 29 de octubre de 2016 se nombró de nuevo a Mariano Rajoy como presidente, quien estuvo en el poder hasta junio de 2018 cuando perdió una moción de censura en favor de Pedro Sánchez, líder actual del PSOE.

El Partido Socialista Obrero Español, es el representante de la socialdemocracia clásica en España, con una ideología progresista. El partido fue fundado por Pablo Iglesias en 1879. Entre los años 2000 y 2017, ha accedido al poder en dos ocasiones. La primera fue en la VIII legislatura (2004 - 2008) y la segunda entre 2008 y 2011, la IX legislatura; ambas con gobiernos encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero.

A la izquierda del PSOE, en el espectro político español, nació en el año 2014 el partido Podemos, liderado por Pablo Iglesias. Irrumpió en las elecciones al Parlamento Europeo de ese año con 5 escaños y en las elecciones generales de 2015 logró 42 escaños en el Congreso y 9 senadores. Para las siguientes elecciones, las generales de 2016, celebradas el 26 de junio, Podemos se coaligó con Izquierda Unida, de manera que se adoptó el nombre de Unidos Podemos. En el momento de escribir esta tesis, es la tercera fuerza política del Parlamento español.

En las posiciones de derecha y centroderecha, se encuentra Ciudadanos, un partido de origen catalán que dio el salto al nivel estatal entre 2014 y 2015. Fue fundado en 2006 y su líder es Albert Rivera. En las elecciones generales de 2015, C's consiguió 40 escaños en el Congreso de los Diputados y en las generales del 26 de junio de 2016, obtuvo 32 diputados, lo que lo sitúa como la cuarta fuerza del Parlamento español en cuanto a número de escaños.

En cuanto al sistema político galo, según la Constitución francesa de 1958, vigente en la actualidad, Francia se constituye en una República. La organización política del país está constituida por el Presidente de la República, que es el jefe de Estado. Este se elige por sufragio universal para un periodo de 5 años, y es quien designa al Primer Ministro. Además, el Presidente de la República nombra y cesa, a propuesta del Primer Ministro, a los demás miembros del Gobierno y preside el Consejo de Ministros.

Por su parte, el Gobierno, tal y como explica la Constitución francesa, es el encargado de dirigir la política de la nación y le corresponde al Primer Ministro dirigir la acción del Gobierno.

Así, Francia se rige por un sistema semipresidencialista en que el parlamento está compuesto por dos cámaras: la Asamblea Nacional (con 577 diputados electos por los ciudadanos) y el Senado (formado por no más de 348 senadores elegidos por sufragio indirecto).

El sistema de partidos francés muestra más movilidad que el español. En el momento de iniciar esta tesis (2015), el principal partido con representación en la Asamblea Nacional francesa era el Partido Socialista (PS), representante de la ideología socialdemócrata. Refundado en 1969, el PS obtuvo sus mayores éxitos electorales con François Mitterrand, que fue presidente durante 14 años, entre 1981 y 1995. En el momento de escribir esta tesis, el Partido Socialista está liderado por François Hollande. En el lado conservador se encuentra la Unión por un Movimiento Popular, con una posición de centroderecha y cuyo sucesor es el partido Los Republicanos. Con posiciones ecologistas se encuentran Los Verdes, y con una ideología más a la izquierda, el Frente de Izquierda. Asimismo, también existe el partido Francia Insumisa. En la posición contraria, en la ultraderecha, está el Frente Nacional.

Durante el periodo de estudio, el Partido Socialista ha dominado el gobierno entre los años 2000 y 2002, con Lionel Jospin como Primer Ministro (designado por el Presidente Jacques Chirac en los años de cohabitación, entre 1997 y 2002); y entre 2012 y 2017, con Jean-Marc Ayrault y Manuel Valls (designados por François Hollande). El resto del periodo ha estado dominado por los conservadores Unión por un Movimiento Popular, con Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin y François Fillon como primeros ministros, designados por los presidentes Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy.

Las últimas elecciones legislativas en Francia tuvieron lugar los días 11 y 18 de junio de 2017, y la cámara quedó compuesta por 313 diputados del partido La República en Marcha, 100 para Los republicanos, 47 para el Movimiento Demócrata, 35 para Los Constructivos, 31 para la Nueva Izquierda, 17 para la Francia Insumisa, 16 para la Izquierda Demócrata y Republicana y 18 no inscritos. Los días 23 de abril y 7 de mayo de 2017 tuvieron lugar las elecciones presidenciales, y el Partido Socialista, con el candidato Benoît Hamon, obtuvo el peor resultado para su partido desde 1969, con el 6% de los apoyos y la imposibilidad de pasar a segunda vuelta. Desde 2017, es presidente de Francia Emmanuel Macron, del partido de nueva creación, En Marche.

Así pues, se observan diferencias entre uno y otro sistema políticos, puesto que son distintos los sistemas parlamentario y semipresidencial, así como también diverge el sistema de partidos de cada país. No obstante, en ambas sociedades se aprecia el eje izquierda-derecha en cuanto a la composición del sistema de partidos, sin perjuicio de que puedan operar otros ejes al mismo tiempo. Para el propósito de la investigación, se tienen en cuenta los datos electorales obtenidos en las elecciones generales en España y en las elecciones presidenciales para el caso francés, especialmente los resultados obtenidos por los respectivos partidos socialistas, lo que permite observar el desempeño electoral de los principales partidos representantes de la socialdemocracia clásica en ambos países.

Además, la divergencia de los sistemas políticos de ambos casos no es óbice para observar las percepciones ciudadanas que existen acerca de los problemas relacionados con la representación política, puesto que los dos países son democracias consolidadas dentro de la Unión Europea y cuentan con similares órganos de representación pública, así como iguales derechos y libertades y organizaciones políticas parecidas, y una opinión pública formada al respecto del objeto de análisis.

Los casos español y francés resultan relevantes también en cuanto a los paralelismos históricos que pueden encontrarse en relación con el predominio de la ideología socialdemócrata en los

gobiernos de los años ochenta del siglo XX y su posterior declive en cuanto al apoyo popular reflejado en las últimas elecciones en ambos países. Por tanto, comparten el mismo fenómeno de pérdida de apoyos populares de la socialdemocracia, que, por otra parte, también se observa en otros países del entorno europeo en los últimos años.

Como países vecinos y miembros de la Unión Europea, España y Francia participan de contextos comunes, tanto por lo que se refiere a la crisis económica que llegó a Europa en 2008, como al contexto más amplio de transformaciones sociológicas relacionadas con las sociedades postindustriales y la sociedad de la información. Estos fenómenos afectan a toda la sociedad, pero resultan especialmente relevantes para las bases de apoyo tradicional socialdemócrata, como se verá más adelante en este estudio. Aunque, en efecto, también existen culturas políticas diferentes en cada país, fruto del contexto particular de cada Estado esto último no impide que se puedan observar ambos casos y tratar de averiguar tendencias comunes y divergentes y conocer mejor el objeto de estudio.

Precisamente, a causa del contexto específico de España y de Francia el punto de partida en cuanto a las percepciones ciudadanas de los problemas relacionados con la representación política es distinto en cada país. Sin embargo, resulta especialmente interesante la evolución de las percepciones en cada una de las unidades de los casos de estudio y las tendencias que pueden descubrirse a través de la investigación, para tratar de trazar evoluciones más generales al respecto y para conocer en qué punto se encuentran las dos sociedades con respecto al objeto de estudio en la actualidad, así como tratar de buscar explicaciones al fenómeno común.

Por tanto, la relevancia de las unidades de análisis radica en los paralelismos contextuales e históricos que ambas sociedades comparten, en su peso específico dentro de la Unión Europea, puesto que España y Francia están dentro de las cinco primeras economías de la comunidad, y en el hecho de compartir el fenómeno objeto de estudio.

Así, por todo lo anterior, se entiende que estudiar en profundidad los casos de España y de Francia con relación a las variables propuestas puede aportar conocimiento fehaciente acerca del problema de investigación.

2.2.3. Diseño de la investigación y periodo de análisis

El estudio se presenta como no experimental, ya que la investigación se realiza sin la manipulación deliberada de variables y los fenómenos se observan en su contexto durante un

periodo de tiempo que termina en la actualidad (año 2017). Además, las variables que se observan, ocurren naturalmente y no se provocan de manera intencionada.

De hecho, en el momento de analizarlas, las variables ya ocurrieron y no es posible influir sobre ellas ni sobre sus efectos. Si se atiende al tipo de datos recolectados para la profundización del estudio de caso, la investigación se encuadra en el estudio de caso cuantitativo, puesto que la obtención de datos requiere herramientas estandarizadas y categorías preestablecidas.

Del mismo modo, la investigación se establece como un estudio de caso longitudinal de tendencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), puesto que lo que se pretende hacer es analizar los cambios acontecidos en las percepciones ciudadanas sobre los problemas de representación política y correlacionarlos con los resultados electorales de los partidos socialdemócratas español y francés durante el siglo XXI. Precisamente, se trata de un estudio longitudinal porque se recolectan y analizan datos en el tiempo de la misma población (no los mismos sujetos) en relación a los elementos establecidos previamente, como problemas y sus atributos.

El periodo de análisis abarca del año 2000 al 2017. Por tanto, se circunscribe al siglo XXI. Sin embargo, para una mejor comprensión del fenómeno estudiado, en el marco contextual se traza un análisis sociohistórico desde mitad del siglo XX hasta la actualidad con respecto a la evolución de la socialdemocracia, donde se incluye además un apartado directamente relacionado con el PSOE y el PS. De la misma manera, también se analizan sociohistóricamente las transformaciones de las sociedades postindustriales, con especial énfasis en aquellas que inciden directamente en factores relacionados con la socialdemocracia. Por otra parte, en el marco teórico el marco temporal se extiende mucho más, ya que se rastrean los orígenes del concepto de representación política desde, aproximadamente, dos siglos atrás hasta la actualidad. De la misma manera, también se hace especial hincapié en los problemas de representación política en los casos de estudio.

Dentro del periodo de análisis se ha dado en España una etapa de gobiernos socialistas, entre el año 2004 y 2011 y una en Francia, de 2012 a 2017. Anteriormente, en los años ochenta del siglo XX, los dos países habían también sido gobernados por los partidos socialdemócratas. En este tiempo, en España ha habido seis elecciones generales, celebradas en los años 2000, 2004, 2008, 2011, 2015 y 2016. Por lo que se refiere a Francia, dentro del periodo de análisis se han celebrado cuatro comicios presidenciales, que han tenido lugar en 2002, 2007, 2012 y 2017.

Además, el periodo de análisis está atravesado por la crisis financiera y económica que llegó a Europa en el año 2008. El periodo se inscribe también dentro del contexto de transformaciones sociales que tienen lugar desde finales del siglo XX en las sociedades occidentales.

Por otra parte, el alcance de la investigación es descriptivo, puesto que la meta de la investigadora es detallar cómo es y cómo se manifiesta el problema de estudio. Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), el estudio busca especificar las propiedades y las características del fenómeno que se somete al análisis. Una vez recopilados los rasgos del fenómeno y descritas las tendencias, el estudio va más allá y adopta el alcance correlacional puesto que a través de la descripción se consigue observar el fenómeno de los problemas relacionados con la representación política, con lo cual se pueden poner en relación con los resultados electorales obtenidos en cada elección general o presidencial, y en especial, relacionarlos con los resultados de los partidos socialdemócratas clásicos de España y de Francia.

En el estudio se pueden observar trazos del alcance explicativo, ya que la investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Sin embargo, el alcance explicativo queda fuera de los límites de este estudio, al resultar imposible establecer la totalidad de las causas profundas del fenómeno estudiado.

Por su parte, el alcance descriptivo resulta fundamental para dimensionar el problema de investigación y poder avanzar en la investigación, ya que los componentes del estudio —obtenidos a partir de la revisión de la literatura— han de precisarse durante el periodo de análisis para poder luego compararlos y relacionarlos con los resultados electorales. Por tanto, es imprescindible conocer las características del fenómeno. Los atributos de cada problema relacionado con la representación política se describen para cada país de los casos de estudio para luego proseguir con el análisis. De la misma forma, el alcance descriptivo se pone de manifiesto en el relato sociohistórico elaborado sobre la socialdemocracia y su evolución, así como sobre los periodos de gobierno del PSOE y del PS, y, muy especialmente, en la caracterización contextual de las sociedades posmodernas o postindustriales.

En el caso del alcance correlacional, su utilidad radica en poner en relación los atributos vinculados con los problemas de representación política y los resultados electorales, para tratar de observar de qué manera se comportan las variables de estudio y si es posible conocer la magnitud de la asociación, con el propósito último de poder hacer predicciones al respecto. El nivel explicativo, como anteriormente se ha comentado, es incompleto porque escapa a los límites de este estudio analizar todos los factores que inciden en los problemas de

representación política y en los resultados electorales de los partidos socialdemócratas y porque, en última instancia, podría llegar a resultar imposible determinar las razones profundas que explican el voto o que explican la percepción de los problemas relacionados con la representación política en la ciudadanía. En todo caso, el alcance explicativo, que precisaría de más recursos para llevarse a cabo, resultaría de gran utilidad para comprender el fenómeno en su totalidad.

2.2.4. Fases y herramientas metodológicas

La investigación se ha organizado en sucesivas etapas o fases que han permitido su desarrollo y en las cuales se han ido utilizado distintas herramientas metodológicas, que a continuación se detallan.

La primera etapa de elaboración del estudio ha consistido en la realización del marco teórico, en el cual se sustenta la investigación. En este punto se observa el enfoque más cualitativo del trabajo, puesto que se han examinado a través de la revisión de la literatura los antecedentes pertinentes para el objeto de estudio, recogidos en documentos, archivos, artículos científicos, libros, capítulos y monografías.

En el marco teórico se traza un recorrido histórico a través de los autores principales que han delimitado en los últimos dos siglos el concepto de representación política y que han señalado también los problemas asociados a él, desde los clásicos —como Hobbes, Burke, Sièyes, Condorcet, Bentham y Stuart Mill— hasta los contemporáneos. Desde un panorama general de la representación política, siguiendo un proceso inductivo, se desciende hacia la explicación de los problemas de esta índole que afectan en mayor medida a España y Francia, por ser estos los casos de estudio. Así, se traza la evolución de la problemática, se delimitan los problemas que afectan a la representación política, y se definen los conceptos y los autores sobre los que descansa la dimensión teórica del trabajo.

La elaboración del marco teórico permite la clarificación de conceptos —de hecho, en él se delimita el marco conceptual de la investigación—, delimita el horizonte de la investigación y permite la construcción de las categorías y de los problemas relacionados con representación política que son piezas fundamentales para el posterior análisis.

En la segunda fase del estudio se construyen las categorías dentro de las que se clasifican los problemas de representación política, los cuales se establecen también gracias a la revisión de

la literatura realizada en el marco teórico. Las categorías encontradas y los problemas pueden verse en la figura 2, donde se detalla la segunda fase en la elaboración del estudio.

Figura 2. Fase 2 en la realización de la investigación. Categorías y problemas de representación	
Categorías	Problemas
Responsiveness	Descontento político
	Alejamiento entre representante y representado
	Oligarquización
Accountability	Desconfianza política
	Desafección política
Responsibility	Corrupción
	Falta de credibilidad
	Abstencionismo

Fuente: elaboración propia.

De esta forma, gracias a la segunda fase de desarrollo de la investigación, quedan establecidas tres categorías: la *responsiveness*, que tiene que ver con la capacidad política de dar respuesta a las demandas ciudadanas; la *accountability*, que se relaciona con la rendición de cuentas por parte de los políticos y las instituciones representativas en general; y, la *responsibility*, que se entiende como la responsabilidad política de todo cargo público. En este proceso, se establecen también los problemas relacionados con la representación política, que se clasifican en las categorías mencionadas.

En total, en este estudio se tienen en cuenta ocho problemas relacionados con la representación política: el descontento político, el alejamiento o lejanía entre el representante público y el representado y la oligarquización, que se encuadran dentro de la categoría de *responsiveness*; la desconfianza y la desafección políticas, que se sitúan dentro de la categoría de la *accountability*; y la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo, que se relacionan con la *responsibility*. En base a la revisión de la literatura llevada a cabo en el marco teórico, se clasifican los diferentes problemas en las categorías que mejor encajan, sin que ello signifique que las categorías sean compartimientos estancos o que algunos problemas no permeen otras categorías. De este modo, después de la revisión de la literatura, se considera que el descontento, el alejamiento y la oligarquización tienen que ver con la falta de capacidad de los políticos o las instituciones representativas percibida por la ciudadanía de entender y responder efectivamente a las demandas ciudadanas. En cuanto a la desconfianza y la desafección políticas

se entiende que están relacionadas con la percepción ciudadana de falta de capacidad o de mecanismos para rendir cuentas por parte de los políticos e instituciones; y, por lo que se refiere a la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo son problemas que se relacionarían con la falta de responsabilidad política percibida por la ciudadanía.

Siguiendo todavía en la parte del estudio que conlleva un enfoque más cualitativo, la tercera etapa de la investigación comprende la elaboración del marco contextual, que completa el terreno para profundizar en el estudio de caso. Asimismo, las distintas partes del marco contextual prestan especial atención a las transformaciones sociológicas que afectan en general a toda la sociedad, pero, en particular, a las consideradas como bases tradicionales de apoyo de los partidos socialdemócratas. El marco contextual comienza con una descripción detallada de los cambios acontecidos en el tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales y el advenimiento de la sociedad de la información, y continua con la caracterización de la socialdemocracia europea y de los partidos socialistas de España y Francia. Esta parte acaba con una sucinta descripción de la situación coyuntural de crisis económica de 2008, por ser un acontecimiento importante que atraviesa el periodo de análisis. El marco contextual liga estas tres partes principales por considerar que el fenómeno estudiado estaría influido en mayor o menor medida por los factores expuestos.

El marco contextual se elabora a partir de la revisión bibliográfica, que incluye la consulta de todo tipo de documentos técnicos, y de la obtención y análisis de datos secundarios provenientes de herramientas estandarizadas, que tienen por objeto apoyar y describir la situación planteada. Además, el marco contextual se presenta en la forma de un análisis sociohistórico, que favorece la comprensión y situación del objeto de estudio hasta la actualidad.

Una vez establecido el contexto fundamental en que tiene lugar el fenómeno analizado, se pasa a la siguiente fase del estudio. En la cuarta etapa de la investigación se contempla el enfoque más cuantitativo, en tanto que se profundiza en el estudio de caso, que por lo datos que recoge y analiza se sitúa dentro del marco cuantitativo. Así pues, la cuarta etapa consiste en el diseño del estudio de caso, una fase que se elabora en paralelo con la consulta, selección y obtención de los datos disponibles para el posterior análisis (lo que constituye la quinta etapa de la investigación).

Una vez obtenidas las categorías y los problemas que se pretenden poner en relación con los resultados electorales, se procede a constatar de qué manera se puede observar la percepción que los problemas de representación política causan en la ciudadanía. De esta manera, al

comprobar que no siempre el enunciado de los problemas coincide con las preguntas que se realizan en las encuestas ciudadanas, y siguiendo siempre lo obtenido en el marco teórico, se asignan diversos atributos a cada problema. De esta forma se podrá después acceder a distintos datos para cada problema. Así, atendiendo a las herramientas estandarizadas existentes válidas para la posterior comparación entre países se han delimitado distintos atributos para cada problema, que se pueden ver en la figura 3.

Figura 3. Categorías, problemas y atributos		
Categorías	Problemas	Atributos
Responsiveness	Descontento político	Nivel de satisfacción con el funcionamiento la democracia
		Nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno
	Alejamiento entre representante y representado	Entender la política como algo demasiado complicado de comprender
	Oligarquización	Entender la política como reservada a las élites
		El sistema político permite tener influencia a la gente corriente
Accountability	Desconfianza política	Confianza en el parlamento nacional
		Confianza en los políticos
		Confianza en los partidos políticos
		Confianza en el gobierno nacional
		Otras medidas propias de cada país de los casos de estudio
	Desafección política	Interés por la política
		Toma de conciencia sobre asuntos políticos y facilidad para participar en política
Responsibility	Corrupción	Índice de percepción de la corrupción
		Otras medidas propias de cada país de los casos de estudio
	Falta de credibilidad	Atributos de confianza

	Abstencionismo	Valoraciones de líderes políticos
		Resultados electorales
		Intención de voto
		Recuerdo de voto
		Cercanía a un partido

Fuente: elaboración propia.

De esta forma, el descontento político se observa a través de los datos obtenidos sobre el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia y con el gobierno nacional en los países que forman el estudio de caso y durante el periodo de análisis. Por lo que se refiere al alejamiento entre el representante y el representado, este problema se observa a partir de la opinión ciudadana sobre si la política es algo demasiado complicado de entender. El problema de la oligarquización, en cambio, se ve a partir de la percepción sobre si la política está reservada a las élites y si el sistema político permite tener influencia a la gente corriente en el quehacer público. En cuanto al problema de la desconfianza política, se seleccionan distintos datos que explican el nivel de confianza ciudadana hacia las principales instituciones representativas de cada país del estudio (como son los parlamentos nacionales, gobiernos, partidos y políticos, principalmente). En el caso del problema de la desafección política se tiene en cuenta el interés ciudadano por la política, la toma de conciencia sobre asuntos políticos y la percepción ciudadana sobre la facilidad o dificultad para participar en política. Por lo que se refiere al problema de la corrupción, se toma en cuenta el índice de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción y otras medidas que cada país puede implementar para medir ese problema, como en el caso de España, la percepción de los principales problemas elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En cuanto a la falta de credibilidad, se tienen en cuenta los niveles de desconfianza política y se añaden las valoraciones de los principales líderes políticos hechas por la ciudadanía. Por último, en el problema del abstencionismo se observan los resultados electorales, con la participación ciudadana, y los datos sobre intención de voto, cercanía a un partido en particular y recuerdo de haber votado.

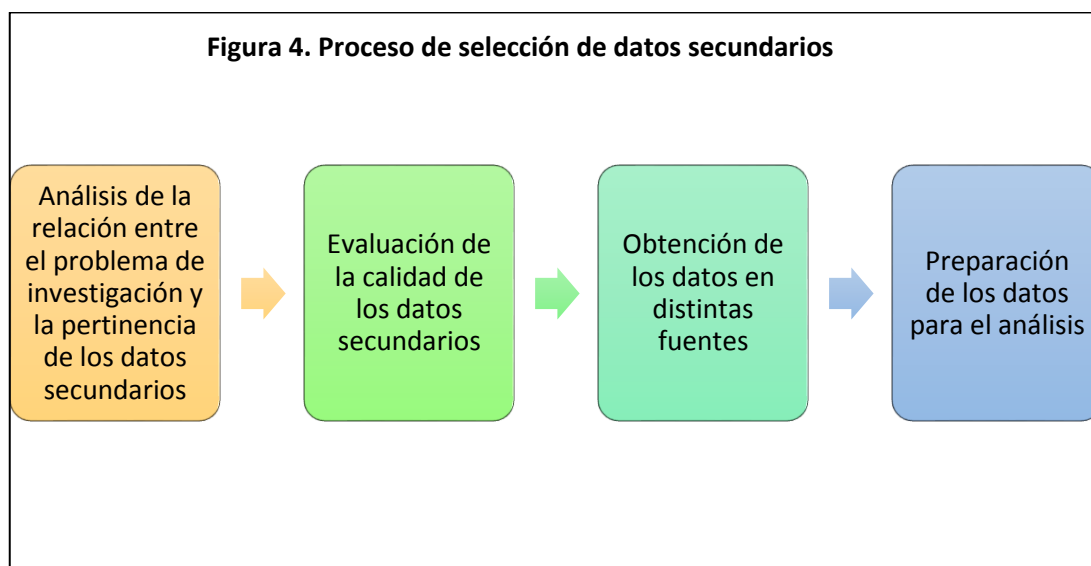
La asignación de los distintos atributos a los problemas encontrados resulta vital para la posterior recolección de datos y para proseguir con el análisis y la comparación de los casos de estudio.

Además, tal y como sugieren Stake (2000), Yin (2014), Creswell (2005) y Mertens (2005) en el presente estudio de caso se ha usado la triangulación de fuentes de datos. Así, conjuntamente con los datos propios de cada país del estudio de caso provenientes de sus respectivos gobiernos

e institutos sociológicos, se han usado datos provenientes de las instituciones europeas, como el Eurobarómetro. De la misma manera, también se han usado datos de la Encuesta Social Europea, válidos para las dos unidades de análisis.

La quinta etapa del estudio es, precisamente, la consulta, selección y obtención de los datos disponibles para el periodo de análisis, y su presentación para la investigación, para poder profundizar en los casos de estudio. Como se apuntaba más arriba, la triangulación de fuentes es fundamental en esta etapa.

El proceso de selección y recolección de datos secundarios se resume en la siguiente figura, adaptada a partir de Sieppert, McMurtry y McClelland (2005), Krysik (2005) y Hernández, Fernández y Baptista (2006).



Fuente: elaboración propia.

La obtención de los datos disponibles para el periodo de análisis empieza con la recolección de los datos oficiales de participación y resultados electorales ofrecidos por el Ministerio del Interior español y el Ministerio del Interior francés. A continuación, empieza la recogida sistemática de datos generados por la Comisión Europea a través del Eurobarómetro; la Encuesta Social Europea, que mide actitudes, creencias y comportamientos de varios países europeos; las encuestas y barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España; y, del Barómetro de la confianza política de Cevipof, en el caso francés.

En esta etapa resulta de vital importancia el uso de datos secundarios, cuyos resultados son puestos a disposición de la ciudadanía por organismos oficiales, nacionales y supranacionales. Por tanto, los datos son generados por fuentes fiables. Su obtención se realiza a través de encuestas y son metodológicamente fiables. Los datos recolectados han sido originalmente recabados por especialistas para conocer las distintas actitudes y percepciones de la ciudadanía lo que los hace substancialmente significativos para el presente estudio, puesto que ello se relaciona directamente con el objeto de análisis. Además, el hecho de que la mayoría de los datos provenga de organismos supranacionales oficiales garantiza la comparatividad entre países. De la misma manera, la variedad de las fuentes usadas ofrece también la validación cruzada de los datos, lo que los hace más fiables y les confiere precisión.

El uso de datos estadísticos agregados provenientes de encuesta permite obtener las cifras más actualizadas para describir los casos de estudio, pero también para tratar de buscar explicaciones al fenómeno. Su principal ventaja es la estandarización de los procedimientos, así como la facilidad de obtención de los datos, una vez seleccionados. Del mismo modo, las muestras sobre las que se aplican las encuestas gozan de validez y sus resultados son generalizables a la población que se pretende estudiar, al resultar estadísticamente relevantes. La utilización de datos secundarios se presenta como la única manera de conseguir una gran cantidad de datos relevantes para el estudio que sean óptimos para realizar una comparación entre países. Aun así, puede apreciarse alguna desventaja, como la necesaria adaptación del constructo estudiado a los datos disponibles para el periodo de análisis y la imposibilidad de controlar el cuestionario de las encuestas.

En la siguiente figura pueden verse los instrumentos, ya expuestos, usados para cada atributo a analizar.

Figura 5. Categorías, problemas, atributos e instrumentos			
Categorías	Problemas	Atributos	Instrumentos
Responsiveness	Descontento político	Nivel de satisfacción con el funcionamiento la democracia	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof

	Alejamiento entre representante y representado	Entender la política como algo demasiado complicado de comprender	Eurobarómetro Barómetro de la confianza política de Cevipof
	Oligarquización	Entender la política como reservada a las élites	Eurobarómetro Barómetro de la confianza política de Cevipof
		El sistema político permite tener influencia a la gente corriente	Eurobarómetro Barómetro de la confianza política de Cevipof
Accountability	Desconfianza política	Confianza en el parlamento nacional	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Confianza en los políticos	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Confianza en los partidos políticos	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Confianza en el gobierno nacional	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Otras medidas propias de cada país del estudio de caso	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
	Desafección política	Interés por la política	Encuesta Social Europea Encuestas del CIS

			Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Toma de conciencia sobre asuntos políticos y facilidad para participar en política	Encuesta Social Europea Barómetro de la confianza política de Cevipof
Responsibility	Corrupción	Índice de percepción de la corrupción	Índice de Corrupción de Transparency International
		Otras medidas propias de cada país del estudio	Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
	Falta de credibilidad	Atributos de confianza	Encuesta Social Europea Eurobarómetro Encuestas del CIS Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Valoraciones de líderes políticos	Encuestas del CIS
	Abstencionismo	Resultados electorales	Datos oficiales del Ministerio de Interior de España y de Francia Barómetro de la confianza política de Cevipof
		Intención de voto	Encuestas del CIS
		Recuerdo de voto	Encuesta Social Europea
		Cercanía a un partido	Encuesta Social Europea

Fuente: elaboración propia.

Siguiendo a Sieppert, McMurtry y McClelland (2005) y a Krynsik (2005), los instrumentos han sido elegidos por la idoneidad y la relación de los datos que proporcionan con relación al objeto de estudio. Los problemas relacionados con la representación política encontrados a partir de la elaboración del marco teórico tienen asociados distintos atributos, que son los que están directamente relacionados con los instrumentos que se usan para obtener los datos fundamentales para el estudio de caso. En el proceso de evaluación de los datos, la calidad de los mismos es una de las características que da solidez al estudio. La fuente de origen garantiza la confiabilidad de los datos y de la muestra, al igual que la validez del método de recolección.

Al tratarse de datos cuantitativos estadísticos, éstos se verifican al menos con dos fuentes confiables, lo que responde a la validación cruzada y, además, aporta profundidad al estudio. La quinta etapa finaliza con la preparación de los datos para el análisis y su preparación para ser analizados con relación a cada unidad del estudio.

La sexta etapa en la elaboración de la investigación consiste en la caracterización y profundización de los casos del estudio. Así, en esta fase se procede a la narración y desarrollo por país de los datos obtenidos en atención a las variables del análisis. Los problemas se describen en términos estadísticos agregados y narrativos; y, además, se estudian las percepciones de toda la comunidad nacional de cada país del estudio de caso y se ponen en relación con los resultados electorales, especialmente los de los partidos socialdemócratas de cada país. Así, se hace también evidente el enfoque mixto de la investigación.

Después de las narraciones paralelas de las unidades que forman el caso de estudio, la séptima etapa de la investigación consiste en el análisis comparado de los resultados obtenidos, cuyo objetivo es observar las tendencias y el comportamiento del objeto de estudio a lo largo del periodo de análisis en ambos países del estudio de caso. Así, en esta etapa se impone el enfoque comparativo entre las unidades de análisis. Además, esta fase resulta imprescindible para elaborar las conclusiones de la investigación.

De esta forma, las distintas fases metodológicas expuestas componen la investigación, ya que desarrollan el estudio de caso propuesto.

CAPÍTULO 3

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El marco teórico y conceptual realiza un recorrido histórico por el concepto de representación política, desde sus orígenes hasta la actualidad. Así, en el capítulo, se describe el concepto de representación política ligado al parlamentarismo y a los modelos de democracia hasta nuestros días.

Del mismo modo, en el marco teórico se elabora una caracterización de los problemas relacionados con la representación política, uno de los ejes fundamentales del estudio, y finaliza con la concreción del concepto abstracto en los casos de España y de Francia, para resaltar los problemas específicos encontrados en ambos países a través de la revisión de la literatura.

De esta forma, pues, en el marco teórico se encuentran las líneas maestras en cuanto a representación política y sus problemas, que sirven para tejer el posterior análisis.

3.1 El concepto de representación política a lo largo de la historia

El concepto de representación política se entiende de diferente manera en cuanto se atiende a los distintos contextos históricos en que se ha aplicado, y aun, en la actualidad, se trata de un término que resulta “complejo y elusivo” (Sartori, 1968) o incluso se ha calificado como una noción “difusa” (Cuono, 2013: 164). En todo caso, se trata de un término de actualidad en tanto que las democracias avanzadas se basan en gobiernos representativos y se entiende la representación política como un eje vertebrador de las sociedades capitalistas avanzadas.

Etimológicamente, representar proviene del latín (*repraesentare*) y significa, de forma literal, hacer presente aquello que está ausente. De ahí provienen los múltiples significados que se pueden dar al vocablo representar¹. Sin embargo, cuando se añade la noción de (representación) *política*, se acota el término, se hace referencia al derecho público y no al privado, es decir, se remite al funcionamiento del Estado y sus relaciones con la ciudadanía. De esa manera, la representación política se sitúa en el centro del proceso de comprensión y de legitimación del

¹ Según la Real Academia de la Lengua, el verbo representar tiene diez acepciones: 1. Hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. 2. Informar, declarar o referir. 3. Dicho de una persona: Manifestar el afecto de que está poseída. 4. Recitar o ejecutar en público una obra dramática. 5. Interpretar un papel de una obra dramática. 6. Sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una entidad, empresa. 7. Ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente. 8. Dicho de una persona: Aparentar determinada edad. 9. presentar. 10. Dicho de una persona o de una cosa: Importar mucho o poco.

orden político (Costa, 2004: 15). Así, se hace énfasis en la distinción entre representación jurídica (de derecho privado) y representación política (de derecho público), tal y como señala Sartori (1999: 2). En lenguaje político, Schmitt (1928), entiende por representar “actuar o hablar por cuenta o en nombre de otro” y también “reflejar una realidad”. Leibholz (1929) recupera esas nociones y entiende la representación como una estrategia para traer a la presencia aquello que no está aquí y ahora. Según Costa (2004: 15), “la representación así entendida evoca en primer lugar un ser y, secundariamente, un actuar: podríamos hablar de la representación como de un ‘ser por’ (o ‘en lugar de’) un sujeto ausente y/o como de un ‘actuar por’ (o ‘en lugar de’) un sujeto inactivo”. Por lo tanto, cabe señalar que la representación implica una relación entre el representante y el representado, que se puede articular de distintas formas, pero que presupone un reconocimiento y una relación entre los muchos (representados) y el uno (representante). Por supuesto, esto abre la cuestión de cómo debe ser esa relación para que los sujetos se sientan representados. Tal y como explica Costa (2004: 17), “precisamente porque la representación establece un vínculo que se pretende duradero y estructural entre representado y representante, la relación entre los muchos y el uno no se agota en el momento de la elección del representante por parte de los representados, sino que se prolonga en la respuesta (*responsiveness*) o incluso en la *responsibility* del representante con respecto al representado”. Así, de lo anterior se desprende que uno de los principales dilemas para la concepción de la representación política en las democracias avanzadas es el tipo de relación que se establece entre representantes y representados, vinculado especialmente a la rendición de cuentas de los primeros hacia los segundos.

Pitkin (1985: 9), en uno de los ensayos más célebres sobre el término, considera que “la representación tiene un significado identificable, aplicado en diferentes formas, aunque controladas y reveladoras, a contextos diferentes. No se trata de un concepto vago y cambiante, sino de un particular concepto altamente complejo que no ha modificado mucho su significado básico desde el siglo XVII”. De este modo, para Pitkin (1985: 10), “en la representación algo que no está literalmente presente se considera que está presente en un sentido no literal”. Sartori (1999) va más allá y añade el concepto de intereses y define el significado originario de la representación como “la actuación en nombre de otro en defensa de sus intereses”, de modo que se presuponen dos condiciones básicas: en primer lugar, una sustitución en la que una persona habla y actúa en nombre de la otra, y, en segundo lugar, la condición de hacerlo en interés del representado. Del mismo modo, por lo que se refiere a representación política, Pitkin (1985: 233) la considera como una actuación sustantiva por otros, es decir, que representación significa “actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos”.

De hecho, en la moderna teoría de la representación, las nociones del interés general, de la capacidad de la representación política de dar respuesta a las demandas sociales y de responder ante los ciudadanos resultan capitales. Siguiendo a Nadas (1996), las transformaciones de las democracias contemporáneas y el surgimiento de demandas complejas y sometidas a procesos dinámicos esbozan un primer ámbito problemático para la representación política, que se relaciona con la *responsiveness*, es decir, con la capacidad de dar respuesta de la esfera política a partir de la representación política a las crecientes y cambiantes demandas sociales. En un contexto de expansión del Estado de bienestar, o del Estado social intervencionista, la proyección creciente de demandas sociales provoca fricciones entre las relaciones de la esfera político-representativa con la sociedad civil, con la administración y con la opinión pública. Especialmente en lo que se refiere a los partidos políticos y su papel en la representación política, se observan distintos problemas. En primer lugar, conviene fijar la atención en la capacidad de los partidos para determinar a través de sus respectivos programas elementos suficientes de diagnóstico, racionalización, procesamiento y respuesta ante el conjunto creciente de demandas emanadas de las sociedades complejas. En segundo lugar, cabe fijar el foco en la burocratización y la corrupción y su relación con el circuito electoral, ya que puede darse una visión corrupta de la representación. En tercer lugar, no hay que ignorar la marquetización de la política y lo que ello conlleva de desustanciación de los contenidos instrumentales de la representación política y de personalización del nexo representativo (Nadas, 1996: 16-18). Así, entran en juego las expectativas de los representados y los límites prácticos y la propia capacidad de los representantes en un mundo cambiante a la hora de comprender y atender las expectativas de los representados.

La noción de responsabilidad en la representación política, es decir, de control por parte del representado hacia el representante, resulta también un foco de preocupación en la actual teoría de la representación política. El Estado de Partidos tiende, según Nadas (1996: 21), a la atenuación del principio de responsabilidad política y por ello se intensifican las demandas de control hacia los representantes, así como la necesidad de rendición de cuentas por parte de éstos.

Del mismo modo, las transformaciones contemporáneas de la sociedad afectan a la representación política en tanto que circuito de determinación del interés general. Tal y como explica Nadas (1996: 23), tanto los fenómenos de integración como los de regionalización, la revolución tecnológica, la mundialización de la economía, la cosmopolitización y el localismo hacen que se transforme el marco en el que tiene lugar la determinación de los intereses generales, y ello hace que la representación política se enfrente a los dilemas de definir el propio

contenido de la noción de interés general en las sociedades complejas y la conformación de la voluntad del Estado. Por lo tanto, la representación política se enfrenta en la actualidad a dilemas surgidos de la transformación de las sociedades contemporáneas.

A partir de estas consideraciones, sin embargo, se ha de revisar lo que distintos teóricos, a lo largo de la historia, han entendido por representación política, así como su alcance y sus limitaciones, puesto que el contexto histórico, social y político puede determinar en gran medida el uso que se da al concepto de representación política.

3.1.1. Los orígenes del concepto de representación política

La representación política hunde sus raíces en la mentalidad burguesa y por ello en sus orígenes poco tenía que ver con la democracia. Tal y como aclara Pitkin (1985: 3), “inicialmente, ni el concepto ni las instituciones a las cuales era aplicada tenían que ver con elecciones o democracia, ni tampoco se consideraba a la representación como tema de derecho”. Es por ello que el contexto histórico tiene un gran peso en la conformación del actual concepto de representación política en las sociedades occidentales, que comparten tanto un acervo cultural común como unos acontecimientos históricos que tuvieron gran influencia en varios países y en sus pensadores.

En la Edad Media, la representación discurre en un orden social y político jerarquizado y desigual, que además se entiende como el orden natural de las cosas, tal y como se entendía el mundo en general. En ese contexto, “el mando y la obediencia son articulaciones de una totalidad que dicta las reglas a cada parte componente” (Costa, 2004: 18). De esa manera, la jerarquización de la sociedad convierte a los sujetos en una unidad, de modo que existen como parte de un agregado. La indisoluble relación entre la parte y el todo hace que la parte situada en la cúspide de la pirámide social se atribuya la representación no sustituyendo a los muchos, sino en cuanto se identifica con el todo. Como resume Costa (2004: 20), “la representación medieval no presupone (como sucede para los modernos) una suma de sujetos iguales y ‘desordenados’, no tiene a sus espaldas el vacío, el caos que se contrapone al orden que ella misma ayuda a crear; la representación medieval se apoya sobre un orden ya dado e intrínsecamente legítimo, (...) y desempeña una función que podría decirse no ya constitutiva, sino declarativa”. La representación medieval se aleja de la concepción moderna del término, que cambia a medida que se supera el esquema social y político rígido que caracterizaba a las sociedades del medioevo.

Con el iusnaturalismo o derecho natural, en el siglo XVII, se empieza a cuestionar la relación entre el individuo y el orden, de manera que el pensamiento dominante de la Edad Media entra en tensión. Una vez superados los estamentos medievales, aparece un nuevo mecanismo orientado a la determinación de los intereses generales de la comunidad, que se organiza en torno al Estado nación y al entendimiento de la política como esfera autónoma (Nadales, 1996). Es con la Guerra Civil inglesa (1642 - 1660), que enfrentó el poder del parlamento con el poder del monarca, cuando se abre el debate sobre la representación política en el mundo occidental. En ese contexto, el rey decía representar al pueblo. Lo mismo argüían los miembros del parlamento, sin embargo, solo estos últimos eran elegidos, aunque lejos de lo que hoy denominaríamos procedimientos democráticos plenos. Tal y como explica Pitkin (1985), el rey representaba al pueblo en el sentido en que hoy se dice que la bandera representa al Estado; la Cámara de los Comunes, por el contrario, nace como órgano formado por *representatives*, a diferencia de la Cámara de los Lores, compuesta precisamente por *particular persons*.

El mundo moderno dibuja la moderna noción de representación política a través de distintos acontecimientos históricos, que sientan la base del concepto a medida que se inaugura la Edad Contemporánea. La Revolución de Estados Unidos de 1776, la primera del ciclo de revoluciones liberales, puso de manifiesto que todo individuo al que se le pidieran contribuciones mediante impuestos debía participar de alguna forma —a través de sus representantes— en la toma de decisiones colectivas e hizo famoso el lema de *no taxation without representation*. Además, con la Revolución Francesa (1789) y especialmente con la Constitución de 1791, se consagra la soberanía nacional, lo que va a suponer un elemento clave en la representación política. Es decir, a partir de ese momento, la soberanía pasa a ser asumida por la nación, pero ello solo puede hacerlo a través de sus representantes. Según Garrorena (1991), la nación solo puede existir, cobrar realidad, mediante sus representantes, y, por lo tanto, de ahí se concluye que solo la representación puede realizar ese dogma fundamental para el pensamiento liberal-burgués que es la soberanía nacional. El artículo 2, Título III de la Constitución de 1791 lo expresa del siguiente modo: “La Nación, de quien emanan todos los poderes, no los puede ejercer más que por delegación. La Constitución francesa es representativa”. Se observa, pues, que el concepto de representación es utilizado por los burgueses para “resolver el grave problema de metafísica política que tiene entonces planteado en su enfrentamiento histórico con la Monarquía absoluta. Ese problema no es otro que la dificultad de convertir a la Nación en sujeto” (Garrorena, 1991: 25). Este cambio resulta fundamental en el concepto de representación política porque determina su naturaleza hasta la actualidad.

La Revolución Francesa marca un hito en el devenir de los países occidentales en tanto que se da la sustitución de la representación absortiva del monarca, la conceptualizada por Hobbes en el Leviatán, por la representación electiva del parlamento, lo cual permite iniciar el camino del parlamentarismo, junto con la Guerra Civil inglesa.

Tal y como remarca Sartori (1999), la moderna representación política es electiva. Con la idea de representación se concibe el Estado y ésta se liga al nacimiento del Estado en el mundo moderno y a su consolidación en la etapa contemporánea. La transformación de la soberanía del príncipe por la soberanía nacional (Nadales, 1996) representa un cambio mayúsculo, puesto que gracias a la soberanía nacional se da la configuración de la política como esfera de determinación de los intereses generales, es decir, un específico circuito instrumental de carácter jurídico-público entendido como nexo de comunicación entre sociedad y Estado. Se trata de la representación política, dotada de legitimidad racional y se consagra el principio de legalidad como expresión de la voluntad general. De este modo, el concepto de representación pasará a entenderse como un mecanismo de carácter político, a través del cual se asigna a los representantes la función de ser expresión y ritualización de la opinión pública (la voluntad ideal de la nación o pueblo). Asimismo, con la Revolución Francesa se consolida también el mandato libre, opuesto al mandato imperativo del Antiguo Régimen, un tipo de mandato libre, general y no revocable, que vincula a representantes y representados y que se caracteriza por ser el germen del gobierno representativo.

El filósofo británico Thomas Hobbes (1588 - 1679) es considerado el primero en conceptualizar la discusión sobre la representación, si bien no fue un teórico sobre la teoría de la representación. En su más célebre obra, *Leviatán* (1651), Hobbes dedica un capítulo, concretamente el XVI, titulado: *De las personas, autores y cosas personificadas*, a hablar sobre el tema. Para el autor, la representación consiste en actuar con la autoridad de otro. La definición hobbesiana de representación se basa en la relación entre lo que denomina el autor y el actor. En su pensamiento, la autorización es clave para la creación de un soberano que es esencialmente representativo. Es la representación absortiva mencionada con anterioridad. Se trata de la representación como el instrumento que consiente una formulación unitaria y abstracta del Estado, por cuanto permite relacionar en el pensamiento el hecho histórico de la concentración y centralización del poder en el Estado absoluto, con las características del grupo humano cuya obediencia el poder reclama y que justifica su carácter concentrado, expresándose todo ello mediante una formalización jurídica (Criado de Diego, 2012).

Para hablar sobre representación, Hobbes define, en primer lugar, a la persona. El filósofo británico distingue entre “personas naturales” y “personas artificiales”. Así, “una persona es aquel cuyas palabras o acciones son consideradas o como suyas propias, o como representando las palabras o acciones de otro hombre, o de alguna otra cosa a la cual son atribuidas, ya sea con verdad o con ficción”. En este sentido, una persona natural es cuando son consideradas como suyas propias, mientras que cuando se consideran como representación de las palabras de otro se habla de persona imaginaria o artificial. De este modo, el filósofo distingue entre actor y autor y aclara que de “las personas artificiales, algunas tienen sus palabras y acciones apropiadas por quienes las representan. Entonces, la persona es el actor, y quien es dueño de sus palabras y acciones, es el autor” (Hobbes, 1651).

Pitkin (1985: 17) apunta a este respecto que, en la terminología de Hobbes, “la ficción o artificio existente en una persona artificial radica en que las acciones que ejecuta no son suyas (no se considera que lo sean), sino de alguien más” y se pregunta hasta qué punto existe una noción semejante para la acción, en qué se diría que las acciones de un sujeto no son realmente suyas. Pues bien, para Hobbes (1651), la idea análoga es la autoridad, que el autor define como “el derecho de realizar una acción. En consecuencia, se comprende siempre por autorización un derecho a hacer algún acto; y hecho por autorización, es lo realizado por comisión o licencia de aquel a quien pertenece el derecho”. De ello se desprende que, para Hobbes, el representante actúa bajo la autorización de los representados.

Hobbes cuestiona que el orden sea una estructura de la realidad, como se asumía en el pensamiento de la Edad Media. Por el contrario, el autor argumenta que lo natural es el desorden y, que, por tanto, hay que construir el orden. Tal y como lo expresa Costa (2004: 21), “el orden es el efecto de una decisión concordante de los sujetos, dispuestos a concentrar en el soberano la totalidad del poder”. Se infiere, entonces, que en la representación hobbesiana, al mismo tiempo que se crea el soberano representativo se instaura el orden. En palabras de Hobbes (1651): “una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada por un hombre o una persona, de tal modo que ésta puede actuar con el consentimiento de cada uno de los que integran esta multitud en particular. En efecto, la unidad del representante, no la unidad de los representados, es lo que hace la persona una, y es el representante quien sustenta la persona, pero una sola persona; y la unidad no puede comprenderse de otro modo en la multitud”. De esta forma, el proceso de representación coincide con el origen y el desarrollo de la soberanía. “Los sujetos, antes de la creación del soberano, solo son una suma de individuos: no constituyen una unidad, no son un ente colectivo ya existente con anterioridad al soberano mismo” (Costa, 2004: 22).

No hay que olvidar que, para Hobbes, el estado de naturaleza —donde se carece de orden— es un estado de guerra, de ahí la necesidad de justificar la obligación política que impregna el *Leviatán*. Para ello, Hobbes recurre al contrato social, pero tal y como menciona Pitkin (1985: 30), también a su concepto de representación. Tal y como lo explica Hobbes en el capítulo XVIII del *Leviatán* (1651), “dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos (es decir, de ser su representante). Cada uno de ellos, tanto los que han votado en pro como los que han votado en contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, al objeto de vivir apaciblemente entre sí y ser protegidos contra otros hombres”. La autorización entre representante y representados resulta clave para Hobbes, y, además, la considera ilimitada, de forma que lo que haga el soberano ha de ser considerado como hecho por sus súbditos.

Figura 6. Precedentes del concepto moderno de representación política

Antigua Atenas		Procedimientos cercanos a la democracia directa. No se desarrolla teóricamente el concepto de representación.
Roma Antigua		Creación de instituciones, creación de leyes. No se desarrolla teóricamente el concepto de representación.
Parlamentos medievales		Influencia del soberano. Estructura estamental y jerarquizada.
Thomas Hobbes	Relevancia	Se abre el debate teórico sobre la representación política.
	Definición	El concepto de representación se define como actuar con la autorización de otro.
	Conceptos clave	Representación absortiva.
		Autorización del representado al representante.
		Autores y actores. Personas naturales y personas artificiales.
		Cuando se crea el soberano, se instauro el orden.
	Obra principal	La representación se relaciona con el origen y desarrollo de la soberanía y con la creación del Estado, cuando una multitud de hombres pactan a quien se le otorga el derecho de representar.
		<i>Leviatán</i> , justificación del Estado absoluto.

Fuente: elaboración propia.

Hasta las revoluciones liberales y la emergencia de la burguesía, el monarca absolutista había monopolizado la idea de representación, tal y como teorizó Hobbes, pero los constituyentes de 1791 subvierten esa idea y ponen a trabajar el concepto de representación a favor de la clase burguesa. De este modo, se pone de manifiesto que la nación puede convertirse en sujeto si es capaz de actuar a través de representantes. Según Garrorena (1991: 28), “toda construcción liberal de la soberanía nacional adopta, en el fondo, el formato de una pura cuestión de teoría de la representación”. De ahí que la influencia burguesa en el concepto de representación política se extienda hasta día de hoy.

3.1.2. El parlamentarismo

Después de los precedentes de la Antigua Atenas, con un funcionamiento más cercano a la democracia directa, la Roma Antigua y los parlamentos medievales influenciados por el monarca, el parlamentarismo surge con fuerza y el concepto moderno de representación empieza a desarrollarse. Así, en Inglaterra hacia 1640, se entiende el parlamentarismo como un sistema político en que el poder reside mayoritariamente en un parlamento; al mismo tiempo, Hobbes teoriza sobre el soberano absoluto. La Guerra Civil inglesa pone los cimientos del parlamentarismo británico, que se concibe como un triunfo de la burguesía frente al absolutismo. En el continente europeo, no es hasta la Revolución Francesa (1789) cuando se pone en marcha un modelo parlamentario similar.

Tal y como recuerda Costa (2004: 23), la soberanía parlamentaria se presenta como un poder autosuficiente y pleno, en definitiva, absoluto (nótese que Hobbes, aunque partidario del gobierno monárquico, estaba dispuesto a investir de poder supremo también a una asamblea); del mismo modo, “si se exalta la función representativa del parlamento, al mismo tiempo se lo presenta no ya como espejo o caja de resonancia de la voluntad o de los intereses de los electores individuales, sino como lugar de formación autónoma de decisiones orientadas a la totalidad”. Es durante el Seiscientos inglés cuando “se atribuye al parlamento un rol política y constitucionalmente nuevo”, aunque permanece la idea de un parlamento que representa “no tanto a los sujetos individuales cuanto a la nación, a la totalidad del cuerpo político” (Costa, 2004: 23).

El teórico Edmund Burke (1729 - 1797), padre del conservadurismo británico, es quien señala que el parlamento es un espacio en el que tomar decisiones políticas autónomas, y, por tanto, cuando se dice que el parlamento representa a la nación ya no se está invocando un nexo identitario del parlamento con los estamentos y cuerpos en su conjunto (Costa, 2004: 23). Uno

de los más célebres documentos en los que Burke aborda el tema de la representación es el *Discurso a los electores de Bristol* (1774), en el que expresa que el parlamento “no es un congreso de embajadores con intereses diferentes y hostiles (...); el parlamento es la asamblea deliberadora de una nación, con un interés, el de la totalidad”. De ahí se infiere que el representante no representa a quienes lo eligieron, sino a la nación entera. Para Pitkin (1985: 188), el primer concepto de representación hallado en Burke es de carácter nacional. El deber de cada miembro del parlamento es razonar y juzgar acerca del bien de la totalidad. Desde este punto de vista, siguiendo la interpretación de Pitkin, en el pensamiento burkeano, las elecciones son simplemente un medio de encontrar los miembros de una aristocracia natural. Para Burke, los integrantes del parlamento son un grupo de élite capaz de decretar lo mejor para la nación (son la aristocracia natural), y es esa actividad, precisamente, lo que quiere decir la representación. Burke (1791) sostiene que “sin una aristocracia natural no hay nación”. Siguiendo las interpretaciones de Pitkin (1985: 186 y ss.), un Estado bien acondicionado es aquel que engendra y educa a una verdadera aristocracia natural y le permite gobernar, reconociendo que puede llevar a cabo mejor esta función. La perspectiva burkeana sostiene que el razonamiento no es un asunto puramente intelectual, sino que está ligado a la moralidad y a lo justo. De ello se deriva que, para Burke, el gobierno debería descansar en la sabiduría y no en la voluntad. Tal y como apunta Burke (1774), “si el gobierno fuese una cuestión de voluntad de cualquier estilo, la vuestra [la de los electores] sin duda debería ser la superior. Pero el gobierno y la legislación son una cuestión de razón y de juicio”. Así, las decisiones políticas correctas surgirían únicamente de la deliberación parlamentaria racional. El primer concepto burkeano de la representación “parece excluir la sensibilidad democrática ante los electores” (Pitkin, 1985: 187).

Cabe señalar que Burke distingue entre representación real y representación virtual. De esta forma, mientras algunas partes de la nación están representadas de forma literal (real), otras lo están virtualmente, en tanto que los representantes representan a toda la nación. Según Burke (1792), una representación virtual es aquella en la que se da una comunión de intereses y simpatía de sentimientos y deseos entre los que actúan en nombre de cualquier clase del pueblo y el pueblo en cuyo nombre actúan, si bien los fideicomisarios no son elegidos realmente por ellos.

Sin embargo, tal y como especifica Pitkin (1985: 186), el autor no presenta una doctrina consistente sobre la representación. Del pensamiento de Burke resulta importante señalar, además, lo que se refiere a la representación de intereses desvinculados, que se convierte en el segundo concepto sobre representación burkeano.

Para Burke, los intereses son fundamentalmente económicos. El autor habla de un interés mercantil, de un interés agrícola y de un interés profesional, que suelen estar asociados con localidades particulares cuyo modo de vida caracterizan. Tal y como explica Pitkin (1985: 192), se trata de intereses desvinculados porque se trata de una realidad objetiva aparte de la situación de algunos individuos, no es el interés de los granjeros, sino el interés agrícola. Esta concepción es distinta de la de los utilitaristas, que conciben intereses personales y subjetivos, y de la idea moderna de intereses autodefinidos y cambiantes. Para Burke, el miembro del parlamento ha de buscar el interés de sus electores antes que ejecutar sus órdenes; el rasgo característico del método burkeano es que un contraste tal es posible e incluso sumamente significativo. Según el pensamiento burkeano, el interés es objetivo y racionalmente posible de desvelar, y dado que los deseos del pueblo generalmente se basan en sus opiniones, que con frecuencia son erróneas, el representante puede que tenga que luchar por el interés de sus electores incluso en contra de su voluntad (Pitkin, 1985: 194, 195).

Así, se pone de manifiesto que Burke fija el foco en el interés y no en la voluntad, pero ese interés o intereses son generales, son los de la nación. En el pensamiento burkeano se revela también un problema de la representación política: la distancia entre el representante y el representado. La representación política es para Burke lo que media entre el soberano y la nación (Costa, 2004: 24), pero, al mismo tiempo, Burke habla de la importancia de sentirse representado, de que no se exacerbe la indispensable separación entre representados y representantes. De todos modos, siguiendo a Costa (2004), es central en el pensamiento sobre la representación burkeano el rechazo de un nexo inmediato entre representados y representantes, la identificación de los representados con la red objetiva de los intereses de la nación y la imagen de los representantes como una élite que da forma y expresión a aquellos intereses actuando como centro autónomo de decisión política.

El concepto burkeano de representación política bebe naturalmente de distintos aspectos de su pensamiento, como resume Pitkin (1985: 208), tales como la hostilidad elitista y antidemocrática hacia las ampliaciones del sufragio; su concentración sobre la representación de intereses antes que sobre la representación del pueblo; su concepción de los intereses como objetivos y desvinculados; su forma de entender el gobierno y la política como cuestiones de conocimiento y razón y no de opinión ni voluntad; y con la idea de que las cuestiones políticas tienen soluciones correctas que pueden hallarse. Estos supuestos han quedado desfasados en el moderno concepto de representación política.

Gran parte de los escritos de Burke están imbuidos de su negativa reacción a la Revolución Francesa, que, como se apuntado ya, resulta uno de los hitos históricos que más ha influido en la concepción de la representación política. En su célebre *Reflections on the Revolution in France* (1790), Burke afirma su visión de la representación política contra la abstracción de los derechos del hombre, contra la fundamentación voluntarista, contractualista, mecanicista del poder y ahonda en la polémica contra el protagonismo de los sujetos (Costa, 2004: 23).

Por otra parte, el académico francés Emmanuel-Joseph Sieyès (1748 - 1836) fue uno de los teóricos de la Constitución de 1791 y de la Revolución Francesa, así como más tarde de la era napoleónica. En lo tocante a la representación política, Sieyès plantea una visión opuesta a Burke, en tanto que piensa en transformar los Estados generales en una asamblea de iguales, es decir, reflexiona sobre un proceso constituyente al hilo de la Francia revolucionaria. Tal y como expone Costa (2004: 25), el modelo conceptual de referencia es todavía el esquema contractualista elaborado por la tradición iusnaturalista: son los individuos los que, con el contrato social, fundan el orden político. Sin embargo, lo novedoso aquí es que ya no son los hombres del hipotéticos y originario estado de la naturaleza, sino que son los reales y presentes miembros de la nación francesa, son los componentes no privilegiados del Tercer estado, y el pacto que quieren cerrar no es el contrato social, sino el acto fundacional de una asamblea constituyente. Para que esa asamblea pueda existir, es necesario apoyarse en el concepto de representación.

Cuando el 17 de junio de 1789 Sieyès propuso que la asamblea del Tercer estado tomara el nombre de Asamblea nacional, estaba marcando un cambio en la concepción de la representación política. “La Asamblea deliberante, después de la verificación de los poderes, reconoce que esta Asamblea está ya compuesta de representantes enviados directamente por el 96 por ciento, al menos, de la nación. (...) Además, ya que pertenece en exclusiva a los representantes verificados concurrir para formar la voluntad nacional y dado que todos los representantes verificados deben estar en esta Asamblea, es también indispensable concluir que le pertenecen, y que sólo pertenecen a ella, interpretar y presentar la voluntad general de la nación. No puede existir entre el Trono y esta Asamblea ningún tipo de veto, ningún poder negativo. La denominación Asamblea nacional es la única que le conviene a esta Asamblea en el estado actual de las cosas, sea porque los miembros que la componen son los únicos representantes legítima y públicamente conocidos y verificados, sea porque ellos han sido enviados directamente por la práctica totalidad de la nación, sea, en fin, porque, al ser la representación una e indivisible, ningún diputado, en cualquier orden o clase que haya sido elegido, tiene el derecho de ejercer su función separándose de la presente Asamblea”, escribía

Sieyès (citado en Brunet: 2012). De las palabras del teórico francés se desprende que el Rey ya no era visto como la personificación de los representados y que los nuevos representantes, los verificados como dice Sieyès, tienen la obligación de interpretar la voluntad de la nación, en tanto que, como representantes, son nación, y, de hecho, representan a su práctica totalidad.

La nueva representación política se funda en la igualdad de los sujetos y para Sieyès ya no tiene nada que ver con el Antiguo Régimen. Según Costa (2004; 25), “tampoco debe dejarse intimidar por las críticas rousseauianas: para Sieyès, lejos de ser una mala alternativa a la democracia, la representación es su única realización posible”. Cabe recordar que Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778) es uno de los más célebres teóricos de la democracia directa, que estableció que la voluntad popular es el fundamento de la organización política y que consideraba que la representación popular conducía al dominio de la mayoría por los representantes populares.

Para Sieyès, en cambio, “el gobierno representativo es una mezcla de instituciones oligárquicas y democráticas” (Flores, 2013), de tal modo que la democracia, la atribución del poder al pueblo, solo puede existir en una asamblea representativa. En palabras de Sieyès, “la nación reunida en asamblea, hipótesis real, encuentra su imagen en la Asamblea que la representa” (citado en Costa, 2004: 25). Como dice Sieyès en *Dire sur la question du veto royal* (1789) en referencia a la necesidad de un gobierno representativo, “la gran pluralidad de nuestros conciudadanos no tiene ni la educación ni el tiempo para ocuparse directamente de las leyes que deben gobernar Francia; por lo tanto, al nombrar representantes, puesto que es la opinión de muchos, los hombres ilustrados deben someterse a ella como los otros. Cuando una sociedad se forma, se sabe que la opinión de la pluralidad es ley para todos” (Zapperi, 1985).

Sieyès concibe, entonces, a la nación compuesta por sujetos individuales e iguales, idea que se opone a la visión burkeana, y que puede asemejarse al modelo hobbesiano según el cual los sujetos en estado de naturaleza autorizan al soberano a que los represente. Sin embargo, entre las dos argumentaciones hay una diferencia decisiva, “el esquema autor-actor, evocado por Hobbes para el momento ideal de fundación de la soberanía, es utilizado por Sieyès para dar a un evento concreto —la convocatoria de los Estados generales— el valor de acto inaugural de un verdadero proceso constituyente” (Costa, 2004: 26).

Con Sieyès y la Revolución Francesa también tuvo lugar el cambio de mandato imperativo al mandato libre, que transforma el concepto de representación política y completa el tránsito del medioevo a la modernidad. El mundo de Hobbes se desvanece y entre Burke y Sieyès hay una insalvable diferencia de contextos. Empieza a tomar forma en incipiente parlamentarismo.

En ese momento, “la extinción del mandato imperativo, la autonomía del representante con respecto al representado, presupone y refuerza la idea de que la representación no pone en relación a la parte con el todo, sino que interviene directamente en la creación del orden” (Costa, 2004: 27), de modo que el representante sustituye a la nación representada y así la realiza. Como defiende Sieyès, el nuevo orden está regido por el sujeto y su voluntad, con lo cual adquiere una gran importancia el momento del voto. Por lo tanto, el voto es, desde entonces, una parte esencial del dispositivo de representación.

Por otra parte, en Sieyès también se encuentra el argumento de la representación como forma especializada del trabajo (Garrorena, 1991: 33, 34). Se trata de una idea que puede vislumbrarse en Burke cuando habla de la aristocracia natural para ejercer como representante o incluso, tal y como recuerda Garrorena (1992: 33), en Montesquieu (1689 - 1755) cuando en *El Espíritu de las Leyes* (1748) dice: “la gran ventaja de los representantes es que ellos tienen la capacidad para discutir los asuntos; ... el pueblo no es en absoluto apropiado para ello” (citado en Garrorena, 1992: 34). Tal y como Sieyès escribe en *Dire sur le veto royal* (1789), “la conveniencia común justifica que los ciudadanos nombren representantes mucho más capaces que ellos de conocer su interés y de interpretar su voluntad... La gran mayoría de los ciudadanos carece de preparación para ocuparse de las leyes que deben gobernar Francia”. La burguesía está interesada por la condición técnica, la ordenación económica y de la sociedad en general, y de ello se deriva la preocupación por la especialización o división del trabajo. De ahí que para la corriente liberal-burguesa fuera natural aplicar el mismo principio ordenador a la política, bajo la idea de que resulta mejor para el funcionamiento de la sociedad que el representante sea el especialista en la materia. Se entiende, como recuerda Garrorena (1991), que el representante pasa de ser el mal menor a la mejor forma de participar en política, de manera que la teoría de la especialización del trabajo se convierte en un soporte argumental de la teoría de la representación. A este respecto, cabe señalar la influencia sobre el pensamiento liberal-burgués de la obra de Adam Smith (1723 - 1790), *La riqueza de las naciones*, publicada en 1776 y que versa sobre el origen de la prosperidad económica de Estados como Gran Bretaña o Países Bajos y en el que se desarrollan las teorías económicas de la división del trabajo o la naturaleza de la riqueza, y que, como se ve en Sieyès, tienen su reflejo en cuanto a la configuración del concepto de representación política.

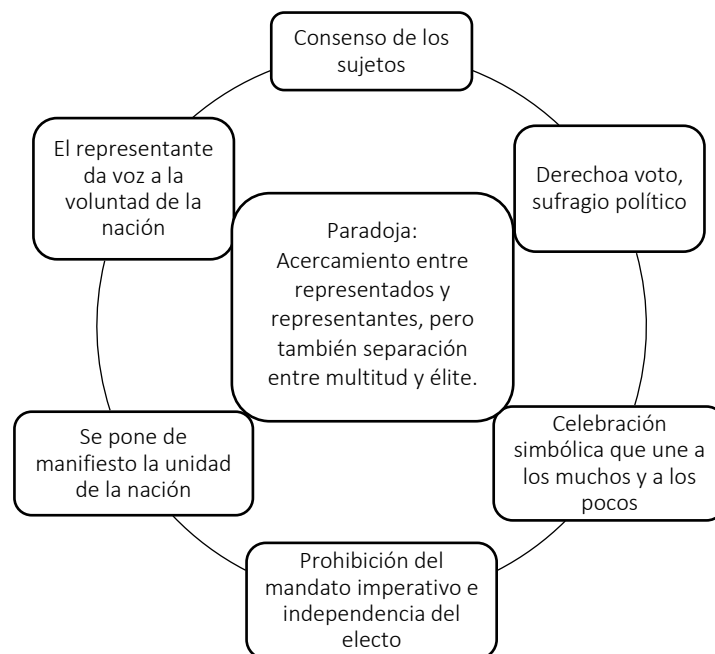
Figura 7. La representación política en los inicios del parlamentarismo

	Burke	Sieyès
Concepto de representación	La representación es lo que media entre el soberano y la nación. La aristocracia natural decreta lo mejor para la nación y esa actividad es representación.	La representación se funda en la igualdad de los sujetos. Es la única realización posible de la democracia. Para que exista la Asamblea Nacional hace falta la representación.
Ideas clave	Parlamento: asamblea deliberadora donde tomar decisiones autónomas con un solo interés: el de la totalidad. Representa a la nación entera.	Transformación del Tercer Estado en Asamblea Constituyente. Defensa del gobierno representativo.
	Aristocracia natural. Élite. Sin la aristocracia natural no hay nación. Decreta lo mejor para la nación.	Los miembros del Tercer Estado tienen la obligación de interpretar la voluntad de la nación. Como representantes son nación.
	Elecciones entendidas como medio de escoger a la élite que debe representar.	El rey ya no es la personificación de los representados.
	Representación real y representación virtual.	Cambio del mandato imperativo al mandato libre.
	Representación de intereses desvinculados. El interés es objetivo.	Adquiere importancia el voto y la voluntad de la nación.
Coincidencia entre autores	Entender la representación como forma especializada del trabajo.	
Potenciales problemas relacionados con la representación política	Distancia entre el representante y el representado, aunque se trata de una separación indispensable. Importancia de sentirse representado.	
Relevancia	La mayoría de sus concepciones quedan superadas con el concepto moderno de representación política.	Con el hecho histórico de la Revolución Francesa, sienta las bases del moderno concepto de representación.

Fuente: elaboración propia.

De este modo, en los inicios del parlamentarismo el concepto de representación política empieza a fraguarse con características que lo conforman hasta la actualidad. Siguiendo la síntesis de Costa (2004: 28), en su fase inicial, el discurso sobre la representación política empieza a dar importancia al consenso de los sujetos, y, por tanto, al sufragio político y al derecho al voto. La representación se entiende en este punto como la celebración simbólica del vínculo que une a los muchos con los pocos. De la misma forma, en la representación moderna se da la prohibición del mandato imperativo y la independencia del electo con respecto a sus electores; así, el representante da voz a la voluntad de la nación, pero no recoge las pretensiones individuales de los sujetos. Esto lleva a la paradoja de que los representados se acercan a los representantes, en tanto que los primeros se reconocen en los segundos, pero, por otro lado, la representación establece también la separación entre la multitud y la élite, lo que puede vislumbrarse como un problema de representación política en el futuro. Asimismo, desde el primer momento, la representación política pone de manifiesto la unidad de la nación.

Figura 8. Síntesis de las principales características de la representación política en los inicios del parlamentarismo



Fuente: elaboración propia a partir de Costa (2004).

El pensamiento liberal-burgués deja su impronta en el concepto de representación también a través de Benjamin Constant (1767 - 1830), de su concepto de sociedad moderna y de libertad. En el discurso pronunciado en el Ateneo de París en 1819 y después publicado bajo el título *Sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos* (2013) Constant analiza porqué bajo los intereses de la burguesía es mejor inclinarse por un gobierno representativo. Para el autor, el modo de gobierno representativo es “el único dentro del cual podíamos hoy día encontrar alguna libertad y algún reposo” y ello se debe, según su análisis, a las diferencias de organización social y de tipos de libertad que las sociedades antiguas y modernas precisan.

A diferencia de los antiguos, explica Constant (2013), los modernos ponen énfasis en la libertad individual y por eso “ya no podemos disfrutar de la libertad de los antiguos, que consistía en la participación activa y constante en el poder colectivo”. El individuo moderno atribuye su propia libertad a tener tiempo para sus asuntos o como escribe Constant, “nuestra propia libertad debe consistir en el goce apacible de la independencia privada”. El pensador defiende la idea de que la libertad individual es una necesidad moderna y que, por consiguiente, la libertad política es indispensable.

Constant (2013) afirma que “es el derecho, de cada uno, de influir sobre la administración del gobierno, sea por el nombramiento de todos o de algunos funcionarios, sea a través de representaciones, peticiones, demandas que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración”. Por tanto, alerta de que la libertad individual no va en detrimento de la libertad política, sino que los cambios en la organización social de los modernos van más encaminados al bienestar individual y que por ello cada cual debe ocuparse de sus asuntos. Por esa razón, lo más óptimo según la visión del autor es delegar el gobierno en representantes. El punto clave de este pensamiento es desvelado por Constant (2013) cuando dice: “En la clase de libertad que nos corresponde, cuanto más tiempo para nuestros intereses privados nos deje el ejercicio de nuestros derechos políticos, más preciosa será la libertad. De ahí, señores, la necesidad del sistema representativo. El sistema representativo no es otra cosa que una organización con cuya ayuda una nación descarga en algunos individuos lo que ella no puede o no quiere hacer por sí misma”. Como explica Garrorena (1991: 32), el mundo del hombre moderno es el de sus negocios, su industria y sus intereses, el de sus asuntos particulares y el del afán por su prosperidad; consiguientemente, es ahí, en la preservación o autonomía de esa existencia suya como privado, donde a partir de ahora la libertad tiene básicamente su sede. A su lado, la libertad política importa, pero tanto como ella, importa conseguir organizarla de manera que interfiera lo menos posible en la dedicación del burgués a sus asuntos. Es por eso que el burgués opta por la técnica de la representación política.

Del mismo modo, en el discurso de Constant pueden observarse también los potenciales problemas que pueden relacionarse con el gobierno representativo. Se trata de las cuestiones relacionadas con que los individuos no perciban su capacidad de influencia, con que dejen a un lado sus derechos políticos y con que dejen de participar en el sistema representativo. Para Constant, el hombre burgués está “perdido en la multitud, el individuo no percibe casi nunca la influencia que él ejerce. Jamás su voluntad se marca sobre el conjunto; nada constata su cooperación ante sus propios ojos. Así pues, el ejercicio de los derechos políticos no nos ofrece sino una parte de los goces que los antiguos encontraban en ellos, y al mismo tiempo los progresos de la civilización, la tendencia comercial de la época, la comunicación de los pueblos entre sí, han multiplicado y variado hasta el infinito los medios de felicidad particular”. Con ello se constata que el autor vislumbra un dilema en la representación política, en tanto que el individuo no percibe normalmente su poder individual en las decisiones del gobierno representativo, y ello puede provocar un alejamiento o desinterés por el sistema representativo.

Asimismo, Constant también destaca la importancia del control al representante, núcleo de potenciales problemas relacionados con la representación política. En palabras del autor, “del mismo modo, los pueblos, que con el fin de gozar de la libertad que les conviene, recurren al sistema representativo, deben ejercer una vigilancia activa y constante sobre sus representantes, y reservarse, en épocas que no estén separadas por intervalos demasiado largos, el derecho de apartarles si han equivocado sus votos, y de revocar los poderes de los que ya han abusado”. Como se observa, el sufragio se plantea como una medida de vigilancia a los representantes indispensable. En el Ochocientos, el sufragio político empieza a cobrar importancia a la hora de hablar de representación política y desde entonces será un concepto asociado a ella.

Constant señala que “el peligro de la libertad moderna es que, absorbidos por el disfrute de nuestra independencia privada, y en la gestión de nuestros intereses particulares, renunciamos demasiado fácilmente a nuestro derecho de participación en el poder político”. Por tanto, de ello se deduce que, aunque el burgués esté mayormente ligado a sus asuntos particulares y opte por el gobierno representativo, ello no le exime de sus derechos políticos y de sus responsabilidades con el funcionamiento del sistema representativo.

En ese momento, el sufragio —el voto— se presenta como un mecanismo imprescindible en el gobierno representativo, para elegir a los representantes y para que los ciudadanos ejerzan una función vigilante ante ellos. “El voto es el vínculo visible y formalizado entre los miembros de la nación representada y la asamblea representativa; es el voto el que, como expresión del

consenso de los sujetos, permite imputar a los representados las decisiones de los representantes y reconocer al pueblo como sujeto autónomo, como sujeto colectivo que obedece las leyes que él mismo, libremente, se da” (Costa, 2004: 28).

Con el primer liberalismo, en el siglo XVIII, se liga el derecho a voto con la propiedad. De la misma manera, también el género es un criterio de selección de los individuos que pueden gozar de derechos políticos. La pobreza y la pertenencia al género femenino eran condiciones inhabilitantes a la hora de ejercer el voto. Entonces, el principio de igualdad completa era un rasgo que todavía no formaba parte del concepto de representación política. Aunque Sieyès había conceptualizado una nación hecha de sujetos iguales, en la práctica se fijan criterios a la hora de ejercer los derechos políticos. Francia puso en marcha el sufragio universal masculino en 1792, pero el sufragio universal pleno no llegó hasta 1944. En el caso de España, el sufragio universal masculino se consolidó en 1890 y las mujeres no pudieron votar hasta 1933 (aunque ese derecho fue revocado por la dictadura franquista).

Así, durante el siglo XVIII y XIX, la propiedad, entendida como la expresión visible de la racionalidad (Costa, 2004: 30) es la expresión y la condición de la autonomía, de la independencia y la libertad del individuo, y es por eso que es la condición necesaria para gozar de los derechos políticos. Por el contrario, en ese momento, la pobreza se concibe como el síntoma de una insuficiente capacidad de autodisciplina y de previsión. “Si el derecho del voto no es más que la expresión formalizada del consenso del sujeto (de ese consenso que es la condición de legitimidad del orden), solo puede ser atribuido a un sujeto plenamente independiente” (Costa, 2004: 30). A menos que ese sujeto pertenezca al género femenino.

Así, el sufragio censitario, es decir, restringido a criterios económicos y sociales, es el sistema de voto imperante en la mayoría de países occidentales hasta el siglo XIX. En algunas naciones, antes que el sufragio universal, se pasa por el sufragio masculino, en el que pueden votar todos los hombres que cumplan los requisitos legales. Como explica Costa (2004: 32), “la representación tiene que ver, no con la voluntad de los sujetos, sino con su capacidad: sirve para designar a los sujetos excelentes (y la propiedad no es otra cosa que la expresión de una eminente y reconocida capacidad), de modo que la clase política sea un fiel reflejo de las jerarquías sociales”.

Los teóricos del liberalismo, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, definían el gobierno representativo como el más adecuado. Siguiendo a Pitkin (1985: 211), en Estados Unidos se consideraba que la representación debía ser de personas y los intereses eran vistos como un mal inevitable, que debían ser domesticados por un gobierno bien constituido. En Inglaterra, el

utilitarismo favorecía la representación de las personas y hacía del interés un concepto cada vez más personal. Como adalides del individualismo en su perspectiva económica, los pensadores liberales creían que la representación se fundamentaba en personas racionales, independientes e individuales.

En la colección de ensayos *The Federalist* (1787 - 1788), en la que Alexander Hamilton, John Jay y James Madison promueven la ratificación de la Constitución de Estados Unidos, explican, tal y como recoge Pitkin (1985: 212), que “un gobierno representativo es un dispositivo que se adopta en lugar de la democracia directa debido a la imposibilidad de reunir a grandes cantidades de gentes en un solo lugar”. Esta noción es diferente a la burkeana en tanto que está más cercana a la representación de personas que a la representación de intereses. La representación significaba para Madison “la delegación del gobierno... a un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto” (citado en Pitkin, 1985: 212).

Para los liberales, la representación es de personas y no de intereses, pero ello no implica que los intereses no sean importantes en la concepción liberal. Lo que ocurre es que son concebidos de un modo distinto a como lo hacía Burke. Como explica Pitkin (1985: 212, 213), “el concepto de interés en *The Federalist* es mucho más pluralista” que en Burke. Para Madison, los intereses son subjetivos y mudables, y no son jamás desvinculados. Del mismo modo, para Madison existe también el bienestar de la nación, hay, pues, un bien objetivo y ese bienestar se logra mediante la inacción y la estabilidad. Desde esta perspectiva, el gobierno representativo debe captar las principales fuerzas sociales en el legislativo y conservarlas hasta que pase el tiempo de la legislatura, el gobierno representativo debe preservar el *statu quo* (Pitkin, 1985: 217).

Con Madison se subraya la subjetividad del concepto de interés y en *The Federalist* se trata al gobierno como “la maquinaria que contiene, equilibra y ajusta el tratamiento de intereses” (citado en Pitkin, 1985: 218). A diferencia de Burke, el representante de Madison no conoce los intereses de sus electores mejor que ellos mismos. Para el autor americano, la política es el reino de presiones y opiniones; en cambio, Burke lo entiende como el de la razón y la sabiduría (Pitkin, 1985: 219).

Con los utilitaristas ingleses, defensores de la doctrina de que la mejor acción es la que prioriza o maximiza la utilidad, la teoría de la representación avanza hacia el subjetivismo. Es decir, los utilitaristas consideran que cada individuo actúa en su propio interés. Tal y como recuerda Pitkin (1985: 219), “cuando el utilitarista mira al hombre como una criatura económica, está viendo en funcionamiento el interés egoísta individual”. Tal y como expresaba Jeremy Bentham (1748 - 1832) en *Plan of Parliamentary Reform*, “no existe nadie que sepa cuál es el interés de uno tan

bien como uno mismo". Siguiendo el razonamiento de Pitkin (1985: 220), de ello se deduce que ningún gobierno puede actuar realmente por los mejores intereses de los sujetos que de él dependen, o, al menos no tan bien como ellos mismos podrían hacerlo si se les permitiese. Para Adam Smith (1723 - 1790), esta conclusión toma la forma de *mano invisible*, de manera que cada hombre que persigue su propio interés produce un bien social. Del mismo modo, Bentham ahonda en ello cuando en *Plan of Parliamentary Reform* argumenta que cada individuo que concede más tiempo y atención a los medios para preservar y aumentar su porción de riqueza que los que puede conceder el gobierno, es probable que tome un camino más eficaz que el que tomaría el gobierno en su nombre.

De lo anterior se deriva que para los utilitaristas el gobierno debe interferir lo menos posible en sus asuntos, puesto que el representante es un hombre y como tal solo puede actuar en su propio beneficio, la representación deja de ser posible. Sin embargo, aunque esta sería la consecuencia lógica del pensamiento utilitarista, "todos los autores utilitaristas reconocen la existencia de un bien general o común" (Pitkin, 1985: 221). Ese bien general estaría formado por la suma de los intereses de los distintos miembros, pero es Bentham quien alerta de que ese bien común no siempre sale del agregado de las búsquedas privadas. Es ahí donde Bentham habla del interés privado y del interés público, y que toda persona posee esos dos tipos de interés a la vez. Así, entra en juego la representación, ya que por medio de ella se pone en sintonía el interés del gobierno y de la comunidad. Bentham presupone que el legislador es capaz de saber qué es el interés público y que tiene el suficiente interés privado para establecer la legislación pertinente; además, para Bentham lo que se requiere es ordenar los asuntos, que la parte controladora del gobierno esté en manos de aquellos cuyo interés sea que el buen gobierno ocupe el lugar que ocupa el desorden (citado en Pitkin, 1985: 222).

Así, en el pensamiento utilitarista la voluntad de la nación es una magnitud mensurable en términos de mayor felicidad para el mayor número de individuos. Del mismo modo, el egoísmo es connatural a los humanos, de manera que iguala al representante y al representado y pone en valor la suma de voluntades de los individuos. Ello implica que la representación se entienda como el reflejo de las voluntades que apoyan a cada representante y materializa al sujeto representado. La idea de la responsabilidad política del representante va tomando forma, puesto que ya no se confía en su capacidad intelectual superior o su mayor rectitud moral (Portero, 1991: 100).

Todo ello conduce a la defensa que los pensadores utilitaristas hacen del sufragio universal. Tanto Bentham como John Stuart Mill (1806 - 1873) reconocen el egoísmo del hombre, pero

defienden que a través de los votos se pueda contribuir al interés común. Para Stuart Mill, el gobierno representativo, el sufragio universal y la representación proporcional resultan clave. En su obra *Representative Government* (1878), Stuart Mill arguye que es importante que todos los gobernados tengan voz en el gobierno, porque a duras penas puede esperarse que aquellos que no tengan voz no sean injustamente pospuestos por aquellos que la tienen. Sin embargo, Mill también aclara que un gobierno representativo ha de fracasar si nadie o solo alguna pequeña fracción siente el grado de interés en los asuntos generales del Estado necesario para la formación de una opinión pública donde los electores rara vez harán algún uso del derecho del sufragio sino es para servir a sus intereses privados o al interés de su localidad (Pitkin, 1985: 225). Se entrevé aquí un potencial problema relacionado con la representación política, que tiene que ver con la implicación del representado en la elección del representante y, por tanto, con el sufragio.

Stuart Mill clarifica que el verdadero interés de cualquier hombre es su participación en el interés público, y no la persecución de su interés egoísta. Por ello, el teórico utilitarista distingue entre interés real e interés aparente, siendo el real el que implica que un hombre participe en el bien común. A través del interés objetivo, los utilitaristas evitan la conclusión de que nadie puede actuar por otro o representarlo. Tal y como explica Pitkin (1985: 227, 228), entendida desde el liberalismo, “la representación hace posible para todos el participar en el gobierno actuando como el juez último que dice si su propio zapato le aprieta; no obstante, permite a los gobernantes hacer uso de su sabiduría e información para perseguir los verdaderos intereses del pueblo allí donde la acción directa estaría mal dirigida por decisiones precipitadas y de corto alcance. Y, al mismo tiempo, la representación hace que sea de interés para el gobernante actuar en interés de los sujetos gobernados (...). Solamente si utiliza su sabiduría para promover los intereses verdaderos y de gran alcance de las gentes estarán estas verdaderamente satisfechas y le apoyarán en las elecciones”.

A diferencia de la representación burkeana, para Bentham y Stuart Mill el representante no es realmente un experto. Los utilitaristas prestan atención a las opiniones, mientras que Burke las considera irrelevantes, ya que considera que los intereses se pueden conocer realmente. El cambio con los liberales es que ya no consideran que el conocimiento político sea digno de confianza o que se tenga acceso a él, el representante puede que esté mejor situado que sus votantes para conocerlo, pero también puede darse el caso contrario. Los utilitaristas se preocupan por el número de representante que tiene cualquier grupo particular, mientras que Burke no lo estaba (Pitkin, 1985: 228). Cabe señalar que las opiniones del pueblo cuentan más cuanto más dudosa se hace la certeza sobre el conocimiento que posee el representante. Otra

diferencia fundamental con la teoría burkeana, siguiendo el razonamiento de Pitkin, es que para el liberalismo la definición final de lo que es correcto recae en cada individuo, mientras que para Burke lo que es correcto es una verdad objetiva. Es en este punto cuando Bentham y Stuart Mill coinciden en que al pueblo ordinario se le puede mostrar su interés verdadero, aunque se le puede confundir. De ahí que se justifique que el sufragio se pueda limitar, en tanto que puedan votar los que no puedan ser engañados. Para ellos, el representante debe ilustrar al pueblo también, además de hacer lo correcto.

De lo anterior se percibe la apuesta liberal-burguesa por el gobierno representativo desde diferentes perspectivas. Desde la Guerra Civil inglesa, pasando por las revoluciones americana y francesa, hasta el auge del parlamentarismo y la extensión del sufragio, el concepto de representación política se ha ido nutriendo de distintos autores que han reflexionado sobre su alcance y de distintos acontecimientos históricos hasta el siglo XX.

Figura 9. La representación política desde las perspectivas liberal y utilitarista

	Liberalismo	Utilitarismo	
Principales características relacionadas con la representación política	Liga el derecho a voto con la propiedad y el género masculino.	La representación se liga al subjetivismo, cada individuo actúa en su propio interés.	
	La representación tiene que ver con la capacidad de los sujetos (medida en la propiedad), no con la voluntad.	La representación se entiende como reflejo de las voluntades.	
	El gobierno representativo es el más adecuado a sus intereses.	Toma forma la idea de la responsabilidad del representante, ya que el egoísmo del hombre iguala a representantes y representados.	
	Representación de personas.	Importancia de las opiniones.	
	Los intereses son subjetivos y mudables.	Existe un interés objetivo.	
	Constant	Bentham	Stuart Mill
Definición del sistema representativo	Es una organización con cuya ayuda una nación descarga en algunos individuos lo que ella no puede o no quiere hacer por sí misma.	Por medio de la representación se pone en sintonía el interés del gobierno y el de la comunidad.	A través de los votos se puede contribuir al bien común.
Conceptos clave	La libertad individual se relaciona con la libertad política. Cada individuo tiene el derecho de influir en la administración del gobierno.	No existe nadie que sepa cuál es el interés de uno tan bien como uno mismo.	El representante no es un experto.
	Se debe delegar el gobierno en representantes para que cada cual se dedique a sus asuntos.	Existencia del bien común.	Representación proporcional.
	Importancia del control del representante. Sufragio como sistema de vigilancia.	El legislador es capaz de saber qué es el interés común y de legislar en consecuencia.	Defiende el sufragio universal, pero considera que el pueblo puede ser engañado.
Potenciales problemas relacionados con la representación política	Baja participación de los individuos en el sistema representativo porque no perciben su influencia.	Ningún gobierno puede actuar realmente por los mejores intereses de los sujetos que de él dependen.	El gobierno representativo puede fracasar si solo una parte pequeña de la comunidad usa su derecho al sufragio.

Fuente: elaboración propia.

En el siglo XIX y en el siglo XX se empiezan a cuestionar los criterios de exclusión del derecho al sufragio, a medida que se extiende el pensamiento de que la democracia es la única forma de gobierno plenamente legítima, en tanto que se funda en el consenso de todos. Durante ese periodo, los movimientos obreros primero y la presencia de la sociedad civil, después, adquieren una mayor importancia. El movimiento de los trabajadores asalariados a raíz de la industrialización está ligado al nacimiento de los partidos socialistas, que reivindican mejoras en las condiciones laborales y que empiezan a tener un lugar en los parlamentos. Tal y como resume Costa (2004: 50, 51), aparece un partido de tipo nuevo, encarnado en la socialdemocracia alemana y en los otros partidos socialistas que se inspiran en ella, un partido que no está hecho de coaliciones ligadas a la personalidad de los líderes, sino un partido que se mantiene unido gracias a la organización interna y a la ideología. Los partidos socialistas se imbrican en la lucha por los derechos civiles, políticos y sociales, y “acaban por ver en la democracia representativa, si no el objetivo de su propia acción, sí el entorno más propicio para su afirmación”. Por tanto, a partir de mediados del siglo XIX, los partidos políticos experimentan también una transformación, que afecta a la práctica de la representación política. En el siglo XX, cuando la sociedad civil gana fuerza, también los partidos políticos se ven modificados, en tanto que aparecen nuevas preocupaciones políticas por parte de los representados. De partidos políticos formados por notables se pasa a partidos políticos que representan a sectores sociales definidos, como los partidos socialistas, hasta que a finales del siglo XX y en el siglo XXI, ello también se modifica. Así, los partidos políticos empiezan a ser un elemento importante del sistema representativo a partir de mediados del siglo XIX, cuando su papel se entrelaza con el desarrollo de la democracia, ya que se considera al partido como “un instrumento de organización y de afirmación del pueblo soberano” (Costa, 2004: 50). En cuanto la democracia trata de superar la fractura entre el soberano y los sujetos, explica Costa (2004: 50), el partido comienza a perfilarse como un instrumento capaz de reforzar el papel de los representados, haciéndoles capaces de influir desde la base, a través del canal ascendente del partido, en el proceso decisional de los representantes.

Ligado a lo anterior, en ese momento también tiene lugar un debate sobre el sistema de voto proporcional, de manera que se reconsidera el voto mayoritario.

El sistema de voto mayoritario se apreciaba como más indicado para conceder el poder a la élite dominante, mientras que el proporcional “es recomendado con frecuencia como el método electoral más indicado para acercar el parlamento a la sociedad: para hacer del primero un espejo lo más fiel posible de la segunda, una especie de reproducción a escala de los movimientos socialmente operantes” (Costa, 2004: 50).

En los siglos XIX y XX, las sociedades occidentales transitan hacia la democracia plena y por eso el sufragio censitario comienza a ser cuestionado, igual que más tarde se cuestionará el sufragio universal masculino. La transición, sin embargo, no está exenta de tensiones en cuanto la meta del sufragio universal se percibe como más cercana. Cabe recordar los recelos del primer liberalismo a la tiranía de la mayoría, que esta vez podría darse esgrimiendo el voto, a medida que se amplían el sufragio y la representación de los intereses. La democracia es representativa, pero ese mecanismo exige la igualdad de los individuos. Por lo tanto, la representación política se encamina hacia conseguir esa igualdad. Por eso el voto resulta de suma importancia en este periodo, puesto que se considera el vínculo directo con la participación política, y, por tanto, con la representación. Desde ese momento, la representación queda ligada a la democracia, a diferencia de cuando se empezaba a fraguar el concepto de representación, cuando los procedimientos democráticos todavía no se habían consolidado. Aunque la reivindicación de los derechos civiles de la mujer tuvo un tortuoso camino hasta el siglo XX en los Estados occidentales, la representación también se ha acabado ligando a la emancipación humana, en general, y femenina, en particular (Costa, 2004: 36). En democracia, la representación debe ser igual, si es la representación de todos. La ampliación del sufragio pone sobre la mesa una relación distinta entre el representado y el representante, ya que una mayor cantidad de sujetos se sitúa más cerca de los representantes, si se participa en la elección.

En los años 20 del siglo XX, Hans Kelsen (1881 - 1973), sin embargo, critica las ideologías decimonónicas sobre la democracia y la representación. Sin obviar el contexto de entreguerras en que Kelsen comienza su producción teórica, el autor reconoce que el parlamentarismo ha sido la lucha contra la autocracia de los siglos XVIII y XIX y que, del parlamentarismo, a través de una constitución que diera a la representación popular una participación decisiva en la formación de la voluntad estatal y que pusiera fin a la dictadura del monarca o a los privilegios del régimen estamental, se esperaban todos los progresos políticos. Para el autor, el parlamentarismo como forma de Estado en los siglos XIX y XX cuenta con conquistas como la completa emancipación de la burguesía frente a los privilegios estamentales y la equiparación de derechos políticos del proletariado. Sin embargo, Kelsen (2006: 90) advierte cómo “tanto los partidos de extrema derecha como los de extrema izquierda rechazan el principio parlamentario de manera cada vez más resuelta, al tiempo que la invocación a la dictadura o al orden estamental es cada vez más nítida”. El autor observa, pues, una fatiga parlamentaria, que puede fácilmente relacionarse con el auge de los fascismos en Europa. Aun así, Kelsen no ignora que ese cuestionamiento del principio parlamentario se daba también en el siglo XIX, pero juzga imposible que se desarrollara en el seno de la monarquía constitucional, puesto que el

movimiento democrático avanzaba de forma clara y éste tenía su principal apoyo en el parlamento. Ahora bien, para Kelsen (2006: 91), “la cosa cambia por completo cuando el parlamentarismo es cuestionado en un contexto de dominio absoluto e ilimitado del propio principio parlamentario. En la república democrático-parlamentaria el problema del parlamentarismo es una cuestión vital. La existencia de la democracia moderna depende de que el Parlamento sea un instrumento útil para resolver las cuestiones sociales de nuestro tiempo”. Aunque Kelsen matiza que democracia y parlamentarismo no son idénticos, juzga también que es imposible poner en duda que el parlamentarismo es la única forma real en que puede llevarse a cabo la idea de la democracia porque la democracia directa es impracticable en el Estado moderno. Para Kelsen (2006: 92), “el parlamentarismo es la formación de la voluntad normativa del Estado en un órgano colegiado que decide por mayoría y que es elegido por el pueblo por sufragio universal e igual, es decir, democráticamente”.

En las cuestiones sobre parlamentarismo y democracia se detiene también Carl Schmitt (1888 - 1985), cuando dice que la unión entre parlamentarismo y democracia es un grave equívoco teórico, ya que el parlamentarismo liberal y la democracia han abrazado una alianza ocasional para vencer al enemigo absolutista, pero que son incompatibles. En el contexto de la Alemania de los años 20, se acaba la decimonónica sociedad de los individuos y se está desvirtuando la rígida diferenciación funcional entre Estado y sociedad. Las coaliciones de intereses y los partidos políticos contrapuestos dominan la esfera pública y el parlamento ya no es una tribuna libre de confrontación de los representantes, es un lugar donde se enfrentan las facciones opuestas (Costa, 2004: 51, 52). El Estado será cada vez más un Estado de partidos.

Kelsen no habla propiamente de representación porque la considera una “ficción” (Kelsen, 2006: 97). Para Kelsen, “es ilusoria la expectativa central de la tradición democrática: la convicción de que el desnivel entre representados y representantes pueda ser salvado a través de una progresiva ampliación de la base electoral. Es una ficción sostener que en una democracia plena los sujetos son perfectamente autónomos, creadores de las normas a las que se someten” (Costa, 2004: 44). La ficción de la representación es la idea de que el Parlamento solo es el representante del pueblo y de que el pueblo únicamente puede expresarse en el parlamento. Además, el parlamento moderno se separa de las antiguas asambleas estamentales en tanto que el parlamento es jurídicamente independiente del pueblo en el ejercicio de su función. “La ficción de la representación tiene que legitimar al parlamentarismo desde el punto de vista de la soberanía popular. Pero esta ficción manifiesta, ideada para encubrir el perjuicio real y esencial que padece el principio de libertad por obra del parlamentarismo, ha puesto en manos de sus adversarios el argumento de que la democracia se erige sobre una falsedad evidente”

(Kelsen, 2006: 97). Para el autor, la ficción de la representación no ha cumplido con su verdadero cometido, justificar al parlamento desde el punto de vista de la soberanía popular, pero sí ha mantenido en término medio el movimiento político de los siglos XIX y XX, que, según el autor, se encontraba sometido a la violenta presión de la idea democrática. Ello lo ha conseguido “haciendo creer que la gran masa del pueblo se autodeterminaba políticamente en el parlamento electo” (Kelsen, 2006: 97, 98).

Del mismo modo, Kelsen recurre a un argumento que ya se encontraba en Sieyès, el de la división del trabajo al hablar del parlamentarismo. Según Kelsen (2006: 95), “el parlamentarismo representa un compromiso entre la pretensión democrática de libertad y el principio, necesario para todo progreso técnico-social, de la división diferenciadora del trabajo”. Es decir, el autor aclara que no podía aceptarse la forma primitiva de democracia directa porque se perderían las ventajas de la división del trabajo. En sus propias palabras, “cuanto mayor es la comunidad estatal, menor es la capacidad del ‘pueblo’ como tal para llevar a cabo directamente por sí mismo la verdadera actividad de creación de la voluntad del Estado y tanto más viene obligado, por razones técnico-sociales, a limitarse a crear y controlar al aparato que propiamente crea la voluntad del Estado” (Kelsen, 2006: 95,96). De ahí se infiere también la importancia de la tarea de los representados en cuanto a participación en el sufragio y control del representante. Como explica Costa (2004: 45), para Kelsen “la representación solo puede recomendarse como una técnica de mando, de compromiso y de coexistencia”.

Asimismo, pese al contexto histórico de la Europa de entreguerras, Kelsen (2006: 107) explica que el intento de excluir completamente al parlamento del organismo del Estado moderno no podría tener éxito a la larga, sino que solo cabe discutir sobre el modo y la manera en que el parlamento debe ser convocado e integrado y sobre el tipo y dimensión de sus competencias. Por lo tanto, aboga por su reforma, fortaleciendo el elemento democrático.

Kelsen (2006: 117) indica también un potencial problema relacionado con la representación política. Se trata de la irresponsabilidad del diputado frente a sus electores, que el autor señala como una fuente de descontento que existía entonces contra la institución del parlamento. A este respecto, el autor habla del privilegio anacrónico de la inmunidad o el derecho de revocación, algo que ligaba también a la construcción de partidos políticos sólidos.

Después de la segunda posguerra, el panorama político de la mayoría de Europa occidental estaba conformado por partidos políticos fuertes que operaban en democracias liberales consolidadas, excepto en algunos casos donde sobrevivían dictaduras.

Así, el concepto de representación política, desde la Revolución Francesa a la Segunda Guerra Mundial, se ha ido conformando con aportaciones del pensamiento liberal y burgués, de forma que el actual concepto de representación política y los potenciales problemas relacionados con ella son deudores en buena medida de las circunstancias históricas de los últimos siglos y de los lineamientos ideológicos que conformaron su etapa inicial. Sin embargo, no es menos cierto que la representación política y los dilemas que con ella se relacionan se ven también sometidos a transformaciones causadas por las cambiantes sociedades del siglo XX y XXI.

3.1.3. La representación política desde la segunda posguerra hasta hoy

La complejidad del cambio de siglo, del XX al XXI, se plasma en la representación política en tanto que en las democracias occidentales existen una serie de fenómenos que afectan a la relación de confianza entre ciudadanos y gobernantes, expresada en el sistema de representación política (Nadales, 1996). La representación política, asentada después de su surgimiento en el Estado nación, se ve afectada por las transformaciones que acontecen en la esfera política y social. Según Nadales (1996), los debates sobre la representación política han sido recurrentes, por ejemplo, han existido distintas oleadas en los siglos XIX y XX, que se han traducido en una mayor presencia de la sociedad civil sobre el circuito político, de manera que se han acentuado los nexos instrumentales o comunicativos entre las esferas de la sociedad y el Estado. Del mismo modo, con la superación del sufragio censitario, heredero de la construcción liberal burguesa originaria, y la expansión del sufragio universal, que se considera como la realización de la democracia representativa, Nadales (1996) sitúa la última oleada del debate sobre la representación política, en el periodo de entreguerras. Para el autor, los partidos no son los causantes de la destrucción del orden liberal, sino su consecuencia; además, con la generalización del voto se da también una fase expansiva de los sistemas proporcionales, con lo que los partidos pasan a tener un papel activo en el proceso de representación. El paradigma resultante es el Estado de Partidos, y la relación representativa entre sociedad civil y Estado no se entiende como problemática después de la segunda posguerra (Nadales, 1996).

Sin embargo, a partir de la década de los 80, empieza a cuestionarse el periodo de estabilidad y comienza un discurso difuso que Nadales (1996) califica como de “malestar civil”. Para Franzé (1994), el malestar civil se centra en los dirigentes políticos y se expresa en el “rechazo de la financiación pública de los partidos y en el recurso al independiente como sustituto del político profesional, parece recrearse en una máxima: quien haga política debe vivir para la política y no de la política”.

En ese momento, se incrementan las críticas contra el sistema representativo imperante, con fenómenos como el apoliticismo difuso, el apogeo de la sociedad civil, el regeneracionismo mecanicista utópico, la marginación de minorías o las demandas de mayor control sobre la política. En los años 80 del siglo XX sitúa Nades (1996) el inicio de una nueva oleada del debate sobre la representación política, en el que se plasmarían todo un conjunto de concreciones singulares del fenómeno de la crisis de legitimación del Estado intervencionista (Habermas, 1972) o una serie de promesas incumplidas (Bobbio, 1985). Todo ello resulta relevante en tanto que incide en la relación de confianza entre los ciudadanos y el poder político, y afecta también a los partidos políticos, que sufren procesos de oligarquización y de falta de transparencia.

Por tanto, el contexto en el que estaría sucediendo el debate actual sobre la representación política tiene que ver con la crisis histórica del Estado social intervencionista y de la transformación de lo que había sido el Estado de Partidos; así como con el cambio del orden político mundial, con retos en el plano de la dimensión territorial del Estado-nación, por ejemplo con los procesos de integración supraestatal; y, con el mecanismo de agregación de intereses que conduce a la formulación del interés general por parte del Estado.

Para Martínez (2004), durante las últimas dos décadas se ha debatido profusamente acerca de las transformaciones de la democracia representativa. Según Martínez (2004), son mayoría los autores que han realizado un diagnóstico de crisis o, al menos, de replanteamiento de los principios en los que se asienta. En este contexto, “los partidos continuaron acumulando recursos, pero se distanciaron cada vez más de los electores. La existencia de medios de comunicación de masas, que les permitía emitir mensajes directamente al electorado, y de mecanismos de financiación pública, que hacía que los afiliados fueran menos necesarios como fuente de ingresos, son algunos de los factores que se han aducido para explicar el progresivo distanciamiento entre electores y partidos”, aclara Martínez (2004). Aun así, Nades (1996: 15) aclara que, en todo caso, crisis de representación no equivale a crisis del Estado, y que se trata de un proceso de readaptación histórica.

Así pues, en el contexto actual, la representación política puede entenderse desde tres ángulos, que a su vez pueden relacionarse con las nociones de *responsiveness*, *responsibility* y *accountability*, de las cuales pueden derivarse potenciales problemas relacionados con la representación política.

Siguiendo a Nades (1996), la representación puede entenderse, en primer lugar, como circuito de respuesta a las demandas sociales. El principal dilema en este ámbito es si el sistema representativo actual puede responder a nuevas demandas sociales o si lo que se necesitan son

mejoras para demandas ya existentes, todo ello ligado a la transformación de las democracias contemporáneas y a que las demandas son cada vez más complejas y están sometidas a nuevos procesos y dinámicas. La noción de *responsiveness*, pues, se vuelve aquí crucial, ya que tiene que ver con la capacidad de respuesta del circuito de representación a las demandas sociales, bien sean nuevas o ya existentes. Es en este punto donde Nadas (1996) señala que se trata de una exigencia nacida de la expansión del Estado de bienestar, que conduce, mediante una proyección creciente de demandas o necesidades sociales sobre la esfera pública, a un fenómeno de sobrecarga del Estado social intervencionista. Ello genera problemáticas en las relaciones de la esfera político-representativa con la sociedad civil, también en las relaciones con la administración intervencionista propia del *Welfare state* y con la opinión pública. En este ámbito de la capacidad de respuesta, también los partidos pueden presentar problemas, sobre todo en lo relacionado con su capacidad de determinar, entender y articular, a través de los programas electorales, unas respuestas adecuadas a las demandas emanadas de las sociedades complejas. Del mismo modo, también la burocratización o la corrupción del proceso de representación puede afectarles, en relación al circuito electoral; y, como señala Nadas (1996), la marquetización de la política, que conllevaría una pérdida de contenidos instrumentales de la representación política, un fenómeno que tiene que ver con la opinión pública y los medios de comunicación, que puede llevar a la personalización del nexo representativo con una derivación plebiscitaria.

En segundo lugar, la representación se relaciona con el problema del control sobre la política. Para Nadas (1996: 22), la problemática se centra en este punto sobre las listas electorales cerradas. Según el autor, la atenuación del principio de responsabilidad política característica del modelo representativo del Estado de Partidos, en que en última instancia el responsable era el partido, no se adapta a las exigencias de control ciudadano actual, en un proceso interactivo de respuestas instantáneas en que se requieren sistemas de control más concretos e inmediatos por parte de la ciudadanía. Por tanto, en este punto se observan dos cuestiones importantes: el principio de responsabilidad de los representantes (*responsibility*) y las crecientes exigencias de un mayor control, o un control más concreto e inmediato, de las actuaciones de los representantes, que se relaciona con la noción de *accountability*.

En tercer lugar, la representación política se entiende también como circuito de determinación del interés general mediante la agregación de intereses. En esta parte, Nadas (1996) se pregunta si es la propia noción de representación la que sufre un proceso de transformación, debido a distintos factores, entre los que destacan los fenómenos de integración y de regionalización, la revolución tecnológica, la mundialización de la economía, la

cosmopolitización y el localismo. Todo ello influye en la representación política porque transfigura el marco espacial en que tiene lugar la determinación de los intereses generales. Por tanto, en este punto, el debate sobre la representación política se enfrenta a los dilemas del propio contenido de la noción de interés general (que debe ser determinado por el Estado) en las sociedades complejas y la voluntad del Estado, en que entra en juego la dualidad de asumir desde arriba una proyección abstracta de intereses no definidos con antelación o una concepción agregativa o instrumentalista de la representación en que los intereses sociales son predefinidos con antelación (Nadales, 1996: 26).

3.2. La representación política y los modelos de democracia

La democracia ha acabado triunfando en los países occidentales y se ha convertido en la única forma legítima de gobierno. Además, la democracia que se ha impuesto es la que se organiza a partir de gobiernos representativos, con lo cual la representación sigue ocupando un lugar central en el actual modelo de democracia. En los sistemas representativos vigentes, el poder legislativo se concentra en una asamblea en que se reúnen los representantes, que, a su vez, han sido elegidos mediante elecciones libres y por sufragio universal. Como se ha visto anteriormente, las cuestiones sobre qué representar o quién debe ser el representante, así como la naturaleza misma de lo que significa representar, han ido cambiando a lo largo de la historia, igual que han evolucionado las exigencias de la ciudadanía hacia la representación política.

En el siglo XX y el siglo XXI, los debates sobre la representación política siguen vigentes. Tal y como explica García (2004), en el pensamiento político ha sido una constante destacar las diferencias entre la democracia parlamentaria y la democracia de partidos, que encarnan formas de organizar la representación política muy diversas, y ahora además se señalan nuevas tendencias, como la calificada por Manin (1997) como democracia de audiencia. Del mismo modo, también se habla de democracia de monitoreo (Hurwitz, 2003) y de democracia deliberativa.

Mientras que la democracia parlamentaria había dominado el siglo XIX, en el siglo XX y bajo el influjo de la Constitución de Weimar surge el concepto de Estado de Partidos (García, 1996). En ese momento, existen dos tendencias sobre la formulación del Estado de Partidos, que agrupan a distintos autores. Por un lado, se encuentran R. Thoma, Hans Kelsen y Gustav Radbruch; y, por otro, Otto Koellreutter, Carl Schmitt y Heinrich Triepel. Tal y como recoge García (1996: 30 y ss.), los primeros mantienen una actitud positiva hacia el Estado de Partidos y postulan el

reconocimiento de los partidos políticos por las normas jurídico-constitucionales; los segundos, en cambio, aunque reconocen la realidad del Estado de Partidos, mantienen una visión crítica o niegan la posibilidad de su reconocimiento jurídico. Para Thoma, la democracia no podía vivir sin partidos, ya que éstos eran considerados como los únicos que podían evitar que la moderna democracia de masas dejara de estar movida por los vaivenes emocionales. Por su parte, Kelsen creía que el Estado democrático era inevitablemente un Estado de Partidos y Radbruch introducía la idea de la democracia ideológica contrapuesta a la democracia sociológica o real. En esta última, el pueblo soberano no se compone de individuos libres e iguales sino de grupos (partidos) de distinta magnitud, la soberanía es de los fuertes sobre los débiles, bien que aminorada por la retroacción de los partidos débiles sobre los fuertes. En la parte contraria, Koellreutter afirma que la representación popular se expresa oficialmente como una representación de partidos y que la efectividad del Gobierno depende de ellos. Ahora bien, recalca que en los partidos la dominación de la dirección sobre la base es casi ilimitada, lo que resultará en la dictadura sobre el Estado del jefe del partido. A su vez, Schmitt, que trata el tema entre 1930 y 1939, reconoce que todo Estado es un Estado de Partidos y fija su atención en la Alemania de esos años al distinguir entre un Estado parlamentario de partidos cuando estos están sólidamente organizados y cuando no lo están. Para Schmitt, la fuerte estructura de los partidos impide el funcionamiento de la solidaridad parlamentaria que regía en otro tiempo, cuando los parlamentarios podían trascender sus propios intereses egoístas. Sin embargo, Schmitt cree que el Parlamento se ha convertido en un mercado de distribución de intereses y que la lealtad hacia el Estado y la Constitución se ha transformado en la lealtad hacia los partidos y las organizaciones de intereses, lo que pone en riesgo la unidad estatal. Por su parte, Triepel considera que los partidos dominan el electorado, sustituyen la voluntad del representante por la de la fracción y vacían de contenido las instituciones parlamentarias, y afirma que el sistema de partidos políticos es la autoorganización que se ha dado la democracia de masas.

De la misma temática y sin adscribirse a ninguna de las dos tendencias, habla Leibholz (1929) cuando desarrolla el tema de la representación política en 1929 y después de la Segunda Guerra Mundial. El autor entiende que el Estado de Partidos es una realidad surgida del despliegue de la representación proporcional. Para él, la libertad de los diputados se ha transformado en dependencia de sus partidos, las decisiones parlamentarias carecen de creatividad, no son resultado de la dialéctica parlamentaria y, por tanto, pierde sentido la discusión y no surge de ella la presencia política del pueblo en su totalidad, sino la de los intereses de determinados grupos; además, los votos de los electores pertenecen a los partidos sin que tengan la posibilidad de influir en la selección de los candidatos (García, 1996: 44 y 45). Según

Leibholz, todo ello entra en contradicción con la teoría de la representación que él defendía, y cuyos términos principales eran la dualidad y no identidad del representante y del representado, la independencia y la superior dignidad del primero con respecto al segundo, la imputación al representado de la voluntad del representante, la relación inmediata entre ambas y la significación integradora de la representación que transforma la pluralidad popular en unidad política, tal y como recoge García (1996: 45). La conclusión de todo ello, según Leibholz, es que la democracia parlamentaria se ha transformado con el Estado de Partidos, en tanto que el diputado ya no representa a la totalidad nacional, sino que se asiste a una democracia en que la voluntad de los partidos mayoritarios se identifica con la voluntad general, dando paso a una suerte de democracia plebiscitaria, en que no importa tanto si la ciudadanía toma sus decisiones a través de un plebiscito o a través de los partidos que han obtenido la mayoría popular.

Cuando la democracia se vuelve masiva, debido a la ampliación del sufragio y después de la Segunda Guerra Mundial, el partido también se transforma y se tiende a considerar como el único vehículo capaz de organizar a la masa para ejercer la representación política. A lo largo del siglo XX se consolidan los grandes partidos conservadores y socialdemócratas en las democracias avanzadas. Se habla entonces de democracia de partidos. Este modelo se basa en los partidos de masas y también en lo que Kirchheimer (1966) caracteriza como partidos *catch-all*. Tal y como recogen Katz y Mair (1995), en el modelo arquetípico de partido masas, las unidades fundamentales de la vida política son grupos sociales bien definidos, a cuya pertenencia están ligados todos los aspectos de la vida del individuo. Así, la política va, ante todo, sobre la competencia, el conflicto y la cooperación de estos grupos, y los partidos políticos son las agencias a través de las cuales los grupos, y así sus miembros, participan en política, articulan demandas ante el Estado y, en última instancia, intentan capturar el control del Estado colocando a sus propios representantes en oficinas clave. Además, cada uno de estos grupos tiene un interés que se articula en el programa de su partido y es de esa forma como se organiza, principalmente, la representación política. En el modelo de partido de masas, “la elección electoral individual se ve limitada por la encapsulación de la masa del electorado en uno de los grupos subculturales representados por los partidos, de modo que la política electoral se refiere menos a las tasas diferenciales de conversión que a las tasas diferenciales de movilización” (Katz y Mair, 1995). Según este modelo, los partidos de masas conectan a los ciudadanos con el Estado, son, entonces, el principal vehículo para ejercer la representación política.

Sin embargo, esta visión del modelo de partido de masas como entidad representativa de sectores sociales predefinidos es cuestionada por Kirchheimer (1966) y su conceptualización del partido *catch-all* o atrapalotodo. Para Kirchheimer (1966), la emergencia de partidos *catch-all*

responde a tres factores clave: la erosión de las fronteras sociales que se produce entre 1950 y 1960, que implica un debilitamiento de las anteriores identidades colectivas, de manera que se hace más difícil identificar sectores separados en el electorado y asumir, así, intereses comunes compartidos; el crecimiento económico y la creciente importancia del Estado de bienestar, que facilitó la tarea de elaborar programas electorales que ya no eran partidistas, sino que servían a los intereses de todos; y, el desarrollo de los medios de comunicación, gracias a los cuales los líderes políticos pudieron dirigirse a su electorado en gran escala, un electorado que, al mismo tiempo, aprendía a comportarse más como consumidor que como participante activo en la política. Todo ello derivó en la formulación de un nuevo modelo de partido, que se ligaba a una nueva concepción de la democracia. Como recuerdan Katz y Mair (1995), el nuevo modelo resultante de los cambios mencionados se llamó, aunque no de forma sistemática, americanización de la política europea. La transformación consistía en que las elecciones se entendían ahora como un sistema de escoger entre líderes y no entre programas o políticas públicas, mientras que la prerrogativa de elaborar esos programas y políticas recaía en el liderazgo del partido y no en la pertenencia al mismo. De este modo, la movilización ya no era lo importante para ganar elecciones, como tampoco lo era la conversión de los votantes o la lealtad de los mismos, sino que se empezó a creer que los electores fluctuaban y no estaban comprometidos, de manera que podían estar disponibles para cualquier partido. Los partidos, por tanto, ya no se concebían como una pieza central del tablero, sino como algo contingente.

Las democracias actuales mantienen el hecho de que unos pocos son los que representan a los muchos, por más que los primeros son ahora elegidos de forma libre. Las elecciones por sufragio universal igualan a los representados, pero a la vez, también se excluye a la mayoría de ser elegidos; por tanto, se mantiene una tensión potencial en el sistema representativo que ya se daba en sus orígenes. El advenimiento de los partidos de masas, que se vio como un modo de alcanzar una verdadera identificación entre representantes y representados, sobre todo en lo referente a los trabajadores y la posibilidad de llegar ejercer el poder político, es ahora criticado por algunas corrientes en la representación política actual. Tal y como explica García (2004), “se extiende la impresión de que esta intermediación partidista aleja a los ciudadanos de sus representantes y entorpece esa identificación”. Esta crítica se inscribe en un discurso más amplio en el que se dice que los partidos han modificado sus funciones y comportamiento y han generado un creciente cinismo democrático en la ciudadanía (García, 2004). Para Paramio (1999), el cinismo político consiste en que los políticos no se ocupan de los problemas de la gente común, sino de sus propios intereses y ello “representa un rasgo fundamental de la

desafección política". La desafección es, a su vez, uno de los principales problemas a los que debe hacer frente la representación política en la actualidad.

Katz y Mair (1995), por su parte, elaboran el modelo del partido cártel. Para los autores, después del partido élite del siglo XIX, aparece el partido de masas que abarca hasta los años 1960; al mismo tiempo, desde 1945, también emerge el partido *catch-all*; y, después, según los autores, desde 1970, aparece el partido cártel. El último modelo se basa en un partido que concibe a los políticos como profesionales, la distinción entre miembros y no miembros de la organización se desdibuja y se pone el énfasis en los miembros como individuos más que como un cuerpo organizado. Además, el partido gana acceso privilegiado a los canales de comunicación del Estado y se convierte en parte del Estado.

A este respecto, Herbert Kitschelt rechaza algunos aspectos de la teoría sobre el partido cártel elaborada a mitad de los años 90 por Richard S. Katz y Peter Mair y revisada por los autores en 2009, en que señalan que los partidos políticos funcionan cada vez más como cárteles, empleando los recursos del Estado para limitar la competencia política y asegurar su propio éxito electoral. Por el contrario, Kitschelt (2000) sostiene, en primer lugar, que "los líderes del partido no están divorciados de sus miembros y votantes, sino que se vuelven cada vez más sensibles a sus preferencias. En segundo lugar, la cooperación entre los partidos genera un dilema de prisionero en la arena competitiva que en última instancia impide la fusión de cárteles. La convergencia ideológica de partidos rivales tiene causas externas al ámbito competitivo, no internas al mismo. Tercero, los partidos convencionales no pueden marginar o cooptar nuevos desafíos, sino adaptarse a sus demandas y apelaciones electorales. La era de los partidos cártel, si alguna vez existió, no está en su principio, sino en su final", concluye.

La manera de entender a los partidos políticos, bien sea criticándolos o defendiendo su papel, influye en la manera de entender la representación política hoy. En palabras de Paramio (1999), "nos enfrentamos más bien a una problemática fase de adaptación, en la que lo que está en juego no es la continuidad o el papel de los partidos, sino su relación con los electores y con las formas no convencionales de participación política". Si se acepta que los partidos políticos siguen siendo "actores colectivos clave para la agregación de intereses y encargados de las funciones del gobierno, pues ni los grupos de interés ni los movimientos sociales pueden desempeñar dicha función" (García, 2004), el debate debe proseguir por otros derroteros. Internamente, los partidos han puesto el foco en la elección de los candidatos, intentando captar la exigencia ciudadana de que se establezcan funcionamientos más democráticos, la paridad o la relación que debe existir entre el representante y el representado. Del mismo modo, los

partidos “se enfrentan a la difícil tarea de compatibilizar la resolución de los problemas generales con la satisfacción de demandas particulares sobre las que es difícil el consenso” (Paramio, 1999).

En las últimas décadas en las democracias avanzadas postindustriales, según García (2001, 2004), se ha exacerbado la preocupación por el reconocimiento de las diferencias identitarias, ocupando el lugar de lo que sería la crítica a las desigualdades y formas de exclusión del proyecto igualitario y universalista del liberalismo. Así, la influencia en la representación política se percibe en tanto que se dan nuevas reivindicaciones, centradas en que las nuevas identidades relevantes socialmente estén presentes en las instituciones, es lo que se ha dado en llamar política del reconocimiento. Tal y como argumenta Philips (1995), la diversidad ya no se define como diferencia de opiniones, sino como diferencia de identidades. Por lo tanto, lo que debe perseguirse no es que el sistema representativo sea más sensible a las demandas de estos grupos, sino que se debería conseguir la presencia de los mismos en las instituciones. Ello influye en el debate sobre quién debe ser elegido como representante y a la vez se conecta con la relación sustantiva de la representación política.

Pitkin (1985) recuerda a la hora de referirse a la actividad representativa que desde el punto de vista sustantivo la representación puede organizarse de muchas maneras dentro de un intervalo que tiene en sus extremos el mandato imperativo y la autonomía absoluta del representante, límites que niegan la representación. Sin embargo, aun reconociendo la pluralidad que dota de utilidad al concepto, García (2004) aclara que “la representación moderna simboliza el autogobierno ciudadano, lo que significa que los representantes son el medio a través del cual los ciudadanos ejercen el poder, pero a la vez son los responsables de la gestión de gobierno, lo que puede colocarles en una situación clara de conflicto de intereses”. En democracia, el representante se debe a quién apuesta por su candidatura, a los votantes de su circunscripción, a los de su partido, a sus simpatizantes y también a los ciudadanos como un todo, lo que representaría el interés general, y por tanto, tal y como explica García (2004), debe dar satisfacción a todos a la vez, aunque favorecer a unos pueda perjudicar a otros y se deba velar por el interés general. Por lo tanto, se observa aquí un potencial problema de la representación política en tanto que el representante pueda llegar a ser incapaz de satisfacer las expectativas del electorado o incluso de comprenderlas y determinar el interés general. Los intereses que debe tener en cuenta el representante, además, se verán influidos por el sistema político y social, de modo que siempre existirá cierta ambigüedad al respecto de qué intereses debe primar el representante.

Siguiendo el planteamiento de García (2004), la forma en que el representante desarrolla su tarea también debe ser tomada en cuenta a la hora de hablar de representación política en la actualidad. Partiendo de la base de que el representante debe tener autonomía, es importante saber cómo toma sus decisiones, ya que ello se relaciona directamente con los mecanismos de control y vigilancia que los representados tienen a su disposición, así como con los mecanismos de participación democrática de que dispone la ciudadanía.

Con el cambio de siglo y de milenio, aparecen conceptualizaciones nuevas, como las de democracia de audiencia y democracia de monitoreo, ligadas a la extensión de la sociedad del conocimiento, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y a las transformaciones posmodernas de la sociedad. Antes, en el siglo XX, se venía ya hablando de la democracia deliberativa.

En 1997, el teórico Bernard Manin acuñó el término democracia de audiencias para referirse a cómo el sistema democrático se interrelaciona con las audiencias televisivas, tal y como en el siglo XIX dominaba el panorama político el parlamentarismo y en el XX el partido de masas, el XXI estaría marcado por la democracia de audiencias. Para Manin (1997: 223 y ss.), en las sociedades occidentales de finales del siglo XX, ya no hay un *cleavage* socioeconómico o cultural más importante y estable que otro, de modo que los ciudadanos ya no son una masa homogénea que pueda ser dividida de ninguna manera por las opciones que le son ofrecidas. El electorado puede abarcar múltiples divisiones, así que los políticos tienen que decidir cuál de esas potenciales divisiones es más efectiva y ventajosa para ellos, cuál deben explotar o activar. En tal situación, la iniciativa de los términos de la opción electoral recae en el político y no en el electorado, de manera que las decisiones de voto son reactivas. En este sentido, Manin afirma que el electorado aparece como la audiencia que responde a lo que se le ha presentado en el escenario político. Esta forma de gobierno representativo es lo que Manin denomina como democracia de audiencia. Ello se relaciona con la representación política en tanto que quiebra el principio básico de actuar en interés de otro, puesto que en este caso los representantes no estarían representando en favor de la ciudadanía sino a favor de sus propios intereses y concentrados en el momento de la elección. Del mismo modo, la función de agregador de intereses que se presupone al representante para actuar por el bien común queda difuminada en un único acto de entrega de confianza política, que a pesar de que se garantiza y asegura por un sistema electoral reglado y acordado bajo un sistema constitucional, solo se repite cada cierto tiempo, en el momento de las elecciones.

De todo ello se desprende, pues, que la representación política sigue siendo un concepto relevante en el siglo XXI, sobre todo en lo que se refiere a su calidad y a los posibles problemas asociados a ella en las actuales sociedades cambiantes.

La democracia de monitoreo es un modelo propuesto por Roger Hurwitz (2003) que, al hilo de la expansión de internet, pone de manifiesto el ciberespacio como escenario de lo político. El autor concibe el ciberespacio como un lugar donde se enfrentan lo público y lo privado, y también un espacio donde se reúnen las libertades civiles, la sociedad civil y el poder estatal. Según el modelo, los ciudadanos usarían el ciberespacio para superar colectivamente una situación conflictiva. Por su parte, los partidos políticos también usarían la web para construir comunidades nacionales de interés para involucrar a la ciudadanía en la acción política. Hurwitz (2003: 102), sin embargo, aclara que la participación que se obtiene no es democrática ni segura de acuerdo con el perfil de los usuarios y que está sesgada por el nivel educativo y de recursos de los participantes.

Según el modelo de democracia de monitoreo, la política llega a la vida de los ciudadanos cuando existe una gran insatisfacción con el statu quo y entonces se crean movimientos expresamente contra los representantes electos. Henry Jenkins (2006), está en la línea de la democracia de monitoreo e introduce la figura del ciudadano vigilante. Para el autor, el cambio del papel del público en el proceso político con la llegada de las nuevas tecnologías y de la convergencia mediática, significa el tránsito entre la concepción individualizada del ciudadano informado hacia el concepto cooperativo del ciudadano vigilante (Jenkins, 2006: 211). Sin embargo, el modelo de democracia de monitoreo también cuenta con voces críticas. Por un lado, Jürgen Habermas (2008: 18), considera que dentro de su rol como consumidor, adaptado a las circunstancias impuestas por el sistema mercantil, el ciudadano adquiere la condición perturbadora de la ignorancia pública que ataca al ciudadano medio y que lo mantiene desinformado y, lo más grave, desinteresado de los asuntos de trascendencia pública. Todo ello afecta a la representación política en tanto que los formatos producidos por las nuevas tecnologías alimentan un tipo de relación mediada que contribuye a la alineación difusa de los ciudadanos en relación con la política. Por otro lado, Andrew Chadwick (2006: 91), afirma que existen pocas oportunidades en el mundo online para aumentar los niveles de compromiso civil.

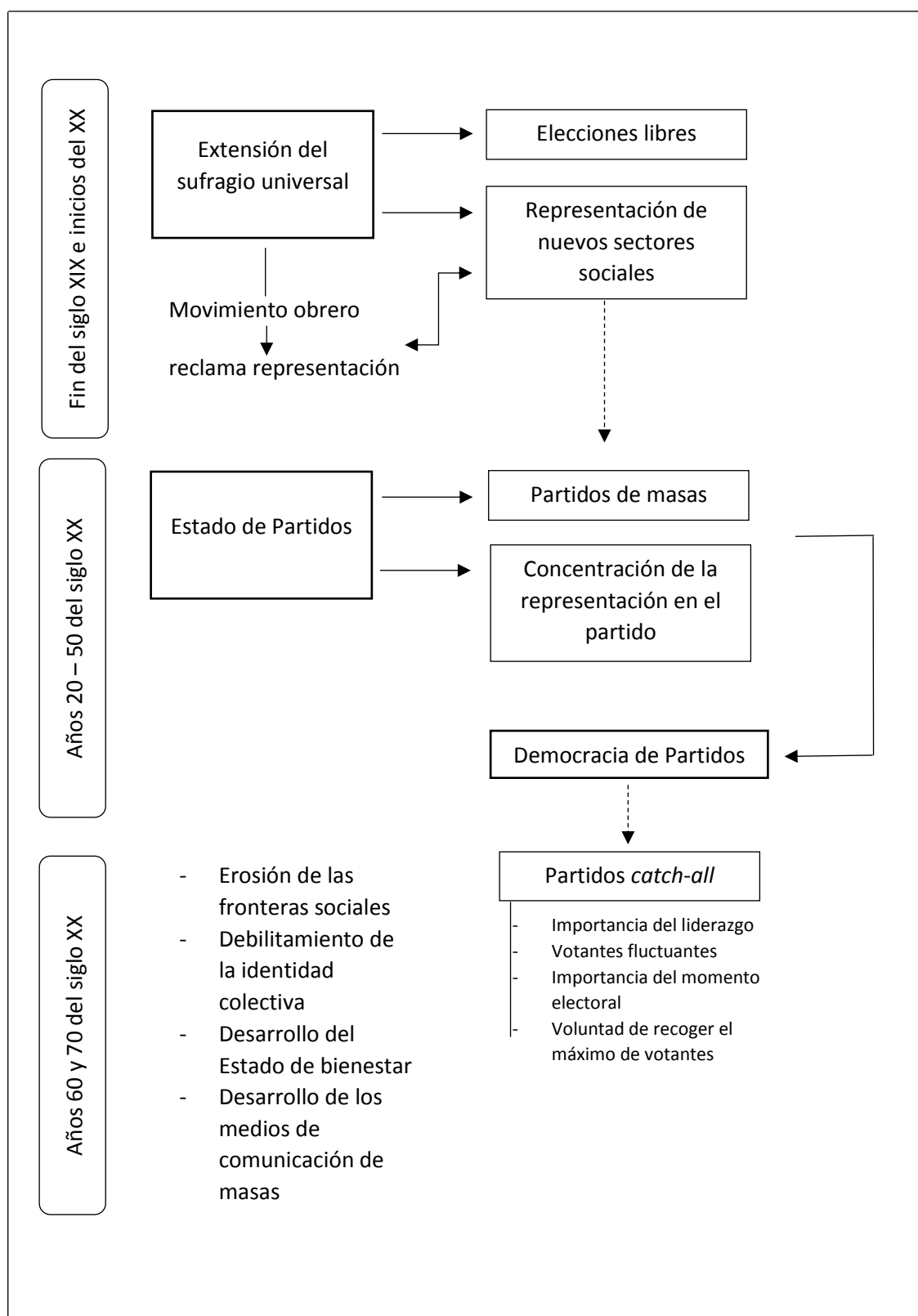
El modelo de democracia deliberativa, sin embargo, es el más extendido y el que quizás ofrece mayores posibilidades a la hora de hablar de representación. El rasgo principal de este modelo, que se deriva de los modelos consensual de John Rawls y del modelo de democracia discursiva habermasiano (Mejía, 2013), es la deliberación. Tal y como recoge Giraldo (2017), la deliberación

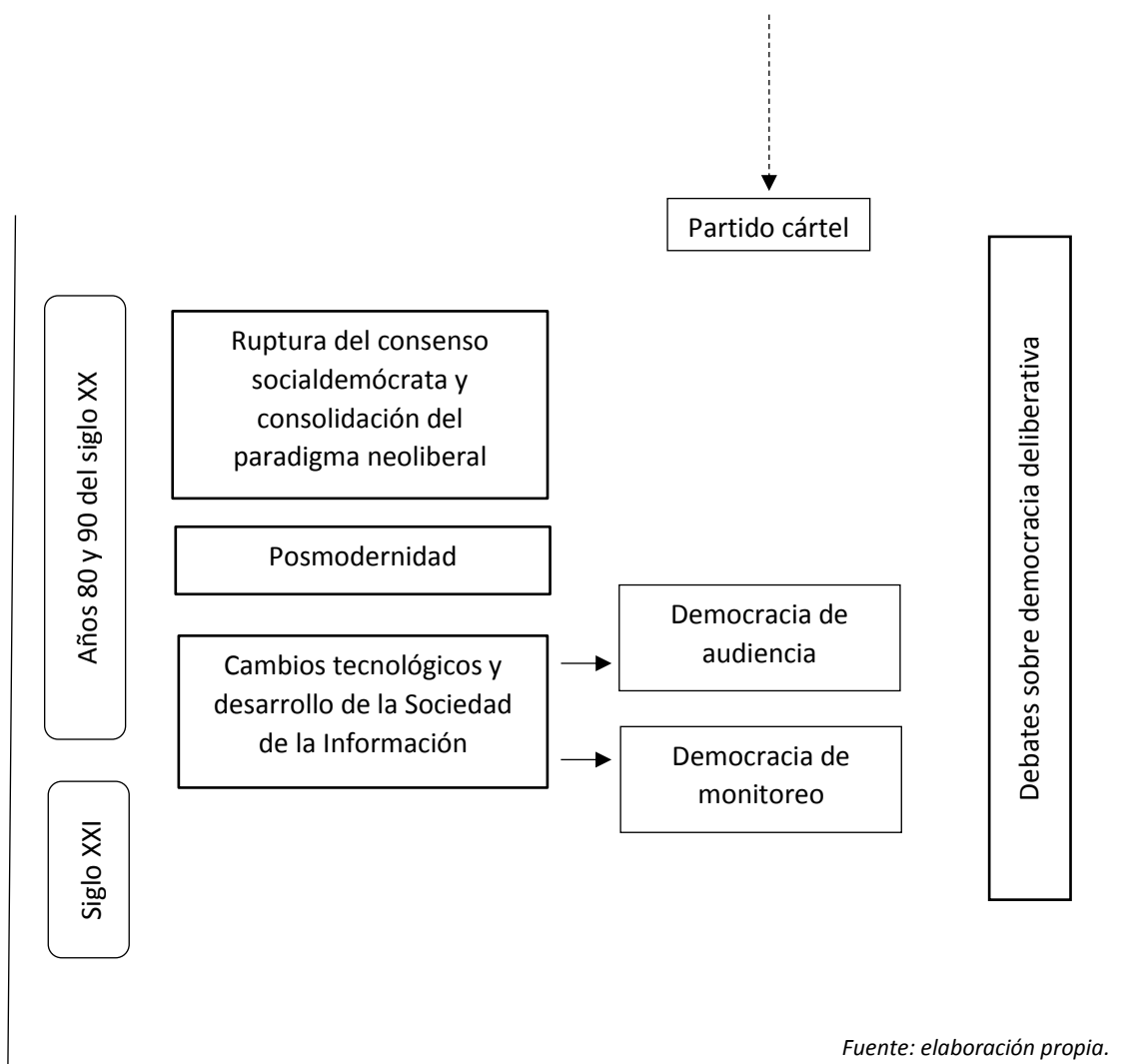
como concepto estructural de las teorías del gobierno (Öberg, 2016: 189), ha sido asumida como el involucramiento de diferentes actores —públicos y privados— en la realización de un objetivo común a través de la acción colectiva (Fung y Wright, 2001; Hendriks, 2009), o como un factor que, dentro de la democracia deliberativa, promueve la participación altamente cualificada de la ciudadanía (Chambers, 2004). Burkhalter, Gastil y Kelshaw (2002) indican que la deliberación es una forma de comunicación grupal en la que los participantes analizan un asunto de interés, establecen un criterio y evalúan las posibles soluciones dentro de un marco de igualdad y respeto, y utilizando sistemas democráticos de toma de decisión.

El modelo de democracia deliberativa encuentra sus críticos en tres corrientes principales, que tienden a radicalizarlo. Como sintetiza Mejía (2013), una primera variante es la democracia radical, con una versión proveniente de la tradición heterodoxa de la Escuela de Frankfurt, particularmente de la segunda y tercera generación de la Teoría Crítica, y otra en la propuesta de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Una segunda variante es la democracia real o absoluta, en la versión marxista semi-ortodoxa de Antoni Negri y Michael Hardt, heredera del marxismo italiano y el posestructuralismo francés. Y una tercera variante, que se encuentra inscrita en el amplio abanico del republicanismo.

Sin extenderse en las distintas conceptualizaciones, lo interesante para la representación política en cuanto al modelo deliberativo de democracia es que resulta de vital importancia diferenciar entre un proceso de agregación de intereses, que es resultado de la participación directa de cada ciudadano, y la deliberación, que implica una reflexión en común sobre lo que está en juego (García, 2004: 118). Así, desde esta perspectiva cobra especial interés el modo en que se decide cómo actuar sobre los distintos supuestos, la manera en que se delibera, y, por tanto, se relacionan los representantes y los representados, los partidos, los grupos de interés y los medios de comunicación.

Figura 10. Evolución de la problemática





3. 3. El concepto de representación política en la actualidad

La representación política se relaciona en la actualidad con la capacidad de respuesta de los representantes a las demandas sociales, la necesidad de dar explicaciones sobre sus actuaciones y la responsabilidad que tienen éstos ante los ciudadanos. Por lo tanto, resulta clave la manera como el representante y el representado se relacionan de manera amplia, desde el proceso de determinación de intereses hasta la explicación sobre cómo se elaboran las políticas públicas y sus dinámicas de creación, pasando por la responsabilidad en la actuación de los representantes y su panoplia de poderes públicos.

Tal y como anteriormente se ha expuesto, la manera más sencilla de definir la representación política es actuar en interés de los representados. Sin embargo, existen definiciones más complejas, adecuadas para la reflexión teórica que enmarca el concepto de representación en la actualidad.

Para Sartori (1999), la representación política implica la noción de *responsiveness*, es decir, de receptividad de los representantes hacia los representados, ya que los primeros tienen la obligación de escuchar y ceder a las demandas del electorado; de *accountability*, ya que se presupone que los representantes deben responder de sus actos; y, la posibilidad de destituir a los representantes, pues en las democracias postindustriales occidentales existen mecanismos de sanción hacia los representantes. Sartori, además, diferencia los términos representación y representatividad al indicar que existe una definición sociológica, ya que cuando se dice que “alguien o algo es representativo de algo estamos expresando una idea de similitud, de identificación, de características compartidas. La exigencia de que el Parlamento sea un reflejo del país y, en sentido contrario, las quejas por su falta de ‘representatividad’ se basan en este significado del término ‘representación’” (Sartori, 1999: 2). Cabe recordar que, para Sartori, el término representación tiene dos características principales: “una sustitución en la que una persona habla y actúa en nombre de otra [y que lo hace] bajo la condición de hacerlo en interés del representado” (Sartori, 1999: 2).

Aun así, la obra de Pitkin (1985) es la referencia a la hora de abordar las distintas dimensiones del concepto de representación política, ya que la autora considera que para tener un conocimiento cabal del término hay que atender a cinco características, que, en diferentes momentos, se han tomado como dimensiones totales del concepto. De este modo, para Pitkin (1985) conviene prestar atención a la representación como autorización, a la representación como rendición de cuentas, a la representación como reflejo o descripción, a la representación como identificación simbólica y a la representación como relación sustantiva.

En primer lugar, la representación como autorización hace hincapié en que el representante es alguien a quien se le ha autorizado a actuar en nombre de los representados y, por tanto, tiene que asumir las consecuencias de sus actos como si los hubiera realizado él mismo. En segundo lugar, la representación como *accountability* o rendición de cuentas se refiere a la relación entre el representante y el representado, en que el primero debe rendir cuentas por su actuación ante el segundo. En tercer lugar, la representación como descripción se relaciona con que el representante suple al representado a través de una correspondencia de características. En cuarto lugar, la representación como identificación simbólica significa que el representante y el representado están identificados por una relación emocional. En quinto lugar, la representación como una relación sustantiva hace referencia a que el representante actúa en interés del representado receptivamente. De esta descripción se deriva la complejidad del término y la variedad de formas legítimas de representar, de las cuales se pueden derivar potenciales problemas relacionados con la representación política.

Cuando en 2004 Pitkin revisó el concepto de representación política, constató de nuevo que se trata de un término desconcertante no porque carezca de una definición central, sino porque esa definición implica una paradoja: estar presente a la vez que no se está presente. Además, señaló que la representación tiene una relación problemática con la democracia, como ya advirtió Rousseau cuando se inclinó por la democracia directa. Según Pitkin (2004), el gobierno representativo se ha convertido en una nueva forma de oligarquía, con la gente ordinaria excluida de la vida pública, pero esto no es inevitable. En efecto, aclara la autora, la representación hace posible la democracia a gran escala, allí donde está basada en mecanismos de democracia participativa a nivel local. Pitkin (2004), señala, además, los principales obstáculos para que se dé esta posibilidad en el mundo de hoy: el alcance de los problemas públicos y el poder privado; el dinero, o mejor, la riqueza; y, las ideas y su organización en la era de los medios electrónicos. La representación política, pues, se ve afectada por los cambios sociales que moldean las democracias postindustriales occidentales y por ello es un concepto que sigue vivo y evolucionando.

Jane Mansbridge (2003) propone, para clarificar el concepto de representación, tres formas de representación además del modelo tradicional. Al modelo clásico, Mansbridge lo llama promisorio. Se trata de un modelo que se basa en la idea de que, durante las campañas electorales, los representantes hacen promesas que pueden o no mantener después. La representación promisorio se centra así en el deber normativo de cumplir las promesas hechas en la elección autorizadora, utiliza una concepción del poder del votante sobre los representantes que asume una intencionalidad prospectiva, encarna una versión relativamente

sin mediación de la voluntad del constituyente y da lugar a la rendición de cuentas mediante sanción. Sin embargo, para la autora, la manera como se concibe la representación empieza a cambiar cuando se consideran las implicaciones de instituir una sanción futura. Según Mansbridge (2003), los trabajos empíricos de las últimas dos décadas han dado lugar a identificar por lo menos tres formas de representación más. Se trata de la representación anticipatoria, la giroscópica y la sustitutiva.

De esta forma, para la autora, la representación anticipatoria se focaliza en el voto retrospectivo. En este caso, los representantes se centran en lo que creen que los votantes aprobarán en la siguiente elección, no en lo que habían prometido en la anterior. Del mismo modo, el representado mira hacia el comportamiento anterior del representante para decidir el sentido de su voto en la siguiente elección. Tal y como explica Mansbridge (2003), la representación anticipatoria tiene en cuenta el incentivo prudencial de complacer al votante en la siguiente elección, usa la concepción sobre el poder del votante sobre el representante que permite las reacciones anticipadas, reemplaza la transmisión de la voluntad del votante con el deseo del representante de complacerle y cambia el escrutinio normativo del proceso de accountability por la calidad de la deliberación del mandato del representante. Mansbridge (2003) opta por el término de representación giroscópica, aunque aclara que otros autores se han referido a este modelo como representación de reclutamiento (Kingdon, 1981), como selección inicial (Bernstein, 1989) o como reemplazamiento electoral (Stimson et al. 1995), para hablar de una forma de representación que es incompatible con la anticipatoria.

En el modelo giroscópico, aclara Mansbridge (2003), los votantes eligen a los representantes que se puede esperar que actúen de formas que los votantes aprueban sin incentivos externos. De esta forma, los representantes actúan como giroscopios, rotando sobre sus propios ejes, manteniendo una cierta dirección y persiguiendo metas no del todo inmutables. En este sentido, los representantes solo rinden cuentas ante sus propios principios, el votante tiene poder sobre el sistema, pero no sobre el representante y cambia el escrutinio normativo de la rendición de cuentas tradicional por la calidad de la deliberación en la elección autorizante.

El último modelo al que hace referencia Mansbridge (2003) es el de representación sustitutiva. Según la autora, este caso se da cuando el representante y el representado no tienen vinculación electoral, es decir, cuando el representante es de otra circunscripción. Ello recuerda a la representación virtual de Burke, aunque él se centraba en las respuestas objetivamente correctas más que en la voluntad y en el bien común y los intereses objetivos, lo que según Mansbridge (2003) es solo una parte de este modelo. La autora centra este caso en la

representación en los Estados Unidos. De forma sintética, la representación por sustitución debe satisfacer los criterios de representación proporcional de los intereses sobre cuestiones relativamente conflictivas (criterio agregativo) y adecuar la representación de las perspectivas sobre los temas de conflicto y de interés común (criterio deliberativo). Por lo tanto, la representación sustitutiva no se centra en la relación diádica entre representante y constituyente, sino en la composición de todo el sistema de la legislatura, considera que no se ejerce ningún poder sobre el representante o sobre el sistema, excepto cuando el representando hace una contribución (generalmente monetaria) al representante, y cambia el escrutinio normativo desde la rendición de cuentas basada en los constituyentes por las inequidades sistémicas en la representación. Para la autora, todas las anteriores son formas legítimas de representación, pero ninguna cumple con los criterios democráticos de la rendición de cuentas desarrollados por la representación promisoria.

Asimismo, Mansbridge (2003) también distingue distintos momentos de la representación: el momento de la elección, durante el mandato y al concluir el mandato, lo que también influye en el comportamiento exigible a los representantes y al comportamiento de los representados.

Desde una perspectiva deliberativa, Mansbridge (2003) considera que la representación promisoria requiere una buena deliberación para cerciorarse de si el representante ha cumplido o no con las promesas o tenía motivos suficientes para no hacerlo. Del mismo modo, también la representación anticipatoria requiere de una buena deliberación entre los ciudadanos y los representantes en el periodo de comunicación entre elecciones, ya que el representante trata de influir en el próximo voto. Por lo que se refiere a la representación giroscópica, también demanda una buena deliberación entre los ciudadanos y entre éstos y los representantes cuando son elegidos. Por último, en el modelo de la representación sustitutiva no solo es necesaria la representación de los intereses más conflictivos, sino también una buena representación deliberativa de las perspectivas importantes.

De la misma forma, el concepto de deliberación es importante porque al relacionarlo con la representación política se va más allá de la exigencia de que el representante informe al representado sobre sus decisiones, y se pone el foco en que realmente exista un proceso de deliberación entre ellos para adoptar esas decisiones, con canales de comunicación adecuados y sin manipulación, lo que hace necesario reforzar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.

Anteriormente se ha visto que en el concepto de representación moderno la autonomía del representante es crucial, pero, no obstante, siempre han existido mecanismos de control y

exigencias de responsabilidad, por más que sean limitados (García, 2004). En el gobierno representativo, las elecciones periódicas son los eventos que permiten al ciudadano autorizar al representante, otorgándole su confianza, o bien sustituirlo por otro al final del mandato, si no han cumplido con sus expectativas. Según Manin, Przeworski y Stokes (1999: 16), las elecciones pueden entenderse como mandato, pero también como mecanismo de rendición de cuentas. En el primer caso, los ciudadanos señalan qué hacer a los gobiernos; mientras que, en el segundo, los ciudadanos juzgan si los gobiernos han hecho lo que se debía. Así, las elecciones son el mecanismo más claro y estable de *accountability* en el sistema representativo.

Lo anterior conduce a otro de los debates actuales relacionado con la representación y con los mecanismos de rendición de cuentas. Tal y como apunta García (2004), existe una demanda generalizada sobre que debe haber un mayor control de los representantes para que defiendan los intereses de los ciudadanos por encima de los intereses personales o partidistas, pero el problema es que los controles dependerán de la visión con que se aborde la representación política (Mansbridge, 2003). La rendición de cuentas puede enfocarse de múltiples maneras atendiendo a la jerarquización de criterios sobre el concepto de representación que se aplique, por ejemplo, puede dirigirse hacia juzgar si se ha cumplido con el programa electoral, con la introducción de sanciones en caso de que no se haya cumplido; o, en evaluar si se han defendido los intereses de la ciudadanía ante problemas imprevistos, con lo cual se vuelve crucial cómo se explica a la ciudadanía lo sucedido. Todo ello abre posibilidades de control más allá de las elecciones periódicas.

Según Fearon (1999), el concepto de *accountability* no es por sí mismo problemático, o al menos no debería serlo. Decimos que una persona, A, es responsable frente a otra, B, si se cumplen dos condiciones. En primer lugar, se entiende que A está obligada a actuar de alguna manera en nombre (o en representación) de B. En segundo lugar, B tiene el poder de alguna institución formal o quizá de normas informales para sancionar o para premiar a A por sus actividades. En jerga de teoría económica, aclara el autor, las relaciones que entrañan una relación de responsabilidad se llaman relaciones de agencia, en las que una parte es el agente (quien realiza algo en nombre de otro) y la otra parte el principal (el que tiene poder de sancionar o recompensar). En este sentido, para Fearon las preguntas interesantes sobre el tema no conciernen a la definición de *accountability*, sino al entendimiento sobre de qué actividades o actuaciones es responsable el agente, a la naturaleza de los instrumentos de sanción y recompensa, y al problema de hasta qué punto un sistema dado de incentivos conducirá a que el agente actúe en representación del principal, es decir, que haga lo que el principal querría. Como es sabido, en el caso de la rendición de cuentas electoral, es difícil saber qué es lo que el

principal querría, porque ese principal es múltiple y no actúa de forma colegiada a la hora de construir sus expectativas e intereses.

Aun así, Fearon (1999) también se plantea una cuestión primordial y es si las elecciones son en efecto mecanismos de rendición de cuentas. Para el autor hay dos mecanismos principales a través de los cuales las elecciones pueden generar las políticas públicas que el votante desea, la sanción y la selección. Según esta visión, los representantes escogerán las políticas públicas que se adapten a los deseos del público para ser reelegidos (sanción), pero también porque el electorado es capaz de seleccionar buenos tipos, competentes para llevar a cabo la tarea de la representación. Del mismo modo, el autor también sugiere que los votantes piensan en las elecciones como oportunidades para tratar de seleccionar a los mejores tipos, más que en sanciones para detener a los futuros titulares de los cargos.

Por otra parte, Ferejohn (1999) liga la *accountability* a la autoridad y añade la noción de *responsiveness* o capacidad de respuesta de los representantes. Según el autor, la variedad en las respuestas que los gobiernos democráticos dan a la voluntad popular se debe, en parte, a la diversidad de estructuras de representación que tienen los distintos gobiernos democráticos. Así, las instituciones electorales se emplean no solo para escoger buenos representantes públicos, sino también como mecanismos para hacer a esos representantes responsables ante el público, y de este modo, ellos elaboran políticas más o menos cercanas a los deseos de los votantes. En este sentido, la *accountability* se entiende como una pertenencia de las estructuras institucionales, mientras que la capacidad de respuesta (*responsiveness*) es una consecuencia de la interacción en tales estructuras. Como aclara Ferejohn (1999: 131), “la *responsiveness* es una medida de cuánta *accountability* permite una estructura institucional”.

De la misma forma, el autor también señala tres límites a la capacidad de rendición de cuentas en las instituciones democráticas. En primer lugar, se encuentra la ley electoral, de modo que la mayoría podría no rendir cuentas ante la minoría. En segundo lugar, las instituciones de rendición de cuentas operan en tiempo real (esporádicamente o periódicamente), de manera que ello da oportunidades a los representantes de evitar la responsabilidad electoral por acciones concretas, agrupando las acciones impopulares con las populares. En tercer lugar, los representantes electos tienen una inmensa ventaja a nivel de información sobre los votantes, así que ello limita de qué manera se pueden rendir cuentas.

En el tema de la representación política y la responsabilidad en la acción, Maravall (1999) añade el factor de la manipulación. Maravall (1999: 161) considera que las elecciones no son solamente para sancionar al agente que ha actuado de manera pobre, sino también para tratar de

encontrar una alternativa. De este modo, los gobiernos jugarán un juego de comparación: desacreditar a la oposición es probablemente un recurso electoral más habitual que explicar las acciones pasadas o las promesas sobre el futuro. Así, según el autor, si la *accountability* depende de si los votantes tienen información para evaluar la actuación, la responsabilidad puede ser asignada, y los electos pueden ser recompensados o castigados, entonces las estrategias de los políticos que quieren mantenerse en el cargo y beneficiarse de un amplio margen de maniobra serán manipuladoras con respecto a uno o a más de uno de estos requisitos.

Tal y como aclaran Laver y Shepsle (1999), la mayoría de las democracias son parlamentarias y en la esencia de la democracia parlamentaria está la *accountability* del gobierno hacia la asamblea legislativa. La asamblea está expuesta a la disciplina del sistema electoral y puede haber una cadena de múltiples líneas de rendición de cuentas entre el gobierno y el electorado. Sin embargo, los ciudadanos no pueden sancionar al gobierno directamente, sino que pueden cambiar la composición del parlamento y ello puede provocar cambios en el gobierno, lo que constituye una forma amplia de rendición de cuentas. Para los autores, se puede pensar que los gobiernos, al tener el control del día a día del parlamento, están en una posición en que fácilmente pueden bloquear la rendición de cuentas. Sin embargo, Laver y Shepsle (1999: 281) hablan del mecanismo de la moción de confianza y afirman que la efectividad de las instituciones de *accountability* en las democracias parlamentarias depende de la credibilidad de los mecanismos de no-confianza, que, a su vez, dependen de las alternativas disponibles para reemplazar al gobierno o a un ministro.

Así, se observa que en la mayoría de las democracias los mecanismos de rendición de cuentas están mediados, ya que los representantes que implementan las políticas no son directamente responsables ante los ciudadanos. Además, según Laver y Shepsle (1999: 294), los representantes son responsables ante los ciudadanos hasta un mayor o menor punto dependiendo de las propiedades del sistema electoral y del estado de la competición electoral. Para los autores, la *accountability* es un estado de equilibrio en que los ciudadanos no sienten una especial inclinación a reemplazar a los representantes electos. Por lo tanto, entienden la *accountability* desde dos vertientes: como un estado de equilibrio y también como un mecanismo, por ejemplo, el procedimiento de confianza.

La rendición de cuentas, como se ha visto, resulta un tema capital en el actual debate sobre la representación política. Del mismo modo, el concepto se relaciona con la responsabilidad y con la capacidad de respuesta de los representantes. Mientras que la *accountability* se refiere a la obligación de los representantes de explicar y justificar el uso de los poderes públicos, la

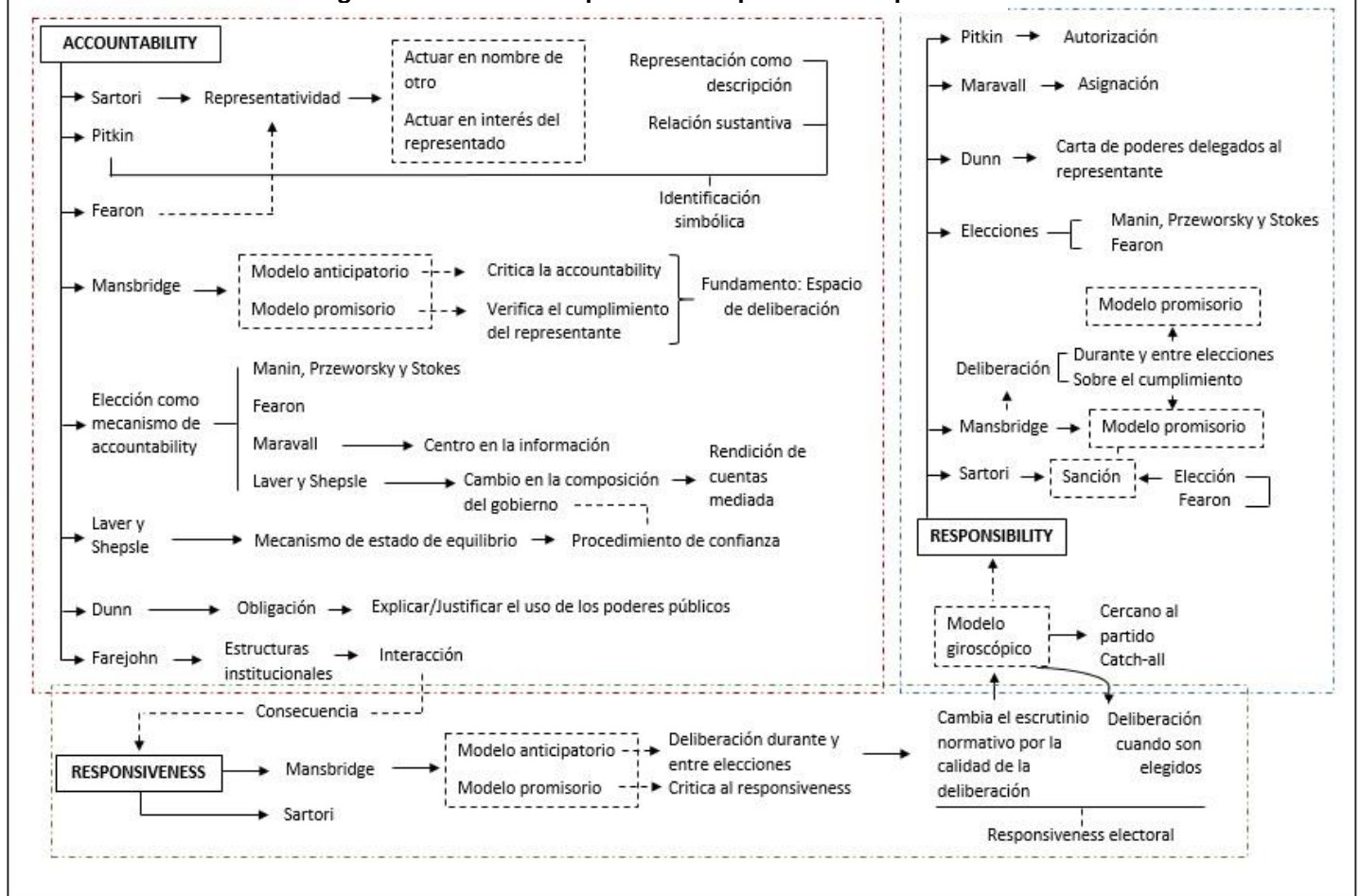
responsibility tiene que ver con la carta de poderes delegados confiada al gobierno, a las concesiones de poder condicionalmente facilitadas a los agentes públicos para hacer las cosas de las que tienen la capacidad de hacerse cargo, actuar o proporcionar (Dunn, 1999: 298, 299).

En un intento de clarificar el concepto de representación en la teoría democrática contemporánea, Urbinati y Warren (2008) hacen referencia a cuatro factores que se relacionan con potenciales problemas de representación política. En primer lugar, la representación política está inserta hoy en un escenario político en el que compete con nuevas e informales formas de representación; en segundo lugar, existe un interés en la justicia de la representación electoral, sobre todo en lo que concierne a las minorías y a las mujeres; en tercer lugar, se ha vuelto a poner el foco desde la teoría democrática en el juicio político; y, se da una nueva apreciación según la cual la participación y la representación son formas complementarias de ciudadanía.

En otro sentido, Rehfeld (2006) añade la noción de representación no democrática, además de la democrática, para intentar elaborar una teoría general de la representación política. Para el autor, la representación se puede explicar a partir de una audiencia relevante, que debe aceptar a una persona como su representante. Es decir, para Rehfeld (2006), existen casos de representación cuando el público usa normas democráticas de reconocimiento, pero también cuando las audiencias usan normas no democráticas, entonces aparecen casos no democráticos de representación. Así, el autor llega a la conclusión que la representación política no es un fenómeno democrático per se. Por tanto, tanto en sus orígenes como en la actualidad, el concepto de representación política se relacionaría también con procedimientos no democráticos, por más que sea importante su relación con la democracia desde la extensión del sufragio universal. Por su parte, Schweber (2016) llama la atención sobre los límites de la representación política, ya que como cualquier concepción tiene necesariamente sus limitaciones. El autor señala que los límites del representante político son compromisos normativos que empiezan con la misma concepción de la representación política, el carácter y las actividades de los representantes y el reclamo de los electores.

Por tanto, en la actualidad, el concepto de representación sigue siendo objeto de análisis, aunque los debates viran más hacia la naturaleza, la utilidad y los potenciales problemas asociados a la representación política y su relación con otras nociones, como la *accountability*, la *responsiveness* y la *responsibility*, más que a extender su definición. La representación política, además, se relaciona con la percepción ciudadana acerca de la democracia, puesto que encarna una parte fundamental del desarrollo de la política.

Figura 11. Marco conceptual de la representación política

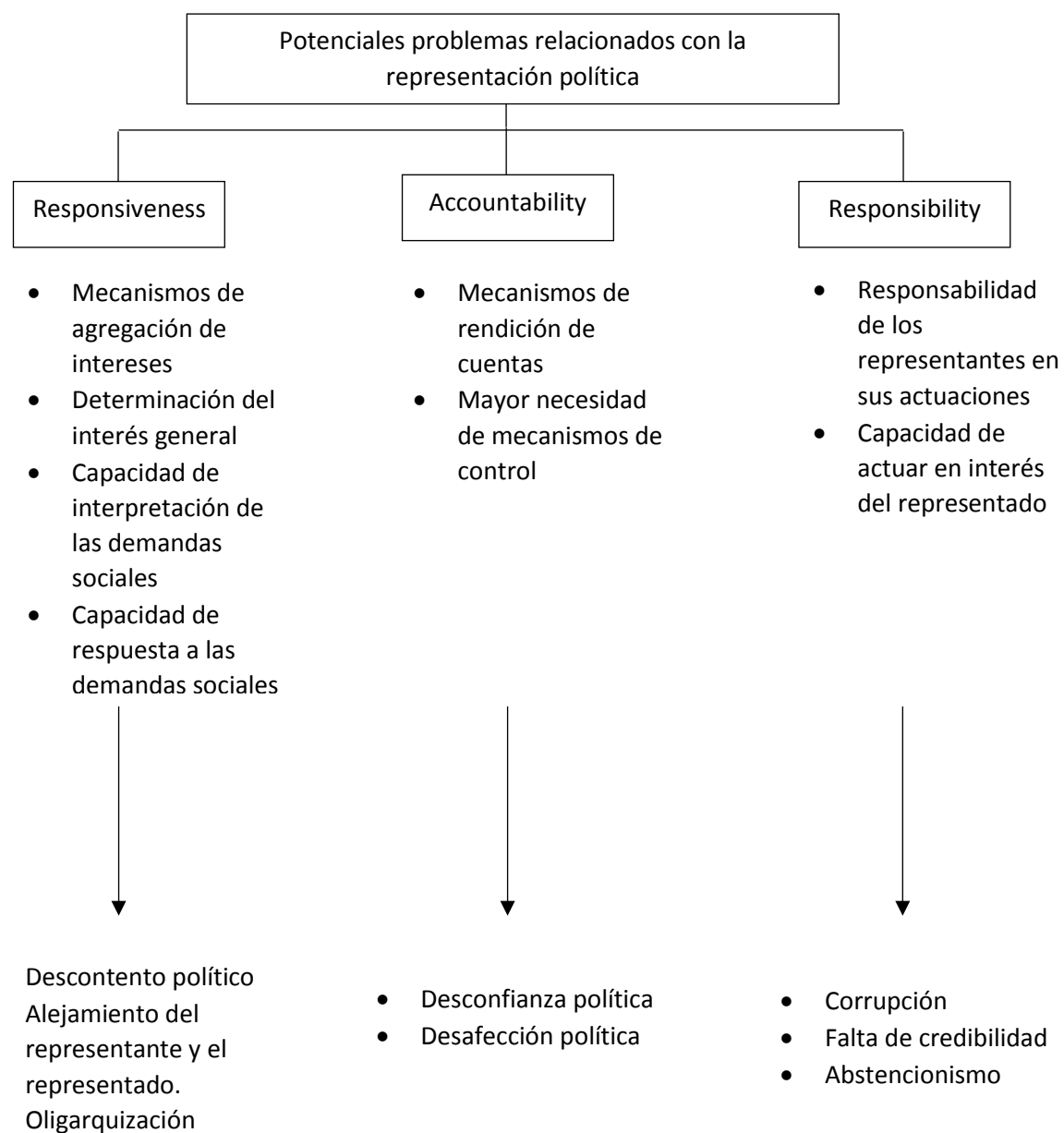


Fuente: elaboración propia.

3.4. Problemas de representación política

Los posibles problemas relacionados con la representación política pueden encajarse bajo los tres ejes básicos de *responsiveness*, *accountability* y *responsibility*, si bien no se trata de cajones estancos y las distintas dimensiones se relacionan también entre ellas.

Figura 12. Problemas relacionados con la representación política



Fuente: elaboración propia.

Tal y como señala Paramio (1999), se ha venido extendiendo en los países democráticos un sentimiento de desafección o desconfianza hacia la política desde los años 80. Según el autor, la singularidad del fenómeno reside en la combinación del cinismo político (cuando los políticos se ocupan de sus intereses) y participación política: “la participación desconfiada” (Paramio, 1999). Por su parte, Montero, Gunther y Torcal (1998) han demostrado que entre los españoles se registra un alto grado de desafección política, que se ha mantenido estable durante los últimos veinte años a pesar de los cambios acontecidos en España.

En el problema de la desconfianza política se encuentran las instituciones a través de las cuales funciona el sistema representativo, entre las que se cuentan el régimen parlamentario, en el caso de España, o semipresidencial, en el caso francés; el sistema electoral, que puede ser mayoritario o proporcional, en el caso español es proporcional y en el caso francés mayoritario a dos vueltas; y las instituciones que recoge la constitución. Sin embargo, también existen otros actores clave: los partidos políticos, cuyas propuestas de actuación, en caso de obtener suficiente apoyo electoral, han de convertirse en políticas públicas. Así, la tarea de los partidos es la representación de las demandas ciudadanas, que deben ser capaces de comprender y articular en su programa electoral y en el conjunto de sus actuaciones. “El descontento con los gobiernos se puede traducir en desconfianza hacia los partidos cuando éstos, en su conjunto, frustran las expectativas de los electores” (Paramio, 1999).

Para Paramio (1999), la desafección política es un estado de opinión que no pone en cuestión la superioridad del régimen democrático, pero manifiesta una fuerte desconfianza hacia la actividad política, y en particular hacia los partidos. Esa especial incidencia en los partidos tiene que ver con la “erosión de los vínculos de identificación entre los ciudadanos y los partidos, cuyas causas, a su vez, deberían buscarse en las transformaciones sociales y estructurales del último cuarto de siglo” (Paramio, 1999).

Por su parte, Montero, Gunther y Torcal (1998), caracterizan el descontento político como un síndrome amplio que tiene que ver con la eficacia del sistema y la satisfacción política. Así, el descontento surge de la frustración que surge al comparar lo que uno tiene y lo que debería tener. De ese modo, la eficacia del sistema se relaciona con las percepciones que se tienen del mismo a la hora de solucionar problemas básicos; y, la insatisfacción política, se refiere al desagrado o rechazo que puede provocar un objeto social o político, y surge de la evaluación que los ciudadanos hacen del rendimiento del régimen o de las autoridades, así como de los resultados políticos que generan. De esta manera, la insatisfacción política se asocia al

descontento político y se relacionaría con la dimensión que pone en valor la capacidad de respuesta de los representantes, la *responsiveness*.

Según Montero, Gunther y Torcal (1998), la desafección política es otra dimensión actitudinal, que, aunque diversamente definida, tiene que ver con un cierto desapego de los ciudadanos con respecto al sistema político, cuyo extremo negativo sería la hostilidad completa hacia al sistema político. Los autores enumeran sus síntomas más importantes: el desinterés, la ineficacia, la disconformidad, el cinismo, la desconfianza, el distanciamiento, la separación, el alejamiento, la impotencia, la frustración, el rechazo, la hostilidad y la alienación. En el ámbito político, los autores distinguen entre la desafección y el descontento o la insatisfacción.

Para Montero, Gunther y Torcal (1998), la desafección política abarcaría tanto visiones desconfiadas y recelosas de las relaciones humanas, como percepciones contradictorias de la esfera política. En cambio, la insatisfacción política puede considerarse como el resultado de la divergencia entre los valores generalmente positivos hacia el sistema político y las percepciones negativas que suscita su funcionamiento real. “Por lo tanto, la desafección política, al contrario que la insatisfacción, tiende a ser más reacia al cambio y puede tener consecuencias más duraderas para la política democrática” (Montero, Gunther y Torcal, 1998).

Torcal (2014), señala que la creciente desconfianza comprobada en España y Portugal entre 2011 y 2012, dos países golpeados por la austeridad, se debe principalmente a la percepción negativa de la capacidad de las instituciones representativas, por lo tanto, se liga a la dimensión de la *responsiveness*, agravada por la creciente percepción de la corrupción política. El autor indica que la gobernanza multinivel y la crisis económica desafían a las instituciones representativas, pero que su mal funcionamiento y el mal comportamiento de las elites durante la crisis son las principales explicaciones a la desconfianza en ambos países y durante el periodo estudiado. Torcal (2014), al contrario de la visión que atribuye las causas de la desconfianza a motivos puramente económicos, resalta que la creciente desconfianza hacia las instituciones representativas se debe también a las percepciones de la ciudadanía sobre que el sistema político no responde a sus demandas.

La insatisfacción política es un concepto multidimensional (Torcal y Montero, 2006; Christensen, 2015) que puede verse influido por múltiples factores, entre ellos la estructura institucional (Christensen, 2015). Easton (1965) distingue entre apoyo político difuso y apoyo político específico para explicar actitudes de apoyo al sistema, que constituirán el soporte difuso, y las actitudes hacia las autoridades, que son las específicas. Por otro lado, Stoker (2010) sostiene

que existe una oleada de desencanto político que viene de la pérdida de confianza entre los ciudadanos de la capacidad de influir en las decisiones políticas.

La desafección, y por tanto la desconfianza política, son unas problemáticas que pueden relacionarse con la demanda ciudadana de un mayor control de los representantes por parte de los representados y con la capacidad de éstos de dar explicaciones sobre sus actuaciones, de rendir cuentas a la ciudadanía, por lo tanto, corresponderían principalmente al ámbito de la *accountability*.

Por otro lado, Pitkin (2004), pone de manifiesto que el gobierno se ha convertido en una nueva forma de oligarquía porque excluye a la gente ordinaria de la vida pública. Se trata de un problema, el del alejamiento del representante del representado, que ya estaba presente en el pensamiento liberal-burgués que definió el concepto de representación en su origen, puesto que tanto desde las ópticas que defendían un gobierno de élite o el argumento de división del trabajo en relación a que el representante debía ser aquel mejor preparado para desarrollar el trabajo, o las visiones que ponían de manifiesto que precisamente el principio de representación consiste en delegar o autorizar a otro a representar, la distancia entre el representado y el representante ha estado siempre patente. Se trata, en todo caso, de un concepto ambiguo ya que puede relacionarse con la identificación o con la falta de identificación con el representante, con la distancia en términos sociológicos y demográficos entre el representante y el representado, o incluso con la distancia ideológica y la exclusión de la mayoría de la actividad representativa. Además, el alejamiento se relacionaría con la dimensión de la *responsiveness*, en tanto que interfiere en la capacidad de interpretar las demandas sociales de la ciudadanía y, por tanto, en la generación de acciones que cumplan con las expectativas de los electores. Para Merkel (2014), aunque no se puede hablar de crisis de la democracia, el creciente nivel de exclusión del tercio inferior del demos de la participación, una representación inferior de sus intereses y una pérdida de la soberanía democrática en la formulación de las políticas sí son desafíos democráticos no resueltos.

Por otra parte, la corrupción es un fenómeno que afecta a la dimensión de la responsabilidad del representante, ya que pervierte todo el sistema representativo, e influye en el resto de potenciales problemas relacionados con la representación política. Del mismo modo, la corrupción suele ser una preocupación ciudadana recurrente, aunque la capacidad de inclinar la balanza de los escándalos políticos o la corrupción no resulte siempre evidente en las citas electorales. Aunque se supone que los votantes castigan la corrupción porque no les gusta que los políticos usen sus cargos en su propio beneficio, la evidencia empírica es contradictoria y

sugiere que en ocasiones el castigo a la corrupción es blando (De Vries y Solaz, 2017). En el caso español, por ejemplo, se han dado distintos casos de tolerancia de la corrupción por parte de una gran parte de votantes en distintos niveles territoriales. Jiménez (2007), Fernández Vázquez y Rivero (2011) y Costas et al. (2012), han constatado que los votantes no necesariamente castigan a los alcaldes corruptos, de modo que la corrupción no siempre impide la reelección del representante corrupto. Asimismo, Riera, Barberá, Gómez, Mayoral y Montero (2013) remarcan la gran variabilidad en este patrón de comportamiento de los votantes y sugieren que los efectos de la corrupción son más complejos de lo que pueda parecer y no son homogéneos. De hecho, son evidentes las consecuencias negativas a nivel económico, político y social de la corrupción, ya que cuando un representante público hace un mal uso del cargo está en realidad menoscabando los principios básicos de la representación política, y por extensión, de la democracia representativa. Según los hallazgos de McMann, Seim, Teorell y Lindberg (2017), la democracia se relaciona con un gobierno menos corrupto. Sin embargo, eso solo se da cuando los niveles de democracia son muy altos. En cambio, según los autores, niveles bajos o modestos de democracia aumentan la corrupción. Se trata, por tanto, de un fenómeno que no es ajeno a las democracias avanzadas.

Por otro lado, la credibilidad hacia las instituciones y, sobre todo, hacia los partidos políticos es un potencial problema que se relaciona con la representación política porque éstas constituyen los resortes del sistema representativo y constituyen sus mecanismos de funcionamiento.

Distintos autores, como Tormey (2015) o Ignazi (2014) señalan la caída de la legitimidad y de la credibilidad de las antiguas formas dominantes de la política o en particular de los partidos políticos. Por otra parte, Artés (2011) señala que en España los compromisos económicos adquiridos por el PP y por el PSOE entre 1989 y 2004 han sido en su mayoría cumplidos por el partido en el gobierno, aunque se ha encontrado un nivel menor de cumplimiento para los partidos en la oposición. Ello indicaría que, al menos en el ámbito económico, el nivel de cumplimiento de los compromisos económicos específicos es alto, lo que según Artés (2011) es congruente con otros países y otros sistemas políticos.

La problemática de la falta de credibilidad se relaciona con las dimensiones de la *accountability* y también de la *responsibility*, pues el problema de la falta de credibilidad influye en el ejercicio de la representación política, tanto a la hora de rendir cuentas o explicar las acciones políticas, como de responsabilizarse de las actuaciones. Como explica Barreiro (1998), las justificaciones que los representantes dan cuando incumplen promesas electorales apelan a cambios exógenos, pero los electores son capaces de distinguir los grados en que una política se ve

afectada por factores externos. Por eso los votantes perciben a los gobiernos como menos responsables de las políticas que creen que pueden tener más influencia externa. De ahí la relación con la dimensión de la responsabilidad del potencial problema de la falta de credibilidad. La inconsistencia entre lo que se promete y lo que realmente se hace o se puede hacer, o, en otras palabras, el desfase entre el programa electoral y las actuaciones de gobierno es un factor que afecta a la credibilidad de los partidos y de los representantes. A su vez, ello se relaciona con la frustración de los electores y con la “creciente dificultad para la agregación de preferencias” (Paramio, 1999), que estarían en el origen de la desafección.

La abstención es otra de las problemáticas que se relacionan con la representación política. De hecho, el abstencionismo activo, cuando se decide no ir a votar, puede ser indicativo de malestar relacionado con la representación política. En efecto, el tema de la participación en el sistema representativo, sobre todo a través de las elecciones, resulta relevante desde las discusiones liberales y utilitaristas que conformaron el origen del concepto de representación política. En ese momento, se consideraba que la participación en las elecciones era la manera de ejercer el derecho a la representación, como constataron Constant y Stuart Mill, y que peligraba el sistema representativo si no se participaba en él. Precisamente, la extensión del sufragio amplió el derecho a la representación política.

Sin embargo, en la actualidad se observa como el porcentaje de participación en las elecciones varía. Según Blais (2007), Mair (2005) y Alarcón (2016), la abstención ha aumentado en Europa en los últimos años. Además, como explica Alarcón (2016), desde el comienzo de la crisis económica de 2008 ha aumentado el nivel de abstención en el sur de Europa de una forma homogénea, en contraposición con lo que ha ocurrido en Europa Occidental. Se trata, pues, de un fenómeno constatable a nivel europeo, que puede tener distintas causas. Para Anduiza (2002), las motivaciones para la abstención no son constantes en distintos países europeos y conviene detenerse en la interacción de las características individuales y de los incentivos institucionales a la hora de explicar la abstención. Mientras que las motivaciones para la abstención no son constantes, el efecto de los incentivos institucionales en no ir a votar depende del nivel de recursos y motivaciones del elector (Anduiza, 2002).

La abstención es un fenómeno importante en el momento de hablar de representación política porque, como en el origen del sistema representativo, la participación en las elecciones sigue siendo la manera más extendida de participación política, si por ello se entiende, como la definen Verba y Nie (1972) todo el conjunto de actividades de los ciudadanos que están más o menos directamente destinadas a influir en la elección de las personas que gobiernan o en las

acciones que adoptan. La no participación electoral activa resultaría, entonces, una forma deliberada de mostrar cierto malestar difuso con la representación política.

El fenómeno del malestar o del disgusto hacia los representantes políticos es consistente en los dos países de estudio y se puede manifestar de distintas maneras, atendiendo al contexto histórico, político y social de cada caso.

3.5. La representación política en España y Francia

La representación política se articula en España y en Francia a través de sus respectivos sistemas políticos. España se organiza en una monarquía parlamentaria y su sistema de gobierno se basa en la representación parlamentaria. Francia, en cambio, es una república semipresidencial, con lo cual el poder político pivota sobre un presidente, que es el jefe del Estado elegido por votación popular, y un primer ministro, escogido y nombrado por el presidente. Además, los dos países cuentan con un sistema de partidos plural. Como democracias basadas en sistemas representativos, su legitimidad se deriva de la idea de que el pueblo se hace presente en las actuaciones de gobierno, en especial mediante la elección de los representantes. Por tanto, en ambos países la representación política está ligada a la democracia, a las elecciones, y a cómo los ciudadanos perciben el funcionamiento de la democracia. De este modo, entran en juego las dimensiones actitudinales de la ciudadanía al respecto de la representación política y, por extensión, hacia la democracia.

3.5.1. El caso español

En España, la construcción del Estado liberal se extendió casi a lo largo de un siglo, el XIX, en que la pugna del absolutismo por mantenerse en el poder y las divisiones en las filas liberales impedían su consolidación. La revolución liberal se sitúa entre 1808 y 1843 (Martorell y Juliá, 2012), un periodo marcado, al principio, por el levantamiento contra los franceses y las Cortes de Cádiz y por las revoluciones hispanoamericanas; después, entre 1814 y 1833, se suceden la restauración absolutista como reacción al liberalismo, y el Trienio Liberal. La construcción del Estado liberal avanza con la guerra carlista de 1833 a 1840, la división de los liberales entre progresistas y moderados y la Regencia de Espartero, hasta que finalmente se liquida en España el Antiguo Régimen. Entre 1843 y 1874 se sucedieron gobiernos moderados y progresistas, hasta el Sexenio Democrático (1868 - 1874), que culminó con la Primera República (1873 - 1874). La reacción, sin embargo, llegó en 1875 con la Restauración y la institucionalización del sistema

político. Se inauguraba entonces el turno de partidos, en que liberales y conservadores se repartían el poder. El encasillado y el caciquismo eran los mecanismos bajo los cuales operaban las elecciones de los representantes durante la Restauración. El turno pacífico era un sistema que garantizaba la alternancia en el poder de los grandes bloques liberal y conservador. Pero, por eso mismo, los políticos estaban poco interesados en movilizar al electorado (Varela, 2001), puesto que su elección dependía en realidad de la negociación del encasillado, mediante la cual se protegía a los representantes que saldrían elegidos.

El siglo XX empezaba en España bajo el reinado de Alfonso XIII (1902 - 1931), un periodo en el que la sociedad española empieza a modernizarse. Durante las primeras décadas del siglo emergen partidos regionalistas, republicanos y socialistas que cuestionan el turno de partidos, y los sindicatos demuestran su fuerza con la huelga general de 1916. A partir de entonces, la Restauración entra en crisis, comienzan los gobiernos de coalición debido a la fragmentación provocada por el final del turno pacífico hasta la dictadura de Primo de Rivera (1923 - 1930).

Los años 30 están marcados por la Segunda República y por la Guerra Civil. En 1931, se proclama la Segunda República, periodo en que el sufragio se concede por vez primera a la mujer (1933) y, por tanto, la representación política se extiende a toda la población que cumple los requisitos legales. Hacia el final de la República, se daba una “profunda fragmentación política: clase obrera dividida entre anarquistas, socialistas y comunistas de diversas obediencias; clases medias adheridas a partidos enfrentados como el socialista y la CEDA, pasando por la amplia gama del republicanismo, de izquierda al conservador” (Martorell y Juliá, 2014). En 1936, un grupo de militares se sublevó contra el gobierno democrático de la Segunda República. El golpe provocó la Guerra Civil de 1936 a 1939, que terminó con la derrota de la República. En los años 40 empezó la dictadura franquista, que se prolongó hasta 1975. Ese periodo, en que todos los poderes se concentraban en la figura del dictador Francisco Franco, se caracteriza por presentar una representación política totalitaria, en que los pilares del Estado eran el ejército, la iglesia y la Falange, y, por tanto, no podía existir más que un partido político.

Martorell y Juliá (2014) sitúan la descomposición de la dictadura y la transición a la democracia entre 1969 y 1982, si bien el dictador no murió hasta el año 1975. Pese a que un sector duro franquista se mantenía, la transición fue tomando forma a través de los Pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978, la legalización de partidos y las elecciones y la configuración de las preautonomías. Después del intento fallido de golpe de Estado de 1981, la democracia se consolida en 1982, cuando empiezan los gobiernos encabezados por Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hasta 1996. Después se da un periodo de alternancia, iniciado

con los gobiernos conservadores de José María Aznar, del Partido Popular (PP), hasta 2004. Seguidamente, vuelve al poder el PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero, hasta 2011, y a partir de entonces y hasta la actualidad, encabeza el gobierno de nuevo el PP, con Mariano Rajoy al frente. Desde la Transición han sido dos los partidos que han dominado el panorama nacional, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), si bien Izquierda Unida aún a nivel nacional, y otros partidos de ámbito autonómico, también han tenido cierto papel político. Sin embargo, el sistema de partidos se caracterizaba por un fuerte bipartidismo hasta la aparición de Podemos (fundado en 2014) y de Ciudadanos (fundado en Catalunya en 2006, pero que dio el salto a todo el Estado en 2016), dos nuevos grupos que han tenido una rápida implantación y compiten por romper el bipartidismo tradicional.

Del contexto histórico español se desprende, pues, la difícil consolidación del Estado liberal, y, por consiguiente, de la representación política plena. De este modo, el sufragio universal masculino se reconoce en la Constitución de 1869, aunque no queda establecido de forma definitiva hasta 1890. El sistema liberal se había basado en el sufragio censitario. Como se ha visto, el sufragio femenino solo fue posible en la Segunda República y fue revocado durante la dictadura franquista, hasta que fue de nuevo recuperado con la transición democrática.

Las Cortes de Cádiz fueron especialmente importantes en la historia del parlamentarismo español porque en un decreto de 1810 se proclaman como depositarias del poder de la nación, un principio, el de la soberanía nacional, que se plasmó luego en el artículo tercero de la Constitución de 1812. Por tanto, se acababa así con la concepción de que el origen del poder emanaba de la monarquía absoluta. Aun así, el absolutismo todavía peleaba por el poder en la primera mitad del siglo XIX, y como se ha observado, fue complejo el desmantelamiento del Antiguo Régimen. El camino hasta la democracia consolidada actual tampoco fue sencillo y fruto de ello, además de otros factores son los problemas relacionados con la representación política que se perciben en España.

3.5.1.1. Problemas específicos relacionados con la representación política en España

En España se presentan hoy distintos problemas relacionados con la representación política, que están obviamente influidos por el contexto histórico, político y social del país y también por las modernas transformaciones sociales. El desfase entre el programa electoral y la ejecución política de los partidos políticos, la falta de participación ciudadana en las elecciones o la escasez

de otros mecanismos institucionales con los que influir en la arena política, la desafección ciudadana hacia la política o el descontento difuso hacia los representantes y la representación política son fenómenos señalados por la literatura en el caso español.

En la actualidad tal y como recoge el estudio de Martínez et al. (2006), el apoyo a la democracia es alto en España igual que el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, que era del 74% en el año 2000. Sin embargo, ello también indica que una cuarta parte de los españoles se siente insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país. Esta insatisfacción se puede relacionar con la representación política, en tanto que algunos de los motivos con que los ciudadanos la explican tienen que ver con sus representantes, en especial, con el comportamiento de los políticos (17%), aunque se esgrimen otras razones, como la desigualdad (16%) o el mal funcionamiento de la justicia (10%), según Martínez et al. (2006).

El desencanto o desánimo provocado por el desfase que se produce entre el programa electoral que los partidos preconizan y la política real que luego se aplica es un factor que contribuye a esa difusa insatisfacción que se puede relacionar con la representación política. En ese asunto intervienen factores contextuales como los cambios sociales y políticos, la transformación de los partidos, las nuevas identidades y su presencia en la representación política y la capacidad de los representantes de comprender las demandas sociales. Del mismo modo, un factor que Stuart Mill ya señalaba como potencial problema de la representación política, la falta de participación en el proceso electoral o el abstencionismo, es otro de los que contribuyen a visibilizar la desmotivación ciudadana. Escribano y Ortiz (2006: 45), señalan que el grado de abstencionismo electoral ha variado en España desde el restablecimiento de la democracia, en función del momento en que se celebraron elecciones y del tipo de convocatoria, de modo que ha tenido un carácter irregular. Según los autores, la deserción de los españoles ante las urnas disminuye en momentos de cambio, porque el ciudadano cree que su voto tiene mayor importancia. En cambio, cuando el ciudadano percibe que se trata de elecciones que no son cruciales, la abstención se incrementa.

El abstencionismo puede ser de carácter técnico o activo, se trata este último de aquellos ciudadanos que prefieren no ir a votar. Entre ellos, en las elecciones de 1982 a 1996, el principal argumento fue el desinterés. Sin embargo, este factor cambió en las elecciones de 2000 y 2004, en las que al tiempo que bajaba el desinterés, aumentaba la desconfianza, tal y como recogen Escribano y Ortiz (2006). Se trataría, pues, de un incipiente signo de que los ciudadanos no perciben como real su capacidad de acción a través del voto. Del mismo modo, la mayoría de los españoles tiene poco o ningún interés por la política y siguen con poco interés las actividades

de distintas instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático, lo que lleva a concluir a Escribano y Ortiz (2006: 72) que “en los últimos años se ha propagado un progresivo descontento ciudadano con la política y los políticos”. De la misma manera, los autores hablan de que esta desafección ciudadana parece tornarse gradualmente en una creciente y generalizada desaprobación de las instituciones, aunque ello no ha afectado a la estabilidad política del sistema democrático.

El Informe sobre la Democracia en España de 2016 señala que entre 2011 y 2016 se ha producido el mayor cambio político de los últimos 30 años, que ha venido, precisamente, precedido de “altos niveles de insatisfacción y desconfianza en las instituciones, la preocupación por la corrupción y por la propia clase política”. Se trata de la aparición y expansión de los nuevos partidos políticos: Podemos y Ciudadanos.

La crisis económica de 2008 y sus consecuencias es un factor señalado por el Informe que tiene repercusiones negativas sobre los indicadores de valoración y confianza política. Según el análisis, en 2012 más del 70% de la ciudadanía afirmaba que la política le inspiraba desconfianza y más del 40% mencionaba irritación. Según el Informe, “ambas cifras son 15 puntos porcentuales superiores a la media del periodo analizado según los datos disponibles”. Por lo tanto, el fenómeno del malestar con respecto a la política se hace patente. Ello, sin embargo, no implica desinterés. El Informe revela que, a pesar de la visión crítica existente de cara a la política y el sistema político, no se da un proceso de desinterés o desvinculación. “La implicación política de los ciudadanos parece haber aumentado significativamente en estos años”, dice el Informe sobre la Democracia en España de 2016. Por ejemplo, según datos del análisis, se observa “un aumento continuo del interés por la política desde el año 2002, donde la suma de mucho y bastante interés era de un 22%, hasta el 40% de mayo de 2016. De manera inequívoca, parece que el interés por la política ha crecido en España a lo largo de las dos últimas décadas y, especialmente, en las dos últimas legislaturas” (Informe sobre la Democracia en España 2016). Así, a este respecto, el Informe concluye que la insatisfacción con la política ha aumentado desde el inicio de la crisis económica y sitúa el principio de la X Legislatura como el de máximos niveles de insatisfacción con la situación política y económica, y también, de desconfianza hacia el gobierno, la oposición y los partidos. Del mismo modo, se señala que la preocupación por la corrupción y por el fraude, así como por la clase política, han crecido desde 2011, y son los problemas que se mantienen como los que más preocupan a los ciudadanos. Paralelamente, tal y como dice el Informe, “los ciudadanos muestran una tendencia creciente a implicarse en política. El interés y la eficacia interna han aumentado en la X Legislatura en relación con años anteriores”.

Los últimos años se caracterizan, pues, por la existencia y el aumento de distintas actitudes negativas de la ciudadanía con respecto al sistema representativo o a algunos de sus integrantes, sin que ello conlleve una enmienda a la totalidad del sistema democrático, o ni siquiera, una pérdida del interés hacia la política. Lo que se denota con mayor fuerza es la desconfianza y el descontento generalizado.

En España y Francia se dan procesos similares de un descontento difuso hacia la representación política, plasmado en distintos factores, aunque sus contextos históricos son distintos.

3.5.2. El caso francés

El liberalismo francés había echado andar antes que el español, con el cambio fundamental de reconocer la soberanía nacional, frente al poder del monarca absoluto, que se había dado con la Revolución en 1789. Después del brusco cambio revolucionario, sin embargo, la construcción del Estado liberal se extendió en el tiempo hasta llegar a la república semipresidencialista que se conoce hoy.

El sufragio, como elemento de representación política, empezó siendo censitario, con la Constitución de 1791. En cambio, la Constitución de 1793, que no llegó a aplicarse, reconocía el sufragio universal masculino. Sin embargo, entre 1815 y 1848, con la Restauración borbónica en Francia y la Monarquía de Julio, se volvió al sufragio censitario. De modo que el sufragio universal masculino llegó en 1848. El voto femenino se demoró hasta 1944.

La Revolución Francesa, que marcó no solo al país galo sino a los países de su entorno, dilapidó las bases del Antiguo Régimen en Francia, pero tampoco fue un proceso sencillo. Antes de consolidarse en una república democrática plena, pasó por imperios, monarquía y guerras. Así, Francia inauguró la Edad Contemporánea después de la Primera República con el imperio de Napoleón Bonaparte. El emperador fue derrotado en 1815. Con su fallecimiento en 1821, Luis XVIII tomó el poder y fue sucedido por Carlos X. Sin embargo, en 1830, el pueblo se sublevó contra el monarca y se coronó a Luis Felipe I. En 1839, Francia declaraba la guerra a México.

La revolución de 1848 provocó la abdicación de Luis Felipe y se instauró la Segunda República francesa. En ese momento es cuando se dan las primeras elecciones generales por sufragio universal masculino, de las que salió elegido Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte. A su vez, Luis Napoleón dio un golpe de Estado e instauró el Segundo Imperio, en el que se combinó el gobierno autoritario con los principios liberales burgueses que ya habían impregnado a la sociedad francesa. Napoleón III abdicó y después tuvo lugar la breve experiencia

de la Comuna de París. La Tercera República, que empezó a finales del XIX y se alargó hasta 1940, es el momento en el que Francia se lanzó a la colonización de África. Se trataba del primer periodo largo en forma de república parlamentaria desde la Revolución.

En el siglo XX, Francia vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la segunda posguerra, Charles de Gaulle presidió el gobierno provisional que dio paso a la Cuarta República. Ese periodo se extendió entre 1946 y 1958. Se trata del momento en que Francia se implicó en la construcción de la Unión Europea, en ese entonces, la forma del Estado seguía siendo una república parlamentaria. La Quinta república se instauró en 1958, con Charles de Gaulle de nuevo en el poder como presidente, y es el régimen político actual en Francia.

En la Cuarta República y principios de la Quinta, el sistema de partidos estaba altamente fraccionado y era inestable (Converse y Pierce, 1986: 13). La Cuarta República, además, estaba organizada como un sistema parlamentario más o menos convencional, mientras que cuando fue sustituida en 1958 por la Quinta, el sistema que se implantó fue híbrido, ya que contenía elementos del sistema presidencial y elementos del sistema parlamentario. Tal y como recogen Converse y Pierce (1986: 17), la configuración del sistema de partidos también fue evolucionando a lo largo del periodo. En la segunda posguerra, se caracterizaba por la existencia de tres grandes partidos, que dominaban la arena electoral y el parlamento. Se trataba del Partido Comunista, del Movimiento Republicano Popular y del Partido Socialista (que se conocía entre 1905 y 1969 como SFIO, Sección Francesa de la Internacional Obrera).

Después, se dio un proceso de fraccionamiento, con una media docena de grupos políticos identificables, luchando por el apoyo popular. Más tarde, ya con la Quinta República, volvió a cambiar el sistema de partidos. De modo que fueron cuatro los partidos importantes, organizados en dos bloques opuestos. Este periodo se extendió a lo largo de los años 60, 70 y 80.

Cabe resaltar una peculiaridad de la política francesa, y es la figura de Charles de Gaulle, que fue líder de la Resistencia durante la Guerra y presidente del Gobierno provisional justo al terminar la contienda. De Gaulle se opuso a la Cuarta República y fue fundador y presidente de la Quinta, de modo que su liderazgo y personalidad marcaron la democracia contemporánea francesa. Precisamente, De Gaulle creía que el sistema de partidos francés tenía demasiados conflictos fundamentales y abogaba por que el jefe del Estado fuera situado por encima de los partidos (Converse y Pierce, 1986: 19). En 1958 se aprobó una nueva constitución dando paso a la Quinta República y en 1962 se implantó la elección directa del presidente. A finales de los años 60 tuvo lugar una gran muestra de descontento, el movimiento de Mayo del 68. Seguidamente, el

triunfo gaullista en junio de 1968 se vio opacado por la derrota de De Gaulle en un referéndum en abril de 1969 y su posterior dimisión. Tras ello, tuvo lugar la elección de Georges Pompidou como presidente.

En los años 80 del siglo XX empezó un periodo socialista, encabezado por François Mitterrand, hasta que en 1995 fue reemplazado en la presidencia por Jacques Chirac, de signo conservador. Nicolas Sarkozy, también conservador, ganó las elecciones de 2007 y se mantuvo en el poder hasta la victoria de François Hollande, socialista, en 2012. En la actualidad, el presidente francés es Emmanuel Macron que no pertenece a ningún partido tradicional, sino a *En Marche*, un movimiento que derivó en un partido político de tendencia socioliberal de reciente creación.

3.5.2.1. Problemas específicos relacionados con la representación política en Francia

Como en el caso español, en Francia también se da el fenómeno de malestar ciudadano hacia los representantes o los mecanismos de representación. Entre los rasgos descritos por la literatura acerca de la problemática, se señalan el divorcio entre los partidos políticos y los ciudadanos; la falta de confianza; la escasez de reflejo entre la población y el representante; una visión de las instituciones como débiles; la influencia de los marcos territoriales en la representación, que tiene que ver con la proximidad, y a su vez, con el alejamiento; y también, el desinterés ciudadano.

En el siglo XXI, Francia es caracterizada por Brouard, Kerrouche, Deiss-Helbig y Costa (2013) como un país en que las asociaciones, los grupos de presión y los partidos políticos no juegan un papel importante como puntos de acceso al sistema político. Es más, los autores indican que la participación relacionada con los partidos es baja en el país galo y señalan el fenómeno del divorcio entre los ciudadanos y sus representantes electos. Además de la falta de confianza en los políticos, los autores indican que los representantes franceses son criticados a menudo por su incapacidad para reflejar a la población en términos de edad, género, nivel de educación, ocupación y origen étnico. Estos puntos se corresponden con la dimensión señalada por Pitkin (1985) en los términos de representación como descripción o reflejo y también con la dimensión como identificación simbólica entre representante y representado, en que los dos están unidos por una relación emocional.

Del mismo modo, la Asamblea Nacional —el parlamento francés— es considerada como una institución débil (Brouard, Kerrouche, Deiss-Helbig y Costa, 2013), pero sigue siendo el principal

escenario de la representación política. Al mismo tiempo, los autores también ponen de manifiesto que a nivel local los representantes sí se implican en su circunscripción y que las elecciones legislativas siguen movilizando a los votantes.

El concepto de proximidad resulta relevante al hablar de la representación en Francia. Esta noción es entendida por algunos como un dispositivo ideológico para hacer frente a la llamada crisis de representación, mientras que para otros Le Bart y Lefebvre (2005), sería un nuevo modo de legitimación política en Francia (Daloz, 2008). Según Daloz (2008), reconociendo la naturaleza polisémica del término, los políticos en Francia deben constantemente jugar en dos registros no fácilmente reconciliables: probar y trascender la proximidad. Esta noción tiene que ver con el potencial problema relacionado con la representación política del alejamiento entre el representante y el representado, que se relaciona, a su vez, con la capacidad de respuesta de los gobernantes ante las nuevas y cambiantes demandas sociales.

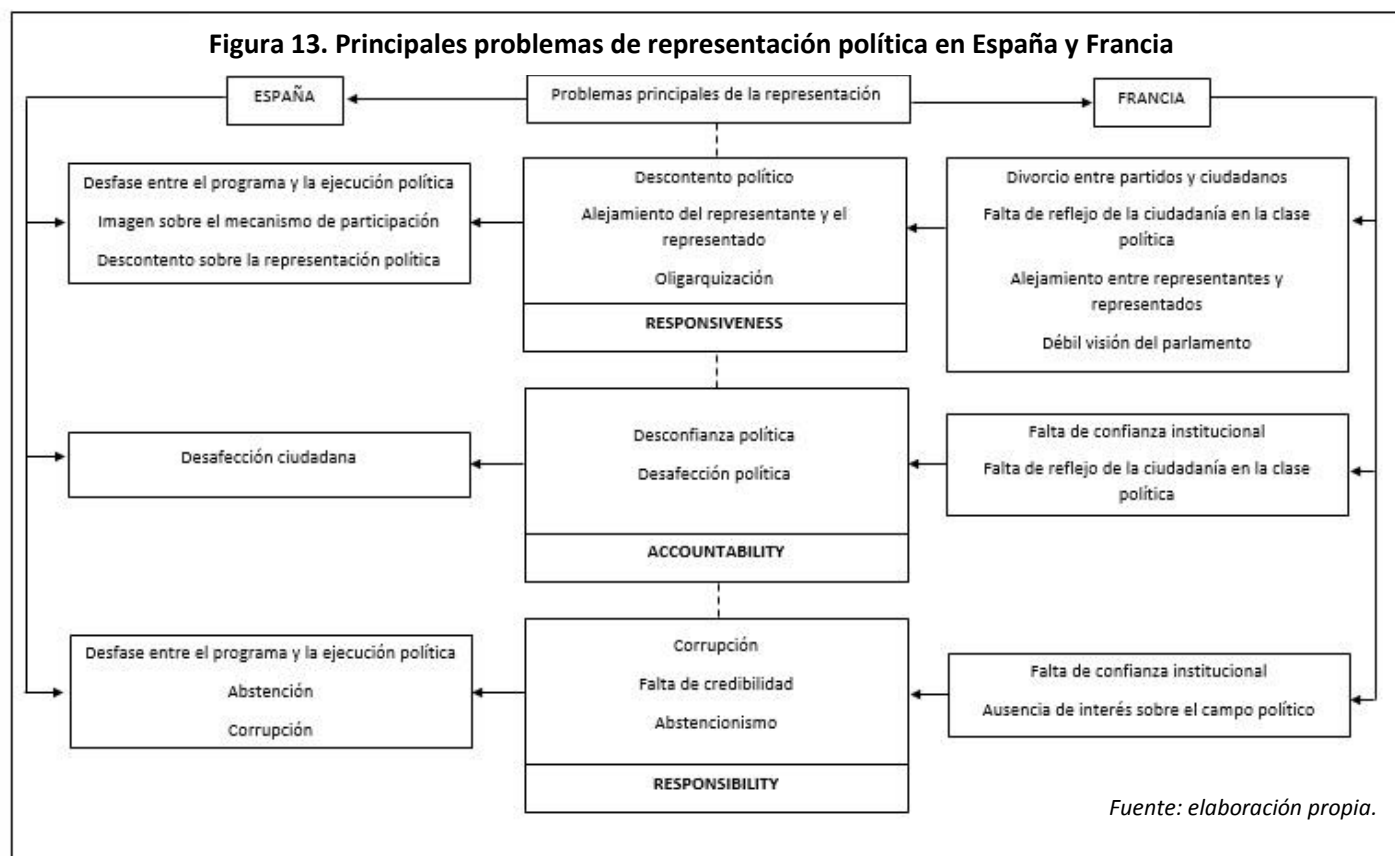
Para Costa, Lefébure, Rozenberg, Schnatterer y Kerrouche (2012), existe una relación paradójica entre los ciudadanos franceses y sus diputados. Según los autores, “a pesar de los grandes esfuerzos de comunicación, la Asamblea Nacional y el Senado no han logrado aumentar el interés o la confianza de los ciudadanos en sus actividades”. Los mismos autores caracterizan el vínculo representativo en Francia por la participación de los representantes en su circunscripción, “que se ve reforzada por incentivos institucionales específicos” (Costa, Lefébure, Rozenberg, Schnatterer y Kerrouche, 2012). Ello se contrapone en parte a la noción clásica de la soberanía nacional y la encarnación y representación del interés común o general, que tanto habían desarrollado los pensadores franceses liberales. Tal y como resumen Brouard, Kerrouche, Deiss-Helbig y Costa (2013), las concepciones liberales francesas sobre la voluntad general y la soberanía nacional, sobre todo a raíz de Rousseau y de Sieyès, dieron un enfoque muy abstracto a la representación parlamentaria, y aunque según los autores esa concepción de que los diputados deben representar a la nación francesa en su conjunto, olvidándose de distinciones territoriales o grupales, sigue viva en el parlamento, parece no estarlo en la ciudadanía. Los autores subrayan que los ciudadanos franceses “promueven una concepción de la representación cercana a las opiniones de Madison² sobre el pluralismo e implican un fuerte apego a la lógica del vínculo electoral territorial”. De modo que, si esa es la percepción del ciudadano, el representante, siguiendo la lógica de maximizar votos, buscará el apoyo electoral en el territorio, de ahí la implicación en su circunscripción.

² En *The Federalist Papers*, James Madison desarrolla uno de los argumentos de los pluralistas acerca de la necesidad de las instituciones de evitar el faccionalismo. Para evitarlo Madison propuso que era mejor que varias facciones rivales impidiesen que alguna de ellas dominara el sistema político al estar presentes en las instituciones.

Costa, Lefébure, Rozenberg, Schnatterer y Kerrouche (2012) constatan que la Constitución de la Quinta República debilita la función legislativa y de escrutinio del parlamento, y que, aunque la reforma de las cámaras de 2008 iba encaminada a fortalecerlo, los resultados han sido limitados.

Igual que en España, en Francia se subraya el papel que la integración europea ha ejercido en lo referente a la soberanía nacional, residente en las cortes, pero es que, además, en Francia se añade el papel del presidente, que no es para nada testimonial. Para los autores, la paradoja de la relación entre el sistema representativo y el ciudadano, sin embargo, se encuentra en que los parlamentarios mantienen buenas redes políticas, económicas y sociales sobre el terreno y los ciudadanos están familiarizados con ellos porque muchos son alcaldes, pero al tiempo que creen que pueden ayudarlos a resolver problemas personales, desconfían del parlamento.

De lo anterior se desprende, pues, que tanto en España como en Francia se dan distintas actitudes entre los ciudadanos que son indicativas de un descontento político o incluso desafección de una parte de la ciudadanía hacia las instituciones del sistema representativo y hacia sus representantes.



En la figura 13 se pueden observar los distintos problemas relacionados con la representación política encontrados en España y en Francia a través de la revisión de la literatura existente y agrupados en tres categorías: los relacionados con la *responsiveness* (descontento político, alejamiento entre el representante y el representado); con la *accountability* (desconfianza y desafección política); y, con la *responsibility* (corrupción, falta de credibilidad y abstencionismo).

De esta forma, se observan problemáticas relacionadas con la representación política compartidas en ambos países que forman la muestra de estudio.

CAPÍTULO 4

MARCO CONTEXTUAL

El marco contextual se compone de tres partes diferentes. Por un lado, se ofrece un contexto general a modo de descripción de las sociedades capitalistas avanzadas actuales, cuyo propósito es situar el panorama de cambios sociológicos que, en mayor o menor medida, afectan al objeto de estudio. Por otro lado, el capítulo continúa con un análisis sociohistórico específicamente centrado en la evolución de la socialdemocracia europea y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista francés (PS) durante los periodos que estos partidos han estado en el gobierno en sus respectivos países entre los años 2000 y 2017. Finalmente, y de forma ilustrativa, se realiza un apunte sobre la Gran Recesión, ya que la crisis económica empezada en 2008 atraviesa el periodo de análisis del presente trabajo, y por tanto, aunque no se analice específicamente en la tesis, puede haber influido en los fenómenos descritos en ella.

La primera parte, titulada *El tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales. Cambios sociológicos*, hace especial hincapié en las transformaciones que viven las sociedades actuales en relación con la economía, el trabajo y el bienestar; y, en el desarrollo de la sociedad de la información. La segunda parte, titulada *La evolución de la socialdemocracia*, en cambio, se centra, de forma sucinta, en el devenir particular de la socialdemocracia desde su refundación en los años sesenta del siglo XX hasta la actualidad, por entenderse que ese proceso se da inserto en los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos más generales que acontecen entre el siglo XX y el siglo XXI. En la última parte, titulada *La crisis económica de 2008*, se articula una caracterización básica de la Gran Recesión, que se incluye en marco contextual por tratarse de un acontecimiento histórico que influye directamente en el periodo de análisis.

El objetivo del marco contextual es ubicar la investigación a través de una descripción de los factores de cambio que pueden influir en el objeto de estudio y de un análisis sociohistórico que permita conocer de forma general cómo ha sido la trayectoria de los partidos representantes de la socialdemocracia tradicional en España y en Francia. Asimismo, la descripción de la crisis económica pretende hacer referencia al contexto económico particular que se ha vivido durante gran parte del periodo de análisis. De este modo, se ponen de manifiesto, sin la capacidad de constituir un compendio exhaustivo, distintos factores contextuales que en alguna medida pueden interferir en las configuraciones, percepciones y actuaciones de la ciudadanía y de los partidos políticos.

4.1. El tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales. Cambios sociológicos

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista (PS) francés llegaron al poder en los años ochenta en España y Francia en circunstancias nacionales diferentes. En España, el fin de la dictadura franquista llevó a una transición democrática que se consolidó con la victoria socialista y en Francia, la victoria del PS significó la verdadera alternancia en el poder en la Quinta República, después de dos décadas de gobiernos conservadores. Después, ya entrado el siglo XXI, los dos países volvieron a contar con gobiernos socialdemócratas. Aunque las circunstancias nacionales eran —y son— particulares, la coyuntura internacional, y en especial la europea, jugó un importante papel en el desarrollo de la socialdemocracia de ambos países. Así, las cambiantes dinámicas de fin de siglo coincidieron en buena medida con gobiernos socialistas en los dos países objeto de estudio. Al mismo tiempo que los partidos socialdemócratas se transformaban, también sus bases de apoyo estaban cambiando, como lo hacía toda la sociedad.

Para Bartolini y Mair (2008), los partidos representantes de la socialdemocracia europea eran los partidos de la clase trabajadora, pero tal y como señalan Przeworski y Sprague (1986) estas organizaciones vivieron una encrucijada cuando se hizo claro que el proletariado no iba a ser la mayoría de la población, pues las clases medias avanzaban al calor del Estado de bienestar. Entonces, los dirigentes socialdemócratas se dieron cuenta de que nunca conseguirían alcanzar el poder solo con los votos de la clase trabajadora. Así que estos partidos suavizaron sus programas electorales para poder atraer a un electorado interclasista (Tarrow, 2016: 139).

Según Przeworski y Sprague (1986: 50), “la búsqueda de aliados electorales obligó a los partidos socialistas a atenuar ese llamamiento exclusivo, esa visión particular de la sociedad que les convertía en la expresión política de los trabajadores como clase, un instrumento de la necesidad histórica”. La socialdemocracia perdió la base mayoritaria de clase trabajadora, pero inventó una fórmula —el partido de masas— que aguantó dos guerras mundiales y una depresión y que terminó por alumbrar un nuevo tipo de partido en los años sesenta: el partido de cuadros profesionalizado (Muir, 1997).

En ese tránsito, los obreros manuales que, en el origen de los partidos socialistas, en el siglo XIX, habían sido sus impulsores y principales apoyos, habían cambiado mucho. A finales del XX, ya prácticamente no existían sus dinámicas fundacionales y en el siglo XXI, las fronteras difusas entre clases y las identidades múltiples añaden nuevas transformaciones a las sociedades actuales.

De hecho, el factor trabajo ha vivido una gran transformación desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad, que, naturalmente, ha afectado de lleno a los partidos socialdemócratas, por ser

partidos que nacieron al calor de la Revolución Industrial y con la voluntad de defender los derechos de los asalariados.

El sistema socioeconómico fordista dominó la escena mundial occidental desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta los años setenta del siglo XX. El término fordismo, derivado del nombre del creador de la línea de montaje, Henry Ford, se atribuye al teórico Antonio Gramsci, cuando lo usó en su texto *Americanismo y fordismo* en 1934. El fordismo se define como un régimen de acumulación intensivo de capital, que prioriza la producción de los bienes de consumo de los asalariados del proceso productivo (Letamendia, 2009). Según Letamendia (2009: 108), de un modo general, “desde la primera revolución industrial hasta la Primera Guerra Mundial prevaleció en los grandes países capitalistas un régimen de acumulación extensivo; desde la Segunda Guerra Mundial, un régimen intensivo centrado en el crecimiento del consumo de masas (el régimen fordista). El modo social de regulación que acompañó a la acumulación extensiva fue competitivo; la regulación del régimen fordista ha sido monopolista-keynesiana”. A partir de 1945, la combinación con el keynesianismo permitió el desarrollo del Estado de bienestar, era la época de la concertación entre empresas, Estado y sindicatos. El radicalismo obrero se había terminado en gran medida y los asalariados estaban agrupados en sindicatos, que mantenían a las bases bajo su paraguas a cambio de subidas salariales si conseguían aumentar la productividad.

Tal y como explica Lipietz (1993), el modelo de desarrollo fordista descansaba sobre la organización del trabajo mecanizada (taylorismo); el acuerdo de empresarios y trabajadores sobre las reglas de juego a través de compromisos institucionalizados, con beneficios para la población asalariada; el Estado de bienestar, que convertía a prácticamente todos en consumidores; y, el crédito, asegurado por los bancos. Ese sistema había mantenido el alza en el nivel de vida de los países occidentales durante buena parte del siglo XX, pero a partir de 1973, con la guerra árabe-israelí, llegó el fin del modelo. “Sobrevino la crisis del fordismo y las distintas secuelas posfordistas en las que vivimos hoy” (Letamendia, 2009). Lash y Urry (1988) denominaron a ese momento de crisis como “el fin del capitalismo organizado”, Touraine (1969) y Bell (1973) prefirieron desarrollar el término de “sociedad postindustrial” para describir el mundo contemporáneo y otros autores, como Jameson (1991), Lyon (1994), Lash (1997) o Bauman (2005) hablaron de posmodernidad.

A partir de los años ochenta y la imposición de las tesis neoliberales, con el monetarismo y la propuesta de ajustes económicos del Fondo Monetario Internacional, se agravó la situación de los trabajadores de todo el mundo en general y de los países pobres de la periferia en particular

(Letamendia, 2009). La cadena de ensamble se había quedado obsoleta y empezaba a triunfar el concepto de la flexibilización en el trabajo.

El posfordismo alimentaba un nuevo modelo económico que alteraba lo que hasta entonces se conocía y se unía, además, a los cambios propiciados por la sociedad de la información o el conocimiento. En especial, se rompió el consenso socialdemócrata que había impulsado una idea social de Europa.

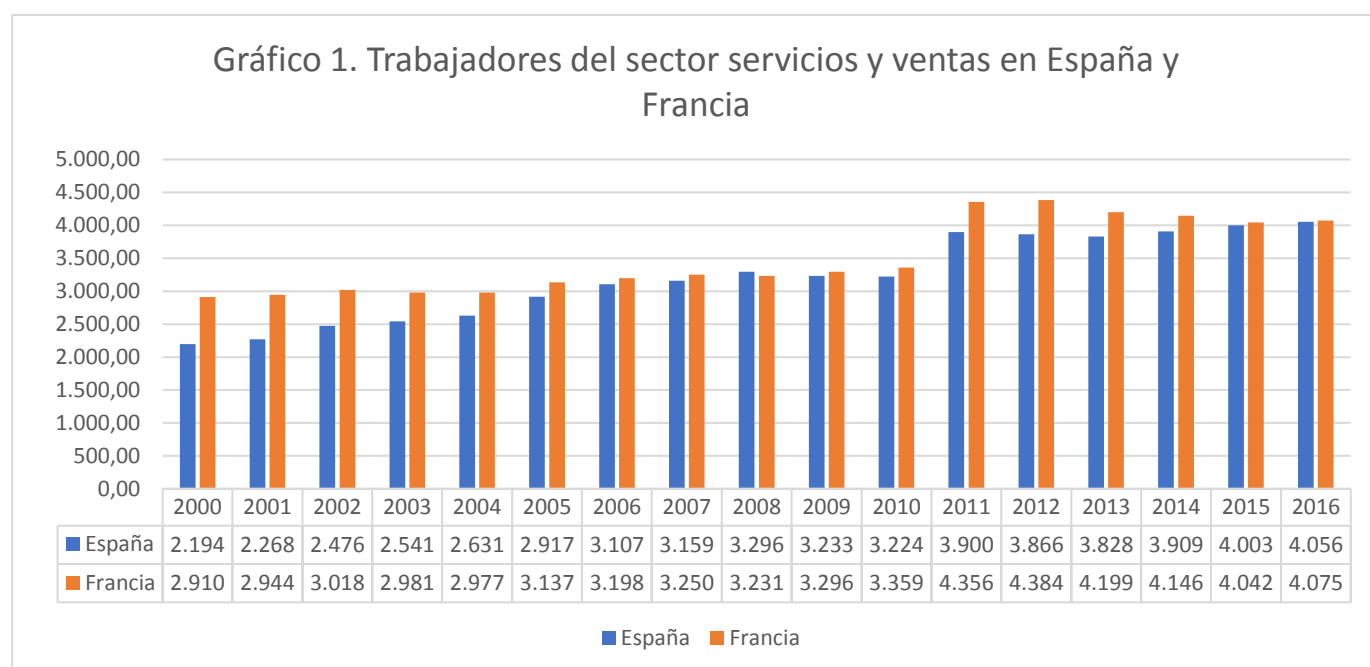
4.1.1. Los cambios en la economía, el trabajo y el bienestar. El postfordismo

Las sociedades capitalistas avanzadas asumían los supuestos del paradigma neoliberal y, con ello, las transformaciones que llevaba aparejadas en el terreno de la organización económica y la organización del trabajo. Letamendia (2009: 112) resume las diferencias en la organización de la fuerza del trabajo y del proceso productivo en el fordismo y el posfordismo de la siguiente forma. En el fordismo, la producción era de masas, los productos estandarizados, los trabajadores semi-cualificados, las tareas eran programadas y fijas y el trabajo se producía en grandes centros y en cadena. En cambio, con el posfordismo, la producción se caracteriza por ser a pequeña escala y por producir productos clientelizados, los trabajadores son multicualificados y sus roles de trabajo, flexibles; además, se cuenta con robots y equipos de trabajo computarizados, y todo ello se desarrolla en centros pequeños y medios. Estos cambios, entre otros factores, implicaron la transformación de las identidades de los trabajadores manuales y de la forma en que se articulaba la solidaridad entre ellos, así como su misma organización, cuando el paradigma neoliberal desarmó la fuerza sindical. La contraposición entre normas y valores tradicionales y normas y valores característicos de las sociedades postindustriales más centrados en los individuos que en las fuentes de autoridad ha propiciado individuos menos dependientes de identificaciones institucionales y lógicas sociales preestablecidas, y más proclives a acciones que encuentran su justificación en los intereses y expectativas personales. El nuevo discurso hegemónico es de la adaptación individual a las necesidades del sistema social y económico, lo que fomenta soluciones particularistas en las que lo colectivo no encaja (Benedicto, 2006).

La ecuación en que el obrero iba cada mañana a la fábrica, pertenecía a un sindicato y votaba al partido socialista parece que ya no existe. Puede que no exista ni el obrero tal y como se conocía, ni la fábrica ni el sindicato. Para Lash y Urry (1988: 285), la desorganización de las relaciones laborales contemporáneas, primero con el radicalismo descentralizado de los años sesenta y principios de los setenta, y después con el cambio de la negociación nacional a la empresarial

que ha acompañado la desaparición del neocorporativismo, han provocado la fragmentación de la identidad colectiva de la clase obrera. En este sentido, la consolidación primero de la clase media y, después, el ascenso de la clase de servicios, han hecho que los contornos de la clase obrera tradicional se desdibujen y ello, además, influye en sus opciones políticas expresadas mediante el voto.

La sociedad posmoderna o postindustrial se caracteriza también por el auge del sector servicios. De hecho, según los datos disponibles para en el periodo de análisis, se observa que tanto en España como en Francia los trabajadores empleados en servicios y ventas tienden al alza. Además, en los dos países existen cifras similares de trabajadores del sector terciario, según puede verse en el gráfico 1, que recoge datos de Eurostat.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Trabajadores de servicios y ventas presentados en miles.

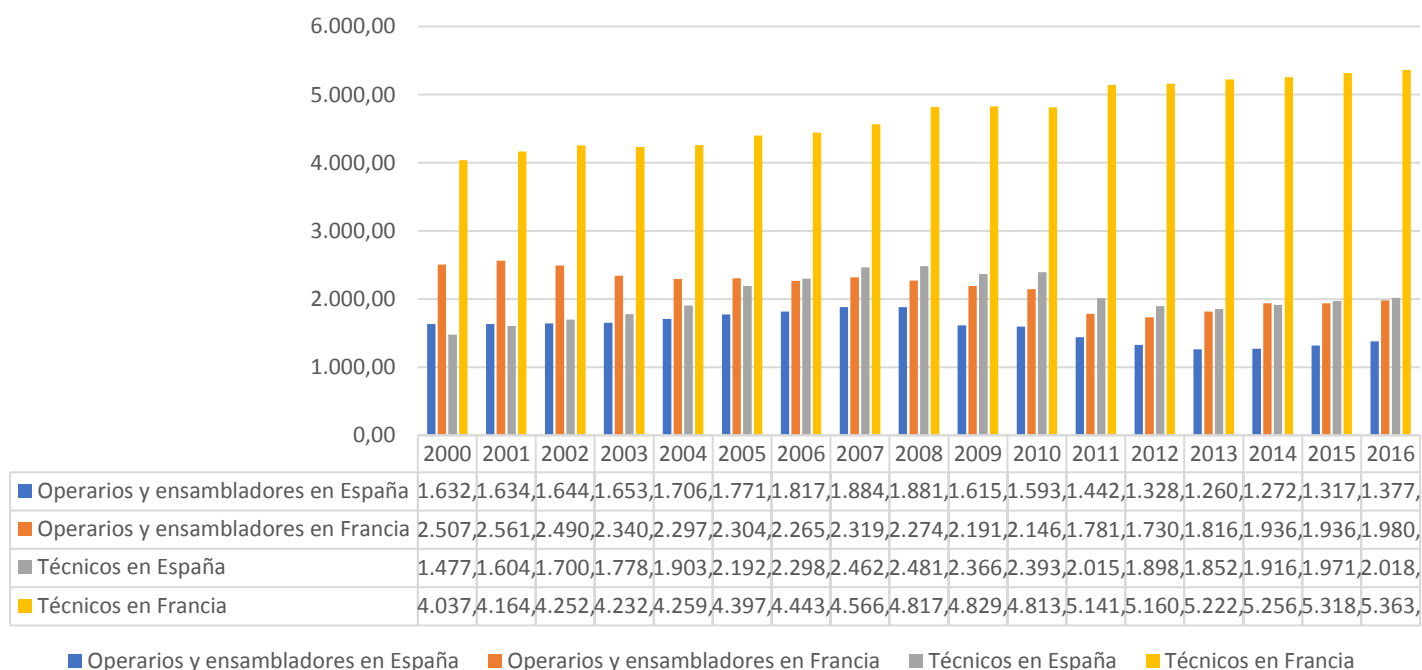
Así, tanto en España como en Francia se observa una tendencia al alza durante todo el periodo de análisis de los trabajadores de servicios y ventas, con especial importancia a partir del año 2011.

Según Eurostat, en el año 2000, en España había cerca de 2.2 millones de trabajadores de servicios y ventas, mientras que, en Francia, la cifra llegaba hasta los 2.9 millones. A partir del año 2005 España se acerca a los 3 millones (2.9) y Francia los super (3.1). En el año 2011, en Francia se superan los 4 millones y en España se supera ese número en 2015. En el año 2016, Francia contaba con 4.075 millones de trabajadores de servicios y ventas y España, con 4.056

millones. Los aumentos son considerables en términos de multiplicación de los trabajadores del sector. Mientras en España crece un 1,8, en Francia se incrementa un 1,4.

Por lo que se refiere a los trabajadores industriales o técnicos y a los trabajadores manuales u operarios, que conformaban tradicionalmente la base de votantes de la socialdemocracia, se ponen de manifiesto más diferencias entre los dos países, aunque la tendencia es similar.

Gráfico 2. Operarios y técnicos en España y Francia



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat. Trabajadores operarios y técnicos en España y Francia presentados en miles.

Tal y como puede apreciarse en el gráfico 2, el número de operarios de cadena de montaje en España tiende a la caída, igual que en Francia. En cambio, los trabajadores técnicos tienden al alza en ambos países. Sin embargo, según se aprecia con los datos de Eurostat para el periodo de análisis, el número de trabajadores técnicos en Francia es superior durante todo el periodo al de España.

En cuanto al número de operarios en España, se ve que al principio del periodo de análisis se situaba en torno a los 1.6 y 1.8 millones, mientras que a partir de 2008 se pone de manifiesto en mayor medida la caída, con cifras en torno a los 1.3 millones. Por lo que se refiere al número de operarios en Francia, entre los años 2000 y 2010 se observa que el número de trabajadores operarios superaba los 2 millones, pero luego cae en torno a los 1.7 y 1.9 millones. Además, en

ambos países la cifra de operarios en todo el periodo de análisis es inferior al de los trabajadores de servicios y ventas.

Por lo que se refiere a los trabajadores técnicos, en ambos países se da una tendencia al alza, aunque Francia cuenta con un mayor número de ellos. En España, el número de trabajadores técnicos ha oscilado entre los 1.4 y los 2 millones entre los años 2000 y 2016. En el país vecino, en cambio, la cifra se ha movido entre los 4 y los 5 millones, con lo cual se observa la tendencia al alza en este sector.

En Francia, según Tiberj (2013), las actitudes culturalmente conservadoras de los trabajadores manuales galos han hecho que éstos no apoyen a los candidatos socialistas tanto como lo hacían veinte años atrás. En cambio, sí se ha detectado un aumento del voto socialista entre los profesionales y la clase media, debido a su liberalismo cultural. Para el autor, el sistema político francés presenta una síntesis entre la vieja y la nueva política, lo que tiene implicaciones en cómo los partidos tradicionales, entre ellos el PS, se relacionan con su electorado. La vieja política se articula en divisiones socioeconómicas y, la nueva, sobre asuntos culturales e inmigración (Tiberj, 2013), por ello las bases de apoyo tradicionales de la socialdemocracia francesa parecen estar cambiando.

La transformación de la base social de la izquierda en Francia se nota más en las ocupaciones medias y altas. En 2007, los trabajadores de cuello azul votaron por la izquierda en una proporción similar a los ejecutivos y los trabajadores intelectuales, pero en una proporción menor que los votantes con ocupaciones intermedias (Tiberj, 2012). Para Tiberj, aunque la derecha también perdió apoyos, la erosión de la clase obrera tradicional de la izquierda la perjudicó en términos de votos porque ese grupo representa un quinto del electorado. El viraje de la vieja a la nueva política en Francia marcaría teóricamente el final de una relación privilegiada entre la izquierda y la clase obrera, aunque ello no es suficiente para explicar por qué algunas lógicas sociológicas se ven afectadas y otras no (Tiberj, 2012).

Por lo que se refiere a España, tras la transición democrática, el PSOE obtuvo sus mejores resultados en 1982, con el 37% de los apoyos, pero sus bases de apoyo también habían cambiado mucho desde sus orígenes en el siglo XIX, al hilo de las transformaciones sociales y políticas del país. La formación se convirtió en un partido *catch-all* a medida que el proletariado tradicional se iba extinguiendo y el PSOE ha demostrado contar con un electorado flexible en las distintas elecciones nacionales.

Según datos recogidos por Metroscopia en 2016, el electorado del PSOE es el que cuenta con más mujeres, un 56% frente a un 44% de hombres. Además, sus electores son de los que tienen

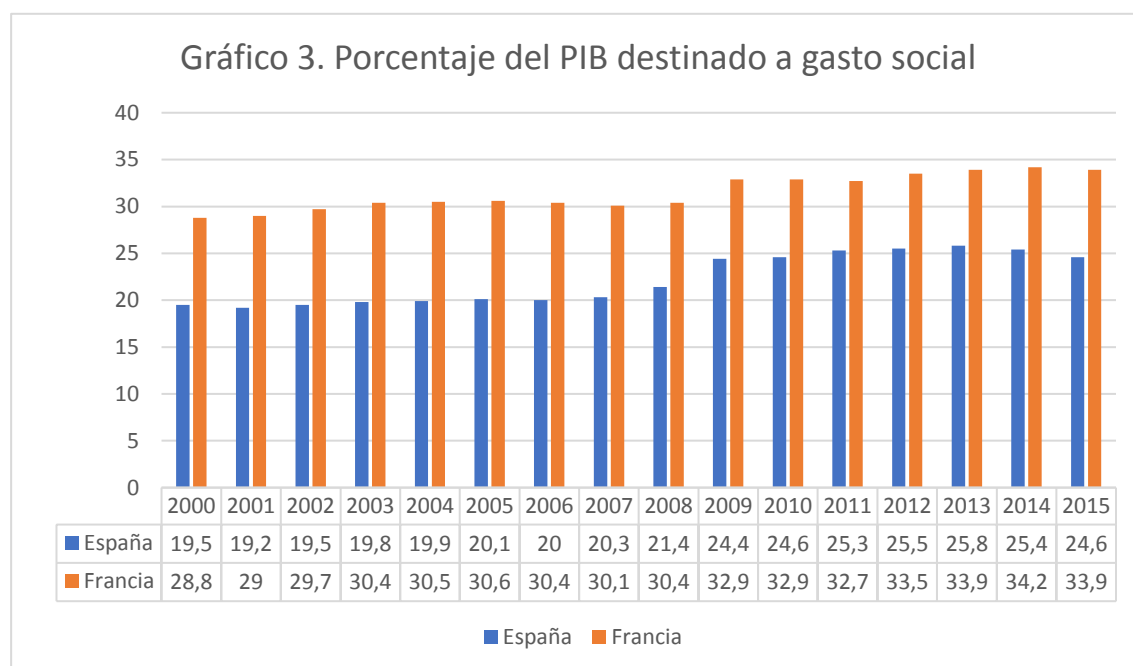
mayor edad, de media 55 años, junto a los del Partido Popular, que tienen de media 57 años. Del mismo modo, un 40% de su electorado cuenta solo con estudios primarios. En cuanto a las ocupaciones, según datos del CIS de 2015, los votantes que más apoyan al PSOE están jubilados (26%), son obreros cualificados (23%) o están parados (23%). A estas categorías les siguen los obreros no cualificados y los comerciantes o pequeños empresarios, con un 20% cada uno. Los que menos apoyan al PSOE son los estudiantes (10%), los profesionales por cuenta ajena y cuadros medios (11%) y el personal administrativo o de servicios (11%). Se observa que, en la actualidad, las bases socialdemócratas han dejado de estar restringidas a los asalariados, y que al igual que ocurre con otros partidos, los socialistas cuentan con simpatizantes en todas las categorías laborales. Es remarcable, sin embargo, que el mayor apoyo provenga de los jubilados, aunque el mismo apoyo (26%) recibe el Partido Popular entre ese sector de la población. Es probable que tras este hecho operen factores como la edad y los cambios acaecidos en las sociedades capitalistas avanzadas, puesto que las generaciones que ahora son pensionistas o están jubiladas han vivido gran parte de su vida bajo el desarrollo del Estado de bienestar en un sistema político de partido dominante con el PSOE, y luego bipartidista, con el PP y el PSOE alternándose en el poder.

Para Esping-Andersen (2000), lo que se ha quebrado es el capitalismo del bienestar y ello influye en las bases socialdemócratas en tanto que ataca puntos básicos de esta ideología, como la igualdad o la equidad. Según el autor, “el capitalismo del bienestar se convirtió en la economía política imperante en las economías avanzadas durante el último medio siglo” (Esping-Andersen, 2000: 17). Además, prosigue el autor, el capitalismo del bienestar señala cuatro innovaciones institucionales constitutivas de la historia del capitalismo. La primera es el Estado de bienestar, con su promesa de una ciudadanía social universal, de una nueva solidaridad social. La segunda es la democracia plena. La tercera, el pleno reconocimiento y la consolidación del sindicalismo y de las relaciones industriales modernas. Ello, además de regularizar el mercado de trabajo, introducía un elemento de derecho al empleo y de protección de los puestos de trabajo e implantaba un mínimo de democracia en las fábricas. La cuarta es el derecho a la educación y la expansión de los modernos sistemas de educación masiva. Como se ha visto, sin embargo, el factor trabajo se está viendo reconfigurado con el posfordismo, de manera que también el Estado de bienestar se ve afectado. Asimismo, también la sindicación obrera ha cambiado, igual que la representación política y la democracia, en consonancia con la expansión y flexibilización de la educación.

De todas las transformaciones, para Esping-Andersen (2000: 10) “lo que simboliza el malestar actual es la crisis del Estado de bienestar”.

En efecto, la construcción y el mantenimiento del bienestar a través del gasto social había sido uno de los baluartes de la socialdemocracia tradicional, frente a la tendencia liberal que propugna el adelgazamiento del gasto público.

Por lo que se refiere al gasto social de España y de Francia según los datos disponibles de Eurostat para los años que van del 2000 al 2015, se aprecian algunas diferencias entre las dos sociedades. Durante todo el periodo de análisis, en Francia el porcentaje del PIB dedicado a gasto social es mayor que en España, tal y como puede verse en el gráfico 3.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Por lo que se refiere a España, el porcentaje del PIB dedicado a gasto social entre los años 2000 y 2008 oscilaba entre 19% y el 21%, mientras que entre los años 2008 y 2015 se movía en torno al 24%, según datos de Eurostat. En Francia, el porcentaje del PIB dedicado a gasto social entre los años 2000 y 2008 estaba entre el 28% y el 30%, mientras que entre el año 2009 y el 2015, el porcentaje de gasto social se situaba entre el 32% y el 33% del PIB.

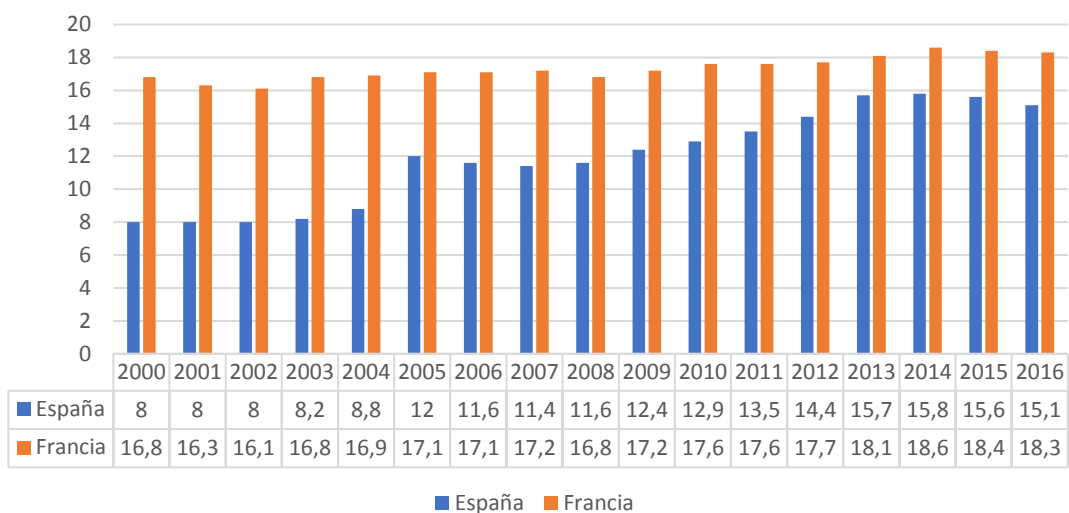
Esping-Andersen (2000), sin embargo, también señala los principales síntomas de la perenne crisis del Estado de bienestar, desde su comienzo. En la década de 1950, Esping-Andersen (2000: 10) indica que “crea inflación y perjudica al crecimiento”. En la década de 1960, que “no produce igualdad” y que es “demasiado burocrático”. En las décadas de 1970 y 1980 destacan la estanflación, el desempleo, el posmaterialismo y la excesiva carga sobre el gobierno. En la década de 1990, se ponen de relieve la globalización, el desempleo, las rigideces, las

desigualdades y la exclusión social y la inestabilidad familiar. Por tanto, parece ser que el Estado de bienestar siempre ha estado en cuestión a medida que las condiciones sociales y políticas mutaban.

Tal y como explica Esping-Andersen (2000: 11), el colapso del crecimiento anunciado en la década de 1950 se convirtió en un espectacular boom económico, al tiempo que crecía el gasto público. Durante las décadas de 1960 y 1970, los Estados de bienestar de todas partes dieron pasos importantes para asegurar unas prestaciones sociales suficientes y reducir las desigualdades. En realidad —y este es un aspecto vital—, fue este, y no la década de 1950, el auténtico período de consolidación del Estado de bienestar. Desde 1960, hasta mediados de la década de 1970, el gasto público total (expresado como porcentaje del PIB) se elevó una media del 30%, debido casi exclusivamente al aumento de los gastos sociales. En los años ochenta y los años noventa, la tendencia fue adelgazar las inversiones sociales, en la estela de los gobiernos neoconservadores británico y norteamericano; y, después, en los años 2000, llegó la crisis de 2008 y nuevos planes de austeridad. Pero, el problema actual, según Esping-Andersen (2000: 12), es la rigidez que comporta el Estado de bienestar. “Básicamente, el Estado de bienestar genera demasiada protección allí donde se necesita flexibilidad, demasiada igualdad allí donde la diferenciación está a la orden del día” (Esping-Andersen, 2000: 12). Esto influye en las bases socialdemócratas en tanto que ataca uno de los pilares de la redistribución.

Por lo que se refiere a los casos de estudio, se ponen de manifiesto las transformaciones de la sociedad postindustrial señaladas en torno al trabajo y los trabajadores, con consecuencias como la precariedad laboral, los cambios en la calidad del empleo en cuanto a la carencia de estabilidad, la escasez de la jornada y el menor salario que lleva aparejada o la contratación.

Gráfico 4. Porcentaje de trabajadores a tiempo parcial en España y Francia



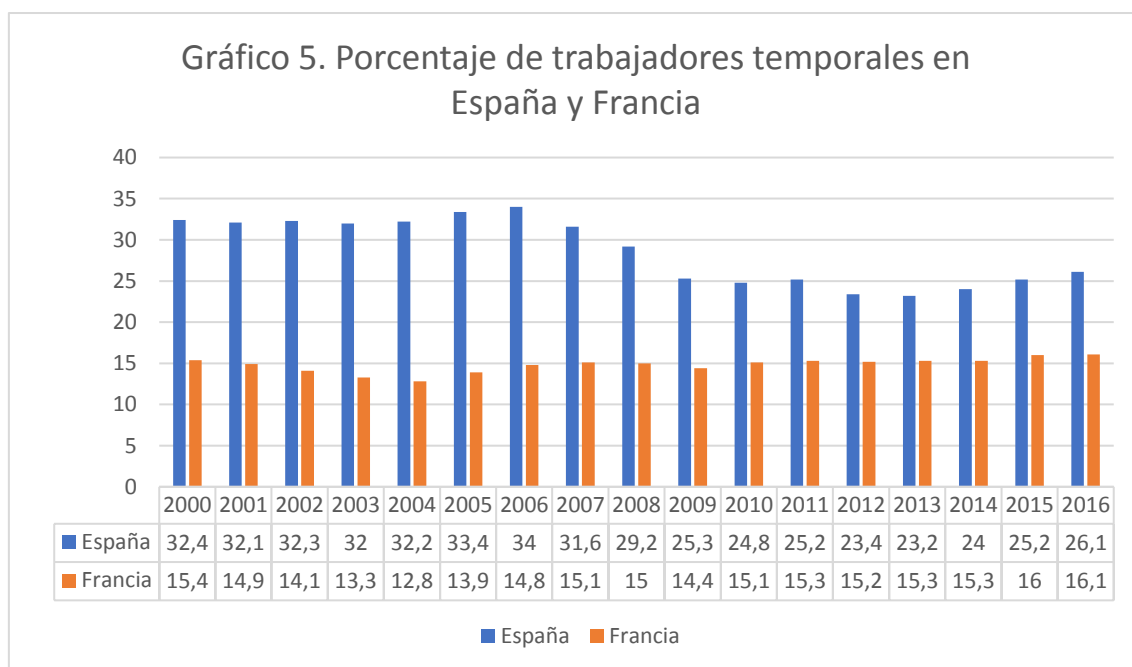
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

En lo referente al empleo parcial como indicador de la merma en la calidad del trabajo, ya que acarrea menor salario y menos prestaciones, durante el periodo de análisis, se puede observar que tanto en España como en Francia se da una tendencia al alza del número de trabajadores a tiempo parcial, si bien en España la tendencia es más acusada.

Según los datos disponibles de Eurostat, recogidos en el gráfico 4, en Francia existe un mayor número de trabajadores a tiempo parcial durante todo el periodo de análisis. De hecho, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial del total de empleados se sitúa entre el 16% y el 18%, pero en España se produce una subida más brusca de este tipo de trabajadores durante el periodo de análisis.

Así, en el año 2000, en España había un 8% de trabajadores a tiempo parcial, un porcentaje que fue subiendo hasta el 2016, cuando llegó al 15%. Entre los años 2000 y 2004, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial estaba en torno al 8%; entre 2005 y 2011, alrededor del 12%; y, entre el 2012 y el 2016, el porcentaje subió hasta alrededor del 15%.

En cuanto a la calidad del trabajo y la inestabilidad, cabe tener en cuenta el porcentaje de trabajadores que tienen un empleo temporal en relación al total de trabajadores.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

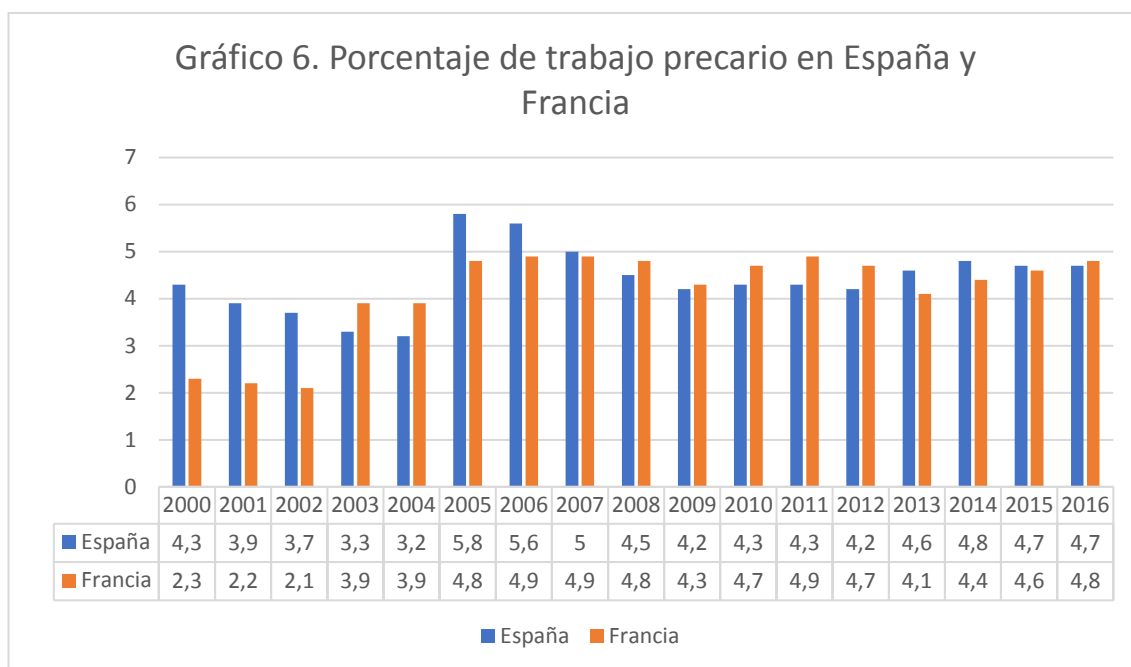
Según los datos de Eurostat recogidos en el gráfico 5, se observa que durante todo el periodo de análisis el porcentaje de trabajadores en España con un contrato temporal es superior al de Francia, si bien ha disminuido ligeramente. En el país galo, en cambio, el porcentaje es menor durante todo el periodo de análisis, pero tiende ligeramente a la subida.

De esta forma, entre los años 2000 y 2007, el porcentaje de trabajadores temporales en relación al total de empleados en España se movía alrededor del 30%. En 2008 se situó en el 29% y desde entonces osciló entre el 24% y el 26%. En Francia, en cambio, se observa una mayor estabilidad en el porcentaje de trabajadores temporales, que entre el 2000 y el 2017 oscila entre el 13% y el 16%.

Según los datos de Eurostat que pueden verse en el gráfico 6, el porcentaje de trabajo precario ha tendido a subir en los dos países durante el periodo de análisis.

Entre los años 2000 y 2003, España y Francia mostraban valores alejados en cuanto a trabajo precario, del 4%, el 3,9% y el 3,7% en España y de valores alrededor del 2% en Francia, pero a lo largo del periodo de estudio, los dos países se han ido acercando y alternándose en cuanto a mayor nivel de trabajo precario, según los datos de Eurostat.

De esta forma, España tuvo un pico del 5% de trabajo precario en 2007 y luego se situó en valores alrededor del 4%, como Francia, que alcanzó valores del 4,9% en 2006, 2007 y 2011 y sus porcentajes siguieron hasta el año 2016 alrededor de esa cifra.



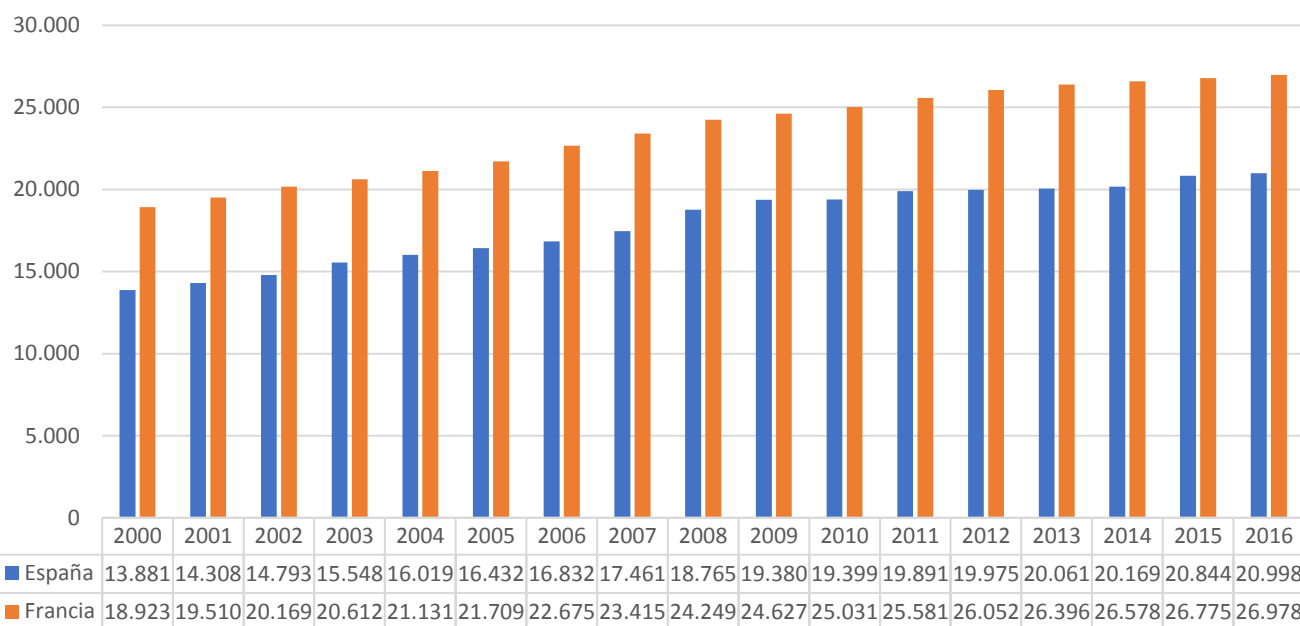
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Otro de los factores relacionado con el trabajo es el salario, que a tenor de los datos ofrecidos por Eurostat en el gráfico 7, muestra una tendencia al alza durante el periodo de análisis. Además, la media de ganancia neta anual es superior en Francia que en España. En el país galo el salario medio neto por año se mueve entre los 18.923 euros del año 2000 y los 26.978 euros del año 2016. En el caso de España, las ganancias anuales netas se situaban en los 13.881 euros en el año 2000 y fueron creciendo hasta los 20.998 euros de 2016. Además, mientras en los años anteriores a la Gran Recesión el salario crece de forma continua y estable, después de la crisis ese crecimiento se relantiza. Del mismo modo, la relantización del crecimiento se nota más en España que en Francia.

Por lo que se refiere a la proporción de trabajadores con bajos salarios, según los datos disponibles de Eurostat, se observa que en España eran en 2006 el 13,37% de los trabajadores totales; en 2010 eran el 14,66%; y, en 2014 eran el 14,59%. Por lo que se refiere a Francia, en 2006 el 7,13% de los trabajadores tenían bajos salarios, en 2010 eran el 6,08% y en 2014, el 8,81%.

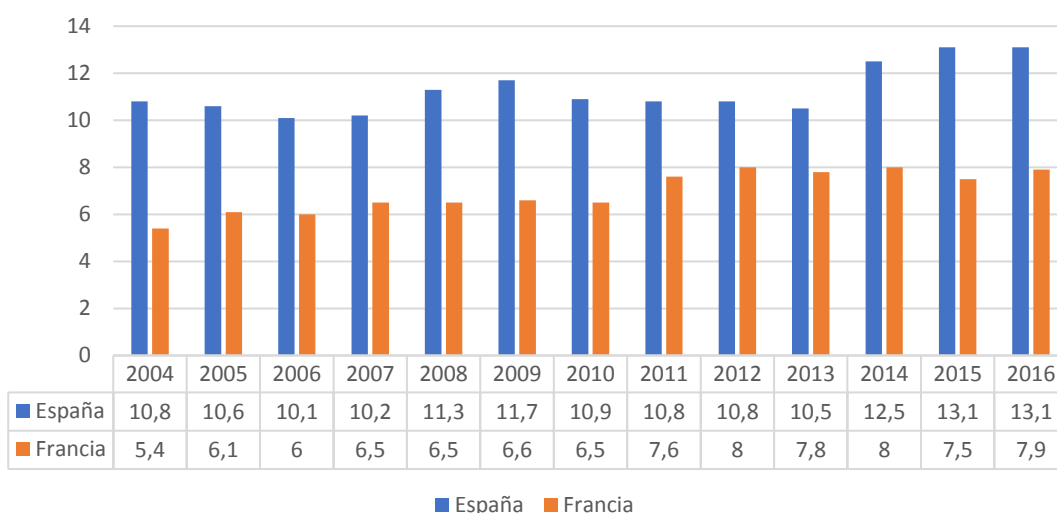
La situación laboral de la mayoría de trabajadores dista de ser ideal, en especial desde la Gran Recesión, puesto que en la actualidad es posible tener trabajo y estar en riesgo de pobreza. Este fenómeno, además, se da tanto en España como en Francia, los dos países de análisis.

Gráfico 7. Media de ganancias netas anuales en España y Francia



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Gráfico 8. Porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza en España y Francia



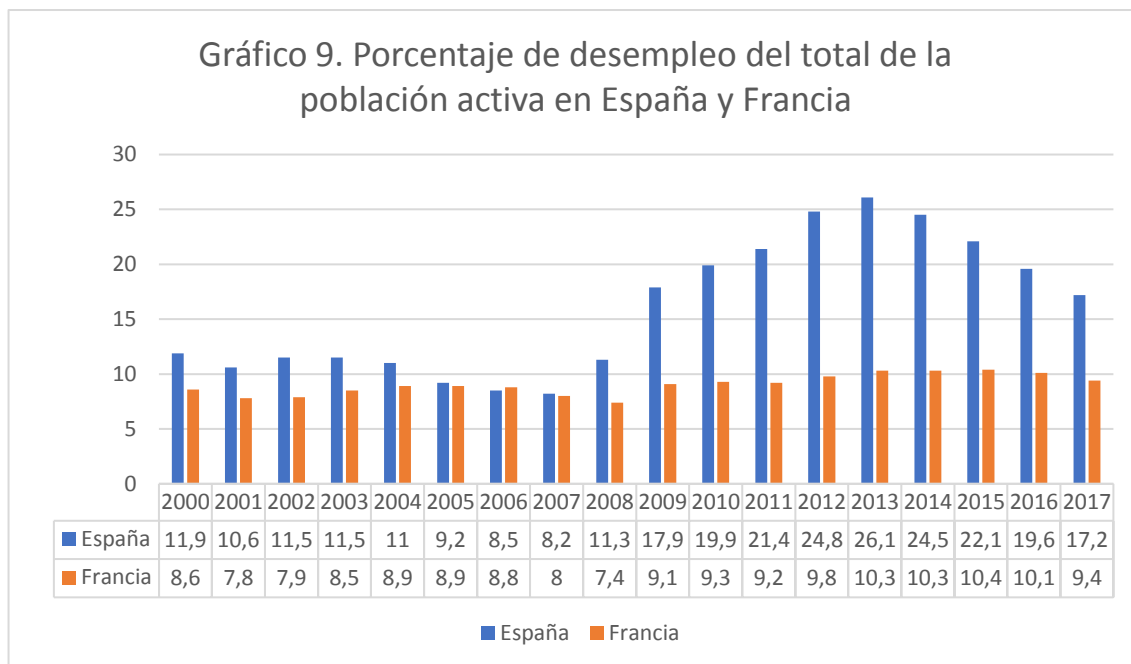
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

El porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza según Eurostat ha sido mayor en España que en Francia, tal y como indican los datos disponibles para el periodo de análisis, como puede verse en el gráfico 8. Del mismo modo, el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza en ambos países tiende al alza durante todo el periodo de análisis.

Según los datos disponibles, en el año 2004, el 10,8% de los trabajadores mayores de 18 años, excluyendo los aprendices, en España, estaba en riesgo de pobreza, porcentaje que se repitió en los años 2011 y 2012. De forma similar, en 2010 el porcentaje se situó en el 10,9%. En cambio, en 2005, 2006 y 2007 el porcentaje era del 10,6%, 10,1% y 10,2%, respectivamente. Similarmente, en 2013 el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza era del 10,5%. En los años 2008 y 2009, el 11,3% y el 11,7% de trabajadores estaban en riesgo de pobreza, según Eurostat. En los últimos años del periodo de análisis se observa que el 12,5% de los trabajadores, en 2014, y el 13,1% de ellos en 2015 y 2016 estaba es riesgo de pobreza.

Por lo que se refiere a Francia, donde la tendencia es al alza como en España, el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza en 2004 era del 5,4%. Entre los años 2005 y 2010, el porcentaje se movió entre el 6% y el 6,5%. El porcentaje siguió en aumento en los años siguientes, con el 7,6% de trabajadores en riesgo de pobreza en 2011; el 8% en 2012; el 7,8% en 2014; el 7,5% en 2015; y, el 7,9% en 2016.

Además, durante el periodo de análisis se pone de manifiesto una tendencia creciente en el desempleo, que caracteriza también a las sociedades postfordistas, particularmente notorio en España.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Tal y como se aprecia en el gráfico 9, España ha tenido mayores porcentajes de personas desempleadas en relación al total de la población activa en comparación con Francia, aunque en los dos países se da una tendencia al alza en el fenómeno del desempleo. Tanto en España como en Francia, los peores niveles de desempleo se dan entre los años 2012 y 2015.

En el inicio del periodo de análisis, en el año 2000, el porcentaje de desempleados en España era del 11,9%. Similarmente, en los años siguientes se dieron porcentajes del 10,6% en 2001; 11,5% en 2002 y 2003; y 11% en 2004. En 2005, 2006 y 2007 el desempleo baja ligeramente, con el 9,2%, el 8,5% y el 8,2%. Sin embargo, a partir de 2008 el desempleo sube en España.

De hecho, en el año 2008 se registró un porcentaje de desempleo del 11,3%, para subir hasta el 17,9% en 2009, al 19,9% en 2010, al 21% en 2011, al 24% en 2012 y al 26% en 2013, siendo este el mayor porcentaje del periodo de estudio. En 2014 el desempleo descendió hasta el 24% de nuevo, para seguir bajando al 22% en 2015, al 19% en 2016 y al 17% en 2017.

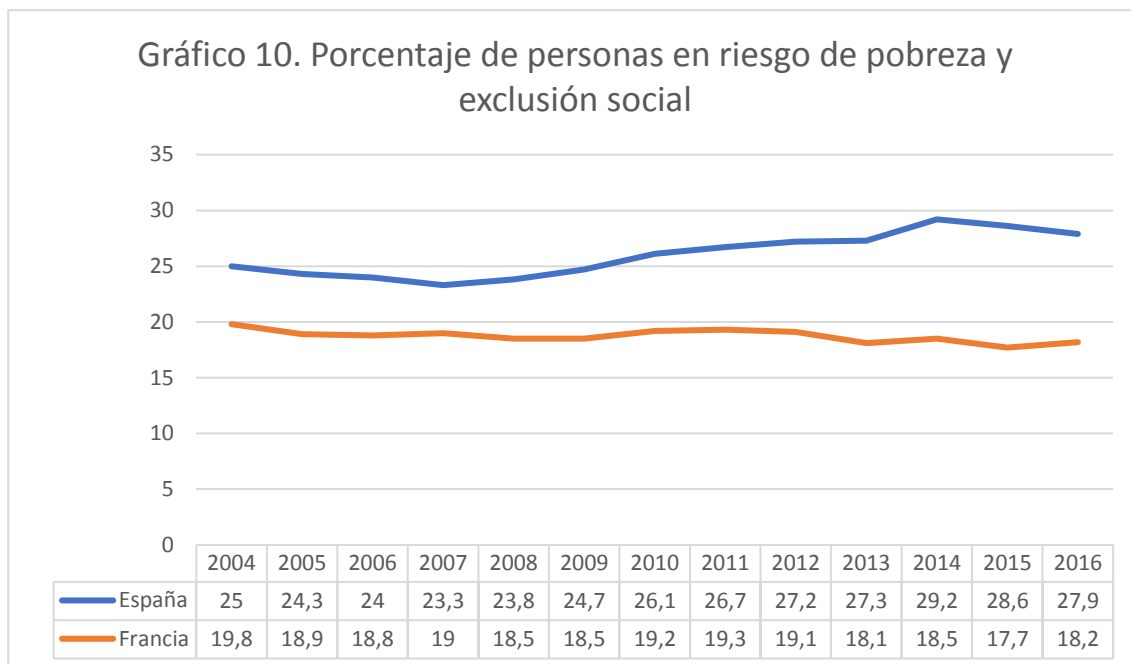
En Francia, donde la subida del desempleo es mucho más contenida, se dan porcentajes de desempleo menores que en España. Entre los años 2000 y 2008, Francia tiene porcentajes de desempleo que se mueven en torno al 8%. En los años siguientes, entre los años 2009 y 2012 el desempleo se situaba en el país galo alrededor del 9% y entre 2013 y 2016, estaba en el 10%. En 2017, el porcentaje de desempleo en Francia descendió al 9,4%.

Como se apuntaba más arriba, después de la Segunda Guerra Mundial, la mezcla de fordismo y keynesianismo alumbró el Estado de bienestar, que en última instancia reducía la desigualdad y convertía a la mayor parte de la población en consumidores. La consecución de una igualdad mayor debía repercutir, además, en la paz social. Pero, también contribuyó a transformar las identidades de los asalariados. Tal y como explica Esping-Andersen (2000: 17) “en la primera parte del siglo XX, el problema de la igualdad era, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, un eco de la cuestión marxista de la clase. (...) Los socialistas, por su parte, utilizaban el lenguaje de la lucha de clases, y, cuando eran menos marxistas, hablaban de conmisericordia social. La adhesión de la posguerra al keynesianismo y el Estado de bienestar pareció haber resuelto la cuestión social de una vez por todas, y, por tanto, la igualdad se convirtió en algo más individualizado, en una cuestión de posibilidades de movilidad”. El trabajador ascendió a clase media, era un trabajador acomodado, y parecía que la cuestión de la igualdad debía replantearse. “El proyecto igualitario remodelado presentaba una mezcla totalmente nueva de colectivismo e individualismo. Por un lado, la ciudadanía social prevalecía sobre las viejas solidaridades de clase; por otro, se apartó de un manotazo la tosca apelación del *laissez-faire* a la autosuficiencia del individuo, y los liberales unieron sus armas a los socialdemócratas en la batalla por la igualdad de oportunidades. En realidad, el capitalismo del bienestar fue, a menudo, una síntesis del igualitarismo liberal y socialdemócrata” (Esping-Andersen, 2000: 18).

Con todo, otro de los rasgos que caracteriza a las sociedades postindustriales occidentales es el nivel de pobreza y desigualdad que sufren sus ciudadanos.

Según los datos disponibles de Eurostat para el periodo de análisis, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión ha tendido al alza en España. Por el contrario, en Francia presenta una ligera tendencia a la baja. Tal y como puede verse en el gráfico 10, entre los años 2004 y 2009 el porcentaje de población que se veía en riesgo de pobreza o exclusión en España se movía entre el 23% y el 25%. Este porcentaje aumentó entre los años 2000 y 2016, cuando se situó entre el 26% y el 29%.

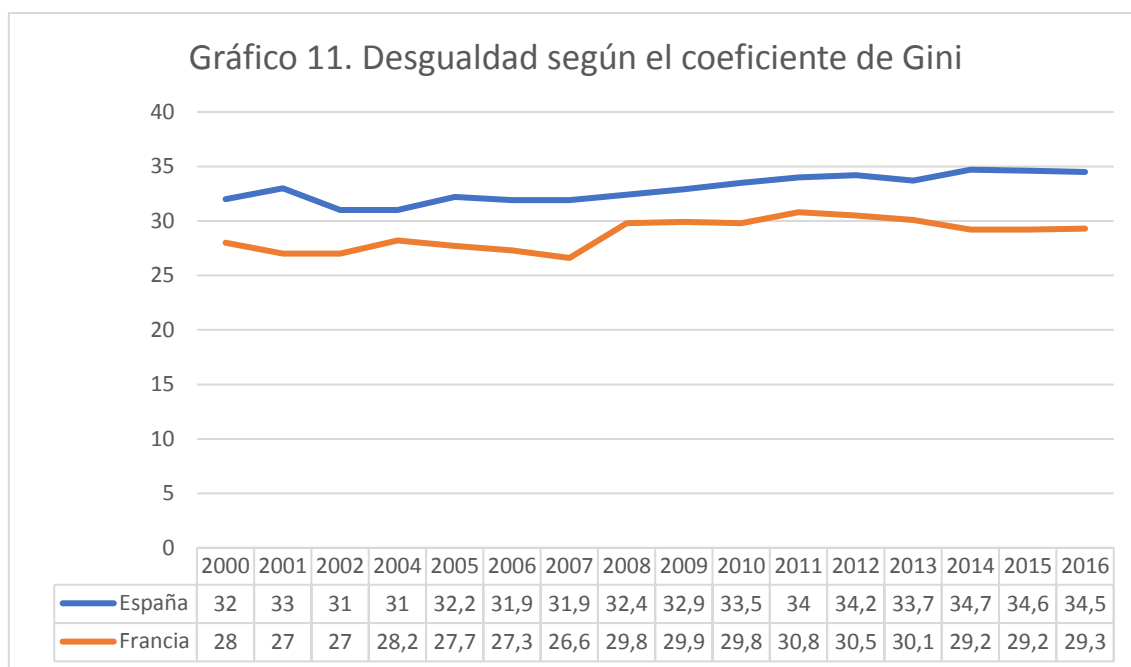
En Francia, sin embargo, el porcentaje de personas que estaban en riesgo de pobreza o exclusión social durante el periodo de estudio era menor que en España y tendió a disminuir ligeramente. Los porcentajes de población en riesgo de pobreza y exclusión social se movían en Francia alrededor del 19%, aunque bajó hasta el 17,7% en 2015.



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

El coeficiente de Gini es un indicador que sirve para observar el nivel de desigualdad de los países y, como puede observarse en el gráfico 10, España se presenta como una sociedad más desigual en comparación con Francia durante todo el periodo de análisis. Sin embargo, según los datos disponibles, los dos países presentan una tendencia al alza en la desigualdad.

El coeficiente de Gini para España entre los años 2000 y 2016 ha oscilado entre el 31 y el 34, mientras que para Francia se ha movido entre el 26 y el 30. Los años en que ha habido más desigualdad en España han sido 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016 y en Francia han sido los años de la Gran Recesión (2008 - 2016).



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

Con el cambio del siglo XX al XXI, el capitalismo del bienestar ha llegado a su declive y tal y como remarca Esping-Andersen (2000: 18,19), si el diagnóstico es correcto, “nos enfrentamos a un ‘fracaso’ simultáneo del Estado de bienestar, el mercado de trabajo, la formación y la familia”. Todo ello son elementos sociológicos cuya transformación afecta en mayor o menor grado a las bases de apoyo tradicionales de la socialdemocracia.

El proletariado se convirtió en clase media en la segunda mitad del siglo XX, pero con el comienzo del nuevo milenio la crisis económica ha puesto en jaque, precisamente, a mucha gente de nivel medio. Según Bologna (2006), en la sociedad postfordista la clase media ha sufrido de un modo particular la crisis de la *new economy* por varias razones. En primer lugar, por el desmantelamiento del empleo público, que en última instancia ha provocado el empobrecimiento de los sectores medios de la sociedad. En segundo lugar, Bologna (2006) señala la transformación del papel de los cuadros medios en las empresas, que los ha llevado a la frustración y a una profunda competitividad. En tercer lugar, se encuentra la degradación de los servicios públicos y el elevado costo de los alquileres. Además, el autor añade el problema de la reinserción laboral de la gente de mediana edad y el desempleo. Así, para Bologna (2006), “el núcleo central y mayoritario del trabajo asalariado, la parte más consistente de los núcleos familiares de tipo tradicional, ha sufrido en los últimos años, por varios motivos, una transformación de sus condiciones de trabajo y de vida que ha causado desequilibrios e incertidumbres en el plano del valor más importante de la clase media, el de su estatuto social”.

Las distintas transformaciones del cambio de siglo han supuesto factores que erosionan las identidades políticas tradicionales. De hecho, Paramio (2015) argumenta que en la actualidad “la identificación política aparece como un dato cambiante” y que existe una degradación de los alineamientos partidarios, hay menos electores identificados con un partido y su vínculo es más débil. Del mismo modo, también las crisis sociales pueden provocar desalineamientos, sobre todo relacionados con la desilusión de los votantes. Además, otro fenómeno general que afecta a las bases socialdemócratas tradicionales es la aparición de la desconfianza política, que Paramio (2015) sitúa, precisamente, en los años ochenta, cuando el alejamiento de la política se convierte en frustración y, después, la política pasa a ser vista como ineficaz.

4.2. Transformaciones sociales. La sociedad de la información

La economía, el bienestar y el trabajo han cambiado en los últimos años, pero no son los únicos elementos que se han transformado. En efecto, lo han hecho las sociedades en su conjunto, tanto a escala local como global. En todo este proceso, las tecnologías de la información y de la comunicación han jugado un papel clave, ya que influyen en el desarrollo de la vida individual y colectiva, además de en los factores antes comentados.

Ante la envergadura de los cambios, Touraine (1971) afirmó que ante nuestros ojos se estaban formando sociedades de tipo nuevo y las llamó postindustriales, para referirse a la distancia que las separa de las sociedades de la industrialización; tecnocráticas, para designarlas según el poder que las domina; y, programadas si se definen por su modo de producción y organización económica. Independientemente de la denominación, lo más nuevo de estas sociedades es que el crecimiento “depende mucho más directamente que antes del conocimiento, y, por consiguiente, de la capacidad de la sociedad para crear creatividad” (Touraine, 1971: 7). En el contexto de la sociedad programada, según Touraine (1971: 19), la clase obrera ya no es un actor histórico privilegiado.

Bell (1976) profundizó en el concepto de sociedad postindustrial, término acuñado desde principios de los años sesenta, para referirse a cinco dimensiones de cambio con respecto a las sociedades industriales. Bell (1976: 30) se refirió al sector económico, en tanto que cambiaba de una economía productora de mercancías a otra productora de servicios; a la distribución ocupacional, con la preeminencia de las clases profesionales y técnicas; al principio axial, basado en la centralidad del crecimiento teórico como fuente de innovación y formulación política de la sociedad; la orientación futura, con el control de la tecnología y de las contribuciones tecnológicas; y, a la toma de decisiones, con la creación de una nueva tecnología intelectual. De

ello se deduce, pues, que el obrero de la fábrica, otrora símbolo de la industrialización, perdía su sentido en favor de la élite del sector servicios.

Para Lyon (1994: 72), algunas de las condiciones sociales y técnicas que Bell encuadraba en el postindustrialismo son, en realidad, contribuciones para preparar el terreno de la posmodernidad. En efecto, el concepto de posmodernidad cobró entidad analítica en los años ochenta y noventa, y se refiere al “agotamiento de la modernidad” poniendo el énfasis en lo social (Lyon, 1994: 21). Para el autor, o bien se forma un nuevo tipo de sociedad o bien se inaugura una nueva fase del capitalismo, pero, en cualquier caso, “se ponen en tela de juicio los modelos anteriores de análisis social y práctica política” (Lyon, 1994: 22).

Según Lash (1990), que usa el término posmodernismo, la noción tiene un significado estrictamente cultural, pero que influye en la identidad de la clase obrera. Para el autor, igual que el modernismo influyó en la identidad burguesa, también el posmodernismo tuvo su efecto en la identidad de la clase trabajadora. Para Lash (1990: 48), se trata de un proceso complejo en el que destaca el descentramiento de la identidad individual y de la identidad colectiva, que coincidieron con la fragmentación de las comunidades de clase obrera y con la reducción numérica de la clase obrera como porcentaje de la población. “A medida que el espectáculo posmodernista reemplaza al relato realista, la cultura de masas tenderá a desplazar la cultura de clase. (...) El resultado es el individualismo instrumentalista y el consumismo insensato” (Lash, 1990: 52). De hecho, Jameson (1996: 10) define la posmodernidad como “el consumo de la pura mercantilización como proceso”.

Bauman (2005, 2006, 2007), aunque se inclinaba por el término de “modernidad líquida”, también hacía referencia a la posmodernidad a la hora de referirse a las transformaciones contemporáneas de la sociedad e hizo especial hincapié en la incertidumbre que provoca el desarrollo de la vida en una sociedad que cambia a un ritmo vertiginoso, lo que influye en la construcción de la identidad y en la percepción fragmentaria del mundo. “La vida líquida es una vida precaria y vivida en condiciones de incertidumbre constante” (Bauman, 2006: 10), de lo que se deduce que las condiciones inestables rodean al individuo e impiden consolidar hábitos, costumbres o identificaciones duraderas.

En la posmodernidad juegan un papel preponderante las tecnologías de la información y la comunicación, que a su vez facilitan procesos como la globalización y el consumismo (Lyon, 1994: 22). De ahí que el concepto de sociedad de la información haya sido tratado por varios autores para describir el alcance e importancia del conocimiento en la sociedad actual y el impacto de las tecnologías digitales, así como el creciente papel de los medios de comunicación.

Lyotard (1984: 5) argumentaba que "el conocimiento se ha convertido en la principal fuerza de la producción en las últimas décadas". El autor, para quien el conocimiento se transforma en un cierto tipo de mercancía, señalaba que la sociedad postindustrial hace que el conocimiento sea accesible a los profanos, porque las tecnologías del conocimiento y la información, al difundirse en la sociedad, rompen las narrativas basadas en estructuras centralizadas y grupos específicos de poder. Lyotard (1984) denotaba estas circunstancias cambiantes, como condiciones de la sociedad posmoderna.

Así, la sociedad de la información empieza cuando el hombre es capaz de producir el primer ordenador, construido en la Universidad de Pennsylvania en 1946 (Giraldo, 2012). Para Masuda (1984: 68), el ordenador es una máquina lógica que cumple con las tres funciones básicas del procesamiento de información: memoria, cálculo y control, y que, por tanto, puede sobrepasar la capacidad humana para generar información. Según el autor, la sociedad de la información es un nuevo tipo de sociedad humana completamente diferente de la sociedad industrial. La producción de valores de información, y no la de valores materiales, es la fuerza conductora motriz que permanecerá detrás de la formación y del desarrollo de la sociedad (Masuda, 1984). Siguiendo las aportaciones de Porat (1977), la sociedad de la información también ha sido definida como un sistema de relaciones sociales, principalmente económicas, en el que más de la mitad del PIB es producido a través de los procesos de la economía de la información (Giraldo, 2012). Según Bell (1980), la sociedad postindustrial aportó el marco social para la sociedad de la información, en que, efectivamente, las telecomunicaciones y los ordenadores eran esenciales para los intercambios sociales y económicos, la creación de conocimiento y la organización del trabajo.

Masuda (1984: 50, 51) diferenció los modelos de sociedad industrial y sociedad de la información en tres niveles: innovación tecnológica, estructura socioeconómica y valores. Por lo que se refiere a la innovación tecnológica, en la sociedad industrial predominaba la máquina de vapor como núcleo, la función básica era la sustitución o ampliación del trabajo físico y la fuerza productiva era material. En cambio, explica Masuda (1984), en la sociedad de la información el núcleo es el ordenador, la función básica es la sustitución o la ampliación del trabajo mental y la fuerza de producción se basa en la información. En cuanto a estructura socioeconómica, entre otros aspectos, el autor destaca que, en la sociedad industrial, el mercado era el nuevo mundo y las colonias, y que en la sociedad de la información se amplían las fronteras del conocimiento y el espacio de la información. Las industrias principales eran las de fabricación, mientras que ahora son las intelectuales. La estructura industrial se basaba en las industrias primarias, secundarias y terciarias, mientras que en la actualidad predomina la estructura industrial matriz.

Además, de la economía de bienes (con la división del trabajo, la separación de la producción y el consumo) se está pasando a la economía sinérgica (con la producción conjunta y la utilización compartida); de la empresa como sujeto socioeconómico, ya sea pública o privada, se pasa a la empresa privada y las multinacionales, y a la concentración del capital en el sector privado y en el sector financiero, con la distribución de pérdidas. Por otra parte, también son diferentes, según Masuda (1984), las fuerzas de cambio social entre la sociedad industrial y la sociedad de la información. Los sindicatos y las huelgas propias de la era industrial dan paso a los movimientos ciudadanos y, como problemas, el desempleo es común a las dos sociedades, pero la guerra y el fascismo, según Masuda (1984), dan paso al shock del futuro, el terrorismo y la invasión de la intimidad. Por lo que se refiere a los valores diferenciales entre la sociedad industrial y la sociedad de la información, del valor material y la satisfacción de las necesidades fisiológicas se pasa a la valoración del tiempo y a la satisfacción de las necesidades de consecución de objetivos. Los patrones éticos que dominaban anteriormente eran los derechos fundamentales frente a la apertura cultural de la sociedad de la información y, el espíritu de la época, como lo define Masuda (1984), era el Renacimiento en la sociedad industrial y la globalización en la sociedad de la información. Las bases tradicionales de apoyo a la socialdemocracia clásica observan cómo el mundo de los asalariados y trabajadores de la fábrica se desvanece y se transforma en algo nuevo.

La sociedad de la información se pone de manifiesto a escala global y particularmente en los países objeto de estudio con el desarrollo de lo que forma su espina dorsal, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Según un informe técnico de la Comisión Europea publicado en 2017, el sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación representaba entre 2006 y 2014 entre el 3,6% y el 3,9% del valor añadido en las tendencias de la economía y la industria españolas. Además, este sector ha empleado entre los mismos años alrededor del 2% de trabajadores. Tal y como indica el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad con datos de 2016, España es uno de los mercados de nuevas tecnologías de la comunicación y la información más importantes por su volumen en Europa, con 105.868 millones de euros. Del mismo modo, operan en el país 33.000 compañías dedicadas al sector, incluyendo contenido digital, con más de 471.000 trabajadores. En 2016, el valor agregado bruto a precios de mercado representó el 4,2% del PIB español.

En Francia, tal y como puede verse con los datos de la Comisión Europea, las nuevas tecnologías han dado empleo a casi el 3% de los trabajadores entre 2006 y 2014 y este sector representa un valor añadido de entre el 4,1% y el 4,8%. Según el Ministerio de Economía y Finanzas francés, con datos de 2015, existen 108.683 empresas dentro del sector de las TIC con 685.884

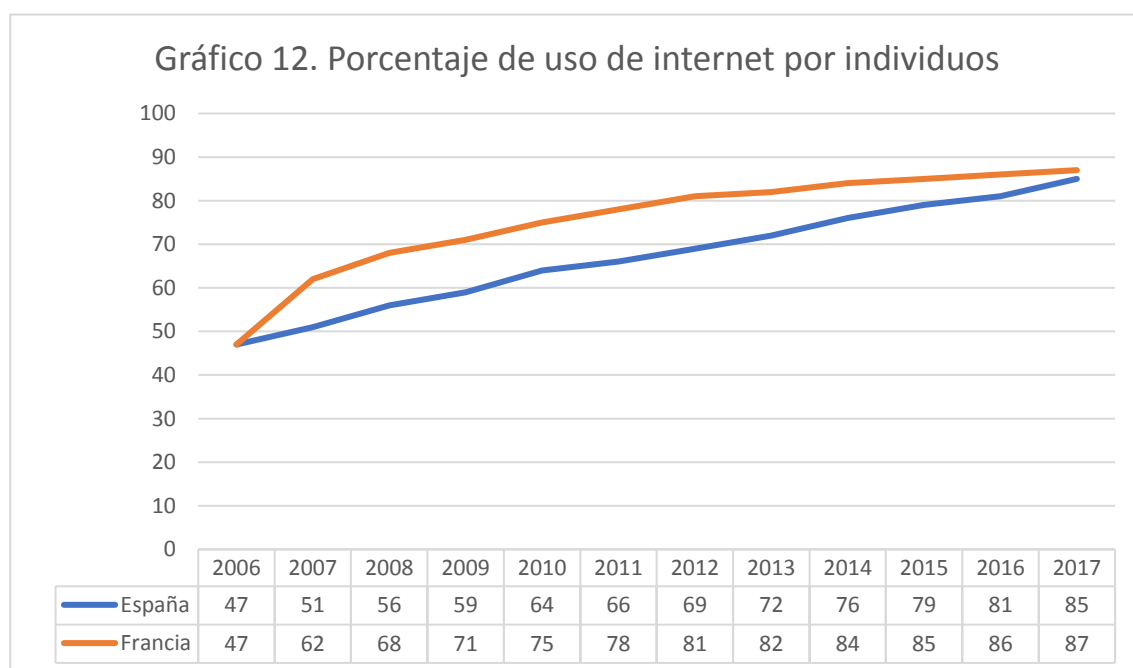
empleados. En toda la Unión Europea, siguiendo los datos de la Comisión Europea, el sector de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información representa alrededor del 4% del valor añadido entre 2006 y 2014 y ha empleado a entre el 2,6% y el 2,8% de trabajadores.

Masuda (1984: 55) sitúa después de la Segunda Guerra Mundial el inicio del desarrollo de la sociedad de la información, que va cambiando hasta la actualidad en cuanto a valores, objetivos o base científica, entre otros aspectos. Por su parte, Castells (2005: 7) desarrolla la teoría de la sociedad red —un concepto que ha ganado importancia dentro de la teoría de la sociedad de la información— al hablar de los cambios contemporáneos. La sociedad red es una estructura social basada en redes operadas por las tecnologías de la información y la comunicación, que a su vez se basan en la microelectrónica y las redes digitales para generar, procesar y distribuir información. Esto tiene influencia tanto a nivel político como económico y social. Castells (2005: 4), sin embargo, objeta a la caracterización de esta sociedad emergente como sociedad de la información o del conocimiento que la información y el conocimiento han sido centrales en todas las sociedades estudiadas históricamente, y que lo que es nuevo ahora es la microelectrónica y las tecnologías basadas en redes que dan nuevas capacidades a una vieja forma de organización social: las redes. Para Jan Van Dijk (2006: 20), la sociedad en red es una “formación social con una infraestructura de redes sociales y medios de comunicación que permite la organización en todos los niveles (individuales, grupales y organizacionales y sociales). Cada vez más, las redes actúan como enlaces de todas las unidades o partes de las formaciones (individuos, grupos y organizaciones)”. Según Van Dijk, las redes se han convertido en el sistema nervioso de la sociedad.

Así, el cambio tecnológico permea todos los ámbitos de la sociedad red. La economía de red, como la llama Castells (2005: 8), conocida también como la nueva economía, es una eficiente forma de organización de la producción, distribución y administración, que está en el origen de una sustancial subida de la tasa de productividad en los Estados Unidos, y de otras economías que adoptaron estas nuevas formas de organización económica. Como recoge Castells (2005: 8), distintos investigadores han hallado que el aumento de la productividad está asociado con tres procesos: la generación y difusión de la microelectrónica y las tecnologías digitales de la información y la comunicación, la transformación de la fuerza de trabajo (con el aumento de los trabajadores altamente cualificados, una fuerza de trabajo autónoma y capaz de innovar, así como de adaptarse al constante cambio de la economía tanto a nivel global como local); y, la difusión de una nueva forma de organización alrededor de las redes. Para el autor, “la organización en red es tan crítica hoy como el proceso vertical de integración de la producción a gran escala lo fue para las organizaciones de la era industrial” (Castells, 2005: 8).

Como es de sobra conocido, en las sociedades actuales el uso de internet para distintos ámbitos de la vida personal y colectiva es creciente. Según datos recogidos por Eurostat, que se pueden ver en el gráfico 12, entre los años 2006 y 2017, Francia ha tenido un mayor porcentaje de individuos que usan internet, aunque el porcentaje para España tiende a acercarse a los números franceses.

En el año 2006, tanto España como Francia partían de un 47% de individuos de entre 16 y 74 años que habían usado internet alguna vez. En 2007, mientras que en España era el 51% de las personas las que usaban internet, en Francia eran ya el 62%, porcentaje que subió al 68%, al 71%, al 75% y al 78% en los años siguientes. Entre 2008 y 2011, en España, era el 56%, el 59%, el 64% y el 66% el porcentaje de individuos que usaba internet, claramente más de la mitad de población en ambos países. En el año 2012 el crecimiento en el uso de internet continuó, con el 69% para España y el 81% para Francia, igual que en los años siguientes, con el 72% en 2013, el 76% en 2014 y el 79% en 2015 en España; y, el 82%, 84% y 85% para los mismos años en Francia. Mientras que Francia pasó del 80% de individuos que usan internet en 2012, en España esto no sucedió hasta 2016, con el 81%. En este año, Francia contaban con el 86% de individuos que usan internet. En el año siguiente, 2017, la diferencia entre los porcentajes de ambos países es menor, con el 85% de personas que usan internet en España y el 87% que lo hacen en Francia.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Los datos anteriores muestran que el uso de internet entre las personas es algo generalizado en los países del estudio. Sin embargo, no solo los individuos particulares han incorporado el uso

de las nuevas tecnologías a su vida diaria, también desde los gobiernos se han ido haciendo adaptaciones para facilitar el gobierno electrónico, lo que representa una muestra más de la sociedad de la información.

De hecho, entre los años 2008 y 2017 ha sido creciente el porcentaje de individuos que usan o han usado internet para interactuar con las autoridades públicas, tanto en España como en Francia. Según datos de Eurostat, en el año 2018, el 31% de individuos entre 16 y 74 años se había dirigido a las autoridades públicas a través de internet en España. En el año siguiente era el 34% y en 2010, el 38%, igual que en 2011. En el año 2012 el porcentaje aumentó al 44%, igual que en 2013, para seguir subiendo al 49% en 2014, cifra que se repitió en 2015; pero que aumentó hasta el 50% en 2016 y el 52% en 2017.

En Francia, era el 48% de los ciudadanos el que se había dirigido a las autoridades públicas en 2008, mientras que fue el 47% en 2009. En el año 2010, el porcentaje subió hasta el 57%, la misma cifra que en 2011, y en 2012, aumentó hasta el 61%. En 2013 se quedó en el 60%, pero en 2014 volvió a subir hasta el 64% para bajar un punto en 2015, con el 63%. En los años 2016 y 2017, el porcentaje fue del 66% y el 68% de personas que usaban internet para dirigirse a las autoridades públicas, respectivamente. Así pues, se observa la integración de internet como una herramienta más para el control público por parte de la ciudadanía, con al menos la mitad de la población de ambos países declarando que la ha usado alguna vez para interactuar con el poder. Las tecnologías de la información se integran cada vez más en el devenir social e individual y por ello son tan importantes en los cambios generados en los últimos años.

En el panorama de la sociedad de la información, los medios de comunicación juegan un papel esencial en relación con la formación de la opinión pública, con la rápida transmisión de la información y su gran capacidad de penetración en la sociedad a través de distintos medios. Del mismo modo, también se relacionan con fenómenos como el de la personalización de la política (Paramio, 2015 a). La expansión y crecimiento de los medios de comunicación digitales ha supuesto la multiplicación de los canales de información, igual como la televisión supuso un gran cambio en las rutinas de obtención de información por parte de la ciudadanía y en la percepción de los representantes públicos y de la actuación política. De hecho, a partir de la generalización del aparato de televisión en los hogares es cuando el líder político debe esforzarse por dominar la comunicación masiva. Es ahí cuando se entra en el terreno de la personalización de la política, con la premisa de que “la imagen televisiva se concreta en personas y no en ideas o programas” (Laguna, 2011). Como explica Laguna (2011), “la competencia electoral, por imposición del medio donde se libra la batalla, ya no es sólo entre siglas o programas, sino entre imágenes de

personas”. Las transformaciones de la sociedad de la información, pues, han cambiado las condiciones de la arena política y modelan el comportamiento de los líderes políticos, así como lo que los electores pueden llegar a conocer de las distintas opciones políticas.

En este contexto, la ampliación de la esfera de la comunicación y la universalización de la educación han permitido la aparición del ciudadano crítico (Norris, 1999) o elector crítico (Paramio, 2015 a), lo que permite al individuo barajar más posibilidades y configurar sus preferencias políticas —y de cualquier índole— de múltiples maneras. Ello tiene especial relevancia en cuanto a las bases tradicionales socialdemócratas porque así se hace más impredecible o improbable la identificación partidaria.

Independientemente de la denominación que se aplique a la sociedad actual, que es producto de los cambios señalados, cabe destacar, en el plano político, la gran variabilidad de las demandas ciudadanas y lo que ello conlleva de dificultad a la hora de realizar la agenda política y que puede relacionarse con el estilo de vida fragmentario propio de la posmodernidad. La multiplicación de las demandas de la ciudadanía complejiza la conciliación de intereses e incluso la construcción de la noción de interés general.

La cuestión de la agregación de preferencias es señalada por Paramio (2015 b), al afirmar que “el problema es que el electorado está segmentado en términos de preferencias, y que la mayoría potencial que apoyaría una política, según un determinado eje de preferencias, se disgregaría o reduciría a una minoría ante las consecuencias de esta política según otro eje de preferencias”. Del mismo modo, este fenómeno se relaciona con el problema de la desconfianza política en tanto que “no es evidente que se sigan dando las condiciones sociales en las que los partidos podían tradicionalmente agregar las preferencias de los electores” (Paramio, 2015 b). Ello se debe, siguiendo a Paramio (2015 b), a que los partidos deben contar en mayor medida que antes con electores no identificados y que no confían en que el programa partidario dé prioridad a sus propias preferencias, que a la postre no son necesariamente reconciliables. Esta situación, por tanto, no resulta ajena a las bases tradicionales de apoyo de la socialdemocracia. Según Verge (2007), los partidos de izquierda se preocupan en mayor medida de determinados síntomas de la desafección y del descontento político de los ciudadanos que los partidos de derechas. De hecho, según la autora, es a partir de 1990 cuando el PSOE empieza a plantear la cuestión del distanciamiento entre los partidos políticos y la sociedad, así como la valoración negativa que tienen los ciudadanos sobre las organizaciones partidistas, bien a causa de la insatisfacción de demandas o bien por las insuficiencias del sistema representativo (Verge, 2007:

121, 122). Por tanto, se trata de una problemática que se une a los cambios anteriormente señalados.

El contexto de tránsito de sociedades industriales a postindustriales o de superación de la modernidad es, pues, donde surgen problemas relacionados con la representación política y donde la socialdemocracia, a partir de su refundación de mitades del siglo XX, ha tenido que transitar y sigue caminando en la actualidad.

Las transformaciones producidas en los últimos años han afectado tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía y por ello las bases de apoyo socialdemócratas han sufrido también los cambios que han caracterizado el camino del siglo XX al XXI. Aunque puedan faltar factores por analizar y profundizar, el anteriormente descrito constituye de manera general el macrocontexto en que los partidos socialdemócratas deben desarrollar sus futuras estrategias políticas.

4.3. La evolución de la socialdemocracia

4.3.1. Orígenes de la socialdemocracia moderna

Los partidos socialistas empezaron su andadura política con la industrialización y los movimientos obreros hacia finales del siglo XIX. En sus orígenes eran partidos asociados a los trabajadores y a sus reivindicaciones de mejoras en las condiciones laborales. Desde ese momento y hasta la Segunda Guerra Mundial, se fueron definiendo sus lineamientos políticos, basados en la elección de la política en lugar de la vía violenta y su inclinación por la participación en las elecciones, por el reformismo en lugar de la ruptura y por la distribución de la renta en lugar de la socialización, propia del comunismo. Sin embargo, la socialdemocracia moderna se empezó a configurar a partir de los años sesenta del siglo XX. En ese momento, la separación del marxismo y el consenso basado en la redistribución y el empleo marcaron los años del dominio de esta ideología en el panorama europeo.

El Congreso de Bad Godesberg (1959), en el que el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) renunció al marxismo y se identificó plenamente con el socialismo y la democracia se considera como el origen de la socialdemocracia contemporánea. El SPD sentenció entonces la libertad, la justicia, la solidaridad y la mutua obligación derivada de la común solidaridad, como los pilares de la socialdemocracia que, además, no estaban en contradicción con la economía de libre mercado y la propiedad privada. Ello supuso la ruptura definitiva con el socialismo (entendido como comunismo), cuyo principal objetivo era abolir el capitalismo. Desde 1959, los

socialdemócratas aspiraban a reformarlo. En ese congreso, el SPD renunciaba también a la nacionalización³ como uno de los principios del socialismo, tal y como recogió su Programa de 1959.

A partir de los años sesenta del siglo XX, siguiendo la estela del Congreso de Bad Godesberg, distintos partidos socialistas europeos o bien renunciaron al marxismo como lineamiento ideológico, o bien abrazaron formalmente la socialdemocracia como su ideología política.

4.3.2. Consenso socialdemócrata

Después de la Segunda Guerra Mundial empezó la fase que Przeworski (2003) denomina como remedialismo en la evolución de la socialdemocracia o la que Sejersted (2011) llama los años dorados de la socialdemocracia. Una vez aceptada sin cuestionamientos la democracia representativa, los objetivos prioritarios de la socialdemocracia pasaron a ser meramente económicos: la redistribución y el empleo (Urquizu, 2012: 29), de manera que se perfilaron así dos características básicas de esta ideología.

Desde 1945, los partidos socialdemócratas europeos encontraron en economistas como los suecos Johan Gustaf, Knut Wicksell y Gunnar Myrdal y el británico John Maynard Keynes sus referentes a la hora de elaborar las políticas económicas. Se trataba de unas políticas económicas que defendían la intervención del gobierno en el incremento del bienestar social y en la generación del crecimiento económico (Urquizu, 2012: 29), algo que es característico de la izquierda en general y de la socialdemocracia en particular.

Así, desde mitad del siglo XX hasta los años ochenta, los socialdemócratas apostaron por el uso del gasto público para estimular la demanda. Tanto desde posturas más liberales, como las de Keynes, o más socialdemócratas, como las de Gunnar Myrdal, el equilibrio presupuestario en el ciclo es considerado como algo propio de la izquierda (Urquizu, 2012: 29). Siguiendo a Urquizu (2012: 29), ello significa que, en los años 30, los socialdemócratas suecos ya “descubren” que la regla fiscal de un presupuesto consiste en tener superávit en las etapas de expansión económica y déficit en las contracciones, algo que enunciaría años después Keynes de forma similar.

³ La cuestión de la nacionalización de empresas sí que ha formado parte de la agenda de la izquierda, según Maravall (2012: 370) hasta más allá de la Segunda Guerra Mundial, pero la cuestión de la socialización de los medios de producción es un debate que ha ido apareciendo y desapareciendo en las distintas etapas del socialismo y no se puede adscribir a un momento determinado del tiempo (Urquizu, 2012: 27).

Junto con los estímulos a la demanda, el papel de la política monetaria es otro de los argumentos económicos que inspiraron a la socialdemocracia. Wicksell argumentaba sobre la importancia de la política monetaria en la generación de expansión económica, al utilizar los tipos de interés monetarios para generar inversión, disminuyendo el ahorro (Urquizu, 2012: 29).

En la llamada edad de oro de la socialdemocracia existe otro elemento esencial característico de esta ideología: el desarrollo del Estado de bienestar.

El Estado de bienestar es un modelo de economía política en el que el Estado asume la responsabilidad del bienestar general de la población, especialmente de los individuos más vulnerables, destinando parte del gasto a partidas tales como la sanidad, la educación, la vivienda, las pensiones, el seguro de desempleo y otros programas sociales. El concepto de Estado de bienestar (*welfare state*) empezó a utilizarse en Reino Unido en las décadas de 1930 y 1940. Siguiendo a T.H. Marshall (1950), cuando especificó que los derechos sociales estaban en el núcleo del Estado de bienestar, Esping-Andersen (1990: 21) asegura que el Estado de bienestar no se puede entender solo en términos de derechos y garantías. Se debe tener en cuenta cómo las actividades estatales están entrelazadas con el mercado y la familia en la provisión social. Para Urquizu (2012), el Estado de bienestar sería la última etapa, tras los derechos civiles y políticos, en que los ciudadanos alcanzan los derechos socioeconómicos. Las políticas sociales serían el resultado y las garantes de estos derechos.

Sin embargo, los antecedentes de los Estados de bienestar hunden sus raíces en el siglo XIX, cuando la expansión del capitalismo del *laissez-faire* y el aumento de los trabajadores industriales hizo que desde las instituciones se empezara a debatir sobre cómo sostener el crecimiento económico sin que aumentaran las bolsas de pobreza entre la clase obrera. En Jeremy Bentham (1748 - 1832), quien atribuía a los gobiernos la responsabilidad de proporcionar determinados servicios a la población, se pueden encontrar indicios de la necesidad de desarrollar algo parecido a lo que acabaría siendo el Estado de bienestar; igual que John Stuart Mill, que aunque consideraba la no injerencia del Estado en la economía como norma general, expresó también objeciones al mercado libre sin límites; y, en la Sociedad Fabiana, un grupo de socialistas no marxistas fundado por Sidney Webb (1850 - 1947) y Beatrice Potter (1858 - 1943), que elaboraba estudios críticos sobre los problemas sociales y económicos del capitalismo británico de finales del siglo XIX, y que reivindicó la necesidad de introducir políticas de protección social pública para resolverlos.

Aunque la mayoría del desarrollo de Estados de bienestar tuvo lugar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países se desarrolló un incipiente modelo de bienestar

entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue el Káiser Guillermo I, dirigido por el canciller Otto von Bismarck, quien lanzó el primer programa público de salud y accidentes laborales del mundo industrializado, así como el primer programa público de pensiones (Sodaro, 2010). En Alemania, después de la derrota de 1918 y la abdicación del Káiser Guillermo II, la República de Weimar (1919 - 1933) incorporó en la Constitución derechos sociales. El sistema de Weimar, sin embargo, sucumbió ante una creciente inflación y no sobrevivió a la Gran Depresión provocada por el crack bursátil de 1929.

La construcción del Estado de bienestar fue en su origen transversal a las ideologías dominantes, sin ser patrimonio exclusivo de la izquierda, pero la socialdemocracia veía en el Estado de bienestar una forma de cumplir con su objetivo de redistribución. Aunque los socialistas no fueran los *inventores* de todas las políticas sociales, “la izquierda ha contribuido tanto a la mejora de estas políticas como a su expansión” (Urquizu, 2012, 107), es por ello que el fortalecimiento del Estado de bienestar se convirtió en una seña de identidad socialdemócrata.

Después del *New Deal* llevado a cabo en Estados Unidos por Franklin D. Roosevelt, que legitimó la intervención del Estado en la economía del país norteamericano y, por otra parte, el acuerdo sueco de Saltsjöbaden con el cual los dirigentes políticos, los representantes de los trabajadores, de los agricultores y los grandes empresarios consiguieron crear un consenso que dio lugar a vigorosos Estados de bienestar en Escandinavia, el resto de países industrializados extendieron sus programas de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos de posguerra entre los distintos actores políticos, económicos y sociales llevaron al punto álgido de los Estados de bienestar entre 1960 y 1975. Era el momento del uso de las políticas de gasto keynesianas, con las que se pretendía asegurar el bienestar de la población y el crecimiento económico. Aun así, atendiendo al diseño de los programas y a las instituciones de cada país, los Estados de bienestar difieren entre sí.

Por una parte, Harold Wilensky y Charles Labeaux, en *Industrial Society and Welfare* (1958), propusieron el modelo residual y el modelo institucional de Estado de bienestar. El primero se basaba en los principios del individualismo económico y la libertad de empresa, de forma que cubría las necesidades de los ciudadanos a través del mercado y la familia, mientras que el segundo descansaba sobre las ideas de seguridad e igualdad, de manera que atribuía al Estado la responsabilidad de proveer prestaciones basadas en derechos sociales. Richard Titmuss (1958) partió de esta clasificación para elaborar la suya. Para Titmuss, además del modelo residual y del modelo institucional-redistributivo, existía también el modelo del logro industrial, en el que la satisfacción de las necesidades sociales dependía en buena medida de la inserción

de los ciudadanos en el mercado laboral. Así, era el trabajador y no el ciudadano poseedor de derechos quien recibía las prestaciones sociales.

Ahora bien, la tipología de Estados de bienestar más influyente hasta la fecha es la elaborada por Gosta Esping-Andersen (1990). Para el científico danés, a la hora de clasificar los distintos modelos de Estado de bienestar se debe atender a la magnitud de gasto social y a la cobertura de los beneficiarios, pero también al concepto de *de-commodification* (Esping-Andersen, 1990: 21), que se refiere a cómo los ciudadanos son independientes del mercado. “La desmercantilización (*de-commodification*) ocurre cuando se presta un servicio como un derecho y cuando una persona puede mantener un sustento sin depender del mercado. La mera presencia de una asistencia social o seguro puede no conllevar necesariamente una significativa desmercantilización si no emancipa de forma sustancial a los individuos de la dependencia del mercado” (Esping-Andersen, 1990: 22). Del mismo modo, también es clave para Esping-Andersen de qué modo se estratifican las sociedades, pues considera que “el Estado de bienestar es por propio derecho un sistema de estratificación” (Esping-Andersen, 1990: 23).

A partir de lo anterior, Esping-Andersen (1990) estableció una clasificación que comprende tres modelos de Estado de bienestar. Por una parte, existe el modelo liberal, en el que predominan “modestas transferencias universales o modestos planes de seguros sociales” (26). En este caso, el Estado estimula el mercado, bien de forma pasiva –garantizando solo un mínimo– o bien de manera activa, subsidiando planes privados de bienestar. Por otra parte, el segundo modelo de Estado de bienestar, el llamado corporatista o continental, propio de países como Francia, Italia o Alemania, proviene del legado corporativista-estatista. Para el autor, en este modelo prevalece la idea de ligar las prestaciones a la ocupación profesional del beneficiario. En ese tipo de países, los derechos se unieron a la clase y el estatus, y el Estado podía desplazar al mercado como proveedor de bienestar; además, los seguros privados tenían un alcance marginal. El tercer modelo es el socialdemócrata, propio de los países nórdicos o escandinavos, en que el Estado se compromete a ofrecer prestaciones sociales universales y al pleno empleo. En este caso, “la desmercantilización de los derechos sociales se extendió a las nuevas clases medias” (Esping-Andersen, 1990: 27). El autor danés considera que la ideología socialdemócrata era la fuerza dominante detrás de las reformas sociales llevadas a cabo en los países escandinavos. Así, en lugar de tolerar el dualismo entre el Estado y el mercado, entre la clase trabajadora y la clase media, los socialdemócratas idearon un Estado de bienestar que promoviera una igualdad de máximos, no una igualdad de necesidades básicas como se hacía en otros lugares (Esping-Andersen, 1990: 27).

Según Urquizu (2012: 30), para los partidos socialdemócratas, el desarrollo del Estado de bienestar tenía que contribuir a “reducir la desigualdad en tres direcciones. En primer lugar, incrementando la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, aumentando la movilidad social. En segundo lugar, reduciendo las diferencias entre las rentas más bajas y las rentas más altas (...). En tercer lugar, aumentando el nivel de vida de las personas que ocupan la parte más baja de la sociedad”. Cabe matizar que las políticas sociales se desarrollan antes de que los partidos socialdemócratas llegasen al poder, pero “lo que hace la izquierda allá donde gobierna es aumentar sustancialmente sus partidas presupuestarias para universalizar el Estado del bienestar y aumentar su calidad” (Urquizu, 2012: 31). Como destaca Paramio (2009), en el contexto de Guerra Fría, los partidos conservadores también llevaron a cabo políticas de bienestar cuando gobernaron debido a la popularidad de muchas de estas políticas. Sin embargo, durante mucho tiempo, la preferencia de la igualdad por parte de la socialdemocracia es mucho más intensa que en el resto de fuerzas políticas (Urquizu, 2012: 31).

En los años dorados de la socialdemocracia, que abarcan desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años ochenta, “el objetivo igualitario se alcanzó, especialmente, donde la socialdemocracia fue dominante a partir de los años treinta: Noruega, Suecia y Dinamarca”. La impronta de la ideología socialdemócrata resultó clave en la construcción del modelo de Estado de bienestar escandinavo, pues “los datos arrojan luz sobre un efecto socialdemócrata decisivo que no puede atribuirse a una endogeneidad inherente” (Esping-Andersen, 2012: 252 en Urquizu, 2012: 32).

Por otra parte, los economistas de la Escuela de Chicago⁴ cuestionaron el consenso socialdemócrata desde los años sesenta. Ello no significa, sin embargo, que los gobernantes no pudieran hacer nada, sino que el desarrollo de una política económica de izquierdas pasaba a exigir el concierto entre el gobierno y los agentes sociales. Nacía de esta forma el modelo socialdemócrata corporativo (Urquizu, 2012: 36).

El modelo corporativo, o también denominado corporativismo y corporatismo, se caracterizó, según Tezanos (2013: 271), fundamentalmente por tres rasgos: por el establecimiento de un marco consensuado de acuerdos en torno a las políticas económicas y sociales; por el esfuerzo de integración de los agentes sociales, y sobre todo de los sindicatos, en la definición de los grandes criterios de orientación de la política económica; y por el papel activo desempeñado

⁴ La Escuela de Economía de Chicago, liderada por los economistas George Stigler y Milton Friedman, rechazó el keynesianismo en favor del monetarismo y se relaciona con el neoliberalismo. La Escuela de Chicago privilegia la eficiencia del mercado competitivo, el papel de los individuos en la determinación de resultados económicos y las distorsiones asociadas con la intervención y regulación gubernamentales en los mercados (Palley, 2005).

por los gobiernos en la definición de esas políticas y en los acuerdos que se establecían con los distintos agentes sociales en mesas tripartitas (formadas por empresarios, trabajadores y gobernantes). “Cuando se habla de corporatismo se está haciendo referencia a fenómenos perfectamente identificables en la práctica política de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial: la tendencia a establecer marcos consensuados de acuerdos en políticas económicas y sociales, mediante la integración institucional de los agentes sociales en su definición (...). Los enfoques corporatistas se correspondieron en buena parte con los modelos propios de políticas socialdemócratas y con el consenso keynesiano que permitió asentar el Estado de bienestar” (Tezanos, 2013: 272).

Aun así, con la crisis del petróleo de 1973 llegaron las críticas al modelo corporativo. Por una parte, desde núcleos de los propios partidos socialdemócratas se sostenía que era necesario definir la política no solo en términos de acuerdos con los interlocutores sociales, sino también en el ámbito del Parlamento, del pluralismo político, reivindicando la autonomía de los partidos. Por otra parte, desde otros sectores ideológicos, se cuestionaba el excesivo poder –según decían– que los sindicatos habían adquirido en la definición de las políticas económicas, y tachaban al modelo corporatista de inflacionario. Así, a partir de la década de los años setenta se impugnó abiertamente el consenso social, al tiempo que se magnificó un modelo alternativo de corte neoliberal que acabaría inspirando las políticas nacionales e internacionales ulteriores (Tezanos, 2013: 273). En ese mismo contexto, las democracias económicamente avanzadas empezaron a cuestionarse también la sostenibilidad de los Estados de bienestar tal y como estaban configurados hasta entonces.

4.3.3. Dilemas de la socialdemocracia

Przeworski (2003: 320-323) bautizó como la etapa de la resignación a la fase por la que atraviesa la socialdemocracia a partir de los años ochenta y hasta la actualidad. Aunque, siguiendo a Urquizu (2012), la tercera etapa de la socialdemocracia podría acabar en 2007, debido a la crisis económica y financiera que empezó en Estados Unidos y se extendió a Europa a partir de la quiebra de la compañía de servicios financieros Lethman Brothers (2008). Esta crisis económica abrió nuevos retos para la socialdemocracia, lo que puede constituir el principio de la cuarta etapa de la socialdemocracia, ya que según Urquizu, esta ideología tiene por delante “la tarea de renovar muchos de sus postulados ideológicos” (Urquizu, 2012: 40).

A partir de los años setenta, la coyuntura económica y política internacional empezó a plantear dilemas al consenso de la socialdemocracia europea. De hecho, la transformación de la

socialdemocracia en Europa se inició en los años setenta (Ladrech y Marlière, 1999: 10). Los valores del neoliberalismo, con el posicionamiento del mercado como garantía de bienestar y de libertad y la concepción despolitizada de la sociedad (Cohen y Arato, 2000) jugaron un papel creciente en la reconfiguración de la socialdemocracia, pero también influyeron en una crisis de confianza en las instituciones políticas (Benedicto, 2006).

4.3.4. De la estanflación a la globalización: el auge neoliberal

La etapa dorada de la socialdemocracia tocó a su fin en los años setenta. El final del sistema de Bretton Woods y del uso del dólar como moneda internacional, así como el aumento de precio de las materias primas, llevó a las economías desarrolladas a la recesión.

El fenómeno de la estanflación, desconocido hasta los años setenta, marcó el inicio de la tercera etapa de la socialdemocracia. En economía, tal como lo recoge el diccionario de la Real Academia, el vocablo que une las palabras estancamiento e inflación se define como, precisamente, una situación de estancamiento económico, con aumento del paro y de la inflación. Esta recesión también afectó a las cuentas públicas, “generando enormes déficits” (Urquizu, 2012: 32).

La crisis económica de 1973, derivada de la decisión de los países miembros de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPEP) de no exportar más petróleo a los países que habían estado del lado de Israel en la guerra del Yom Kipur (1973), resintió la economía de Estados Unidos y, principalmente, la de Europa occidental (Varoufakis, 2015). Así, el fenómeno de la estanflación, es decir, cuando el estancamiento de la economía y la inflación se dan al mismo tiempo, dominó la década de los setenta, a lo que se unió una crisis de materias primas (Urquizu, 2012: 32). “En el pasado, las crisis se habían presentado como recesiones o depresiones con deflación de precios, mientras que la crisis de los setenta en Estados Unidos, y en los demás países, se manifestó como recesión productiva y como desempleo e inflación” (Vargas, 2005). El origen de la recesión económica de los setenta está, pues, en la oferta económica. El aumento exorbitado de las materias primas provocó un enorme incremento de los costes de producción. Esto fomentó que las economías desarrolladas se convirtiesen en un periodo muy breve de tiempo en menos competitivas, generando simultáneamente aumentos del desempleo e incrementos de la inflación (Urquizu, 2012: 85).

A partir de ese momento, los partidos socialdemócratas debieron buscar políticas económicas alternativas al fenómeno del estancamiento económico con inflación derivado de la crisis del

petróleo. Tal y como remarca Urquizu (2012: 85), “a diferencia de los años 30, las respuestas keynesianas a esta crisis se muestran como inadecuadas”. Se trataba de una crisis de oferta y no de demanda.

Además, las economías estaban mucho más abiertas, lo que significaba que, por ejemplo, algunas medidas del pasado ya no eran tan efectivas. Como señala Urquizu, “si un gobierno socialdemócrata opta por seguir una política de estímulos fiscales intentando aumentar el consumo, en una economía abierta parte de ese estímulo acabará en el exterior”. Las respuestas keynesianas antaño utilizadas, ahora se empezaban a cuestionar. “La crisis de los años setenta no solo supuso el final de un periodo de crecimiento marcado por la gestión keynesiana de la economía, sino también la crisis del modo fordista de regulación capitalista” (Paramio, 2012: 58).

La socialdemocracia tuvo que adaptarse a los cambios económicos que estaban sucediéndose rápidamente en los setenta, con programas electorales y medidas económicas que estaban pensadas para un periodo de excepcional crecimiento, como fue el de la segunda posguerra, y que, por lo tanto, quedaron rápidamente desfasados. “La crisis de los setenta resultó muy cara para la socialdemocracia. Inicialmente erró en el diagnóstico, lo que implicó que su política económica fuese equivocada. Pero cuando rectificó, sufrió una fuerte contestación dentro de sus propias filas” (Urquizu, 2012: 86).

Para Holloway (2003), la crisis del keynesianismo no es simplemente una crisis de la teoría económica, o de una forma de hacer políticas económicas: éstas son manifestaciones de una crisis en la relación entre el capital y el trabajo, una crisis en el patrón particular de contención del poder del trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los métodos fordistas de producción en masa se habían impuesto en los Estados Unidos y Europa, lo que implicaba un aumento de la productividad, pero con un costo. La producción fordista descansaba en un intercambio entre un alto grado de alienación en el trabajo y un consumo creciente después del trabajo (Holloway, 2003: 85). Sin embargo, después de los años setenta, la relación entre capital y trabajo se fracturó. El antagonismo contenido por el keynesianismo ya no se podía controlar por más tiempo (Holloway, 2003: 85).

Los partidos socialdemócratas en el poder, cuando precisaban contener las tensiones inflacionistas, utilizaban la negociación colectiva centralizada, pidiendo a los trabajadores moderación salarial. De esta forma, la economía crecía, se creaba empleo y se podían utilizar las políticas económicas expansivas con una inflación moderada. Sin embargo, tras la recesión de los setenta, el mercado laboral cambió notablemente en los países desarrollados (Urquizu, 2012:

94). La introducción de nuevas tecnologías, o tal y como señala Urquizu (2012: 94), el aumento de los trabajos cualificados y el descenso de los empleos que exigen poca formación, son cambios que también afectan a la ideología socialdemócrata.

“La creciente complejidad y diversificación de las estructuras de clase, el aumento de los sectores ocupacionales de clase media y los cambios políticos conectados a la emergencia de nuevas instancias y factores de representación de intereses fueron suscitando, sobre todo a partir de la década de los setenta, problemas de ajuste en el funcionamiento de las democracias en general y en la lógica de representación de los partidos políticos en particular” (Tezanos, 2013: 269). De la mano del keynesianismo, los sindicatos se habían institucionalizado, pero cuando la coyuntura económica y política cambió, en la década de los setenta y ochenta, y empezó el intento de implementar políticas de control salarial, se comenzaron a percibir las contradicciones de los sindicatos. “La creciente integración de los sindicatos dentro del Estado les hizo aparecer muy poderosos. Pero su poder era el poder institucionalizado del trabajo, y como instituciones ocupaban más y más una posición externa y opuesta al poder que representaban” (Holloway, 2003: 91). Según Holloway, el poder sindical era cada vez más vacío, un poder institucional sin sustancia y “lo mismo se puede decir de los partidos socialdemócratas” (2003: 92).

En el modelo keynesiano, la función central de los sindicatos en la canalización del poder del trabajo daba una posición privilegiada en el sistema político a aquellos partidos que tenían vínculos estrechos con los sindicatos. Sin embargo, la impresión de que eran necesarias adaptaciones políticas a las nuevas condiciones sociales afectó de manera especial a los partidos de izquierdas y a los sindicatos, así como a los procedimientos de relación entre ambos que habían funcionado durante el ciclo de las sociedades industriales. Todo lo cual acabó repercutiendo en el papel desempeñado hasta entonces por los sindicatos y en el propio peso de los trabajadores en la sociedad (Tezanos, 2013: 270).

Aunque la relación entre los distintos partidos socialdemócratas europeos y los sindicatos de cada país es variable, el consenso social socialdemócrata sí había empoderado a las organizaciones sindicales, que vieron con el auge neoliberal cómo se quebraba su poder. “Especialmente cuando los problemas de acumulación se hicieron obvios a partir de mediados de los sesenta, los partidos socialdemócratas fueron muchas veces preferidos, incluso por las organizaciones representantes del capital, como los únicos partidos capaces de controlar las demandas del trabajo. Sin embargo, cuando la posición contradictoria de los sindicatos se hizo más evidente, las contradicciones dentro de los partidos socialdemócratas también se volvieron

más intensas, con conflictos cada vez más agudos entre las alas izquierda y derecha, y con una pérdida de contacto cada vez más obvia con la clase que decían representar” (Holloway, 2003: 92). Muchos de los cambios económicos, políticos y sociales acaecidos en la década de los setenta y ochenta cuestionaron “las concepciones socialdemócratas tradicionales, basadas en una coordinación entre los dos pilares del movimiento obrero, es decir, entre los partidos socialistas que operaban en el plano político y los sindicatos que incidían en el plano laboral, a los que se llegó a presentar como las dos piernas de un cuerpo social que compartía el mismo diseño político” (Tezanos, 2013: 270).

El compromiso histórico adquirido después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a tambalear a partir de los años setenta. La prosperidad de los años cincuenta y sesenta parecía haber suprimido políticas alternativas. La economía mixta, con su gestión de la demanda, la institucionalización de las relaciones industriales, la regulación de los mercados, una mayor libertad del comercio internacional y un amplio Estado de bienestar, parecía conducir a disidentes de izquierda y derecha al olvido histórico. Pero, cuando se desarrollaron dificultades económicas, con un dólar sobrevaluado llevando al final del cambio fijo, la subida del precio del petróleo, el aumento del proteccionismo, la inflación, la recesión, la depresión y el desempleo, el consenso dio lugar a un renovado debate (Gourevitch 1986: 181).

Según Varoufakis (2015: 181), “cuando voces disidentes indicaban que las rebajas tributarias favorecían a los ricos (especialmente cuando se combinaban con recortes en provisiones sociales para los pobres), la respuesta estándar llegaba en forma del llamado efecto goteo: conforme los ricos se vayan enriqueciendo más (decía la teoría), sus gastos e inversiones gotearán hacia los menos privilegiados de manera más efectiva que a través de la distribución de riqueza financiada con los impuestos de los ricos”. Operaba, así, un viraje ideológico hacia el neoliberalismo.

“El ciclo económico de los años ochenta supuso un enorme cambio en las pautas de intervención del Estado en la economía” (Alonso, 2007: 122). En ese contexto, el Estado de bienestar, que se había desarrollado en Europa occidental a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, empezó a vivir un proceso de reestructuración y limitación (Alonso, 2007). Se abrió con esa redefinición un nuevo frente en el modelo socialdemócrata de sociedad, que atacaba uno de sus pilares: el Estado de bienestar.

Los criterios de eficiencia y racionalidad mercantil hicieron dominante un modelo de *welfare* de la austeridad, cuya racionalidad y eficiencia se miden en términos del ahorro de recursos

(Alonso, 207: 123). Ello entroncó con el auge de la ideología neoliberal, que representó otro de los retos para la socialdemocracia.

“La austeridad impuesta hacia el coste del factor trabajo, la congelación, recorte o incluso desmantelamiento, en todo o en parte, de importantes espacios y servicios del Estado de bienestar, así como la fuerte tecnificación del proceso productivo y la flexibilización jurídica paralela, han hecho que los típicos efectos redistributivos clásicos de las políticas keynesianas hayan sido sustituidos por los efectos antidistributivos de la economía de la oferta” (Alonso, 2007: 122). Para Herbert Kitschlet (1994: XIII), los programas de los partidos socialdemócratas están diluyendo los principios convencionales del Estado de bienestar keynesiano con dosis substanciales de pragmatismo del libre mercado.

En el escenario económico de los setenta, “el principal objetivo de los gobernantes pasa a ser la atracción de inversión y para ello deben mejorar su oferta económica. Por tanto, las políticas de oferta, menos relevantes hasta entonces, pasan a primera línea de las prioridades, también para la socialdemocracia” (Urquizu, 2012: 33). Se trata de políticas que se concentran, sobre todo, en las inversiones al capital físico y al capital humano. Por su parte, la derecha concentra sus esperanzas en la iniciativa privada. Tal y como señala Urquizu (2012: 36), para ello los conservadores reducen los impuestos y lo acompañan de un menor gasto público. En cambio, los socialdemócratas, que también persiguen la productividad del trabajo y el capital, destinan una parte importante del gasto público al capital físico y al capital humano. Según Urquizu (2012: 37), “se trataría de ofrecer una mejor cualidad de la oferta económica para que se mantengan las tasas de inversión”.

Las políticas de oferta, sin embargo, “tienen importantes consecuencias para la socialdemocracia: el gasto público no puede concentrarse únicamente en políticas sociales. Así los presupuestos de los gobiernos progresistas deben poner especial énfasis tanto en el gasto social como en la modernización de la oferta económica. La izquierda ya no se define solo por el Estado del bienestar. Su proyecto también incluye una idea de modernización económica. Sin crecimiento económico no hay reparto de la riqueza, y ambos objetivos son igual de relevantes, las dos caras de una misma moneda” (Urquizu, 2012: 38).

A nivel teórico, economistas como Milton Friedman y los representantes de la Escuela de Chicago, como se ha comentado anteriormente, formularon desde finales de los años sesenta críticas al modelo keynesiano. Son, por tanto, críticas al modelo socialdemócrata dominante de intervención en la demanda. Tal y como señala Urquizu (2012: 35), los economistas de la Escuela de Chicago objetan que la intervención económica de los gobiernos puede tener efectos

positivos sobre el desempleo en el corto plazo, pero, pasado un tiempo, las políticas anticíclicas de intervención sobre la economía llevarían a aumentos de la inflación. Por ello, los salarios nominales acabarían subiendo, así como el porcentaje de parados. Para este grupo de economistas, los actores económicos actúan racionalmente⁵ y, por ello, en muchas ocasiones descuentan las ‘manipulaciones’ de la economía. Es decir, aunque los gobiernos intervengan para estimular la economía y crear empleo, estos resultados solo se observan en el corto plazo (Urquizu, 2012: 35).

Por otro lado, “la expansión de la economía financiera, y la creación de un tipo de empleo más o menos especializado de alta remuneración en el aparato de gestión de esta economía financiera y especulativa, han servido para consolidar un nuevo nivel de capas medias y altas de renovada cultura promocionista e individualista, cristalizando, a partir de ella, una auténtica cultura de la satisfacción, fruto de esta triunfante rebelión de las nuevas élites” (Alonso, 2007: 122). Precisamente, el cambio de valores entre las clases medias y las élites europeas es señalado por Paramio (2012: 59) como uno de los elementos decisivos en la crisis de la socialdemocracia.

“Cuando sectores importantes de las clases medias empezaron a resistirse a mantener los niveles crecientes de contribución fiscal que demandaron los Estados de bienestar ante los primeros embates de la crisis de los setenta y el aumento del paro, los partidos socialdemócratas acusaron el riesgo de sufrir serios retrocesos electorales” (Tezanos, 2013: 270). Ante el temor de perder apoyos electorales, los partidos socialdemócratas optaron por formular nuevos diseños estratégicos que les permitieran ganar apoyos entre las clases medias. “Muchos cuadros de dirigentes de los partidos socialdemócratas llegaron a la convicción de que, en las coordenadas de las nuevas estructuras de clases, la posibilidad de obtener mayorías electorales suficientes requería tomar cierta distancia con los planteamientos más ‘obreristas’ de los sindicatos (Tezanos, 2013: 270).

En ese momento, los neoliberales buscaban hacer retroceder el poder estatal en la economía mixta y los neomarxistas querían desarrollar ese poder con nacionalizaciones, mientras que otros elementos de la izquierda pedían la democratización del lugar de trabajo (Gourevitch

⁵ El concepto de racionalidad económica, base del enfoque de la elección racional, tiene sus orígenes en el utilitarismo de Jeremy Bentham (1748-1832), pero contemporáneamente, es Joseph Schumpeter (1883-1950), quien en su obra *Capitalismo, socialismo y democracia* (1943), esboza por primera vez un modelo de comportamiento político basado en el supuesto de racionalidad económica. Este consiste en suponer que toda acción humana está orientada a la maximización de algún tipo de interés asociado al bienestar personal. El comportamiento de políticos y electores, entonces, estaría motivado por sus intereses personales y no en torno a la retórica del interés general (Sodaro, 2010: 63).

1986: 182). La hegemonía neoliberal, sin embargo, pronto se vería confirmada. La victoria de Margaret Thatcher en 1979 en Reino Unido y de Ronald Reagan en 1980 en los Estados Unidos alumbró el modelo neoconservador. Por su parte, en las últimas décadas del siglo XX, la socialdemocracia ha experimentado cuatro grandes transformaciones en comparación con su época dorada. En primer lugar, los partidos socialdemócratas han vivido procesos de autonomía política; en segundo lugar, se han distanciado de los sindicatos; en tercer lugar, los partidos socialdemócratas se han ‘deslaborizado’ y compiten por espacios de centro para atraerse las clases medias; y, en cuarto lugar, se ha abandonado el consenso socialdemócrata en algunos de estos partidos y han emergido las ideas social-liberales (Tezanos, 2013: 274).

En la Europa continental, la victoria de François Mitterrand en Francia en 1981 marcó la primera victoria absoluta para los socialistas; pero, en Alemania Occidental, dos décadas de colaboración entre liberales y socialdemócratas acabaron a principios de los años ochenta; en Suecia, los socialdemócratas perdieron por primera vez en cuarenta años en 1976, aunque volvieron al poder en 1982 (Gourevitch 1986: 182). En la década de los setenta, en Portugal, España y Grecia acabaron las dictaduras y en los tres casos las elecciones arrojaron resultados favorables al centro o a la socialdemocracia. Mientras, en el norte de Europa, por ejemplo, en Dinamarca o Noruega, se vio el debilitamiento de las mayorías socialdemócratas (Gourevitch 1986: 182). En España, “el distanciamiento del PSOE de las políticas propias de la clase trabajadora ha acabado traduciéndose en una significativa diversificación de las orientaciones electorales de los trabajadores manuales durante los últimos años del siglo XX, en contraste con lo que ocurría en la década de los ochenta” (Tezanos, 2013: 275).

A principios de los años setenta, el desafío para mantener el consenso venía de la izquierda al pedir una mayor democratización de la economía: el control para los trabajadores, gestión compartida, igualdad de ingresos. Una década después, tal y como recuerda Gourevitch (1986: 184), el foco viró hacia temas como la productividad, la creación de empleo, la racionalización y la competitividad. Las fuerzas del mercado y sus señales habían reemplazado a otros valores como guía en la política.

Las políticas neoliberales se encaminaron en los años ochenta y noventa a privatizar partes de los servicios sociales universales que en la posguerra habían estado bajo el paraguas estatal. Tal y como señala Alonso (2007: 123), el Estado postkeynesiano ha debido convertirse en una instancia más que redistributiva, en reorganizativa y remercantilizadora, donde su eficiencia económica debe superar cualquiera de sus objetivos sociales.

La desaparición de la Unión Soviética en 1991 y la victoria del neoconservador George W. Bush en la Casa Blanca entre 2001 y 2009 confirmaron ese cambio de valores (Paramio 2012: 59). Desde entonces, el neoconservadurismo se ha caracterizado durante tres décadas por promover el recorte de los impuestos, la reducción de los servicios públicos, el acoso a los sindicatos y a lo que representan, y por impulsar la ilusión de que la prosperidad de todos depende de que los más ricos aumenten sus ingresos alejándose cada vez más del ingreso medio, y del acceso a través del mercado a los servicios que en el modelo socialdemócrata de sociedad constituyen servicios públicos universales (Paramio, 2012: 60). Los cambios políticos y de valores coincidieron con un escenario también cambiante en cuanto a la economía internacional.

El proceso de globalización, entendido como la integración gradual de los mercados financieros, comerciales y de servicios a escala global y la movilidad de los factores de producción (Torreblanca, 2010: 328), empezó también en los años setenta, si bien con anterioridad ya los Estados Unidos y Europa, principalmente, y países emergentes después, habían vivido procesos de internacionalización de sus economías. Según Urquizu (2012: 33), los datos muestran que las economías se abrieron realmente en la etapa dorada de la socialdemocracia, entre 1950 y 1980. A partir de entonces, la apertura económica ha sido mucho más lenta.

La globalización tiene efectos en el modelo socialdemócrata de sociedad y, por tanto, en las respuestas de los partidos socialdemócratas a los distintos desafíos sociales, en tanto que reconfigura los factores de producción y las relaciones económicas, pero también porque no se limita al intercambio económico de mercancías, servicios o capitales, sino que incluye la configuración de una cultura, un modelo de interacción social y un modo de conocimiento y comunicación de carácter global (Torreblanca, 2010: 328).

Para John Gray (2000), el neoliberalismo se impuso en los años ochenta, con las victorias electorales de Reagan y Thatcher, tras haber completado el desmantelamiento de los Estados de bienestar europeos y sus programas de redistribución de la renta y promoción de igualdad de oportunidades, es decir, tras acabar con las señas de identidad del argumentario socialdemócrata. Ya en los años noventa, según Gray, ese modelo se intentó imponer a escala global bajo la premisa de que era el único que podía garantizar el crecimiento económico.

La globalización implicaría, pues, la uniformización a escala global de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, lo que jugaría en contra de las ideas socialdemócratas. Como ha defendido Ignacio Ramonet (2004), la globalización es un ataque al orden social desde tres frentes: el económico, con la imposición de la lógica del mercado; el de la información, con la uniformización de los mensajes y la supresión de la crítica; y el militar, que supone el fin de la

era de los derechos humanos y la extensión de la hegemonía norteamericana a todo el planeta. Para sus entusiastas, en cambio, como Anthony Giddens (1997) o Jagdish Bhagwati (2005), la globalización supone el triunfo definitivo de la lógica de la libertad del mercado, las sociedades abiertas y la extensión de la modernidad a todo el planeta.

La liberalización de los movimientos de capital en un contexto de globalización financiera conllevó problemas específicos para los partidos socialdemócratas. Las deslocalizaciones de empresas, que se producen cuando las compañías se trasladan a países con impuestos o salarios más bajos si existen en ellos las condiciones necesarias para desarrollar su producción; y la pérdida de cuotas de mercado de las empresas nacionales frente a las importaciones de países de nueva industrialización (Paramio, 2012: 59), plantean desafíos para el modelo socialdemócrata. Del mismo modo, el recurso al gasto para crear empleo había dejado de funcionar en el contexto de economías abiertas y elevar los impuestos podía desincentivar la inversión y disminuir el gasto privado. Por otro lado, el crecimiento del déficit hacía vulnerables a los gobiernos socialdemócratas a ojos de los mercados, pudiendo causar un alto encarecimiento de su financiación o maniobras especulativas contra su moneda (Paramio 2012: 75).

Tras la caída de la Unión Soviética, la solución ofrecida por la derecha fue la preferida por la mayoría de países poscomunistas. Los socialistas y los socialdemócratas europeos consideraban que su propio modelo ya estaba en crisis antes de la caída del comunismo (Sassoon, 2001: 799). Tal y como recuerda Sassoon (2001: 800), cuando se fundó la Internacional Socialista en 1951 (formada por partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas), su declaración de objetivos, a pesar de la retórica de Guerra Fría y el anticomunismo que la impregnaban, no se abstuvo de afirmar que el objetivo de los socialistas era la abolición del capitalismo. La Declaración de Estocolmo de la Internacional Socialista de 1989, sin embargo, proclamó que los objetivos del movimiento eran la libertad, la solidaridad y la justicia social. Dejó de mencionarse la supresión del capitalismo.

La década de los noventa, que contaba ya con unas economías nacionales cada vez más interconectadas, empezó con una crisis económica y financiera fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria japonesa y de las tensiones por el precio del petróleo derivadas de la Guerra del Golfo (1990 - 91). Fue en 1998 cuando cristalizó en la Europa de los 15 la socialdemocracia, con las victorias de Gerhard Schroeder en Alemania y Massimo D'Alema en Italia. Sólo Irlanda y España quedaban como países no gobernados por los socialdemócratas (Sanmartín, 2004: 387).

En Francia estaba al frente del gobierno Lionel Jospin y en el Reino Unido, Tony Blair. En ese momento, los progresistas coincidían en que el desempleo era el gran problema europeo, pero diferían en cómo solucionarlo. Como señala Sanmartín (2004), “cada país lo resolvió considerando sus problemas nacionales y sólo en Francia se llevó a cabo un tratamiento contundente con la propuesta de reducción de la semana laboral a 35 horas. Los demás partidos socialdemócratas se han mostrado divididos al respecto. Jospin con unas formas y Blair y Schroeder con otras, como se explicitó cuando éstos firmaron el manifiesto de la Tercera Vía, se han plegado a la coyuntura de sus países y cada uno intentó buscar sus soluciones”. Con la llegada de la Tercera Vía, la socialdemocracia vivió un giro programático.

4.3.5. La Tercera Vía: una redefinición de la socialdemocracia

En los años 90, la voluntad de adaptar la socialdemocracia –esa ideología representada todavía por los partidos clásicos socialdemócratas, que se habían fundado en muchos casos a finales del siglo XIX y refundado en el XX– a los nuevos tiempos de embates neoliberales, dio origen a versiones distintas de la socialdemocracia. Esas transformaciones cristalizaron en la Tercera Vía, defendida principalmente por Tony Blair, y en el Nuevo Centro, liderado por Gerhard Schroeder.

El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, se planteó primero cambiar la apariencia del Partido Laborista. El primer objetivo que se marcó fue borrar la imagen de partido obrero (Navarro, 2001: 201). Después, el mandatario británico adoptó el concepto de Tercera Vía, bajo la conceptualización teórica de Anthony Giddens (1999).

Giddens (1999: 26) definió la Tercera Vía como “una estructura de pensamiento y de hacer política que busca adaptar la socialdemocracia a un mundo que ha sufrido cambios fundamentales en las últimas dos o tres décadas. Es una Tercera Vía en el sentido que intenta trascender simultáneamente la vieja socialdemocracia y el neoliberalismo”.

Para Urquizu (2012: 39), la Tercera Vía o el Nuevo Centro son versiones excesivamente “laxas” de la socialdemocracia porque se trata de proyectos políticos con escaso contenido sustantivo. Sus ideas fuerza son la responsabilidad individual y la igualdad de oportunidades, olvidando el componente redistributivo característico de la socialdemocracia.

El eje formado por Tony Blair, primer ministro de Reino Unido entre 1997 y 2007, y Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos entre 1993 y 2001, abogaba por la redefinición del concepto de izquierda tradicional y la Tercera Vía era fuertemente avalada por ellos (Guibernau, 2002: 25). De hecho, la Tercera Vía fue descrita por los demócratas norteamericanos como “nuevo

progresismo” (Giddens, 2000: 2). Washington y Londres parecían querer liderar una reconfiguración de la política y de los partidos socialistas en el ámbito internacional (Guibernau, 2002: 25).

En palabras de Tony Blair (1998: 61, 62), la Tercera Vía tenía la misión de “promover y reconciliar a la sociedad justa capaz de maximizar la libertad y el potencial de todo nuestro pueblo: reparto equitativo de la riqueza, igualdad de oportunidades, responsabilidad y solidaridad”. Según Giddens (1999: 66), la igualdad, la protección del débil, la libertad entendida como autonomía, el pluralismo y la democracia cosmopolita, y el hecho de que no hay derechos sin responsabilidades ni autoridad sin democracia, son los valores fundamentales de la Tercera Vía.

Para sus críticos, entre ellos muchos socialdemócratas europeos (Guibernau, 2002: 26), las propuestas de la Tercera Vía se parecen a las de la democracia cristiana. Se utiliza el concepto de Tercera Vía para redefinir el centroizquierda, pero en realidad, lo que ello esconde es un desplazamiento general hacia la derecha. Del mismo modo, las críticas recibidas a la propuesta de Tercera Vía le reprochan que acepta la globalización sin ofrecer ninguna solución para paliar las desigualdades; que se trata de un proyecto anglosajón que, exportado a países con Estados de bienestar débiles, puede limitar el desarrollo de ese Estado de bienestar; y, que no ofrece una política económica específica. Además, los postulados del proyecto político que defendió Tony Blair no contienen “ni una sola mención a cuestiones como la regulación de los mercados financieros, la opacidad de estos o la generación de burbujas” (Urquizu, 2012: 40).

Giddens (2000) respondió a las críticas formuladas argumentando que, con respecto a la socialdemocracia, la Tercera Vía representaba el único medio efectivo para defender la justicia social, que no tenía sentido defender la igualdad a cualquier precio y que la Tercera Vía, como filosofía política globalizadora, tiene que promover la integración global mediante el equilibrio entre el gobierno, la economía y la sociedad civil (Giddens, 2002: 27).

A finales del siglo XX, las distintas formas de entender la socialdemocracia en Europa podían distinguirse entre la manera inglesa o la Tercera Vía, y la manera francesa, encarnada en el gobierno Jospin.

Las dos conceptualizaciones de la socialdemocracia divergían en el papel económico del Estado, ya que los socialistas franceses confiaban menos que los laboristas en las fuerzas del mercado y su capacidad de autorregularse. Tal y como recoge Navarro (2001), según el senador francés Henry Weber, el Nuevo Laborismo puede definirse como neoliberal, y el Partido Socialista francés como neokeynesiano. Otra de las diferencias entre ambas maneras de entender la socialdemocracia vino por la renovación del Estado de bienestar. Mientras que Blair se

comprometió a no tocar las reformas fiscales de Thatcher, los socialistas franceses se oponían a dismantlar los sistemas de protección social. En cuestiones como la flexibilidad del trabajo y los servicios públicos también existían diferencias. Los socialistas franceses defendían que una cierta flexibilidad era necesaria para las empresas, pero que eso no podía traducirse en precariedad generalizada, y en cuanto a los servicios públicos, eran partidarios de una sociedad mixta, que combinara el sector privado y los servicios públicos (Navarro, 2001: 208).

Para Giddens (2002), los partidos de izquierdas se ven obligados a buscar nuevas alternativas, ya que las doctrinas básicas del socialismo no son aplicables. En ese sentido, como alternativa a la denominación de Tercera Vía, Giddens propuso también el término socialdemocracia modernizadora o izquierda modernizadora, pero advirtió de que la Tercera Vía “no debe identificarse exclusivamente con el punto de vista y las políticas de los Nuevos Demócratas, del Nuevo Laborismo o de cualquier otro partido concreto, sino que es una corriente ideológica amplia, en la que coinciden otras corrientes” (Giddens, 2002: 35).

La Tercera Vía, con fuerte arraigo en el laborismo británico, tuvo una influencia limitada en los otros partidos socialdemócratas del continente europeo. Según Urquizu (2012: 45), “los datos empíricos no solo confirman que la Tercera Vía significó una profunda moderación del socialismo, sino que, además, en términos generales, se situó en el espacio ideológico de la derecha”. Para Urquizu (2012: 89), la Tercera Vía o el Nuevo Centro apuestan ideológicamente por la responsabilidad individual, lo que abrió la puerta a la desregularización de los mercados. Además, “la redistribución ocupa un segundo lugar en beneficio de la igualdad de oportunidades, cuando son objetivos económicos muy distintos” (Urquizu, 2012: 89).

A principios del siglo XXI, el concepto de Tercera Vía ha ido perdiendo relevancia, al tiempo que, en Alemania, a partir de 2005, y en Reino Unido, a partir 2010, el Partido Socialdemócrata y el Partido Laborista (los principales valedores de la Tercera Vía), respectivamente, han perdido las elecciones.

4.3.6. El contexto supranacional: la Eurozona

En el contexto europeo, cabe destacar el cambio en la configuración institucional y de soberanía que supone la integración supraestatal de la Unión Europea, ya que es un fenómeno que afecta a la acción de gobierno de cualquier país miembro y sea cual sea su color político. Sin embargo, las opciones socialdemócratas pueden verse más afectadas en tanto que sus postulados difieren del diseño institucional por el que se opta. La Eurozona es el conjunto de Estados miembros de

la Unión Europea que tienen como moneda oficial el euro y que, por tanto, han formado una unión monetaria. Actualmente son 19 los estados que forman la Eurozona, que nació en 1999 con 11 países fundadores. Es el diseño institucional de esta unión económica y monetaria, según Urquizu (2012: 61), lo que representa actualmente numerosos dilemas y retos para la socialdemocracia.

Uno de los pilares básicos de la ideología socialdemócrata, la idea de que el Estado debe tener un papel activo en fomentar la redistribución de la renta y en facilitar el crecimiento económico se ve mermada por “las bases sobre las que se asienta la unión económica y monetaria de la Eurozona, (que) fijan una serie de límites al papel de los Gobiernos, especialmente en su gasto público y en el déficit del Estado” (Urquizu, 2012: 61). Como se ha visto, estas constricciones afectan de un modo especial a la ideología socialdemócrata porque ésta tiene como premisa la intervención del Estado en la economía, al contrario que la ideología conservadora o liberal, que se inclina por la libre iniciativa y la autorregulación de los mercados.

El Tratado de Maastricht (1992), por el cual se fundó la Unión Europea, estableció unos criterios de convergencia para los países que quisieran adoptar el euro como moneda oficial. Esto es, en lo que se refiere a las cuentas públicas, no superar el año anterior al ingreso el 3% de déficit público y una deuda pública no superior al 60%. Por lo tanto, los presupuestos públicos no se pueden manejar con total libertad, ya que deben converger entre los Estados. Además, el Banco Central Europeo (BCE), la institución de la Unión Europea que representa el núcleo del Eurosistema y que vela por el valor del euro y el mantenimiento de la estabilidad de precios en la zona euro, tiene límites en su diseño institucional que dificultan la financiación de los Estados, de manera que los gobiernos se ven condicionados por la política monetaria y sus problemas. Es más, el BCE tiene como objetivo controlar la inflación, “algo que encaja con alguna dificultad en el proyecto político de la socialdemocracia” (Urquizu, 2012: 62).

Tal y como señala Urquizu (2012: 62), según los modelos de la teoría partidista, puestos a elegir, “la izquierda suele preferir un desempleo bajo, aunque ello implique una inflación más alta. En cambio, los conservadores optarán por la combinación opuesta: primarán reducir la inflación, aunque ello conlleve que aumente el desempleo” (Hibbs, 1987 en Urquizu, 2012). De este modo, y en la medida que el BCE pretende controlar la inflación, “sus políticas monetarias casarán mucho mejor con una política económica conservadora que progresista” (Urquizu, 2012: 62).

Todo ello lleva a una moderación de los gobiernos socialdemócratas de la Eurozona, debida a las restricciones que impone la zona euro, aunque se siguen observando diferencias entre la política fiscal de los Estados miembros dependiendo del color del gobierno. “La evidencia

empírica muestra que donde ha gobernado la izquierda en los años setenta, ochenta y noventa en la Unión Europea, las transferencias sociales y los beneficios sociales del gasto público han aumentado más que donde han gobernado los conservadores (Mulas-Granados, 2003: 27, 28 en Urquizu, 2012: 63). Por lo tanto, se observa una moderación o adelgazamiento del programa máximo de la socialdemocracia, pero no una transformación completa del ideario socialdemócrata hacia su opuesto conservador.

Los cambios que provocan las nuevas formas supraestatales de integración, entre las cuales la Unión Europea es el ejemplo más notable, constituyen nuevos dilemas en la actuación de los partidos políticos, especialmente en los de ideología socialdemócrata.

Así, a lo largo de la historia de la socialdemocracia, esta ideología ha atravesado por distintas etapas y se ha enfrentado a distintos dilemas, así como también ha alcanzado distintos hitos que conforman sus características básicas.

Figura 14. Características básicas de la ideología socialdemócrata en sus diferentes etapas		
	Características	Dilemas
1ª Etapa, entre mitad del s. XIX y la Segunda Guerra Mundial	<ul style="list-style-type: none"> • Elección de la vía política. Participación electoral • Reformismo • Preferencia por la distribución de la renta (frente a la socialización) 	<ul style="list-style-type: none"> • Acción parlamentaria vs. Acción violenta • Diferenciación con otras corrientes de izquierdas
2ª Etapa, entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70	<ul style="list-style-type: none"> • Redistribución y empleo • Defensa de la intervención del gobierno en el incremento del bienestar social. Papel activo del Estado en la economía • Desarrollo del Estado de bienestar • Objetivos igualitarios • Modelo socialdemócrata corporativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Auge neoliberal • Incipiente distanciamiento con los sindicatos
3ª Etapa, entre los años 70 y la crisis económica de 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Gasto público destinado al capital físico y humano • Modernización económica • Incorporación de valores posmaterialistas 	<ul style="list-style-type: none"> • Quiebra del modelo corporativo • Globalización y otras transformaciones sociales y económicas

		<ul style="list-style-type: none"> • Redefinición programática • Integración europea
--	--	--

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se puede observar en la figura 14, la primera etapa de la socialdemocracia, que va de la mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, sienta las bases de la ideología y se distancia de otras corrientes de izquierda. En ese momento, la apuesta por la vía política, el reformismo y la mejor distribución de la renta se convierten en características clave de la socialdemocracia. En la segunda etapa, que va de la Segunda Guerra Mundial a los años setenta, se convierten en puntales de la socialdemocracia la redistribución, el empleo, el desarrollo del Estado de bienestar, la defensa de la intervención estatal en la economía y los objetivos igualitarios, al tiempo que se desarrolla el modelo socialdemócrata corporativo. Por lo que se refiere a la tercera etapa, se observa la quiebra del modelo corporativo, la preocupación por la modernización económica y la tendencia a destinar el gasto público al capital físico y humano, así como la incorporación de valores posmaterialistas a la escena política. La cuarta etapa, que empezaría después de la Gran Recesión, está todavía por definir, puesto que se está desarrollando en la actualidad. De este modo, el conjunto de rasgos descritos constituye la caracterización básica de la socialdemocracia clásica. Al mismo tiempo, se contemplan también una serie de dilemas, que se contraponen a los hitos socialdemócratas, como son en sus orígenes la necesidad de diferenciarse de otras izquierdas y de distanciarse de la acción violenta; y, más tarde, los dilemas que supusieron el triunfo de la ideología neoliberal y los cambios sociales que acompañaron al cambio de siglo.

4.4. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista francés (PS)

Las opciones clásicas socialdemócratas las representa en España el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en Francia el Partido Socialista. Se trata de dos partidos políticos que llegaron al poder en los años ochenta y que se mantuvieron en él más de una década. Después, estos partidos vivieron una etapa alejados del gobierno y de la presidencia del país, respectivamente, hasta que en el siglo XXI volvieron a gobernar. Por su parte, el PSOE gobernó en España entre 1982 y 1996 y entre 2004 y 2011; y, el PS presidió Francia entre 1981 y 1995, y entre 2012 y 2017.

4.4.1. Primera etapa de gobiernos del PSOE (1982 - 1996)

El PSOE se fundó en Madrid en 1879 y obtuvo su primer diputado en las Cortes, el fundador Pablo Iglesias, en 1910. Sin embargo, no fue hasta después de la dictadura franquista cuando el PSOE disfrutó de un periodo largo de gobierno.

En las elecciones de 1982, el partido encabezado por Felipe González obtuvo el 48% del sufragio, lo que se tradujo en 202 diputados. Empezaba así una etapa de hegemonía socialista que duró cinco legislaturas. En los comicios de 1986, el PSOE obtuvo el 44% del apoyo, es decir, 184 diputados; en las elecciones de 1989, el resultado fue del 39% para los socialistas, lo que significaban 175 diputados; en las generales de 1993, los apoyos socialistas fueron del 38% con 159 diputados; y, en las elecciones de 1996, el PSOE bajó hasta el 37% con 141 diputados, lo que significó su salida del gobierno. En total, fueron 13 años seguidos en el poder.

El líder del PSOE, Felipe González, llegaba a las elecciones de 1982 con el 100% del apoyo de los delegados expresado en el 29 Congreso y con “una resolución política que establecía como objetivos prioritarios la consolidación de la democracia, la defensa de las libertades y de la seguridad ciudadana, la modernización de la sociedad, la superación de la crisis económica, la definición clara de un proyecto de política exterior y la construcción del Estado de las Autonomías” (Martorell y Juliá, 2012). Desde 1982, además, se extremaron los mensajes de “moderación” (Martorell y Juliá, 2012) para que un gobierno socialista no hiciera temer a los poderes fácticos del Estado. En ese sentido, Aróstegui (1999) sostiene que el PSOE llevó adelante con extrema cautela aquellas acciones reformistas que rozaban a la Banca, la Iglesia o el Ejército. Ninguna de las grandes decisiones se tomó sin la aquiescencia de esas fuerzas, sobre todo en aquello que les afectaba directamente. Sobre la moderación del PSOE, Andrade (2007) sostiene que el partido supo ocupar el espacio político de la UCD, lo que provocó un giro en su discurso político: sus ejes centrales pasaron a ser consolidar la democracia y modernizar el país.

Según Martorell y Juliá (2012), el PSOE se presentaba como un partido dispuesto a desarrollar la clásica política socialdemócrata de crecimiento con redistribución y a consolidar la democracia a través de una economía más competitiva y una amplia descentralización. Para Marín (2008), sin embargo, las dos primeras legislaturas estuvieron marcadas por una política liberal-progresista en sintonía con un PSOE situado en el centro del tablero político. Según el autor, hubo que esperar hasta 1989 para advertir un giro socialdemócrata en el PSOE, fruto de las movilizaciones sindicales. En cambio, en opinión de Velasco (1996: 25), el proyecto

socialdemócrata, “tímido inspirador desde 1982”, fue languideciendo a medida que avanzaban las legislaturas socialistas y a medida que el partido se convertía en un *catch-all*.

Las primeras legislaturas socialistas estuvieron marcadas por un programa de reformas que abarcaba la economía, la defensa, la educación, sanidad, la entrada en la Unión Europea y la permanencia en la OTAN. Aunque, la reforma de varios de estos ámbitos se alargó hasta prácticamente el final de los gobiernos socialistas.

En el ámbito económico, el PSOE orientó sus políticas a contener y reducir la inflación y en general a sanear la economía. Los ministros de Hacienda y de Industria, Miguel Boyer y Carlos Solchaga emprendieron planes de ajuste y de reconversión, de modo que la inflación bajó seis puntos en tres años, los salarios crecieron al ritmo de la inflación prevista y los cierres de los altos hornos y de los astilleros del País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Valencia y Andalucía destruyeron medio millón de puestos de trabajo (Martorell y Juliá, 2012). En 1985, el paro superó el 20%.

La modernización de España significaba meter al país en los grandes flujos del capitalismo avanzado, lo que implicaba inclinarse por una política económica ortodoxa. Según Maravall (1995), cuando se refiere a las políticas socialdemócratas del sur de Europa, “los gobiernos gestionaron sus economías al filo de la navaja: en cuanto relajaban sus políticas fiscales o los salarios crecían sin moderación, el resultado era un deterioro de la competitividad, desequilibrios comerciales, crisis de la moneda y desempleo”.

El Libro Blanco de la Reindustrialización de 1983 ponía de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una reconversión industrial que allanaría el terreno al proceso de entrada en la entonces Comunidad Europea. Como es obvio, las reformas precisaban de financiación y se tuvo que recurrir a fondos públicos, ya que ni la UCD ni el PSOE habían logrado implicar al capital privado en la reconversión (Marín, 2008). Según Albentosa (1985), “a la dificultad de hacer acopio de recursos públicos, consecuencia de la obligada reducción del déficit presupuestario, había que añadir que el sistema financiero no suministró en condiciones adecuadas el necesario volumen de fondos”.

Sin embargo, esa no fue la única dificultad del PSOE en el proceso de reconversión. La concertación con los sindicatos fue inexistente y se opusieron a las medidas, como en el caso de Comisiones Obreras (CCOO), o bien, las intentaron negociar, pero no de manera incondicional, como la Unión General de Trabajadores (UGT), que era también reticente a las medidas económicas de Boyer. El sindicato socialista fue poco a poco marcando distancias con el gobierno. La movilización sindical entre 1983 y 1987 influyó en los planes de reconversión sobre

todo en lo que se refiere a las plantillas de trabajadores en incluso Solchaga (1997) reconoció que no había podido aplicar los planes tal y como había ideado. Aun así, la reconversión y reordenamiento de la industria en España se llevó a cabo y transformó el tejido industrial del país, sacrificando la industria pesada.

Todavía en materia económica, el PSOE procedió a la flexibilización del mercado de trabajo con la reforma del Estatuto de los Trabajadores en 1984. Según Martorell y Juliá (2012), sin crear empleo neto, lo que se produjo fue la formación de un mercado laboral dual en que los contratos temporales eran precarios y los fijos gozaban de más estabilidad. El aumento de la presión fiscal y la eficacia recaudatoria permitieron el aumento del gasto, que creció entre 1973 y 1985 del 22% al 42 %, pero también destaparon la presencia de fraude y de economía sumergida. Tal y como explica Marín (2008), las reformas fiscales solo afectaron a aspectos marginales del fraude y la evasión que practicaban las grandes empresas, mientras que la recaudación sobre los trabajadores se hizo más efectiva. A partir de mediados de los años ochenta, el sindicato UGT se empezó a enfrentar al PSOE por sus políticas económicas. La desavenencia entre el PSOE y UGT culminó con la huelga general del 14 de diciembre de 1988, pese a que anteriormente (en el año 1984), el sindicato había mantenido su política de negociación y aceptado junto al gobierno y la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) el Acuerdo Económico y Social. El proyecto de reforma de las pensiones, las negociaciones sobre la Seguridad Social y el Plan de Empleo Juvenil hicieron que el sindicato socialista rompiera con el que había sido su partido hermano.

El ámbito de la defensa, una cartera ocupada por Narcís Serra durante nueve años, fue otro de los sectores que el PSOE se propuso transformar. La idea que subyacía en la reforma del ejército era la reducción de efectivos y su subordinación al poder civil. Así, la ley de Plantillas para el Ejército de Tierra, la reforma de la Ley Orgánica de Defensa y la reformulación del ministerio de Defensa fueron las medidas que debían modernizar la institución y acabar con el vicio histórico de los pronunciamientos y golpes de Estado.

La nueva ley orgánica pretendía la subordinación de los mandos militares al Gobierno y permitir una gestión eficaz desde el ministerio (Navajas, 2006). En ese momento, la banda terrorista ETA mantenía una ofensiva contra el poder militar por la que fueron asesinados el teniente general Quintana Lacaci, dos generales y dos vicealmirantes entre 1984 y 1988, además de otros militares, policías y guardia civiles. Pese a la labor de Serra al frente de Defensa, los servicios de inteligencia abortaron en 1985 una nueva intentona golpista dirigida contra las más altas instituciones del Estado (Marín, 2008), que es la última de la que se tiene constancia.

La educación es uno de los sectores sobre los que más actuó el gobierno socialista, sobre todo bajo la dirección ministerial de José María Maravall. El sector de la educación era un terreno en el que la Iglesia y el Estado topaban desde antaño, pues los representantes de la religión católica controlaban gran parte de la enseñanza básica y media.

Así, en política educativa se promulgó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) en 1985, mediante la cual se consagraba la gratuidad de la enseñanza obligatoria, la libertad de cátedra y la libertad de creación de centros. Del mismo modo, se reconocía la existencia de centros privados y centros públicos y se introducía el concepto de enseñanza financiada con fondos públicos para los centros privados. “Atacada por los partidos de la derecha y por las federaciones de enseñanza privada, la ley fue recibida con alivio por la Comisión Episcopal de Enseñanza, que vio en ella la garantía necesaria para seguir obteniendo del Estado cuantiosas sumas —más de 100.000 millones de pesetas en 1982— que la enseñanza privada recibía sin regulación legal” (Martorell y Juliá, 2012). Desde ese entonces los colegios de las órdenes religiosas fueron subvencionados y siguen funcionando de igual forma en la actualidad. El ministerio de Maravall impulsó también la Ley de Reforma Universitaria (LRU) mediante la cual se concedía una amplia autonomía a la universidad. Las reformas en el sector educativo trascendieron las dos primeras legislaturas del PSOE. En el año 1990, en la tercera legislatura socialista, vio la luz la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que vino a completar las reformas educativas. La LOGSE estableció la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, instauró el bachillerato postobligatorio de dos años y la formación profesional. Con la LRU (1983), la LODE (1985) y la LOGSE (1990) se vio incrementado el gasto en educación.

Además de en educación, el gasto social se concentró también en la sanidad durante los gobiernos socialistas. El ministerio a la cabeza del cual se encontraba Ernest Lluch vivió la entrada en vigor de la Ley General de Sanidad en 1986, que incluía la creación de un Sistema Nacional de Salud y, por tanto, la universalización de la sanidad pública. Este se considera uno de los pilares del Estado de bienestar en España, junto con la educación pública gratuita, y otras medidas que consistieron en la revalorización de las pensiones, el aumento de la cobertura del seguro de desempleo y la ampliación de la protección a los parados de larga duración y a los mayores de 45 años, y la ley de pensiones no contributivas (Marín, 2008). De este modo se consolidaba el sistema de protección social español.

La entrada de España en la Unión Europea (UE), en 1986, fue otro de los hitos que marcaron la etapa socialista, si bien las negociaciones habían empezado con anterioridad. La adhesión de

España a la Comunidad Europea (CE) se produjo en un contexto en que en política exterior se apostó por permanecer en la OTAN y por afianzar las relaciones con Estados Unidos.

Para Pérez (2005), la integración de España en la CE supuso la consolidación en el país de la idea de que “la reducción del proteccionismo mejora la eficiencia de la economía, aumenta el crecimiento y permite alcanzar mayores cotas de bienestar”. En efecto, tal y como recuerda Pérez (2005), “a los compromisos que España había asumido en el terreno de la liberalización del comercio exterior se sumaron los derivados del acuerdo comunitario de 1986 de construir un auténtico mercado interior”. Por su parte, Piedrafita, Steinberg y Torreblanca (2007) recalcan que, en España, la integración europea ha supuesto desarrollo económico y nuevos valores y actitudes hacia la democracia.

En general, la conclusión de las negociaciones y la firma del tratado de adhesión fueron acogidos como un éxito político de gran alcance (Marín, 2008). No se mostró el mismo entusiasmo con el referéndum de permanencia en la OTAN. El PSOE había definido el ingreso en la OTAN como un error; además, popularizó el eslogan “OTAN de entrada NO” y prometió un referéndum sobre la conveniencia o no de pertenecer a la Alianza Atlántica. Sin embargo, la política del PSOE cambió con respecto a la que había defendido en la oposición, una vez en el poder. Tal y como recuerdan Martorell y Juliá (2012), las presiones de Estados Unidos y Alemania, la relación establecida por el presidente del gobierno, Felipe González, entre la permanencia en la OTAN y la incorporación de España a la CE y la actitud favorable hacia un estrechamiento de vínculos con la Alianza precipitaron el cambio del rechazo inicial hacia la comprensión hacia la OTAN.

En los primeros meses de la legislatura no todos los ministros estaban de acuerdo en permanecer en la OTAN, pero ya se hacían declaraciones en prensa proclives a la Alianza Atlántica (Marín, 2008). La decisión del gobierno era permanecer, lo que implicó la conversión de algunos ex partidarios del no. Finalmente se consiguió el apoyo del partido y de la militancia. Una vez firmado el tratado de adhesión a la UE, González procedió a la remodelación del gobierno, en la cual se cambió a Fernando Morán por Francisco Fernández Ordóñez en Exteriores y a Miguel Boyer por Carlos Solchaga en Economía y Hacienda, y convocó el referéndum sobre la OTAN. La consulta tuvo lugar el 12 de marzo de 1986 y el resultado fue del 56% a favor del sí, la opción defendida por el gobierno, y del 43% por el no, con una participación del 59%.

Como se ha visto, bajo los mandatos socialistas, España acometió grandes cambios tanto a nivel interno como a nivel exterior. Más de una década en el poder, sin embargo, también trajo problemas.

Tal y como explican Martorell y Juliá (2012), en 1989 saltó a la prensa el caso Juan Guerra, en que se acusaba al hermano de del vicepresidente, Alfonso Guerra, de tráfico de influencias. Ello condujo a revelaciones sobre financiación ilegal de los partidos. En 1991, se descubrió que la empresa Filesa se dedicaba a la financiación ilegal del PSOE. Para Martorell y Juliá (2012), el rápido crecimiento económico desde 1986, la falta de alternancia en el sistema, la expansión del gasto público, la fuerte inversión del Estado y los fondos procedentes de la CE, la relajación del control interno y la descentralización política, entre otros factores, “generalizaron prácticas corruptas que ni el gobierno ni el PSOE mostraron interés alguno en atajar”. Además, Marín (2008) resalta también que “no fueron sólo políticos o altos cargos socialistas los que estaban implicados en tramas ilegales, la corrupción alcanzaba a conocidos líderes empresariales, como Mario Conde o Javier de la Rosa, que se habían hecho famosos a finales de los años 80 a través de espectaculares operaciones financieras que terminaron en auténticas estafas por valor de muchos miles de millones de pesetas”. La legislatura de 1993 se conoce como la de la crispación (Martorell y Juliá, 2012; Marín, 2008) debido a los casos de corrupción y la utilización de los mismos por parte de la oposición. El PSOE volvió a ganar las elecciones de 1993, aunque sufrió un retroceso: los socialistas obtuvieron 159 diputados y el Partido Popular, 141 escaños. El gobierno se alió entonces con Convergència i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Pese al retroceso electoral, los escándalos se sucedieron. El gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, fue acusado de tener una cuenta de dinero negro; y, Luis Roldán, director de la Guardia Civil, fue acusado de cobrar comisiones ilegales y de amasar así una gran fortuna personal. El ministro de Agricultura, Vicente Albero, fue acusado de fraude fiscal, por lo cual dimitió. También dimitieron los diputados Carlos Solchaga y José Luis Corcuera, ex ministros de Hacienda e Interior por haber mantenido en sus puestos a Rubio y a Roldán. Además, el nuevo ministro de Interior, Antoni Asunción, dimitió también por la fuga de Roldán. En ese contexto, el líder del Partido Popular, José María Aznar, pidió la dimisión de Felipe González. Sin embargo, el presidente se negó a dimitir y aguantó en el poder hasta que Jordi Pujol, líder de CiU, anunció que no votaría los presupuestos. Así, González puso término a la legislatura con la convocatoria de elecciones para el 3 de marzo de 1996.

Durante la época socialista, el gobierno tuvo también que hacer frente a la lucha antiterrorista contra ETA. El juez Baltasar Garzón, que había sido durante un corto periodo entre 1993 y 1994 secretario de Estado con el PSOE, abandonó la política y regresó a su puesto en la Audiencia Nacional. Allí reabrió el caso GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), y afirmó en su auto que se había organizado una trama terrorista vinculada a responsables del Ministerio de Interior.

Entre 1983 y 1987, el grupo parapolicial de los GAL había cometido acciones terroristas, lo que se conoció como guerra sucia contra ETA. La trama implicaba al ex ministro de Interior, José Barrionuevo, y a otros cargos, y la instrucción pasó al Tribunal Supremo. El magistrado, Eduardo Móner, en enero de 1996 dictó contra Barrionuevo un auto de procesamiento por dirigir una banda armada desde el ministerio. Él y Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad del Gobierno de España, fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano hispano-francés confundido con un miembro de ETA, y por malversación de caudales públicos. El juez Javier Gómez de Liaño también procesó al general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, como el autor por inducción de los delitos de detención ilegal, tortura y asesinatos de los militantes de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Por su parte, los terroristas de ETA intensificaron la violencia y siguieron atentando contra cargos del PSOE y del PP, además de contra la población. La legislatura acababa con los asesinatos del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, y del dirigente socialista, Fernando Múgica, en manos de ETA. Además, en cuestiones de escándalos económicos, Roldán fue entregado a la justicia española y el banquero, Mario Conde, y el empresario, Javier de la Rosa, entraron en prisión por estafa y fraude. Todo ello contribuyó a enrarecer el clima con el que se llegaba a las elecciones. Pese a todo, los comicios de 1996 dieron una ligera ventaja al PP, con 156 diputados, y el PSOE quedó cerca, con 141 escaños.

En la figura 15 puede observarse un esquema-resumen de la primera etapa de gobiernos socialistas en España durante la época democrática.

Figura 15. Ejes y problemas de los gobiernos del PSOE entre 1982 y 1996	
Ejes de las distintas legislaturas	Problemas
<ul style="list-style-type: none"> • Extensión de la educación pública • Creación del Sistema Nacional de Salud • Reforma del ejército • Entrada en la CE (UE) • Permanencia en la OTAN • Reconversión industrial • Lucha antiterrorista 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del desempleo • Escándalos de corrupción y de financiación ilegal • El caso GAL • Crispación política

Fuente: elaboración propia.

4.4.2. Segunda etapa de gobiernos del PSOE (2004 - 2011)

El PSOE volvió al poder en 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero al frente y se mantuvo durante dos legislaturas. El 35 Congreso del PSOE celebrado en junio del año 2000 había llevado a la secretaría general al líder de la Nueva Vía, Zapatero, cuyo objetivo era llevar a cabo el socialismo de los ciudadanos. La idea de la corriente de la Nueva Vía era ser la vanguardia de la modernidad y ampliar los derechos sociales y las libertades públicas.

En efecto, las elecciones de 2004 dieron 164 diputados al PSOE y 148 al PP. Así, el PSOE formó gobierno con mayoría simple. Tal y como recuerdan Martorell y Juliá (2012), las primeras medidas legislativas tuvieron que ver con la legalización de medio millón de inmigrantes, el incremento de los recursos dedicados a la educación, el aumento del salario mínimo y de las pensiones, la ampliación de la cobertura por desempleo y las ayudas a la dependencia y a la natalidad. Del mismo modo, también se impulsaron la ley contra la violencia de género, la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la ley sobre la memoria histórica, la ley antitabaco, el carnet de conducir por puntos, el estatuto del trabajador autónomo y una ley de educación que incluía la materia educación para la ciudadanía, entre otras medidas, como la vuelta de las tropas de Irak.

Tal y como señala Sánchez-Cuenca (2014), Zapatero siguió una idea de libertad republicana, basada en que una persona es libre si no actúa bajo condiciones de dominación, de ahí la profundización en el concepto de ciudadanía. Según, Sánchez-Cuenca (2014), se puso énfasis en cuestiones que “resultaban extrañas a muchos socialdemócratas”, como las antes enumeradas. Según el autor, en la primera legislatura de la segunda etapa de los socialistas en el poder se renunció a abrir el debate sobre la eutanasia y no se avanzó en el compromiso laicista. En este último punto, además, el Ejecutivo mejoró las condiciones de financiación de la Iglesia católica. Con todo, durante la primera legislatura, “el Gobierno de Zapatero fue fiel a los compromisos electorales del partido y actuó en consonancia con las ideas republicanas que desarrolló Zapatero durante sus primeros años como secretario general del PSOE, antes de llegar al poder. Las reformas que se realizaron en este ámbito fueron audaces, profundas y pusieron a España a la vanguardia mundial en materia de derechos civiles” (Sánchez-Cuenca, 2014).

La cuestión territorial fue abordada por los socialistas desde la perspectiva desarrollada en la Declaración de Santillana de 2003, que se basaba en el reconocimiento de la España plural, lo que significó en la práctica la opción de reformar los Estatutos de Autonomía de las comunidades que lo decidieran. De este modo, el gobierno se comprometía a aceptar el término que cada

cual quisiera añadir como seña de identidad, bien fuera nación, nacionalidad o región (Martorell y Juliá, 2012: 475).

Así, el Congreso de los diputados admitió a trámite el Estatuto aprobado por el Parlamento de Euskadi en 2004, pero fue rechazado por 313 votos contra 29 y 2 abstenciones. Ello no impidió, sin embargo, empezar con las reformas estatutarias. La Comunidad Valenciana reformó su Estatuto en 2006, como Andalucía, y las dos se autodenominaron nacionalidades históricas. Por su parte, el Parlamento de Cataluña aprobó su nuevo Estatuto en 2005, en el que se denominaba nación, pero este fue recortado en el Congreso de los Diputados. Como señala Sánchez-Cuenca (2014), los cambios que se hicieron fueron colocar la palabra nación en el preámbulo y negar la agencia tributaria propia. En el Parlamento español, el Estatut salió adelante con el apoyo de CiU, con 189 votos a favor y 154 en contra. Después, el texto fue ratificado por referéndum, con una participación del 49%, pero quedó anulado en algunos de sus artículos por el Tribunal Constitucional, después de que el PP lo recurriera. Según Sánchez-Cuenca (2014), la reforma del Estatut no estaba en el programa electoral del PSOE, pero fue un tema que se impuso en la agenda política a partir de la victoria del PSC en las elecciones catalanas de 2003 y la formación del gobierno tripartito junto a ERC e ICV. En esa campaña electoral, Zapatero se comprometió a apoyar el Estatuto que saliera del Parlament, una afirmación que le reportó críticas tanto de los nacionalistas catalanes como españoles.

Durante la primera etapa de Zapatero en el poder también se inició el proceso de paz para acabar con ETA, que se vio interrumpido por el atentado en el aeropuerto de Madrid-Barajas perpetrado por la banda terrorista y en el que murieron dos personas. Pese a las dificultades del proceso, Sánchez-Cuenca (2014) resalta que sirvió para forzar el distanciamiento de Batasuna respecto a la vía armada, mostró a la sociedad vasca que el conflicto no se resolvía por cerrazón de los etarras y, al final, “Zapatero logró acabar con el terrorismo de ETA” (Sánchez-Cuenca, 2014).

Durante la primera legislatura del Ejecutivo Zapatero, el ciclo económico era de crecimiento, con unas tasas anuales de crecimiento superiores al 3.5% entre 2004 y 2008. En 2007, la tasa de empleo era del 66%. La etapa de crecimiento duraba desde mediados de los años noventa, pero en los últimos meses de la legislatura, en 2008, parecía haber llegado a su fin.

La segunda legislatura encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, que se extendió entre 2008 y 2011, estuvo atravesada por la crisis financiera y económica. La recesión económica que siguió al colapso de Lehman Brothers se agravó en España con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En un primer momento, el presidente del Gobierno se negó a pronunciar la palabra *crisis* y optó

por otras como *desaceleración* o *crecimiento negativo*. Ello provocó, en opinión de Sánchez-Cuenca (2014), la ruptura entre Zapatero y la opinión pública, ya que se consideró como una falta de previsión o incapacidad para hacer frente a la magnitud de la crisis. Según Paramio (2012: 104), España fue uno de los países que en los primeros momentos de crisis optaron por medidas keynesianas, junto con el Reino Unido. “Pese a que España partía de una situación de superávit y de bajos niveles de deuda pública (inferiores al 40% en 2008), la combinación de los gastos del desempleo y de las medidas de estímulo (que no resultaron demasiado eficaces por su diseño temporal) disparó el déficit sin lograr frenar la destrucción de empleo” (Paramio, 2012: 104). En la situación española ahondan Martorell y Juliá (2012: 478) cuando afirman que “el colapso de la economía especulativa, combinado con los intentos de la política expansiva, acabaron por generar un elevado déficit público y un imparable crecimiento de la deuda, que colocaron a España al borde la intervención en mayo de 2010”.

Para ese entonces, la Unión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional ya habían puesto en marcha el primer rescate a Grecia (2010), y pronto le seguiría el de Irlanda (2010), el de Portugal (2011) y Chipre (2013). En el caso de España, el rescate llegó en 2012 y estuvo solamente dirigido al sector financiero. La situación en Europa se inclinaba hacia las políticas de austeridad como respuesta a la crisis económica.

En mayo de 2010, “Zapatero anunció un drástico giro en su política para dar prioridad a la reducción del déficit” (Paramio, 2012: 105). Ello significó un cambio en las políticas económicas y sociales para ajustarlas al contexto europeo, que propugnaba la austeridad como respuesta a la crisis financiera y económica. Un ejemplo de ello es la modificación del artículo 135 de la Constitución, que pactaron PSOE y PP y que incorporó el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit.

El 27 de septiembre de 2011 se disolvieron las Cortes y el presidente del Gobierno adelantó las elecciones 4 meses, después de anunciar que ya no se presentaría a la reelección. Los comicios fueron el 20 de noviembre de 2011 y el PSOE obtuvo 7 millones de votos, lo que equivalía a 110 diputados. Terminaba así el periodo del PSOE en el poder y se daba paso al ciclo conservador.

Figura 16. Ejes y problemas de los gobiernos del PSOE entre 2004 y 2011	
Ejes de las distintas legislaturas	Problemas
<ul style="list-style-type: none"> • Legalización de personas en situación irregular • Extensión de las ayudas sociales: dependencia y natalidad • Lucha contra la violencia de género y por la igualdad • Ley del matrimonio entre personas del mismo sexo • Ley de Memoria Histórica • Reformas estatutarias • Proceso de paz y fin de ETA 	<ul style="list-style-type: none"> • Crisis económica • Destrucción de empleo • Aumento del déficit público y crecimiento de la deuda

Fuente: elaboración propia.

4.4.3. Primera etapa del PS en la presidencia de Francia (1981 - 1995)

El Congreso de Épinay de 1971 marcó el inicio del dominio en la escena política de los años ochenta del Partido Socialista francés. Fue ahí donde las fuerzas socialistas se reunificaron en el Parti Socialiste (PS) y donde se eligió a François Mitterrand como líder. Según Portelli (1984), el Congreso de Épinay permitió legitimar la presidencialización rápida del partido, debido a factores como la estrategia que reposaba en la unión de la izquierda y que se materializó en la unión con los comunistas, el Programa Común y la voluntad de agrupar al electorado de la izquierda. Épinay, además, permitió reconstruir la izquierda no comunista (Portelli, 1984). Una década después, el PS se convirtió en un partido hegemónico y Mitterrand en el presidente del país, cargo que ocupó de 1981 a 1995. La izquierda francesa se identificó entonces, de manera mayoritaria, con el representante de la socialdemocracia en el país galo. Aunque, como señala Portelli (1984), el PS no se ha correspondido jamás con el modelo de partido de trabajadores o socialdemócrata de la Europa del norte, marcado por una estrecha relación entre el sindicato y la organización política. El Partido Socialista francés concibió una acción política autónoma de los grupos de presión y buscó apoyo entre las clases medias e ilustradas (Portelli, 1984). Tal y como recogen Grunberg y Schweisguth (1984), entre las elecciones legislativas de 1967 y las presidenciales de 1981, la izquierda pasó del 45% de los apoyos al 52%. Los autores explican este ascenso por la constitución de una oposición creíble que empezó a representar la izquierda y por el desgaste de la mayoría en el poder, pero también por los cambios acaecidos en la sociedad francesa, en especial, por la aparición de una clase media asalariada. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia se escolarizó, modernizó, terciarizó y urbanizó (Grunberg y Schweisguth, 1984).

Si el gaullismo había marcado la vida política francesa de los años sesenta, también la figura de Mitterrand dejó su impronta en la de los ochenta. Los 14 años que Mitterrand estuvo en el poder hacen que la evolución del Partido Socialista de entonces se asimile en buena medida a sus decisiones, más cuando la llegada al poder de los socialdemócratas significaba la primera alternancia en la Quinta República, después de 23 años con gobiernos de la derecha.

Durante la década de los setenta, el PS optó por una estrategia de acercamiento al Partido Comunista (Voinot, 2015). Por ese motivo se adoptó en 1972 el Programa Común, cuyas líneas maestras se basaban en nacionalizaciones del sector financiero, aumentos de salario y medidas sociales para afianzar el Estado de bienestar, unas medidas que, según Voinot (2015), poco se diferenciaban de los programas socialdemócratas típicos del periodo de posguerra. El programa se presentaba también como solución a la crisis económica que atravesaba el país.

Con la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales francesas de 1981, François Mitterrand se convirtió en el primer presidente socialista de la Quinta República, al obtener el 52% de los apoyos electorales. Las legislativas de ese mismo año dieron también la victoria a la izquierda, de modo que los socialistas, junto al Partido Comunista, tenían asegurado poder acometer las reformas de su programa electoral durante 5 años.

Tal y como recuerda Duhamel (1987), durante la Quinta República se vio renacer a la izquierda francesa y a ella se debe la normalización de la democracia en el país galo. “Los franceses vieron finalmente la alternativa de poder, la mayoría se convirtió en la oposición y la oposición en la mayoría. Finalmente se creyó a la izquierda capaz de gobernar Francia sin convertirla en un país comunista o experimentar un golpe de Estado. Los partidos que una vez fueron excluidos del poder tuvieron que descubrir, con riesgo de crisis continuada, los imperativos y limitaciones del poder” (Duhamel, 1987).

En el plano económico, el primer mandato (1981 - 88) se caracterizó por las nacionalizaciones de algunas entidades bancarias y grupos industriales y por controlar la inflación. Al mismo tiempo el desempleo aumentó, al igual que el déficit público, y se procedió a la reconversión de las minas de carbón. El Partido Socialista llegó al poder en un momento de incertidumbre económica, pero con un programa pensado para un contexto de boom de la posguerra, una situación de crecimiento que empezó a resquebrajarse a mediados de los años setenta. Por tanto, uno de los primeros desafíos consistió en casar el programa electoral y la actuación gubernamental con una situación económica cambiante y confusa, que ya no respondía a las características vividas hasta entonces.

Según Kuisel (1987), Francia consiguió desarrollar una nueva economía durante el período de posguerra, entre, aproximadamente, 1950 y 1974, lo que se conoce como los *Trente glorieuses*. En esas tres décadas se produjo una ruptura definitiva con el pasado. De hecho, “el boom de la posguerra representó el más largo período de rápido e ininterrumpido crecimiento en la historia moderna de Francia” (Kuisel, 1987: 37).

Entre los cambios estructurales de mayor importancia acaecidos en las tres décadas gloriosas se encuentran la apertura de la economía y la redistribución de la fuerza del trabajo. Para Kuisel (1987), la entrada en el Mercado Común en 1950 acabó con el proteccionismo e introdujo a Francia en el comercio internacional. Además, el historiador señala que la internacionalización de la economía se hizo notar con la creciente inversión extranjera en el país durante los años sesenta. De modo que “la integración de la economía francesa en la economía mundial debe considerarse como el cambio más dramático y fundamental en la historia económica reciente de la nación” (Kuisel, 1987: 38). En lo que se refiere a la fuerza del trabajo, durante el periodo de posguerra, Francia experimentó la transformación del campesino en agricultor. Si bien la proporción de trabajadores agrícolas respecto a la población activa descendió, la productividad del sector creció y “Francia continuó siendo el mayor exportador de productos agrícolas de la Comunidad Europea” (Kuisel, 1987: 38). El campo se había transformado para abastecer de alimentos al continente. Sin embargo, “Francia había apostado su futuro en la industria” (Kuisel, 1987: 39). Así, durante ese periodo experimentaron un gran crecimiento los sectores de la energía, la construcción, las obras públicas, las industrias de bienes intermedios y de bienes de equipo. Sin embargo, la economía francesa también adolecía de debilidades. Para Kuisel (1987), la concentración industrial, la baja presión competitiva o las rigideces del mercado, así como el sistema de organización industrial o el propio capitalismo francés, el conservadurismo empresarial y el tamaño y la composición de la base industrial de la nación y la inflación, entre otros factores, son problemas que siempre han afectado a la economía francesa. Al largo período de crecimiento, le siguió una situación de crisis económica. Fue entonces cuando los socialistas llegaron al poder.

El modelo de crecimiento que surgió de los años 50 estaba basado en regularidades económicas (Boyer, 1987). Se trataba del modelo keynesiano y fordista, que abogaba por la creación de un amplio Estado de bienestar, un sistema fiscal moderno y subsidios a las principales industrias, lo que permitió a Francia experimentar ese gran crecimiento, gracias también al compromiso entre empresas, sindicatos y el Estado. Ahora bien, con la crisis de 1974 - 75 y la aplicación del primer Plan Barre en 1976, se dejaron de lado las concepciones keynesianas sobre la dirección anticíclica de la economía y se combinó la congelación de precios y salarios con actuaciones por

el lado de la oferta e intervenciones de carácter monetario (Boyer, 1987: 59). Según Boyer (1987), a partir de los años ochenta, se entró en una fase de casi agotamiento del crecimiento del PIB, un estancamiento de la inversión productiva y un fuerte descenso de la inversión en bienes de consumo duradero. Francia había entrado en un período de crisis.

La izquierda contaba entonces con las soluciones fordistas-keynesianas de su programa económico, que supusieron en realidad un obstáculo durante su primer periodo de permanencia en el poder, según Boyer (1987: 81), dada también la coyuntura internacional y el auge neoliberal.

Para Hall (1987), “el experimento económico del socialismo francés se inició en junio de 1981 en un ambiente de júbilo y finalizó en marzo de 1986 bajo un espíritu de resignación”. En el primer mandato de Mitterrand, de una duración de cinco años, Hall (1987) distingue tres períodos, en lo que se refiere a políticas macroeconómicas: la etapa de la redistribución, la etapa del *rigueur* y la etapa del *relance*.

De este modo, la etapa de la redistribución se centró en los años 1981 y 1982, cuando Mitterrand adoptó una serie de medidas expansionistas. La idea del gobierno socialista era relanzar la economía con el incremento del empleo público y del poder adquisitivo de las familias de menor nivel de renta. En esos dos años, el poder adquisitivo del salario mínimo fue aumentado un 10% y las ayudas a las familias con hijos aumentaron en un 50%. Según Hall (1987), estas medidas representaron un gasto del 2% del PIB. Para financiar la estrategia expansionista, remarca el autor, los socialistas aumentaron el déficit del sector público hasta el 2,6% del PIB en 1982 y elevó los impuestos sobre los empleadores y personas con rentas más altas. Se trataba, pues, de un “keynesianismo redistributivo” (Hall, 1987: 83).

La segunda etapa, la del rigor socialista, se produjo a partir del año 1982, cuando la situación internacional no mejoró, sino que la recesión se prolongó y el franco tuvo que ser devaluado. Tal y como recoge Hall (1987), aumentó el déficit exterior en 27.000 millones de francos, lo que unido a los crecientes tipos de interés de Estados Unidos y la elevación de cambio del dólar fueron responsables del deterioro de la balanza de pagos de Francia en otros 57.4000 millones de francos. Así, “Mitterrand optó por la contracción manteniendo la apertura de la economía hacia el exterior” (Hall, 1987: 85). Según el mismo autor, en junio de 1982 se congelaron los salarios y los precios hasta octubre, y se limitó el déficit del sector público al 3% del PIB, lo que implicó el recorte del gasto público en 20.000 millones de francos en 1982 y en 24.000 millones de francos en 1983. Además, también se aumentaron los impuestos en 40.000 millones de francos, se limitó al 8% el aumento de precios y salarios para el año siguiente y se impuso un

estricto control de cambios sobre las salidas de francos. El plan de austeridad tenía el objetivo de reducir la tasa de inflación y el déficit exterior a través de una disminución de los gastos de consumo y restablecer la rentabilidad de la industria (Hall, 1987: 87).

La tercera etapa del gobierno socialista es bautizada por Hall (1987) como *relance* neoliberal. Con vistas al final de su mandato, Mitterrand optó por el relanzamiento con la reducción de impuestos entre 1985 y 1986, lo que beneficiaba a los resultados de las empresas. Para Hall (1987: 89), “el objetivo del gobierno era incrementar de nuevo la renta disponible en términos reales y los niveles de inversión en Francia antes de las elecciones sin dar una imagen de pérdida de *rigueur* en conjunto”.

En 1984, Laurent Fabius sustituyó a Pierre Mauroy como Primer Ministro y es a partir de entonces cuando el PS opta por gestionar los problemas económicos del país desde una óptica monetarista. Así, la lucha contra la inflación se centró en el recorte del gasto público, la liberalización y la reestructuración de la industria. Entonces, el giro en las políticas socialdemócratas llevó al Partido Comunista a romper con el Partido Socialista. Más tarde, en las elecciones legislativas de 1986 triunfó la coalición conservadora y Francia entró en un periodo de cohabitación en que el socialista Mitterrand ocupaba la presidencia y el conservador, Jacques Chirac, fue Primer Ministro. Siguiendo la estela de la política neoliberal del Reino Unido, con Margaret Thatcher a la cabeza, Chirac agudizó las políticas neoconservadoras.

Por lo que se refiere al ámbito social, en el que existía cierto descontento debido a medidas impopulares, también se aumentó el salario mínimo, se puso en marcha una quinta semana de vacaciones pagadas y se reguló la semana laboral de 39 horas, así como se situó la edad de jubilación en 60 años. Tales políticas resultaron en un aumento de la inflación, que llegó al 14% en 1981; el aumento del número de parados, que llegó a los 10 millones; y, a la devaluación del franco en un 8,5 % (Voinot, 2015). Según Ross (1987), la izquierda francesa había dado pasos importantes en la expansión del *Welfare State* en los períodos del Frente Popular y de la Resistencia-Liberación, pero ese progreso se interrumpió en 1946. En 1981, pues, la izquierda que retornaba al poder consideraba que se debía profundizar en el Estado de bienestar. Sin embargo, a nivel internacional y también en Francia, a partir de los años setenta, se empezó a cuestionar la viabilidad del *Welfare State*. Según Ross (1987: 257), las proyecciones demográficas y el coste de la asistencia sanitaria empezaron a representar un problema para el sistema francés. Ello se unió al aumento del desempleo y al fin del crecimiento económico estable. De este modo, los socialistas pusieron en marcha las promesas sociales de su manifiesto

electoral durante el primer año de mandato, con el aumento a las subvenciones para la adquisición de vivienda y el incremento de las asignaciones familiares.

Era el momento de la alianza entre socialistas y comunistas y el gobierno intentaba no favorecer a ningún sindicato, lo que derivó en un complicado sistema de relaciones en que daba la sensación que “los sindicatos, con independencia de hasta qué punto lo hiciesen en realidad, estaban constantemente quejándose del gobierno” (Ross, 1987: 262). Como la coyuntura económica internacional no fue la esperada y las políticas cambiaron, “la política y el equilibrio de fuerzas en el seno del gobierno se decantaron hacia el centro” (Ross, 1987: 263). Así, la izquierda tuvo que enfrentarse a grandes problemas de política social para mantener el Estado de bienestar y llegó el rigor a ese ámbito entre 1982 y 1983. Tal y como resume Ross (1987: 266), “en general, la izquierda se las arregló con el Estado de bienestar a partir de 1982 a base de salir del paso de un año para otro. Y lo que tal vez sea más importante es que los parcheos y los recortes que efectuó para hacer cuadrar las cuentas se llevaron a cabo sin cuestionar los principios generales del sistema”. Cuando el rigor llegó a los asuntos sociales, las relaciones entre el gobierno y los sindicatos de izquierda se deterioraron, pero, en opinión de Ross (1987), la modernización tuvo efectos más profundos. “Se fomentó una brutal reorganización de empresas siderúrgicas, de fabricación de automóviles y astilleros. Con tal de alcanzar los objetivos de la modernización, cobraron protagonismo la actividad empresarial, el beneficio y el mercado. (...) Se dejaron de lado anteriores promesas y políticas de la izquierda orientadas a atajar el incremento del desempleo” (Ross, 1987: 271). El Partido Comunista abandonó el gobierno y el sindicato CGT, la Confederación General del Trabajo, intensificó sus críticas y también se alejó de la línea gubernamental. Desde entonces, la izquierda mostraba dos caras claramente diferenciadas: el PS y el PC, en que el ámbito social jugó un importante papel. Tal y como explica Ross (1987: 276, 277), los socialistas se erigían en protectores de los logros sociales y de los principios de solidaridad en que éstos se basan, mientras que los comunistas adoptaron una posición más integralista y acusaban a los socialistas de haber iniciado el desmantelamiento de las mejoras sociales. Sin embargo, aunque “la izquierda en el poder no fue capaz de llevar a efecto sus promesas de revigorizar el Estado de bienestar francés, al menos tampoco llevó a cabo ninguna actuación drástica para destruirlo” (Ross, 1987: 277).

En cuanto a las relaciones industriales, la desindustrialización, el desempleo y otros efectos de la crisis económica quitaron apoyos a la izquierda y acentuaron el proceso de descomposición sociológica. La clase obrera se debilitó sustancialmente (Ross, 1987: 277). Del mismo modo, el movimiento obrero organizado menguó. A partir de 1984, la flexibilidad en el mercado de trabajo también contribuyó a ese fenómeno.

A pesar de las dificultades por las que había atravesado el Partido Socialista francés, Mitterrand fue elegido de nuevo presidente en 1988, de modo que su segundo mandato se alargó hasta el año 1995. Durante ese período, la prioridad del presidente fue la integración europea e incluso se le atribuye un giro centrista y pragmático (Voinot, 2015). Uno de los mayores logros sociales fue la instauración de la renta mínima de inserción, destinada a paliar la precaria situación económica de aquellos que carecían de trabajo o de seguro de desempleo.

En 1993, sin embargo, el PS perdió las elecciones legislativas y ello llevó a un nuevo periodo de cohabitación. Con un 84% de los apoyos electorales, las fuerzas de centroderecha anticiparon el cambio de gobierno que se produjo dos años más tarde.

Según Maclean (147: 1998), Mitterrand logró modernizar y liberalizar el capitalismo francés, pero no pudo reconciliar la nueva lógica económica con las necesidades sociales, de manera que quedaba amenaza la cohesión social. Así, la renovación económica se consiguió con un alto coste social. Para la autora, la presidencia de Mitterrand puede entenderse como un periodo de transición. Cuando el socialista alcanzó el poder, el escenario económico global se transformó. El sistema basado en el modelo fordista de crecimiento, con la regulación macroeconómica keynesiana como telón de fondo, en el que se desarrollaba el Estado de bienestar, dejó de funcionar. Por eso, a partir de 1983, los gobiernos intentaron adaptar la economía francesa al nuevo escenario, intentando encontrar un camino hacia el modelo postfordista, que proporcionara un crecimiento económico y social sostenible (Mclean, 1998). El resultado de esa búsqueda, que han emprendido también otros partidos socialistas en Europa, todavía no está claro.

El periodo socialista en la presidencia gala acabó cuando Mitterrand finalizó su segundo mandato. La era Mitterrand no pudo evitar ser destructiva con los fundamentos del modelo que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue incapaz de crear un nuevo modelo de desarrollo (Mclean, 1998). En las elecciones del 7 de mayo de 1995, el conservador Chirac venció al socialista Lionel Jospin, con un resultado de 52% a 47% en la segunda vuelta.

Figura 17. Ejes y problemas de los gobiernos del PS entre 1981 y 1995	
Ejes	Problemas
<ul style="list-style-type: none"> • Nacionalizaciones • Control de la inflación • Reconversión industrial • Medidas expansionistas • Medidas de contracción 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del desempleo • Aumento del déficit público • Deterioro de las relaciones con sindicatos • Desindustrialización

<ul style="list-style-type: none"> • Adopción del monetarismo • Modernización 	
---	--

Fuente: elaboración propia.

4.4.4. Segunda etapa del PS en la presidencia de Francia (2012 - 2017)

El *Partie Socialiste* estuvo alejado de la presidencia francesa hasta las elecciones del año 2012. El candidato socialista, François Hollande, venció al conservador, Nicolas Sarkozy, con un resultado del 51% de los apoyos frente al 48% de su rival político. Así, Hollande se convirtió en el segundo presidente socialista de la Quinta República, después de Mitterrand.

El mandato de Hollande, que contó con tres primeros ministros socialistas, Jean-Marc Ayrault (2012 - 2014), Manuel Valls (2014 - 2016) y Bernard Cazeneuve (2016 - 2017), estuvo marcado por los conflictos bélicos y los ataques terroristas de 2015, en París, y de 2016, en Niza.

En el plano internacional, el presidente implicó al país galo en la lucha antiterrorista. De este modo, las fuerzas francesas se desplegaron en Malí en 2013, se involucraron en el conflicto del Sahel de 2014, en el conflicto contra el grupo terrorista Estado Islámico y también en el conflicto de República Centroafricana; del mismo modo, Francia también mantenía efectivos en el Líbano.

En 2015, la revista *Charlie Hebdo* sufrió un atentado terrorista, cuando en su sede de París varios hombres armados abrieron fuego contra los trabajadores, de los cuales 12 resultaron muertos y 11, heridos. En noviembre del mismo año, París fue víctima de varios atentados, reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico, en los que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas. Al año siguiente, en 2016, fue Niza la ciudad que sufrió un ataque terrorista, con el resultado de 85 personas muertas y 303 heridos.

En cuanto a los derechos civiles, durante el mandato de Hollande se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo que se refiere al contexto económico, Francia sufría también las consecuencias de la crisis económica que estalló en 2008, y el país acusaba el poco o nulo crecimiento y la subida del desempleo.

Hollande declaró en 2016 el estado de emergencia económico y social, para lo cual puso en marcha un plan de choque contra el desempleo de 2.000 millones de euros. En efecto, las cifras del paro alcanzaron el 10% de desempleados en 2015, lo que equivalía a más de tres millones de personas sin empleo. Para Kuhn (2014), Hollande no comprendió la magnitud de la situación

económica en los primeros meses de su mandato y perdió tiempo a la hora de abordar plenamente la necesidad de reformas estructurales y participar en una narrativa pedagógica persuasiva. La popularidad del presidente se resintió y llegó a tener el índice más bajo de popularidad, que, aunque remontó tras los atentados, volvió a caer hacia el final del mandato. En febrero de 2015, el presidente alcanzó el 29% de cota de popularidad, la más alta desde 2013, según el instituto demoscópico CSA. Otra encuesta, hecha por el instituto Elabe en 2016, situaba el nivel de popularidad de Hollande en el 16%. De este modo, el presidente anunció en diciembre de 2016 que no sería candidato a las primarias de su partido para participar en las elecciones presidenciales de 2017. Finalmente, fue Benoit Hamon quien concurrió a las elecciones por el Partido Socialista y obtuvo en la primera vuelta el 6% de los apoyos. No solo la popularidad del presidente Hollande cayó, sino que también el partido vivía horas bajas.

Según Grunberg (2014), la crisis que afecta al Partido Socialista francés se sitúa en el contexto de desestabilización del sistema de partidos del país galo, debido a las divisiones provocadas por la evolución de la Unión Europea en la izquierda y la derecha durante la crisis económica. Sin embargo, el autor también apunta que el eje izquierda/derecha está siendo cuestionado por una escisión alternativa, la que proponen los partidarios y los detractores de la Unión Europea, lo que impedirá en el futuro que la izquierda se una en un programa de gobierno (Grunberg, 2014). Después de un agitado proceso de primarias, el PS sufrió una histórica debacle electoral en 2017, con el peor resultado desde 1969. El mandato de Hollande acabó y la presidencia recayó en el ganador de las elecciones, Emmanuel Macron y su nuevo partido, En Marche!, quien a la sazón había sido miembro del Partido Socialista, ministro de economía entre 2014 y 2016 y secretario general adjunto de la presidencia francesa entre 2012 y 2014.

Figura 18. Ejes y problemas de los gobiernos del PS entre 2012 y 2017	
Ejes	Problemas
<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo 	<ul style="list-style-type: none"> • Conflictos bélicos • Ataques terroristas • Consecuencias de la crisis económica • Aumento del desempleo.

Fuente: elaboración propia

4.5. La crisis económica de 2008

El periodo de análisis de la presente tesis doctoral, que va del año 2000 al 2017, está atravesado por la crisis económica de 2008. Por esa razón y a efectos de situar la investigación también a nivel de coyuntura económica, el capítulo sobre el marco contextual concluye con una mirada global a los años de crisis.

La bautizada como Gran Recesión por distintitos economistas y sociólogos, además de otros científicos sociales (Grusky, Western, Wimer: 2011; Temin: 2010; Paramio, 2016), y medios de comunicación, es decir, la crisis financiera y económica que comenzó en 2007/8 en los Estados Unidos y que ha tenido un alcance mundial, es un elemento clave para entender de qué manera la socialdemocracia ha adoptado políticas económicas que le podrían parecer impropias. En la actualidad, tal y como señala Urquizu (2012: 41) “vivimos un cambio de época que implicará cambios sustanciales en los sistemas políticos y económicos”. A ello no es ajena la socialdemocracia.

La crisis financiera iniciada en 2007⁶, que evolucionó después en una recesión económica global y de la que el Fondo Monetario Internacional dijo que era la peor desde la II Guerra Mundial (FMI: 2009), tuvo su origen en la crisis de las hipotecas *subprime*⁷ estadounidenses y estuvo seguida del colapso financiero, simbolizado por la quiebra de la compañía de servicios financieros Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008. “El resultado fue una burbuja de especulación financiera a partir de las hipotecas *subprime*, debidamente bendecida por las agencias calificadoras de riesgo. El problema es que, una vez que dichas hipotecas comenzaron a dejarse de pagar, se descubrió que los paquetes de títulos de deuda no eliminaban el riesgo, sino que lo dispersaban de forma impredecible: eran, en palabras de George Soros, armas de

⁶ Una cronología exhaustiva de la crisis de 2007/8 se escapa a los propósitos de este trabajo. Los lectores interesados pueden consultar, a tal efecto, el epígrafe “Crónica de un *crash* anunciado: contracción del crédito, rescates y la socialización de casi todo” del libro *El Minotauro global*, escrito por el ex ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis (editorial Debolsillo).

⁷ En España las hipotecas *subprime* se conocieron como hipotecas basura. Se trataba de créditos del sistema financiero de Estados Unidos caracterizados por tener un nivel de impago más elevado que el resto (Gramlich, 2004). En Estados Unidos, el mercado de la vivienda empezó un crecimiento sostenido en los años 1990 y ganó impulso en 2004 y 2005. La burbuja estalló al año siguiente, mientras se hundían los precios en todo el país. Desde su pico en mayo de 2006 hasta su mínimo en mayo de 2009, el precio real de la vivienda cayó un tercio en todo Estados Unidos, y en algunas ciudades, hasta un 50%. El colapso en los precios de la vivienda estuvo asociado a la morosidad en el pago de hipotecas (Grusky, Western, Wimer, 2011: 4). Según Varoufakis (2015: 176, 177), en 2005, más del 22% de las hipotecas de EEUU eran *subprime*. Llegado 2007, el porcentaje era del 26%. Todas ellas se insertaban en CDO [obligaciones de deuda garantizadas, que permitían a los bancos originar y diseminar, prestar dinero e inmediatamente después vender de nuevo el préstamo]. Entre 2005 y 2007, los bancos de inversión estadounidenses emitieron 1,1 billones de CDO. En 2008, en términos de valor, los bonos con garantía hipotecaria alcanzaron cerca de 7 billones de dólares, de los que al menos 1,3 billones estaban basados en hipotecas.

destrucción financiera masiva. Y a ellas se sumó otro derivado financiero: los *credit-default swaps* (CDS), pensados como mecanismos de seguro contra quiebras e impagos, pero que se convirtieron en otra fuente de negocio especulativo que a su vez multiplicó, una vez que comenzó la crisis de las *subprime*, el impacto de la pérdida de valor de los paquetes de títulos de deuda” (Paramio, por publicar). Tal y como explica Varoufakis (2015: 159), la teoría económica tóxica, la popularmente conocida como economía de la oferta, funcionaba como una superstición matemática que lo abarcaba todo: “Sus modelos, por irrelevantes que fuesen como descripciones de la verdadera realidad del capitalismo, inspiraban las fórmulas matemáticas que permitían a Wall Street hacer dos cosas: primero, argüir que el sector financiero debía liberarse de toda regulación y, segundo, agarrarse al sector inmobiliario. (...) Los derivados tóxicos basados en hipotecas *subprime* jamás hubieran sido posibles sin las teorías económicas tóxicas”.

En ese momento, la crisis ya se había extendido a Europa y a la mayor parte del mundo occidental. Según el FMI (2009), en el cuarto trimestre de 2008, las economías avanzadas experimentaron una disminución sin precedentes del 7,5 en el PIB real. “A pesar de que la economía de los Estados Unidos puede haber sufrido la mayor parte de las tensiones financieras y la caída continua del sector de la vivienda –explicaba el organismo internacional en 2009–, Europa occidental y el Asia avanzada están siendo muy afectadas por la caída del comercio mundial, así como por el aumento de los problemas financieros propios y las correcciones de la vivienda en algunos mercados nacionales”. Como señalan Grusky, Western y Wimer (2011: 4), el comienzo de la crisis en Estados Unidos estuvo marcado por una inusualmente dramática crisis financiera, y aunque el completo desastre parece haberse evitado, el sector financiero está ahora más concentrado, las reformas han sido limitadas y continúan las quiebras bancarias. Además, la Gran Recesión ha sido la recesión económica más larga desde la posguerra mundial y las dislocaciones del mercado laboral que lleva asociadas han sido especialmente severas, y siguen siéndolo. Algo que distingue a la Gran Recesión de otras es la profunda crisis de la vivienda, que precipitó y también sostuvo la crisis financiera y del mercado laboral (Grusky, Western, Wimer, 2011: 3, 4).

En 2011, la Comisión de Investigación⁸ llevada a cabo en los Estados Unidos sobre la crisis financiera concluyó que la recesión se podía haber evitado y que fue causada por fallos generalizados en la regulación financiera, incluyendo el fracaso de la Reserva Federal a la hora

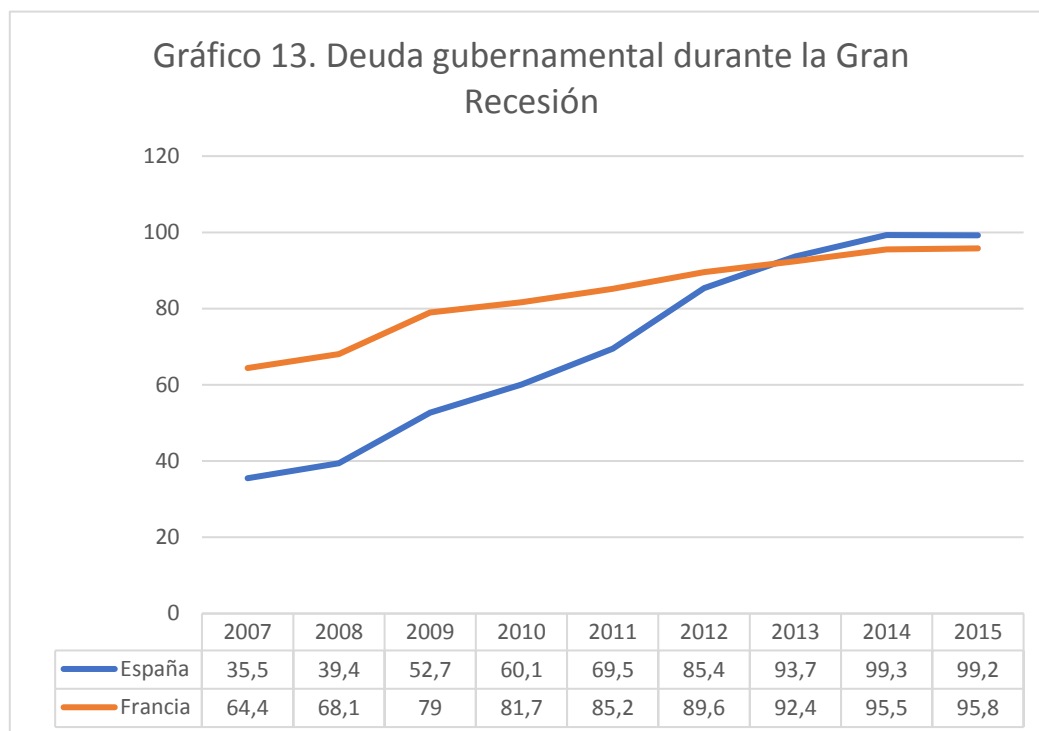
⁸ La Comisión de Investigación se creó a partir de la Ley para la Recuperación y Contra el Fraude (Ley Pública 111-21) aprobada por el Congreso de Estados Unidos y promulgada por el Presidente en mayo del 2009. La Comisión estaba formada por 6 miembros nombrados por el Partido Demócrata y 4 miembros nombrados por el Partido Republicano.

de detener la ola de hipotecas tóxicas; fallos en el gobierno corporativo, incluyendo demasiadas empresas financieras actuando imprudentemente y tomando demasiados riesgos; una mezcla explosiva de excesivo endeudamiento en los hogares y de Wall Street, que puso al sistema financiero en colisión con la crisis; por los políticos clave, que estaban mal preparados para la crisis y que carecían de una comprensión completa del sistema financiero que debían supervisar; y, por las violaciones sistemáticas en la rendición de cuentas y la ética a todos los niveles (Conclusiones de la Comisión de Investigación, 2011).

En Europa, la Gran Recesión trajo también una crisis de deuda soberana o crisis de la zona euro (Haidar, 2012). Para Lapavitsas (2011), “la crisis que ha afectado a la zona euro tiene dos causas principales. La primera es la gran turbulencia iniciada en los mercados financieros de Estados Unidos en 2007 (...). La segunda causa de la crisis se encuentra en la culminación de los sesgos estructurales en el interior de la zona euro. Una fuerte división interna ha surgido entre el núcleo o zona central, representado por Alemania, y la periferia, que podemos considerar formada por España, Portugal y Grecia”. Desde otro punto de vista, Allard (2011), concluye que las causas de la crisis de deuda en Europa se deben en parte a que la integración económica, financiera y fiscal es incompleta.

La deuda pública comenzó a incrementarse rápidamente una vez que se inició la recesión de 2008/9 (Lapavitsas, 2011), al tiempo que “tras su nombramiento como primer ministro [de Grecia] en octubre de 2009, el socialista Yorgos Papandreu reveló que el gobierno anterior — del conservador Kostas Karamanlis— había falseado las cifras de déficit, y que éstas eran del 12,7% en vez del 3,7%. Poco más tarde se supo además que la entrada de Grecia en el euro — durante el gobierno del socialista Konstantinos Simitis— se había logrado ocultando los datos reales de la economía griega, mediante ingeniería financiera con el asesoramiento de la gran banca de inversiones. En medio del escándalo subsiguiente se desató una fuerte desconfianza hacia la deuda griega, y, lo que es peor, se abrió el abanico de las rentabilidades exigidas por el mercado a los bonos de los diferentes países del euro” (Paramio, por publicar).

El porcentaje de deuda pública de España y de Francia con respecto al PIB aumentó durante la Gran Recesión, tal y como puede verse en el gráfico 13.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Aunque el punto de partida del porcentaje de deuda bruta del gobierno general con respecto al PIB es distinto entre los países de la muestra, ha crecido entre los años 2007 y 2015. En España, en el inicio de la recesión económica, el porcentaje de deuda pública con respecto al PIB era del 35,5% en 2007 y del 39,4% en 2008. Este porcentaje aumentó hasta el 99,2% en 2015. En el caso de Francia, de unos porcentajes del 64,4 % y del 68,1% en 2007 y 2008, respectivamente, la deuda aumentó hasta el 95,8% del PIB en 2015. Francia, que es la segunda economía de la zona euro, entró en recesión en el primer trimestre de 2013, aunque repuntó al año siguiente, según datos del gobierno galo. Por lo que respecta a España, este país entró dos veces en recesión durante la crisis económica. Fue entre los años 2008 y 2010 y entre 2011 y 2013, según el Instituto Nacional de Estadística.

En 2016, las consecuencias sociales de la crisis económica son todavía visibles. “Aunque la Eurozona y la Unión Europea han salido de la recesión, el nuevo crecimiento está mostrándose débil y vacilante, manteniéndose altas tasas de desempleo y, sobre todo, un claro deterioro de las condiciones de trabajo, con una grave precariedad y una tendencia al recorte o al estancamiento de los salarios” (Paramio, por publicar).

El estallido de la crisis financiera y económica y la articulación de medidas de austeridad como única respuesta a la situación económica a partir de la segunda década del siglo XXI representa el último desafío que ha tenido que encarar la socialdemocracia europea. “Mientras Estados Unidos, bajo la presidencia de Obama, apostó por una recuperación basada en los estímulos públicos, en Europa sólo algunos países optaron por los estímulos, y Alemania en particular fijó su objetivo en volver a crecer sobre la base de las exportaciones y negándose a introducir estímulos de la demanda, tanto en la forma de inversiones públicas como en la de recortes de impuestos” (Paramio, por publicar). En Europa, tal y como recuerda Paramio (por publicar), el presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero, y el primer ministro de Reino Unido, el laborista Gordon Brown, optaron por medidas keynesianas. Ello, sin embargo, llevó a Brown a la derrota electoral en mayo de 2010 y a un drástico giro de Zapatero para dar prioridad a la reducción del déficit.

Los partidos socialdemócratas en el gobierno adoptaron políticas económicas de austeridad que implicaban una contradicción con el mantenimiento de los servicios sociales y que a menudo provenían de organismos supranacionales. “Desde 2010 se impone en la Eurozona un notable cambio de perspectiva frente a la euforia keynesiana que había caracterizado los primeros meses de la crisis. Ahora se pasa a hablar de consolidación fiscal y de austeridad expansiva, con la idea notablemente ideológica de que los recortes en el gasto público y en el déficit abrirían el paso a una nueva confianza de los mercados y una recuperación de la inversión” (Paramio, por publicar).

Tal y como señala Fernández-Albertos (2012: 28), existe una tendencia general en la Eurozona hacia el ajuste fiscal centrado no el aumento de ingresos fiscales, sino en la reducción del tamaño del sector público. Según datos del *Informe de Coyuntura Económica* de diciembre de 2011 realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y recogidos en Fernández-Albertos (2012), la proporción del ajuste previsto para el periodo de 2011-2013 correspondiente al gasto público, respecto del total del ajuste fiscal planificado, era del 91% para España y del 63% para Francia.

En 2016, sin embargo, la OCDE⁹ pedía el fin de la austeridad en Europa y afirmaba que estaba claro que la confianza depositada únicamente en la política monetaria no ha producido un crecimiento e inflación satisfactorios e, incluso, que ha sido “contraproducente en algunas

⁹ En el informe elaborado por la OCDE en junio de 2016, *Economic Outlook*, se resaltaba que la austeridad fue un mal necesario que agravó la recesión, y que lo ahora hace falta es inversión y reformas que animen el crecimiento, aun a riesgo de saltarse el Plan de Estabilidad, tal y como recoge el diario económico *Cinco Días* (10/06/2016).

circunstancias”. Del mismo modo, más atrás en el tiempo, en 2012, el FMI¹⁰ pidió el fin de la austeridad “a ultranza” y su directora, Christine Lagarde, apostaba por dar más tiempo a los Estados con problemas para rebajar el déficit, lo que representaba un giro con respecto a las políticas que se habían desarrollado en buena parte de la Eurozona (auspiciadas por organismos internacionales como el propio FMI), y que han afectado especialmente a la población de la periferia europea.

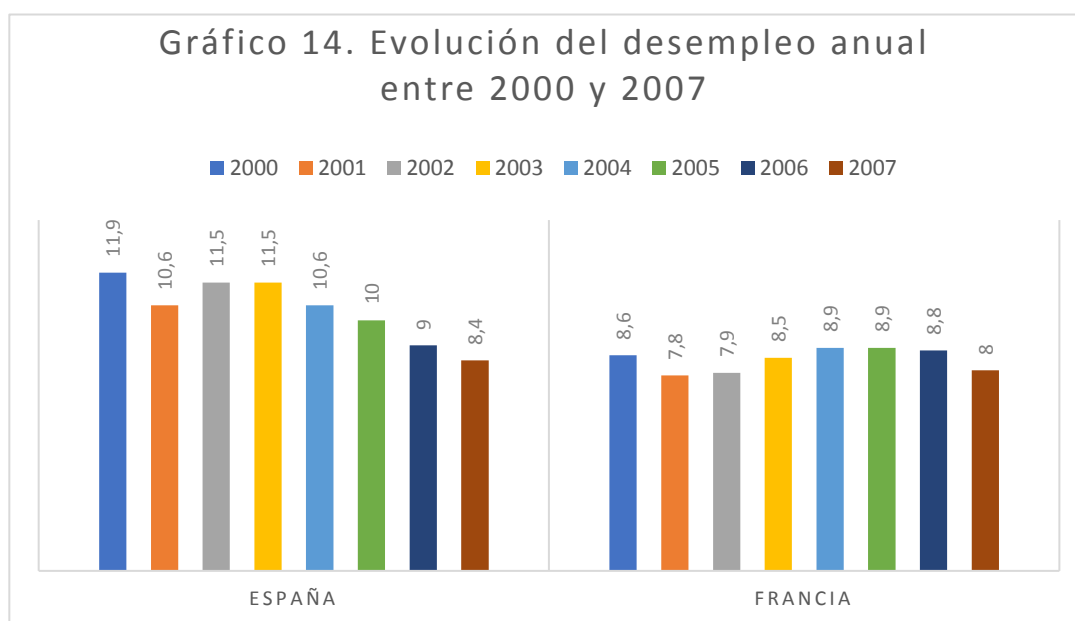
“Las circunstancias económicas aparecen como un factor muy relevante para explicar la evolución ideológica de los partidos socialistas” (Urquizu, 2012: 70). La socialdemocracia, que hunde sus raíces en las reivindicaciones obreras del siglo XIX, se consolida como fuerza política reformista y progresista a mitad del siglo XX, cuando vive su momento culmen, y se va reconfigurando a medida que las circunstancias económicas imponen nuevas realidades sociales, como en el caso de la crisis económica de 2007/8.

La crisis financiera y económica y su gestión por parte de los países de la Eurozona produjo un coste social basado en el aumento del desempleo y de la desigualdad. “Los limitados efectos del ajuste económico en la contención del déficit fiscal fueron en parte resultado de las consecuencias que el propio ajuste tuvo en el estado de la economía: el agravamiento de la crisis produjo una fuerte caída en los ingresos fiscales y un empeoramiento de la situación en el mercado de trabajo” (Fernández-Albertos, 2012: 31). Como indica Paramio (por publicar), “el precio de los programas de austeridad ha sido un incremento de la desigualdad y fuertes retrocesos sociales, sin impulsar un nuevo crecimiento”.

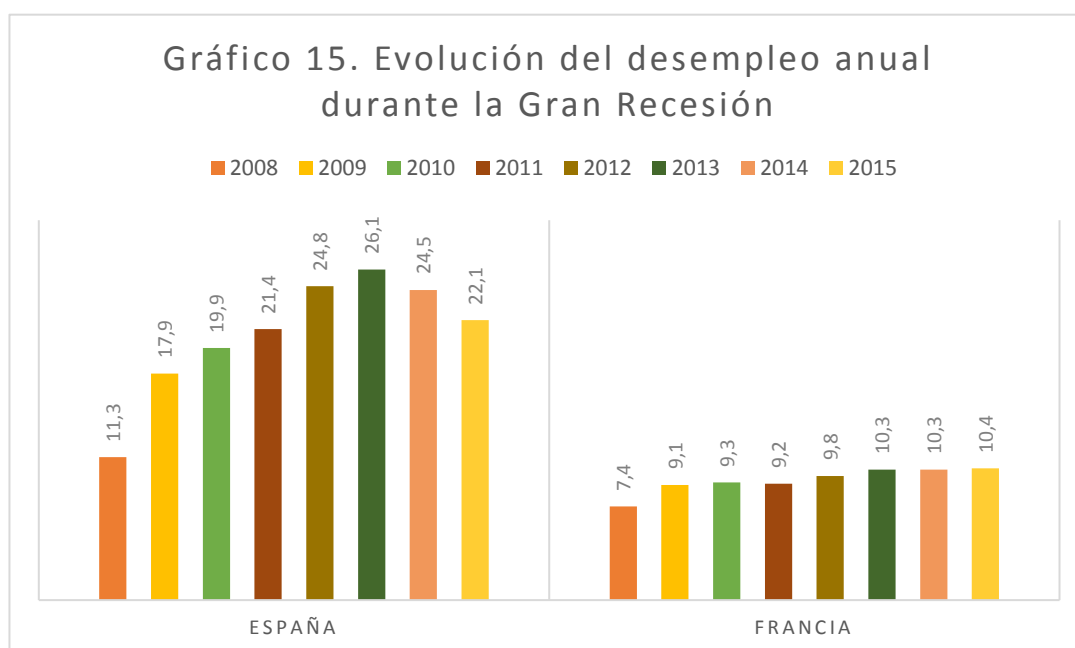
Según datos de Eurostat, la tasa de desempleo experimentó un aumento entre 2010 y 2013, el momento del auge de implementación de las políticas de austeridad. En los gráficos 14 y 15 puede observarse la evolución de la tasa de desempleo antes y durante la crisis en España y Francia.

¹⁰ Tal y como refleja la portada de *El País* (12/10/2012), “El FMI pide el fin de la austeridad a ultranza en países como España”.

En España, la tasa anual de desempleo había ido reduciéndose en los años inmediatamente anteriores al estallido de la crisis económica. Así, en 2005 se dio una tasa de desempleo del 10%; en 2006 del 9%; y, en 2007 del 8,4%. En cambio, a partir del estallido de la crisis financiera y económica, dicha tasa empezó a aumentar, con picos del 24,8% en 2012; del 26,1% en 2013 y del 24,5% en 2014. En el caso de Francia, la tasa de desempleo no ha sufrido alteraciones tan bruscas, aunque también ha aumentado durante el periodo de crisis. De una tasa de desempleo del 8% en 2007 o del 7,4% en 2008, el país galo pasó a una tasa de paro del 10,3% en 2013 y 2014 y del 10,4 % en 2015.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

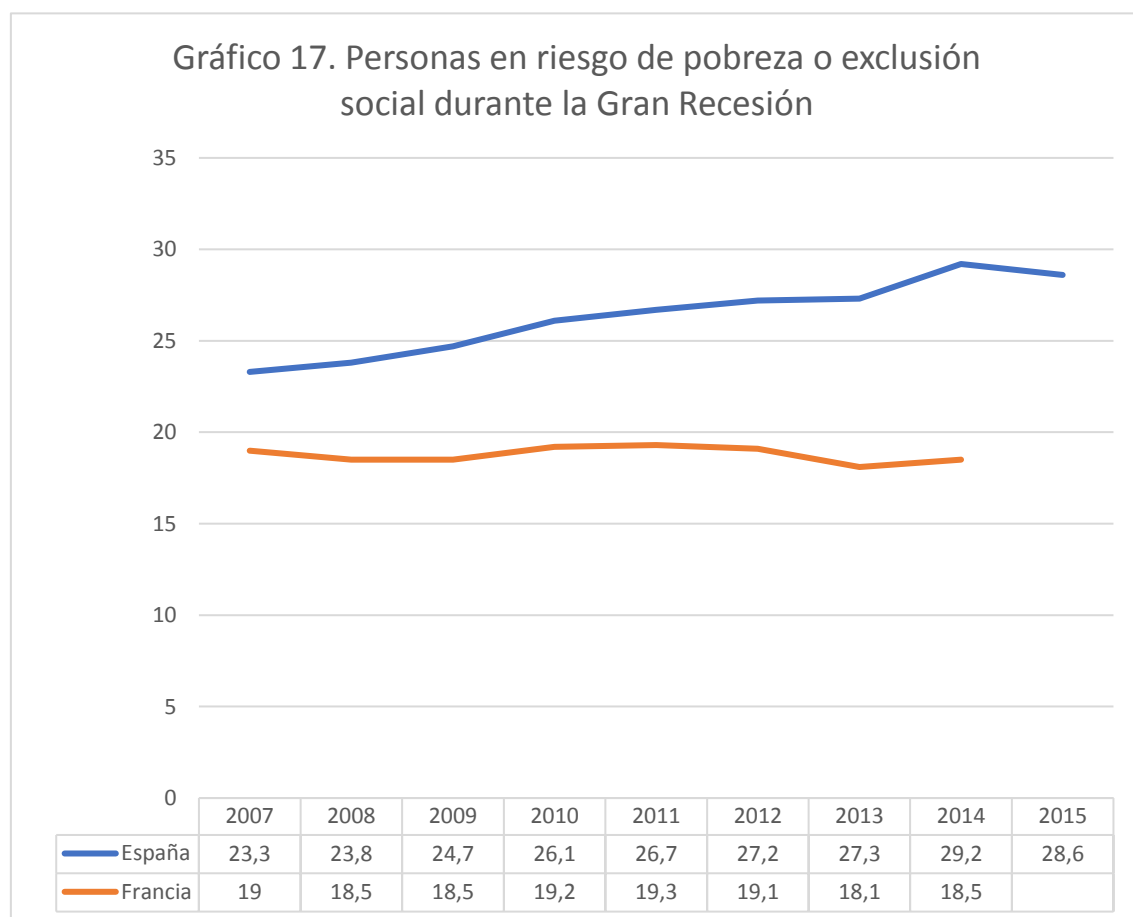
El aumento de la desigualdad es otra de las consecuencias de la crisis económica de 2008. Tal y como señala Fernández-Albertos (2012: 39), la persistencia de altas tasas de desempleo hace que aumenten la pobreza y el riesgo de exclusión social “en un contexto de creciente desigualdad de rentas entre hogares”. Durante la Gran Recesión, en España ha aumentado la tasa de riesgo de pobreza (con un 22,1% en 2014), mientras que, en Francia, a pesar de haber aumentado ligeramente, se mantiene entre el 13% y el 14% durante el periodo analizado.



La tasa de riesgo de pobreza es la proporción de personas con una renta disponible (después de las transferencias sociales) por debajo del umbral de riesgo de pobreza, que se fija en 60% del ingreso medio nacional (después de las transferencias sociales). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

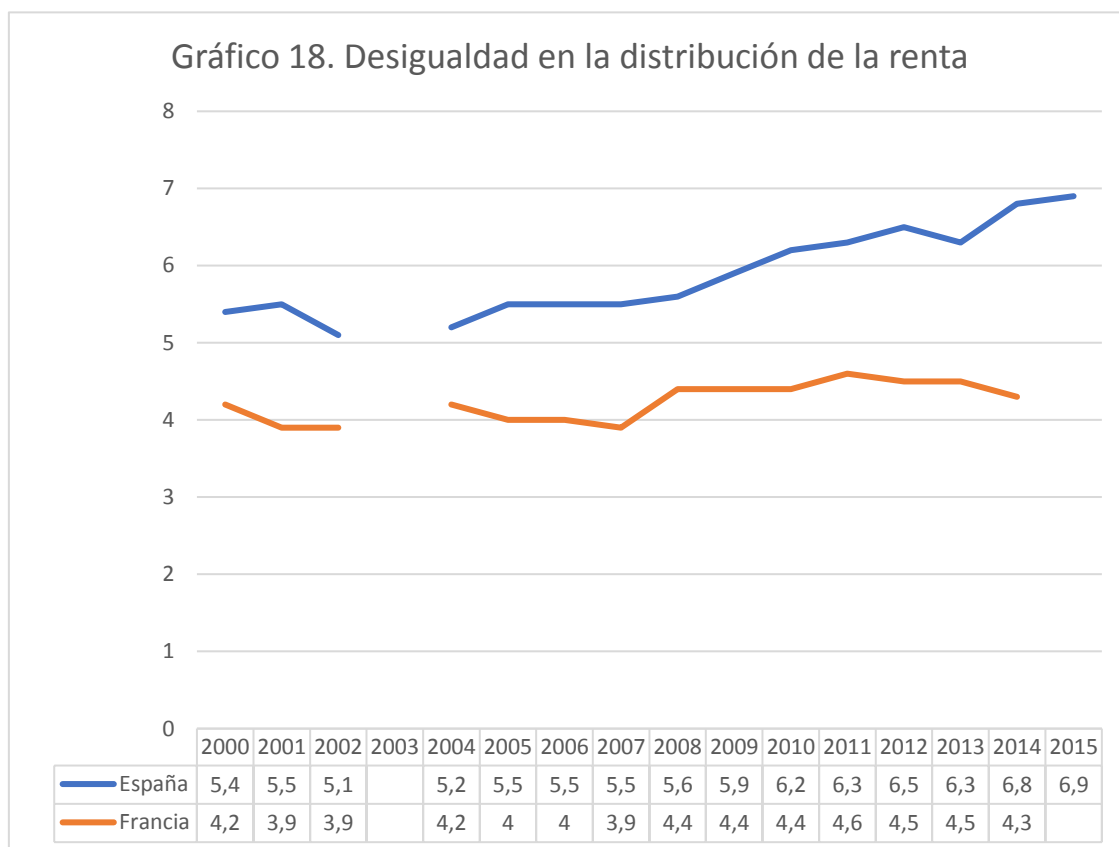
Por lo que se refiere a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según los datos de Eurostat disponibles para el periodo analizado, y tal como muestra el gráfico 17, en el caso de España, el aumento del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión aumenta desde 2008, con su máximo en 2014 (29,2%). Entre los años 2010 y 2013, también Francia experimenta

un repunte de personas en riesgo de pobreza o exclusión, con alrededor del 19% de la población en riesgo.



Las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según la definición de la Unión Europea, son aquellas que se encuentran en riesgo de pobreza, que sufren graves privaciones materiales o que viven en hogares con intensidad de trabajo muy baja. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Según los datos facilitados por Eurostat para la desigualdad en la distribución de renta entre los años 2000 y 2015, reflejados en el gráfico 18, se aprecia que la desigualdad en la distribución de renta ha aumentado entre el quintil (20%) de población con el ingreso más alto (quintil superior) y el quintil más bajo, el 20% de la población que recibe menores ingresos, durante la Gran Recesión.



La desigualdad de renta muestra la relación entre la proporción de ingresos que recibe el quintil superior (el 20% de la población que más ingresos recibe) frente al quintil inferior (el 20% de la población con menos ingresos). Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Mientras que en España la proporción de desigualdad de renta entre el quintil superior y el inferior se movía alrededor de 5 entre los años 2000 y 2007, este valor ha aumentado hasta el 6,9 en el año 2015. En el caso francés, aunque con valores menores, también se ha experimentado un aumento en la desigualdad de renta a partir de 2008, con valores del 4,6 en 2011 o del 4,5 en 2013, mientras que antes de la crisis se daban valores del 4,2 en 2000 o del 3,9 en 2007.

La Gran Recesión, además, se ha caracterizado en la Eurozona por la activación de distintos planes de rescate a distintos países. En el caso de España, a diferencia de lo ocurrido en otros lugares, el rescate¹¹ se centró en el sector bancario. Después de cuatro reformas financieras,

¹¹ En un primer momento, el ministro conservador, Luis de Guindos, afirmó que la ayuda prestada por la Unión Europea al gobierno español no era un rescate, sino un “préstamo en condiciones muy ventajosas”, tal y como recogían varios medios de comunicación el 9 de junio de 2012 (entre ellos El País: http://economia.elpais.com/economia/2012/06/10/actualidad/1339331276_303446.html). Sin

hechas en periodo socialista y en periodo popular, en junio de 2012, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, pidió una ayuda de hasta 100.000 millones de euros a la Eurozona para recapitalizar la banca española.

Bajo el ejecutivo socialista, en 2008, se aprobó un plan de 10.000 millones de euros para reactivar la economía del país, mientras el gobierno hablaba de desaceleración y no de crisis. Aun así, en diciembre, España entró oficialmente en recesión. En 2009, el Banco de España intervino la Caja Castilla La Mancha, y se pusieron en marcha medidas como la ampliación del cheque bebé para madres extranjeras o ayudas a la compra de automóviles dentro del Plan 2000E¹². Ese mismo verano se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para regular las ayudas al sector financiero en los procesos de fusión y de reestructuración. En octubre, España lanzó un plan de estímulo equivalente al 2,3% del PIB y en diciembre empezó la reestructuración del sector financiero. En 2010, sin embargo, el presidente del gobierno, el socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el recorte del 1,5% del PIB, lo que trajo el fin del llamado cheque bebé y la congelación de las pensiones. A partir de ahí, el gobierno socialista inició un viraje en su política económica. El Banco de España intervino CajaSur y se permitió por primera vez la inversión privada en las cajas de ahorro. Por otra parte, el Gobierno aprobó una nueva reforma laboral, subió el IVA un 2%, también subió el impuesto al tabaco y redujo los subsidios a la energía eólica. Los sindicatos llamaron a la huelga en contra de las medidas de austeridad. En 2011 se aprobó una reforma de las pensiones que elevaría gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años y se puso en marcha la segunda oleada de reestructuración del sector financiero, con más fusiones. El Banco de España intervino la Caja de Ahorros del Mediterráneo el 22 de julio y Zapatero adelantó las elecciones generales a noviembre.

embargo, según se puede leer en el Memorando de entendimiento entre la Comisión Europea y España (publicado en el BOE: <https://www.boe.es/boe/dias/2012/12/10/pdfs/BOE-A-2012-14946.pdf>), entre las 37 condiciones que se imponían al país para la recepción de la ayuda, había algunas que iban más allá del sector bancario, como es el caso del punto 30, que dice: “Antes de finales de julio, las autoridades españolas deberán presentar un presupuesto plurianual para 2013-14 en el que se especifiquen con detalle las medidas estructurales que son necesarias para corregir el déficit excesivo”. De igual manera, en virtud del mismo memorando, se autoriza a las instituciones participantes en el rescate, como la Comisión Europea y el FMI, a supervisar el programa y a realizar inspecciones in situ “a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas”. El debate sobre si hubo o no rescate en España debería haber quedado zanjado en 2013 cuando el propio De Guindos empleó en una entrevista de televisión ese mismo término, por más que el Partido Popular era reacio a utilizar la palabra rescate (http://www.huffingtonpost.es/2013/06/09/guindos_n_3412513.html).

¹² El Plan 2000E (Real Decreto 2031/2009) fue un mecanismo de ayudas directas para adquisición de vehículos que el gobierno puso en marcha en 2009 con la idea de dinamizar el sector, después de un retroceso en las matriculaciones del 43,7%, tal y como recoge el BOE. <https://www.boe.es/boe/dias/2010/01/08/pdfs/BOE-A-2010-333.pdf>

El 2 de septiembre, el Parlamento aprobó con 316 votos a favor y 5 en contra, la reforma de la Constitución¹³ por la cual se privilegiaba la estabilidad presupuestaria para limitar el déficit. En noviembre, el Banco de España intervino el Banco de Valencia y Standard & Poor's rebajaba la nota de los bancos españoles, entre ellos Bankia, CaixaBank o Bankinter. Mientras, el paro iba aumentando. En noviembre cambió el gobierno, con la victoria por mayoría absoluta del Partido Popular.

El año 2012 empezó en España con una mala previsión del FMI, que pronosticaba un retroceso para la economía española en 2012 y 2013. El 9 de mayo se nacionalizó la matriz de Bankia, el Banco Financiero y de Ahorros y el día 11, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley sobre saneamiento y venta de activos inmobiliarios financieros. La prima de riesgo cerraba su máximo histórico con 539 puntos básicos el 30 de mayo. Bajo esas circunstancias, el gobierno conservador solicitó ayuda financiera a la Eurozona, que estaba condicionada a la reestructuración del sector bancario y a la corrección de los datos macroeconómicos exigidos por Bruselas. La legislatura de corte conservador continuó hasta 2016, con Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Entre el 13 de enero y el 18 de julio hubo una breve legislatura con Rajoy en funciones, igual que desde las elecciones del 26 de junio hasta el 29 de octubre de 2016 (día en que se votó la investidura), con otra legislatura de Rajoy en funciones. El gobierno conservador se formó el 4 de noviembre de 2016 y terminó en junio de 2018, con una moción de censura.

¹³ Hasta el año 2011, el artículo 135 de la Constitución Española indicaba que: “1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito. 2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión”. En cambio, a partir de la reforma, el artículo 135 reza: “1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros (...)”.

CAPÍTULO 5

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y RESULTADOS ELECTORALES EN ESPAÑA (2000 - 2017)

Los principales problemas relacionados con la representación política, que se han extraído a partir del marco teórico, varían en función de la sociedad en la que se encuentran. Por eso, en este capítulo se examinan distintas fuentes que permiten caracterizar el caso español. Para el presente trabajo doctoral, las diferentes problemáticas se han clasificado en tres dimensiones, que, sin embargo, se pueden relacionar también entre ellas, ya que tienen alcance en múltiples aspectos relacionados con el comportamiento electoral.

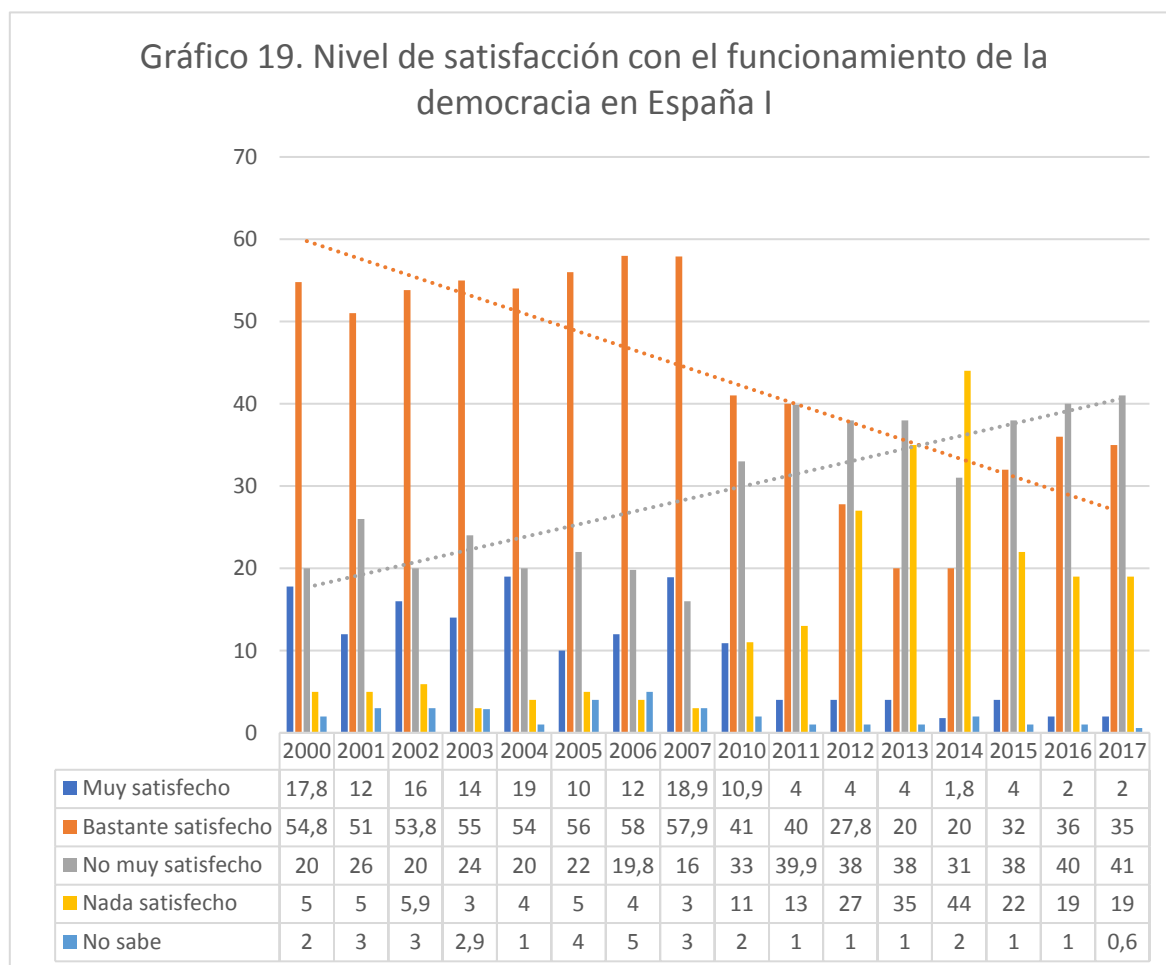
De este modo, en el apartado de la *responsiveness*, que tiene que ver con la capacidad de dar respuesta política a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, se han identificado el descontento político, el alejamiento entre el representante y el representado y la oligarquización. En referencia a la *accountability*, que se relaciona con la habilidad de explicar la acción política y de dar cuentas a la ciudadanía, se han encontrado las problemáticas de la desconfianza política y la desafección política. Por último, sobre la responsabilidad política o *responsibility*, se han detectado los problemas de la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo. Como se ve a lo largo del trabajo, los diferentes problemas adquieren distintas medidas según el contexto en que se producen y difieren sus niveles de alcance, también, según los años.

Así, para aproximarse a los problemas identificados, se han utilizado datos provenientes de encuestas sobre la opinión pública, de fuentes variadas, que permiten conocer diferentes aspectos de la sociedad española. De este modo, se pueden conocer los cambios que han sufrido los problemas hallados a lo largo del periodo de análisis, entre los años 2000 y 2017.

El objetivo del capítulo es describir, a partir de los datos disponibles para los distintos años que forman el periodo de estudio, los rasgos que permiten caracterizar los problemas relacionados con la representación política en España. De la misma manera, la sección incluye la descripción de los resultados electorales de las distintas elecciones celebradas, con especial énfasis en el desempeño electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en conjunción con los datos aportados sobre los problemas relacionados con la representación política, así como se ofrecen datos del contexto político del periodo de análisis.

5.1. Descontento político

El descontento político es uno de los principales problemas relacionados con la representación política identificados a través del marco teórico. Además, se trata de una problemática estudiada a través del procedimiento de la encuesta y que puede conocerse mediante el análisis de la opinión pública, al preguntar a la ciudadanía sobre los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia y con los gobiernos de turno, así como por sus hábitos de comportamiento electoral.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Por lo que se refiere al caso español y tal y como se puede observar en el gráfico 19, que recoge datos del Eurobarómetro, se pone de manifiesto que la mayoría de los encuestados se muestran bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España hasta el año 2011. Ahora bien, la tendencia de los que se muestran bastante satisfechos es a disminuir a lo largo de todo el periodo y, en especial, dejan de ser mayoría entre el año 2011 y el 2017, cuando los que dicen sentirse no muy satisfechos superan a los que se manifiestan bastante satisfechos e,

incluso, en 2014, los que dicen sentirse nada satisfechos son más que los dicen sentirse bastante y no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia.

Así, el periodo se inicia en el año 2000 con el 54% de los encuestados que dice sentirse bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Aunque la tendencia es a la baja durante todo el periodo, en el año 2001, el 51% de las personas preguntadas decía sentirse bastante satisfecho; en el año 2002, el porcentaje era del 53%; en 2003, del 55%; en el año 2004 era del 54%; en 2005 era del 56%; en 2006, del 58%; y, en 2007, del 57,9%. Así, durante los primeros siete años del siglo XXI, más de la mitad de los encuestados se mostraban bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, la caída en esa opción se hace más visible a partir de entonces, del mismo modo que durante todo el periodo tiende al alza la opción de los que dicen sentirse no muy satisfechos.

En el año 2010, los encuestados que dicen sentirse bastante satisfechos con la democracia son el 41%, mientras que caen al 40% en 2011. Esta opción es elegida por el 27% de las personas preguntadas en 2012 y los valores mínimos se dan en los años 2013 y 2014, cuando el 20% de los encuestados dice sentirse bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, respectivamente. En 2015, 2016 y 2017 los porcentajes para la opción de bastante satisfecho reúnen al 32%, 36% y 35% de las personas preguntadas, consecutivamente. Al mismo tiempo que caen los valores de los bastante satisfechos, aumenta la opción de los que se inclinan por no sentirse muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España, según los datos del Eurobarómetro.

De esta forma, la tendencia de la opción no muy satisfecho es al alza durante todo el periodo, pero se agudiza a partir del año 2010. En el mismo sentido, los últimos años del periodo de análisis están marcados por un aumento del número de encuestados que dice sentirse nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España.

En el año 2000, como casi en la práctica totalidad del periodo, la segunda opción que reúne a una mayor parte de encuestados después de la de bastante satisfecho, es la de no muy satisfecho. El porcentaje para ese año de los encuestados no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España es del 20%. En el año 2001 aumenta hasta el 26% y en el 2002 vuelve al 20%, para crecer hasta el 24% en 2003. En los años 2004, 2005 y 2006 los porcentajes se sitúan en el 20%, 22% y 19,8%, consecutivamente, y después de la caída al 16% en 2007, la tendencia al alza se hace mayor. De esta manera, en el año 2010, el 33% de los encuestados aseguraba no sentirse muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, porcentaje que subió hasta el 39,9% al año siguiente, en 2011. En 2012 y 2013, los no

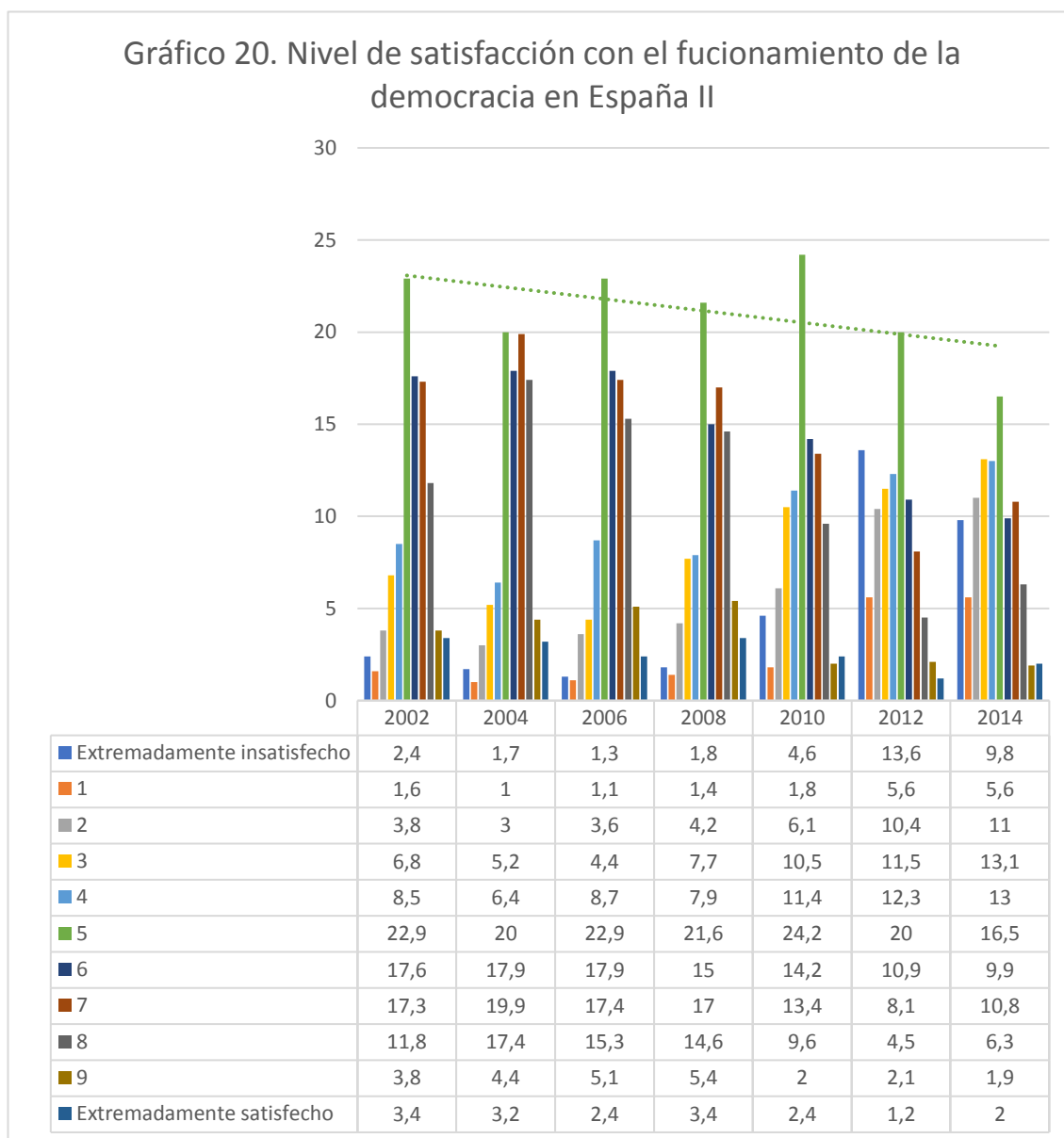
muy satisfechos representaban el 38% de los encuestados, respectivamente. El número cayó en 2014 hasta el 31%, pero subió de nuevo en 2015 con el 38% y, de hecho, continuó subiendo en 2016 y 2017, con el 40% y el 41% de los encuestados que decían sentirse no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España.

Según el Eurobarómetro, el descontento hacia el funcionamiento de la democracia se hace evidente también con el aumento del número de encuestados que decían sentirse nada satisfechos, sobre todo a partir del año 2010. La opción de los nada satisfechos reunía al 5% de los encuestados en el año 2000, al principio del periodo de análisis, y reunía al 19% de las personas preguntadas, al final, en el año 2017. Los mayores picos de esta opción se dan en los años 2013 y 2014, con el 35% y el 44% de encuestados, respectivamente, que aseguraban estar no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Durante todo el periodo de análisis, es precisamente en el año 2014 cuando los nada satisfechos (44%) son mayoría respecto a las demás opciones.

En el lado contrario, el número de los encuestados que aseguran sentirse muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España sufre una tendencia a la baja durante todo el periodo, que también se agudiza a partir del año 2007. En el año 2000, el porcentaje de las personas preguntadas que decían estar muy satisfechas era del 17,8%, pero bajó hasta el 12% al año siguiente, en 2001. En 2002, el porcentaje era del 16%, en 2003 del 14% y en 2004, era del 19%. En los años siguientes los porcentajes fueron menores, del 10% en 2005 y del 12% en 2006. En el año 2007, se da el mayor porcentaje de encuestados que se inclinan por la opción de muy satisfecho en todo el periodo, con el 18,9%, pero ese porcentaje cae muy visiblemente en los años siguientes. En 2010, el porcentaje era del 10,9%, y cayó hasta el 4% en los años 2011, 2012 y 2013, consecutivamente. En 2014 se da el menor porcentaje de encuestados que decían sentirse muy satisfechos, con el 1,8%; en 2015 el porcentaje era del 4%, y en 2016 y 2017, del 2%, respectivamente. Por tanto, la tendencia que se observa es de un mayor número de encuestados descontentos con el funcionamiento de la democracia en España, sobre todo en la segunda década del periodo de análisis.

Además, según los datos reunidos por la Encuesta Social Europea para España, se puede observar que entre los años 2002 y 2014, se da una tendencia a la baja en el porcentaje de encuestados que se ubican en la posición 5 (moderada), de una escala que va de los grados

extremadamente insatisfecho a extremadamente satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España, tal y como puede consultarse en el gráfico 20.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Según la Encuesta Social Europea, se puede observar que el mayor porcentaje de encuestados se agrupa en el grado 5 de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España y este va seguido de los grados 6 y 7, en la mitad de la gradación más cercana a la satisfacción. Ahora bien, el nivel de apoyo a estos grados de satisfacción experimenta una tendencia a la caída, a la vez que el apoyo a los grados 4, 3 y 2 (más cercanos a la insatisfacción) aumenta.

De esta forma, se puede ver que el 22% de los encuestados optaba en 2002 por una opción moderada (grado 5) de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España, mientras

que ese porcentaje cayó al 20% en 2004. En 2006 era el 22,9% de los encuestados el que se inclinaba por el grado 5 y, de forma similar, en 2008 era el 21%, en 2010 era el 24% y en 2012, el 20%. En 2014 se pone de manifiesto una caída hasta el 16%. El grado 6 de satisfacción con el funcionamiento de la democracia se mantiene en el 17% en 2002, 2004 y 2006, pero después cae al 15% en 2008, al 14% en 2010, al 10% en 2012 y al 9,9% en 2014. Asimismo, el nivel de apoyo al grado 7 de satisfacción se comporta de forma similar. En el año 2002, el 17% de los encuestados opta por esa opción, mientras que en el 2004 el porcentaje es del 19,9%. Sin embargo, en 2006 y 2008, el porcentaje se mantiene en el 17%. La caída se agudiza a partir del año 2010, con el 13% de los encuestados que escogen el grado 7, el 8% que lo escogen en el año 2012 y el 10% que optan por él en el año 2014.

Según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, se puede ver cómo los grados 4, 3 y 2 aumentan sus porcentajes. De esta manera, entre los años 2002 y 2008, entre el 6% y el 8% de los encuestados se inclinaba por el grado 4, pero entre los años 2010 y 2014 lo hacían entre el 11% y el 13% de los encuestados. Del mismo modo, el grado 3 de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España era apoyado por entre el 4% y el 7% de las personas preguntadas entre los años 2002 y 2008, pero era la opción preferida para entre el 10% y el 13% de los encuestados entre el 2010 y el 2014. Similarmente, el grado 2 de satisfacción era apoyado por una minoría de los encuestados en los primeros años del estudio, y pasó a ser la opción preferida de entre el 10% y el 11% de los encuestados en los años 2012 y 2014. De esta forma, de los datos disponibles se infiere una tendencia hacia la caída de la moderación y de las opciones más cercanas a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en España, en favor de posiciones que muestran más insatisfacción.

En la misma línea, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en enero del año 2000, el 43% de los encuestados consideraba la situación política general como regular, mientras que el 31% la consideraba como buena. En diciembre del año 2000, los que consideraban que la situación política general era regular eran el 43%, mientras que los que la consideraban como buena eran el 27,9%. En el año 2001, según datos de enero, los que consideraban que la situación política general era regular eran el 44%, mientras los que la consideraban buena eran el 29% de los encuestados. En diciembre, aumentó el porcentaje de los que la consideraban regular, con el 45,9%, y disminuyó el de los que la consideraban buena, con el 21,9%. El año siguiente, en enero de 2002, los que consideraban que la situación política era regular eran el 44%, mientras los que la consideraban buena eran el 30% de los encuestados. En diciembre de ese año, los que consideraban la situación política regular era del 41%, y los que la apreciaban como buena eran el 19%, pero, por primera vez en el periodo de análisis, los que la consideraban

mala superaron a los que la consideraban buena, con el 22,9% de los encuestados. En el año 2003, según datos de enero, la tendencia se mantuvo, con el 44% de los encuestados que consideraba que la situación política en España era regular. El 19% creía que era buena y el 21%, que era mala. En diciembre, las percepciones cambiaron. Los encuestados que creían que la situación política era regular eran el 40% y los que la creían buena eran el 24%, mientras que los que la consideraban mala eran el 18%, por tanto, por debajo de los que pensaban que la situación era buena.

Sin embargo, la percepción se revierte en enero del año 2004. De nuevo, los que consideraban que la situación política general era mala representaban al 22% de los encuestados, un porcentaje mayor que el de los que la consideraban buena, que eran el 18%. El número mayor de encuestados seguía siendo el de los que consideraban que la situación política general era regular, con el 41%. En diciembre, la percepción cambió de nuevo, con un 22% de encuestados que consideraba la situación política buena, un 15% que la consideraba mala y un 45% que la calificaba como regular. En 2005, según datos del CIS de enero, se observa un aumento de los que consideraban la situación política general en España como buena, con el 28%. Los que la consideraban regular eran el 46% de los encuestados y los que la consideraban mala eran el 16%. En diciembre de ese año, sin embargo, los que consideraban que la situación política era mala (24%) superaban a los que la consideraban buena (17%). El porcentaje de encuestados que consideraban que la situación política era regular era del 42%. En enero de 2006, se puede apreciar que el 41% de los encuestados consideraba que la situación política era regular, mientras que el 23% la consideraba mala y el 16%, buena. En diciembre de 2006, los porcentajes se mantuvieron iguales, con el 41% de los encuestados que creían que la situación política era regular, el 23%, mala y el 16%, buena. Por lo que se refiere al año 2007, en enero, se observa que el porcentaje de los que consideraban que la situación política era regular bajó del 40% y se situó en el 38%, mientras que los que la consideraban mala eran el 28% de los encuestados y los que pensaban que la situación política era buena eran el 12% de las personas preguntadas. En diciembre de ese año, los porcentajes se mantuvieron similares, con el 40% de los encuestados que consideraban que la situación política general era regular en España, el 26% que consideraba que era mala y el 15% que pensaba que era buena. En enero del año 2008, los porcentajes se mantuvieron estables, con el 40% de encuestados que consideraba que la situación política era regular, el 26% que creía que era mala y el 14% que pensaba que era buena. En diciembre de 2008, los que pensaban que la situación política era regular eran el 38%, mientras que los que pensaban que era mala ascendieron al 28,9% y los que pensaban que era buena descendieron al 11%. De la misma forma, en enero de 2009, los encuestados que se

inclinaban por considerar como regular la situación política del país eran el 39%, mientras que los que la consideraban mala eran el 26% y los que la consideraban buena, el 12%. En ese año, sin embargo, los que la consideraban muy mala eran el 14%, un porcentaje mayor que el de los que la consideraban buena por primera vez en el periodo de análisis. En diciembre de 2009, el porcentaje de los encuestados que consideraban la situación política como buena cayó al 5,8%. Al mismo tiempo, el porcentaje de los que la consideraban muy mala ascendió al 21% y los que la consideraban mala eran el 33,9% y el 31%, los que la consideraban regular. En 2009 se hace patente el creciente descontento con la situación política general de España.

La tendencia hacia el descontento creciente continuó en 2010, según los datos de enero del CIS, en los que se puede observar que los que consideraban que la situación política era mala eran el 35% de los encuestados, los que la consideraban regular eran el 33% y los que la consideraban muy mala, el 18% de las personas preguntadas. Los encuestados que la consideraban buena eran el 6%. En diciembre de ese año, se puede observar que bajó el ya decreciente porcentaje de los que consideraban la situación política como buena, que se situaba en el 3%. Los que pensaban que la situación política era mala representaban al 39% de los encuestados, los que la consideraban muy mala eran el 27% y los que la consideraban regular eran el 24%. En la misma línea, en enero de 2011, se aprecia cómo los que consideraban que la situación política era mala eran el 40%, los que la consideraban muy mala eran el 28% y los que la consideraban regular eran el 24%, mientras que los que la percibían como buena se quedaban en el 3%. En diciembre de ese año, los que consideraban que la situación política era mala eran el 39% de los encuestados, los que la consideraban regular eran el 27% y los que la percibían como muy mala, eran el 22%. Los que la veían como buena eran el 4% de los preguntados.

En enero de 2012, según el CIS, se observa que el 35% de los encuestados consideraban que la situación política era mala, los que la consideraban regular eran el 30% y los que la consideraban muy mala, el 18%. En cambio, aumentó ligeramente el porcentaje de los que la consideraban buena, con el 7,8%. En diciembre de 2012, sin embargo, aumentó el porcentaje de los que consideraban la situación como muy mala hasta el 42%, los que la consideraban mala eran el 34% y los que pensaban que la situación era regular eran el 17%. De la misma manera, bajó hasta el 2,8% el porcentaje de los que consideraban que la situación era buena. Esa tendencia se mantuvo de forma similar en el año siguiente, según los datos de enero de 2013 del CIS. Así, el 41% de los encuestados consideraba entonces que la situación política general era muy mala, el 36% pensaba que era mala y el 17%, que era regular. Los que pensaban que la situación era buena eran el 2% de los encuestados. Por lo que se refiere a diciembre de ese año, se ve un aumento de los que consideraban la situación política como muy mala, que llegaron al 52%, de

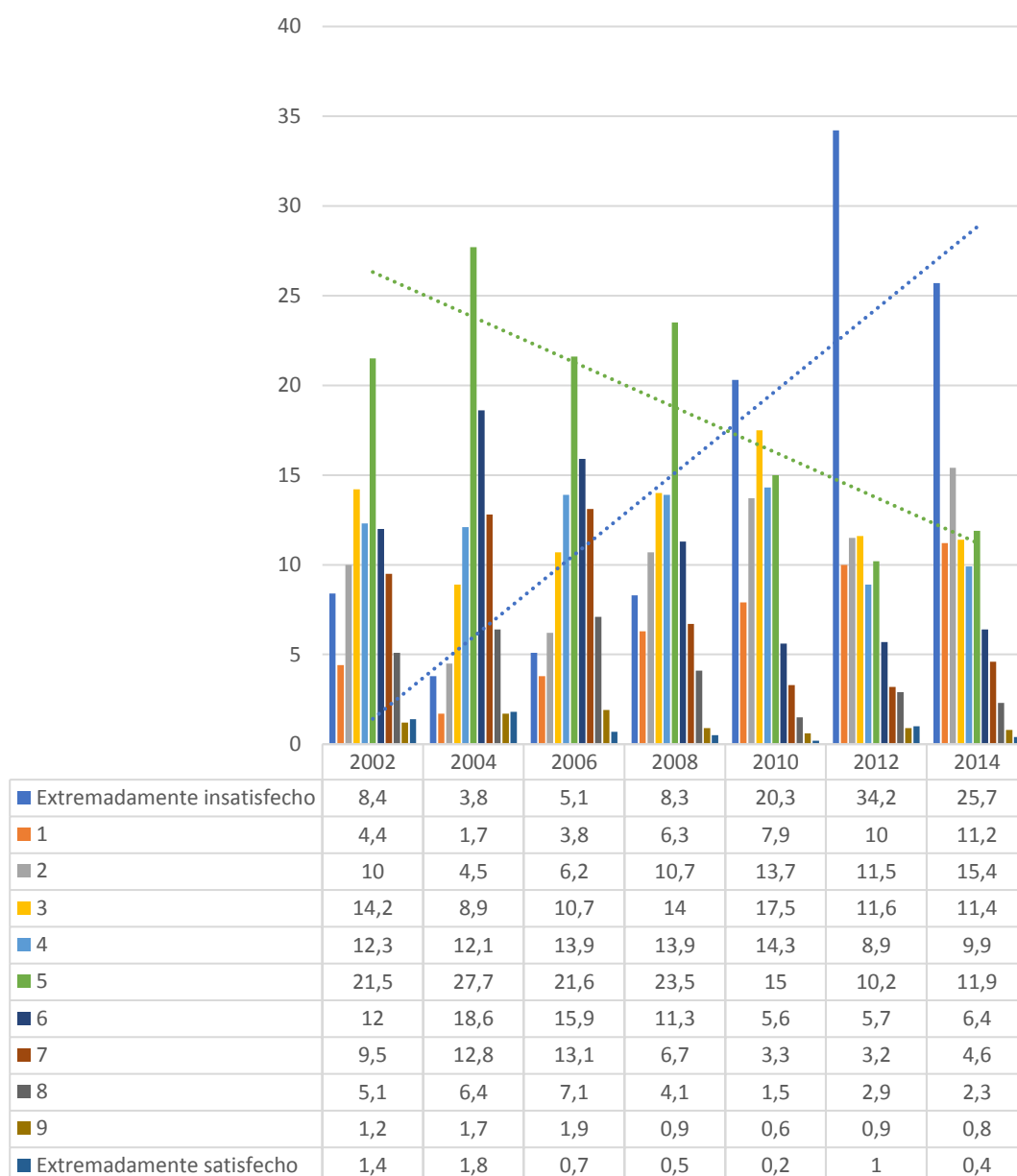
forma que por primera vez en el periodo de análisis más de la mitad de los encuestados se inclinaba por esta opción. El 29% de los encuestados pensaban que la situación era mala y el 13%, que era regular. Los que pensaban que era buena eran el 1,8% de los encuestados. De la misma manera, según datos de enero de 2014, los que consideraban que la situación política era muy mala eran el 50% de los encuestados, los que la veían como mala eran el 31% y los que la consideraban regular eran el 14% de los encuestados, mientras que los que la veían como buena seguían en el 1,8%. En diciembre de 2014, se puede ver que la tendencia continúa de forma similar, con el 53% de los encuestados que pensaban que la situación política era muy mala, el 31% que pensaba que era mala y el 12%, que opinaba que era regular. Los que consideraban que la situación era buena eran el 1%. El año 2015, según datos de enero del CIS, comenzó con una ligera variación del porcentaje de encuestados que consideraban la situación política general como muy mala, que eran el 45,9%. El 32% de los encuestados consideraba que la situación era mala y el 16% consideraba que era regular. Los que pensaban que la situación era buena eran el 2%. En diciembre de 2015, se observa un descenso de los que creían que la situación era muy mala, que bajó hasta el 28% de los encuestados. Los que pensaban que la situación era mala eran el 35% de los encuestados y los que consideraban que era regular eran el 27%, mientras que los que consideraban que la situación era buena aumentaron hasta el 5%. En enero de 2016, se puede apreciar que el 39% de los encuestados consideraba que la situación política general era mala, mientras que los que la consideraban muy mala eran el 30% de los encuestados. El 23% de las personas encuestadas consideraba que la situación era regular y el 3% pensaba que la situación política era buena. En diciembre de ese año, los porcentajes se mantenían de forma similar, con el 34,9% de los encuestados que creía que la situación era mala, el 32% opinaba que la situación era muy mala y el 25%, que era regular. Con un porcentaje muy por debajo, el 3% pensaba que la situación política general era buena.

Por lo que se refiere al año 2017, los porcentajes se mantuvieron similares a los del año anterior. Según el Barómetro del CIS de enero de 2017, se puede observar que la situación política era considerada como mala por el 34% de los encuestados. De la misma manera, el 32% consideraba que la situación política era muy mala y el 25% pensaba que era regular. El porcentaje de los que consideraban que la situación política general era buena aumentó ligeramente, hasta el 4%. En diciembre de 2017, la situación política general de España era considerada buena por el 2,9% de los encuestados, mientras el 35% la consideraba mala y el 38% muy mala.

De los datos anteriores se desprende que al principio del periodo de análisis eran mayoría los encuestados que consideraban la situación política general como regular o buena. En cambio, a partir del año 2009 empieza a aumentar el porcentaje de los encuestados que creían que la

situación política era muy mala y a disminuir los que la consideraban buena. Por tanto, en los últimos años del periodo de análisis queda patente un creciente descontento entre los encuestados acerca de la situación política en España. Cabe destacar, además, que en los años 2013 y 2014 más de la mitad de los encuestados consideraba que la situación política del país era muy mala, algo que no ha vuelto a suceder en todo el periodo de análisis.

Gráfico 21. Nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno en España



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

En cuanto al nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno en España, según datos de la Encuesta Social Europea que pueden verse en el gráfico 21, se observa un aumento del número de encuestados que se identifican con la opción de extremadamente insatisfecho y una tendencia a la caída de la opción 5, la que representa la posición moderada en una escala que va del extremadamente insatisfecho (0) al extremadamente satisfecho (10). Así, entre los años 2002 y 2008, el mayor número de encuestados se reúne en el grado 5, mientras que a partir del año 2010 y hasta el 2014, la mayor parte de encuestados se agrupa en el grado de extremadamente insatisfecho, lo que indica el descontento creciente y la radicalización de las posiciones más cercanas a la insatisfacción.

En el año 2002, el grado 5 agrupaba al 21% de los encuestados, mientras que en 2004 reunía al 27% de las personas preguntadas. En cambio, el porcentaje disminuyó en 2006, para volver al 21%, aunque aumentó ligeramente, hasta el 23% en 2008. Sin embargo, el número de encuestados que se identificaban con esta opción cayó al 15% en 2010, al 10% en 2012 y al 11,9% en 2014. Paralelamente a esta caída, aumentó en 2010 hasta el 20% el porcentaje de los que decían sentirse extremadamente insatisfechos con el funcionamiento del gobierno, el porcentaje fue del 34% en 2012 y del 25% en 2014. Entre 2002 y 2008, los porcentajes habían oscilado entre el 3% y el 8% de los encuestados que decían inclinarse por esa opción. De la misma forma, las posiciones 2 y 3, más cercanas a la insatisfacción, también sufren un aumento a partir del año 2008 y, por el contrario, caen las posiciones 6 y 7 a partir de 2008, de lo que se deduce que los grados más cercanos a la insatisfacción aumentan en detrimento de las posiciones cercanas a la satisfacción y, por tanto, puede verse la tendencia al alza en el descontento hacia el funcionamiento del gobierno en España.

Con respecto a la valoración de la gestión del gobierno y, también, de la oposición, los barómetros del CIS ofrecen distintos datos para conocer la opinión pública española. Según datos de enero del año 2000, el 39% de los encuestados calificaba la gestión del gobierno del Partido Popular (PP) como buena, un 37% lo hacía como regular y un 10% como mala. En cuanto al principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el 45% de los encuestados calificaba su actuación política como regular, el 21% decía que era mala y el 18% como buena. Según los datos disponibles del CIS, al año siguiente, en enero de 2001, disminuyó el número de encuestados que calificaban la actuación del gobierno como buena, con un 33%. Al 40% de los encuestados le parecía regular y al 12,9%, mala. En cuanto a la oposición del PSOE, aumentó el porcentaje de encuestados que creía que la calificaba como buena hasta el 25% y disminuía el de los que creía que su labor era mala, con un 12%. Sin embargo, se mantenía en el 45% el porcentaje de encuestados que pensaba que la actuación socialista era regular. En enero

de 2002, los porcentajes de aquellos que creían que la gestión del gobierno del PP era regular y de los que creían que era buena se asemejaban, con un 39,9% y un 38%, respectivamente. En cambio, los que creían que era mala eran un 10% de los encuestados. En cambio, la actuación política del PSOE, en la oposición, era calificada por el 47,9% de los encuestados como regular, por el 20% como buena y por el 17% como mala; por lo tanto, disminuía el número de encuestados que creía que su labor era positiva y aumentaba el de los que pensaban que era negativa con respecto al año anterior. En enero de 2003, según el CIS, aumentó el porcentaje de encuestados que creía que la actuación del gobierno del PP era mala, con un 18%, igual que aumentó el de los que creían que era regular, con un 42%. En cambio, disminuyó el número de encuestados que consideraban la actuación del gobierno como buena, con un 25%. Para la oposición socialista, aumentaban los que creían que su actuación era regular y buena, con 52% y un 22%, respectivamente, y disminuía el porcentaje de los que pensaban que su labor era mala, con un 15%, con respecto al año anterior. Por lo que se refiere a los datos del CIS de enero de 2004, se puede observar que el 35% de los encuestados consideraba que el trabajo del gobierno popular era regular, mientras que un 24% de las personas preguntadas lo consideraba bueno y un 20% pensaba que era malo. En cuanto al PSOE, en la oposición, el 45% de los encuestados creía que su actuación era regular, mientras que el 22% la consideraba mala y el 13% la calificaba como buena.

En enero de 2005, cuando se ha dado ya un cambio de gobierno y el PP ha pasado a ser el principal partido de la oposición, se puede observar que la gestión del gobierno del PSOE es calificada como regular por el 44% de los encuestados, como buena por el 34% y como mala por el 9%. Con respecto a la labor de la oposición popular, se aprecia que el 39% de las personas preguntadas la considera regular; el 20%, buena; y, el 20%, mala. En el año siguiente, enero de 2006, se aprecia que baja el porcentaje de encuestados que creía que la actuación del PSOE al frente del gobierno era buena, con un 25% y subió el de los que la consideraban mala, con un 16%. De forma similar al año anterior, el 42% de las personas preguntadas consideraba la labor socialista regular. En cuanto a la oposición popular, disminuyó el número de los que la consideraban buena (13,9%) y el de los que la consideraban regular (34%) y creció el de los que pensaban que era mala, con un 24%. En enero de 2007, según el Barómetro del CIS, se observa que, de manera similar al año anterior, la gestión del gobierno socialista era calificada como regular por el 44% de los encuestados, como buena por el 23% y como mala por el 16%. Sin embargo, en cuanto a la actuación de la oposición conservadora, por primera vez en el periodo de análisis se observa que el número de encuestados que la califican como muy mala es superior a los que la califican como buena. Así, el 32% de las personas preguntadas consideraba que la

labor de la oposición era regular, el 26% pensaba que era mala, el 24% se inclinaba por la opción de muy mala y el 10% la consideraba buena.

Según los datos de abril de 2008, inaugurada la segunda legislatura del PSOE al frente del gobierno, se puede ver que el 40% de los encuestados consideraba que la actuación socialista era regular, el 32% la veía como buena y el 16% creía que era mala. En cuanto a la oposición del PP, el 39% de los encuestados veía su actuación como regular, el 28% la percibía como mala, el 13,8% la veía buena y el 13% la consideraba muy mala, igualándose así los dos últimos valores. En enero de 2009, según el CIS, se pone de manifiesto un aumento del porcentaje de encuestados que consideraban que la gestión del gobierno del PSOE era mala, con un 22%. Al mismo tiempo, se constata un descenso de los que pensaban que era buena, con el 16% y un porcentaje similar al del año anterior, el 43%, la veía como regular. Por lo que se refiere a la oposición conservadora, el 37% de las personas consultadas creía que su actuación era regular, el 30% la consideraba mala, el 14,9% creía que era muy mala y el 10% pensaba que era buena. En el año siguiente, la percepción negativa del gobierno socialista sigue aumentado y la buena, disminuyendo. Así, en enero de 2009, el 38% de los encuestados pensaba que la actuación del PSOE era regular, el 28% la consideraba mala y el 17% pensaba que era muy mala. En cambio, el 11% de las personas preguntadas consideraba la actuación del gobierno como buena. Por lo que se refiere al trabajo de la oposición, el 33,8% la consideraba mala y el 33% creía que era regular. Además, el 18% de los encuestados pensaba que era muy mala y el 10%, que era buena. El descenso en la calificación de buena para la gestión del gobierno continuó en enero de 2010, igual que el aumento de la calificación de mala y muy mala. La labor del gobierno socialista era percibida por el 35% como mala, por el 33% como regular y por el 23% de las personas preguntadas como muy mala. Por primera vez en el periodo, eran más los que consideraban el trabajo del gobierno malo antes que regular. Al contrario, el 5% consideraba la actuación del gobierno como buena. En el caso de la oposición del PP, se puede apreciar también como hay más encuestados que consideraban su actuación como mala, con un 33%. Además, el 31% pensaba que su labor era regular y el 21%, que era muy mala. El 9% de los encuestados creía que la actuación de la oposición era buena. Es en este año, pues, cuando más de manifiesto se pone el descontento hacia la gestión del gobierno socialista, aunque una vez en la oposición, al año siguiente, el PSOE obtuvo porcentajes similares.

En 2012, una vez consumado el cambio de gobierno y según datos del Barómetro del CIS de abril, se puede observar que está casi igualado el porcentaje de encuestados que creían que la gestión del gobierno del Partido Popular era regular y los que creían que era mala, con el 28% y el 27%, respectivamente. Además, el 21% de las personas preguntadas consideraba que la

gestión del gobierno era muy mala y el 15% la veía como buena. Por lo que se refiere al PSOE, en la oposición, el 34% de los encuestados valoraba su actuación como mala y el 33% lo hacía como regular. Además, el 17% pensaba que era muy mala y el 7% la creía buena. En el año siguiente, según datos de enero de 2013, se registra una subida del número de encuestados que creían que la gestión del gobierno era mala y muy mala, al tiempo que disminuía el porcentaje de los que pensaban que era regular. De este modo, la actuación del gobierno del PP era vista como muy mala por el 35% de los encuestados y como mala por el 30%. Asimismo, el 23% la consideraba regular y el 8%, buena. En el caso del principal partido de la oposición, el PSOE, disminuía el número de los que consideraban que su actuación era regular, con un 24%, y aumentaba el de los que pensaban que era mala, con el 40%, o muy mala, con el 28%. En ese año, el 3% de los encuestados consideraba su labor de oposición como buena. En enero de 2014 se ve cómo aumenta el descontento hacia la actuación del gobierno, con el 40% de los encuestados que la califica como muy mala y el 30% que la valora como mala. Además, el 21,9% de los encuestados pensaba que la gestión gubernamental era regular y el 5% pensaba que era buena. Por lo que se refiere a la oposición, el trabajo del PSOE era visto por el 37% de los encuestados como malo y por el 33% como muy malo, el 23% lo consideraba regular y el 3%, bueno. En el año siguiente, enero de 2015, los porcentajes para gobierno y oposición se mantuvieron de una forma bastante similar al año anterior. El 39% de los encuestados valoraba la gestión del gobierno popular como muy mala y el 28% lo hacía como mala, así como el 23% la consideraba regular. El 7% pensaba que era buena. En el caso del PSOE, en la oposición, el 35% de los encuestados creía que su actuación era mala, el 32% que era regular y el 22% que era muy mala. El 5% de los preguntados la calificaba como buena.

Después de las elecciones de 2015 y de 2016, en que el Partido Popular repitió como ganador, los datos disponibles del Barómetro del CIS de enero de 2017 muestran que el 31% de los encuestados consideraba que la gestión del gobierno del Partido Popular era regular, el 26% la consideraba mala y el 25%, muy mala. En cambio, el 13% la consideraba buena. Por lo que se refiere a la actuación política del primer partido de la oposición, el PSOE, el 36,9% de las personas preguntadas consideraba que la actuación era mala. Además, el 28% la consideraba regular y el 26%, la veía como muy mala. Por el contrario, el 4% consideraba que la actuación de la oposición era buena.

De los datos anteriores se desprende que durante el periodo de análisis se ha mantenido un contexto eminentemente bipartidista, en que el descontento de los ciudadanos iba dirigido a la actuación del gobierno y también hacia el partido principal de la oposición. En general, el mayor número de encuestados calificaba las actuaciones del gobierno y de la oposición como regulares,

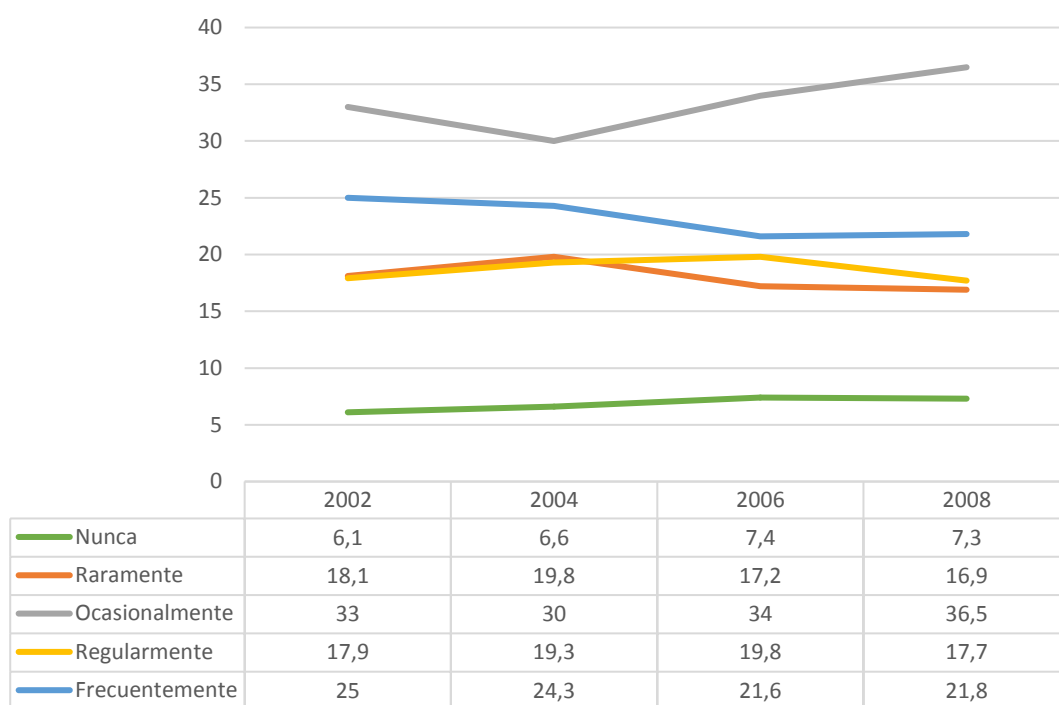
aunque después de 2010 se observan repuntes de las valoraciones mala y muy mala para calificar la gestión del gobierno y de la oposición. La información recolectada y analizada permite apreciar un descontento de las personas encuestadas mayor en los últimos siete años del periodo de estudio.

5.2. Alejamiento entre los representantes y los representados

El alejamiento entre las personas representadas y los representantes políticos es otro de los problemas relacionados con la representación política que se encuentran desde los orígenes del concepto en la literatura sobre la materia. Una de las maneras de aproximarse al fenómeno es tratar de ver qué piensa la opinión pública acerca de distintos aspectos relacionados con la problemática, como, por ejemplo, si se percibe la política como algo demasiado difícil de entender y, por tanto, se ve como algo lejano, como un factor que incrementa la distancia entre la ciudadanía y los cargos electos.

Por lo que se refiere al caso español, tal y como puede verse en el gráfico 22, la mayor parte de los preguntados por la Encuesta Social Europea consideraba que la política es ocasionalmente demasiado complicada de entender, según los datos disponibles. De la misma manera, gran parte de los encuestados también pensaban que la política era demasiado difícil de comprender frecuentemente.

Gráfico 22. Porcentaje de personas que creen que la política es demasiado complicada de entender



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Así, en el año 2002, el 33% de las personas preguntadas consideraba que la política es ocasionalmente demasiado complicada de entender. En 2004, era el 30% de encuestados el que se inclinaba por esta opción, que a partir de entonces sufrió un incremento. En el año 2006, el 34% de los preguntados creía que la política es ocasionalmente demasiado complicada de entender y en 2008, lo consideraba el 36% de los encuestados. La siguiente opción que más encuestados reúne es la de frecuentemente. En el año 2002, el 25% de los encuestados creía que la política es frecuentemente demasiado complicada de entender, pero ese porcentaje disminuyó ligeramente en las oleadas siguientes. En 2004, se inclinaban por esta opción el 24% de los encuestados, mientras que en 2006 y 2008 lo hacía el 21%, respectivamente.

De lo anterior se desprende que más de la mitad de los encuestados, según los datos disponibles, consideraba que la política era ocasionalmente o frecuentemente demasiado complicada de entender. Del mismo gráfico, además, vale la pena destacar que el porcentaje de dos posiciones antagónicas, como son las de raramente y regularmente, es similar. En el año 2002, el 18% de los encuestados creía que la política es raramente demasiado complicada de entender, mientras que el 17,9% consideraba que lo era regularmente. De forma similar, en 2004, el 19,8% de los

preguntados pensaba que la política es raramente demasiado complicada de entender y un 19,3% creía que lo es regularmente. En 2006, el porcentaje de los que creían que la política es regularmente demasiado complicada de entender era algo superior (19%), al de los que creían que lo es raramente (17%). Sin embargo, los porcentajes volvieron a acercarse en la siguiente oleada, en 2008, cuando el 17% de los encuestados creía que la política era regularmente demasiado complicada de entender y el 16,9% consideraba que lo era raramente.

Una pequeña parte de los encuestados, que oscila entre el 6% y el 7%, pensaba que la política no es nunca demasiado complicada de entender.

A la luz de los datos disponibles se puede observar que una gran parte de los encuestados, si se tiene en cuenta a los que consideran que la política es frecuentemente, regularmente y ocasionalmente demasiado complicada de entender, percibe cierta distancia o alejamiento entre los cargos electos y la ciudadanía.

Según los datos del CIS sobre la cuestión, disponibles para los años 2006, 2007 y 2008, se puede ver que, en enero de 2006, aquellos que estaban de acuerdo con que la política les parecía tan complicada que la gente corriente no podía entender lo que pasaba eran el 43%, mientras los que estaban en desacuerdo eran el 40%. Además, el 12% de los encuestados no estaba en acuerdo ni en desacuerdo con ello. De la misma forma, el 29% de los encuestados consideraba que entendía la política, mientras que el 45% consideraba que no la entendía; y, el 21% no estaba en acuerdo ni en desacuerdo con la cuestión. En enero de 2007, se observa que el 43% de los encuestados, de nuevo, estaba de acuerdo con la frase que indicaba que la política era tan complicada que la gente corriente no podía entender lo que pasaba. Por el contrario, el 39% estaba en desacuerdo y el 13% no estaba en acuerdo ni en desacuerdo. De la misma forma, el 45% de los encuestados no se consideraba un ciudadano que entendiera de política, mientras el 29%, sí lo hacía y el 22% se mostraba indiferente a la cuestión. En enero de 2008, el 43% de los encuestados volvía a considerar que la gente corriente no entendía lo que pasaba por la complejidad de la política, mientras que el 40% de los preguntados estaba en desacuerdo con ello y el 12% no estaba en acuerdo ni en desacuerdo con la cuestión. Por otra parte, el 44% de los encuestados no se consideraba un ciudadano que entendiera de política. En cambio, el 32% sí consideraban entender de política de un modo general, y el 20% se mostró indiferente a la pregunta al decir que no estaba en acuerdo ni en desacuerdo.

Los datos disponibles del CIS, en que se muestra que más encuestados consideran estar de acuerdo con la frase de que generalmente la política es tan complicada que la gente corriente no entiende lo que pasa, que los que están en desacuerdo; y que muestran también que entre

el 12% y el 13% de los encuestados no está en acuerdo ni en desacuerdo con ello, pueden ser indiciarios del problema del alejamiento. En cuanto a la propia consideración ciudadana sobre si se entiende o no de política, entre el 44% y el 45% de los encuestados cree no entender del tema y entre el 20% y el 21% se muestra indiferente a la cuestión, mientras que entre el 29% y el 32% de los encuestados consideran que sí entienden. De ello se puede desprender también la distancia que se percibe entre la gente corriente y la política, y, por tanto, denota el problema del alejamiento.

5.3. Oligarquización

El fenómeno de la oligarquización, como se ha señalado anteriormente en este trabajo, hace referencia a la percepción de cierta parte de la ciudadanía sobre que el oficio de político, o la política en general, está solamente reservada a las élites y que, generalmente, la ciudadanía no es escuchada por ellas. Se trata, además, de un fenómeno considerado reciente, y del que existen pocos datos disponibles.

En el caso de España, se puede ver, según los datos de la Encuesta Social Europea de 2014, que la mayor parte de los encuestados consideraba que el sistema político no permite nada a la ciudadanía tener influencia sobre las cuestiones políticas del país. La opción de nada es la más extrema en una escala que va de nada (0) a completamente (10). Así, precisamente la opción más extrema es la que representa al 25,9% de los encuestados. Por tanto, se puede inferir que gran parte de los encuestados observa el fenómeno de la oligarquización, más cuando la segunda opción que más encuestados agrupa es la 2, con el 18% de los preguntados, la siguiente es la 3, con el 14% y la siguiente la 1, con el 11%. Según los datos de la Encuesta Social Europea, puede observarse de qué manera las posiciones más cercanas a las opciones de que el sistema político no permite tener influencia a la ciudadanía son las que agrupan a un mayor número de encuestados.

Según los mismos datos, la posición intermedia, la 5, reúne al 9% de los encuestados, igual que la posición 4, algo más cercana a la opinión negativa. Por lo que se refiere a las valoraciones más cercanas a las opiniones afirmativas acerca de si el sistema político permite tener influencia a la ciudadanía en España, las posiciones que van del 6 al completamente, agrupan a una parte menor de los encuestados. El 4% de los encuestados se inclinó en 2014 por la opción 6, mientras que el 3% lo hizo por la 7 y el 1,9% por la 8. Las opciones 9 y completamente no llegan al medio punto. Los datos descritos demuestran que la ciudadanía apreciaba que el sistema político no le permitía tener influencia sobre el proceso de toma de decisiones políticas.

En el mismo sentido y según datos de la Encuesta Social Europea de 2014, la opinión de los encuestados tampoco era muy favorable a la hora de valorar si el sistema político permite tener algo que decir a la ciudadanía en España, lo que puede entenderse como otro indicio del fenómeno de la oligarquización. De nuevo, la posición más extrema en una escala que va de nada (0) a completamente (10) es la que reúne a una mayor parte de personas preguntadas. El 23% de los encuestados se inclinó por la opción de nada al ser preguntados sobre si el sistema político permitía a la ciudadanía tener algo que decir en España. El 17% de las personas preguntadas optó por la posición 2 y el 15,9% lo hizo por la 3. Como antes, las opciones más cercanas a la opinión negativa reúnen a un mayor número de los encuestados. En este caso, la opción intermedia, la 5, agrupa al 9% de los encuestados, igual que la opción 1.

Las opciones más cercanas a la opinión positiva, de la posición 6 a la de completamente, son, nuevamente, las menos elegidas por los encuestados. Así, el 5% de los encuestados se inclinó por la opción 6, igual que por la opción 7. La opción 8 es elegida por el 2% de los encuestados y el 1% se inclinó por la posición de completamente, mientras que el 0,8% optó por la posición 9. El fenómeno de la oligarquización, de nuevo, se pone de manifiesto según los datos disponibles.

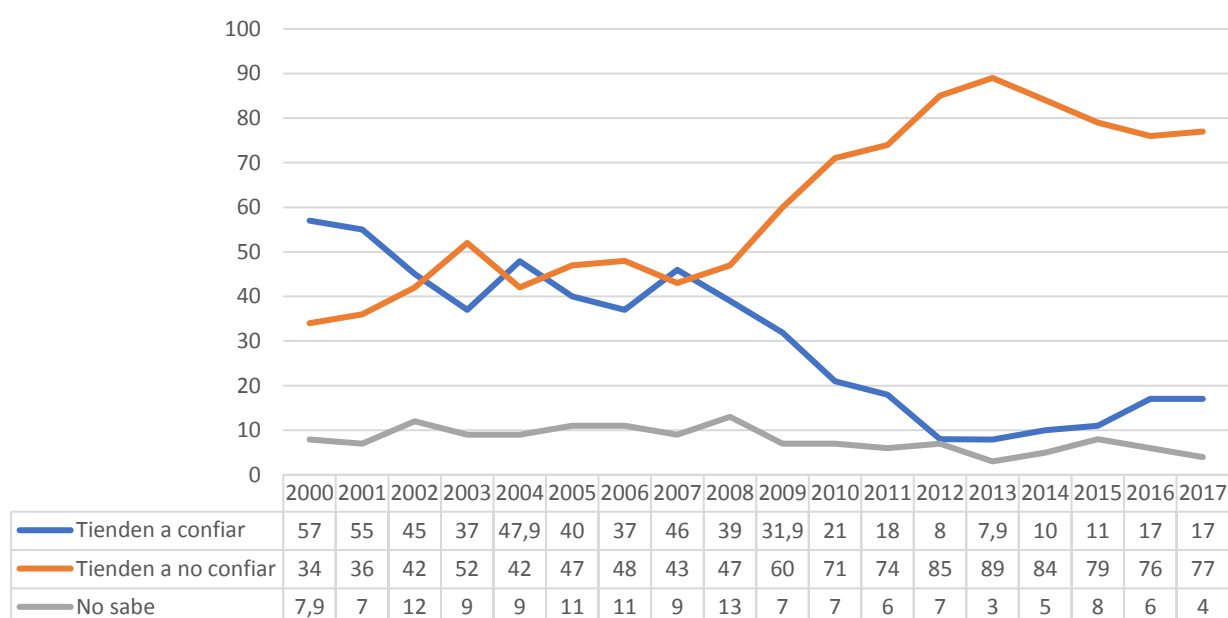
Según los datos del CIS de enero de 2006, enero de 2007 y enero de 2008, se puede ver cómo más del 60% de los encuestados consideran que el voto es la única forma en que la gente común puede influir en lo que hace el gobierno. Concretamente, el 66% de los preguntados está de acuerdo con ello en 2006, el 20% está en desacuerdo y el 7% no está en desacuerdo ni en desacuerdo. En 2007, el 60% de los preguntados consideraba que el voto es la única forma de influir, pero el 24% consideraba que no y el 8% se mostraba indiferente. Similarmente, en 2008, el 62% estaba de acuerdo con que el voto es la única forma de influir en lo que hace el gobierno, el 23% no estaba de acuerdo con ello y el 8% volvía a mostrarse ni en acuerdo ni en desacuerdo. Así, la mayor parte de los encuestados consideraba que el voto es la única forma de influir en el gobierno. Al mismo tiempo, más de la mitad de los encuestados se mostraba también de acuerdo con que la política tiene una gran influencia en la vida de cualquier ciudadano. El 64% de los encuestados consideraba en 2006 que la política tiene gran influencia, mientras que el 15,9% estaba en desacuerdo y el 12% no estaba en acuerdo ni en desacuerdo. En 2007, de forma similar, el 64% de las personas preguntadas consideraba que la política tiene una gran influencia en la vida de los ciudadanos, pero el 15,9% de los encuestados no estaba de acuerdo con ello y el 11% no estaba en acuerdo ni en desacuerdo. En 2008, el 66,9% estaba de acuerdo con la afirmación, el 15% no lo estaba y el 10,9% no estaba en acuerdo ni en desacuerdo. De los datos disponibles se ve, pues, que la ciudadanía reconoce la influencia de la política en sus vidas, pero considera que la única forma de influir que tiene la ciudadanía en el gobierno es con el voto.

5.4. Desconfianza política

La problemática de la desconfianza política es uno de los fenómenos relacionados con la representación política más estudiados por la literatura. Por tanto, sobre el grado de confianza hacia la política o los políticos y las instituciones es de lo que más datos se pueden conocer, puesto que varias encuestas se interesan por saber la opinión de la ciudadanía a este respecto.

En el caso de España, según los datos del Eurobarómetro para el periodo de análisis (de 2000 a 2017) se observa una gran subida de la desconfianza hacia el parlamento nacional a partir del año 2007, al mismo tiempo que cae la confianza a partir de ese año.

Gráfico 23. Confianza en el parlamento nacional en España I



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Tal y como puede observarse en el gráfico 23, en el año 2000 era el 57% de los encuestados el que tendía a confiar en el parlamento nacional, mientras que el 34% tendía a no confiar. De forma similar, en 2001, el 55% de las personas preguntadas tendía a confiar y el 36% tendía a no confiar. En todo el periodo de análisis, solo en estos dos años los encuestados que tienden a confiar son más de la mitad, en los años siguientes ese porcentaje va cayendo. En el año 2002, los porcentajes se acercaron, de manera que el 45% de las personas preguntadas manifestaba confiar en el parlamento, mientras que el 42% decía que no confiaba. La confianza manifestada hacia el parlamento empeoró en el año 2003, cuando por primera vez en el periodo de análisis más de la mitad de los encuestados, el 52%, tendía a no confiar, mientras que el 37% aseguraba

confiar. La tendencia al alza del número de encuestados que aseguraban no confiar en el parlamento se mantuvo en los años siguientes, aunque con dos excepciones, en 2004 y en 2007. En el año 2004, el 47% de las personas preguntadas mostraba confianza y el 42%, desconfianza. En 2005, el 47% se inclinaba por la desconfianza y el 40% por la confianza y, de forma similar, en 2006, el 48% desconfiaba y el 37% tendía a confiar. En 2007, el 46% de los encuestados tendía a confiar y el 43% tendía a no confiar. A partir de ese momento, aumentó de forma considerable el porcentaje de los que tendían a no confiar y disminuyó el de los que tendían a confiar hasta el final del periodo de análisis.

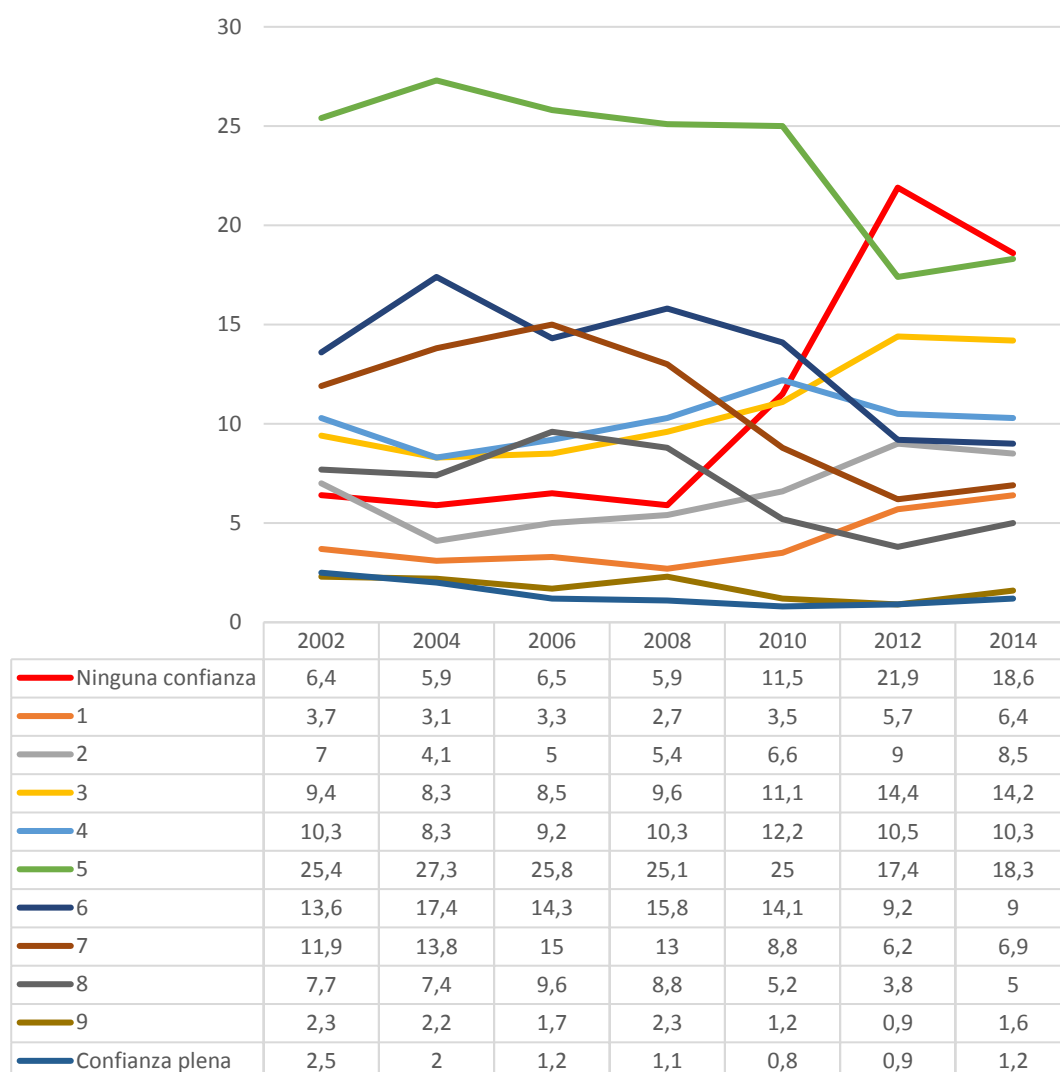
En el año 2008, el 47% de los encuestados aseguraba que tendía a no confiar en el parlamento nacional y el 39% decía que tendía a confiar. En 2009, el porcentaje de los que desconfiaban subió hasta el 60% y el de los que tendían a confiar cayó hasta el 31,9%. De forma más acusada, en 2010, el 71% de los preguntados aseguraban no confiar y el 21% manifestaban confiar en el parlamento. Similarmente, en el año 2011, el 74% de los encuestados tendía a no confiar y el 18% tendía a confiar. El año siguiente, 2012, fue el que registró el menor número de encuestados que tendían a confiar, con el 8%, de todo el periodo de análisis y uno en los que más desconfianza se alcanzó, con el 85% de los encuestados. Sin embargo, el mayor número de encuestados que tendían a no confiar en el parlamento nacional se alcanzó en 2013, con el 89% de los encuestados, mientras que los que tendían a confiar se quedaron en el 7,9%.

En los años siguientes, aunque siguieron siendo elevados los porcentajes de desconfianza, bajaron ligeramente con respecto a los años inmediatamente anteriores, igual que se recuperaron algo los porcentajes de los encuestados que tendían a confiar. En el año 2014, el 84% de las personas preguntadas aseguraba no confiar y el 10% tendía a confiar. En 2015, el 79% de los preguntados decía no confiar y el 11% decía confiar, del mismo modo, este porcentaje subió en 2016 y 2017, con el 17% de los encuestados, respectivamente. En el caso de la desconfianza, en 2016, el 76% de los encuestados tendía a no confiar y en 2017, era el 77% de los preguntados el que tendía a no confiar.

En el mismo sentido, los datos disponibles de la Encuesta Social Europea muestran una considerable subida del número de personas preguntadas que se inclinan por la posición extrema de ninguna confianza hacia el parlamento español a partir de 2008. De forma paralela, también se observa una caída de los que se inclinaban por una posición intermedia de confianza a partir de 2010.

Gráfico 24. Confianza en el parlamento nacional en España

II



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

En una escala que va de ninguna confianza (0) a confianza plena (10) en el parlamento nacional, se puede observar en el gráfico 24 que la mayor parte de los encuestados opta por la posición 5 de confianza, según la Encuesta Social Europea. En el año 2002, el 25% de las personas preguntadas se inclinó por la posición intermedia (5) de confianza hacia el parlamento, en el año 2004 fue el 27% de los encuestados el que optó por esta opción y en 2006, 2008 y 2010 volvió a elegir la posición 5 el 25% de los encuestados, consecutivamente. En el año 2012, sin embargo, la posición 5 fue elegida por un menor número de encuestados, con el 17%. En 2014, la posición 5 fue elegida por el 18% de las personas preguntadas.

Del gráfico 24 también cabe resaltar la subida de la opción de ninguna confianza hacia el parlamento español, que supera a las demás opciones en los años 2012 y 2014. Entre los años 2002 y 2008, la opción más radical de desconfianza oscilaba alrededor del 6% de los encuestados, pero en 2010 llegó al 11%, en 2012 alcanzó su pico con el 21,9% de los encuestados que se inclinó por la posición de ninguna confianza y en 2014 esa opción fue elegida por el 18% de las personas preguntadas.

De la misma forma, las posiciones 6 y 7 de confianza congregaban a un buen número de encuestados hasta 2010. A partir de ese momento, se ponen por encima posiciones más cercanas a la desconfianza, como son la 4 y la 3, que suben, al mismo tiempo que caen las posiciones 6 y 7. De este modo, se puede apreciar que, después de la posición 5 y hasta el año 2008, las posiciones 6 y 7 son las que más encuestados agrupan.

En el año 2002, la posición 6 de confianza fue elegida por el 13% de los encuestados, en 2005 lo fue por el 17%, en 2006 por el 14%, en 2008 por el 15% y en 2010 por el 14%. En el año 2012 y 2015, la posición 6 fue escogida por el 9% de los encuestados, por tanto, se observa un descenso. En cuanto a la posición 7, se puede apreciar un comportamiento similar, pero con una caída más acusada. En 2002, la 7 era la opción preferida por el 11,9% de los encuestados, en 2004 lo era para el 13% de las personas preguntadas, en 2006 para el 15%, en 2008 para el 8% y, a partir de 2010, cuando se ve más caída, esta opción es elegida por el 6% y en 2014, por el 6,9% de las personas encuestadas.

Por lo que se refiere a las posiciones más tendentes a la desconfianza que congregan a más números de encuestados, se puede ver que la posición 4 era elegida por el 10% de los encuestados en 2002, por el 8% en 2004, por el 9% en 2006, por el 10% en 2008, por el 12% en 2010 y por el 10% en 2012 y 2014, respectivamente. La posición 3, más cercana a la desconfianza, agrupaba al 9% de los encuestados en 2002, al 8% en 2004 y 2006, respectivamente, y al 9% en 2008. A partir de entonces, esa posición es elegida por un mayor número de personas. En 2010, el 11% de los encuestados optó por la posición 3 y en 2012 y 2014 lo hizo el 14% de los preguntados, respectivamente. De la misma manera, cabe también resaltar el ligero ascenso a partir de 2008 de las posiciones más radicales de desconfianza, además de la de ninguna confianza, como son la 2 y la 1, al mismo tiempo que caen las posiciones más extremas de confianza, como son la 8 y la 9, además de la de confianza plena, que congregaban, según los datos disponibles, a un menor número de encuestados.

La posición 2 agrupaba al 7% de los encuestados en 2002, mientras que entre los años 2004 y 2010, el porcentaje de encuestados que optaba por esta posición se movía entre el 4% y el 6%.

Sin embargo, en 2012 subió al 9% y en 2014 se quedó en el 8%. Por lo que se refiere a la posición 1, de alrededor del 3% de los encuestados que optaban por esta posición entre los años 2002 y 2010, se pasa al 5% en 2012 y al 6% en 2014. De esta manera, de los datos disponibles se infiere una tendencia al aumento de las posiciones de desconfianza más radicales.

En el caso de la posición 8, tendente a la confianza, se observa que entre el 7% y el 9% de los encuestados se inclinaba por esta opción entre los años 2002 y 2008, pero se experimentó una caída en 2010, con el 5% de los preguntados a favor de esta opción, igual que en 2012 con el 3% y en 2014, con el 5% de nuevo. En el mismo sentido, las posiciones 9 y de confianza plena agrupaban a una mínima parte de los encuestados que oscilaba entre el 1% y el 2%, respectivamente.

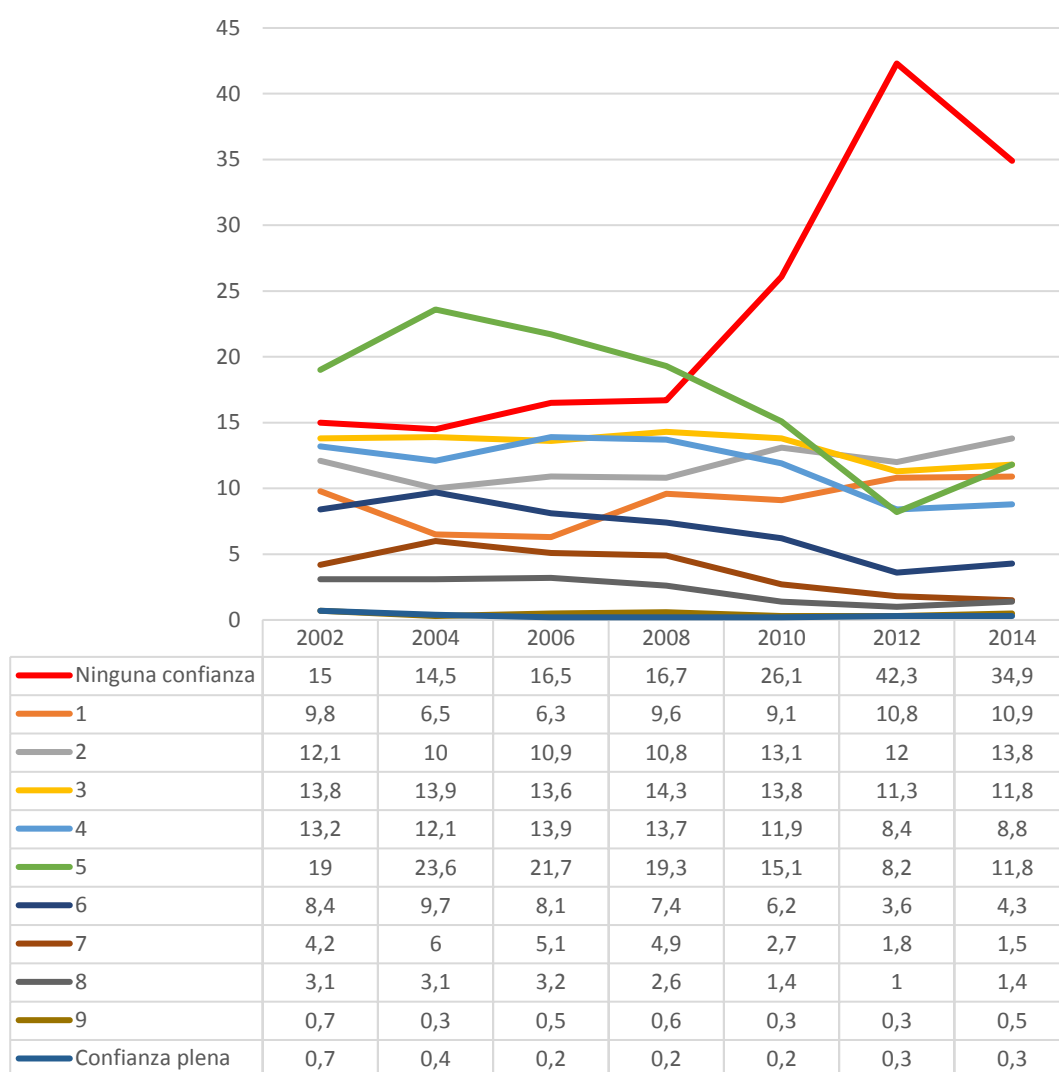
En el momento de hablar de la confianza hacia los políticos en España, según los datos de la Encuesta Social Europea, se aprecia claramente una subida de la opción más radical, la de ninguna confianza, a partir del año 2008, al mismo tiempo que cae la opción que era mayoritaria hasta ese año, la posición 5, según puede verse en el gráfico 25.

Así, el 19% de los encuestados optó por la posición 5 de confianza en el año 2002 y ese porcentaje subió hasta el 23% en 2004. En 2006, era el 21% de las personas preguntadas el que se inclinaba por esta posición, mientras que decayó al 19% en 2008, al 15% en 2010 y al 8% en 2012. En el año 2014 se recuperó ligeramente, hasta el 11%. La segunda opción que más encuestados reúne es la de ninguna confianza hacia los políticos, por tanto, la más radical de la escala, que va desde ninguna confianza (0) a confianza plena (10).

En el año 2002 era el 15% de los encuestados el que se inclinaba por la opción de ninguna confianza, el porcentaje se mantuvo de forma similar en 2004, con el 14%, en 2006, con el 16% y en 2008, de nuevo con el 16%. A partir de 2010, la posición de ninguna confianza es elegida por el 26% de los encuestados; en 2012, por el 42% de los encuestados, el pico más alto de desconfianza entre los datos disponibles; y, en 2014, esta opción es válida para el 34,9% de las personas preguntadas.

Después de las posiciones 5 (intermedia) y ninguna confianza (la más radical en la desconfianza), las posiciones 2, 3 y 4 son las que concentran un mayor número de encuestados. Además, estas posiciones se mantienen a lo largo de las distintas oleadas de datos disponibles de forma bastante estable, aunque la 4 cae ligeramente en 2012 y 2014.

Gráfico 25. Confianza en los políticos



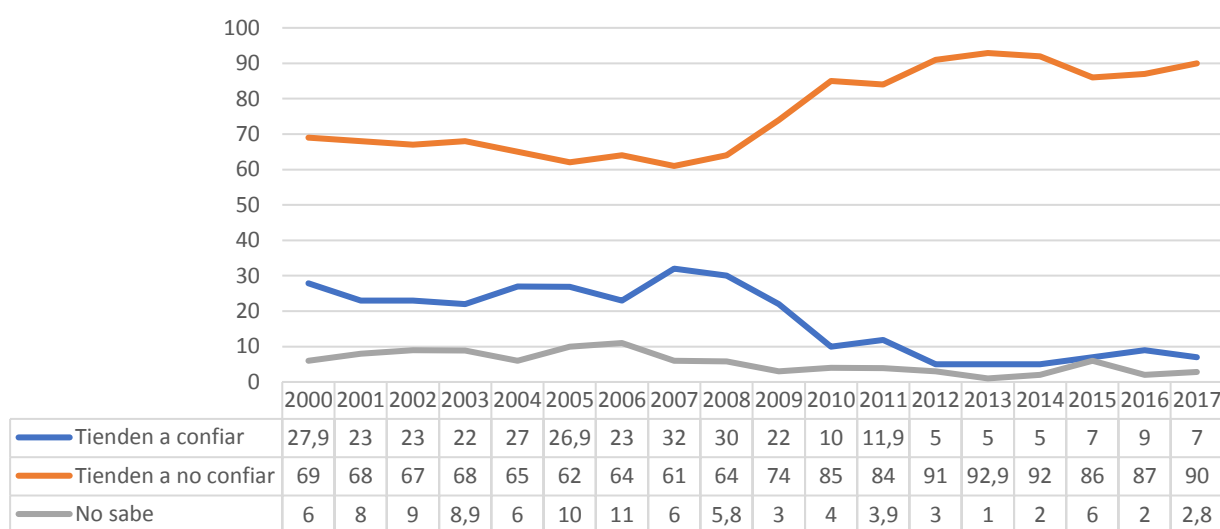
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

En el año 2002, la posición 3 era la favorita para el 13% de los encuestados, igual que en 2004 y 2006. En 2008, el 14% optó por esta opción cercana a la desconfianza y en 2010 lo hizo el 13%, mientras que en 2012 y en 2014 el porcentaje era del 11%. Por lo que se refiere a la posición 4, se observa que, en el año 2002, el 13% de las personas preguntadas optaba por esta posición, mientras que en 2004 lo hacía el 12%. En 2006 y 2008, el 13% escogió la opción 4 y en 2010, cayó al 11,9%. Esa caída es apreciable también en los años 2012 y 2014, con el 8% de los encuestados que eligieron la posición 4.

Además, según los datos disponibles, la opción 1 de desconfianza congregaba entre 2002 y 2014 a entre el 6% y el 10% de los encuestados, con una tendencia al alza. Al contrario, la posición 6, más cercana a la confianza, muestra una tendencia a la caída y los porcentajes, entre los años 2002 y 2014, oscilan entre el 9% y el 3% de los encuestados. El resto de posiciones cercanas a la confianza reúnen a la minoría de los encuestados. De nuevo, de los datos disponibles se percibe la radicalización de las posiciones de la desconfianza hacia los políticos, sobre todo a partir de los años 2008 y 2010.

En cuanto a la confianza hacia los partidos políticos en España, puede apreciarse un fenómeno similar según los datos del Eurobarómetro, que pueden verse en el gráfico 26.

Gráfico 26. Confianza en los partidos políticos en España I



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Durante todo el periodo de análisis, de 2000 a 2017, la mayor parte de los encuestados, siempre más de la mitad, tienden a no confiar en los partidos políticos. Asimismo, a partir del año 2007, aumenta el número de los encuestados que tienden a no confiar y decae el de los que tienden a confiar.

Entre los años 2000 y 2008, el porcentaje de los que tendían a no confiar en los partidos políticos en España se movía alrededor del 60%, a partir de ese momento subió hasta valores de entre el 80% y el 90%. Así, en el año 2000, el 69% de los encuestados tendía a no confiar en los partidos políticos; en 2001, era el 68%; en 2002, el 67%; en 2003, el 68%; en 2004, el 65%; en 2005, el 62%; en 2006, el 64%; en 2007, el 61%; y, en 2008, el 64%. En 2009, el porcentaje de los que se inclinaban por no confiar en los partidos políticos ascendió al 74%, y siguió subiendo en los años

siguientes, con el 85% en 2010; el 84% en 2011; el 91% en 2012; el 92,9% en 2013; el 92% en 2014; el 86% en 2015; el 87% en 2016; y, el 90% en 2017. De forma que en los años 2012, 2013, 2014 y 2017 se dan los mayores porcentajes de encuestados que desconfían de los partidos políticos.

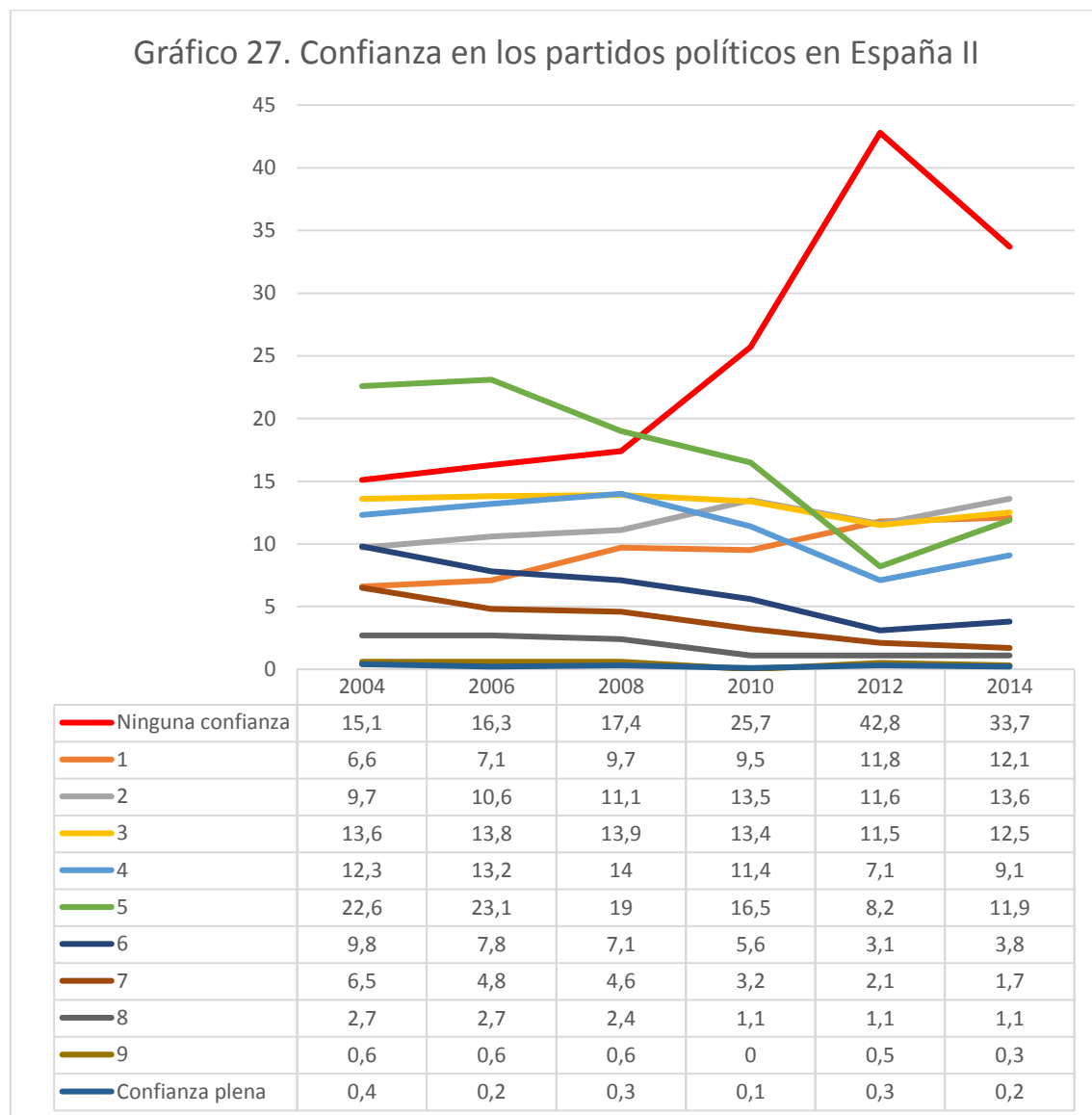
Por lo que se refiere a los porcentajes de confianza, se observa cómo caen, sobre todo, a partir del año 2008, ya que de moverse en torno al 30% pasan a valores mínimos, del 5%. De esta manera, en el año 2000, el 27,9% de los encuestados tendía a confiar en los partidos políticos. En 2001 y 2002, el 23% de los preguntados, respectivamente, afirmaba confiar en los partidos políticos, mientras que, en 2003, lo hacía el 22%. El porcentaje subió al 27% y al 26,9% en 2004 y 2005, y volvió a descender en 2006, con el 23% de los preguntados, de nuevo, que tendían a confiar en los partidos políticos. En 2007 y 2008 el porcentaje fue algo superior, del 32% de personas preguntadas, el más alto de todo el periodo de análisis, y del 30% de encuestados que tienden a confiar en los partidos. El descenso es más acusado a partir de entonces. En 2009, el 22% de los preguntados tendía a confiar, mientras que el 10% lo hacía al año siguiente, en 2010. En 2011, tendía a confiar un 11,9% de los encuestados, mientras que los valores menores del periodo se dieron en los años 2012, 2013 y 2014, con el 5% de los encuestados, consecutivamente. El 7% de los encuestados tendía a confiar en 2015 y el 9% lo hacía en 2016, pero en 2017, de nuevo el 7% de los preguntados tendía a confiar en los partidos políticos.

En la misma línea, según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, tal y como ocurría con los niveles de confianza hacia los políticos, la desconfianza hacia los partidos políticos crece a partir de 2008 y supera a la opción mayoritaria, que, hasta ese año, es la posición 5.

Tal y como puede verse en el gráfico 26, en el año 2002, el 22% de los encuestados optó por la posición 5 de confianza hacia los partidos políticos, en una escala que va de la ninguna confianza (0) a confianza plena (10). En 2006, el porcentaje de los que escogieron la posición intermedia era del 23%; en 2008 bajó al 19%; y, el descenso continuó en 2010 con el 16% y el 8% en 2012, aunque se recuperó algo con respecto a la oleada anterior, en 2014, con 11,9%. Mientras la posición intermedia tendía a la baja, la posición extrema de ninguna confianza subía. Además, la opción de ninguna confianza es la que más encuestados agrupa después de la posición 5.

En el año 2004, el 15% de los encuestados se inclinaba por la opción de ninguna confianza, mientras que en 2006 lo hacía el 16%, en 2008 el 17% y en 2010, el 25%. El pico de la posición más radical de desconfianza se produce en 2012, cuando el 42% de los encuestados escogió esa opción. En 2014, se inclinó por ella el 33% de las personas preguntadas.

Las posiciones siguientes que más encuestados agrupan están en la mitad tendente a la desconfianza. Entre ellas, las posiciones 3 y 4 sufren una caída y las posiciones 1 y 2 ascienden, con lo cual se observa que las posiciones que representan más desconfianza tienden a ser elegidas en mayor medida en las oleadas más actuales de la Encuesta Social Europea.



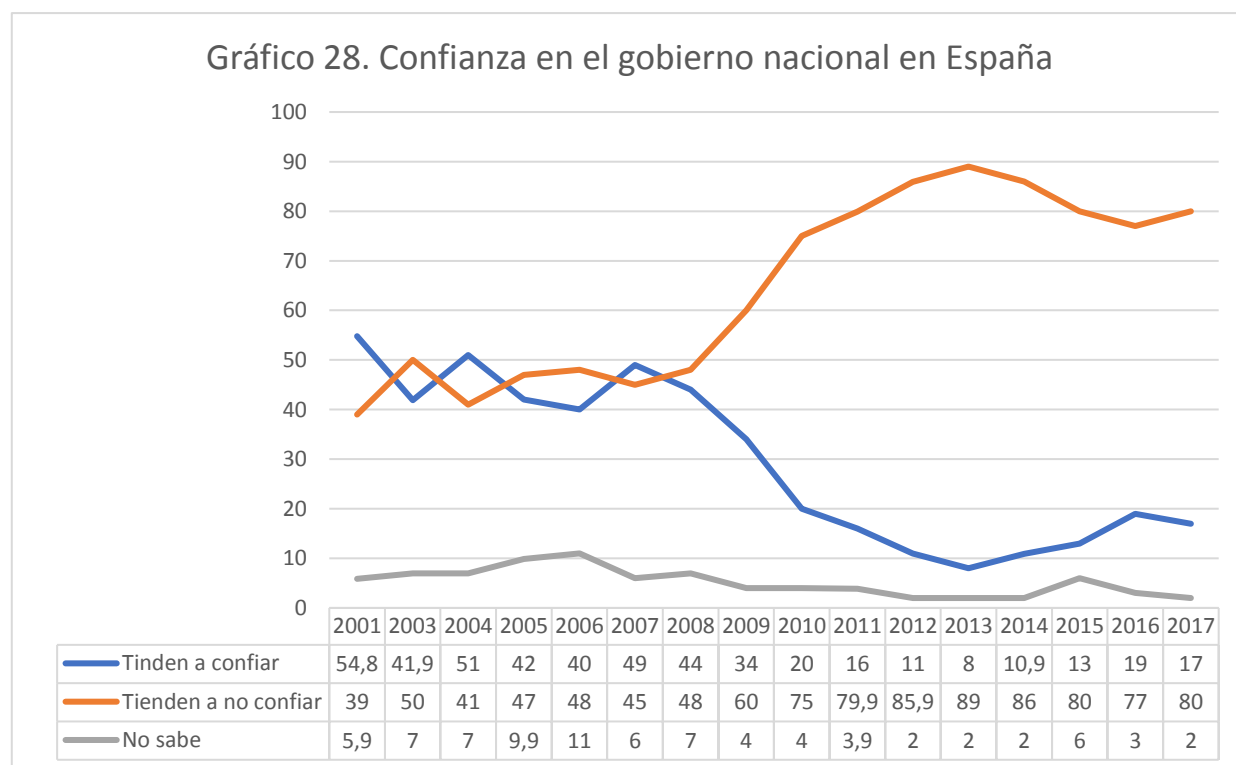
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

La posición 3 congregaba entre 2004 y 2010 al 13% de los encuestados, mientras que en 2012 agrupaba al 11% y en 2014, al 12%. De un modo parecido, la posición 4 reunía al 12% de las personas preguntadas en 2004, al 13% en 2006, al 14% en 2008 y al 11% en 2010. En 2012 el porcentaje descendió al 7% y en 2014 aumentó ligeramente, hasta el 9%. Seguidamente, la posición 2 era la favorita del 9% de los encuestados en 2002, del 10% en 2004, del 11% en 2008, del 13% en 2010, del 11% en 2012 y del 13% en 2014. Similarmente, la posición 1 también subió

a lo largo de las distintas oleadas. El 6% de los encuestados eligió la posición 1 en 2002; el 7% lo hizo en 2006; el 9%, en 2008 y 2010, respectivamente; y, el 11% y el 12% en los años 2012 y 2014.

Por lo que se refiere a las posiciones más cercanas a la confianza en los partidos políticos en España, se puede ver que tienden a caer y agrupan a una pequeña parte de los encuestados. La posición 6 reunía al 9% de los encuestados en 2004, al 7% en 2006 y 2008, al 5% en 2010 y al 3% en 2012 y 2014, respectivamente. Similarmente, el 6% de los encuestados optaba por la posición 7 en 2004, el 4% lo hacía en 2006 y 2008, el 3% en 2010, el 2% en 2012 y el 1% en 2014. El resto de posiciones agrupa a entre el 0,2% y el 2% de las personas encuestadas.

En referencia a la confianza en el gobierno nacional en España, según los datos del Eurobarómetro recogidos en el gráfico 28, se puede observar la misma tendencia: la desconfianza aumenta a partir del año 2008, al mismo tiempo que cae el porcentaje de los que tienden a confiar.

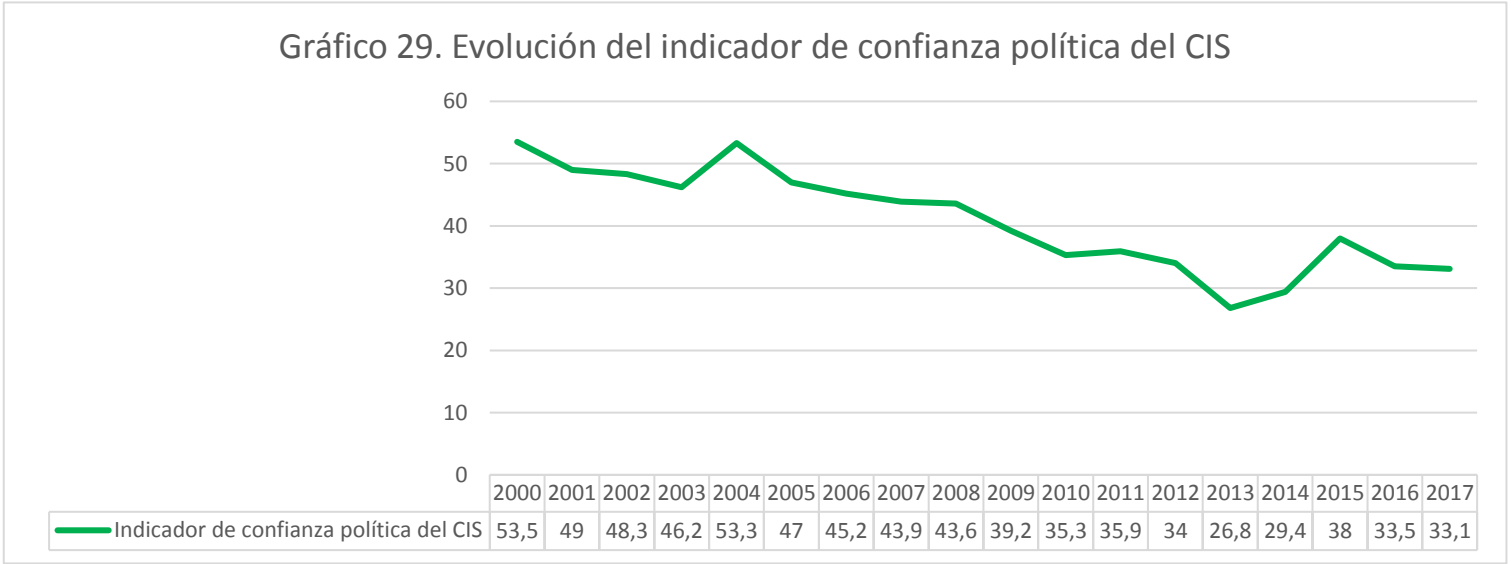


Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Entre los años 2001 y 2008, los porcentajes de confianza y de desconfianza tendían a alternarse según los años, hasta que a partir de 2008 empiezan a distanciarse de una forma muy evidente. De esta forma, en 2001, el 54% de los encuestados tendía a confiar en el gobierno, mientras el 39% tendía a no confiar. Ese porcentaje subió hasta el 50%, que tendía a no confiar, en 2003 y

el 41,9% aseguraba confiar. En 2004, el 51% decía confiar y el 41% tendía a no confiar; en 2005, el 47% tendía a no confiar y el 42% tendía a confiar; en 2006, era el 40% el que tendía a confiar y el 48% a no hacerlo; en 2007, el 49% tendía a confiar y el 45% tendía a no confiar; en 2008, en cambio, era el 48% de los encuestados los que tendían a no confiar y el 44% tendía a confiar. En el año 2009 se empieza a hacer patente la distancia entre los dos porcentajes. Así, en ese año, el 60% de los encuestados aseguraba no confiar y el 34% tendía a confiar; en 2010, el 75% tendía a no confiar, en 2011 el porcentaje subió al 79,9% y continuó aumentando al 85,9% en 2012 y al 89% en 2013. En el año siguiente, los que tendían a no confiar en el gobierno eran el 80% de los encuestados, el 77% en 2017 y, de nuevo, el 80% en 2017. En el lado opuesto, en 2009, el 34% de los encuestados decía confiar; en 2010, bajó al 20% y descendió nuevamente en 2011, con el 16%, en 2012, con el 11% y en 2013, con el 8%. En 2014, el porcentaje de los que tendían a confiar eran el 10,9% y en 2015 eran el 13%. En 2016 y 2017 el porcentaje subió ligeramente respecto a los años anteriores, con el 19% y el 17%, respectivamente.

La tendencia a la caída durante el periodo de análisis de la confianza política en España se observa a partir del promedio anual de los datos recogidos por el CIS, que se recogen en el gráfico 29. La tendencia es a la baja en el promedio anual del indicador de confianza política entre los años 2000 y 2017, pero se aprecia una mayor caída a partir de 2008 y hasta 2014.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS. Promedio anual.

En el año 2000, el promedio anual elaborado a partir de los datos ofrecidos por el CIS del indicador de confianza política era de 53,5. En los siguientes tres años, se aprecia una ligera

caída, con el 49 en 2001, el 48,3 en 2002 y el 46,2 en 2003. Sin embargo, en 2004 se vuelve al 53,3, aunque un valor similar no se vuelve a repetir en todo el periodo de análisis.

Mientras en el año 2004 el promedio del indicador de confianza política se sitúa en 53,3, en 2005 desciende a 47 y sigue bajando en los años siguientes, con el 45,2 en 2006, el 43,9 en 2007 y el 43,6 en 2008. A partir de entonces, se hace más evidente el declive en el indicador de confianza política en España.

El promedio del indicador de confianza política en el año 2009 era de 39,2; en 2010 de 35,3; en 2011 de 35,9; en 2012, de 34; y, en 2013 se llega al mayor declive del periodo de análisis, con el 26,8. En 2014 el promedio del indicador de confianza política se situó en el 29,4 y se recuperó en 2015, con el 38, aunque cayó de nuevo en 2016, cuando el indicador se situó en 33,5. En 2017 siguió en el 33,1.

5.5. Desafección política

La problemática de la desafección política que, como se ha visto anteriormente, es un sentimiento de desapego más profundo hacia la política de lo que podría ser el descontento o la desconfianza, puede observarse a partir de distintos datos. Además, la desafección política se ha convertido en un rasgo sobresaliente de la cultura política de las democracias de final de siglo (Pharr y Putnam, 2000). Entre esos datos, se encuentran el interés demostrado por los ciudadanos hacia la política, la percepción de la ciudadanía sobre si es sencillo participar en política y, también, sobre el grado de facilidad percibido acerca de la toma de conciencia de asuntos políticos.

Así, en el caso de España, se puede apreciar, en el gráfico 30, que la mayor parte de los encuestados se ha mostrado poco interesado por la política, según la Encuesta Social Europea. En el año 2002, el 40% de las personas preguntadas indicaba que estaba poco interesado por la política. En el año 2004, el porcentaje subió al 42%, de forma que fue este el año en que un mayor número de encuestados se decantaron por esta opción. En la siguiente oleada, realizada en 2006, se puede ver que el 38% de las personas preguntadas manifestaban estar poco interesadas en la política, porcentaje que subió ligeramente en 2008, con el 39%, y el 40%, de 2010. Sin embargo, en el año 2012, el porcentaje bajó hasta el 35% y en 2014 se quedó en el 36%.

La siguiente opción más escogida por los encuestados es la de nada interesado por la política, que decayó en el año 2014. En el año 2002, el 38% de los preguntados decían no estar nada

interesados por la política, mientras que al año siguiente eran el 28% los que se inclinaban por esa opción. En 2006, sin embargo, el porcentaje aumentó hasta el 35% y en 2008 cayó ligeramente, hasta el 34%. A partir de ese momento, según los datos disponibles, se observa la tendencia al descenso entre los encuestados que no estaban nada interesados en la política. En el año 2010, el 34% de los encuestados manifestaba no estar nada interesado en la cuestión, en 2012 era el 29% y en 2014, el 22%.

A cierta distancia se encuentran aquellos que indicaban estar bastante interesados por la política, una opción que sube hacia el año 2014, en contraposición con la opción de los nada interesados. El 18% de los encuestados decía estar bastante interesado por la política en el año 2002. En el año 2004 era el 22%, en 2006 el 20%, en 2008 el 21% y en 2010, el 20%. Esa estabilidad, sin embargo, cambió con el aumento al 23% en 2012 y, sobre todo, al 29% en 2014.

A mucha distancia se hallan los encuestados que dicen estar muy interesados en la política, aunque esta opción experimenta una tendencia al alza. En el año 2002, el 3% de los encuestados decía estar muy interesado por la política; en 2004 era el 6%; en 2006 y 2008, el 5%; y, en 2010, el 8%. En los años 2012 y 2014, el 11% de los encuestados afirmaba estar muy interesado por la política.

De los datos anteriores puede inferirse que, si bien los poco interesados por la política son la mayor parte de los encuestados a lo largo de las distintas oleadas, los muy interesados y los bastante interesados han aumentado en los últimos años, así como ha bajado el número de encuestados que se inclinaban por la opción más radical de nada interesado.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Por lo que se refiere a la concepción de los políticos en general y de los partidos como problema, según datos del CIS recogidos en el gráfico 32, se puede observar que una mayor parte de los encuestados los considera como problemas principales a partir del año 2008.

Así, en el inicio del periodo de análisis, en el año 2000, el 5,3% de los encuestados consideraba a los políticos y los partidos como problema; en el 2001, era el 5,6%; en 2002, el 6,1%; y, en 2003 aumentó hasta el 9,7%. En 2004 y 2005, el 7,2% y el 7,8%, respectivamente, consideraban que la política y los políticos eran un problema principal para España. En el año 2006, el 9,5% de los preguntados pensaba en los políticos y los partidos como problema, mientras que, en 2007, eran el 11%, aunque en 2008, el porcentaje descendió ligeramente, hasta el 7,2% de los encuestados que consideraban que los políticos y los partidos eran un problema. En 2009, el 11,5% de las personas preguntadas veía a los políticos y los partidos como problema, un porcentaje que aumentó en 2010, con el 18,5%; en 2011, con el 21,8%; en 2012, con el 23,9%; y en 2013, con el 29,2%, el porcentaje más alto de todo el periodo de análisis. En el año 2014, disminuyó ligeramente el porcentaje de personas preguntadas que pensaban que los políticos y los partidos eran un problema, con el 25,2%, igual que en el año 2015, con el 19,9%. De la misma forma, el 23,6% de los encuestados creía que los políticos y los partidos eran un problema en España en el año 2016, un porcentaje que se mantuvo similar en 2017, con el 23%. La preocupación ciudadana por los políticos y los partidos, hasta el punto de considerarlos como el principal

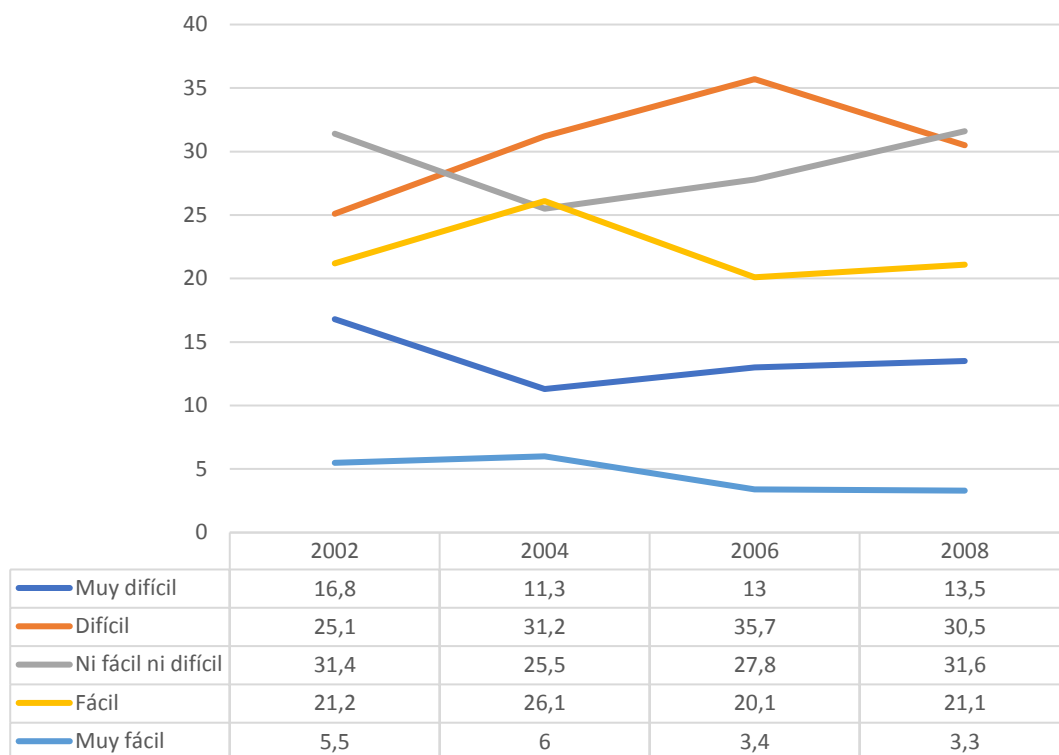
problema del país, crece a partir del año 2008 y se mantiene hasta la actualidad. Ello contrasta con el inicio del periodo de análisis, en el que se consideraba como problema por una menor parte de los ciudadanos encuestados.

Según datos de 2014 obtenidos por la Encuesta Social Europea, se puede ver que, en una escala de ninguna facilidad (0) a extremadamente fácil (10), la mayor parte de los encuestados se situaba en la opción de ninguna facilidad al ser preguntados por la sencillez de participar en política en España. De este modo, el 24% de las personas preguntadas pensaba que no existía en España ninguna facilidad para participar en política. El 14% de los encuestados se situaba en la opción 2 y el 13% lo hacía en la posición 3. El 11% se inclinaba por la posición 1. Del mismo modo, también la posición 5 reunía al 11% de los encuestados. En la franja más tendente a la visión negativa, del valor 5 al de ninguna facilidad, la posición 4 es la que menos encuestados agrupaba, con el 8%.

Por otro lado, las posiciones más cercanas a la opinión de que es fácil participar en política, son las menos elegidas por los encuestados. El 5,9% de las personas preguntadas optó por la opción 6, el 4% por la 7 y el 3,9 por la 8. Las opciones 9 y extremadamente fácil fueron elegidas por el 1% de los encuestados, respectivamente. De todo ello se desprende que gran parte de las personas encuestadas consideran difícil participar en política.

En el mismo sentido, según datos de la Encuesta Social Europea, se observa una tendencia al alza en el número de encuestados que consideran difícil la toma de conciencia sobre asuntos políticos en España, tal y como puede verse en el gráfico 31.

Gráfico 31. Toma de conciencia sobre asuntos políticos en España



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

En el año 2002, la mayor parte de las personas preguntadas consideraba que no era ni fácil ni difícil la toma de conciencia sobre asuntos políticos, con el 31% de los encuestados a favor de esa opción. Sin embargo, a partir de entonces, son mayoría los que la consideran difícil, hasta el año 2008, cuando las dos opciones vuelven a cruzarse.

En el año 2004, el 31% de las personas preguntadas pensaba que era difícil la toma de decisiones, mientras que el 35% lo creía en 2006 y el 30% en 2008. De la misma forma, en 2004, el 25% de los encuestados creía que no era ni fácil ni difícil la toma de conciencia sobre asuntos políticos, pero el 26% consideraba que era fácil. En el año 2006, el 27% de los preguntados pensaba que no era ni fácil ni difícil, porcentaje que aumentó hasta el 31% en 2008.

El porcentaje de las personas preguntadas que creían que la toma de conciencia sobre asuntos políticos en España era fácil muestra una tendencia a la baja. Así, en 2002, el 21% de los encuestados se inclinaba por esa opción, y, como se ha dicho, el 26% lo hacía en 2004. En 2006, era el 20% de los encuestados el que creía que era fácil, y el 21% lo consideraba en el año 2008.

En el extremo de muy difícil, en el año 2002 se agrupaba el 16% de los encuestados. El 11% de los preguntados se inclinaba por esta opción en 2004 y en los años 2006 y 2008, lo hacía el 13%. Por el contrario, aquellos que consideraban muy fácil la toma de conciencia sobre asuntos políticos en España eran la minoría de los encuestados.

En 2002, el 5% de los encuestados se inclinaba por la opción muy fácil y en 2004, lo hacía el 6%. En cambio, en 2006 y 2008 eran el 3% de los encuestados, respectivamente, los que consideraban que la toma de conciencia sobre asuntos políticos era muy fácil.

Tal y como indican los datos disponibles del CIS sobre la temática, correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008, se observa que más de la mitad de los encuestados considera que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente corriente; que esté quien esté en el poder, siempre busca sus propios intereses; y, que es mejor no meterse en política, lo que denota actitudes tendentes a la desafección.

En enero de 2006, el 70% de los encuestados estaba de acuerdo con la afirmación de que los políticos no se preocupan mucho por la gente corriente, mientras que el 14% estaba en desacuerdo y el 10% no se mostraba ni en acuerdo ni en desacuerdo. Al año siguiente, en enero de 2007, los porcentajes se mantuvieron de forma similar, con el 70% de los encuestados de acuerdo con la afirmación, el 14% en desacuerdo y el 11% ni en acuerdo ni en desacuerdo. En 2008, el 69% de los encuestados consideraba que los políticos no se preocupan mucho por la gente común, el 14,9% no estaba de acuerdo con ello y el 11% no estaba ni en acuerdo ni en desacuerdo.

De manera parecida, en 2006, el 68% de los encuestados estaba de acuerdo con la idea de que esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales. En cambio, el 15,9% no estaba de acuerdo con esa afirmación y el 11% de los preguntados no estaba ni en acuerdo ni en desacuerdo. En 2007, los porcentajes no cambiaron demasiado. El 68% se mostraba de acuerdo con la frase, el 14% estaba en desacuerdo y el 12% no estaba ni en acuerdo ni en desacuerdo. De forma similar, en 2008, el 70% de los encuestados estaba de acuerdo con que las personas en el poder buscan sus propios intereses, mientras que el 14% estaba en desacuerdo y el 10% no se mostraba ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Por lo que se refiere a la frase de que es mejor no meterse en política, en 2006, el 53% de los encuestados estaba de acuerdo con ella, mientras que el 28% estaba en desacuerdo y el 12% no se mostraba en acuerdo ni en desacuerdo. En el año siguiente, 2007, los porcentajes se mantuvieron prácticamente iguales, con el 53% de acuerdo, el 28% en desacuerdo y el 14% ni en acuerdo ni en desacuerdo. En 2008, creció ligeramente el porcentaje de los que estaban en

desacuerdo, hasta el 30% de los encuestados, pero se mantuvo el de los que estaban de acuerdo, con el 53%. El 11% de las personas preguntadas no estaba en acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación.

De la misma manera, los sentimientos que inspiraba la política en la ciudadanía, según datos del CIS disponibles para los mismos años, eran actitudes consideradas negativas. En 2006, el primer sentimiento que inspiraba la política en la ciudadanía era la desconfianza para el 30% de los encuestados, la indiferencia para el 18% y el aburrimiento para el 15%. En 2007, los sentimientos eran los mismos, la desconfianza para el 32% de los encuestados, la indiferencia para el 18% y el aburrimiento para el 16%. Similarmente, en 2008, el 32% sentía desconfianza hacia la política, mientras que el 20% de los encuestados sentía indiferencia como primer sentimiento y el 15% sentía aburrimiento. Según los datos disponibles, se observa que los sentimientos negativos predominaban al pensar en la política.

5.6. Corrupción

La percepción del problema de la corrupción en España se pone de manifiesto tanto a través de los datos del índice sobre la percepción de la corrupción elaborado por Transparency International, como a través de la identificación por parte de la ciudadanía de los problemas que aquejan al país que recoge el CIS.

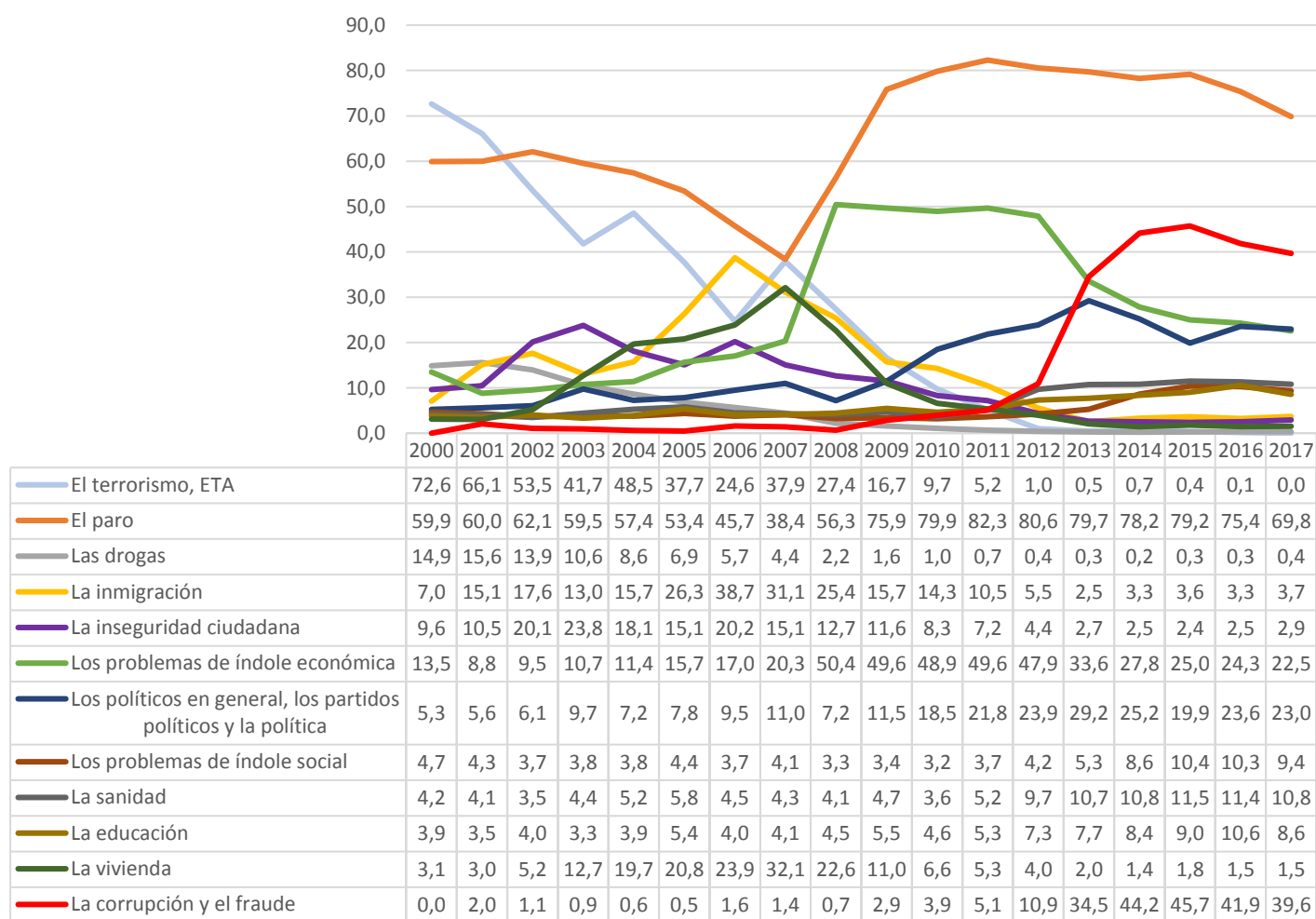
De hecho, según Transparency, España tocó fondo en la percepción de la corrupción en 2016, cuando quedó en el puesto 41 de 176 países que participan en el ranking, el peor resultado de la historia del índice. En una escala que va de 0 puntos, que significan altos niveles de corrupción, a 100 puntos, que significan bajos niveles de corrupción, España obtuvo 58 puntos, la misma puntuación que en 2015. De este modo, el país quedó en 2016 en el puesto 17 entre los 28 países de la Eurozona en cuanto a percepción de la corrupción política. Es más, la percepción de la corrupción en España ha ido empeorando en los últimos años. Entre los años 2000 y 2008, España se movía en los puestos alrededor del 20, pero entre los años 2009 y 2016, el país se situaba en puestos de entre el 30 y el 40. En 2017, España se situó en el puesto 42, con una puntuación de 57. Por tanto, la percepción de la corrupción siguió aumentando.

En el año 2000, España se situaba en el puesto 20 del ranking, con una puntuación de 70. En 2001, la puntuación se mantuvo, pero el puesto varió al 22. Sin embargo, al año siguiente, en 2002, se volvió a colocar en el puesto 20, con 71 puntos. En 2003, España ocupaba el puesto 23 de la clasificación, con 69 puntos; en 2004, el 22 con 70 puntos; en 2005, el 23 con también 70

puntos; en 2006, se mantuvo de nuevo el puesto 23, con 68 puntos; en 2007, el 25 con 67 puntos; y, en 2008, el 28 con 60 puntos. Durante los primeros años del siglo XXI se apreciaba cierta estabilidad en la percepción de la corrupción en España.

A partir de entonces, se observa un descenso de España en el ranking del índice de percepción de la corrupción de Transparency y, por consiguiente, una caída en la puntuación del país. En el año 2009, España ocupaba la posición 32 en la clasificación, con 61 puntos; en 2010, con la misma puntuación, se colocaba en el puesto 31; similarmente, en 2011, también ocupaba el puesto 31; y, en 2012, el país estaba en el puesto 30 con 65 puntos. En 2013, España estaba en el puesto 40 con 59 puntos; en 2014, en el lugar 37 con 60 puntos; y, en 2015, en el puesto 36 con 58 puntos.

Gráfico 32. Identificación de los principales problemas para los españoles



Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS.

Tal y como puede apreciarse en el gráfico 32, en el que se recogen los principales problemas que han preocupado a la ciudadanía española a lo largo del periodo de análisis según el CIS (de los cuales se ha elaborado el promedio anual), la corrupción ha empezado a ser vista como problema por más encuestados a partir del año 2008. Sin embargo, es a partir del año 2011 cuando se pone de manifiesto un mayor aumento de las personas preguntadas que sitúan la corrupción y el fraude como un problema principal en España.

Entre el año 2000 y 2008, la corrupción y el fraude preocupaban al 1% de los encuestados o menos. En cambio, entre 2009 y 2012 se aprecia un crecimiento en el número de encuestados preocupados por ello, y entre el año 2013 y 2017, se percibe un aumento mayor. Mientras que en 2009 el 2,9% de las personas preguntadas estaba preocupada por la corrupción, en 2010 era el 3,9%, una cifra que alcanza el 5% en 2011. En 2012, se dobló esa cifra, cuando el 10,9% de encuestados situaba la corrupción y el fraude como un problema principal. A partir de ese momento, el 34% de los preguntados indicaba que la corrupción y el fraude eran un problema, mientras que el 44% lo decía en 2014 y el 45%, en 2015. Esta última cifra fue la mayor de todo el periodo de análisis. En 2016, disminuye ligeramente el porcentaje de personas que ven la corrupción como un problema principal (41,9%) y en 2017 se mantenía la tendencia ligeramente a la baja, con el 39% de personas preocupadas por la corrupción y el fraude.

De este modo, a la luz de los datos disponibles, se observa que la corrupción ha empezado a preocupar a más españoles en los últimos diez años, con especial énfasis desde 2011.

5.7. Credibilidad

El problema de la credibilidad política, como anteriormente se ha comentado, está relacionado directamente con las actitudes de los ciudadanos al respecto de la confianza que manifiestan hacia sus representantes políticos y hacia las distintas instituciones públicas. Por este motivo, los datos recabados sobre la confianza política en España y la confianza hacia el parlamento nacional, los políticos, los partidos y el gobierno resultan de gran utilidad a la hora de enfrentarse al problema de la falta de credibilidad en la esfera política.

Tal y como se ha visto en los gráficos que van del 23 al 29, la desconfianza hacia distintas instituciones se ha empezado a poner de manifiesto a partir de los años 2008 – 2010. De la misma forma, a partir de entonces también se percibe la escalada de las posiciones extremas de desconfianza y, en general, el aumento del número de aquellos que tienden a no confiar, así como la tendencia a la baja de la confianza hacia diferentes actores durante el periodo de

análisis y de las posiciones más moderadas. Asimismo, el indicador de confianza política elaborado por el CIS también muestra una tendencia a la caída a lo largo del periodo de análisis.

Por todo ello, puede inferirse que la credibilidad hacia las distintas instituciones y actores políticos se ve mermada al tiempo que cae la confianza en ellos. En el mismo sentido, las valoraciones generales de los líderes políticos ofrecidas por el CIS dejan ver que la ciudadanía no da el aprobado a los líderes de los principales partidos, el PP y el PSOE. La valoración es en términos generales y no solo con respecto a su credibilidad, pero sí resultan datos útiles para conocer la opinión de la ciudadanía a este respecto.

En enero de 2017, según el Barómetro del CIS, la valoración media del líder del PP, Mariano Rajoy, era de 3,1 en una escala que va de 0, muy mal, a 10, muy bien. En el caso del líder del PSOE entonces, Javier Fernández, la valoración era de 4,1. En enero de 2016, Rajoy obtuvo una puntuación similar, con un 3, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, obtuvo un 3,7. En el año anterior, en enero de 2015, la puntuación media de Rajoy era menor, con un 2,5 y la de Sánchez se situaba en el 3,6. Similarmente, en enero de 2014, Rajoy obtuvo un 2,2 y en ese momento, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo un 3. En enero de 2013, Rubalcaba había obtenido un 3,4 y Rajoy un 2,8, mientras que, en enero de 2012, las puntuaciones medias quedaron en un 4,5 para Rajoy y un 4,2 para Rubalcaba. En el año anterior, enero de 2011, José Luís Rodríguez Zapatero era el líder del PSOE y obtuvo un 3,3 de media en cuanto valoración; por su parte, Rajoy se quedó en el cercano 3,2. En enero de 2010, las puntuaciones eran algo mejores para ambos, con el 3,9 para Zapatero y el 3,5 para Rajoy. En el caso de Zapatero, en enero de 2009 incluso había obtenido mejor nota, con un 4,5; Rajoy se quedaba en el 3,5. Por lo que se refiere a 2008, según datos de abril, Zapatero obtuvo una valoración de 5,5 y Rajoy, de 4,2. En el año anterior, en enero de 2007, la puntuación obtenida por el líder socialista fue de 4,9 y la del popular fue de 3,6. Por lo que se refiere al año 2006, según datos de enero, las puntuaciones fueron ligeramente mejores que las de 2007, con un 5 para Zapatero y un 4,1 para Rajoy. Ese es el último año en el que se aprecia el aprobado de un líder político en cuanto a la valoración ciudadana, durante el periodo de análisis. Zapatero también aprobó en 2005, con una puntuación de 5,7 y Rajoy obtuvo un 4,5. En 2004, según datos de abril, Zapatero había obtenido un 6,6 y Rajoy un 4,8. En enero de 2003, Zapatero obtuvo un 5,1 y el líder del Partido Popular en ese momento, José María Aznar, obtuvo un 4,6. En enero de 2002, los líderes de los principales partidos aprobaron en la valoración ciudadana: Zapatero con un 5,3 y Aznar con un 5,6. De la misma forma, en enero de 2001, Zapatero obtuvo un 5,5 y Aznar un 5,1. En cambio, en el año 2000, según datos de enero, en que el líder socialista era Joaquín Almunia, no llegó al aprobado,

con un 4,7. Por lo que se refiere a Aznar, obtuvo la misma puntuación media que en 2001, un 5,1.

Según los datos anteriores, se puede observar que la valoración de los principales líderes políticos es menor cuanto más se acercan los datos a la actualidad. Por lo que se refiere a los líderes conservadores, solo Aznar consigue aprobar y lo hace en tres años consecutivos: 2000, 2001 y 2002, con puntuaciones alrededor del 5. De esos tres años, en dos ocasiones el líder socialista, Zapatero, obtiene también el aprobado, en 2001 y 2002, con 5,5 y 5,3. Es, precisamente, Zapatero, el único líder socialista que obtiene el aprobado e, incluso, lo supera en una ocasión, durante seis años consecutivos en todo el periodo de análisis. Entre 2001 y 2006, Zapatero obtiene puntuaciones alrededor del 5, con la máxima de 6,6 en 2004. Sin embargo, a partir de 2006, las puntuaciones para los socialistas empiezan a bajar. De ello se desprende que la valoración política que hacen los ciudadanos de los dos principales líderes tiende a empeorar, pero es en los socialistas donde se acusa más el cambio, puesto que Zapatero había mantenido una mayor constancia de aprobados en la valoración ciudadana.

En todo caso, durante la mayor parte del periodo de análisis, los líderes de los principales partidos políticos no consiguen llegar al aprobado, lo que, entre muchos factores de valoración subjetiva ciudadana, incluye también la credibilidad que proyectan.

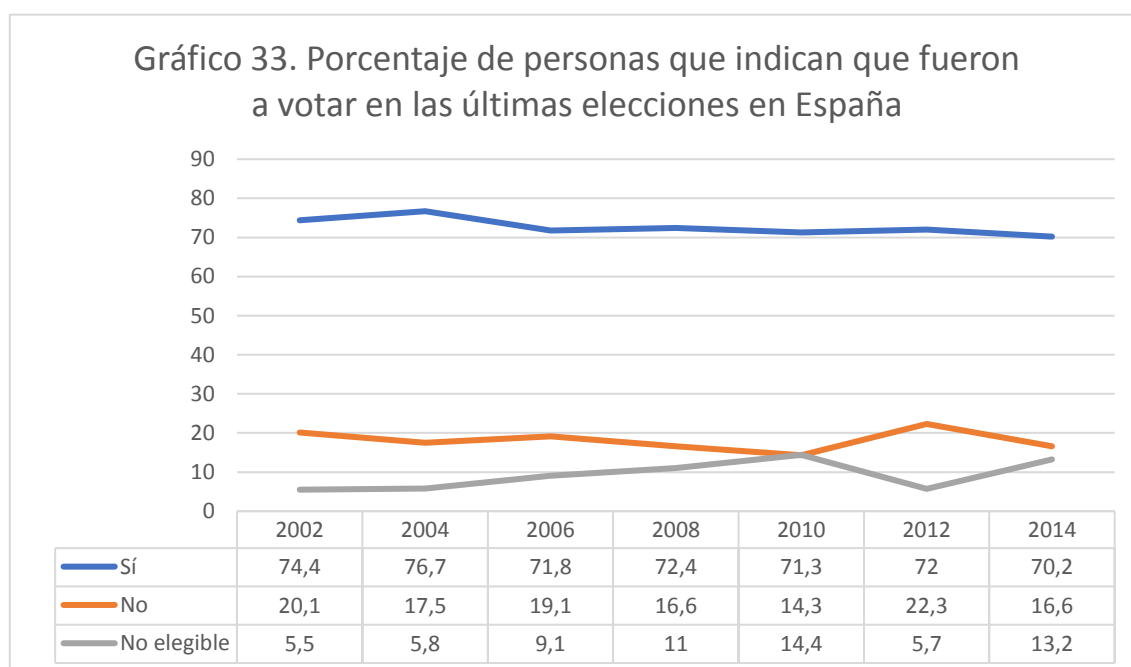
5.8. Abstencionismo

La abstención, es decir, la falta de participación en el sufragio, fue ya señalada en el origen del concepto de representación política como un potencial problema para el funcionamiento de la democracia, como anteriormente se ha señalado. Como se ha visto también, el abstencionismo puede ser activo o pasivo y puede depender de muchos factores. En todo caso, por lo que se refiere a las elecciones generales en España, en comparación con otras citas electorales, son las que más interés despiertan entre la ciudadanía a la luz de las cifras de participación.

Así, entre los años 2000 y 2017 ha habido en España seis comicios de ámbito general, que han tenido lugar en los años 2000, 2004, 2008, 2011, 2015 y 2016. Durante el periodo de análisis, el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones en dos ocasiones.

Según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea sobre las personas que indican que fueron a votar en las últimas elecciones en España, que pueden verse en el gráfico 33, la mayoría de la ciudadanía indica que acude a votar.

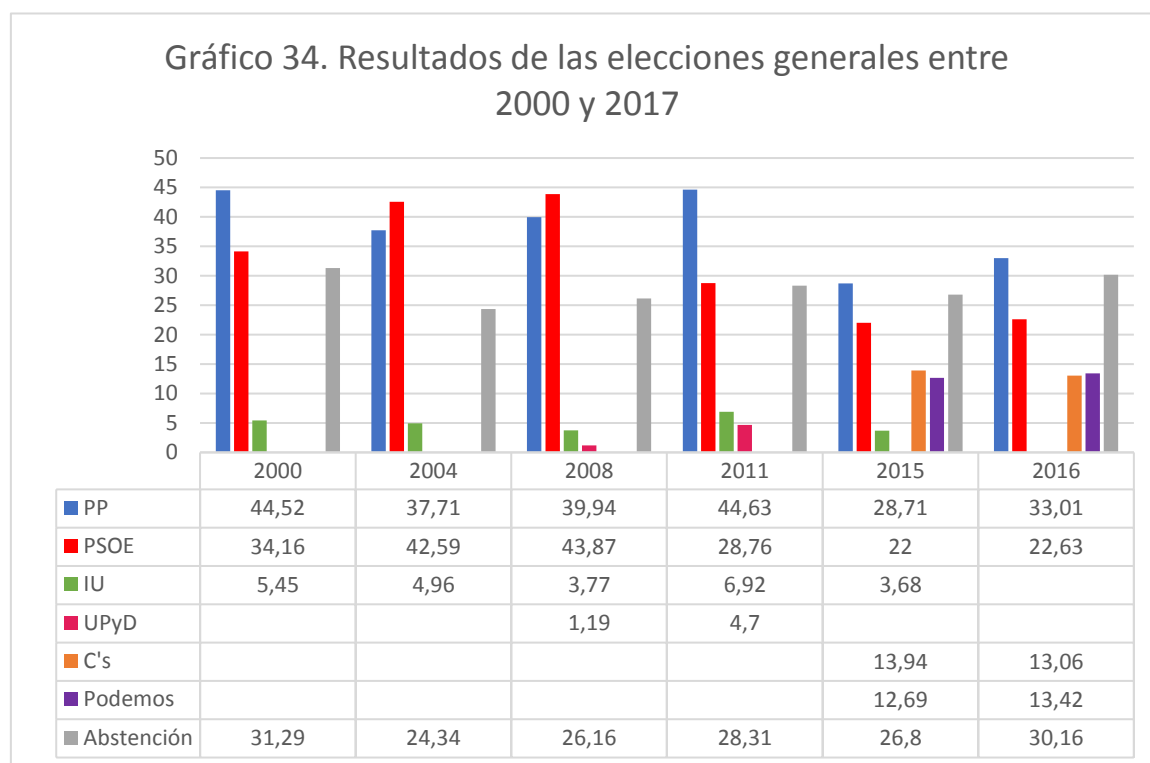
En el año 2002, el 74% de los encuestados indicó que había ido a votar en las últimas elecciones, mientras que el 20% dijo que no había acudido a la cita electoral. En el año 2004, fue el 76% de los preguntados el que dijo que sí había ido a votar y el 17% dijo que no. Similarmente, en las oleadas siguientes, en 2006, el 71% dijo que había participado en las últimas elecciones; en 2008, fue el 72%; en 2010, el 71%; en 2012, el 72%; y, en 2014, el 70%. Ello se contrapone con los datos reales de participación en las elecciones, que se sitúan en el 68% en el año 2000; en el 75% en 2004; en el 73% en 2008; en el 68% en 2011; en el 69% en 2015; y, en el 66% en 2016, según datos del Ministerio de Interior. Por lo que se refiere a los encuestados que indicaron que no habían participado en las últimas elecciones, tal y como indica la Encuesta Social Europea, en 2006, era el 19% el grupo que decía que no había ido a votar; en 2008, fue el 16%; en 2010, el 14%; en 2012, el 22%; y, en 2014, el 16%.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Tal y como se puede ver en el gráfico 34, a lo largo del periodo de análisis, la abstención en las distintas citas electorales generales se ha movido entre el 24% y el 30%, aproximadamente. Ello contrasta con los datos anteriores, en tanto que el porcentaje real de abstención resulta mayor que los datos de encuesta que indicaban los porcentajes de los encuestados que no habían ido a votar. Concretamente, en el año 2000, la abstención se situó en el 31%. En las siguientes elecciones, las de 2004, la abstención disminuyó hasta el 24%, pero volvió a subir en los comicios de 2008, en los que alcanzó el 26% y las de 2011, con el 28%. En las generales de 2015, la abstención se volvió a situar en el 26%, pero siguió aumentando en 2016, con el 30%. De este

modo, la tendencia general del abstencionismo en las elecciones generales a lo largo del periodo de análisis, entre el año 2000 y el 2017, es de estabilidad, ya que no se presentan grandes alteraciones.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Interior español. En el año 2016, IU se presentó en la coalición Unidos Podemos, por eso sus resultados están incluidos en los del partido morado.

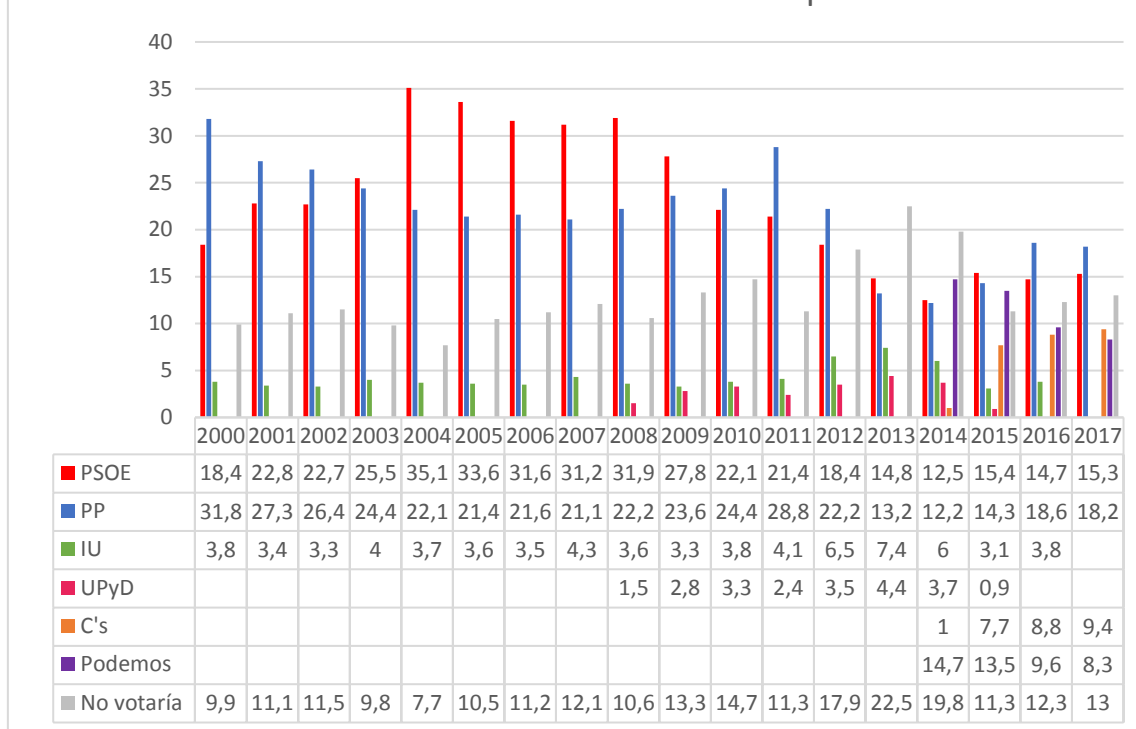
En el gráfico 34 pueden observarse también los resultados electorales obtenidos por los partidos con representación estatal durante el periodo de análisis. En el año 2000, una de las citas electorales con más abstención (31%) ganó el Partido Popular con el 44% de los sufragios. Entonces, el Partido Socialista obtuvo el 34% del apoyo popular e Izquierda Unida (IU), el 5%. En el año 2004, cuando la abstención fue la menor de todo el periodo (24%), obtuvo la victoria el PSOE, con el 42% de los votos y el PP cosechó el 37% del apoyo. IU se mantuvo en el 4,9%. En las elecciones siguientes, las de 2008, en las que la abstención subió ligeramente (26%), el PSOE revalidó el triunfo con el 43% del sufragio. Por su parte, el PP convenció al 39,9% del electorado e IU al 3%. En ese año, apareció un partido nuevo, Unión Progreso y Democracia (UPyD), que demostró tener escaso apoyo, con un 1%, y un recorrido breve. De hecho, en las elecciones de 2011, el partido magenta consiguió el 4% de los apoyos y ya no se volvió a presentar.

En las elecciones del año 2011, que tuvieron una de las abstenciones más abultadas del periodo (28%), ganó el Partido Popular, con el 44% de los sufragios. El PSOE, que había estado en el gobierno desde 2004, fue votado por el 28% del electorado. IU consiguió el 6,9% de los apoyos electorales. En las siguientes elecciones, que tuvieron lugar en el año 2015, la abstención se situó otra vez en el 26%, como cuando en 2008 se revalidó la victoria socialista, solo que, en este caso, el color político había cambiado, y era el PP el que renovaba su mandato. Eso sí, ambos partidos sufrieron la pérdida de apoyos electorales. De hecho, las elecciones de 2015 parecían amenazar la tendencia bipartidista que había caracterizado a las elecciones generales desde la recuperación de las libertades. En ese año, el PP revalidó su mandato, pero con el 28% del apoyo electoral. El PSOE consiguió el 22% de los sufragios e IU, el 3%. La gran novedad del sistema de partidos fue la aparición a nivel estatal del partido político de origen catalán, Ciudadanos (C's), y de Podemos. Así, las dos formaciones políticas más jóvenes quedaron prácticamente empatadas. Por su parte, C's obtuvo el 13,9% del apoyo popular y Podemos consiguió el 12%. Al año siguiente, en 2016, hubo elecciones generales de nuevo y los resultados fueron ligeramente mejores para el Partido Popular, que volvió a ganar las elecciones con una abstención del 30%.

En los comicios de 2016, el PP obtuvo el 33% de los apoyos. El PSOE se mantuvo en el 22%, de forma que se aprecia una caída de alrededor de veinte puntos con respecto a los mejores resultados socialistas del periodo, los que le permitieron ganar las elecciones de 2004 y 2008. Por su parte, C's y Unidos Podemos, la coalición que integró a la formación morada y a IU, obtuvieron el 13% del apoyo electoral, respectivamente.

Respecto al promedio anual sobre la intención de voto, obtenido a partir de datos del CIS que se pueden observar en el gráfico 35, la intención de votar tanto al PSOE como al PP tiende a caer en todo el periodo de análisis, al mismo tiempo que la opción de “no votaría” tiende a aumentar.

Gráfico 35. Intención de voto en España



Fuente: elaboración propia a partir de datos del CIS.

El periodo de análisis empieza con más encuestados que indican que votarían al Partido Popular, en lugar de al Partido Socialista. Sin embargo, a partir del año 2003 y hasta el 2009, predominan los encuestados que dicen que votarían al PSOE. En el año 2000, el 31% de los encuestados aseguraba que votaría al PP, en 2001 era el 27% y en 2002, el 26%. Los datos para el PSOE en esos años eran del 18% para el año 2000, y del 22% para 2001 y 2002, respectivamente. En el año 2003, el número de encuestados que decía que votaría socialista superó ligeramente al de los que aseguraron que votarían popular, con el 25% para el PSOE y el 24% para el PP. A partir de entonces, el Partido Socialista experimenta las mayores cotas de intención de voto, con valores en torno al 30%.

En 2004, el 35% de las personas preguntadas dice que votaría al PSOE, frente al 22% que asegura que lo haría por el PP. En 2005, el 33% dice que optaría por el PSOE y el 21% por el PP; en 2006, el 31% elegiría al PSOE y el 21% al PP; en 2007, el 31% seguiría optando por los socialistas y el 22% por los populares; en 2008, el PSOE se mantiene en el 31% y el PP sube ligeramente en intención de voto, con el 22% de los encuestados; y, en 2009, disminuye el apoyo al PSOE con el 27% y aumenta ligeramente el apoyo al PP, con el 23%. Desde ese momento, la intención de voto al PSOE decae y, aunque se recupere ligeramente en algunos años, no vuelve a cifras como las del inicio del periodo de análisis.

En el año 2010, el 22% de los preguntados dice que votaría al PSOE, frente al 24% que asegura que lo haría por el PP; en 2011, el 21% aseguraba que votaría socialista y el 28% que optaría por la opción conservadora, de manera que ésta experimenta una subida. En los años siguientes, sin embargo, la intención de voto a los dos grandes partidos se asemeja.

En el año 2012, el 18% optaría por el PSOE, mientras que el 22% preferiría al PP; en 2013, se da casi un empate, con el 14% de los encuestados que votaría socialista y el 13%, que votaría al PP. Al año siguiente, en 2014, el 12% de los encuestados apostaría por el PSOE y por el PP, respectivamente, de forma que es el peor dato en intención de voto para los dos grandes partidos de todo el periodo de análisis. Al mismo tiempo, el 14% de los preguntados dice que votaría a Podemos. En los años siguientes se da una ligera recuperación en la intención de voto al PSOE y al PP, pero también aparecen en escena nuevos partidos que se salen de la marginalidad en lo que a intención de voto se refiere.

En 2015, el 15% de los encuestados asegura que votaría al PSOE y el 14%, al PP. El siguiente partido en intención de voto, con el 13% de los preguntados, es Podemos. En el año siguiente, 2016, el 14% de los encuestados optaría por el PSOE, mientras que el 18% lo haría por el PP y el 9%, por Podemos. Sin embargo, en ese año, Ciudadanos se acerca a Podemos, con el 8% de encuestados que aseguran que lo votarían. Este partido empezó en 2014 con el 1% en intención de voto y llegó a su máximo en 2017, con el 9%. Por lo que se refiere a 2017, el 15% dice que votaría al PSOE y el 18% al PP, mientras que el 8% lo haría por Podemos.

En referencia a los partidos de ámbito estatal minoritarios, se encuentra Izquierda Unida, que se mueve a lo largo de todo el periodo de análisis con valores que van entre el 3% y el 7% en intención de voto; y, Unión, Progreso y Democracia, que cosecha entre 2008 y 2015, una intención de voto que oscila entre el 1% y el 4%. Así, aunque hacia el fin del periodo de análisis han aparecido nuevos partidos que podrían desafiar al bipartidismo tradicional, todavía la intención de voto más elevada —aunque tienda a caer— es para el PSOE y para el PP.

Del gráfico 35 destaca también el porcentaje de personas preguntadas que no irían a votar, lo que puede relacionarse con la abstención activa, puesto que se trataría de la decisión premeditada de no participar en los comicios electorales. La tendencia tomando todo el periodo de análisis es hacia el aumento de la abstención.

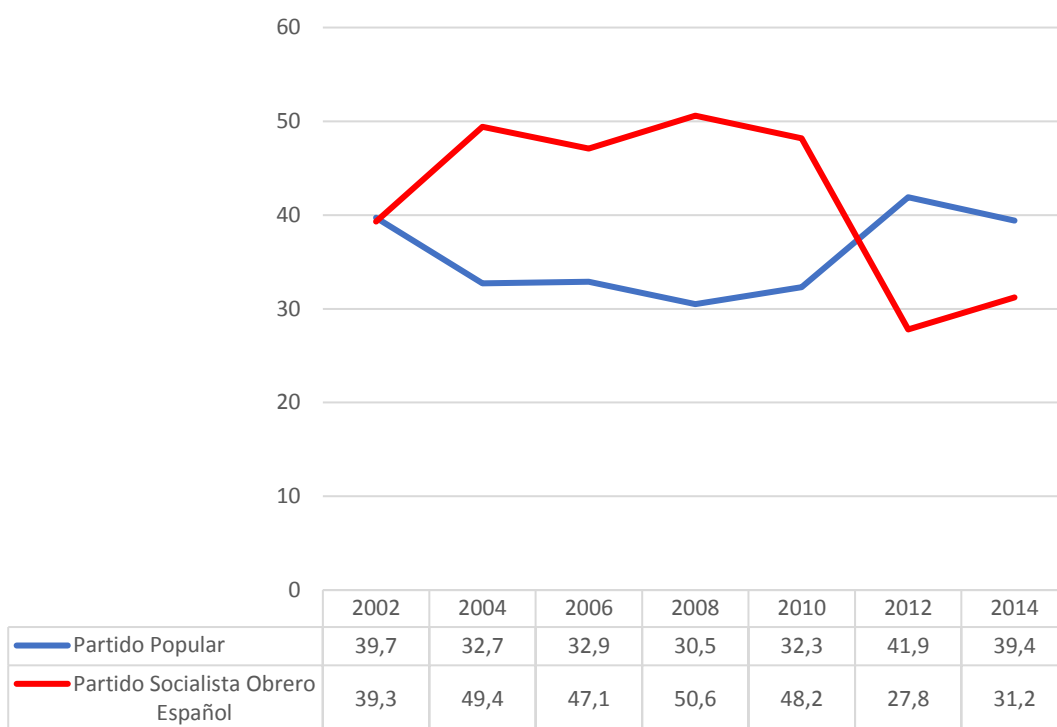
El año en que más encuestados indican que no irían a votar es 2013, con el 22%, seguido de 2014 con el 19%. El periodo de análisis, sin embargo, se inicia con valores alrededor del 10%. En el año 2000, el 9,9% de los encuestados asegura que no acudiría a votar, mientras que en 2001 y 2002 es el 11% el que lo asegura. De forma similar, en 2003 es el 9,8% de los encuestados el

que dice que se abstendría. Esa cifra cae al 7% en 2004, pero aumenta al 10%, 11% y 12% en 2005, 2006 y 2007. Para el año siguiente, 2008, se vuelve al 10% de los encuestados que dice que no votaría y, desde entonces, se observa el aumento de esa cifra. En el año 2009, es el 13% de los encuestados el que asegura que no votaría y en 2010 es el 14%. Sin embargo, en 2011 es el 11%. El porcentaje sube al 17,9% en 2012, para llegar a sus máximos en 2012 y 2013, con el 22% y el 19%, y vuelve a caer en los años siguientes. En 2015, el 11% de los encuestados asegura que no votaría, mientras que en 2016 es el 12% y en 2017 el 13%. Solo en los años 2013 y 2014 la intención de no ir a votar supera a la voluntad de votar por los viejos o los nuevos partidos de ámbito estatal en el periodo de análisis.

La tendencia bipartidista del sistema político español puede verse también en el gráfico 36 que reúne datos de la Encuesta Social Europea sobre los principales partidos votados en las últimas elecciones. De la misma forma, se aprecia también que los encuestados tienden a mostrar más apoyo al PSOE, aunque ese apoyo cae en el año 2012.

En el año 2002, se produjo un empate entre los encuestados que aseguraban haber votado al PP y los que decían haber votado al PSOE, con el 39%, respectivamente, según los datos de la Encuesta Social Europea. En el año 2004, el 49% de los encuestados aseguró haber votado al PSOE y el 32% al PP. Los porcentajes se mantuvieron similares en 2006, con el 47% de los preguntados que decía haber votado al grupo socialista y el 32% al PP; en 2008, con el 50% que decía haber votado al PSOE y el 30% al PP; y, en 2010, con el 48%, de apoyo al PSOE y el 32% al PP. En cambio, en el año 2012, el porcentaje de los encuestados que decía haber votado socialista cayó al 27% y el de apoyo al PP aumentó hasta el 41%. En 2014, el 31% de los encuestados dijo haber votado al PSOE y el 39%, al PP.

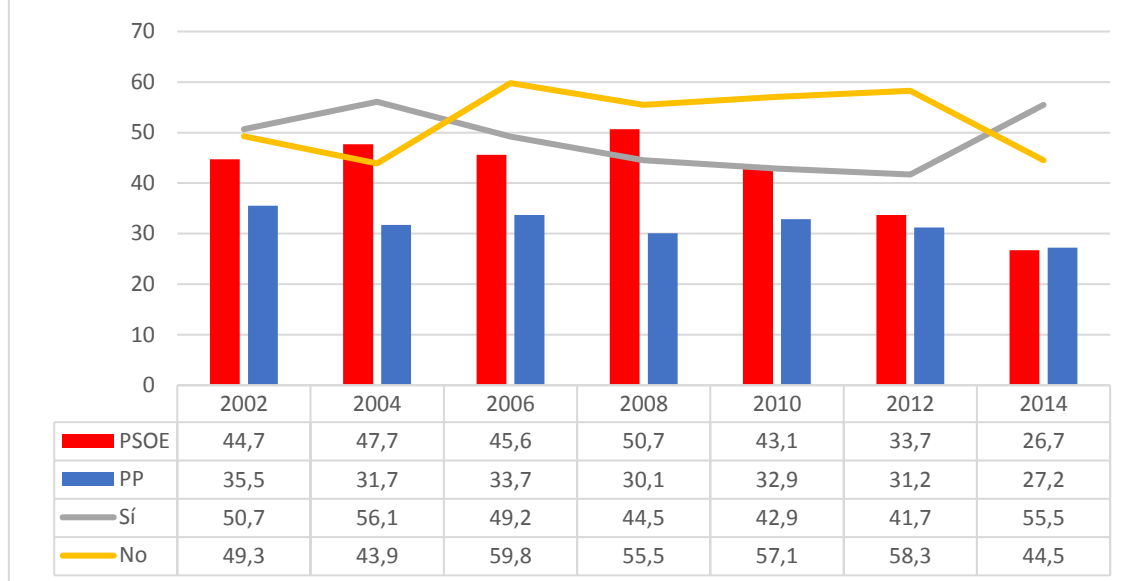
Gráfico 36. Principales partidos votados en las últimas elecciones estatales en España



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

De la misma forma, según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, hay más encuestados que dicen sentirse más cercanos al PSOE que al PP, como puede verse en el gráfico 37, aunque la cercanía con el Partido Socialista disminuye a partir de 2010.

Gráfico 37. Cercanía a un partido en particular y a qué partido en España



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Según los datos de la Encuesta Social Europea, se puede ver que, en el año 2002, el 50% de los encuestados decía sentir más simpatía por un partido en particular, mientras que el 49% de las personas preguntadas afirmaba no sentir más simpatía por ningún partido en particular. Del mismo modo, el 44% de los encuestados decía sentirse más cercano al PSOE, frente al 35% que afirmaba sentirse más cercano al PP. En la siguiente oleada, en 2004, aumentó el porcentaje de los que decían experimentar una mayor simpatía por un partido en particular, con el 56%. En cambio, los que decían no sentir ninguna simpatía en particular eran el 43%, un porcentaje menor que en el año 2002. En 2004 también aumentó el porcentaje de simpatía hacia el PSOE, con el 47%, al tiempo que disminuyó la simpatía hacia el PP, con el 31%. Por el contrario, en 2006 se invirtió esa tendencia.

Así, el porcentaje de encuestados que decía sentirse más cercano a un partido pasó a ser menos de la mitad, con el 49%, mientras que el 59% decía no sentir más cercanía por ningún partido. En ese año, también disminuyó la cercanía al Partido Socialista, con el 45% de los encuestados, y aumentó la simpatía por el Partido Popular, con el 33% de los preguntados. En 2008, siguió cayendo el porcentaje de los que decían sentir una simpatía en particular, con el 44%, frente al 55% de los encuestados que afirmaba no sentir ninguna simpatía en particular; pero, subió el porcentaje de los que decían sentirse más cercanos al PSOE, con el 50%, y disminuyó el de los que aseguraban estar más cercanos del PP, con el 30%. En la siguiente oleada, correspondiente

al año 2010, cayó de nuevo el porcentaje de los que decían sentir más simpatía por un partido en particular, con el 42% de los encuestados, frente al 57% que aseguraba que no. En ese año volvió a caer la simpatía manifestada por el PSOE, con el 43% y aumentó ligeramente la simpatía por el PP, con el 32,9% de los preguntados. A partir de entonces, la simpatía que despertaba el Partido Socialista cae hasta el 33% de los encuestados en 2012 y el 26% en 2014. Similarmente, cae también la simpatía hacia el Partido Popular, pero no de una forma tan acusada, ya que en 2012 el 31% de los encuestados dice sentirse más cercano al PP y el 27% de los preguntados lo dice en el año 2014. Por lo que se refiere al porcentaje de encuestados que dicen mostrar más simpatía o no mostrar ninguna simpatía en particular, se ve que los que muestran simpatía disminuyen ligeramente, con el 41% y los que no la muestran, con el 58%, aumentan ligeramente. En el año 2014, en cambio, el 55% de los encuestados afirmaba sentir más simpatía por un partido en particular y el 44% de las personas preguntadas negaba tener una simpatía en particular.

5.9. Problemas y resultados electorales

A lo largo del periodo de análisis, entre los años 2000 y 2017, ha habido en España seis elecciones generales, cuyos resultados pueden verse en el gráfico 34. Así, ha habido cita electoral en los años 2000, 2004, 2008, 2011, 2015 y 2016. Durante este tiempo se puede apreciar la distinta incidencia de los problemas relacionados con la representación política, así como los diferentes resultados electorales obtenidos por los partidos, y, en especial, por el PSOE.

En lo que se refiere al descontento político, puede verse que, en el año 2000, según datos del Eurobarómetro, la suma de los que estaban muy satisfechos y bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia eran el 72,6%, mientras que los que estaban no muy satisfechos y nada satisfechos, eran el 25%. En cuanto a la confianza en el parlamento nacional, se pone de manifiesto que, en el año 2000, el 57% de los encuestados, según el Eurobarómetro, tendían a confiar, en contra del 34% que tendía a no confiar. Para los partidos políticos, en cambio, la tendencia era a no confiar en el año 2000. El 27,9% de los encuestados afirmaba confiar en los partidos políticos y el 69% decía no confiar. Para ese año, el indicador de confianza política del CIS era de 53, el más alto de todo el periodo de análisis. Según los datos disponibles para el año 2000, España tenía una puntuación de 70 y se situaba en el puesto 20 del ranking sobre percepción de la corrupción. En ese año, la abstención llegó al 31%, el valor más alto de todo el periodo de análisis. Además, en esas elecciones, el PP obtuvo el 44% de los apoyos

electorales, el PSOE el 34% e IU consiguió el 5%. Sin embargo, la intención de voto recogida por el CIS mostraba un 18% para el PSOE, un 31% para el PP y un 3% para IU.

Según los datos disponibles para el año 2004, en referencia al descontento político, se puede observar que el 73% de los encuestados estaban muy y bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España, mientras que los no muy satisfechos y los nada satisfechos sumaban el 24%, unos porcentajes similares a los del año 2000, según datos del Eurobarómetro. Según la Encuesta Social Europea, las posiciones más cercanas a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (del 6 al extremadamente satisfecho) sumaban el 62,8% de los encuestados, mientras que las posiciones más cercanas a la insatisfacción (de los extremadamente insatisfechos a la 4) sumaban el 17,3% de las personas preguntadas. Además, el 20% de los encuestados se situaba en la posición 5.

En lo referente a la satisfacción con el funcionamiento del gobierno, según la Encuesta Social Europea para 2004, se observa que la suma de las posiciones más cercanas a la satisfacción (de la 6 a la de extremadamente satisfecho) era del 41,3%, mientras que la suma de las posiciones más cercanas a la insatisfacción (de la extremadamente insatisfecho a la 4) era del 31%. En ese año, el 27,7% de los encuestados se posicionaba en el 5.

Sobre el problema del alejamiento entre los representados y los representantes, se puede observar que, en el año 2004, el 26,4% de los encuestados creía que nunca y raramente la política era demasiado complicada de entender. En cambio, el 43,6% de las personas preguntadas consideraba que la política es regularmente y frecuentemente demasiado complicada de entender. Además, el 30% de los encuestados pensaba que la política era ocasionalmente demasiado difícil de entender.

Por lo que se refiere a la desconfianza política, en 2004, el 47,9% de los encuestados por el Eurobarómetro tendía a confiar en el Parlamento nacional y el 42% a no hacerlo. En el mismo sentido, según la Encuesta Social Europea, los encuestados que se situaban en posiciones cercanas a la confianza (entre la 6 y la de confianza plena) en el parlamento nacional, sumaban el 42,8%, mientras las posiciones más cercanas a la desconfianza (de la 4 a la de ninguna confianza) sumaban el 29,7%. En la posición intermedia, de 5, se situaba el 27,3% de los encuestados.

En cuanto a la confianza en los políticos, según datos de la Encuesta Social Europea para 2004, las posiciones tendentes a la desconfianza sumaban el 57%, las que tendían a la confianza sumaban el 19,5% y los encuestados que se posicionaban en el 5, una posición intermedia, eran el 23,6%. En la misma línea, según datos del Eurobarómetro, el 65% de las personas preguntadas

tendía a no confiar en los partidos políticos y el 27% decía que sí lo hacía. Según la Encuesta Social Europea, la suma de las posiciones tendentes a la desconfianza (de la 4 a la de ninguna confianza) hacia los partidos políticos era del 57,3%. En cambio, las posiciones tendentes a la confianza (de la 6 a la de confianza plena) sumaban el 20% de los preguntados. Los encuestados que se situaban en una posición intermedia eran el 22%. Por lo que se refiere a la confianza en el gobierno, según el Eurobarómetro, en 2004, el 51% de los encuestados tendían a confiar, frente al 41%, que decía que no confiaba. Además, el indicador de confianza política del CIS se situó en 53,3, uno de los valores más altos del periodo, junto con el del año 2000 (53,5).

Sobre el problema de la desafección, se puede observar que, en el año 2004, los muy interesados y los bastante interesados en la política eran el 28,8% de los encuestados y los que se mostraban poco y nada interesados sumaban el 71,3% de las personas preguntadas. En cuanto a la toma de conciencia sobre asuntos políticos en España, según datos de la Encuesta Social Europea, los encuestados que la consideran muy difícil y difícil eran el 42,5% y los que la consideraban fácil o muy fácil eran el 32,1%. Además, el 25,5% de los encuestados no la consideraban ni fácil ni difícil.

Por lo que se refiere al problema de la percepción de la corrupción, España ocupaba en 2004 el puesto 23 de la clasificación de Transparency, con 69 puntos. Además, según datos del CIS, la corrupción y el fraude no eran un problema para la ciudadanía, ya que solo preocupaba al 0,6 de los encuestados.

En el año 2004, según la Encuesta Social Europea, las personas que indicaron que fueron a votar eran el 76,7% de los encuestados, mientras los que dijeron que no habían acudido eran el 17,5%. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Interior, la abstención fue del 24%, la más baja del periodo de análisis, y la participación se situó en el 75,6%. En cuanto a la intención de voto, según el CIS, se aprecia que el 35% de los encuestados indicaba que votaría al PSOE, el 22% al PP y el 3,7% a IU en 2004. Según la Encuesta Social Europea, los que decían haber votado al PSOE eran el 49% de los encuestados, mientras que el 32% decía haber optado por el PP en las últimas elecciones. Las elecciones de 2004 las ganó el PSOE con el 42% de los votos, frente al PP, que obtuvo el 37% e IU, que se quedó con el 4,9% de los apoyos electorales. Asimismo, en 2004, el 56% de los preguntados por la Encuesta Social Europea afirmaba sentirse más cercano a un partido en particular, mientras que el 43% decía que no. La mayor parte de la cercanía, además, se la llevaba el PSOE, con el 47,7% de los encuestados, frente a los que decían sentirse más cercanos al PP, con el 31,7% de las personas preguntadas.

Las siguientes elecciones generales se produjeron en España en el año 2008. Según los datos disponibles con respecto al descontento político, se pone de manifiesto que, tal y como recoge

la Encuesta Social Europea, las posiciones más cercanas a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia (de la 6 a la de extremadamente satisfecho) agrupaban al 55,4% de los encuestados, mientras que las posiciones cercanas a la insatisfacción (de la 4 a la de extremadamente insatisfecho) reunían al 23%. De la misma forma, el 21,6% de las personas preguntadas se situaba en la posición intermedia de 5. Con respecto a la satisfacción con el funcionamiento del gobierno, se puede observar que las posiciones más cercanas a la satisfacción representaban al 23,5% y las más cercanas a la insatisfacción, al 53,2%. El 23,5% se posicionaba en el grado 5.

En lo referente al alejamiento entre representados y representantes, se observa que los encuestados que consideraban en 2008 que la política era demasiado complicada de entender nunca y raramente eran el 24,2%. En cambio, los que creían que lo era regularmente y frecuentemente eran el 39,5%. Además, el 36,5% de las personas preguntadas consideraba que la política era demasiado complicada de entender ocasionalmente. En cuanto a la problemática de la oligarquización, de los datos disponibles del CIS se ve que el 62% de los encuestados consideraban que el voto es la única forma de influir en el gobierno que tiene la ciudadanía, frente al 23% que consideraba que no. A la vez, el 66,9% de los encuestados consideraba que la política tiene una gran influencia en la vida de las personas, frente al 15%, que pensaba que no y el 10%, que se mostraba indiferente.

Sobre la desconfianza política, se pone de manifiesto que, en el año 2008, eran más los encuestados que tendían a no confiar en el parlamento nacional (47%) frente a los que sí confiaban (39%), algo que no había pasado en las elecciones anteriores del periodo de análisis, según datos del Eurobarómetro. De las cifras de la Encuesta Social Europea, en cambio, se ve que las posiciones más cercanas a la desconfianza (de la 4 a la de ninguna confianza) hacia el parlamento nacional sumaban el 33,9% de los encuestados, mientras que las más cercanas a la confianza (de la 6 a la de confianza plena) sumaban el 41%. De la misma manera, el 25,1% de las personas preguntadas se situaba en la posición 5. Por lo que se refiere a la confianza en los políticos, las posiciones más cercanas a la desconfianza sumaban el 65,1% y las más tendentes a la confianza, el 15,7% de los encuestados. Además, el 19,3% se ubicaba en la posición 5. Similarmente, según el Eurobarómetro, el 64% de los preguntados tendían a no confiar en los partidos políticos, frente al 30% que tendía a confiar. Según los datos de la Encuesta Social Europea, las posiciones de desconfianza hacia los partidos políticos sumaban al 66,1% de los encuestados; las posiciones de confianza sumaban al 15% de los preguntados; y, el 19% se posicionaba en el grado 5. En cuanto a la confianza en el gobierno nacional, se observa que, según el Eurobarómetro, el 48% de los encuestados tendía a no confiar, frente al 44%, que sí

decía confiar. En 2008, el indicador de confianza del CIS era de 43,6, momento a partir del cual empezó a decaer.

En cuanto a la desafección política, se pone de manifiesto que los muy interesados y los bastante interesados en la política eran en 2008 el 26,3% de los encuestados y los poco y nada interesados eran el 73,7% de los preguntados. De la misma forma, los que consideraban que la política era muy difícil y difícil de entender sumaban el 44% de las personas encuestadas, los que la consideraban fácil o muy fácil de entender eran el 24,4% y los que pensaban que no era ni fácil ni difícil eran el 31,6%.

Por lo que se refiere a la percepción de la corrupción, según Transparency, España ocupó el puesto 28 con 60 puntos. Además, según el CIS, todavía no era un problema a juzgar por la opinión ciudadana, ya que solo el 0,7% de los encuestados se mostraba preocupado por la corrupción y el fraude.

En el año 2008, según la Encuesta Social Europea, el 72,4% de los encuestados indicó que fue a votar, frente al 16,6% que indicó que no participó en los comicios. Sin embargo, según datos del Ministerio de Interior, la abstención fue del 26% y la participación del 73%. En ese año, el 31,9% de los encuestados por el CIS indicó que votaría al PSOE, el 22% al PP, el 3,6% a IU y el 1,5% a UPyD. Según la Encuesta Social Europea, el 50% de los encuestados aseguró que había votado al Partido Socialista y el 30% al Partido Popular. En efecto, el PSOE ganó las elecciones con el 43% de los apoyos, frente al 39% del apoyo que obtuvo el PP, el 3% de IU y el 1% de UPyD.

En cuanto a la cercanía que suscitaban los dos principales partidos, se pone de manifiesto que el 44% de los encuestados decía sentirse más cercano a un partido en particular, frente al 55% que decía que no, según la Encuesta Social Europea. Además, el 50% de los encuestados se mostraba más cercano al PSOE y el 30%, al PP.

En el año 2011, cuando se produjeron las siguientes elecciones, la percepción de los distintos problemas relacionados con la representación política era, en general, peor en comparación con la percepción que se daba en los años de las elecciones anteriores en el periodo de análisis, según los datos disponibles.

Así, en cuanto al descontento político, se observa que los muy satisfechos y bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia, según el Eurobarómetro, sumaban el 44% de los encuestados. En cambio, los no muy satisfechos y los nada satisfechos eran el 52,9% de los encuestados. Por lo que se refiere a la confianza en el parlamento, se pone de manifiesto que el 74% de los preguntados tendía a no confiar, frente al 18%, que sí confiaba. En cuanto a los

partidos políticos, el 84% de los preguntados decía no confiar en ellos, mientras que el 11,9% decía que sí. De la misma forma, el 79,9% de las personas preguntadas tendía a no confiar en el gobierno nacional español y el 16% tendía a confiar. En el año 2011, el indicador de confianza política del CIS se situaba en el 35,9, uno de los más bajos del periodo de análisis.

Por lo que se refiere a la percepción de la corrupción, España se situaba en el puesto 31 del índice de Transparency. Además, según el CIS, la corrupción y el fraude preocupaba al 5,1% de los encuestados, momento a partir del cual empezó a preocupar a un mayor número de preguntados.

Según el CIS, en el año 2011, el 21% de los encuestados aseguraba que votaría al PSOE; el 28%, al PP; el 4%, a IU; y, el 2,4% a UPyD. Además, el 11% aseguraba que no iría a votar. En ese año, las elecciones las ganó el Partido Popular con el 44% del apoyo electoral, frente al 28% que obtuvo el Partido Socialista, según los datos del Ministerio de Interior. IU obtuvo el 6,9% de los apoyos y el 4% optó por UPyD. La abstención fue del 28% y la participación se situó en el 68%.

Por lo que se refiere a los datos correspondientes a los años de las últimas elecciones del periodo de análisis, que tuvieron lugar en 2015 y 2016, se observan rasgos similares entre ellos.

En cuanto al descontento político, se puede ver que, en el año 2015, los muy satisfechos y los bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia sumaban el 36% de los encuestados, y los no muy satisfechos y nada satisfechos eran el 60%. En 2016, el 38% de los encuestados se mostraba muy satisfecho y bastante satisfecho, y el 59% de los preguntados se decía no muy satisfecho y nada satisfecho, según el Eurobarómetro.

Sobre el problema de la desconfianza política, se pone de manifiesto que, en 2015, el 11% de los encuestados tendía a confiar en el parlamento nacional, mientras que el 79%, tendía a no confiar. En 2016, era el 17% el que confiaba y el 76% el que no lo hacía, tal y como se desprende del Eurobarómetro. Del mismo modo, en 2015, el 7% de los preguntados confiaba en los partidos políticos y el 86% no lo hacía; en 2016, el 9% decía confiar en ellos y el 87% decía no hacerlo. Por lo que se refiere al gobierno, en 2015, el 13% de los encuestados tendía a confiar y el 80% tendía a no confiar en él. En 2016, el 19% de los preguntados afirmaba confiar en el gobierno nacional, frente al 77% que decía no hacerlo. En el año 2015, el indicador de confianza política del CIS era de 38 y en 2016 cayó hasta 33,5.

En referencia a la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía, en 2015 España obtuvo 58 puntos en el índice de Transparency, y, en 2016, el país quedó en el puesto 41, el peor de toda la historia del índice. Según el CIS, en 2015, la corrupción y el fraude eran la primera

preocupación para el 45,7% de los encuestados y en 2016, preocupaban al 41,9% de las personas preguntadas.

En el año 2015, según el CIS, el 15% de los encuestados aseguraba que votaría al PSOE; el 14%, al PP; y, el 3% a IU. La novedad fue la aparición de Podemos, al que el 13% de encuestados aseguraba que votaría y de Ciudadanos, con una intención de voto del 7%. En el año 2016, el 14% de los preguntados decía que votaría al PSOE, mientras el 18% aseguraba que lo haría por el PP. Izquierda Unida tenía una intención de voto del 3,8%. En ese momento, el 7,7% de los encuestados apostaba por Ciudadanos y el 9,6% por Podemos. Además, en 2015, el 11% dijo que no votaría y, en 2016, era el 12% el que aseguraba que no iría a votar.

Según datos del Ministerio de Interior, en 2015, las elecciones las ganó el Partido Popular, con el 28% de los apoyos electorales, mientras que el 22% de los apoyos los cosechó el Partido Socialista. Ciudadanos obtuvo el 13,9% de los sufragios y Podemos el 12,6%. Además, Izquierda Unida obtuvo el 3,6% de los apoyos. La abstención se situó en el 26%, uno de los valores más bajos del periodo de análisis y la participación fue del 69%. Por lo que respecta a 2016, el PP volvió a ganar las elecciones, con el 33% de los apoyos electorales, frente al PSOE, que obtuvo el 22% de los sufragios. El 13% de los apoyos fue para Ciudadanos, igual que para Unidos Podemos, que obtuvo el 13,4% del apoyo electoral. Entonces, la abstención fue del 30%, una de las más altas del periodo de análisis. La participación en esas elecciones fue del 66%.

CAPÍTULO 6

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y RESULTADOS ELECTORALES EN FRANCIA (2000 - 2017)

Del marco teórico de la presente tesis doctoral se extraen los principales problemas relacionados con la representación política que se dan, en mayor o en menor medida, en las sociedades actuales. Así, relacionados con la capacidad de dar respuesta a la ciudadanía por parte de la política o *responsiveness* se han identificado el descontento político, el alejamiento entre el representante y el representado y la oligarquización. Por lo que se refiere a la *accountability*, los problemas que se han encontrado son la desconfianza política y la desafección política. Finalmente, en relación con la responsabilidad política o *responsibility*, se han detectado los problemas de la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo. Si bien estos problemas se clasifican en distintas dimensiones, no son estancos y permean diferentes dimensiones. Además, todos ellos alcanzan distintos grados en las diferentes sociedades en que tienen lugar.

A través de distintas fuentes de datos provenientes de encuestas destinadas a conocer la opinión pública sobre temas sociales y políticos, es posible conocer diferentes aspectos de la sociedad francesa que permiten aproximarse a los problemas relacionados con la representación política enumerados anteriormente y ver cómo estos se desarrollan durante el periodo de análisis, que marca el contexto concreto entre los años 2000 y 2017. Así, el capítulo tiene por objetivo describir, a partir de los datos disponibles, los rasgos que permiten caracterizar los problemas de representación política en el caso francés. Del mismo modo, la sección incluye también la descripción de los resultados electorales del Partido Socialista francés, en conjunción con los datos aportados sobre los problemas relacionados con la representación política, así como se ofrecen datos del contexto político del periodo de análisis.

6.1. Descontento político

El descontento político es uno de los principales problemas relacionados con la representación política que sale a la luz a la hora de acercarse al funcionamiento de la democracia en una sociedad específica, ya que pone de manifiesto comportamientos ciudadanos que pueden afectar al desarrollo del juego electoral y, en general, de la sociedad en su conjunto.

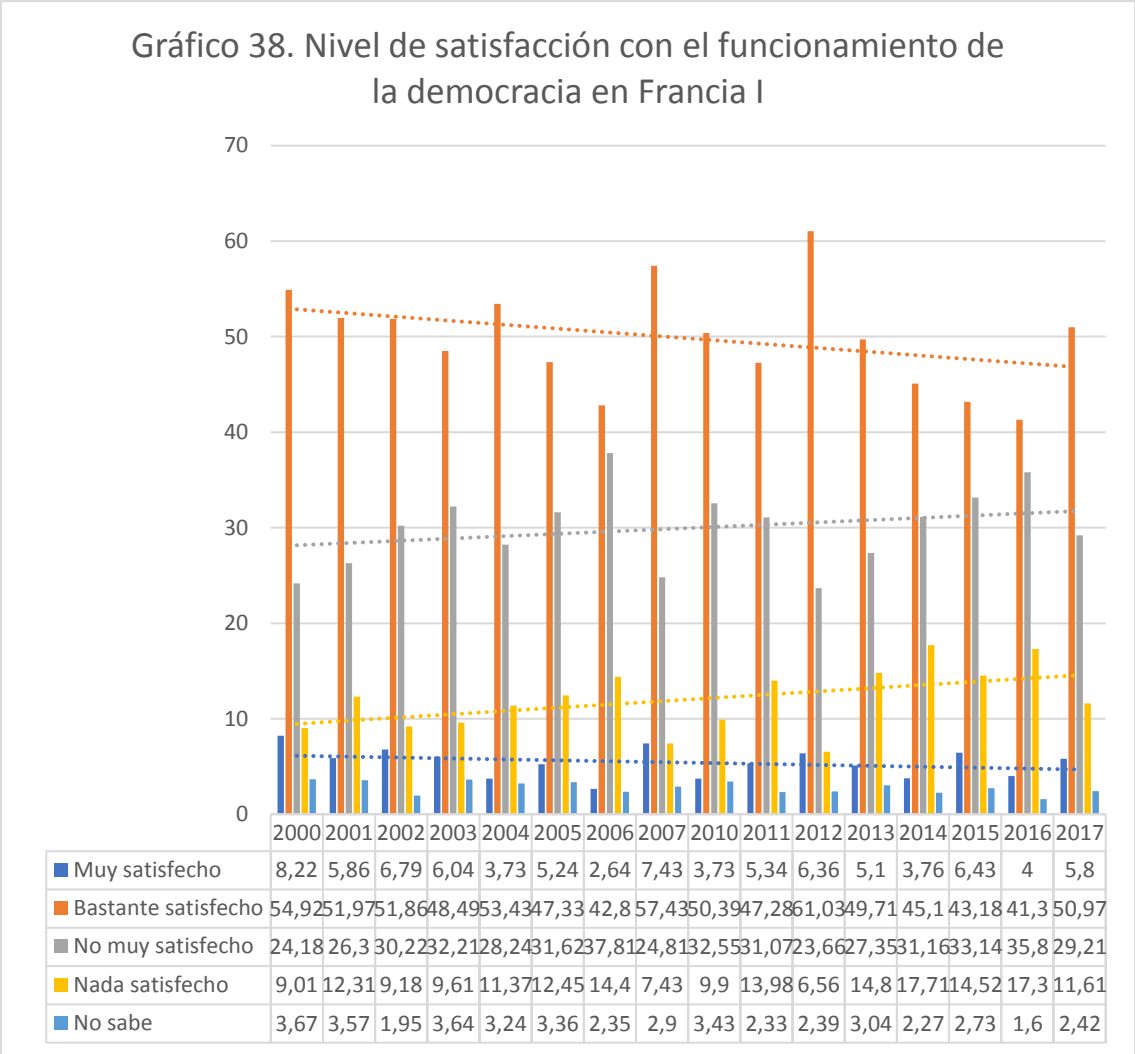
El problema del descontento político de una sociedad puede caracterizarse a través de la opinión pública, mediante el procedimiento de la encuesta, y en concreto, al corroborar los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia y con el gobierno nacional, y al preguntar a la población si votó en las últimas elecciones, con lo cual se pone de manifiesto el nivel de compromiso político con respecto a la participación electoral.

De este modo, en el caso francés y según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, el Eurobarómetro y el CEVIPOF, se observa durante el periodo de análisis (de 2000 a 2017) una tendencia al alza en el problema del descontento político, explicado a partir de los siguientes datos.

Tal y como puede observarse en el gráfico 38, la mayoría de los encuestados de Francia se define como bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país durante todo el periodo de análisis, con porcentajes que oscilan entre el 61% en 2012 y el 41% en 2016, de encuestados que se sentían bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Ahora bien, el número de personas que se inclinaban por la opción de bastante satisfechos, aun siendo más numeroso, muestra una tendencia a la baja durante el periodo analizado, de manera que aparece, así, un primer síntoma de descontento político. Entre los que se declaran bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia, los valores menores aparecen en los años 2016, con un 41%; en 2015, con un 43%; en 2014, con un 45% y en 2006, con un 42%. Por el contrario, los bastante satisfechos han sido más de la mitad de los encuestados en los años 2000, con un 54%; 2001 y 2002, con un 51%; 2004, con un 53%; 2007, con un 57%; 2010, con un 50%; 2012, con un 61%; y, 2017, con un 50%. De ello se desprende que, aunque alrededor de la mitad de los encuestados dice sentirse bastante satisfecho, la tendencia del periodo, entre este grupo, es a menguar, es decir, va cayendo el número de los que dice identificarse con la opción de bastante satisfecho.

Por otro lado, según los datos disponibles del Eurobarómetro para el periodo de análisis, puede advertirse también una tendencia al alza en el número de los encuestados que dicen sentirse no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en Francia. Los mayores picos de personas que dicen no sentirse muy satisfechas con el funcionamiento de la democracia se dan en los años 2006, con el 37% y en 2016, con el 35%; mientras que durante todo el periodo los porcentajes oscilan entre el mayor, del 37% de personas no muy satisfechas, y el menor, en los años 2000 y 2007, que es el 24%. Así pues, se advierte una ligera tendencia al alza entre los no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Del mismo modo, los que dicen sentirse nada satisfechos también experimentan una tendencia ascendente. En 2014 y en 2016,

los encuestados que dicen sentirse nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia superan el 17%, mientras que durante todo el periodo oscilan entre ese valor máximo y el 6% del año 2012. En el otro extremo, los que dicen sentirse muy satisfechos representan a lo largo del periodo a entre el 8% y el 2% de los encuestados, pero su tendencia es estable.



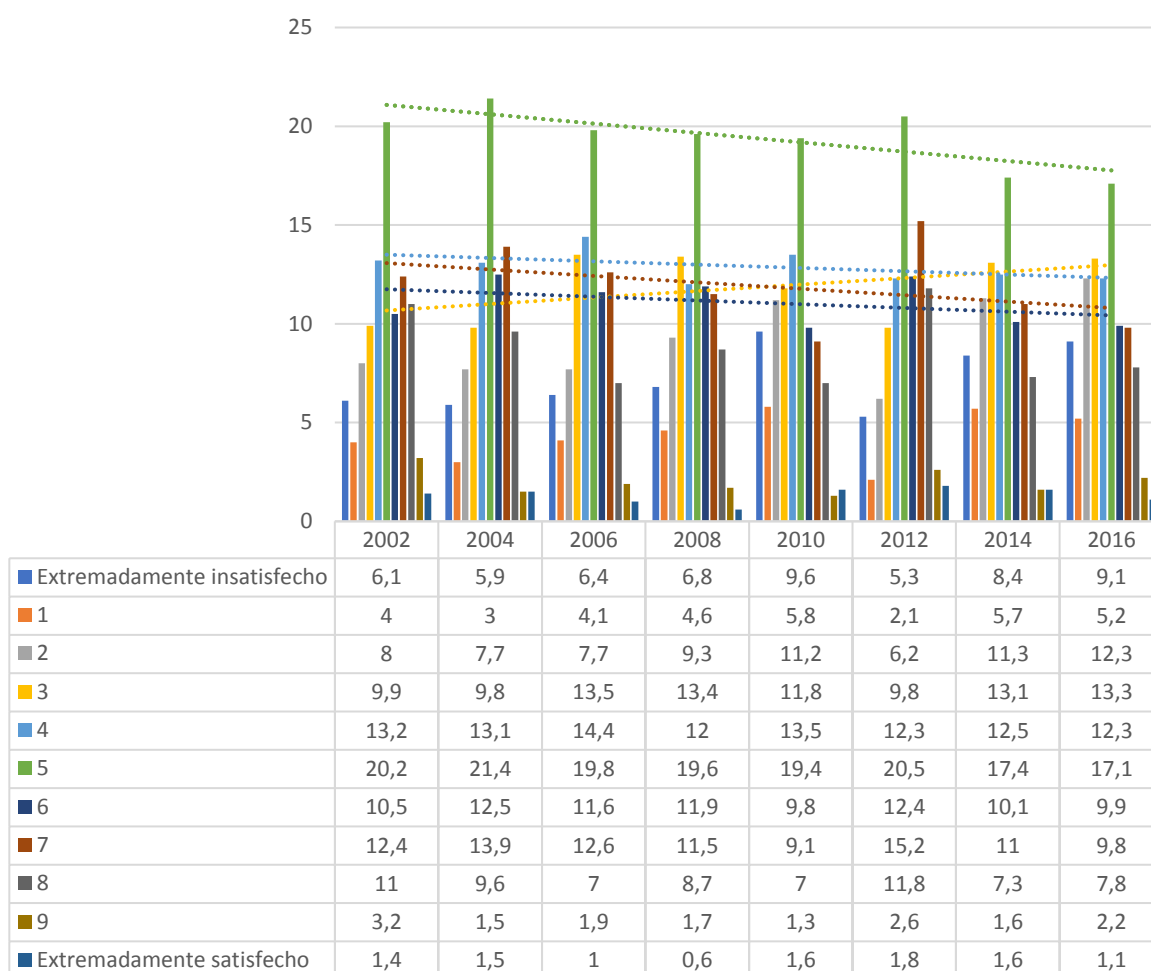
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Como se desprende del gráfico 38, tanto la caída del número de encuestados que dice sentirse bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Francia, como el aumento de los que dicen sentirse no muy satisfechos y nada satisfechos se aprecia en mayor medida a partir del año 2010, aunque son unas tendencias de todo el periodo.

En consonancia con los datos anteriores, según las cifras disponibles de la Encuesta Social Europea para el periodo de análisis, los encuestados que se sitúan en valores medios de

satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Francia son mayoría, tal y como puede verse en el gráfico 39.

Gráfico 39. Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Francia II



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social.

El mayor porcentaje de encuestados, que se sitúa alrededor del 20%, se ubica en una posición de 5, en una escala del 0 al 10 sobre el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, en que 0 es extremadamente insatisfecho y 10, extremadamente satisfecho. Sin embargo, en las distintas oleadas de la Encuesta Social Europea se puede observar también una tendencia a la baja en el número de encuestados que se coloca en un nivel medio de satisfacción con la democracia en Francia. Así, en los años 2014 y 2016 se registra el menor porcentaje de encuestados que están en un nivel medio de satisfacción, con un 17%, respectivamente, mientras que el mayor porcentaje se registra en 2004, con el 21%.

Por otro lado, en los valores inferiores de satisfacción, 3 y 4, y superiores, 6 y 7, es donde se encuentra la mayoría del resto de los encuestados. En los extremos, tanto de extremadamente insatisfechos como de extremadamente satisfechos, es donde queda una minoría de encuestados. Así, en el grado 4 de satisfacción se encuentran valores que oscilan entre el 14% y el 12% y que muestran una ligera tendencia a la baja durante el periodo. Por lo que se refiere al grado 3 de satisfacción, se observa una tendencia al alza, con porcentajes que van del 9% de las oleadas de 2002, 2004 y 2012; al 13% de 2006, 2008 y 2014.

En los grados superiores de satisfacción que más encuestados aglutinan se observa una tendencia a la baja, según los datos disponibles para el periodo de análisis. De esta manera, el grado 6 de satisfacción registra porcentajes que van desde el 12% al 9% según las oleadas; y, el grado 7, porcentajes que se mueven entre el 15% y el 9,8%, según los datos disponibles.

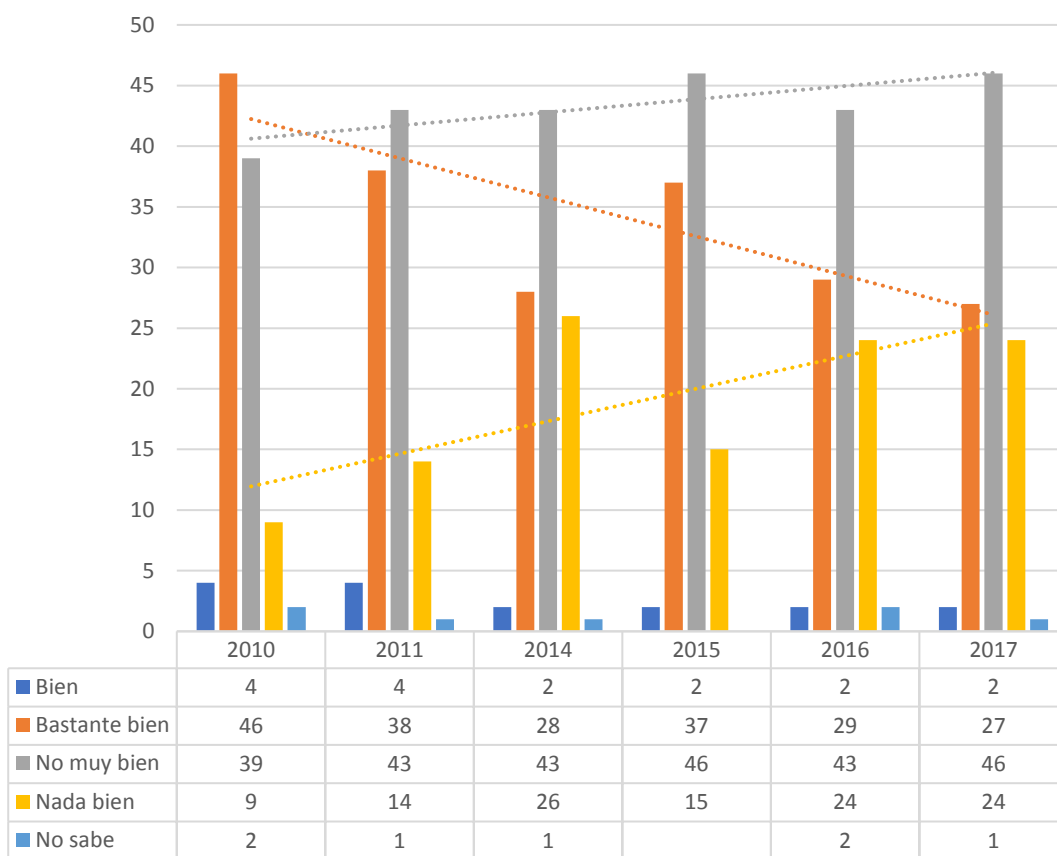
Aunque en los extremos de los niveles de satisfacción es donde menos encuestados se sitúan, cabe destacar que los extremadamente insatisfechos oscilan en porcentajes que van del 5% al 9%; y, los extremadamente satisfechos se mantienen estables alrededor del 1%.

De los datos anteriores se extrae, pues, que existe una satisfacción media con el funcionamiento de la democracia o que la mayoría de encuestados se posiciona en un lugar de la tabla que se intuye moderadamente satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Francia. Sin embargo, hacia la segunda década del siglo XXI empiezan a apreciarse síntomas de descontento político, cuando las opciones moderadas de satisfacción empiezan a experimentar tendencias a la baja y posiciones más extremas de insatisfacción tienden a subir ligeramente.

En el gráfico 40, que recoge datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF entre 2010 y 2017, puede verse claramente cómo el fenómeno del descontento se agudiza a partir del año 2010.

Al ser preguntados sobre su opinión sobre el funcionamiento de la democracia en Francia, en 2010 las respuestas de los encuestados son de un 46% para la opción bastante bien, y de un 39% para la opción de no muy bien.

Gráfico 40. Opinión sobre el funcionamiento de la democracia en Francia



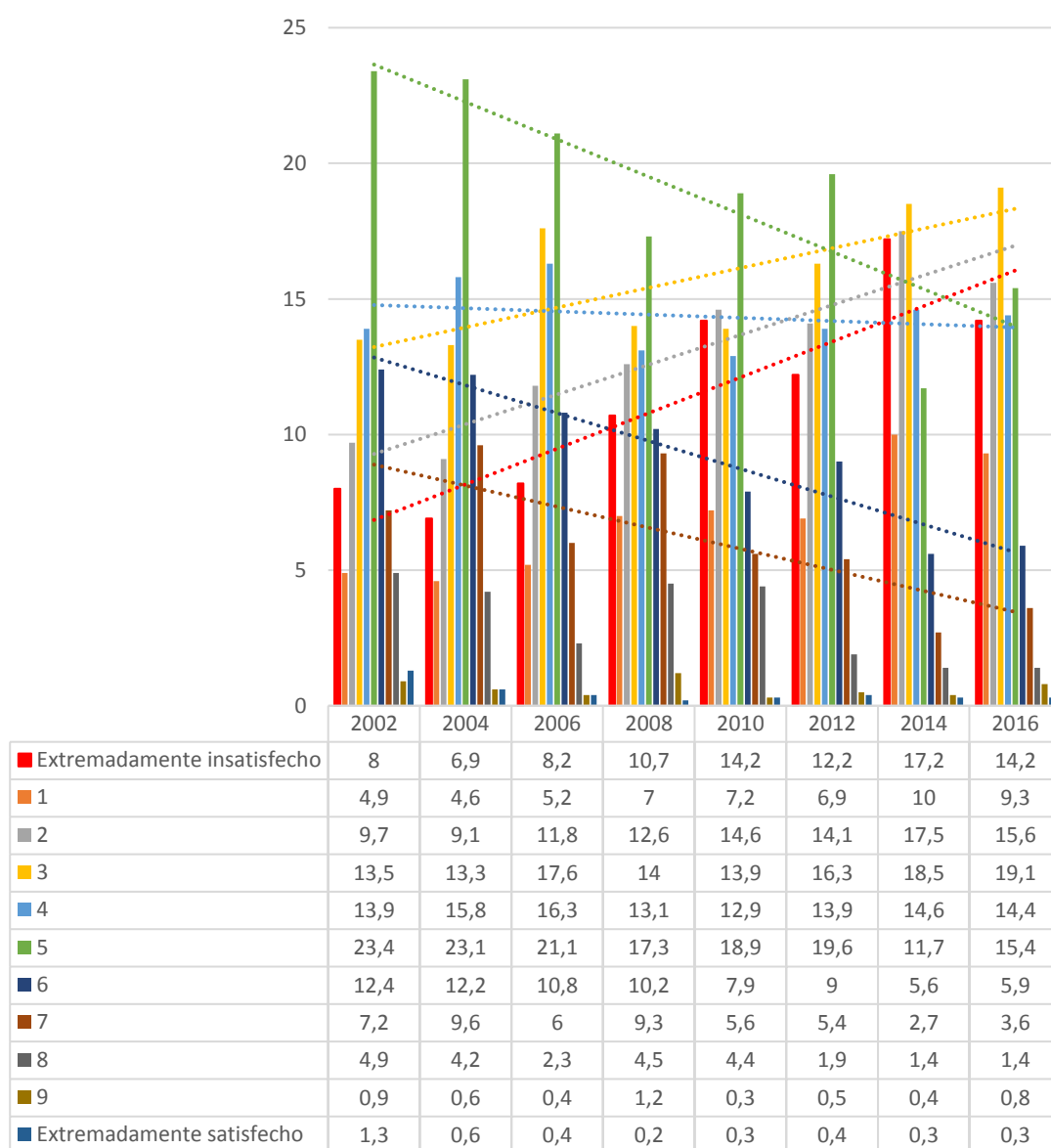
Fuente: elaboración propia a partir del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF.

A partir del año 2010, la tendencia se invierte y los que creen que la democracia no funciona muy bien superan a los que creen que funciona bastante bien hasta la actualidad. En 2011, el porcentaje de encuestados que creían que la democracia funcionaba bien era del 38%, mientras que en 2014 cayó hasta el 28%. En 2015 subió hasta el 37%, pero en 2016 cayó de nuevo, hasta el 29%, y en 2017, se llegó hasta el 27%, siempre por debajo de los valores de la opción de los que creen que no funciona muy bien. Estos últimos eran el 43% de los encuestados en 2011 y 2014, y subieron al 46% en 2015. En el año siguiente, en 2016, el porcentaje de los que creen que no funciona muy bien volvió al 43% y, en 2017, se colocó en el 46%, de modo que la tendencia ha sido al alza durante todo el periodo entre los encuestados que opinan que la democracia no funciona muy bien. Según los datos disponibles de CEVIPOF, la posición extrema de opinión sobre el funcionamiento de la democracia que se define como que no funciona nada bien ha experimentado una notable subida en los últimos siete años, en que ha pasado de ser la

opción preferida del 9% de los encuestados en 2010 a la del 24% en 2017, pasando por un pico del 26% en 2014. Los datos aportados por el Barómetro de la confianza política de CEVIPOF corroboran los síntomas apreciados sobre la agudización del problema del descontento político en la sociedad francesa manifestado a través de la opinión sobre el funcionamiento de la democracia en el país galo.

El mismo indicio puede apreciarse también, según datos de la Encuesta Social Europea, al inquirir sobre el nivel de satisfacción con el gobierno nacional, tal y como recoge el gráfico 41.

Gráfico 41. Nivel de satisfacción con el funcionamiento del gobierno nacional en Francia



Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Social Europea.

En una escala de 0 a 10 que va de extremadamente insatisfecho a extremadamente satisfecho, el grado 5 es el que más encuestados reúne, con valores de alrededor del 20%, pero también en este punto, la moderación experimenta una caída, una tendencia a la baja del número de encuestados que se inclinan por situarse a la mitad de la tabla. Mientras que en las oleadas de 2002 y 2004 el grado 5 obtenía un 23% de encuestados, en 2006 el porcentaje pasó al 21% y llegó al 17% en 2008. En 2010 y 2012 el grado 5 fue la opción preferida para el 18% y el 19% de los encuestados, respectivamente, y en 2014 cayó hasta el 11%. En el año 2016, el porcentaje se sitúa en el 15,4%.

Al mismo tiempo, la posición extrema de la tabla, extremadamente insatisfecho con el gobierno nacional, experimentó una notable subida. En 2002, el porcentaje de encuestados que se mostraban extremadamente insatisfechos con el gobierno nacional era del 8%, y aunque en 2006 cayó al 6,9%, durante el resto de oleadas tendió a aumentar. Así, en 2006, el porcentaje de encuestados extremadamente insatisfechos con el gobierno nacional era del 8% de nuevo, mientras que en 2008 creció hasta el 10%. En el año 2010, el porcentaje de los extremadamente insatisfechos alcanzó el 14%, en 2012 cayó al 12% y en 2014 subió hasta el 17%. En el 2016, el porcentaje se quedó en el 14%. Del mismo modo, las posiciones más bajas de la tabla, las que indican más insatisfacción con el gobierno, también sufrieron una tendencia al alza. El grado 3 de satisfacción oscila entre el 13% de 2002 y el 19% de 2016 y el grado 2 pasa del 9,7% en 2002 al 15%, en 2016, pasando por el 17,5% en 2014; e incluso, aunque más minoritario, también crece el grado 1, que del 4,9% de 2002 pasa al 9% en 2016. De ello se concluye que las posiciones extremas de insatisfacción crecen cuando se trata de evaluar al gobierno nacional.

Por el contrario, los grados que implican una mayor satisfacción con el gobierno, caen a lo largo del periodo. Los grados 6 y 7 experimentan un descenso a lo largo del tiempo, según los datos disponibles, que cabe resaltar. El grado 6 era la opción favorita para el 12% de los encuestados en 2002 y 2004; sin embargo, en 2006 y 2008 ya lo era para el 10%. En 2010 el porcentaje de preguntados que se sentía razonablemente satisfecho cayó al 7,9% para recuperarse en 2012 hasta el 9%; pero, en 2014, cayó hasta el 5,6%. En 2016, el grado 6 era elegido por el 5,9% de los encuestados. Algo parecido sucedió con el grado 7 de satisfacción, que en 2002 reunía al 7% de los encuestados y en 2004 al 9,6%. El porcentaje disminuyó al 6% en 2006, para recuperarse hasta el 9% en 2008, pero volvió a disminuir en 2010 con el 5,6%, en 2012 con el 5,4%, en 2014, con el 2,7%, y en 2016, con el 3,7%, experimentando así una tendencia a la baja.

La satisfacción con respecto al gobierno nacional, a la luz de los datos expuestos, muestra una tendencia a la baja en las opciones moderadas y una clara radicalización de la postura de los

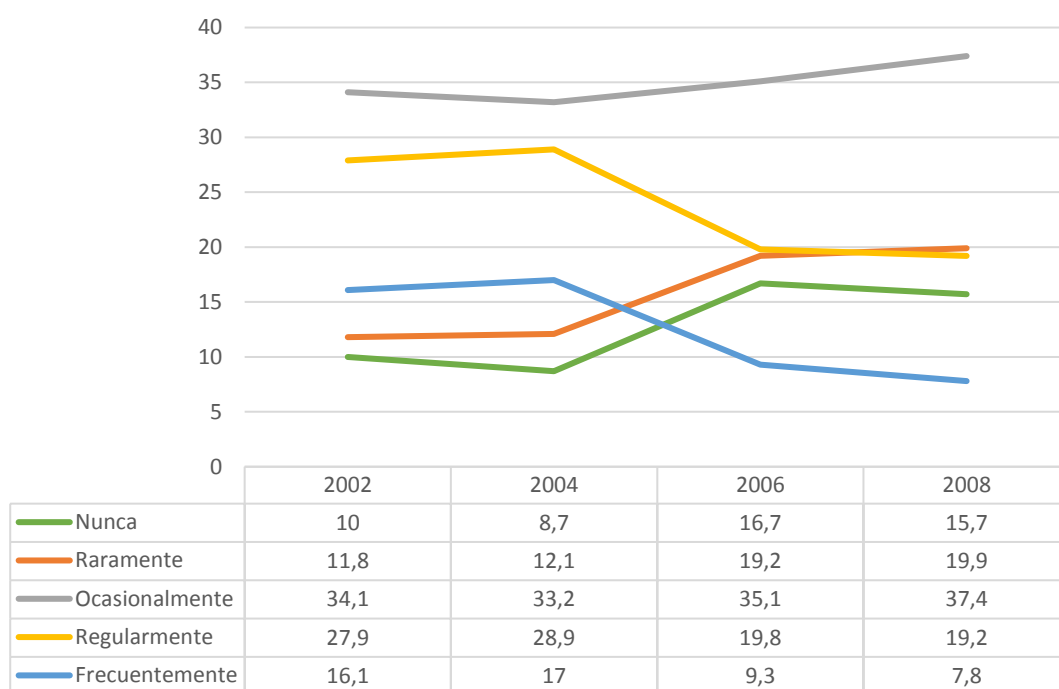
extremadamente insatisfechos, en consonancia con el fenómeno descrito acerca del funcionamiento de la democracia, pero agudizándose en este punto la postura extrema. Por tanto, el descontento político se muestra con mayor intensidad al preguntar sobre el gobierno nacional, más que sobre el funcionamiento de la democracia en general, si bien las tendencias son similares. Aunque con inclinación a la baja, aproximadamente la mitad de los encuestados está moderadamente satisfecho o bastante satisfecho con la democracia francesa, mientras que el porcentaje, con tendencia a la caída, de los moderadamente satisfechos con el gobierno no llega al 25%.

6.2. Alejamiento entre los representantes y los representados

El problema de la distancia o el alejamiento entre el representante y el representado es algo señalado por la literatura desde los orígenes de la conceptualización de la representación política, tal y como se desprende del marco teórico. En este sentido, la bibliografía contemporánea destaca el problema como uno de los que aqueja a las democracias avanzadas de las sociedades occidentales, en tanto que la lejanía entre el representante y el representado es un factor que puede impedir un óptimo funcionamiento del sistema de representación política. El alejamiento entre los representados y los representantes puede traducirse en la incompreensión de la ciudadanía de los asuntos políticos y en la percepción ciudadana de una falta de preocupación por sus asuntos cotidianos por parte de los representantes.

En el caso francés y según los datos disponibles para el periodo de análisis extraídos de la Encuesta Social Europea, los franceses encuestados que creen que la política es ocasionalmente demasiado complicada de entender era del 34% en 2002 y del 33% en 2004, pero ascendió al 35% en 2006 y al 37% en 2008, tal y como puede verse en el gráfico 42.

Gráfico 42. Opinión sobre si la política es demasiado complicada de entender

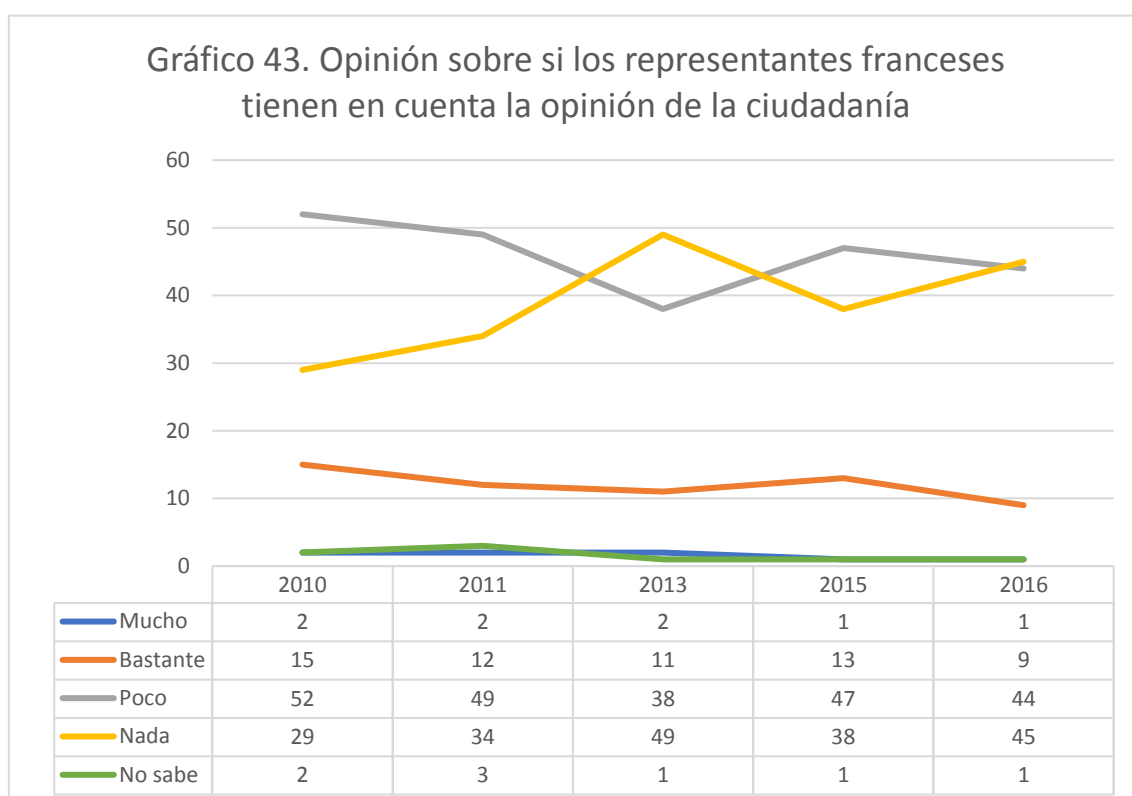


Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Al mismo tiempo, el porcentaje de encuestados que opinaban que la política era demasiado difícil de entender de forma regular se mantuvo en el 27% y el 28% en 2002 y 2004, respectivamente, pero experimentó una caída en 2006 hasta el 19,8%, para mantenerse en el 19% en 2008. De una forma similar, descendió también el porcentaje de personas preguntadas que creían que la política es frecuentemente demasiado complicada de entender. Así, mientras que en 2002 y en 2004 un 16% y un 17%, respectivamente, elegía la opción que aseguraba que la política es frecuentemente demasiado complicada de entender, esta cayó hasta el 9% en 2006 y el 7,8% en 2008. En consonancia con esos datos, aquellos que creían que la política es raramente demasiado complicada de entender representaban el 11% de los encuestados en 2002 y el 12% en 2004, pero aumentaron hasta el 19% y el 19,9% en 2006 y 2008. De la misma manera, se incrementó el porcentaje de los que opinaban que la política no es nunca demasiado complicada de entender. Así, en 2002 el porcentaje de los que elegían la opción de que la política nunca es demasiado complicada de entender era del 10%; en 2004, del 8,7%; sin embargo, el porcentaje subió en 2006 hasta el 16,7% y en 2008, se situó en el 15,7%. A la luz de los datos disponibles, resalta que un mayor número de encuestados percibe las cuestiones políticas como algo ocasionalmente demasiado complicado de entender, y su tendencia durante las distintas

oleadas es a ascender, lo que puede relacionarse con cierta percepción de distanciamiento con los representantes al percibir como ocasionalmente no comprensibles las cuestiones políticas.

La lejanía entre el representado y el representante puede también describirse a partir de la opinión pública con los datos disponibles sobre si los representantes franceses tienen realmente en cuenta lo que piensa la ciudadanía. Según datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, recogidos en el gráfico 43, se puede observar que la mayoría de los encuestados consideran que los representantes franceses tienen poco o nada en cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de ejercer sus funciones.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF.

En el año 2010, el porcentaje de los encuestados que consideraban que los representantes tienen en cuenta poco la opinión de la ciudadanía era del 52% y el de los que pensaban que nada, era del 29%. Sin embargo, hasta la actualidad, los porcentajes de las dos opciones se han ido acercando. El porcentaje de personas preguntadas que creía que los representantes franceses no tienen en cuenta nada la opinión de la ciudadanía era del 34% en 2011; del 49% en 2013, siendo este su pico más alto; del 38% en 2015; y, del 45% en 2016. Los encuestados que creían que los representantes tenían en cuenta poco la opinión de la ciudadanía representaban el 49% en 2011; el 38% en 2013; el 47% en 2015; y, el 44% en 2016.

Como se desprende de los datos disponibles, la suma de los encuestados que consideran que los representantes franceses tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía poco y nada es siempre superior al 80%. En el año 2010, los que se sienten más alejados suman el 81%; en el año 2011 son el 83%; en el 2013, llegan al 87%; en el año 2015 se quedan en el 85%; y, en 2017 alcanzan la cifra del 89%. De este modo, se aprecia una tendencia de alejamiento entre el ciudadano y el representante, ya que el primero considera que sus opiniones son poco o nada tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas y ello incrementa la distancia entre ambas partes, de manera que se dificulta establecer un vínculo de cercanía y comprensión.

6.3. Oligarquización

El término de oligarquización, descrito por Pitkin en los años ochenta como un fenómeno nuevo, designa un problema relacionado con la representación en tanto que se basa en concebir la política y el oficio del político como algo reservado a las élites. Por consiguiente, se trata de una problemática que puede influir también en la percepción de la distancia entre el representado y el representante (al distinguir entre la élite u oligarquía y la masa o pueblo) y que tiene que ver con la capacidad de respuesta de los políticos y de la política a las demandas ciudadanas.

En Francia, según datos del año 2014 recogidos por la Encuesta Social Europea, el 19% de los encuestados creía que el sistema político francés no permite nada a la ciudadanía tener influencia en el país, lo que puede entenderse como un síntoma de que la ciudadanía percibe el sistema político como oligarquizante, en el sentido de que no permite al común de la gente influir en el poder. Según los mismos datos, en una escala del 0 (nada) al 10 (completamente), las posiciones 2, 3 y 4, además de la de nada, son las que agrupan a una mayor parte de encuestados, a las que sigue de cerca la posición 5, en medio de la tabla. De este modo, la posición 2 agrupaba al 17% de las personas preguntadas, la posición 3, al 15% y las posiciones 4 y 5 al 12,8% y al 12%, respectivamente. En contraste, la posición 1, que representa una opinión cercana a la de nada, obtuvo el 8,9%. Las posiciones más cercanas a la opinión de que el sistema político permite completamente a la ciudadanía tener influencia en Francia, los grados 6, 7, 8, 9 y completamente, congregaba a la minoría de los encuestados. El grado 6 obtuvo el 7%, el grado 7 el 4% y el 8 obtuvo el 2%. La posición 9 y completamente obtuvieron el 0,4%, respectivamente. Según los datos disponibles, pues, puede advertirse que la mayoría de los encuestados se sitúa en posiciones que consideran que el sistema político no permite tener influencia a la ciudadanía, lo que puede verse como un signo de oligarquización de los representantes.

En el año 2016, los que creían que el sistema político no permitía nada a la ciudadanía tener influencia eran el 36%, mientras los que consideraban que permite tener poca influencia eran el 37%. Por otro lado, el porcentaje de encuestados que consideraba que el sistema político francés permite tener algo de influencia era del 22% y los que consideran que permite tener mucha influencia representaban al 3,7% de las personas preguntadas.

Otro indicio del problema de la oligarquización de los representantes puede observarse en los datos que recoge la Encuesta Social Europea en el año 2014, al preguntar sobre la opinión de los franceses en cuanto a si el sistema político permite a la ciudadanía tener algo que decir en los quehaceres políticos. En una escala de 0 (nada) a 10 (completamente), la mayoría de los encuestados se sitúa en valores que van del medio (5) a nada, con lo cual la opinión general es que el sistema político no permite tener algo que decir a la ciudadanía sobre los asuntos políticos. Según los datos disponibles, el 17,5% de las personas preguntadas se ubicaba en el grado 3 acerca de si el sistema político permite a la ciudadanía tener algo que decir; el 16,9% se situaba en nada; y, el 15%, en el grado 2. En la posición 5, en medio de la gradación, se situaba el 13,5% de los encuestados. Los valores más próximos a la opción de completamente congregaban a una minoría de los encuestados, con porcentajes del 6% para el grado 6 y del 5% en el grado 7. De nuevo, pues, se observa una opinión más bien negativa sobre si el sistema político permite a la ciudadanía tener algo que decir sobre los asuntos políticos.

En el año 2016, los encuestados que consideraban que el sistema político no permite nada a la gente tener algo que decir sobre lo que hace el gobierno eran el 29,4% y los que creían que permite tener muy poco que decir eran el 38,6%. Por otro lado, en ese mismo año y según la Encuesta Social Europea, las personas preguntadas que creían que el sistema político permite bastante tener algo que decir sobre la actuación política eran el 25% y los que consideran que lo permitía mucho eran el 5,7% de los encuestados.

Sin embargo, según datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, en 2015, el 40% de los encuestados estaba bastante en desacuerdo con que la política fuera un asunto reservado a los especialistas, y el 21% no estaba en absoluto de acuerdo con ello. En cambio, estaban de acuerdo completamente con ello el 5% de los encuestados y el 33% estaba bastante de acuerdo. Por tanto, en el año 2015, el 38% de los encuestados estaba de acuerdo con que la política debe ser un asunto de especialistas y el 61% estaba en contra de esa afirmación. Para el año 2016, según CEVIPOF, los encuestados que estaban en bastante desacuerdo con la idea de que la política debe ser un asunto reservado a los especialistas era del 39%, mientras los que estaban en absoluto desacuerdo con esta idea eran el 21% de las personas preguntadas. Al contrario, los

que estaban completamente de acuerdo con esta afirmación eran el 6% y los que estaban bastante de acuerdo, representaban el 33%. Así, el 39% consideraba que la política era un asunto de especialistas y el 60% consideraba que no, en el año 2016. Por lo que se refiere al año 2017, el porcentaje de encuestados que estaba bastante en desacuerdo con que la política deba ser un asunto reservado a especialistas era del 36% y los que estaban completamente en desacuerdo agrupaban al 23% de los encuestados. En el lado opuesto, el 7% estaba de acuerdo completamente con la idea de que la política es un asunto de especialistas y el 33% estaba bastante de acuerdo. Ello da un resultado en consonancia con los anteriores, que se muestran estables en los últimos tres años, aunque la opción del desacuerdo decae ligeramente: el 40% se mostraba de acuerdo con que la política debe ser un asunto de especialistas y el 59% se mostraba en desacuerdo. En los últimos años se observa cómo la mayoría de los encuestados consideran que la política no debe ser un asunto reservado a los especialistas, lo que revela cierto interés por evitar el fenómeno de la oligarquización.

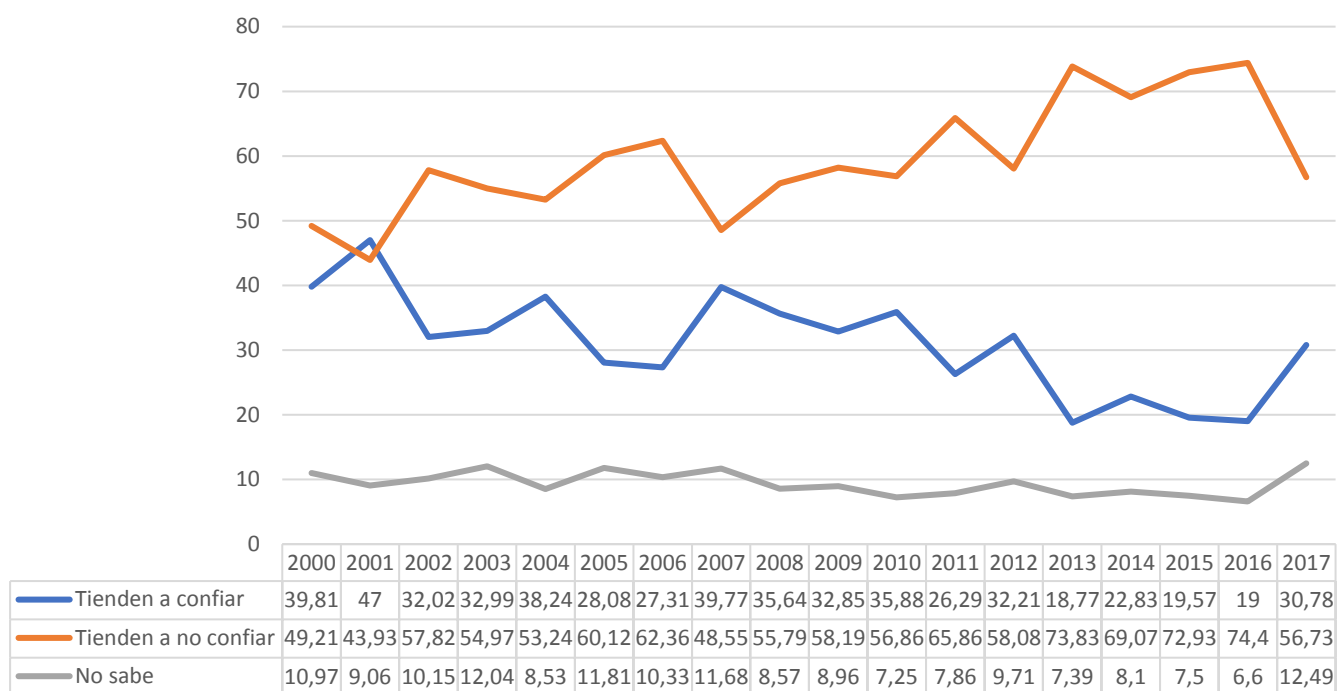
Los problemas relacionados con la representación política y con la capacidad de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía por parte de los representantes políticos, como son el descontento político, el alejamiento y la oligarquización, muestran sus síntomas en la sociedad francesa del siglo XXI, a la luz de los datos descritos.

6.4. Desconfianza política

El grado de confianza política que manifiesta la ciudadanía es un factor ampliamente tratado por la literatura, puesto que la desconfianza —la falta de confianza— afecta a la relación entre el representante y el representado, así como a la credibilidad política. El fenómeno de la desconfianza es, además, un factor que los estudios sociológicos y políticos suelen preguntar con regularidad a la opinión pública. Así, es posible conocer las tendencias sobre la confianza en distintas instituciones que manifiesta la sociedad francesa a lo largo del periodo de análisis gracias a distintas encuestas realizadas a la ciudadanía.

En el caso francés, entre el año 2000 y el 2017 y según datos del Eurobarómetro, se observa un aumento del número de encuestados que tienden a no confiar en el parlamento nacional, en especial entre los años 2012 y 2016, tal y como puede apreciarse en el gráfico 44.

Gráfico 44. Confianza en el parlamento nacional en Francia I



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

De hecho, durante todo el periodo de análisis el número de encuestados que tienden a no confiar en el parlamento nacional es mayor que los que dicen confiar, excepto en el año 2001. El periodo empieza en el año 2000 con el 49% de encuestados que tiende a no confiar en el parlamento nacional, mientras los que tienden a confiar representan el 39% de las personas preguntadas. El año siguiente, 2001, presenta la única excepción del periodo, con un 47% de encuestados que tienden a confiar y un 43% que tienden a no confiar, pero después la tendencia es a crecer para la opción de los que tienden a no confiar, con distintas oscilaciones. En los años 2002, 2003 y 2004, el porcentaje de los que tienden a no confiar en el parlamento nacional se sitúan en el 57%, el 54% y el 53%, respectivamente, mientras que para los años 2005 y 2006 se dan porcentajes del 60% y del 62%, respectivamente, para los que tienden a no confiar. Seguidamente, en el año 2007, el 48% de los encuestados dice no confiar en el parlamento nacional. A partir de entonces, los que tienden a no confiar representan más de la mitad de los encuestados durante el resto del periodo. En 2008, el porcentaje de los que tienden a no confiar es del 55%; en 2009, del 58%; en 2010, del 56%; en 2011, del 65%; y, en 2012, del 58%. A partir de ese momento, se dan los mayores picos de desconfianza del periodo, con valores del 73%

para el año 2013; del 69% para el 2014; y, del 72,9% para el 2016. En el año 2017, el porcentaje de los que tienden a no confiar en el parlamento nacional es del 56%.

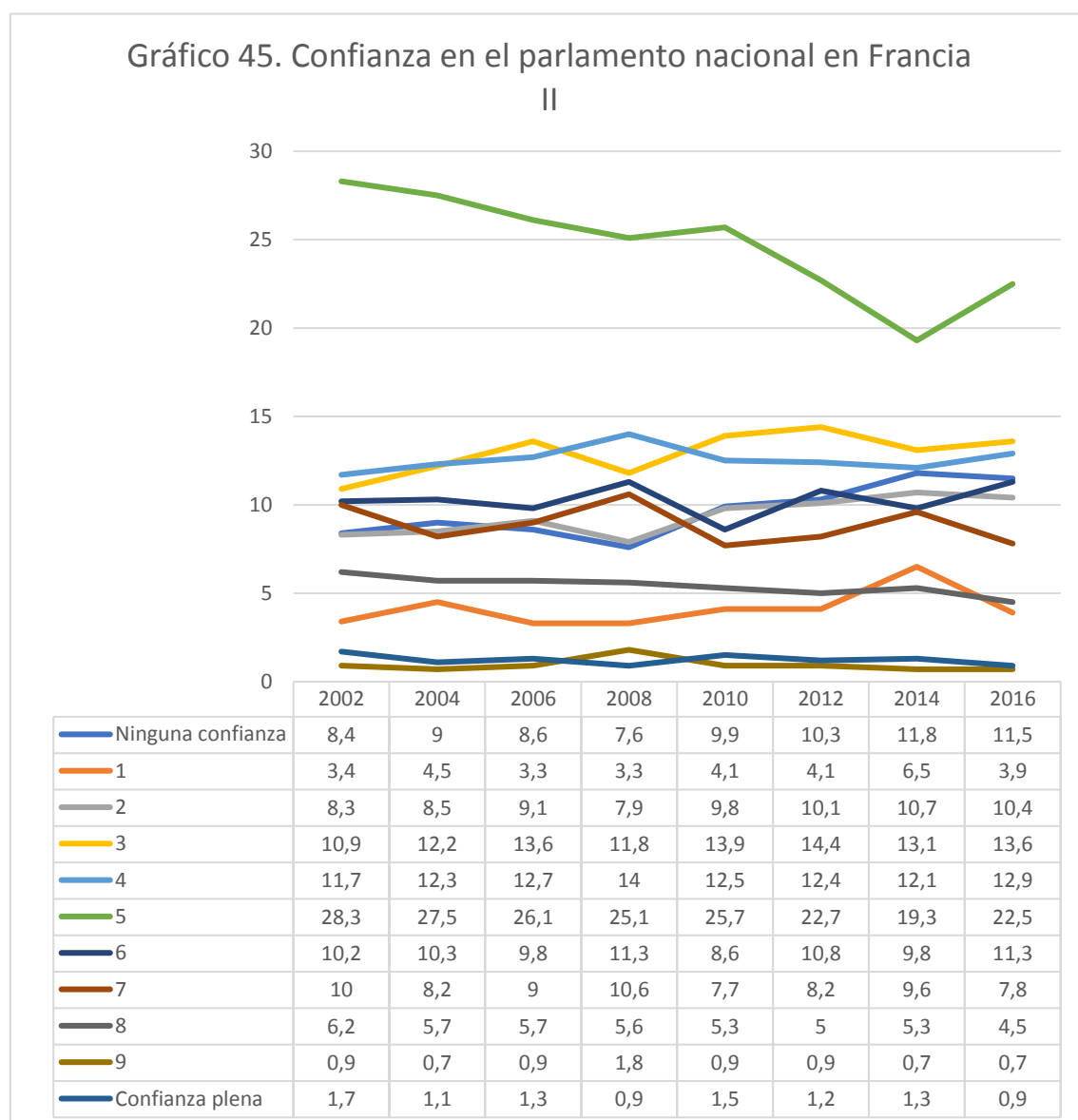
En consonancia con estos datos, el número de los encuestados que tiende a confiar en el parlamento experimentan una tendencia a la baja, especialmente aguda en los años en que crece la desconfianza, sobre todo después del año 2012. De esta manera, el número de los encuestados que dice que confía en el parlamento nacional tiende a la baja, también con distintas oscilaciones. En los años 2002 y 2003, el porcentaje se sitúa en el 32%, mientras que sube al 38% en 2004. Al año siguiente, sin embargo, cae al 28%, y en 2006 llega al 27%. Entre los años 2007 y 2010, se observa un ligero repunte, con valores del 39% (2007), del 35% (2008), del 32% (2009) y del 35% (2010). Después, a partir del año 2011, se pone de manifiesto una mayor tendencia a la caída, con porcentajes del 26% para el año 2011; del 32% para el 2012; del 18% para el 2013, siendo este el menor porcentaje de encuestados que tiende a confiar en el parlamento nacional; del 22% para el 2014; del 19% para el 2016; y, del 30% para el 2017.

De los datos se desprende que el número de encuestados que tienden a no confiar en el parlamento nacional es mayor que el número de los que dicen confiar en el parlamento durante todo el periodo de análisis, pero también que la distancia entre las dos posiciones se amplía en los últimos 6 años. Además, la tendencia que muestra la desconfianza crece y la que muestra confianza tiende a bajar.

El fenómeno de la desconfianza hacia el parlamento nacional en Francia es algo que puede apreciarse también a partir de los datos recogidos por la Encuesta Social Europea, tal y como puede verse en el gráfico 45.

En una escala de 0 (ninguna confianza) a 10 (confianza plena), según datos de la Encuesta Social Europea, se observa que la posición media (5) es la que más encuestados reúne al preguntarles sobre la confianza hacia el parlamento nacional. Sin embargo, el número de encuestados que se identifican con esa posición moderada decae en las distintas oleadas, con una caída más fuerte a partir del año 2010. Los encuestados que se identificaban en 2002 con la posición 5 representaban el 28%; el 27% en 2004; el 26% en 2006; y, el 25% en 2008 y 2010. En 2012, el porcentaje cayó al 22% y en 2014 al 19%. En el año 2016, el porcentaje volvió al 22%. Por lo tanto, la caída durante el periodo del que se disponen datos es de 6 puntos, lo que es indicativo del fenómeno de la desconfianza. Además, las posiciones 3 y 4 en la escala de confianza, que se sitúan, pues, en la mitad inferior, o sea, la más cercana a la desconfianza, son las siguientes que más encuestados reúnen. En concreto, la posición 3, que presenta una tendencia a la subida, congregaba en 2002 al 10% de los encuestados; en 2004, al 12%; en 2006, al 13%; en 2008, al

11,8%; en 2010, al 13,9%; en 2012, al 14,4%; y, al 13% en 2014 y 2016. Al mismo tiempo que la posición 3 subía, la 4 bajaba, es decir, había un menor número de encuestados que se identificaran con ella. La posición 4 era apoyada por el 11% de los encuestados en 2002 y por el 12% en 2004 y 2006, respectivamente. En 2008 fue la opción elegida por el 14% de los encuestados; y, en 2010, 2012, 2014 y 2016 se mantuvo en el 12%, con lo cual se aprecia una caída sobre todo a partir de 2010, justo cuando sube la opción 3.

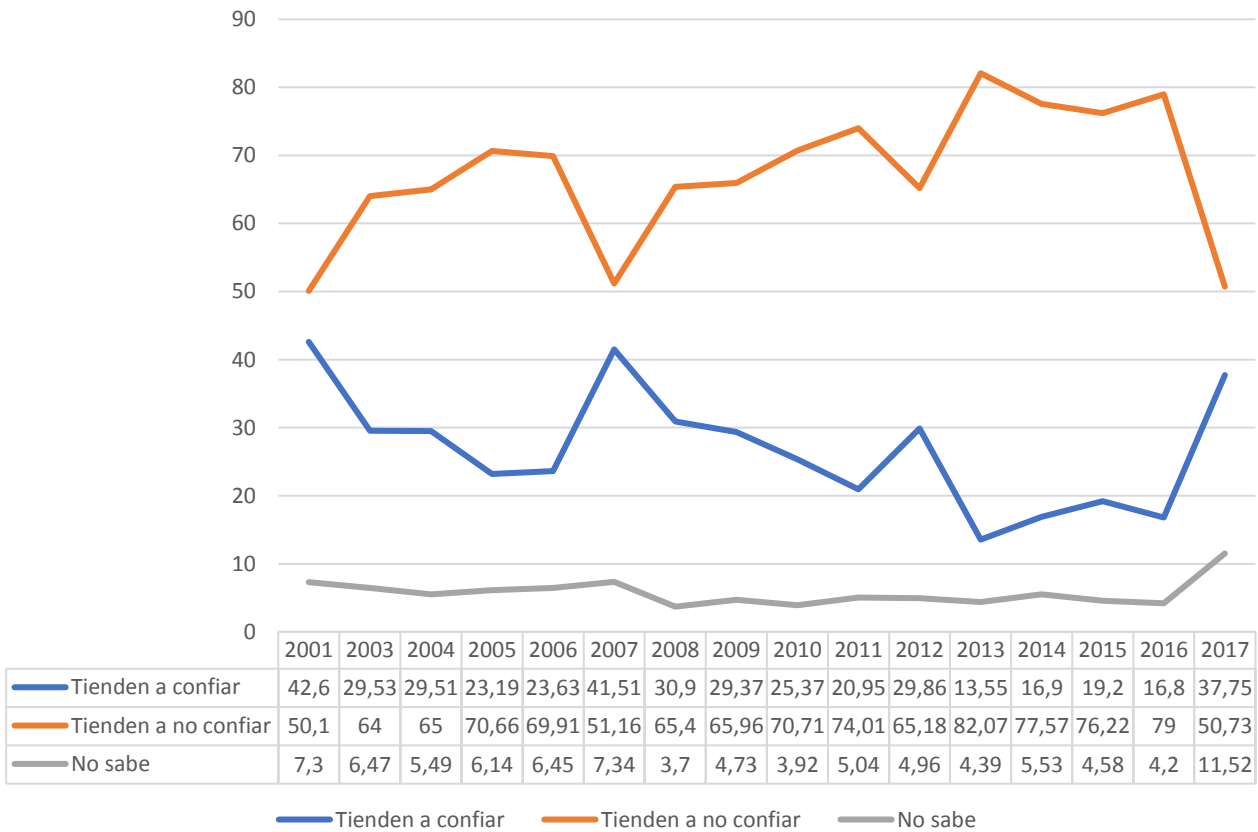


Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Según los datos de la Encuesta Social Europea pueden apreciarse también indicios del problema de la desconfianza en la opinión pública a la hora de referirse al parlamento nacional, tal y como se ve en gráfico 45.

Cuando se habla de la confianza hacia el gobierno nacional, según los datos disponibles para el periodo de análisis en el Eurobarómetro, también puede observarse una tendencia al alza entre los que tienden a no confiar y una tendencia a la baja entre los que tienden a confiar, lo que está en la línea de mostrar el problema de la desconfianza política. Además, tal y como refleja el gráfico 46, cuando la posición de los que tienden a no confiar aumenta, disminuye la posición de los que tienden a confiar. Del mismo modo, los picos de mayor desconfianza se dan a partir del año 2012, igual que los menores valores de confianza. En todo el periodo, según los datos disponibles, los que tienden a no confiar en el gobierno nacional francés representan a más de la mitad de los encuestados.

Gráfico 46. Confianza en el gobierno nacional en Francia



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

Así, en el año 2001, el porcentaje de encuestados que tendían a no confiar representaban el 50%, mientras que en 2003 ascendió al 64% y en 2003 al 65%. En 2005 se llegó al 70% de encuestados que decían no confiar en el gobierno nacional francés, mientras que en el 2006 el porcentaje fue del 69%. En 2007, se produjo una caída hasta el 51%, pero después, en 2008 y en 2009, se llegó al 65 y al 65,9%, respectivamente. A partir del año 2010 se observa de nuevo un

aumento del porcentaje de encuestados que tienden a no confiar. En 2010, se llegó al 70% y en 2011, al 74%. En el año 2012, en cambio, era del 65%. El pico más alto de desconfianza se produjo en 2013, con el 82%. En 2014 y en 2015 los porcentajes de encuestados que tendían a no confiar eran del 77% y del 76%, respectivamente, así como en 2016 se llegó al 79%. En 2017, en cambio, el porcentaje cayó al 50%, como al principio del periodo.

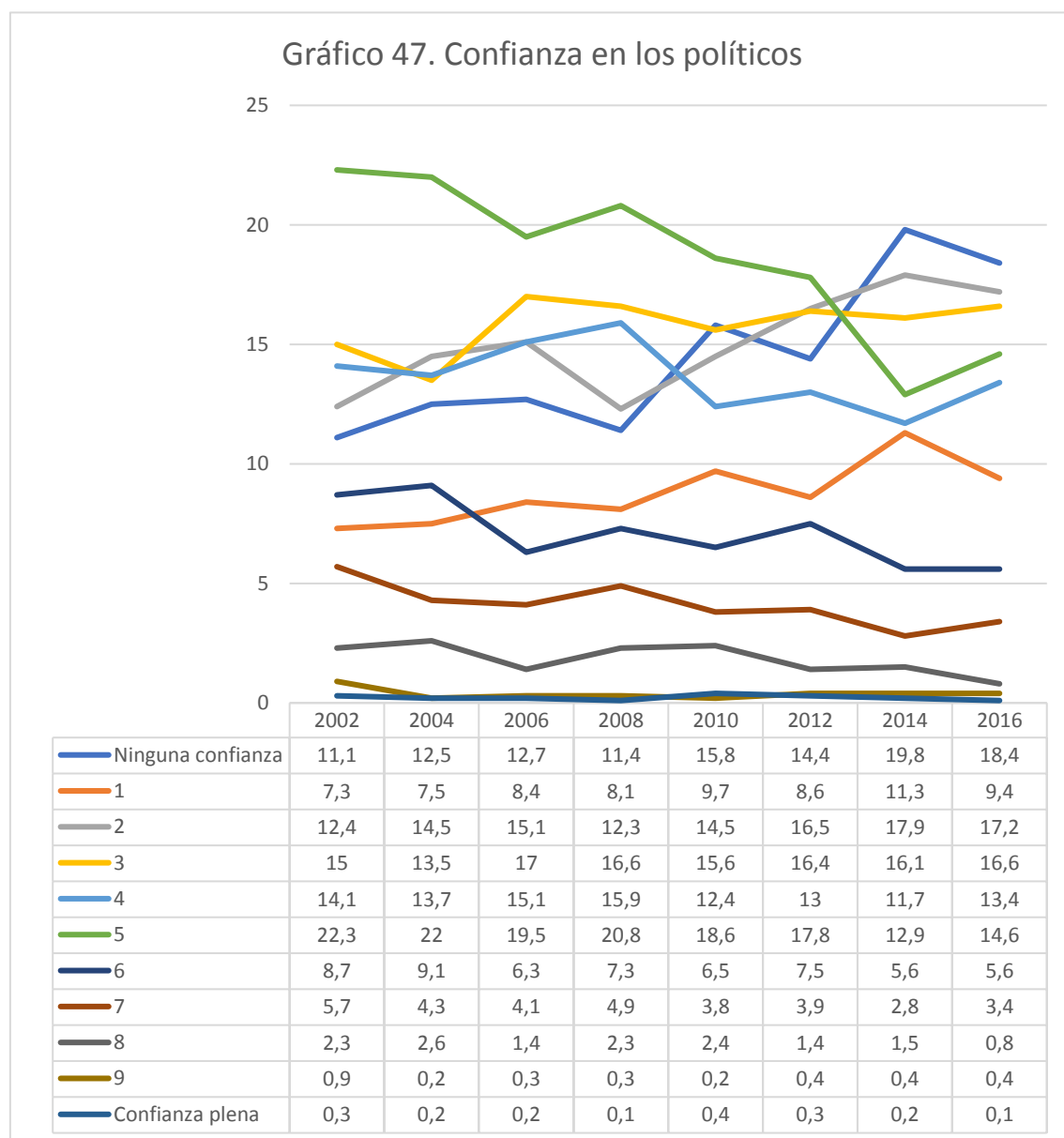
Por lo que se refiere a los encuestados que tienden a confiar, las oscilaciones a la baja se aprecian más a partir del año 2007 y también del año 2012. Así, en el año 2001, los que tendían a confiar eran el 42% de los encuestados. Pero, en el año 2003 y 2004, el porcentaje cayó al 29%, para seguir bajando hasta el 23% en los años 2005 y 2006. En 2007 se aprecia un repunte, hasta el 41%, pero ese valor no se volverá a repetir en el resto del periodo. En el año 2008 los que tendían a confiar eran el 30% de los encuestados; en 2009, el 29%; en 2010 se llegó al 25%; y, en 2011 al 20%. En 2012 subió hasta el 29%, pero el porcentaje cayó fuertemente en 2013 hasta el 13%, hasta el 19% en 2015 y el 16%, en 2016. En 2017, en cambio, el porcentaje subió al 37%. Según estos datos se pone de manifiesto también el problema de la desconfianza reflejado en el gobierno nacional francés.

En cuanto a la confianza demostrada por la ciudadanía hacia los políticos, se puede ver cómo la tendencia de los que confían moderadamente tiende a caer y la de los que no tienen ninguna confianza aumenta. Es otro indicio de desconfianza política que afecta a la representación política.

Tal y como puede observarse en el gráfico 47, elaborado a partir de los datos de la Encuesta Social Europea, en una escala de 0 (ninguna confianza) a 10 (confianza plena), la mayor parte de encuestados se sitúa en un punto medio (5) de confianza hacia los políticos, pero solo hasta el año 2012. Además, durante todo el periodo la tendencia es a la baja, hasta el punto de que en los años 2014 y 2016, los que dicen no tener ninguna confianza hacia los políticos se sitúan por encima de los moderados, igual que están por encima los que se sitúan en los grados 2 y 3. Por lo tanto, se acusa el problema de la desconfianza hacia los políticos.

De este modo, la tendencia a la baja del número de encuestados que se inclinan por la opción 5 de confianza se mantiene durante todo el periodo de análisis y la tendencia de las posiciones de más desconfianza es al alza, según los datos disponibles. En el año 2002 y 2004, el porcentaje de encuestados que se inclinaba por el grado 5 de confianza era del 22%, para caer en 2006 hasta el 19% y recuperarse hasta el 20,8% en 2008. A partir de ese momento, sin embargo, los que optan por el grado 5 caen al 18% en 2010, al 17% en 2012, al 12 % en 2014 y al 14% en 2016. Al mismo tiempo, el número de los que dicen no tener ninguna confianza en los políticos aumenta

durante todo el periodo, con picos en 2010 y en 2014. Los que presentan una mayor desconfianza hacia los políticos representaban en 2002 el 11% de los encuestados; en 2004 y 2006, el 12%, respectivamente; y, en 2008, el 11%. En 2010, sin embargo, se llegó al 15,8%, en 2012 al 14%, en 2014, al 19,8%, y al 18% en 2016, con lo cual se observa un proceso de radicalización de la desconfianza hacia los políticos.



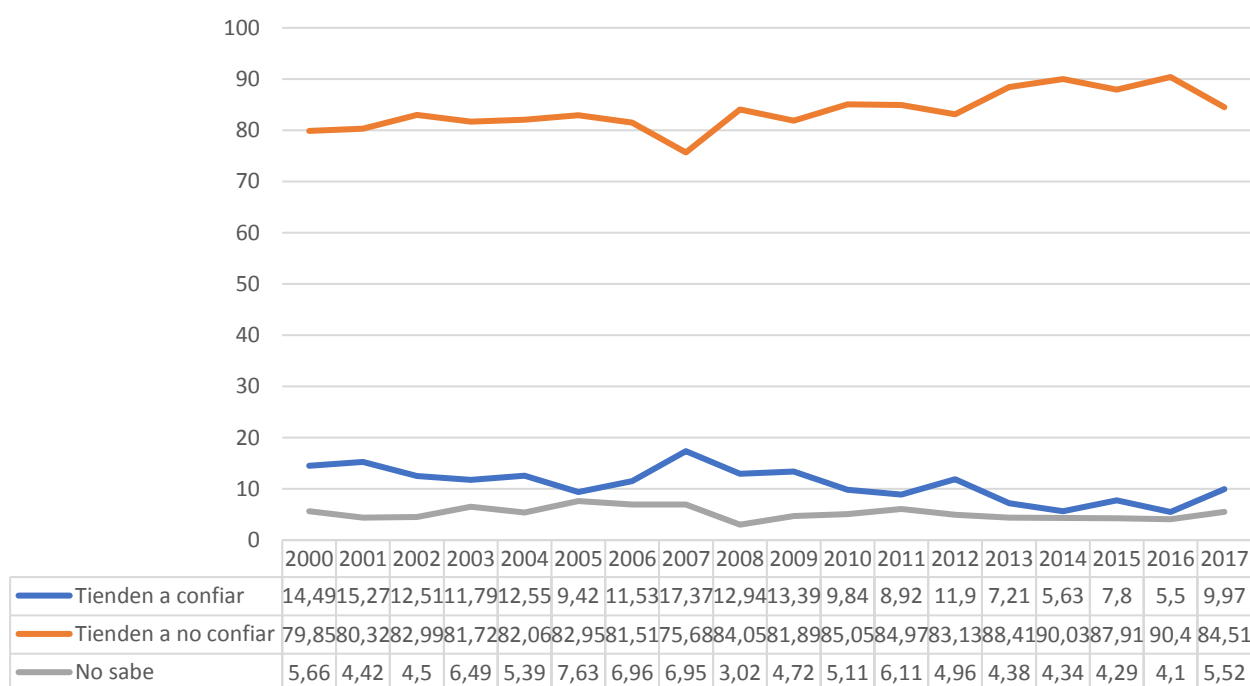
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

De la misma forma, los grados 2 y 3 de desconfianza también presentan una tendencia al alza durante el periodo. El grado 3 agrupaba al 15% de los encuestados en 2002, al 13% en 2004 y al 17% en 2006. En 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016 los porcentajes se situaron entre el 15% y el

16%. Por lo que se refiere al grado 2, el mayor ascenso se observa a partir del año 2008. En 2002, el porcentaje de encuestados que optaban por el grado 2 era del 12%, mientras que en 2004 llegó al 14% y en 2006, al 15%. En 2008 fue del 12%, pero en el año 2010 subió hasta el 14%, en 2012 hasta el 16%, en 2014, al 17,9%, y en 2016, al 17,2%, siendo el de 2014 su mayor valor durante el periodo. De nuevo, los grados que demuestran una mayor confianza hacia los políticos reúnen a una minoría de los encuestados. El problema de la desconfianza se observa también en lo que se refiere a la relación de la ciudadanía con los políticos.

El fenómeno de la desconfianza es más visible cuando se refiere a los partidos políticos. Según corroboran los datos recogidos en el Eurobarómetro para el periodo de análisis, entre el 80% y el 90% de los encuestados tienden a no confiar en los partidos políticos en Francia, tal y como se observa en el gráfico 48.

Gráfico 48. Confianza en los partidos políticos en Francia I



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

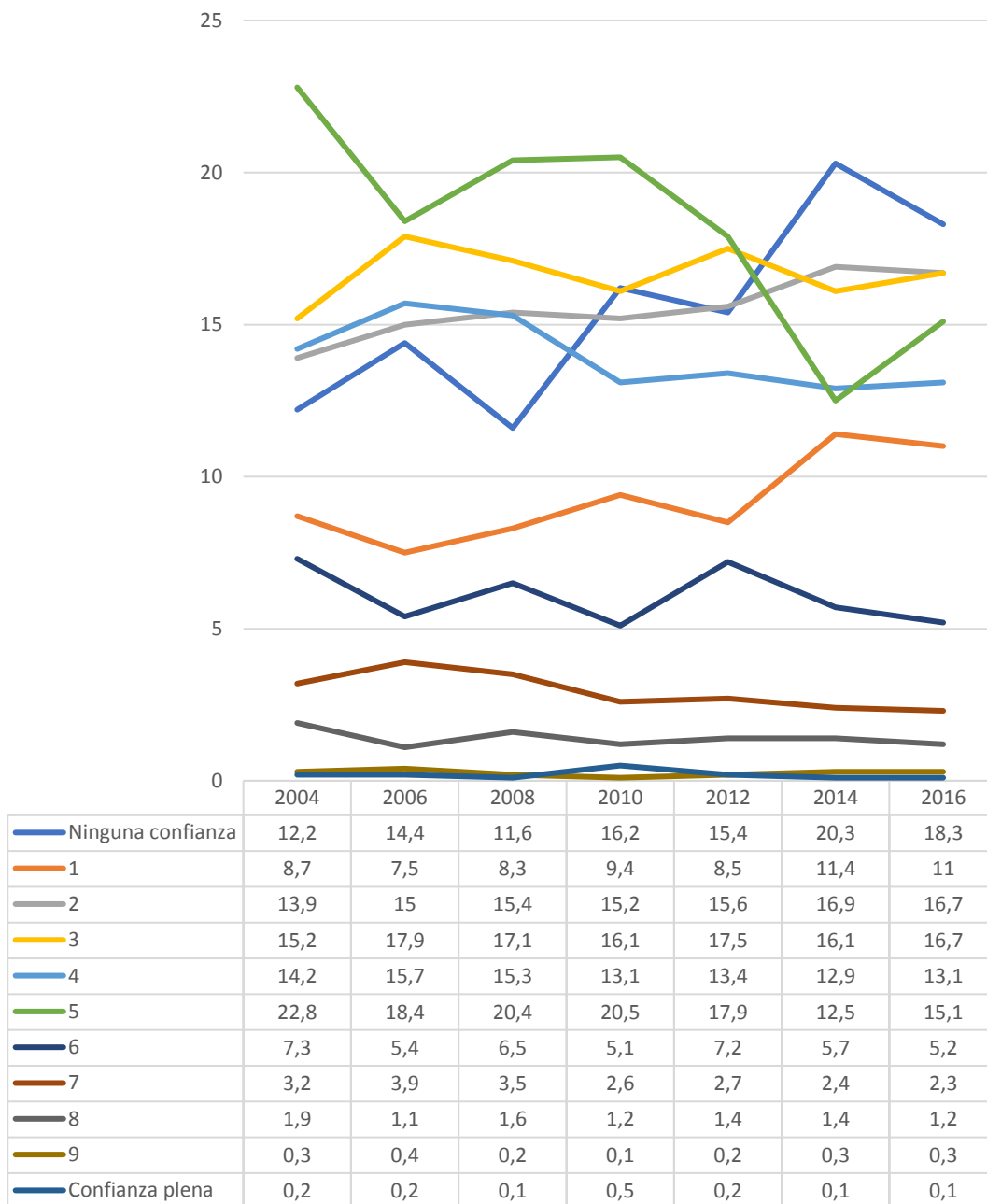
Al inicio del periodo, en el año 2000, el porcentaje de encuestados que manifestaba no confiar en los partidos políticos era del 79,8% y se mantuvo en torno al 80% hasta 2006. En 2007, el porcentaje bajó hasta el 75%, pero un año después ascendió hasta el 84% y se mantuvo en valores similares hasta el año 2012. A partir de entonces, la tendencia al alza se agudizó. En 2013

se llegó al 88%, en 2014 al 90%, en 2015 al 87% y en 2017 al 84%. Por lo tanto, la desconfianza hacia los partidos políticos es palpable durante todo el periodo de análisis.

En el lado opuesto, el porcentaje de los encuestados que tienden a confiar en los partidos políticos oscila, a lo largo del periodo, entre el 15% y el 5%. A principios de siglo, los porcentajes eran del 14%, el 15%, el 12% y el 11%, entre el año 2000 y el 2003, consecutivamente, para volver al 12% en 2004. Pero el porcentaje bajó al 9% en 2005. El pico de mayor confianza fue en 2007 cuando el 17% de los encuestados expresaba tener confianza en los partidos políticos. Sin embargo, a partir de ese momento, la tendencia a la baja continuó en los años siguientes, cuando los menores valores de confianza hacia los partidos políticos se dieron en 2014 y 2016, con el 5% de los encuestados que afirmaban confiar en los partidos políticos.

En la línea de los datos anteriores se encuentran los recogidos por la Encuesta Social Europea. Tal y como puede verse en gráfico 49, en una escala de 0 (ninguna confianza) y 10 (confianza plena) hacia los partidos políticos, el mayor número de encuestados se encuentra en la posición 5, intermedia, hasta el año 2012, en que el porcentaje cae drásticamente, aunque la tendencia hacia la caída empieza después de 2008.

Gráfico 49. Confianza en los partidos políticos en Francia II



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Según los datos disponibles, los encuestados que se situaban en un grado medio (5) o de confianza moderada eran el 22% en el año 2004. Después, en el 2006, el porcentaje bajó hasta el 18%. En cambio, en los años 2008 y 2010 el porcentaje se mantuvo en el 20%. El descenso fue mayor en 2012, cuando se llegó al 17% y, sobre todo, en 2014, con el 12% de los encuestados que manifestaban estar en un grado 5 de confianza hacia los partidos políticos en Francia. En el año 2016, el valor se recuperó hasta el 15%. El declive a partir del año 2012 hizo que los grados

de ninguna confianza, el 2 y el 3, superaran a los encuestados moderados que apostaban por el grado 5. Con estos datos, por tanto, se confirma el fenómeno de la desconfianza hacia los partidos políticos.

De este modo, la tendencia al alza de la opción más radical de desconfianza, la de ninguna confianza, se observa a partir de los años 2008 y 2012, especialmente. También suben y congregan a gran parte de los encuestados los grados 2 y 3 de confianza, es decir, los que manifiestan menos confianza hacia los partidos políticos. En concreto, cuando más baja el número de los encuestados que se sitúan en el grado 5, más suben los que dicen ubicarse en posiciones de desconfianza más radicales. Del mismo modo, el grado 4, que puede verse como moderado, aunque tendente a la desconfianza, cae a partir del 2010 con valores en torno al 13%, para ser superado por grados menores y más tendentes a la desconfianza.

Así, en el grado de ninguna confianza se encontraban en 2004 porcentajes del 12%, del 14% en 2006 y del 11% en 2008. Después, en los años 2010 y 2012 los porcentajes son del 16% y del 15%, respectivamente, y en 2014 asciende hasta el 20%, de forma que supera así al resto de grados, igual que en 2016, que se sitúa en el 18%. Por lo que se refiere a la opción 2, es decir, un grado bajo de confianza, la tendencia es al alza durante todo el periodo. De esta manera, el grado 2 congregaba al 13,9% de los encuestados en 2004, y se mantuvo alrededor del 15% en los años 2006, 2008, 2010 y 2012. En 2014 subió al 16,9% y en 2016 se mantuvo en el 16,7%. De una forma similar, el grado 3 reunía en 2004 al 15% de los encuestados; en 2006, al 17,9%; en 2008, al 17%; en 2010 bajó al 16%; en 2012 subió al 17%; y, en 2014, volvió al 16%, de modo que era superior también al número de encuestados que se mantenía en el grado 5 o moderado, como en el año 2016, cuando el porcentaje era del 16,7%. El grado 1 de confianza, que muestra una gran desconfianza, también tiende a crecer durante el periodo del análisis y, especialmente, a partir del año 2012. Del principio del periodo, con un porcentaje del 8% en 2004, se pasa al 11% del año 2016.

En el lado opuesto, los grados más altos, los que muestran una mayor confianza hacia los partidos políticos son lo que abarcan a un menor número de encuestados. Por ejemplo, el grado 7 reúne a entre el 2% y el 3% de los encuestados, el grado 8 se mueve en torno al 1% y los grados 9 y de confianza plena, no llegan al 1%, respectivamente. Por tanto, lo que se aprecia y se refuerza con los datos de la Encuesta Social Europea es que la desconfianza hacia los partidos políticos se radicaliza, en tanto que las posiciones moderadas caen y los grados menores, de más desconfianza, convencen a un mayor número de encuestados a lo largo del periodo.

Como se ha observado, la sociedad francesa, según los datos disponibles, muestra desconfianza hacia distintas instituciones políticas del país. Ello, además, se ve reforzado con los datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, que se pueden consultar en la figura 19.

Figura 19. Nivel de confianza en las instituciones francesas								
Año	Institución	Nivel de confianza						
		Mucha confianza	Bastante	No mucha	Ninguna	No sabe	Confianza	Desconfianza
2010	Asamblea Nacional	1	37	40	19	3	38	59
	Gobierno	2	30	36	30	2	32	66
	Primer ministro actual	5	33	35	24	3	38	59
	Presidente de la República actual	6	26	29	36	3	32	65
	Partidos políticos	0	14	51	31	4	14	82
2011	Primer ministro actual	9	29	29	27	6	38	56
	Presidente de la República actual	7	22	23	42	6	29	65
	Partidos políticos	0	13	52	29	6	13	81
2013	Asamblea Nacional	3	33	46	17	1	36	63
	Gobierno	2	23	38	36	1	25	74
	Primer ministro actual	3	22	33	41	1	25	74
	Presidente de la República actual	4	22	27	46	1	26	73
	Partidos políticos	0	11	48	40	1	11	88
2015	Asamblea Nacional	3	38	42	15	2	41	57
	Gobierno	3	30	39	26	2	33	65
	Primer ministro actual	6	37	35	21	1	43	56
	Presidente de la República actual	5	26	32	35	2	31	67
	Partidos políticos	1	13	52	33	1	14	85
2016	Asamblea Nacional	3	38	41	16	2	41	57
	Gobierno	2	27	38	32	1	29	70
	Primer ministro actual	3	30	35	30	2	33	65
	Presidente de la República actual	4	25	32	38	1	29	70
	Partidos políticos	1	11	47	40	1	12	87
2017	Asamblea Nacional	2	40	41	16	1	42	57
	Gobierno	2	26	43	28	1	28	71

Primer ministro actual	4	31	35	29	1	35	64
Presidente de la República actual	3	22	33	41	1	25	74
Partidos políticos	1	10	48	40	1	11	88

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF.

Según los datos disponibles, a partir del año 2010, la suma de los encuestados que dicen tener no mucha confianza y ninguna confianza es mayor que la suma de los que dicen tener mucha confianza y bastante confianza tanto al referirse a la Asamblea Nacional como al gobierno, al primer ministro, al presidente de la República y a los partidos políticos. Entre estas instituciones, los que congregan a un mayor número de encuestados que muestran desconfianza son los partidos políticos, ya que la suma de aquellos que dicen tener no mucha confianza y ninguna confianza en ellos es del 82% de los encuestados en el año 2010; del 81% en 2011; del 88% en 2013; del 85% en 2015; del 87% en 2016; y, del 88% en 2017. Por el contrario, para esos años, la suma de los que demuestran mucha confianza y bastante confianza en los partidos políticos se mueve entre el 11% y el 14%. Los datos corroboran de forma clara el problema de la desconfianza hacia los partidos políticos que se ha apuntado anteriormente.

En el lado opuesto, la institución que cosecha una menor desconfianza es la Asamblea Nacional. En el año 2010, la suma de quienes manifestaban tener no mucha confianza y ninguna confianza en esta institución era del 59%. Para el año 2013, era del 63%, algo superior, pero volvió a bajar hasta el 57% en el año 2015, valor que se mantuvo también en los años 2016 y 2017. La Asamblea Nacional es también la institución que mayor confianza concita. Para el año 2010, los encuestados que decían tener mucha confianza y bastante confianza en ella sumaban el 38%, mientras que en el 2013 eran el 36%; en 2015 aumentaron hasta el 41%, igual que en 2016; y, en 2017 eran el 42%. Por lo tanto, aunque los valores de desconfianza son mayores que los de confianza, la Asamblea Nacional resulta la institución que tiene una valoración más positiva en cuanto a confianza para los ciudadanos franceses.

Por lo que se refiere al gobierno, al primer ministro y al presidente, los valores de desconfianza tienden a ser ligeramente altos en los distintos años para los que hay datos disponibles. En 2010, la suma de los que afirmaban no tener mucha y ninguna confianza en el gobierno era del 66%, mientras que los que decían mantener mucha y bastante confianza eran el 32%. En el año 2013, la desconfianza subió al 74% y la confianza descendió al 25% de los encuestados. Para 2015, la desconfianza volvió a valores similares a los de 2010, con el 65% de desconfianza y el 33% de los encuestados que mostraba confianza en el gobierno. Pero, en 2016, los valores se asemejaron

a los del año 2013, con el 70% de los encuestados que manifestaba no confiar en el gobierno y el 29% que decía que sí lo hacía. Los valores se mantuvieron similares, con un ligero ascenso de la desconfianza, en 2017, con el 71% de desconfianza y el 28% de confianza.

Por lo que se refiere a la confianza en el primer ministro, siempre teniendo en cuenta que se pregunta por el primer ministro actual del momento en que se hace la encuesta, los datos de desconfianza son mayores que los de confianza en todos los años disponibles. De este modo, los datos de que se dispone coinciden con los primeros ministros François Fillon, del partido de centroderecha, Los Republicanos, que estuvo en el poder entre el año 2007 y el 2012; Jean-Marc Ayrault, del Partido Socialista, que fue primer ministro entre el 2012 y el 2014; Manuel Valls, también del Partido Socialista, entre 2014 y 2016; y, el también socialista, Bernard Cazeneuve, entre 2016 y mayo de 2017.

La suma de los que decían no tener mucha y ninguna confianza en el primer ministro en 2010 era del 59%, mientras que los que decían tener mucha y bastante confianza representaban el 38% de los encuestados. En el año siguiente, 2011, los valores fueron similares, con un 56% de desconfianza y el 38% de confianza. Sin embargo, en el año 2013, la desconfianza llegó al 74% y la confianza bajó hasta el 25% de los encuestados. En el año 2015, la desconfianza hacia el primer ministro era del 56%, mientras que la confianza era del 43%, pero al año siguiente la desconfianza volvió a subir y la confianza a descender, con porcentajes del 65% y del 33%, respectivamente. Para el año 2017, los valores fueron similares: el 64% de los encuestados mostró desconfianza hacia el primer ministro y el 35% se inclinó por la confianza.

Por lo que se refiere al presidente de la República francesa, que eran Nicolas Sarkozy, de Los Republicanos, entre 2007 y 2012; y, François Hollande, del Partido Socialista, entre el 2012 y mayo de 2017, los datos disponibles apuntan también a una tendencia al alza en la desconfianza de los ciudadanos. En el año 2010, los encuestados que decían sentir no mucha y ninguna confianza en el presidente de la República sumaban el 65%, mientras que los que manifestaban tener mucha y bastante confianza eran el 32% de los encuestados. Al año siguiente, 2011, los valores eran similares, aunque con un descenso en la confianza: el 65% de los encuestados mostraba desconfianza y el 29%, confianza. Por lo que se refiere al año 2013, la desconfianza aumentó hasta el 73% y la confianza cayó hasta el 26%. En 2015, el presidente cosechó el 67% de desconfianza entre los encuestados y el 31% de confianza, con lo que mejoraba ligeramente la situación; pero, en 2016 y 2017, la desconfianza volvió a aumentar y la confianza a bajar. El 70% de las personas preguntadas desconfiaba del primer ministro en 2016 y el 74% lo hacía en

2017. Por el contrario, el 29% confiaba en el presidente en 2016 y el 25% lo hacía en 2017, con lo que se observa una creciente desconfianza también hacia el presidente de la República.

De los datos contenidos en la figura 19 se puede extraer también el valor medio de confianza y desconfianza de cada institución. La media de confianza para la Asamblea Nacional es de 39,6 y la de desconfianza de 58,6. Por lo que se refiere al gobierno, el valor medio de confianza se sitúa en el 29,4 y el de desconfianza en el 69,2. En cuanto a la confianza y desconfianza hacia el primer ministro, los valores que se obtienen son del 35,3 para la primera, y de 62,3, para la segunda. Los valores medios para el presidente de la república son de 28,6 para la confianza y de 69 para la desconfianza. Por último, la confianza en los partidos políticos presenta una media de 12,5 para la confianza y de 85,1 para la desconfianza. De acuerdo con ello, la Asamblea Nacional concita una mayor confianza, seguida del primer ministro, después se encuentra el gobierno, el presidente de la República y, por último, los partidos políticos. En cuanto a la desconfianza, por consiguiente, se observa que los partidos políticos son los que más desconfianza generan, seguidos a cierta distancia por el presidente de la República y el gobierno, que están igualados. Después se encuentran el primer ministro y la Asamblea Nacional.

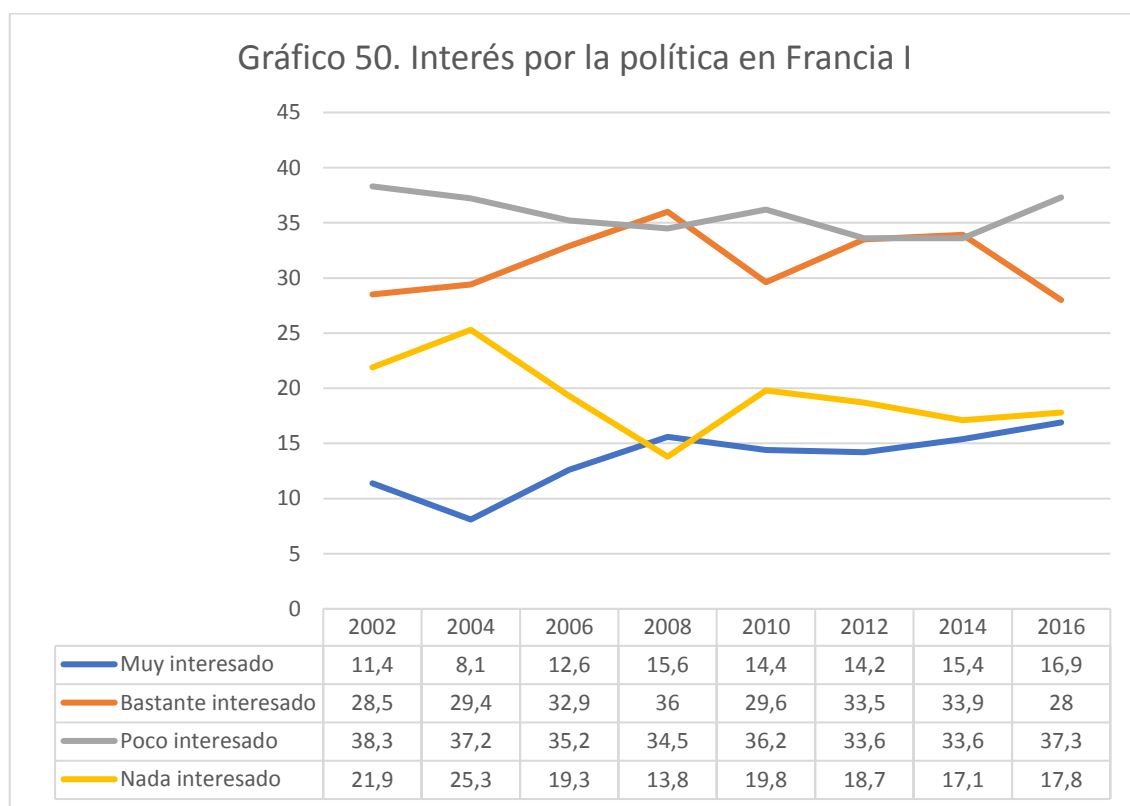
De los datos anteriores recogidos de diferentes fuentes se aprecia cómo el problema de la desconfianza política afecta en Francia a las principales instituciones, si bien los partidos políticos son los más tocados por la desconfianza y la Asamblea Nacional es la menos afectada por este fenómeno. En general, además, la problemática de la falta de confianza presenta una tendencia a crecer durante el periodo de análisis.

6.5. Desafección política

La desafección política, que se entiende como un sentimiento más profundo y duradero que la desconfianza, es un fenómeno que puede caracterizarse a partir de datos sobre el interés por la política de los ciudadanos, sobre cómo consideran éstos que es la toma de conciencia sobre asuntos políticos en su país y de si creen que es fácil participar en política. A partir de ello, se puede describir hasta qué punto la sociedad francesa está desencantada de una manera más honda de la política o bien lo que imperan son momentos de desconfianza elevada e incluso descontento, como se ha visto anteriormente.

Según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, que se pueden ver en el gráfico 50, se observa que durante la mayoría del periodo de análisis los encuestados que se muestran poco interesados por la política reúnen a más encuestados, aunque llegan a entrecruzarse e igualarse

con los que se muestran bastante interesados, que tienden a subir. Por otra parte, los que manifiestan estar nada interesados en la política muestran una tendencia a la baja y, en el otro extremo, los muy interesados experimentan una ligera subida.



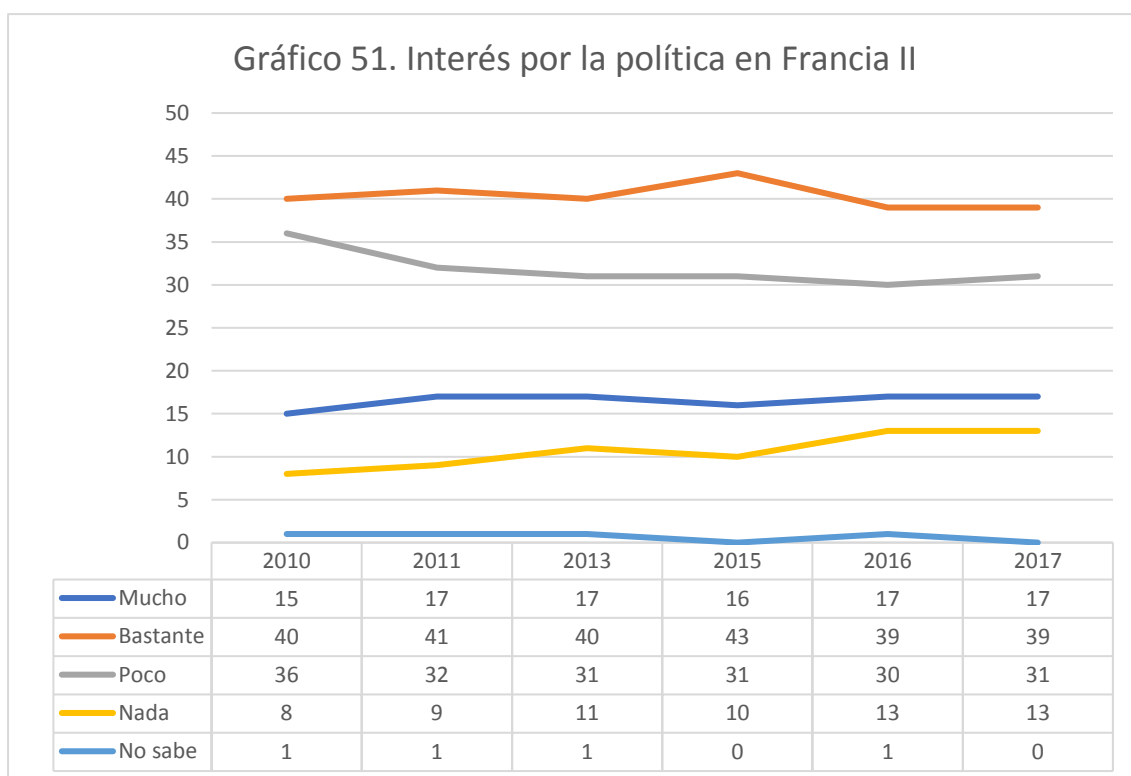
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Así, en el año 2002, los poco interesados por la política en Francia reunían al 38% de los encuestados. A partir de ese momento, la tendencia es a disminuir para el grupo que se considera poco interesado, con el 37% en 2004, el 35% en 2006, el 34% en 2008, el 36% en 2010, el 33% en 2012 y 2014, respectivamente, y el 37% en 2016. Al mismo tiempo, las personas preguntadas que se definían como bastante interesadas en la política era del 28% en 2002, un número que fue creciendo ligeramente a lo largo del periodo, hasta igualarse en los últimos años con los poco interesados. De esta forma, en el año 2004 los bastante interesados eran el 29% de los encuestados; en el 2006, el 32%; y, en 2008, el 36%. Sin embargo, en 2010 el número de los bastante interesados sufrió una caída, hasta el 29%, pero luego subió hasta el 33% en 2012 y el 33,9% en 2014. En 2016, el porcentaje fue del 28%.

Las posiciones más radicales, la de los muy interesados y la de los nada interesados, empiezan el periodo a cierta distancia y lo acaban con valores muy similares. En el año 2002, los nada interesados eran el 21,9% de los encuestados; en 2004, eran el 25%; y, a partir de entonces los

valores no llegan al 20%. Así, en 2006, los nada interesados eran el 19%; en 2008, el 13%, siendo este el valor menor; en 2010, eran el 19%; en 2012, el 18%; y, en 2014, el 17% igual que en 2016. En el otro extremo, los muy interesados eran el 11% de los encuestados en el año 2002, mientras que bajaron al 8% en 2004. Sin embargo, a partir del año 2006, la tendencia es a subir. En ese año es el 12% de los encuestados el que se manifiesta muy interesado en la política; en el 2008, es el 15%; en 2010 y 2012, el 14%, respectivamente; en el año 2014, se llega al 15% de los encuestados que se manifiestan como muy interesados en la política y, en 2016, el porcentaje se situó en el 16,9% de los preguntados.

De un modo similar, los datos aportados por el Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, que pueden observarse en el gráfico 51, muestran que la mayoría de los encuestados está bastante interesada en la política, de una forma estable entre los años 2010 y 2017. En el año 2010 los encuestados que decían estar bastante interesados en la política eran el 40%; en 2011 eran el 41%; en 2013, el 40%; en 2015, el 43%; y, el porcentaje bajó al 39% en 2016 y 2017, respectivamente. El siguiente grupo más numeroso de encuestados es el que se muestra poco interesado en la política, que tiende a la baja, según los datos disponibles. En el año 2010, el 36% de los preguntados decía estar poco interesado en la política. Ese porcentaje cayó al 32% en 2011, al 31% en 2013 y 2015, al 30% en 2016 y, volvió al 31% en 2017. Por otra parte, los que decían estar muy interesados por la política se mantuvieron estables en valores entre el 15% y el 17% y los que se mostraban nada interesados oscilaron entre el 8% y el 13%.

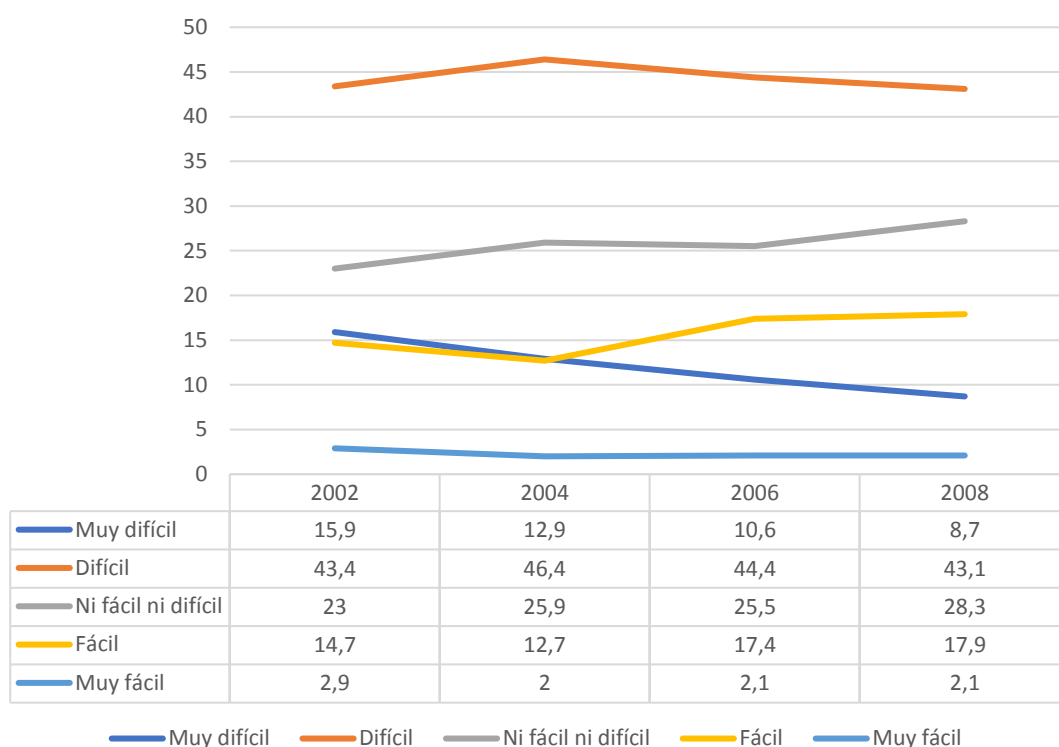


Fuente: elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF.

De este modo, según los datos disponibles, se observa que hay bastante interés por las cuestiones políticas en Francia y que se mantiene de forma estable durante el periodo de análisis, con lo que el fenómeno de la desafección política no se aprecia tan agudo como otros problemas relacionados con la representación política.

Aun así, entre el 43% y el 46% de los preguntados por la Encuesta Social Europea entre los años 2002 y 2008, consideraban que la toma de conciencia sobre asuntos políticos en Francia era difícil, tal y como puede verse en el gráfico 52.

Gráfico 52. Toma de conciencia sobre asuntos políticos en Francia



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

De la misma manera, los que consideraban que tomar conciencia de las cuestiones políticas no era ni fácil ni difícil eran el 23% en 2002; el 25,9% en 2004; y, el 25% en 2006; hasta que se llegó al 28% en 2008. En cambio, el número de los que consideraban que es fácil tomar conciencia de los asuntos políticos sube ligeramente, del 14% y del 12%, de 2002 y 2004, hasta el 17% de 2006 y 2008, respectivamente. Al contrario, los que consideran que la toma de conciencia sobre cuestiones políticas es muy difícil tiende a la baja, del 15% de 2002 al 8% de 2008. De este modo, aunque se ha visto que el interés se mantiene en la posición de bastante, la toma de conciencia sobre asuntos políticos es percibida como difícil.

Por otra parte, según datos del año 2014 de la Encuesta Social Europea, en una escala de 0 (ninguna facilidad) a 10 (extremadamente fácil), la mayoría de los encuestados, con el 17%, se situaba en el grado 3 y el 16% en el grado 2, por lo que consideraban que resulta difícil participar en política. El 14% se situaba en el grado 4 y el 12% consideraba que no hay ninguna facilidad a la hora de participar en política. En el punto medio, en el grado 5, se situaba el 15% de los

encuestados. Por tanto, la mayoría de los encuestados consideraba complicado participar en política.

Los encuestados demuestran bastante interés en las cuestiones políticas, pero, al mismo tiempo, consideran que es difícil tomar conciencia de las cuestiones políticas y que es difícil participar en política. Aun así, según los datos disponibles para el año 2010 y 2011 del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, los encuestados franceses consideran en un 48% en 2010, que las elecciones son el mayor vector de influencia ciudadana en la toma de decisiones en Francia, porcentaje que sube al 56% en 2011. Muy por debajo, los encuestados consideraban en 2010 como vectores de influencia boicotear empresas o productos (15%) y hacer huelga (11%) y en 2011, boicotear empresas o productos era apoyado por el 14% de los encuestados, y el tercer lugar como vector de influencia dejaba de ser la huelga y aparecía la manifestación en la calle, con un 8% de apoyo. De ello se desprende, pues, que las elecciones, la participación electoral, es considerada por la mayoría de los encuestados como el mejor vector de influencia en la toma de decisiones públicas. Con estos datos se observa, en consonancia con los anteriores, que la desafección no se manifiesta como un problema de representación política grave en la sociedad francesa.

En relación con la representación política, pueden hallarse agrupados bajo la dimensión de la responsabilidad política, o *responsibility*, los problemas de la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo. Estos tienen que ver con la responsabilidad en tanto que los representantes políticos son servidores públicos y, por tanto, la percepción de la ciudadanía sobre esa dimensión contribuirá a una mejor o peor relación entre los representantes y los representados y, en general, influirá sobre la concepción de la labor política y su utilidad. Sin embargo, aunque son factores a tener en cuenta, resulta más complicado de determinar hasta qué punto la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo (que puede ser activo o no), influyen en los resultados electorales.

6.6. Corrupción

La percepción de la corrupción en el sector público en Francia es baja si se compara con los 176 países que forman la clasificación que elabora la organización Transparencia Internacional. Aun así, esa percepción ha empeorado en los últimos años, de forma que los franceses perciben, según los datos de Transparencia, un mayor nivel de corrupción.

Transparencia Internacional clasifica a los países según la percepción de la corrupción que tiene la ciudadanía, de forma que usa una escala que va de 0 puntos (altos niveles de corrupción) a 100 puntos (percepción de muy bajos niveles de corrupción). Francia se situaba en 2017 en el puesto 23, igual que en 2016, en una clasificación de 176 países, con un índice de corrupción de 69 puntos para 2016 y de 70 para el año 2017. Este dato ha empeorado ligeramente en 2016, ya que en 2015 el índice era de 70, aunque Francia estaba igualmente en el puesto 23 de la clasificación. Durante todo el periodo de análisis, Francia ha variado su posición en el ranking y ha mantenido un índice de percepción de la corrupción entre 60 y 75 puntos.

Por lo que se refiere a 2014, el índice de percepción de la corrupción era de 69 puntos; en 2013 y 2012, de 71; en 2011 de 70; en 2010 de 68; en 2009 de 69; y, en 2008 de 60. Este último, el año 2008, es el que mantiene una percepción mayor de corrupción de todo el periodo de análisis y muestra un empeoramiento en relación con los años anteriores, en que los índices eran de 73 puntos para el año 2007, de 74 para 2006 y de 75 para 2005. Sin embargo, para los primeros 5 años del siglo XXI, la percepción de la corrupción era peor que para los años siguientes. En 2004 el índice de percepción de corrupción, según Transparencia Internacional, era de 70, en 2003 era de 69, en 2002 de 63 y en los años 2001 y 2000 era de 67, respectivamente.

De los datos anteriores se desprende que los años en que ha habido una peor percepción de la corrupción en Francia por parte de la ciudadanía son 2002 y 2008. Por lo que se refiere a la posición del país galo en la clasificación internacional de países en base a los índices de corrupción, su situación ha oscilado entre el puesto 18, posición de los años 2005 y 2006, y el puesto 26, donde se situaba en el año 2014. Por otra parte, según los datos disponibles en el Barómetro de la Confianza política de CEVIPOF, correspondientes a los años 2010 y 2011, se observa que el 67% de los encuestados en 2010 y el 64% en 2011, consideraban que había la misma corrupción en el país que antes, pero que ahora se habla más de ese problema. Por otra parte, una menor parte de los encuestados, el 25% en 2010 y el 29% en el año 2011, consideraban que en la actualidad hay más corrupción que antes. Una ínfima parte de los encuestados, el 6% tanto en el 2010 como en el 2011, consideraba que hay menos corrupción que antes. Por tanto, se observa que la mayoría de los encuestados perciben que hay más exposición pública de la corrupción, pero creen que, en efecto, hay la misma que en épocas anteriores.

Con respecto a la corrupción en Francia, aunque no se ignora la situación por parte de los encuestados, tampoco se percibe, según los datos disponibles, como un grave problema que afecte a la representación política.

6.7. Credibilidad

La falta de credibilidad es un problema que se relaciona directamente con la confianza depositada por parte de la ciudadanía en las distintas instituciones u organizaciones públicas, ya que la credibilidad política se consigue a través de la coherencia entre las promesas electorales y la acción política llevada a cabo. La credibilidad reúne, además, un compendio de actitudes y valores, como la honestidad, que se relacionan con la confianza hacia los líderes políticos. De hecho, según los datos ofrecidos por el Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, en 2010, el 37% de los encuestados consideraba que la primera cualidad que debía tener un político para confiar en él es que fuera honesto y el 25% opinaba que el político debía atenerse a sus promesas. En el año 2011, los porcentajes respectivos fueron del 36% y el 24%. En 2017, la honestidad era una cualidad superlativa para el 35% de los encuestados y que el político se atuviera a sus promesas lo era para el 14%. Sin embargo, en contraste con esa idea, en el año 2016, los encuestados que experimentaban sentimientos de desconfianza al pensar en la política eran el 39% y los que tenían sentimientos de disgusto eran el 33%. En el año 2017, los encuestados que sentían desconfianza eran el 40%, y el 26% los que experimentaban disgusto. Del mismo modo, en el año 2016, los encuestados que decían sentir sensaciones de decepción al pensar en los hombres y mujeres políticos eran el 54% y los que manifestaban sufrir disgusto eran el 20%. Con estos datos se observa que, aunque idealmente se valora la honestidad como la primera cualidad que debe tener un político, la realidad al pensar en la política o los políticos en particular es de desconfianza y de disgusto, lo que lleva a inferir que las desavenencias entre las expectativas ideales de las cualidades que debe poseer un político y las que se perciben en realidad por parte de la ciudadanía merman la credibilidad política.

De este modo, la credibilidad política está directamente relacionada con la capacidad de la ciudadanía de confiar en los compromisos políticos de los representantes y de estos últimos de cumplir o no sus promesas y, en todo caso, de dar explicaciones creíbles y confiables sobre las actuaciones políticas. Así, se trata de un problema que afecta a la responsabilidad de los representantes frente a los representados y a su capacidad de convencer a la ciudadanía en la rendición de cuentas, por tanto, interfiere con el ejercicio de la representación política.

Asimismo, siguiendo la literatura revisada, que une los datos sobre desconfianza política al problema de la credibilidad, en este caso también los datos recabados para comprobar el sentimiento de desconfianza hacia las instituciones francesas dan una idea de la credibilidad que ostentan hacia la ciudadanía.

Los datos que evidencian una desconfianza creciente en la mayoría de instituciones francesas (reunidos en los gráficos que van del 44 al 49 y en la figura 19), son indicativos del grado de credibilidad de estas instituciones. Como se ha visto, los partidos políticos son los más afectados por el problema de la desconfianza y la Asamblea Nacional es la que mayor confianza concentra. De ahí se puede inferir que la credibilidad de los partidos políticos es la que más dudas plantea a la ciudadanía y que la Asamblea Nacional sería la institución que más credibilidad conserva, lo que va en sintonía con los datos encontrados.

6.8. Abstencionismo

El abstencionismo o la no participación en el sufragio electoral activo era ya considerado por los pensadores liberales y utilitaristas como un potencial problema en la representación política. Esto se debía a que, si gran parte de los sujetos con derecho a voto no lo ejercían, se desvirtuaba el sentido de la democracia. De hecho, la abstención electoral se define como el no acudir al proceso electoral.

Para Reniu (2009), el abstencionismo es, en efecto, la no participación en algo a lo que se tiene derecho y ha pasado a referirse casi de un modo exclusivo al comportamiento político de los que optan por no expresar su parecer en las convocatorias electorales. Así, se trata de lo contrario de la participación. En general, suelen darse dos tipologías. Por una parte, se encuentra la abstención pasiva o sociológica y, por otra, la abstención activa o ideológica (Memmi, 1985 en García, 1998). La abstención pasiva tiene que ver con el desinterés por la política, derivado del aislamiento geográfico o social del sujeto (Reniu, 2009) y la abstención activa se relaciona con un acto político de rechazo a la legitimidad del sistema político. Dentro de la abstención pasiva puede también encontrarse la distinción de abstención técnica, para referirse a aquellas personas que no pueden ejercer el derecho al voto por razones más allá de su voluntad, como los defectos en el censo, la enfermedad, la distancia al colegio electoral o por desplazamientos (Reniu, 2009).

En las elecciones comprendidas en el periodo de análisis para el caso francés se observa que la abstención se sitúa en torno al 20%, aunque fluctúa según los años. En las elecciones presidenciales del año 2002, según datos del Ministerio del Interior francés, la abstención fue del 20%, mientras que en los comicios del año 2007 ese porcentaje descendió al 16%. En las elecciones presidenciales de 2012, la abstención alcanzó el 19% y en las del año 2017 subió al 25%. Según los datos disponibles del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, del año 2010, el 53% de los encuestados declaraba no haberse abstenido nunca en las elecciones y el

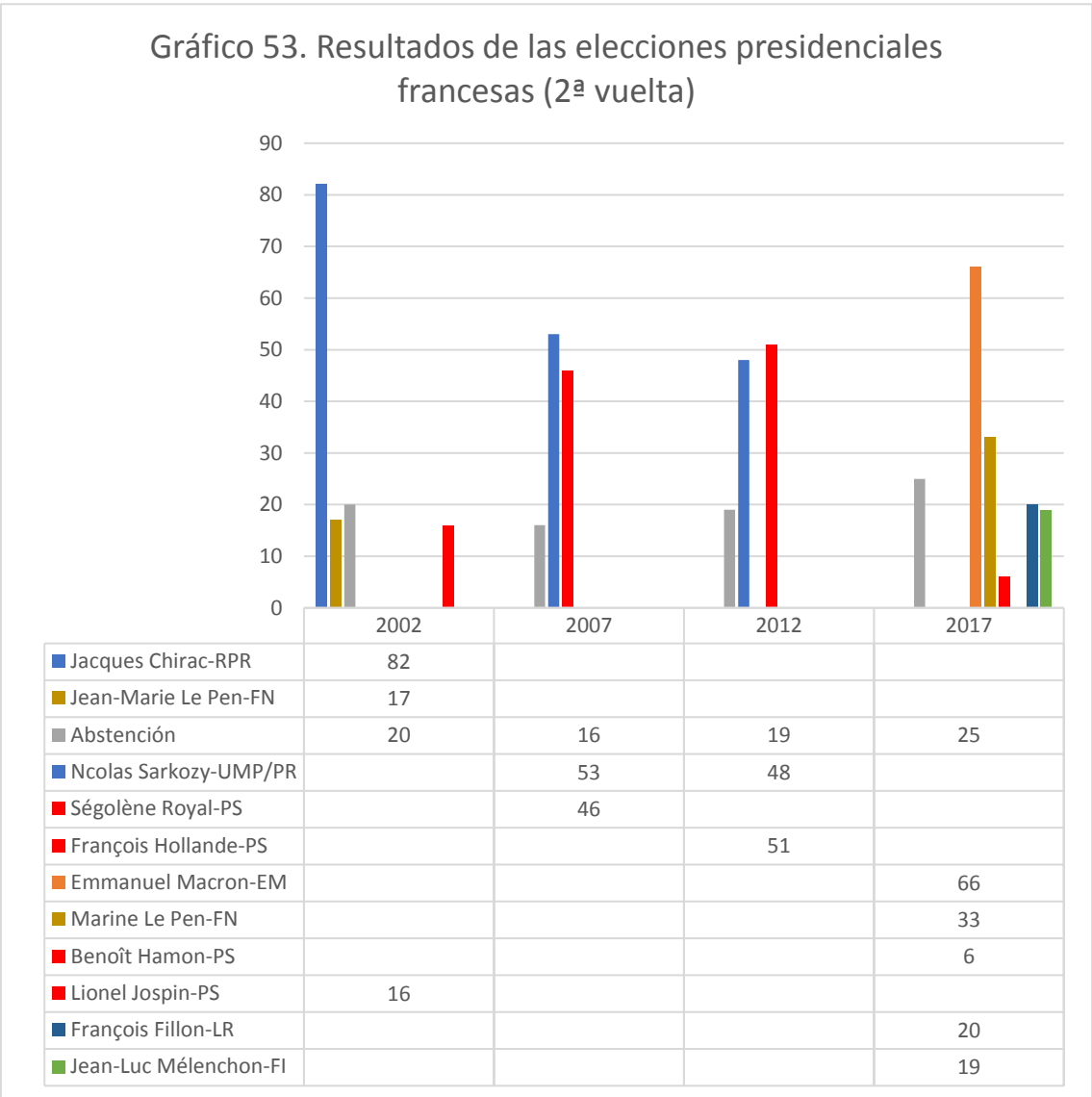
38% reconocía haberlo hecho alguna vez. Un pequeño porcentaje de los encuestados, el 2%, manifestaba abstenerse muy a menudo y el 5% decía hacerlo a menudo. Ello, unido a los datos aportados sobre la importancia que dan los franceses a la participación electoral como vehículo de influencia en la política, permite inferir que el abstencionismo no se manifiesta como un problema grave de participación política en Francia. Además, según la Encuesta Electoral Francesa elaborada por CEVIPOF, en mayo de 2017, el 37% de los encuestados que decían haberse abstenido aducían razones personales que les habían impedido ir a votar. Por otra parte, el 18% esgrimía que no se sentía representado por ningún candidato. En julio de 2017, los porcentajes eran similares: el 37% decía no haber podido ir a votar por razones personales y el 17% consideraba no sentirse representado. Estos datos apuntan, pues, a una tendencia hacia la abstención técnica más que hacia la abstención activa.

La situación descrita anteriormente de desarrollo de distintos problemas relacionados con la representación política se da en un contexto fundamentalmente bipartidista, que se rompe en el año 2017, y bajo una participación electoral que se sitúa entre el 60% y el 70%, aproximadamente.

Según los resultados electorales facilitados por el Ministerio del Interior francés y que se pueden ver en el gráfico 53, se observa que, en las elecciones presidenciales del año 2002, el ganador fue Jacques Chirac, del partido conservador Agrupación por la República (PRP, en sus siglas en francés y que fue sustituido por la Unión por la Mayoría Presidencial) con un 82% de los sufragios. En segundo lugar, Jean-Marie Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, consiguió el 17% de los apoyos. En esas elecciones, el candidato del Partido Socialista, Lionel Jospin, no pasó a la segunda vuelta de las presidenciales, al cosechar el 16% de los votos en primera vuelta.

En las elecciones presidenciales del año 2007 se observa la tendencia bipartidista, igual que en las elecciones del año 2012. De este modo, en 2007, Nicolas Sarkozy, del partido de centroderecha Los Republicanos (PR, por sus siglas en francés), ganó las elecciones con el 53% de los apoyos y Ségolène Royal, del Partido Socialista, quedó en segundo lugar con el 46%. En el año 2012, fue François Hollande, del Partido Socialista, el que venció en los comicios, con el 51% de los apoyos y Sarkozy quedó en segundo lugar con el 48% de los votos. Sin embargo, las elecciones del año 2017 son las que rompieron la tendencia bipartidista, ya que el ganador fue Emmanuel Macron, con un partido creado ad-hoc, En Marche, que consiguió el 66% de los apoyos. En segundo lugar quedó la ultraderechista Marine Le Pen, del Frente Nacional. Los conservadores, con François Fillon al frente, se quedaron en el 20% y la mayor debacle fue para el Partido Socialista, que consiguió el 6% de los apoyos, con el candidato Benoît Hamon. En esas

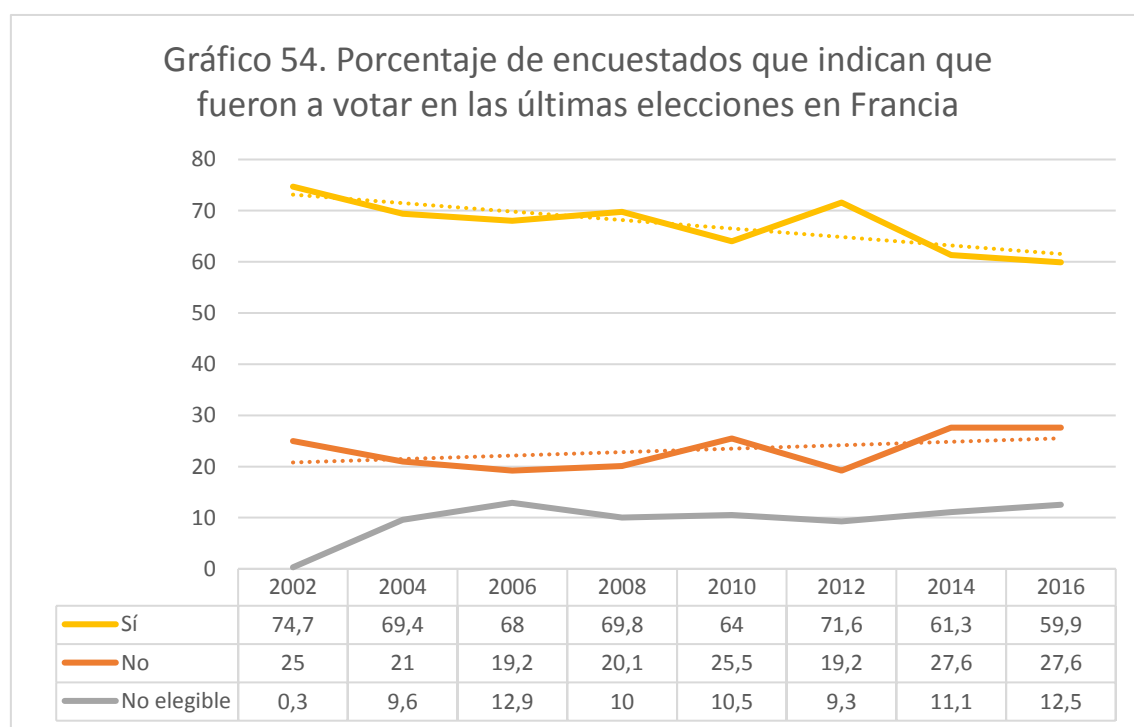
elecciones también participó el partido izquierdista Francia Insumisa, con Jean-Luc Mélenchon, que consiguió el 19% de los votos. En todo el periodo de análisis, las elecciones de 2017 fueron también en las que se produjo una mayor abstención, con el 25%.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior francés. Los datos sobre el Partido Socialista de 2002 y 2017 corresponden a la 1ª vuelta, puesto que el partido no obtuvo suficientes votos para pasar a segunda vuelta.

Durante el periodo de análisis, según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, se observa que el número de los encuestados que dicen que fueron a votar en las últimas elecciones tiene una tendencia a caer y el de los que manifiestan que no fueron a votar tiene una tendencia ascendente, tal y como puede verse en el gráfico 54. De esta manera, en el año 2002, los que indicaban que sí habían ido a votar eran el 74% de los encuestados y los que decían

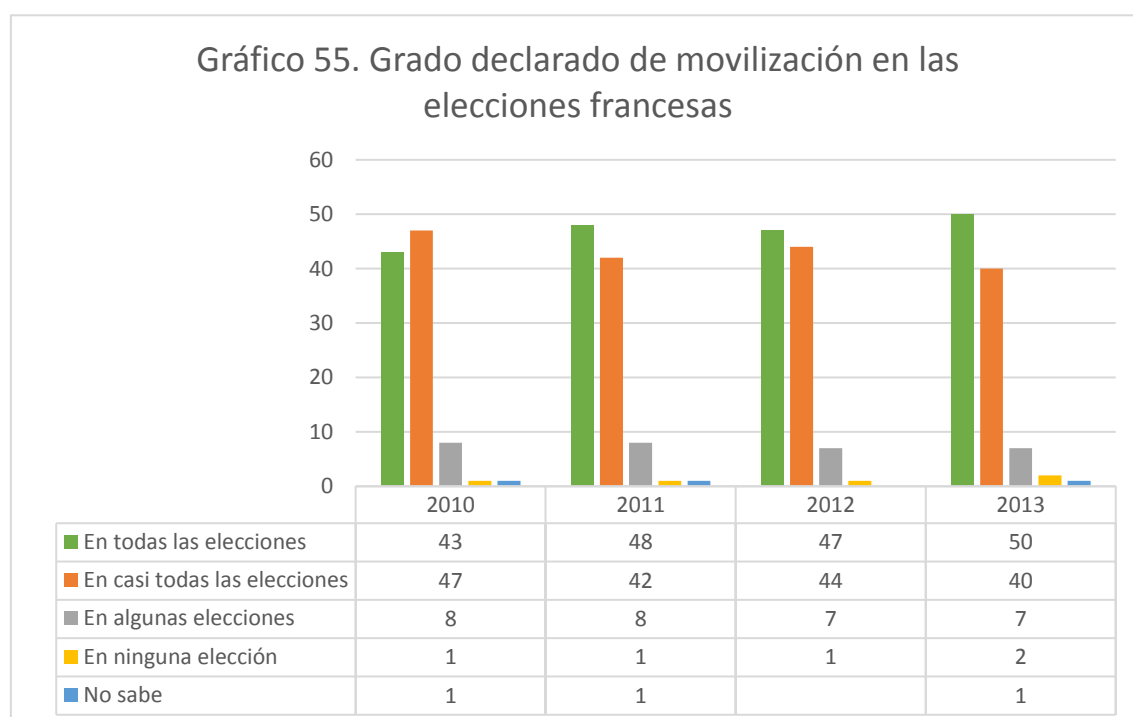
que no habían acudido a las urnas eran el 25%. En el año 2004, los encuestados que sí decían haber votado eran el 69%, mientras los que decían que no, eran el 21%. De un modo similar, en 2006 y 2008, los porcentajes de los que sí manifestaban haber ido a votar eran del 68% y del 69%, respectivamente, mientras que los que decían que no, eran el 19% y el 20%. En el año 2010 se da una caída de los que dijeron que sí, con el 64%, y en consonancia, un pico de los que dijeron que no, con el 25%. Sin embargo, en el año 2012 crece el porcentaje de encuestados que dijeron que sí habían ido a votar, con el 71%, y bajó el de los que manifestaban que no, con un 19%. En el año 2014, sin embargo, la tendencia a la baja en los que decían que sí siguió, con el 61%, y aumentó el número de los que decían que no, con el 27%. De un modo similar, en el año 2016, los que dijeron que sí habían ido a votar eran el 59,9% y los que dijeron que no, el 27,6%. Por tanto, se observa una ligera tendencia al alza de los que dicen que no fueron a votar y una ligera tendencia a la baja de los que aseguraban que sí habían ido a votar.



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Asimismo, según el Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, en el año 2010, el 47% de los encuestados decía haber ido a votar en casi todas las elecciones y el 43% manifestaba haberlo hecho en todas. Los porcentajes casi se invirtieron en el año 2011, cuando el 48% aseguraba haber votado en todas las elecciones y el 42% decía haberlo hecho en casi todas. De la misma manera, las cifras se mantuvieron similares en 2012, con el 47% para los que decían haber

votado en todas las citas electorales y el 44% eran los que manifestaban haber ido a votar en casi todas. En el año 2013, los que habían ido a votar en todas las elecciones llegaban al 50% y se quedaban en el 40% los que decían que habían ido a votar en casi todos los comicios. En esos años, los que decían haber votado en algunas elecciones se mantenían entre el 7% y el 8% y los que decían que no habían ido a votar en ninguna elección se mantenían en torno al 1%, tal y como puede verse en el gráfico 55. La gran mayoría de los encuestados manifestaba un alto interés en la participación electoral, a juzgar por los datos disponibles.

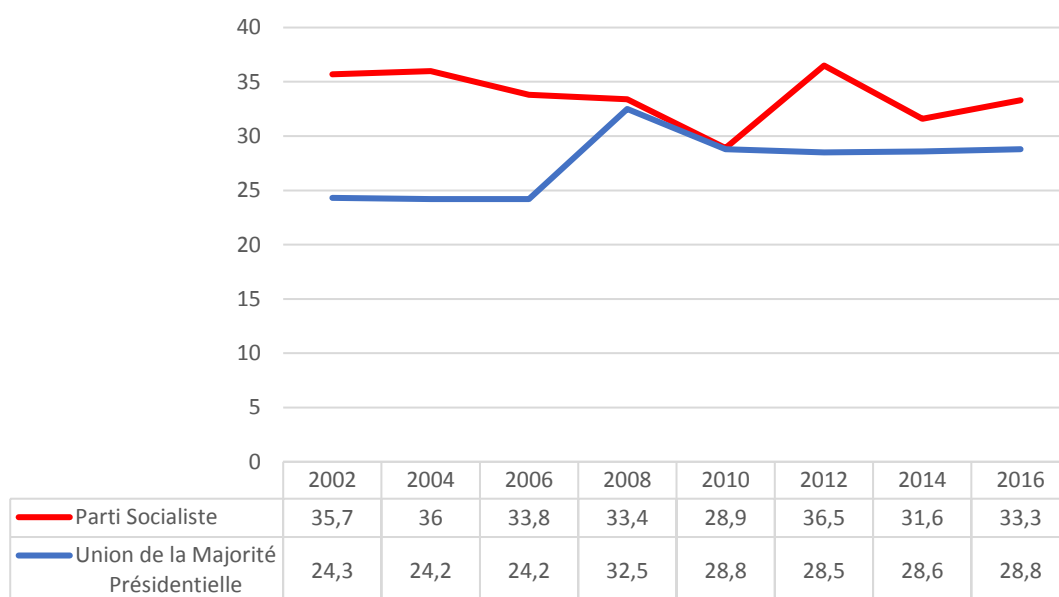


Fuente: elaboración propia a partir de datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF.

Del mismo modo, durante gran parte del periodo de análisis, que va desde el año 2000 al 2017, se pone de manifiesto que los encuestados dicen haber votado más al Partido Socialista que a la Unión de la Mayoría Presidencial¹⁴, la opción conservadora, con una caída de la opción socialdemócrata en el año 2010, según puede verse en el gráfico 56.

¹⁴ Llamado inicialmente Unión por la Mayoría Presidencial y después Unión por un Movimiento Popular fue un partido político que nació para apoyar la candidatura de Jacques Chirac en 2002, después el partido cambió de nombre por el de Los Republicanos. Su tendencia es conservadora, de centroderecha.

Gráfico 56. Principales partidos votados en las últimas elecciones en Francia (1ª vuelta)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

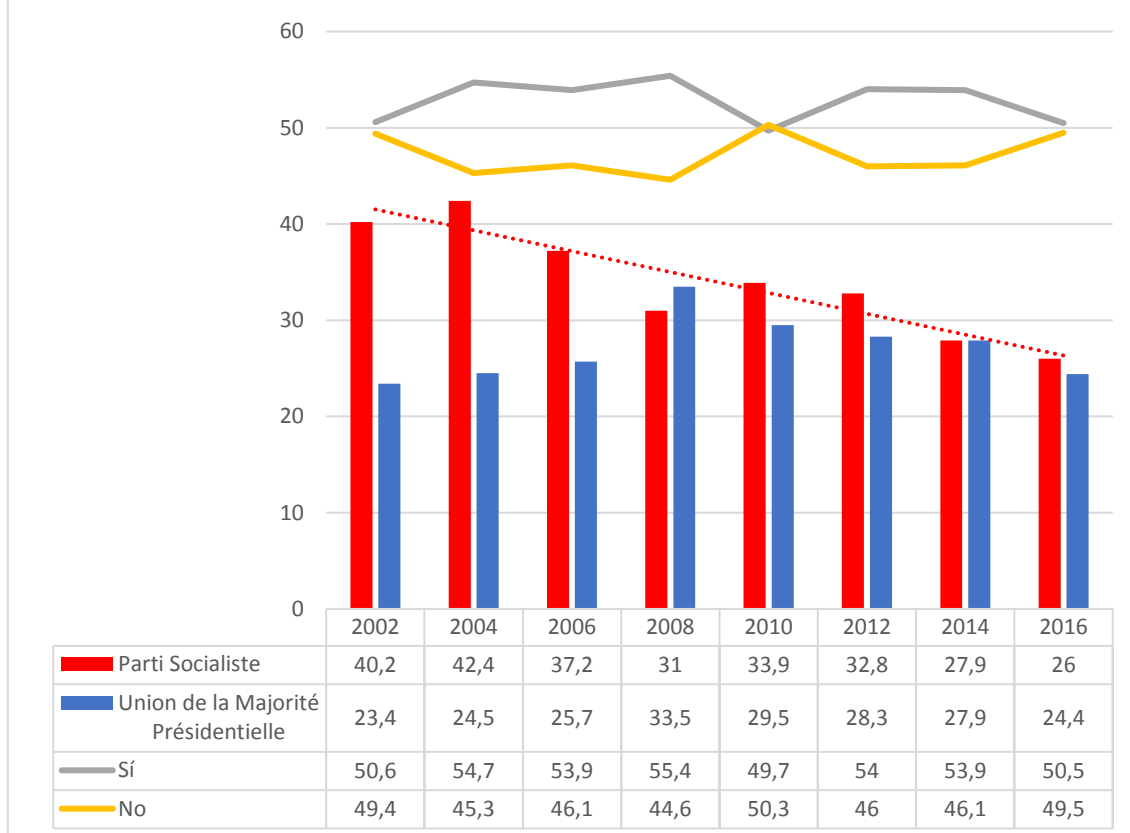
Según los datos de la Encuesta Social Europea, entre los años 2002 y 2014, los partidos más votados fueron los que representaban el clásico bipartidismo de socialdemócratas versus conservadores. Así, excepto en el año 2010, en que se observa un empate entre las dos fuerzas con el 28% de los encuestados afirmando estar cerca de un y otro partido, en el resto de oleadas, el Partido Socialista tiene un número mayor de partidarios. En el año 2002, el 35% de los encuestados aseguró haber votado al Partido Socialista en las últimas elecciones, mientras que el 24% dijo haberlo hecho por la opción conservadora. En el año 2004, los porcentajes se mantuvieron similares, con el 36% para los socialdemócratas y el 24% para el centroderecha. A partir de entonces se aprecia una caída en el apoyo al Partido Socialista y un repunte de apoyo a la Unión de la Mayoría Presidencial. En el año 2006 y 2008, el 33%, respectivamente, los encuestados decían haber votado a los socialistas, mientras que los conservadores pasaron del 24% al 32% en esos años. Sin embargo, la opción de derechas se estancó en el 28% de los encuestados en los años 2010, 2012 y 2014, mientras que el porcentaje de personas que decían haber votado al Partido Socialista osciló del 28% de 2010 al 31% del año 2014, pasando por el 36% de 2012. En 2016, los que decían haber votado al Partido Socialista eran el 33,3% y los que decían haber votado a los conservadores eran el 28,8%, en línea con los datos anteriores.

Los resultados reales del Partido Socialista en las elecciones presidenciales fueron en el 2002 del 16% de los sufragios en primera vuelta; del 46% en segunda vuelta en 2007; del 51% en segunda

vuelta en 2012; y, del 6% en primera vuelta en el año 2017. Ahora bien, se observan ciertas diferencias entre algunos de los resultados electorales y los datos de la Encuesta Social Europea, ya que, por ejemplo, los datos de 2004 son del 36% de los encuestados a favor de los socialistas, pero en las últimas elecciones (las de 2002), Lionel Jospin no había conseguido pasar a segunda vuelta al obtener el 16% de los apoyos. En el año 2008, la encuesta muestra que los que decían haber votado socialista eran el 33%, mientras que en las últimas elecciones (las de 2007), el Partido Socialista había obtenido el 46% de los apoyos, en segunda vuelta, pero el 25% en primera vuelta. Del mismo modo, en 2014, los datos de la encuesta daban el 31% de encuestados a favor de los socialdemócratas, mientras que en realidad habían ganado las elecciones de 2012 con el 51% del apoyo, aunque en primera vuelta habían obtenido el 28% del sufragio. Así, en los datos de la Encuesta Social Europea se tendía hacia un recuerdo de apoyo mayor a los socialistas en primera vuelta del que había sido en realidad.

Los datos disponibles para el periodo de análisis revelan que aproximadamente la mitad de los encuestados siente más cercanía por algún partido en particular que por el resto y, aunque con tendencia al declive, esa simpatía se concentra en el Partido Socialista, tal y como queda reflejado en el gráfico 57.

Gráfico 57. Cercanía a un partido en particular y a qué partido en Francia



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

En el año 2002, el 50% de los encuestados afirmaba sentir más simpatía por un partido en particular que por los demás, mientras que el 49% decía que no, según los datos de la Encuesta Social Europea. En los años 2004, 2006 y 2008, el porcentaje de los que sí decían sentir más simpatía por un partido que por otro era superior a los que decían que no, con un 54%, 53% y 55%, respectivamente, frente al 45%, 46% y 44% de los encuestados que opinaba que no tenía más simpatía por un partido en particular. En el año 2010, sin embargo, el porcentaje de encuestados que afirmaba tener más simpatía descendió al 49%, mientras que el de los que decían que no subió al 50%. En 2012 y 2014 los porcentajes de los que decían sentir más simpatía subieron, con valores del 54% y del 53,9%, respectivamente, y del 46% en ambos años para los que decían no sentir más simpatía por ningún partido en particular. En el año 2016, los que decían que sí sentían más simpatía por un partido que por otro eran el 50% y los que decían que no eran el 49%. En este punto se pone de manifiesto una polarización entre los que sienten una identificación partidaria clara y los que no, que se mantiene en torno a la mitad de los encuestados en gran parte del periodo de estudio.

Además, los datos muestran que la simpatía partidista se mantiene mayoritariamente en el Partido Socialista, aunque la tendencia es a caer. En el año 2002, el 40% de los encuestados se inclinaba por manifestar más cercanía por el Partido Socialista y en el 2004, eran el 42%. A partir de ahí, sin embargo, esa cercanía se ve mermada. En el año 2006 fue el 37% de los encuestados el que se inclinaba por los socialistas; en 2008, fue el 31%; en 2010, el 33%; en 2012, el 32%; en 2014, el 27,9% y en 2016 era el 26%. Aunque esas cifras son superiores en todas las oleadas a las de su principal competidor, la simpatía por el Partido Socialista que manifiestan los encuestados va a la baja en todo el periodo, según los datos de la Encuesta Social Europea. Por lo que se refiere a la Unión de la Mayoría Presidencial (llamado después Unión por un Movimiento Popular y Los Republicanos), la cercanía manifestada por esa opción es del 23% en 2002; del 24% en 2004; y, del 25% en 2006. Esa simpatía crece en los años siguientes, con el 33% de los encuestados que dicen sentirse más cerca del partido conservador en el año 2008; con el 29% en 2010; el 28% en 2012; y, el 27,9% en 2014, año en que se pone de manifiesto un empate entre ambas opciones políticas, consideradas antagónicas. En el año 2016, la cercanía por Los Republicanos se sitúa en un porcentaje del 24%, con lo cual también descendió.

Así, según los datos, se observa que el Partido Socialista es el que más cercanía genera durante gran parte del periodo de análisis, lo que contrasta con sus resultados electorales, sobre todo en el año 2002, cuando el candidato socialista no consiguió pasar a segunda vuelta, y, de forma particular, en el año 2017, cuando el Partido Socialista obtuvo el 6% del apoyo electoral en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

6.9. Problemas y resultados electorales

Durante el periodo de análisis, que va del año 2000 al 2017, se celebran en Francia cuatro elecciones presidenciales, cuyos resultados pueden consultarse en el gráfico 53. Concretamente, los comicios tienen lugar en los años 2002, 2007, 2012 y 2017. Así, en los distintos años puede apreciarse la incidencia de los problemas relacionados con la representación política y los resultados electorales obtenidos por los distintos partidos, y en especial, por el Partido Socialista.

Por lo que se refiere al problema del descontento político, en el año 2002, se pueden observar distintos parámetros. Según el Eurobarómetro, el 51% de los encuestados se mostraba bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Francia, mientras que el 30% se mostraba no muy satisfecho. Para ese año, la suma de los que se manifestaban muy satisfechos y bastante

satisfechos daba el 58,6%, mientras que la suma de los que decían sentirse no muy satisfechos y nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia era del 39,4%.

Según la Encuesta Social Europea, en el 2002, el 20% de los encuestados se encontraba en una posición intermedia (5) con respecto al funcionamiento de la democracia, cifra que representaba el valor mayoritario. Los grados que indicaban una mayor satisfacción con el funcionamiento de la democracia (del 6 al extremadamente satisfecho) congregaban, sumados, al 38,5% de los encuestados. En cambio, los encuestados que apostaban por posiciones más cercanas a la insatisfacción (del 4 al extremadamente insatisfecho) eran el 41,2%.

En referencia al nivel de satisfacción con el gobierno nacional galo, en el año 2002, el 23% de los encuestados se situaba en un nivel intermedio de satisfacción (5), según la Encuesta Social Europea. Los grados que más se aproximaban a la satisfacción con el gobierno nacional (del 6 al extremadamente satisfecho) sumaban el 26,7% de los encuestados, mientras que los grados que se aproximaban más a la insatisfacción (del 4 al extremadamente insatisfecho) reunían al 50% de los encuestados.

Por lo tanto, en el año 2002 se aprecia que, según el Eurobarómetro, el 58% de los encuestados se mostraba satisfecho con el funcionamiento de la democracia. En cambio, según la Encuesta Social Europea, los insatisfechos eran el 41%, los satisfechos eran el 38% y los que se situaban en un punto intermedio eran el 20%. Por lo que se refiere a la satisfacción con el gobierno, el 50% estaba insatisfecho, el 26% se mostraba satisfecho y el 23% se situaba en un punto intermedio.

En lo referente al problema del alejamiento entre los representantes y los representados, se observa, en el año 2002, que los preguntados por la Encuesta Social Europea sobre si la política es demasiado complicada de entender, el 34% respondió que lo es ocasionalmente, mientras que los encuestados que creían que la política es demasiado complicada de entender frecuentemente y regularmente sumaban el 44% de los encuestados. En cambio, los que opinaban que lo es nunca y raramente eran, conjuntamente, el 21,8% de los encuestados. Por tanto, se pone de manifiesto que un mayor número de encuestados consideraba la política como difícil de entender.

En cuanto a la desconfianza política, para el año 2002, según el Eurobarómetro, se observa que el 57,8% de los encuestados tendía a no confiar en el parlamento nacional francés. Según la Encuesta Social Europea para ese año, el 28% se ubicaba en una posición intermedia (5) de confianza en el parlamento nacional francés, mientras que los grados más cercanos a la

desconfianza (del 4 al de ninguna confianza) sumaba al 42,7% de los encuestados y los grados de confianza (del 6 al de confianza plena) eran el 29% de los encuestados.

Por lo que se refiere a la confianza en los políticos en el año 2002, según la Encuesta Social Europea, se observa que el 22% de los encuestados se ubicaba en un grado intermedio (5) de confianza. En este caso, los grados de desconfianza (del 4 al de ninguna confianza) sumaban al 59,9% de los preguntados y los grados de confianza (del 6 al de confianza plena) congregaban al 17,9% de los encuestados. La desconfianza en los partidos políticos, según el Eurobarómetro para el año 2002, reunía al 82,9% de los preguntados.

En el problema de la desafección política, se pone de manifiesto, según los datos de la Encuesta Social Europea, que la suma de los que se muestran poco y nada interesados es del 60,2%, mientras que los muy interesados y los bastante interesados eran el 39,9% de los preguntados. Además, en el 2002, el 59,3% creía que la toma de conciencia sobre asuntos políticos era muy difícil y difícil, frente al 17,6% de los encuestados que creía que era fácil y muy fácil y el 23%, que consideraba que no era ni fácil ni difícil.

Por lo que se refiere al problema de la corrupción, según datos de Transparencia Internacional comentados anteriormente, el año 2002 es percibido como uno de los peores del periodo de análisis, ya que Francia cuenta con 63 puntos. Para el problema de la credibilidad, según los datos de confianza política, se observa que en ese año los grados de desconfianza son mayores que los de confianza, con lo cual se ve mermada la credibilidad política.

En lo que tiene que ver con la abstención, se observa que, según el Ministerio del Interior francés, la abstención fue del 20% en los comicios del año 2002. Aunque, en ese año, según la Encuesta Social Europea, el 25% de los encuestados indicaba que no fue a votar. Según la misma encuesta, el 35,7% de los preguntados dijo haber apoyado a los socialistas y el 24,3% a los conservadores. Además, el 40,2% de los encuestados decía sentirse más cerca del Partido Socialista y un 50% afirmaba sentir más cercanía por un partido en particular que por el resto. Sin embargo, en las elecciones de 2002 el Partido Socialista no obtuvo los suficientes apoyos para pasar a segunda vuelta y optar a presidir el país. Según los datos del Ministerio del Interior francés, el Partido Socialista, con Lionel Jospin como candidato, obtuvo el 16% de los apoyos en primera vuelta. Las elecciones las ganó el conservador Jacques Chirac, con el 82% de los sufragios, quien tuvo como rival al ultraderechista Jean-Marie Le Pen, que obtuvo el 17% de apoyo.

En el año 2007, por lo que se refiere al descontento político, se observa que el 57,4% de los encuestados se inclinaba por la opción de bastante satisfecho en cuanto a la satisfacción con la

democracia, según el Eurobarómetro. Según los mismos datos, los que optaban por la opción de bastante satisfecho y la de muy satisfecho sumaban el 64,85% de los encuestados. En el lado opuesto, los no muy satisfechos y los nada satisfechos representaban el 32,24% de los preguntados.

En lo referente a la desconfianza política se pone de manifiesto que, en el 2007 y según datos del Eurobarómetro, el 48,5% de los encuestados tendían a no confiar en el parlamento nacional francés. Del mismo modo, el 51,1% de las personas preguntadas tendía a no confiar en el gobierno y el 75,6% de los encuestados no confiaba en los partidos políticos. Los mismos datos resultan útiles para observar el problema de la credibilidad, ya que se percibe que una mayor parte de los encuestados se inclina por la desconfianza, y, por tanto, se dificulta la credibilidad.

Según Transparencia Internacional, Francia contaba con 73 puntos en el índice de percepción de la corrupción de 2007, uno de los valores más altos del periodo, por lo tanto, en el que se percibía un menor problema de corrupción.

En cuanto a la abstención, en las elecciones del año 2007, según el Ministerio del Interior francés, se registró una abstención del 16%. Además, en los comicios electorales de ese año se percibió la tendencia bipartidista clásica, cuando el candidato conservador, Nicolas Sarkozy, ganó con el 53% de los apoyos y la candidata socialista, Ségolène Royal, obtuvo el 46% de los sufragios.

Por lo que se refiere al año 2012, en cuanto al descontento político, los datos del Eurobarómetro indican que el 61% de los encuestados estaba bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Francia. Si se suman los bastante satisfechos y los muy satisfechos se obtiene que el 67,3% de los preguntados estaba satisfecho con el funcionamiento de la democracia. En el lado contrario, los no muy satisfechos y los nada satisfechos representaban el 30% de los encuestados. En el mismo sentido, según la Encuesta Social Europea, el 20% de los preguntados se situaba en un punto intermedio (5) de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, mientras que los grados más cercanos a la satisfacción (del 6 al extremadamente satisfecho) sumaban el 43,8% de los encuestados y los grados de insatisfacción (del 4 al extremadamente insatisfecho) representaban al 35,7% de las personas preguntadas. Por lo que se refiere al nivel de satisfacción con el gobierno nacional, según la Encuesta Social Europea, se ve una situación contraria. El 19,6% de los encuestados se situaba en un grado de satisfacción intermedio (5), pero los grados de insatisfacción suman más encuestados que los de satisfacción. Así, los grados del 4 al de extremadamente insatisfecho sumaban el 63,4% de los encuestados y los grados del 6 al de extremadamente satisfecho representaban al 17,2% de los preguntados.

En cuanto al problema de la desconfianza política se pone de manifiesto, según el Eurobarómetro, que el 58% de los encuestados tendían a no confiar en el parlamento nacional en el año 2012. Además, según la Encuesta Social Europea, el 22% de los preguntados se ubicaba en una posición intermedia (5) de satisfacción con el parlamento. Los grados de desconfianza (del 4 al de ninguna confianza) sumaban al 51% de los encuestados y los grados de más confianza (del 6 al de confianza plena) reunían al 26% de los encuestados. Por lo que se refiere al gobierno, se observa, según el Eurobarómetro, que el 65% de los encuestados tendía a no confiar en él; y, en cuanto a los políticos, el 17% se situaba en un nivel de confianza intermedio (5) de confianza, mientras que los más desconfiados (del grado 4 al de ninguna confianza) sumaban el 68,9% de los encuestados; y, los grados de confianza sumaban el 13,5% de las personas preguntadas.

En lo referente a los partidos políticos, los datos del Eurobarómetro muestran que el 83% de los encuestados no confiaba en ellos en el año 2012. Del mismo modo, según la Encuesta Social Europea, el 17,9% de los encuestados se ubicaba en una posición media (5) de confianza hacia los partidos políticos, pero los grados tendentes a la desconfianza (del 4 al de ninguna confianza) representaban al 70% de los encuestados y los grados de mayor confianza (del 6 al de confianza plena) reunían al 11,7% de las personas preguntadas. En sintonía con estos datos, la credibilidad hacia las distintas instituciones corre pareja a sus respectivos indicadores de desconfianza.

En lo relacionado con el problema de la desafección, según la Encuesta Social Europea, se observa que, en el año 2012, los bastante interesados y los poco interesados en la política están empatados con un porcentaje del 33% de los encuestados, respectivamente. La suma de los bastante interesados y los muy interesados en la política es del 47,7% y la de los poco interesados y nada interesados es del 52,3%. Por lo tanto, el número de los no interesados es ligeramente superior pese al empate.

Por lo que toca a la corrupción, según Transparencia Internacional, en el año 2012, en el índice de percepción de la corrupción Francia contaba con 71 puntos, una situación parecida a los valores de anteriores años electorales.

La abstención, según los datos del Ministerio del Interior francés, fue en las elecciones del año 2012 del 19%. Esta cifra coincide con la ofrecida por la Encuesta Social Europea, cuando el 19,2% de los encuestados aseguraba en 2012 no haber ido a votar en las últimas elecciones, mientras que el 71% aseguraba sí haberlo hecho. Según el CEVIPOF, en 2012, el 91% de los encuestados declaraba ir a votar en todas o casi todas las elecciones y el 8% aseguraba no hacerlo en algunas o en ninguna.

Además, según la Encuesta Social Europea, en el año 2012, el 36,5% de los encuestados declaró haber votado socialista, mientras que el 28,5% aseguraba haber optado por la opción conservadora. Del mismo modo, el 46% de los encuestados decía no sentirse más cercano a ningún partido en particular y, por el contrario, el 54% decía que sí. Entre ellos, el 32% aseguró estar más cerca del Partido Socialista y el 28% manifestaba estar más cerca de la opción conservadora.

Los resultados electorales del año 2012 mostraban también, como las anteriores, la tendencia bipartidista. El candidato socialista, François Hollande, consiguió el 51% de los apoyos y el candidato conservador, Nicolas Sarkozy, obtuvo el 48% de los sufragios. De manera que en estas elecciones se consiguió la primera victoria socialdemócrata del periodo de análisis.

En el año 2017, por lo que se refiere al problema del descontento político, se observa que los encuestados que decían sentirse bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia en Francia eran el 50%, que sumados con los que manifestaban sentirse muy satisfechos representaban al 56,7% de las personas preguntadas. Al otro lado, los encuestados que consideraban no estar muy satisfechos y nada satisfechos sumaban el 40,8%, según los datos recogidos por el Eurobarómetro. En cuanto a los datos recopilados por el Barómetro de la confianza política de CEVIPOF, se pone de manifiesto que el 46% de las personas preguntadas consideraba que en 2017 la democracia no funcionaba muy bien. Si a esta cifra se suma a los que consideran que no funciona bien, se obtiene un resultado del 70% de las personas encuestadas. En el otro extremo, los encuestados que piensan que la democracia funciona bien y bastante bien representan al 29%.

En cuanto al problema de la oligarquización, según datos de CEVIPOF para el año 2017, se pone de manifiesto que la mayoría de personas preguntadas considera que la política no debe ser un asunto reservado a los especialistas. Así, los encuestados que estaban en bastante desacuerdo con que la política deba ser un asunto reservado a especialistas era del 36% y los que estaban completamente en desacuerdo agrupaban al 23% de los encuestados, con lo cual, sumados, representaban al 59% de las personas preguntadas. En cambio, el 7% de los encuestados estaba de acuerdo completamente con la idea de que la política es un asunto de especialistas y el 33% estaba bastante de acuerdo, lo que daba un resultado, sumando los dos valores, del 40%. De ello se desprende que la mayoría de los encuestados no está de acuerdo con el fenómeno de la oligarquización.

Sobre la desconfianza política en el año 2017, se puede ver que, según el Eurobarómetro, los que tienden a no confiar en el parlamento nacional francés representaban al 56,73% de los

encuestados y lo que tendían a confiar eran el 30,78%. De forma similar, los encuestados que tendían a no confiar en el gobierno en 2017 eran el 50,73% y los que tendían a confiar eran el 37,75%. Con relación a los partidos políticos, el 84,51% de los encuestados tendía a no confiar en ellos y el 9,97% tendía a confiar, según los datos del Eurobarómetro. Por lo que se refiere a los datos del Barómetro de la confianza política de CEVIPOF para el año 2017, se puede ver que los encuestados que confiaban en la Asamblea Nacional eran el 42%, mientras que los que no lo hacían eran el 57%. En cuanto a la confianza en el gobierno, se pone de manifiesto que el 28% confiaba en él, pero el 71% de los encuestados desconfiaba. El primer ministro gozaba en 2017 de una confianza del 35% y de una desconfianza del 64% y el presidente de la República cosechaba una confianza del 25% y de una desconfianza del 74%. Por su parte, los partidos políticos reunían a un 11% de los encuestados que decían confiar en ellos y a un 88% de personas preguntadas que decían no confiar.

En el problema de la desafección política, se observa que los encuestados que consideraban que tenían mucho y bastante interés por la política eran el 56% y los que manifestaban que estaban poco y nada interesados por la política eran el 44%, según datos recogidos por CEVIPOF en el año 2017.

En cuanto a la falta de credibilidad, se hace evidente que, en el año 2017 y según CEVIPOF, la honestidad era una cualidad primordial en los políticos para el 35% de los encuestados y que el político se atuviera a sus promesas lo era para el 14%. En ese mismo año, los encuestados que sentían desconfianza al pensar en los hombres y mujeres dedicados a la política eran el 40% y el 26% experimentaba disgusto. Los datos descritos anteriormente que ponen de relieve la falta de confianza en las distintas instituciones son también indicios de la falta de credibilidad experimentada por la ciudadanía.

Sobre la abstención en el año 2017, la Encuesta Electoral Francesa de CEVIPOF constata que, en mayo, el 37% de los encuestados que decían haberse abstenido aducían razones personales para explicar por qué no habían ido a votar. Por otra parte, el 18% decía que no se sentía representado por ningún candidato. En julio de 2017, los porcentajes eran similares: el 37% aseguraba no haber participado en los comicios por razones personales y el 17% consideraba no sentirse representado. En ese año, según datos del Ministerio de Interior galo, la abstención fue del 25%, la más alta del periodo de análisis.

En las elecciones del año 2017, el nuevo partido formado por Emmanuel Macron, En Marche, obtuvo la victoria con el 66% de los apoyos. La candidata Marine Le Pen, del Frente Nacional, recabó el 33% de los votos y, en primera vuelta, Los Republicanos, con François Fillon, y la

Francia Insumisa, con Jean-Luc Mélenchon, obtuvieron el 20% y el 19% de los sufragios, respectivamente. El Partido Socialista tuvo un resultado del 6%. La tendencia bipartidista se rompe en este año y en cierto modo se observa un indicio de un posible cambio del sistema de partidos, que, sin embargo, no se puede confirmar hasta que tengan lugar más elecciones.

CAPÍTULO 7

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El Capítulo 7 aborda la discusión de resultados de la investigación en dos partes. Por un lado, se relacionan los resultados de la investigación con respecto a los problemas de representación política en España y Francia, las dos unidades de análisis, a lo largo del periodo de análisis. De esta forma, se pone de relieve el método comparativo entre ambos países. Por otro lado, siempre que los datos disponibles lo permiten, se observan las tendencias descubiertas acerca de los problemas relacionados con la representación política y los periodos en que, en ambos países, han gobernado las opciones socialdemócratas.

7.1. Los problemas de representación política en España y en Francia (2000 - 2017)

7.1.1. El descontento político

El problema del descontento político (Montero, Gunther y Torcal, 1998; Paramio, 1999) en España y Francia puede apreciarse con los niveles de satisfacción de la ciudadanía con respecto al funcionamiento de la democracia y de los gobiernos de los respectivos países durante el periodo de análisis. Tanto en Francia como en España se dan procesos similares de descontento, según los datos analizados, pero en España el problema se muestra más agudo.

En España, según los datos disponibles detallados en el estudio, los españoles se muestran bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia hasta el año 2011. A partir de entonces, los que piensan que la democracia funciona bastante bien en España dejan de ser mayoría hasta el fin del periodo de análisis, en el año 2017. De hecho, durante todo el periodo, la tendencia entre los que se sienten bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia es a la caída. Similarmente, en el caso de Francia, la mayoría de los franceses dice sentirse bastante satisfecho con el funcionamiento de la democracia durante todo el periodo de análisis, pero ese porcentaje tiende a la baja durante los años analizados.

Mientras se constata la tendencia a la baja en las posiciones medias de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en ambos países, también se aprecia que el número de las personas que no están muy satisfechas o nada satisfechas experimenta una tendencia al alza, en especial a partir del año 2010.

En España, entre el año 2011 y el 2017, los que dicen sentirse no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia superan a los que se manifiestan bastante satisfechos y los que dicen sentirse nada satisfechos superan a los que piensan que están bastante satisfechos en el año 2014. Se aprecia, pues, una radicalización de las posiciones de insatisfacción, en especial a partir del año 2010. En Francia ocurre el mismo proceso cuando, a partir de 2010, se observa el aumento de franceses que dicen sentirse no muy satisfechos o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia. En efecto, los ciudadanos franceses que creen que la democracia en su país no funciona muy bien superan, a partir de 2010, a los que creen que funciona bastante bien.

De los datos analizados provenientes de distintas fuentes se desprende que los ciudadanos españoles y franceses muestran descontento político en sus percepciones sobre el funcionamiento de la democracia, porque en su mayoría se sitúan en valores medios de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, pero se trata de un valor que va a la baja durante el periodo de análisis, mientras crecen los niveles de insatisfacción y se radicaliza la postura general de la ciudadanía hacia el descontento.

De forma parecida, el descontento es palpable cuando se tienen en cuenta los niveles de satisfacción con el funcionamiento de los respectivos gobiernos español y francés. En el caso español, caen las posiciones moderadas de satisfacción y se agudizan las que representan valores más extremos de insatisfacción, lo mismo que ocurre en Francia.

En España, entre los años 2002 y 2008, la ciudadanía se muestra moderadamente satisfecha con el funcionamiento del gobierno, pero entre los años 2010 y 2014 la mayoría de españoles se muestra extremadamente insatisfecha. Por lo que se refiere al caso galo, el porcentaje de los extremadamente insatisfechos sube en 2010 y 2014, mientras tiende a bajar el número de los que se mostraban en posiciones moderadas. En general, aunque las tendencias son similares, se observa un mayor descontento al referirse al gobierno nacional que al funcionamiento de la democracia. De hecho, en el caso español, la ciudadanía dirigía valoraciones negativas tanto al gobierno como a la oposición, especialmente a partir del año 2010.

El descontento político es un problema que puede apreciarse durante todo el periodo de análisis en ambos países, ya que se constatan la radicalización de posturas extremas de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y de los gobiernos y la tendencia a la baja de las posturas moderadas. El fenómeno, además, se agudiza a partir del año 2010, de manera que los últimos años del periodo de análisis son los que más descontento concentran.

De manera específica, según los datos disponibles y comparables para las dos unidades de análisis (los provenientes del Eurobarómetro y de la Encuesta Social Europea), los españoles bastante satisfechos con el funcionamiento de la democracia son menos durante todo el periodo de análisis que los franceses. En cambio, los no muy satisfechos españoles eran menos hasta el año 2010 que los franceses. Sin embargo, a partir de ese año, los no muy satisfechos españoles eran más que los no muy satisfechos franceses. Además, y de forma similar, los nada satisfechos españoles eran menos que los franceses entre 2000 y 2007, pero pasaron a ser más desde 2010, y, en especial en los años 2013 y 2014. Por tanto, el descontento de los ciudadanos españoles se observa en mayor medida en las encuestas del Eurobarómetro que el descontento de los ciudadanos franceses con respecto al funcionamiento de la democracia en sus respectivos países.

Por lo que se refiere a los datos disponibles obtenidos de la Encuesta Social Europea sobre el nivel de satisfacción con la democracia en ambos casos, se observa que entre el año 2002 (con el 6,1% de personas extremadamente insatisfechas en Francia) y el año 2016, con el 9,1%, ha habido una variación de 3 puntos; mientras que en España, ha sido de 7,4 puntos, entre el 2,4% de personas extremadamente insatisfechas en 2002 y el 9,8%, en 2014, si bien el pico de personas extremadamente insatisfechas se dio en 2012, con el 13,6%. Así, se pone de manifiesto que la posición extrema de insatisfacción ha ganado más adeptos en España.

En referencia a la posición intermedia de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, que suele agrupar a un mayor número de personas, se ve que en Francia ha perdido 3 puntos (del 20,2% de 2002 al 17,1% de 2016). En cambio, según los datos disponibles para el caso español, esta posición ha perdido 6,4 puntos, al pasar del 22,9% en 2002 al 16,5% en 2014. Por tanto, la caída en la opción moderada es también mayor en España que en Francia en el periodo de análisis.

Si se atiende a la insatisfacción con el funcionamiento del gobierno en España se observa que la opción de los extremadamente insatisfechos ha crecido 17,3 puntos, al pasar del 8,4% en 2002 al 27,7 en 2014; mientras que, en el caso francés, la opción más extrema ha crecido 6,2 puntos, del 8% de 2002 al 14,2% de 2016. De nuevo, hay mucho más descontento en España que en Francia, de modo que la radicalización de las posturas se percibe mayor en España. En cuanto a la opción moderada, que reunía el 23,4% de los franceses en 2002 y al 15,4% en 2016, se ve una diferencia de 8 puntos. En este caso, la diferencia para España es de 9,6, ya que se pasa del 21,5% en 2002 al 11,9% en 2014, con lo cual la pérdida de apoyo de la opción moderada también se nota más en España.

A la luz del análisis, se observa que tanto la sociedad francesa como la española comparten el descontento político, pero la opinión pública española pone de manifiesto posiciones más radicales de insatisfacción y pierde más apoyos la opción moderada.

7.1.2. Alejamiento entre los representantes y los representados

En la categoría de *responsiveness* se encuentra el problema del alejamiento de los representantes hacia los representados. Para Sartori (1999), la representación política implica la obligación de escuchar y ceder a las demandas del electorado. La lejanía entre los representantes electos y los representados es un problema señalado por Costa, Lefébure, Rozenberg, Schnatterer y Kerrouche (2012) para el caso francés, ya sea al hablar del divorcio entre la ciudadanía y sus representantes públicos o al mencionar la relación paradójica entre los franceses y sus diputados. Se trata de una problemática difusa, que puede influir en otros fenómenos y que se pone de manifiesto en la opinión de la ciudadanía acerca de la complicación de la política a la hora de entenderla.

Según los datos comparables entre las dos unidades de análisis, se observa que la mayoría de españoles considera que la política es ocasionalmente demasiado complicada de entender entre los años 2002 (33%) y 2008 (36,5%), con una variación de 3,5 puntos. En el caso francés, la variación es de 3,3 puntos, al pasar del 34,1% de 2002 al 37,4% de 2008, de forma que los porcentajes y variaciones son similares en las opiniones públicas de España y de Francia. Por lo que se refiere a los españoles que frecuentemente encuentran la política demasiado difícil de comprender, se pasa del 25% de 2002 al 21,8% de 2008, con lo cual se pone de manifiesto una pérdida de 3,2 puntos. En el caso de Francia, la caída es mayor, de 8,3 puntos (desde el 16,1% al 7,8% entre 2002 y 2008).

Los porcentajes que suben en el caso francés son los de los ciudadanos que consideran la política raramente y nunca demasiado complicada de entender. Así, del 10% de franceses que en 2002 consideraban que la política nunca es demasiado complicada de entender se pasa al 15,7%, con una subida de 5,7 puntos. La opción de los que consideran la política demasiado complicada de entender contaba en 2001 con el 11,8% de franceses, y en 2008, con el 19,9%, por tanto, esta opción gana 8,1 puntos. De ello se desprende, que los franceses tienden a ver la política como algo no siempre tan complicado de entender, según los datos disponibles.

En cambio, en el caso español, sí sube el porcentaje de aquellos que consideran que la política no es nunca demasiado complicada de entender, pero lo hace un punto (del 6,1% al 7,3% entre

2002 y 2008). En cambio, desciende el porcentaje de los que ven la política demasiado complicada de entender raramente, igual que también baja el de los que la consideran frecuentemente demasiado complicada de entender.

Así, el 18,1% de españoles ve la política demasiado complicada raramente en 2002 y el 16,9% lo hace en 2008, por tanto, se produce una bajada de 1,2 puntos. En cuanto a los españoles que frecuentemente ven la política demasiado complicada de entender, se pasa del 25% en 2002 al 21,8% en 2008, con una diferencia de 3,2 puntos.

A partir de los datos disponibles para comparar las dos opiniones públicas, se observa que, en general, los datos son similares en ambos países. Alrededor del 30 % de los españoles y de los franceses perciben la política como algo ocasionalmente demasiado complicado de entender, mientras que las otras opciones se mantienen por debajo de ese porcentaje. A este respecto, los datos se relacionan con los estudios de Martínez, para quien los partidos y los sistemas de representación en general “se distancian cada vez más de los electores” (2004), con lo que se aprecia una distancia importante entre los ciudadanos y la política. En la misma línea de Martínez, Ferejohn (1999) indica que una de las cualidades de un sistema democrático es la capacidad de los responsables públicos para elaborar políticas más o menos cercanas a los deseos de los votantes.

Según los datos disponibles, el problema de la lejanía entre los representantes públicos y los representados no se muestra tan agudo como el del descontento político en ambas sociedades. De acuerdo con Nadas (1996), tanto el descontento político como el alejamiento entre los representantes y los representados pone de manifiesto la incapacidad de respuesta del circuito de representación frente a las necesidades y demandas sociales.

7.1.3. Oligarquización

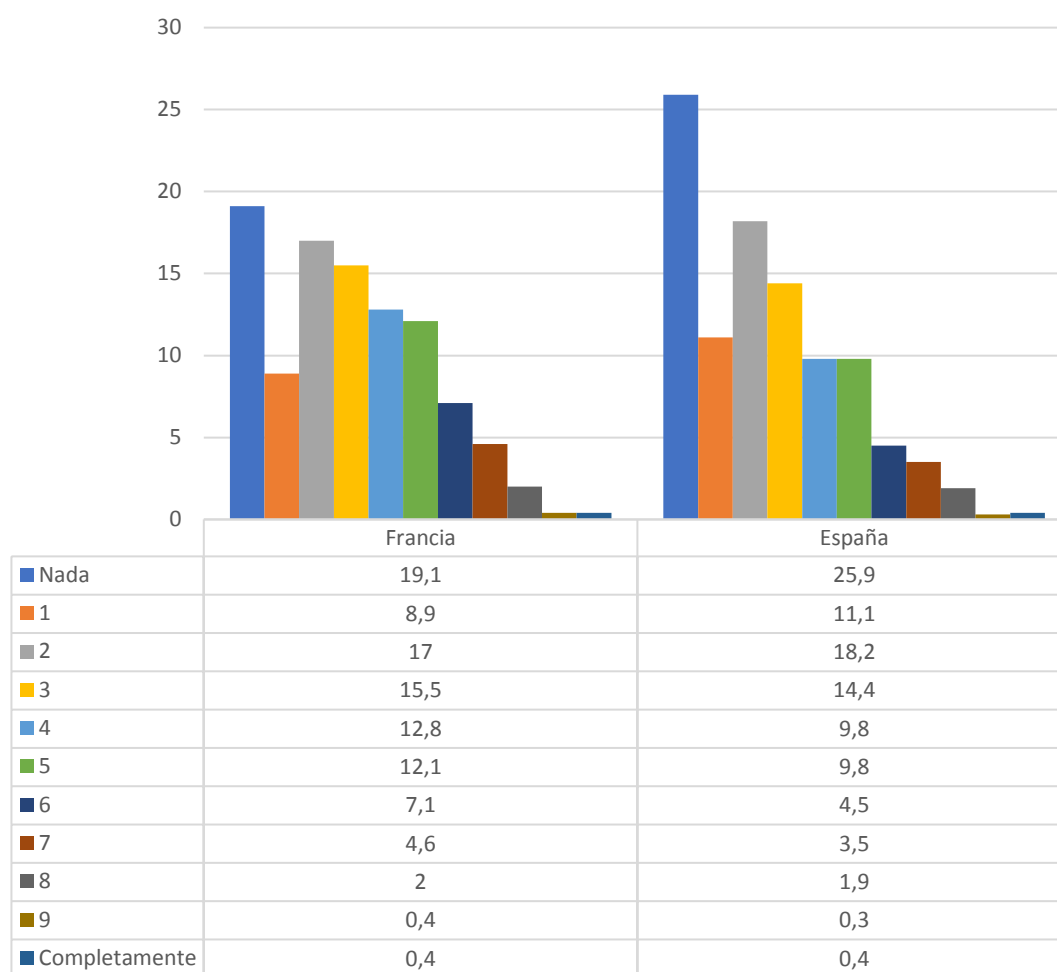
La oligarquización puede entenderse como un problema que se relaciona con el de la lejanía anteriormente señalado o incluso con la desconfianza o la falta de credibilidad, pero tiene siempre que ver con la idea de que la ciudadanía percibe al gobierno como algo que excluye a la gente ordinaria del quehacer público (Pitkin, 2004). Se trata del más reciente de los problemas relacionados con la representación política encontrados a través de la revisión de la literatura y puede observarse al ver las percepciones de la ciudadanía sobre si el sistema político permite a la gente corriente tener influencia o si da la posibilidad de tener algo que decir a la ciudadanía.

Sin embargo, en este punto se pone de manifiesto una de las limitaciones del estudio, la relacionada con la escasez de datos disponibles para todo el periodo de análisis, y que estos sean válidos para poder ser comparados entre las dos unidades de análisis. Por esa razón, no se puede establecer una caracterización concluyente acerca de este problema en España y en Francia entre el año 2000 y el 2017.

Aun así, los datos disponibles permiten ver que existe una percepción más negativa en España que en Francia acerca de las posibilidades de la gente corriente para tener algún tipo de influencia en la cosa pública.

Los únicos datos disponibles encontrados son del año 2014, y en ellos se pone de manifiesto cómo la mayor parte de la ciudadanía de ambos países cree que sus respectivos sistemas políticos no permiten a la ciudadanía tener influencia en los asuntos públicos, con el 19,1% en Francia y el 25,9% en España. De nuevo, la posición más extrema la tiene la opinión pública española, tal y como puede verse en el gráfico 58.

Gráfico 58. Opinión sobre si el sistema político permite a la ciudadanía tener influencia en Francia y en España (2014)

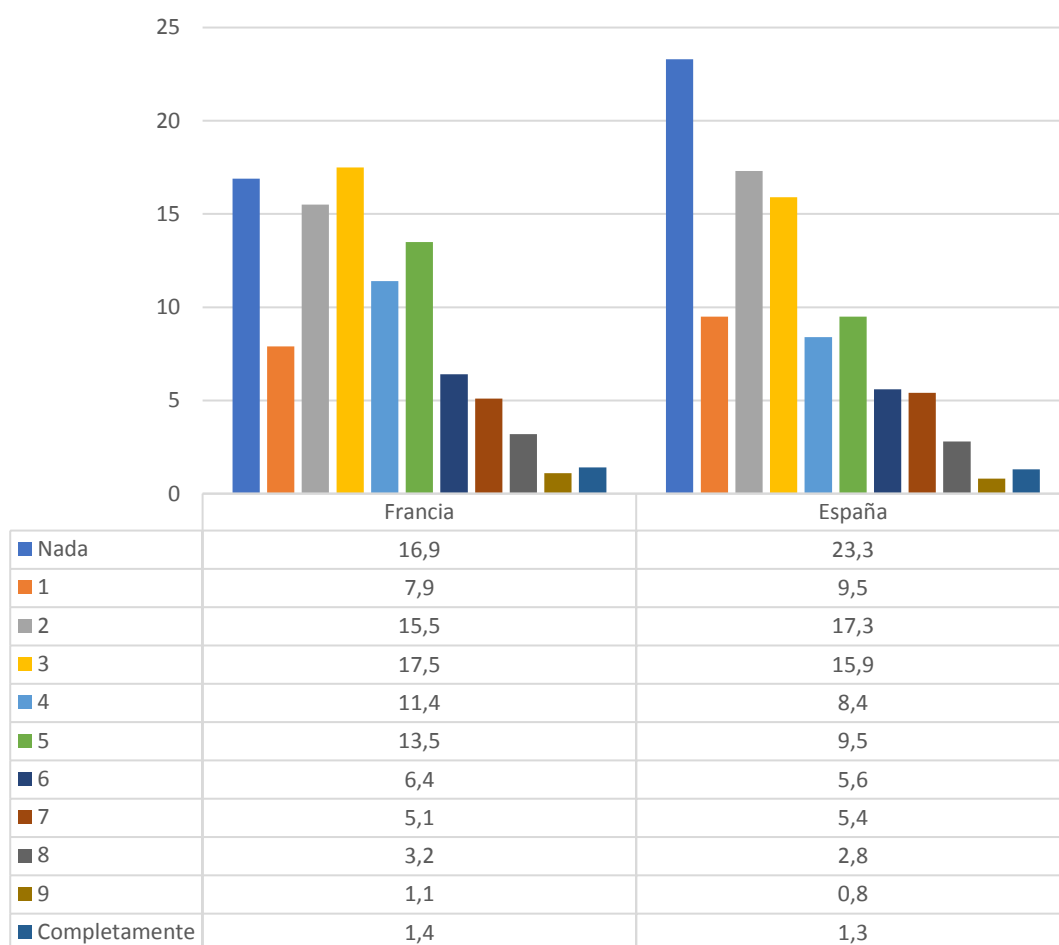


Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

En el caso de si la ciudadanía cree que el sistema político permite a la ciudadanía tener algo que decir sobre la vida pública, se aprecia una ligera diferencia con respecto a los anteriores datos del caso francés, ya que la mayor parte de los franceses (17,5%) se sitúa en una posición 3 (en una escala de nada —0— a completamente —10—), mientras que la opción nada congrega al 16,9% de los encuestados.

Sin embargo, en el caso español, se sigue la misma tendencia y la mayor parte de la ciudadanía (el 23,3%) se inclina por la opción más extrema, la de nada.

Gráfico 59. Opinión sobre si el sistema político permite a la ciudadanía tener algo que decir en Francia y España (2014)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

La escasez de datos disponibles para analizar y comparar el problema de la oligarquización hace que tan solo se pueda vislumbrar el fenómeno de un “malestar civil” (Franzé, 1994; Nadales, 1996) relacionado con que los políticos viven de la política y no para la política (Franzé 1994). En el mismo sentido, Pitkin (1985) al entender la representación como una relación sustantiva, defiende que el representante debe actuar en interés del representado de forma receptiva. La información analizada demuestra que el problema de la oligarquización se pone de manifiesto más radicalizado en el caso español.

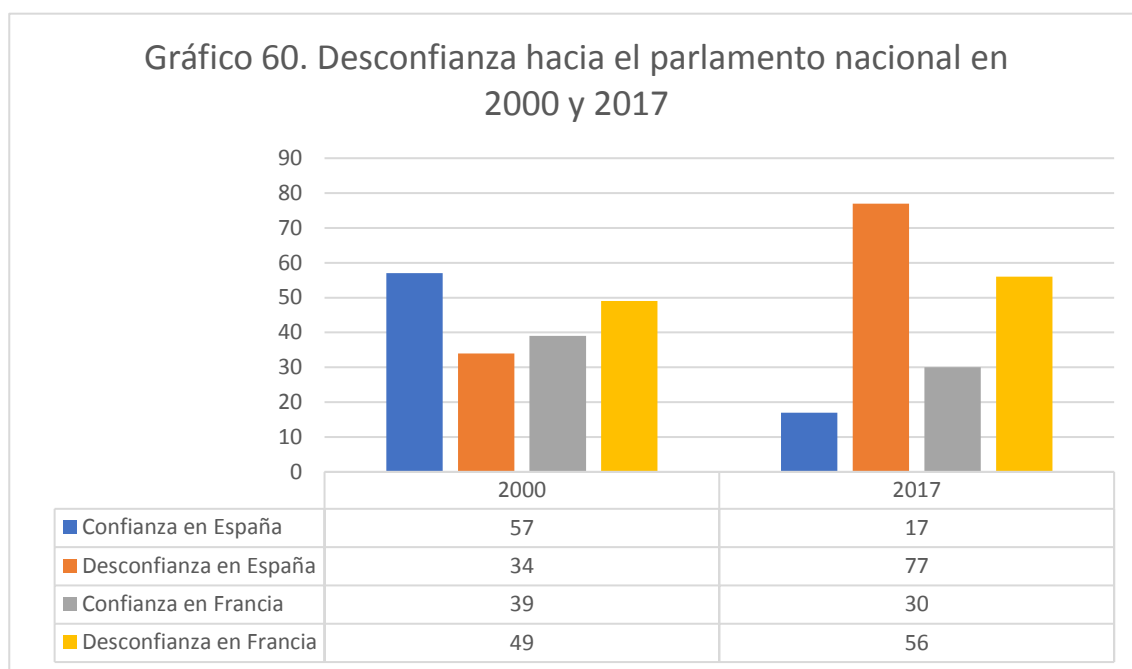
7.1.4. Desconfianza política

La desconfianza política (Bobbio, 1985; Paramio, 1999; Torcal, 2014) es un problema estudiado en las democracias del capitalismo avanzado a través de su opinión pública y del que se pueden obtener varios datos, como se observa en los capítulos precedentes. Así, se pone de manifiesto que la desconfianza política se da tanto en España como en Francia, según los datos obtenidos comparables entre las dos unidades de análisis.

Tal y como se desprende de los datos del Eurobarómetro sobre la confianza en el parlamento nacional, el nivel de desconfianza ha crecido más en España durante el periodo de análisis; así como la confianza ha caído más también en España que en Francia.

En España, la confianza en el parlamento nacional ha caído 40 puntos durante el periodo de análisis, si se observa que, en el año 2000, el 57% de los encuestados decía confiar y en 2017, lo afirmaba el 17% de los españoles. En Francia, en el año 2000 tendían a confiar el 39% de los encuestados, mientras que en el año 2017 eran el 30%. Por tanto, la diferencia es de nueve puntos. Con ello se pone de manifiesto que el país en el que más ha caído la confianza en el parlamento nacional durante el periodo de análisis es España.

Por lo que se refiere a la desconfianza en el parlamento nacional, se observa que en España el 34% de los españoles tendía a no confiar en el año 2000, mientras que en 2017 eran el 77%. De esta forma, la desconfianza creció 43 puntos. En el caso francés, la desconfianza en el parlamento nacional ha crecido 7 puntos, desde el 49% de encuestados que tendían a no confiar en el año 2000, hasta el 56% que decía no hacerlo en 2017.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

La desconfianza en el parlamento nacional ha crecido mucho más en España que en Francia durante el periodo de análisis igual que, en paralelo, ha caído mucho más la confianza en España que en Francia, tal y como se puede observar en el gráfico 60.

El problema de la desconfianza se observa también más pronunciado en España a través de los datos de la Encuesta Social Europea, ya que en las oleadas sucesivas se puede ver el crecimiento de aquellos que no sienten ninguna confianza por el parlamento nacional y la caída de la opción intermedia de confianza en ambos países. Concretamente, en España los encuestados que decían no sentir ninguna confianza por el parlamento nacional eran el 6% en 2002, mientras que en 2014 eran el 18%. Así, esta opción creció 12 puntos en España, mientras que en Francia creció 3 puntos, del 8% de encuestados que decían no tener ninguna confianza en 2002 hasta el 11% de 2016.

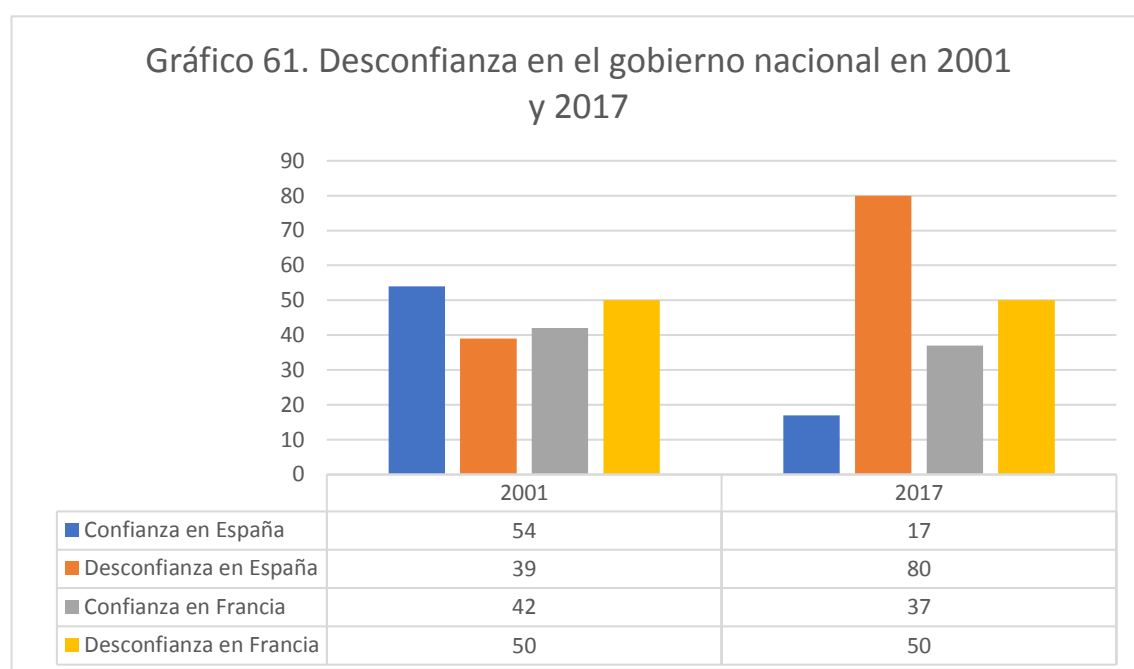
La opción intermedia de confianza en el parlamento nacional, la que más encuestados aglutina, ha caído 7 puntos en España y 6 puntos en Francia durante el periodo de análisis. Así, en el caso español, el 25% de los españoles se situaba en una posición moderada de confianza, mientras que el 18% lo hacía en 2014. En Francia, se pasó del 28% de preguntados que decía estar en una posición intermedia de confianza hacia parlamento nacional al 22% en 2016.

El panorama en cuanto a la confianza en el gobierno nacional también ha sufrido más cambios en España que en Francia, como puede verse en gráfico 60. De hecho, según datos del

Eurobarómetro, el 42% de los encuestados franceses tendía a confiar en 2001, mientras que el 37% lo hacía en 2017. La diferencia es de 5 puntos, aunque en momentos concretos del periodo de análisis, la confianza llegó a caer hasta el 13% (en el año 2013). Similarmente, los que decían no confiar en el gobierno nacional galo eran el 50% en 2001 y siguieron manteniéndose en ese porcentaje en 2017. Sin embargo, se observan varios vaivenes en la desconfianza hacia el gobierno durante el periodo de análisis, con picos del 82% de franceses que decían no confiar en 2013 y del 76% en 2015.

Por lo que se refiere a España, se observa un gran crecimiento de los que tienden a no confiar en el gobierno y una caída de los que tienden a confiar durante el periodo de análisis.

En el año 2001, el 54% de los españoles tendía a confiar en el gobierno. En cambio, en el año 2017 eran el 17% de los encuestados los que tendían a confiar, lo que conlleva una diferencia de 37 puntos. En el caso de los que tienden a no confiar se observa que el 39% de los españoles decía no confiar en el gobierno en 2001, mientras que el 80% decía no confiar en 2017. Así, la desconfianza en el gobierno nacional subió 41 puntos en España durante el periodo de análisis.



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

En cuanto a la confianza en los políticos, se aprecia un proceso similar en ambas unidades de análisis. Según los datos de la Encuesta Social Europea, el 15% de los españoles decía no tener ninguna confianza en los políticos, mientras que ese porcentaje subió hasta el 34,9% en 2014, con lo cual se experimentó un aumento de casi 20 puntos en la posición más radical de

desconfianza. En Francia, ese aumento fue de 7,3 puntos, al pasar del 11,1% de franceses que manifestaban no tener ninguna confianza en los políticos en el año 2002, al 18,4% en 2016.

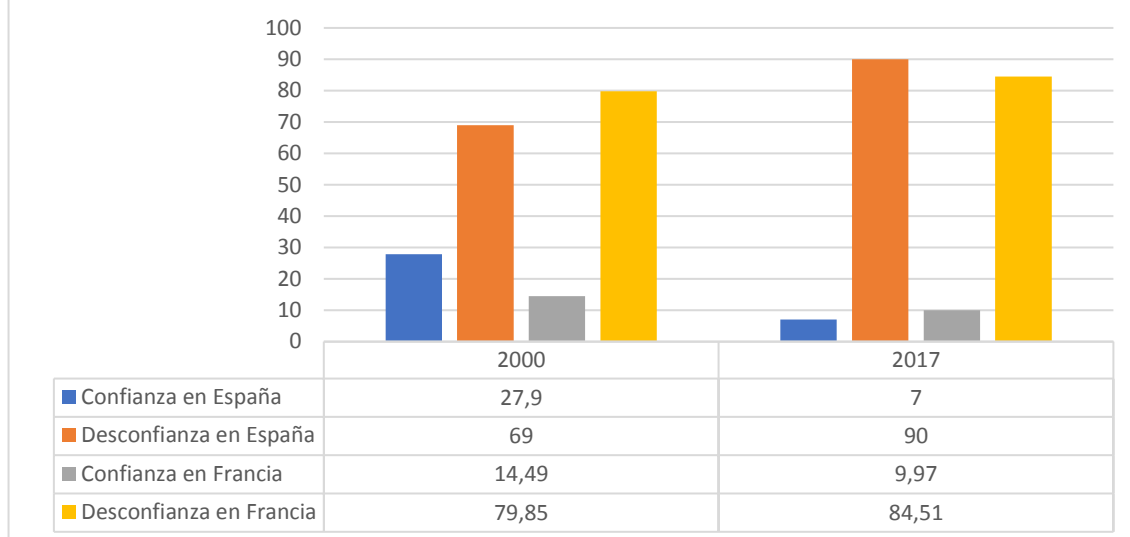
Por lo que se refiere a la opción moderada de confianza en los políticos, en Francia ha caído 7,7 puntos, del 22,3% de encuestados que se situaba en una posición intermedia en 2002, al 14,6% en 2016. En España, la posición moderada ha caído 7,2 puntos, del 19% de encuestados que se ubicaban en la posición intermedia en 2002, al 11,8% que lo hacían en 2014. Los valores son similares en ambos países, pero en el caso español es donde más ha crecido la opción más radical de desconfianza hacia los políticos en comparación con Francia.

Respecto al problema de la falta de confianza, también se puede ver su afectación en los partidos políticos, que es otra de las instituciones que más desconfianza genera en las opiniones públicas española y francesa. Este fenómeno se puede analizar tanto a partir de los datos extraídos del Eurobarómetro como de la Encuesta Social Europea y tiene que ver con la incapacidad de los partidos para determinar, entender y articular las demandas ciudadanas en sus programas electorales (Nadales, 1996).

En el año 2000, el 27,9% de españoles decía confiar en los partidos políticos, mientras que, en 2017, lo afirmaba el 7%. Por tanto, la caída de la confianza en los partidos durante el periodo de análisis ha sido de 20,9 puntos. En Francia, también ha caído, pero no de forma tan aguda, ya que ha pasado del 14,49% de franceses que tendían a confiar en los partidos políticos en el año 2000 al 9,97% que lo hacía en 2017. Por tanto, la confianza hacia los partidos ha caído en Francia 4,52 puntos. De forma parecida, la desconfianza hacia los partidos también ha crecido más en España que en Francia durante el periodo de análisis, según los datos del Eurobarómetro.

En el año 2000, tendía a desconfiar de los partidos políticos el 69% de los españoles, mientras que en 2017 lo hacía el 90%. La subida es, entonces, de 21 puntos en la desconfianza. En Francia, el 79,85% de franceses tendía a no confiar en los partidos políticos en el año 2000, mientras que, en el año 2017, desconfiaba el 84,51% de ellos. El aumento ha sido de 4,66 puntos, ya que Francia partía de unas posiciones de desconfianza hacia los partidos elevadas. Todo ello puede observarse en el gráfico 62.

Gráfico 62. Desconfianza en los partidos políticos en 2000 y 2017



Fuente: elaboración propia a partir de datos del Eurobarómetro.

De la misma forma, el problema de la desconfianza hacia los partidos es palpable en los datos de la Encuesta Social Europea, gracias a los cuales se observa la radicalización de las posturas de desconfianza hacia los partidos políticos. La posición de ninguna confianza congregaba al 15% de encuestados españoles en 2004, mientras que aglutinaba al 33,7% en 2014, lo que significa un aumento de 18,7 puntos en la posición más extrema de desconfianza para el caso español. En lo referente a Francia, la subida ha sido de 6 puntos en la postura de ninguna confianza, al pasar del 12% de franceses que se inclinaban por ella en 2004 al 18% que lo hacían en 2016. De nuevo, se observa más radicalización en el caso español en cuanto a la desconfianza en los partidos políticos.

La opción moderada de confianza cayó en ambas unidades de análisis, pero lo hizo más en España. Así, en el caso español cayó 10,7 puntos, al pasar del 22,6% de encuestados que elegían una posición intermedia de confianza en 2004 al 11,9% que lo hacían en 2014. En Francia, se pasó del 22,8% de 2004 al 15% de 2016, con una caída de 7,8 puntos.

La exigencia de un mayor control sobre las actuaciones de los representantes públicos (Constant, 2003; Nadales, 1996) y la falta de esos mecanismos de control y vigilancia transparentes y accesibles al ciudadano (Pitkin, 1985; Laver y Shepsle, 1999; García, 2004) hacen que la desconfianza ciudadana sea un problema importante en los casos de estudio analizados.

La desconfianza política hacia las instituciones analizadas se muestra más aguda en el caso español, donde se da más radicalización de posturas extremas que en Francia, a lo largo del periodo de análisis, según los datos disponibles. No obstante, en ambos países se perciben los mismos problemas de representación política.

7.1.5. Desafección política

El problema de la desafección política (Montero, Gunter y Torcal, 1998; Paramio, 1999) se da en las democracias avanzadas de fin de siglo (Pharr y Putnam, 2000) en forma de insatisfacción difusa hacia lo político (Nadales, 1996).

Sin embargo, en España ha aumentado el interés por la política y se ha mantenido en Francia o ha aumentado, según el año, tal y como indican los datos extraídos de la Encuesta Social Europea disponibles y comparables para el periodo de análisis.

En el caso español, los muy interesados por la política pasaron de ser el 3,7% en 2002 al 11,3% en 2014, lo que significó una subida de 7,6 puntos. De la misma forma, también subió el porcentaje de los bastante interesados, con el 18,3% en 2002 y el 29,7% en 2014, es decir, hubo una subida de 11,4 puntos. Así, el interés por la política se ha hecho mayor. De forma similar, en Francia, creció el número de los muy interesados, pero se mantuvo el de los bastante interesados por la política. En 2002, el 11,4% de los franceses estaba muy interesado por la política y en 2016, lo estaba el 16,9%, con lo cual subió 5,5 puntos. En cambio, los bastante interesados se mantuvieron en el 28%.

Por lo que se refiere a los poco interesados por la política en Francia, en 2002 eran el 38% de los encuestados y en 2016, eran el 37%, por tanto, se mantuvo casi igual, con una ligera diferencia de un punto. En el caso de los nada interesados por la política hubo una bajada de 4 puntos, del 21,9% de 2002 al 17,8% de 2016. De la misma forma, en España bajó tanto la opción de los nada interesados como la de los poco interesados por la política.

Los españoles poco interesados por la política eran en 2002 el 40%, mientras que en 2012 eran el 36,2%, lo que da una diferencia de 3,8 puntos. En el caso de los nada interesados, se pasó del 38% en 2002 al 22,8% de los encuestados en 2014, lo que supone una bajada de 15,2 puntos.

Así, lo que se percibe es que los problemas relacionados con la representación política no han hecho perder el interés por la política, sino más bien lo han aumentado, precisamente más en

el caso de España, donde los problemas de representación política se ven más agudizados que en el caso francés.

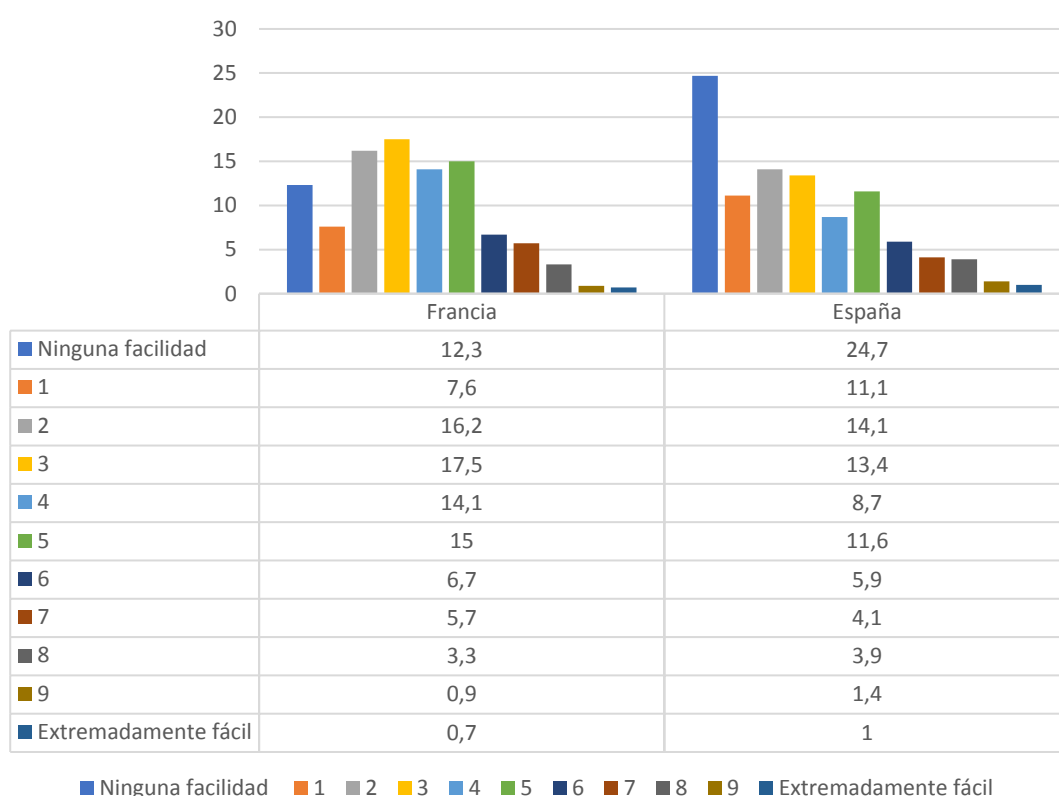
En cuanto a la toma de conciencia sobre asuntos políticos, los que la consideran muy difícil bajaron en ambos países. El 16,8% de españoles la consideraba muy difícil en 2002, mientras lo hacía el 13,5% en 2008, lo que da una diferencia de 3,3 puntos. En el caso francés eran el 15,9% los que consideraban muy difícil la toma de conciencia sobre asuntos políticos en 2002, mientras que en 2008 eran el 8,7%, es decir, hubo una bajada de 7,2 puntos.

Por lo que se refiere a los encuestados españoles que consideraban difícil la toma de conciencia sobre asuntos políticos, el porcentaje aumentó en 5,4 puntos, del 25,1% de 2002 al 30,5% de 2008. Sin embargo, en el caso francés se mantuvieron en el 43%. El número de encuestados que aumentó, según los datos disponibles en el caso francés, fue el de los que no consideraban ni fácil ni difícil la toma de conciencia sobre asuntos políticos. Se pasó del 23% en 2002 al 28% en 2008, con lo cual subió 5 puntos. Similarmente, también aumentaron los que pensaban que la toma de conciencia sobre asuntos políticos en Francia era fácil, del 14,7% de 2002 al 17,9% de 2008, es decir, una subida de 3,2 puntos.

En el caso de España, sin embargo, aquellos que consideraban ni fácil ni difícil la toma de conciencia sobre asuntos políticos y los que la consideraban fácil, se mantuvieron en el 31% y el 21%, respectivamente.

Según datos de la Encuesta Social Europea para el año 2014, tal y como puede verse en el gráfico 63, el 24,7% de españoles no ve ninguna facilidad para participar en política, en cambio es el 12,3% de los franceses el que lo ve de esa forma. Sin embargo, si se suman las posiciones negativas, de la 1 a la 4, las que se posicionan como difícil, se observa que los franceses ven más dificultad que los españoles a la hora de participar en política. De hecho, la suma de las posiciones de la 1 a la 4 da el 38,6% de los españoles y el 55,4% de los franceses en el año 2014.

Gráfico 63. Facilidad para participar en política (2014)



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Social Europea.

Para Constant (2013), uno de los problemas que pueden relacionarse con el gobierno representativo es que el individuo no perciba su capacidad de influencia sobre el mismo. Pese a la escasez de datos para el periodo de análisis sobre las cuestiones mencionadas, se puede apuntar la tendencia de que el crecimiento del interés por la política convive con el reconocimiento por parte de la opinión pública de la dificultad de participar en política en ambos países, lo que se considera como un signo de desafección.

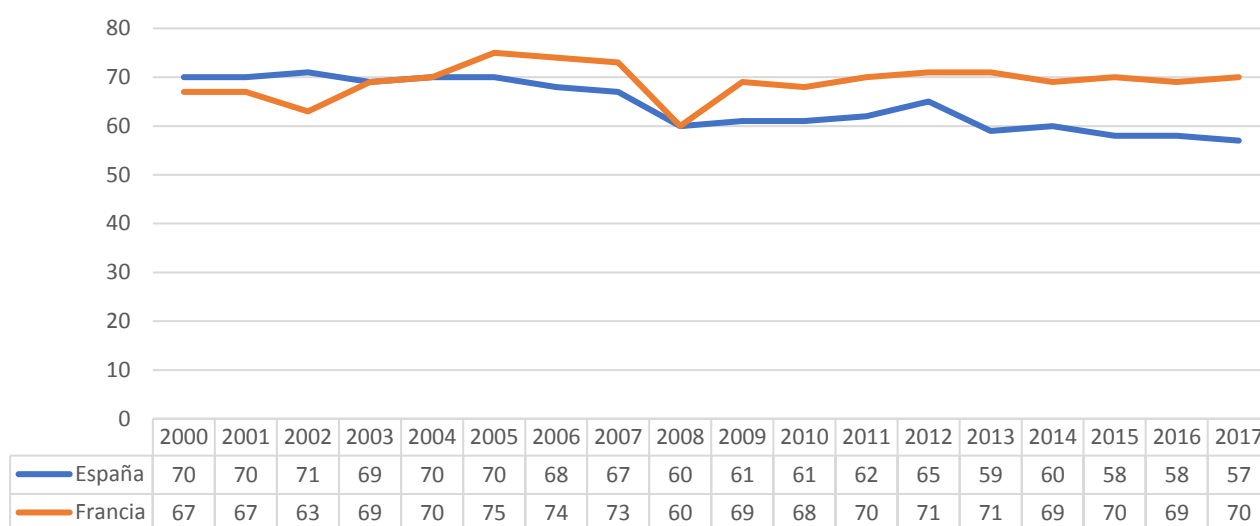
7.1.6. Corrupción

La percepción de la corrupción en la ciudadanía es un problema relacionado con la representación política cuyos resultados son variables. Según De Vries y Solaz (2017) el castigo electoral a los representantes corruptos es, en ocasiones, blando y siguiendo los hallazgos de Jiménez (2007), Fernández Vázquez y Rivero (2011) y Costas et al. (2012), se pone de manifiesto que la corrupción no siempre impide la reelección de un representante corrupto, a pesar de que los elegidos deban asumir las consecuencias de sus actos (Pitkin, 1985). Los efectos de la

corrupción en los votantes son, por tanto, complejos (Riera, Barberá, Gómez, Mayoral y Montero, 2013). Sin embargo, según McMann, Seim, Teorell y Lindberg (2017), los gobiernos son menos corruptos cuando existen altos niveles de democracia. Por tanto, es un fenómeno que se relaciona con la calidad de la democracia.

Tal y como puede apreciarse en el gráfico 64, en el que se especifica la puntuación obtenida por España y por Francia sobre la percepción de la corrupción según Transparency International, a partir del año 2008, especialmente, se ha percibido más corrupción en España que en Francia.

Gráfico 64. Puntuación en el Índice de Corrupción de Transparency International de España y de Francia



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Transparency International.

De hecho, a excepción de los años 2000, 2001 y 2002, en que Francia tenía una menor puntuación y, por tanto, una percepción de la corrupción más alta, en el resto del periodo de análisis ha tenido igual o mayor puntuación que España, lo que significa una menor percepción de corrupción por parte de la ciudadanía francesa.

De esta forma, aunque los valores de ambas unidades de análisis no están muy alejados, sí se ve un mayor descenso de la puntuación —y, por tanto, mayor percepción de la corrupción— en España que en Francia durante todo el periodo de análisis, especialmente en los últimos años.

En el año 2008, ambos países tenían 60 puntos, pero mientras Francia avanzaba posiciones hacia una menor percepción de la corrupción, España retrocedía. En el año 2009, la diferencia entre

los países era de 8 puntos; en 2010, de 7 puntos; en 2011, era de 8 puntos de nuevo; y, en 2012, de 6 puntos. Sin embargo, en 2013 se dio una diferencia entre los dos países de 12 puntos. En el año 2014 fue de 9 puntos; en 2015, de 12 puntos de nuevo; en 2016 de 11; y en 2017, de 13 puntos.

La percepción de la corrupción fue especialmente peor para la ciudadanía española que para la francesa en los años 2013, 2015, 2016 y 2017. De hecho, en los últimos años del periodo de análisis, España ha tocado fondo en cuanto a la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía, con sus peores resultados en todo el tiempo estudiado. En cambio, en los últimos años, la opinión pública francesa ha mantenido cierta estabilidad en cuanto a la percepción de la corrupción en el país.

A partir del planteamiento de Nades (1996), la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía en conjunto con la burocratización del sistema de representación son factores que afectan al funcionamiento de la democracia. Aunque los efectos electorales de la corrupción queden fuera del presente estudio, se comprueba que la percepción del problema ha sido peor en España que en Francia.

7.1.7. Credibilidad

La caída de la credibilidad y de la legitimidad es un problema señalado por Tormey (2015) e Ignazi (2014), que tiene que ver con las concesiones de poder otorgadas a los representantes públicos para actuar en función de la responsabilidad de sus cargos (Dunn, 1999). En el presente trabajo, la falta de credibilidad se relaciona especialmente con los datos obtenidos sobre desconfianza política y con datos concretos para cada unidad de análisis provenientes de sus respectivos organismos nacionales en cuanto a la percepción ciudadana sobre los líderes políticos.

En el caso de España se pone de manifiesto una mayor desconfianza hacia las instituciones desde el año 2008 y 2010 hasta la actualidad, lo que se combina con una peor valoración de los líderes políticos en los últimos años. En la mayor parte del periodo de análisis, los líderes de los principales partidos políticos españoles no consiguen aprobar en la valoración subjetiva que de ellos hace la ciudadanía, cuando se pide que los puntúen del 1 al 10.

Por lo que se refiere al caso francés, el fenómeno en cuanto a la desconfianza —y que por tanto afecta a la credibilidad que se proyecta en la ciudadanía— es parecido al español, pero menos agudo. Según datos ofrecidos por CEVIPOF, alrededor del 35% de los franceses valoraba la

honestidad del político como una primera cualidad para confiar en él o ella, en los años 2010, 2011 y 2017. Además, en torno al 25% de los franceses consideraba en 2010 y 2011 que el político debía atenerse a sus promesas. En cambio, en 2017, este último punto era importante para el 14% de los encuestados. Mansbridge (2003) dentro del modelo promisorio de representación política indica que las promesas hechas en campaña electoral son un deber normativo para los políticos elegidos.

Lo que se desprende del análisis realizado es que existe una gran escasez de datos para poder medir de forma fiable la credibilidad que suscitan los políticos, la política y las instituciones, ya que entran en juego múltiples consideraciones subjetivas a la hora de valorar esta cuestión.

Por tanto, siguiendo los datos aportados para la desconfianza provenientes de organismos supranacionales y los datos provenientes de cada país analizado, se puede ver que los procesos son similares. De este modo, si en España la desconfianza es peor que en Francia, se infiere que la credibilidad sigue el mismo patrón, por encontrarse relacionada con la confianza.

7.1.8. Abstencionismo

La falta de participación en el sufragio es considerada como un problema de representación política desde que Bentham, Constant y Stuart Mill señalaron que un sistema peligra si no se participa en él (ver figura 9). En la actualidad, varios autores señalan que la abstención ha crecido en Europa (Mair, 2005; Blais, 2007; Alarcón, 2016), y especialmente en el sur del continente a partir del año 2008 (Alarcón, 2016). Además, en el caso español, el grado de abstencionismo según Escribano y Ortiz (2006) ha sido irregular desde el restablecimiento de la democracia.

Según los datos de participación ofrecidos por los ministerios del interior español y francés para las elecciones generales y presidenciales dentro del periodo de análisis, se observa que la abstención en España se ha mantenido por debajo del 30% o alrededor de esa cifra.

De este modo, en las elecciones del año 2000, la abstención se situó en el 31,29% y fue la más alta de todo el periodo de análisis. En los comicios del año 2004, la abstención quedó en el 24,34%; en las siguientes elecciones, en el año 2008, hubo una abstención del 26,16%; y, en 2011 subió ligeramente, hasta el 28,31%. En cambio, en la cita electoral de 2015 volvió al 26,8%. Por el contrario, en las elecciones de 2016 la abstención se acercó a la más alta del periodo de análisis, con el 30,16% de españoles que no acudieron a votar.

Además, se observa que en los años en que ha habido mayor abstención, ha salido perjudicado en las urnas, mayoritariamente, el Partido Socialista Obrero Español. Esto se da en los años 2000, 2011, 2015 y 2016, en que los resultados socialdemócratas quedan bastante por debajo de los apoyos del Partido Popular. Concretamente, en el año 2000, el PP obtuvo el 44% de los sufragios y el PSOE quedó 10 puntos por debajo, con el 34%; en el año 2011, la diferencia de apoyos electorales entre el PP y el PSOE fue de 16 puntos, con el 44% y el 28% de apoyos, respectivamente; en 2015, la diferencia fue de 6 puntos, con el 28% y el 22% de los sufragios; y, en 2016, se dio una diferencia de 11 puntos, entre el 33% de apoyo del PP y el 22% de apoyo para el PSOE. De lo anterior, cabe concluir que durante el periodo de análisis el problema del abstencionismo ha perjudicado más a la socialdemocracia española que al conservadurismo.

Por lo que se refiere a las elecciones presidenciales francesas, estas cuentan con dos vueltas. Dentro del periodo de análisis, las primeras se dan en 2002. En la primera vuelta se observa una abstención del 28% y en la segunda, del 20,3%. Las siguientes elecciones tienen lugar en el año 2007. En la primera vuelta se abstiene el 16,23% de los franceses, mientras que, en la segunda, lo hace el 16,03%, hay, por tanto, una participación muy similar. En los siguientes comicios presidenciales, que tienen lugar en 2012, se abstiene en primera vuelta el 20,52% de los franceses y lo hace en segunda vuelta, muy similarmente, el 19,65% de los franceses. Por lo que se refiere a las últimas elecciones dentro del periodo de análisis, el 22,23% de franceses se abstuvo en primera vuelta, y el 25,44% lo hizo en segunda vuelta.

Dentro del periodo de análisis, en dos ocasiones el candidato socialista no ha podido competir en la segunda vuelta electoral. Esto ha ocurrido en el año 2002 y 2017, que son, de todo el periodo de análisis, los años que más abstención han registrado en la primera vuelta electoral (con el 28% y el 22%, respectivamente). De este modo, Lionel Jospin, del PS, obtuvo en 2002 el 16,18% de los apoyos, lo que lo hizo quedar por debajo de Jacques Chirac, del RPR, con el 19% de apoyos en primera vuelta y de Jean-Marie Le Pen, del FN, con el 16,86% de apoyos en primera vuelta. En el año 2017, el candidato socialista cosechó los peores resultados de los socialdemócratas durante el periodo de análisis, con el 6,36% de los sufragios. Así, Benoît Hamon quedó por debajo de Emmanuel Macron, de EM! (que obtuvo en primera vuelta el 24% de los apoyos); de Marine Le Pen, del FN (que obtuvo el 21% de apoyo en primera vuelta); de François Fillon, de LR (que obtuvo el 20% de los sufragios); y, de Jean-Luc Mélenchon, de LFI (que obtuvo el 19% de los apoyos). Por tanto, durante el periodo de análisis, también en Francia, como en España, un nivel alto de abstención ha perjudicado a las opciones socialdemócratas. Las elecciones, según Manin, Przeworski y Stokes (1999), son un mecanismo claro y estable para

legitimar si los representantes han hecho lo que debían, por tanto, la ausencia de participación indicaría rechazo o falta de legitimación hacia la acción política de los elegidos (Constant, 2013).

7.2. Los problemas de representación política y los periodos socialistas

A lo largo del periodo de análisis, entre 2000 y 2017, ha habido en España dos legislaturas socialdemócratas, entre 2004 y 2008, y entre 2008 y 2011, con gobiernos encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE. En el caso francés, ha habido una presidencia encabezada por el PS, en la persona de François Hollande, entre el año 2012 y el año 2017. En este tiempo, hubo tres primeros ministros socialdemócratas: Jean-Marc Ayrault (de 2012 a 2014), Manuel Valls (de 2014 a 2016) y Bernard Cazeneuve (de 2016 a 2017).

Durante las respectivas etapas socialistas en cada país, han variado los distintos atributos asociados a cada problema de representación política en comparación con los periodos de gobiernos no socialistas de las unidades de análisis.

De todos los problemas relacionados con la representación política encontrados con la revisión de la literatura, así como de los atributos que llevan aparejados, existen distintos datos disponibles a lo largo de los años estudiados. Por ese motivo, hay fenómenos de los cuales se dispone de menos datos, lo que imposibilita la comparación entre legislaturas socialistas y no socialistas, aunque se ha podido ofrecer un análisis longitudinal. No obstante, el estudio permite observar el comportamiento en las etapas socialistas de gobierno y las no socialistas en España y en Francia de los problemas, y de sus respectivos atributos, del descontento político, de la desconfianza, de la corrupción y del abstencionismo.

Así, según los datos disponibles del Eurobarómetro para el caso español, se pone de manifiesto que la suma de españoles muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en la primera legislatura socialista (2004 - 2008) era del 53%, mientras que, en la segunda legislatura, de la cual solo se disponen de datos para el año 2010 y 2011, la suma da el 14,9%. En la legislatura inmediatamente anterior (2000 - 2003), encabezada por José María Aznar, del Partido Popular, la suma de españoles muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España era del 59,8%. En la legislatura que vino después del periodo socialista (2012 - 2015), al frente de la cual estaba Mariano Rajoy, del PP, la suma de los españoles muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia daba el 13,8%.

En el caso de Francia, los muy satisfechos con la democracia durante la presidencia de François Hollande (2012 - 2017) sumaban el 31,45%. En la presidencia anterior (2007 - 2011), con Nicolas

Sarkozy al frente, la suma de los franceses que se sentían muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia en el país eran el 16,5%. La mayor caída en esta categoría coincide con un periodo conservador en el caso español y en el caso francés.

Por lo que se refiere a las personas que se definían como bastante satisfechas con el funcionamiento de la democracia, en España son mayoría en las dos legislaturas socialistas con valores entre el 58% y el 40%, igual que en la legislatura conservadora anterior, donde los valores oscilaban alrededor del 55%. En cambio, en la legislatura posterior a la socialista, que fue de nuevo conservadora, los bastante satisfechos dejaron de ser mayoría, con valores que oscilaban entre el 20% y el 35% de españoles que se identificaban con esa opción. En Francia, en cambio, los bastante satisfechos son mayoría durante todo el periodo de análisis con valores que van del 41% al 61% de franceses que se inclinan por esa opción en la etapa socialista.

En cuanto a los españoles que se muestran no muy satisfechos durante la etapa socialista, se aprecia un cambio entre las dos legislaturas. En la primera legislatura los españoles que preferían esta opción oscilaban entre el 9,8% y el 20%, en consonancia con la legislatura conservadora anterior, cuyos datos varían entre el 20% y el 24%. Los dos últimos años socialistas en cambio, registran una subida: con el 33% de españoles que dice no sentirse muy satisfecho en 2010 y el 39,9% que lo afirma en 2011. La tendencia a la subida de esta opción continúa en la legislatura siguiente. En Francia, los no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia oscilaban entre el 23% y el 35% durante el periodo socialista, valores similares a los que se daban durante la presidencia anterior.

Sobre la opción de los nada satisfechos, se observa que durante la primera legislatura socialista los españoles que se definían así oscilaban entre el 3% y el 5%, mientras que, en los dos últimos años de la segunda legislatura socialdemócrata, el porcentaje subió al 11% (2010) y al 13% (2011). En el caso francés, los no muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia oscilaron entre el 6% y el 17% durante el periodo socialista, siendo los peores años el 2014 y el 2016.

Según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, en 2010 se pone de manifiesto como las posiciones de insatisfacción en España son mayores que las de 2002, 2004, 2006 y 2008; y las posturas cercanas a la satisfacción descienden con respecto a las de esos años. En Francia tienden a subir algunas posiciones de desconfianza, pero también algunas de confianza.

Como tendencia general, se vislumbra que el descontento empieza a crecer en la segunda legislatura socialista en España, una tendencia que continua desde 2010 en adelante. En Francia,

de forma similar, crece la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia a partir de 2012, lo que coincide con el periodo socialista, según datos del Eurobarómetro.

En cuanto a los niveles de satisfacción con el gobierno, se observa que, en el caso español, en la segunda legislatura hay una subida más acuciada de la insatisfacción, según datos de la Encuesta Social Europea. La tendencia a la subida en la insatisfacción se ve en la primera legislatura socialista, pero a partir del año 2010 la subida es mayor. Similarmente, en el caso francés, se ve un mayor incremento de las posturas de insatisfacción entre los años 2010 y 2012, lo que coincide en el año 2012 y en adelante con la presidencia socialista.

Así, el descontento con el funcionamiento del gobierno sigue un patrón similar al de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en ambos países.

A través de los datos disponibles del Eurobarómetro para el periodo de análisis, se observa que la desconfianza hacia el parlamento español ha empezado a ser más aguda durante la segunda legislatura socialista, lo mismo que en Francia ha aumentado la distancia entre los ciudadanos que tendían a confiar y los que no durante la presidencia de Hollande.

De hecho, en el caso español, en la primera legislatura socialista (2004 - 2008) los valores de los que tendían a confiar y de los que tendían a desconfiar del parlamento nacional se entrecruzaban según el año. Los que tendían a confiar oscilaban entre el 47,9% y el 37% y los que tendían a desconfiar, se movían entre el 47% y el 42%. En cambio, en el año 2009, los que tendían a confiar se situaron en el 31,9% de españoles, mientras que en 2011 eran el 18%. La desconfianza pasó del 60% de españoles que decían no confiar en 2009 al 74% que desconfiaba en 2011, una tendencia que siguió hasta el final del periodo de análisis. Por tanto, se observa un crecimiento de la desconfianza y una caída de la confianza sobre todo en los últimos años socialistas en España.

De manera similar, en Francia se exagera la diferencia entre la confianza y la desconfianza a partir de 2012, coincidiendo con el periodo de presidencia socialdemócrata. Si bien en los periodos no socialistas hay siempre más desconfianza que confianza hacia el parlamento nacional francés, según datos del Eurobarómetro, la mayor cantidad de desconfiados se da a partir de 2012 hasta 2017, igual que la menor cantidad de ciudadanos que confían en el cuerpo representativo francés. En todo el periodo de análisis, el año en que hay menos personas que confían en el parlamento nacional es 2016, con el 16% de los franceses. De la misma forma, ese es el año en que hay un mayor porcentaje de desconfiados, con el 74,4%.

Durante la presidencia socialista en Francia, la distancia entre el porcentaje de franceses que tendía a confiar y el porcentaje de franceses que tendía a desconfiar era alrededor de 50 puntos, mientras que en las presidencias anteriores se situaba alrededor de 30 puntos.

Por tanto, en ambas unidades de análisis se pone de manifiesto que la desconfianza hacia el parlamento nacional crece de forma más aguda en periodos socialistas.

Por lo que tiene que ver con la confianza en el gobierno nacional, tal y como puede apreciarse a través de datos del Eurobarómetro, el comportamiento es similar en ambos países al proceso de desconfianza hacia el parlamento.

En Francia, antes de la presidencia socialista, existía una diferencia de alrededor de 30 puntos entre los que tendían a confiar y los que tendían a desconfiar en el gobierno nacional. Además, durante todo el periodo de análisis, son más franceses los que tienden a desconfiar que los que confían. Sin embargo, los picos de más desconfianza y las mayores caídas de la confianza se dan a partir del año 2012. Concretamente, en el año 2013, el 13,55% de los franceses decía no confiar en el gobierno, siendo el valor más bajo de todo el periodo; en ese mismo año se da el pico más alto de desconfianza con el 82% de los franceses. De forma parecida, en el año 2016, el 16,8% de franceses dicen confiar y el 79% afirman desconfiar. De esta manera, se pone de manifiesto que la distancia entre las personas que dicen confiar y las que no aumentó en el periodo socialista, hasta alrededor de 50 puntos.

Si se observa el caso español, se pone de manifiesto que durante la primera legislatura socialista los valores para los que tendían a confiar y los que tendían a desconfiar se entrecruzan según los años, es decir, la diferencia entre ellos es pequeña, apenas de 10 puntos en el momento de más diferencia en la primera legislatura, que es en 2004, con el 51% de españoles que tiende a confiar en el gobierno y el 41% que tiende a no confiar. En cambio, en la segunda legislatura socialdemócrata crece la desconfianza y disminuye la confianza en el gobierno, de forma que la distancia entre las dos posturas aumenta hasta más de 50 puntos. Así, en el año 2009 los que tendían a confiar eran el 34% de los españoles, mientras los que desconfiaban eran el 60%. En el año 2011, los que tendían a confiar eran el 16% y los que tendían a no confiar, el 79,9%, una tendencia que continuó una vez terminado el periodo socialista de gobierno. Una vez más, se hace palpable que en la segunda legislatura socialista empezó a ser más agudo el problema de la desconfianza hacia el gobierno.

El fenómeno de la desconfianza hacia los partidos políticos tiene un comportamiento similar en España al problema de la desconfianza en el parlamento y el gobierno. Sin embargo, se muestra algo más matizado en Francia, donde se percibe cierta estabilidad durante todo el periodo de

análisis y un ligero crecimiento de la desconfianza hacia los partidos durante el periodo socialista, así como una caída de la confianza en las mismas fechas.

De esta forma, en el caso español, el porcentaje de españoles que tendía a confiar en los partidos políticos oscilaba entre el 27% y el 30% en la primera legislatura socialista; mientras que el porcentaje de los que tendía a desconfiar se movía entre el 62% y el 65% de españoles. Así, la diferencia entre las posiciones era de alrededor de 30 puntos, de manera que era algo más estrecha que la distancia entre las posturas en la legislatura conservadora anterior, según los datos del Eurobarómetro. En cambio, y siguiendo el patrón comprobado hasta el momento en el caso de la desconfianza política, en la segunda legislatura socialista aumenta la distancia entre la confianza y la desconfianza en más de 60 puntos, una tendencia que sigue al alza después del periodo socialista. En los dos últimos años de la legislatura socialdemócrata, 2010 y 2011, el 10% y el 11,9% de españoles tiende a confiar en los partidos políticos, mientras que el 85% y el 84%, tienden a desconfiar, respectivamente. Se pone de manifiesto, por tanto, el mismo comportamiento que con la desconfianza hacia el parlamento y el gobierno español.

En el caso de Francia, el problema de la desconfianza hacia los partidos políticos es bastante estable durante todo el periodo de análisis, donde la desconfianza se mueve en torno al 80% de los franceses y la confianza alrededor del 15% de los ciudadanos galos. Sin embargo, sí que aumenta ligeramente la desconfianza, hasta valores cercanos al 90%, y cae la confianza, hasta valores por debajo del 10%, durante la presidencia socialista. El mayor valor de desconfianza se da en el año 2016, con el 90% de franceses que tienden a desconfiar de los partidos políticos, al igual que el menor porcentaje de los que tienden a confiar, con el 5,5% de los ciudadanos que se inclina por esta opción.

De los datos anteriores se desprende, pues, que la desconfianza política ha empezado su escalada en periodos socialistas de gobierno en ambas unidades de análisis.

Por lo que se refiere a la percepción de la corrupción en España y Francia, según datos de Transparencia Internacional, se observa cierta estabilidad en el caso galo y mayor percepción de corrupción en España a partir de la segunda legislatura del PSOE.

Así, durante la primera legislatura socialista, España obtiene 70 puntos en 2004 y 2005 (de un máximo de 100, que sería el menos corrupto); 68 puntos en 2006; y, 67 puntos en 2007. En cambio, en 2008 ya se da una puntuación de 60, por tanto, aumenta la percepción de la corrupción entre la ciudadanía. Esa tendencia sigue en la segunda legislatura socialista, con 61 puntos en 2009 y 2010 y 62 puntos en 2011. En todo el periodo de análisis, no es en la etapa socialista donde se da una peor percepción de la corrupción, pero sí que esta empeora en la

segunda legislatura. En cambio, en Francia, entre el 2012 y 2017, las puntuaciones son de 71 puntos para 2012 y 2013; 69 puntos para 2014 y 2016; y, 70 puntos para 2015 y 2017, lo que da a entender cierta estabilidad en la percepción de la corrupción durante el periodo de presidencia socialista en Francia. Durante todo el periodo de análisis, las peores puntuaciones sobre percepción de la corrupción se dan fuera del periodo socialista (en 2008, con 60 puntos; y, en 2002, con 63 puntos).

De un modo general, en el caso francés, no se aprecia mayor percepción de la corrupción durante la presidencia de Hollande. Por lo que se refiere al caso español, sí existe una mayor percepción de corrupción por parte de la ciudadanía en la segunda legislatura socialista, a partir de 2008, pero la percepción de la corrupción es mucho mayor al final del periodo de análisis, una vez terminado el periodo socialista de gobierno.

En cuanto al problema de la no participación en el sufragio, según los datos analizados, se observa que en los años en que se ha registrado una mayor abstención, los socialdemócratas han cosechado peores resultados electorales en ambas unidades de análisis.

En Francia, las dos veces que la abstención ha sido más alta entre 2000 y 2017 (en 2002, con el 20% y en 2017, con el 25%) han coincidido con las dos únicas veces en el periodo de análisis en que los candidatos presidenciales socialdemócratas no han pasado a segunda vuelta. En España, los peores resultados cosechados por los socialistas, dentro del periodo de análisis, se han obtenido en el año 2000, con el 34% de los apoyos al PSOE y el 31% de abstención (año en que el PP revalidó su mandato); en el 2011, momento en el que los resultados socialistas y la abstención estuvieron a la par, con el 28%, respectivamente (año en que el PSOE perdió el gobierno); y, en 2015 y 2016, con el 22% de apoyo para los socialistas y el 26% de abstención, y el 22% de apoyos y el 30% de abstención, respectivamente. De ello se infiere que el problema del abstencionismo ha perjudicado más al PSOE, ya que, durante todo el periodo de análisis, ni el PP ni, más tarde, los nuevos partidos, han perdido tantos apoyos como lo ha hecho el PSOE, si bien la abstención no es el único factor que explica la situación.

En ambos países, según los datos disponibles de la Encuesta Social Europea, el PSOE y el PS son, generalmente, los partidos a los que más españoles y más franceses, respectivamente, dicen sentirse cercanos, lo que no obsta para que luego se expresen las preferencias electorales divergentemente.

Con todo lo anterior, se observa que, principalmente, el descontento y la desconfianza políticas se han agudizado en la segunda legislatura socialista en España y durante el periodo socialista en Francia. Sin embargo, los problemas empiezan a vislumbrarse también en coincidencia con

la llegada de la crisis económica a Europa y sus consecuencias, entre los años 2008 y 2010, cuando se pone de manifiesto cierta censura con respecto a actitudes anteriores y comienzan a manifestarse algunos problemas de representación política de forma más aguda, sin que ello implique una pérdida de interés por lo político por parte de la ciudadanía. Por otro lado, la percepción de la corrupción no se ve de forma tan aguda en los periodos socialistas, aunque sí se observa más en la segunda legislatura que en la primera etapa socialista en España. En cambio, la percepción de la corrupción se mantiene estable en Francia durante la presidencia socialdemócrata. Como se ha visto, cuando la abstención es más alta, los partidos socialistas tienen peores resultados en ambos países, lo que pone de manifiesto que es un problema que ha afectado a estas opciones durante el periodo de análisis.

CAPÍTULO 8

CONCLUSIONES

8.1. Conclusiones generales de la investigación

El problema de investigación que el presente trabajo ha pretendido explorar se resumía en la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre los distintos problemas relacionados con la representación política en España y Francia y los resultados electorales obtenidos por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Socialista (PS) francés entre los años 2000 y 2017?

Para dar respuesta a la incógnita, se ha ido desgranando el estudio en distintas etapas, que han servido para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, a la vez que se ha intentado responder a las preguntas de investigación y comprobar las hipótesis planteadas.

De este modo, con respecto a la pregunta inicial que condensa el problema de investigación, a través del estudio realizado se puede concluir que la mayoría de problemas relacionados con la representación política encontrados se han agudizado en etapas de gobiernos socialistas tanto en España como en Francia durante el periodo de análisis.

Así, el objetivo principal de la investigación se concretaba en:

- Determinar la relación entre los problemas de representación política en el capitalismo avanzado y la disminución del apoyo popular o electoral a los partidos socialdemócratas tradicionales de España (PSOE) y de Francia (PS) entre 2000 y 2017.

A través de los datos recogidos y analizados, se ha visto que, especialmente, el abstencionismo se relaciona con los bajos resultados electorales de los partidos socialdemócratas de España y de Francia durante el periodo de análisis, y que los problemas del descontento y la desconfianza política se han hecho más sensibles para la sociedad española a partir de la segunda legislatura socialista en España (2008 - 2011) y de la presidencia socialdemócrata en Francia (2012 - 2017). De la misma forma, el problema de la corrupción se ha percibido como peor en España a partir de la segunda legislatura socialdemócrata, pero se ha mantenido estable durante todo el periodo de análisis en Francia.

En cuanto a los seis objetivos específicos de la investigación, se han ido cumpliendo en las distintas fases del estudio especificadas en el Capítulo 2. De la misma manera, los objetivos del estudio llevaban asociadas diversas preguntas de investigación.

El primer objetivo específico se basaba en identificar y describir los problemas clave relacionados con la representación política en el capitalismo avanzado y en las democracias

occidentales, particularmente de España y de Francia durante el periodo de estudio, ya que son las unidades de análisis. La pregunta que lleva aparejada este objetivo es doble. En este punto, el estudio ha pretendido responder a: ¿Cuáles son los problemas clave de la representación política en las sociedades actuales, especialmente en España y Francia? y a ¿Los problemas relacionados con la representación política se correlacionan con la pérdida de apoyo electoral al PSOE y al PS?

La identificación y caracterización de los problemas relacionados con la representación política se ha llevado a cabo con la revisión de la literatura al respecto, que se concentra en el capítulo 3, lo que, además de trazar un recorrido histórico sobre el concepto de representación política, ha permitido determinar la existencia de ocho problemas relacionados con la representación política aplicables al caso español y al caso francés: el descontento político, el alejamiento entre el representante y el representado, la oligarquización, la desconfianza política, la desafección política, la corrupción, la falta de credibilidad y el abstencionismo. En el mismo proceso, se han determinado las categorías en las que clasificar a los distintos problemas, que son la *responsiveness*, la *accountability* y la *responsibility*. De igual manera, se han descrito los atributos que permiten operacionalizar los problemas relacionados con la representación política, a partir de los datos disponibles. Estos se concretan en el nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia y del gobierno para el descontento político; la opinión ciudadana acerca de la dificultad de entender la política para el alejamiento entre el representado y el representante; entender la política como algo reservado a las élites y la opinión acerca de la influencia que permite tener a la ciudadanía el sistema político para el problema de la oligarquización; los niveles de confianza y de desconfianza hacia distintas instituciones representativas para el problema de la desconfianza política; el interés por la política y la facilidad para participar en ella para la desafección política; el índice de percepción de la corrupción y otros índices propios de cada país para el problema de la corrupción; la valoración a líderes políticos y los atributos de confianza para el problema de la falta de credibilidad; y, los resultados electorales y de participación, así como la intención y el recuerdo de voto y la cercanía a un partido en particular para el problema del abstencionismo.

La segunda pregunta correspondiente al primer objetivo de la investigación se ha respondido mediante el análisis de los resultados electorales y la incidencia de los problemas de representación política en los periodos de gobiernos socialistas, así como con la examinación de los problemas y los resultados electorales de cada país. Ello permite concluir que la mayoría de problemas se han agudizado en etapas socialdemócratas de gobierno y que una abstención alta perjudica a los resultados electorales del PSOE y del PS.

Una vez determinados y caracterizados los problemas de representación política que aquejan a las principales sociedades occidentales y, por tanto, a España y a Francia, el segundo objetivo específico se basaba en determinar las distintas percepciones de la ciudadanía con respecto a los problemas relacionados con la representación política encontrados, tanto en el caso español como el francés. Así, la pregunta de investigación relacionada con este objetivo se ha concretado en: ¿Cómo percibe la ciudadanía de España y de Francia los problemas relacionados con la representación política?

La respuesta a la pregunta y, por tanto, la concreción del segundo objetivo específico, se ha llevado a cabo en la profundización del estudio de caso, a través de la recopilación sistemática de datos y su análisis, que se puede encontrar en los capítulos 5 y 6, y que ha permitido concluir la sistematización de los distintos pareceres de la opinión pública española y francesa al respecto de los atributos de los problemas de representación política durante todo el periodo de análisis, así como contrastar los diferentes datos de las percepciones ciudadanas obtenidos mediante la triangulación de fuentes. Ha sido, pues, una parte fundamental para llevar a cabo el estudio y continuar con el análisis comparativo.

El tercer objetivo específico de la investigación pretendía identificar y describir las transformaciones sociológicas de las sociedades postindustriales con respecto a las industriales, lo que se ha llevado a cabo en el capítulo 4. Por ello, la pregunta de investigación que corresponde a este objetivo es: ¿Cuáles son las principales transformaciones sociológicas de las sociedades postindustriales con respecto a las industriales que pueden influir en el objeto de estudio?

La respuesta a esta incógnita corresponde a la contextualización del problema de estudio y de las transformaciones sociológicas realizada en la presente tesis. Ello ha aportado datos adicionales para comprender los casos de estudio de forma holística y ha permitido observar cómo los cambios acaecidos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, especialmente relacionados con el factor trabajo y el advenimiento de la sociedad de la información, son un elemento que interviene en el objeto de estudio, tanto en el desarrollo de los partidos socialdemócratas como en las percepciones que los ciudadanos tienen de los problemas de representación política. Las transformaciones sociológicas de las sociedades postmodernas, si bien afectan a la sociedad en su conjunto, influyen en buena medida a las bases tradicionales socialdemócratas, ya que afectan a fundamentos clásicos de esta ideología, como la clase trabajadora y la construcción del Estado de bienestar, así como las modificaciones que tienen

lugar en el puesto de trabajo y en el tipo de empleo, entre otros factores, como puede ser la digitalización de las sociedades postindustriales.

En cuanto al cuarto objetivo específico, que se basaba en realizar un análisis sociohistórico de la evolución de la socialdemocracia y de los años de gobierno del PSOE y del PS, se ha llevado a término también en el capítulo 4, ya que completa el marco contextual al centrarse de forma específica en la ideología socialdemócrata. Ello ha permitido constatar las dinámicas sociales e históricas en que se inscriben los partidos socialistas de España y de Francia. De este modo, la pregunta asociada al cuarto objetivo vuelve a ser doble: ¿Cómo ha evolucionado la socialdemocracia moderna? y ¿Cómo ha sido el desempeño del PSOE y del PS cuando han estado en el gobierno dentro del periodo de análisis? Estas preguntas han hecho avanzar la investigación al permitir situar el marco de referencia socio-temporal en que las opciones socialdemócratas de España y de Francia se han ido adaptando al cambiante contexto de las sociedades postmodernas. Por tanto, han permitido constatar la adaptabilidad de los partidos socialistas hasta la fecha a las distintas transformaciones sociológicas, así como los hitos y problemas de sus legislaturas. Los partidos socialistas se han adaptado a las distintas circunstancias históricas, con cambios desde su origen hasta la actualidad, como, por ejemplo, la entrada en los parlamentos, la transformación de los partidos de los trabajadores hacia los partidos *catch-all* o la emergencia de la Tercera Vía. Sin embargo, los cambios llevados a cabo no han provocado una mayor confianza electoral, tal y como se desprende del estudio realizado. El quinto objetivo específico de la investigación consistía en caracterizar la disminución del apoyo popular o electoral a los partidos socialdemócratas a partir de la descripción y comparación de los resultados electorales de los partidos que conforman el estudio de caso. Por ello, la pregunta que se propone en relación a este objetivo es: ¿Cuáles han sido los resultados electorales del PSOE y del PS dentro del periodo de análisis? Esta pregunta, en asociación con las inmediatamente anteriores, permite constatar la debilidad electoral que, pese a la adaptabilidad de las fuerzas socialdemócratas, sufren estos partidos durante el periodo de análisis. En las últimas elecciones dentro del periodo de estudio (el año 2016 en España y el año 2017 en Francia) el PSOE y el PS han tenido los peores resultados del siglo XXI.

El inicio de la crisis económica en España coincidió con un gobierno socialista y, a partir de la segunda legislatura, los problemas relacionados con la representación política se empezaron a agravar. Pese a que los años posteriores a la crisis, cuando las consecuencias sociales se hicieron más notorias, no coincidieron en España con gobiernos socialistas, sí continuaron en aumento las percepciones ciudadanas negativas sobre los problemas de representación política, y la pérdida de apoyos electorales para la socialdemocracia. En Francia, los socialistas estuvieron en

el poder en el momento de lidiar con las consecuencias de la crisis económica y, de igual manera, las percepciones negativas sobre los problemas de representación política continuaron en aumento, así como decayó el apoyo electoral a los socialistas.

La consecución del quinto objetivo específico ha permitido concluir que, efectivamente, los partidos socialistas han perdido apoyo electoral en ambos países y que la mayoría de problemas de representación, en especial la desconfianza y el descontento político, se han hecho más palpables durante los gobiernos socialistas, tal y como puede apreciarse en el capítulo 7.

El sexto objetivo específico consistía en realizar una lectura longitudinal de los resultados de los casos de estudio identificando tendencias, similitudes y diferencias entre los países analizados, mediante su comparación. Por este motivo, la pregunta de investigación correspondiente a este objetivo se ha delimitado a: ¿Qué tendencias se observan a partir de los resultados de los casos de estudio?

El cumplimiento del sexto objetivo se ha llevado a cabo en el capítulo 7, donde se puede encontrar una comparación de las tendencias encontradas en las dos unidades de análisis con respecto al problema de investigación. De esta forma, la respuesta de la última pregunta de investigación ha permitido observar cómo han evolucionado las percepciones ciudadanas al respecto de los atributos de los problemas de representación política, al mismo tiempo que se han puesto en relación con los resultados electorales y se han comparado en los dos países estudiados. El trabajo ha permitido constatar que tanto en la sociedad española como en la francesa se dan los mismos problemas de representación política, pero que las percepciones negativas más radicalizadas se encuentran en el caso español. Además, durante los periodos de gobiernos socialistas, en los dos países se agravan las percepciones negativas de los problemas de representación política. Del mismo modo, en ambos lugares cae el apoyo electoral a los partidos socialistas, pese a que estos, al moverse en contextos similares, han llevado a cabo procesos de adaptación a las nuevas sociedades postindustriales muy parecidos.

Así, gracias al análisis realizado se ha podido ver que los problemas relacionados con la representación política se han intensificado entre los años 2008 y 2010, y, en la mayoría de ellos, esa agudización ha continuado hasta el final del periodo de análisis (en el año 2017), independientemente de si existían gobiernos socialistas o no socialistas en los casos de estudio durante los últimos años del periodo de análisis. Es decir, en España, se ha observado claramente que en la segunda legislatura socialista se agravan los problemas relacionados con la representación política en comparación con legislaturas anteriores no socialdemócratas. Sin

embargo, la tendencia de agravamiento de los problemas continua hasta el final del periodo de análisis, fuera ya del periodo socialista de gobierno.

En el caso francés, se observa también una tendencia al alza de los principales problemas de representación política a partir del año 2010 y 2012, hasta el final del periodo de análisis. En este caso, a partir de 2012 y hasta 2017, el agravamiento de los principales problemas de representación política coincide con la presidencia socialista del país.

En general, se observa que, a lo largo del periodo de análisis, los problemas de representación política se agudizan coincidiendo, también, con la llegada de la crisis económica de 2008 a Europa y el giro hacia las políticas de austeridad iniciado en 2010. En la prolongación de las tendencias al alza de los problemas relacionados con la representación política hasta el final del periodo de análisis (fuera de la etapa socialista en España, pero bajo la presidencia socialista en Francia) pueden interferir, también, los cambios sociológicos de las sociedades postindustriales, que, a su vez, han empeorado sus consecuencias sobre las bases tradicionalmente socialdemócratas con las consecuencias de la Gran Recesión.

A pesar de que el estudio no puede determinar la influencia exacta de los cambios sociológicos sobre la disminución del apoyo electoral a los partidos socialdemócratas en los que se centra el análisis, se comprueba que las transformaciones del postfordismo, de las sociedades postindustriales y de la sociedad de la información han modificado las estructuras sociales y la identidad política de las bases tradicionalmente socialdemócratas, que nacieron en una sociedad completamente diferente a la actual.

El estudio ha permitido constatar que la tendencia al alza de los problemas relacionados con la representación política es más grave en España que en Francia. En el caso español, las posiciones más extremas y radicales de descontento y desconfianza han crecido más que en Francia, si bien en los dos casos se dan las mismas dinámicas de radicalización, concentradas en la caída de las posiciones moderadas y en el crecimiento de las posiciones más cercanas a la insatisfacción política.

En los dos países, donde se dan las mismas tendencias de problemas de representación política, las opciones socialdemócratas han cosechado los peores resultados electorales en las últimas elecciones celebradas dentro del periodo de análisis, con 85 diputados para el PSOE en las elecciones generales de 2016; y, el 6% del apoyo electoral para el candidato socialdemócrata a la presidencia francesa en las elecciones de 2017. Estas dos derrotas electorales fueron, además, las más importantes que han sufrido el PSOE y el PS desde mitad del siglo XX hasta lo que llevamos de siglo XXI.

En el inicio de la investigación se plantearon tres hipótesis, que se han podido comprobar a lo largo de las distintas fases del estudio. Ninguna de ellas ha quedado refutada.

En primer lugar, se planteó si los problemas clave relacionados con la representación política incidían negativamente en los resultados electorales de las opciones socialdemócratas clásicas de España y de Francia. Tal y como se ha podido ver, el abstencionismo es el problema relacionado con la representación política que más claramente influye de forma negativa en los resultados del PSOE y del PS durante el periodo de análisis. Además, en las etapas socialistas en ambos países, se ha observado que se agravan el descontento y la desconfianza política. En cuanto a la corrupción, en España se ve una percepción incipientemente negativa de cara a la corrupción política hacia la segunda legislatura socialista, siguiendo la tendencia de otros problemas de representación política; pero, en el caso de Francia, la percepción de la corrupción se mantiene estable. Según los datos disponibles para el periodo de análisis, a pesar de que se agudizan los problemas relacionados con la representación política sobre todo hacia los últimos años del periodo de análisis, se pone de manifiesto que el interés por la política no decae.

En segundo lugar, se pretendía observar si las transformaciones sociológicas que se dan en el tránsito de las sociedades industriales a las postindustriales pueden agravar los problemas de representación política y dificultar la aceptación de la oferta socialdemócrata clásica. En este sentido, gracias a la aproximación cualitativa se ha podido aprehender que las transformaciones sociológicas que se dan a finales del siglo XX y principios del XXI tienen mucho que ver con el factor trabajo, lo que se relaciona directamente con las bases de apoyo socialdemócratas tradicionales en lo que representa la llegada del postfordismo. Los cambios sociales afectan a la sociedad en su conjunto, pero, particularmente, influyen en los trabajadores, de manera que las preferencias políticas se diversifican, igual que las identidades y las expectativas de los votantes. Al mismo tiempo, también las transformaciones sociológicas afectan a los partidos políticos y, en el caso de los socialdemócratas, deben adaptarse para cumplir con las expectativas más amplias y difusas de asalariados y clases medias —los cuales pueden haber desarrollado identidades múltiples—, pero también de los más damnificados por la Gran Recesión, el incipiente *precariado*, lo que puede crear dilemas difíciles de resolver a la hora de articular políticas públicas o de desarrollar una oferta socialdemócrata lo suficientemente atractiva para todos los grupos socioeconómicos y demográficos.

En tercer lugar, se ha planteado si los problemas de representación política son percibidos tanto en España como en Francia por sus respectivas ciudadanías y si se han agravado con la Gran Recesión. En efecto, a través de la investigación realizada se ha podido comprobar que los

misimos problemas de representación política se ponen de manifiesto tanto en la opinión pública española como en la francesa, aunque varía el nivel de ciertos atributos según la unidad de análisis. De esta forma, a través de los datos disponibles, se ha corroborado que, en el caso español, los problemas relacionados con la representación política se muestran más agudos y existe una tendencia a la radicalización de las opiniones mayor que en el caso francés.

De la misma manera, el estudio ha permitido observar que la llegada de la Gran Recesión en el año 2008, pero especialmente el giro hacia la austeridad de 2010, coinciden con el agravamiento de los problemas relacionados con la representación política, en especial del descontento y la desconfianza políticas. En efecto, los siete últimos años del periodo de análisis son los que registran mayores cotas de problemas relacionados con la representación política.

El hecho de que la percepción de los problemas de representación política siga empeorando desde 2010 a 2017 (aunque en España no coincida con gobiernos socialistas, pero en Francia, sí) abre la posibilidad de que en ello influyan las consecuencias económicas y sociales de la Gran Recesión, que pueden agravar la sensibilidad ciudadana al respecto de estas problemáticas. Aunque, esto último queda fuera de los límites del presente estudio.

8.2. Conclusiones metodológicas

La metodología utilizada en la investigación, basada en el estudio de caso con el uso del análisis sociohistórico y la recolección y sistematización de datos secundarios, se ha demostrado como un método óptimo para acercarse al problema planteado. En especial, al combinar datos estadísticos, que permiten conocer las opiniones ciudadanas acerca de distintos temas durante varios años y, además, son válidos para la comparación; y, las fuentes heurísticas, un complemento imprescindible para tener una aproximación contextualizada y veraz al fenómeno estudiado.

Las técnicas usadas y la triangulación de fuentes han permitido comprobar las hipótesis planteadas, cumplir con los objetivos establecidos en el inicio del estudio y responder a las preguntas de investigación.

Asimismo, el empleo del estudio de caso ha servido para comprender el problema en ambas unidades de análisis y producir conocimiento nuevo, tanto con el análisis en profundidad de cada caso, como con el método de la comparación.

La selección de las unidades de análisis, una muestra intencional y no probabilística, que se ha vinculado a factores territoriales y sociohistóricos, ha permitido observar tendencias generales

compartidas y también alguna diferencia, como la relacionada con la percepción de la corrupción. Sin embargo, pese a las diferencias en la cultura política de España y de Francia y las diferencias socioeconómicas, se ha descubierto que los problemas relacionados con la representación política encontrados son compartidos por ambos países. De igual manera, la pérdida de apoyos electorales de los partidos socialdemócratas clásicos de los dos países es palpable.

De esta forma, se ha conseguido una aproximación holística al fenómeno de análisis en los dos países y durante el periodo de estudio, llegando a la comprensión global del problema de investigación.

Aun así, cabe poner de manifiesto que, pese a la idoneidad del uso de datos secundarios estadísticos agregados, su empleo ha resultado una limitación en casos específicos. Si bien para la mayoría de problemas encontrados y sus atributos existían datos suficientes para todo el periodo de análisis, en otros casos, como, concretamente, el del problema de la credibilidad, la inexistencia de suficientes datos disponibles ha limitado el estudio. En el mismo sentido, el hecho de que las encuestas estén realizadas de antemano no permite al investigador poder definir el cuestionario, lo que hace que el diseño de la investigación haya tenido que adaptarse a esta circunstancia.

No obstante, las herramientas metodológicas implementadas han permitido profundizar en el problema de investigación. Asimismo, también han permitido poner en relación los problemas de representación política y los resultados de los partidos socialdemócratas, así como comparar las dos unidades de análisis, lo que ha llevado a obtener nuevo conocimiento sobre la temática elegida y, quizás, abrir nuevas vías de investigación en el futuro.

8.3. Tendencias de futuro

La investigación ha permitido observar de qué manera ha cambiado el problema de estudio durante el periodo de análisis, que termina en el año 2017, y establecer así una evolución longitudinal que abarca todo el siglo XXI. Se han descrito y comparado las distintas tendencias acerca de la opinión pública sobre los problemas de representación política y se han puesto en relación con la socialdemocracia moderna. Sin embargo, se trata de fenómenos sociales en constante evolución y sujetos a tantos factores que hacer predicciones de futuro no es una tarea sencilla. A los problemas ya señalados, se pueden añadir otros elementos, como la volatilidad electoral, la aparición de nuevos partidos o las particularidades de cada cultura política y cada

sistema político, así como, de forma más extensa, la influencia de la globalización, que, pueden afectar al problema de investigación, y que, sin duda, dificultan las predicciones sobre hacia dónde evolucionarán los principales problemas encontrados y el desarrollo que tendrán los representantes de la socialdemocracia tradicional.

Las tendencias generales apuntadas, es decir, la agudización de los problemas de representación política a partir de la segunda legislatura socialista en España, que continúa después del gobierno del PSOE, hasta 2017; y, durante la presidencia socialdemócrata en Francia; o, de un modo más general, a partir de los años 2008 y 2010, permiten ver que no se da una tendencia a la caída, sino que hasta 2017, se han mantenido niveles altos de descontento y de desconfianza política, así como se ha percibido un mayor nivel de corrupción en España. Al mismo tiempo, también se ha visto un interés creciente por la política y cómo una alta abstención ha perjudicado a las opciones socialdemócratas.

La escasez de datos para todo el periodo de análisis hace que las evidencias no sean tan contundentes acerca del problema del alejamiento entre representante y representado, la oligarquización y la desafección, pero con lo estudiado se pone de manifiesto que esos problemas han existido durante el periodo de análisis en ambos países.

Así, como la mayoría de los problemas de representación política han continuado al alza hasta el año 2017, es probable que, si las condiciones políticas, sociales y económicas se mantienen parecidas, la tendencia no se revierta en el futuro inmediato. Por tanto, los partidos socialdemócratas se ven en la situación de reflexionar sobre las estrategias de captación de voto en el futuro cercano.

Además, los cambios tecnológicos, económicos, políticos y sociológicos están en constante evolución, lo que también obliga a una reflexión profunda acerca de la agregación de preferencias por parte de los partidos políticos, de la noción de bien común, del funcionamiento de las democracias avanzadas y de la oferta socialdemócrata europea, en particular.

En cuanto a la opinión pública acerca del desencanto político, la desafección y la desconfianza, así como sobre otros problemas de representación política, se hace ineludible que de cara al futuro los decisores tengan en cuenta esas percepciones y articulen respuestas acordes a revertir los citados problemas, ya que ello contribuiría a conseguir una democracia de mayor calidad y a una mayor satisfacción ciudadana. Como se ha visto en la investigación, el interés por la política no ha caído, lo cual indica que pese a participar en el sistema desconfiando de él, buena parte de la ciudadanía es consciente de la importancia de lo político.

La investigación, acotada al periodo 2000-2017 y a dos países de la Unión Europea, constituye un aporte al debate sobre los problemas de representación y sobre la evolución de la socialdemocracia, lo que puede significar un paso para seguir investigando acerca de la cuestión en el futuro.

De esta forma, el estudio podría ser ampliado a medida que transcurra el tiempo, extendiendo el periodo de análisis, de manera que se prolongara el diseño longitudinal. Igualmente, la futura investigación podría incorporar más países, en los que el declive de las opciones socialdemócratas se ha hecho visible en los últimos años (como, por ejemplo, Italia y Grecia), de tal manera que se haría más extenso el método comparativo y se podría hablar del fenómeno a escala europea. Incluso, si la investigación se planteara con más recursos, se podría ampliar el radio de análisis e incluir no solo a las opciones socialdemócratas, sino también a otros partidos políticos y ver de qué manera se transforma el objeto de estudio, con las diferencias de diseño que ello conllevaría.

Por tanto, se pone de manifiesto que la presente investigación no agota en absoluto el campo de estudio, sino que constituye un eslabón más para generar y promover debate académico.

CHAPTER 9

CONCLUSIONS

ENGLISH VERSION

9.1. General conclusions of the investigation

The research problem that this dissertation has tried to explore was summarized in the following question: What is the relationship between the different problems related to political representation in Spain and France and the electoral results obtained by the Spanish Socialist Workers Party (PSOE) and the French Socialist Party (PS) between the years 2000 and 2017?

To answer the question, the study has followed different stages, which have served to meet the objectives of the research, while trying to answer the research questions and check the hypotheses.

Thus, with respect to the initial question that condenses the research problem, through the study conducted it can be concluded that most of the problems related to political representation have been exacerbated in stages of socialist governments in both Spain and France during the analysis period.

Consequently, the main objective of the investigation was specified in:

- Determine the relationship between the problems of political representation in advanced capitalism and the decrease in popular or electoral support for the traditional social democratic parties of Spain (PSOE) and France (PS) between 2000 and 2017.

Through the data collected and analysed, it has been seen that, especially, abstentionism is related to the low electoral results of the social democratic parties of Spain and France during the period of analysis, and that the problems of discontent and political distrust have become more sensitive for Spanish society since the second socialist legislature in Spain (2008 - 2011) and the social democratic presidency in France (2012 - 2017). In the same way, the problem of corruption has been perceived as worse in Spain since the second social democratic legislature, but it has remained stable throughout the period of analysis in France.

Regarding the six specific objectives of the research, they have been fulfilled in the different phases of the study, specified in Chapter 2. Moreover, the objectives of the study were associated with several research questions.

Accordingly, the first specific objective was based on identifying and describing the key problems related to political representation in advanced capitalism and in Western democracies, particularly Spain and France during the period of study, since they are the units of analysis. The question that carries this objective is twofold. At this point, the study has tried to answer: What are the key problems of political representation in current societies, especially in Spain and France? and a Do the problems related to political representation correlate with the loss of electoral support to the PSOE and the PS?

The identification and characterization of the problems related to political representation has been carried out with the review of the literature, which is concentrated in Chapter 3. In addition to tracing a historical course on the concept of political representation, this chapter has made it possible to determine the existence of eight problems related to political representation applicable to the Spanish case and the French case: political discontent, distance between the representative and the represented, oligarchization, political distrust, political disaffection, corruption, lack of credibility and abstention. In the same process, it has been determined the categories in which to classify the different problems, which are responsiveness, accountability and responsibility. Likewise, the attributes that allow the operationalization of problems related to political representation have been described, based on the available data. These are the level of satisfaction with the functioning of democracy and government for political discontent; the citizen's opinion about the difficulty of understanding politics for the distance between the represented and the representative; to understand politics as something reserved for the elites and the opinion about the influence that allows the political system to have for the problem of oligarchization; the levels of trust and distrust towards different representative institutions for the problem of political distrust; the interest in politics and the ease to participate in it for political disaffection; the perception index of corruption and other indices specific to each country for the problem of corruption; the valuation of political leaders and the attributes of trust for the problem of lack of credibility; and, the electoral results and the levels of participation, as well as the intention and the memory of vote and the proximity to a particular party for the problem of abstentionism.

The second question corresponding to the first objective of the investigation has been answered through the analysis of the electoral results and the incidence of the problems of political representation in the periods of socialist governments, as well as with the examination of the problems and the electoral results of each country. This allows us to conclude that most of problems have worsened in social democratic stages of government and that a high abstention negatively affects the electoral results of the PSOE and the PS.

Once stated and characterized the problems of political representation that afflict the main Western societies and, therefore, Spain and France, the second specific objective was based on specifying the different perceptions of citizenship with respect to the problems related to representation, both in the Spanish and French cases. Thus, the research question related to this objective has been concretized in: How does the citizenship of Spain and France perceive the problems related to political representation?

The answer to the question and the concretion of the second specific objective, has been carried out in the deepening of the case study, through the systematic collection of data and its analysis, which can be found in chapters 5 and 6, and that has allowed to conclude the systematization of the different opinions of Spanish and French public opinion on the attributes of the problems of political representation throughout the period of analysis, as well as to contrast the different data of the citizen perceptions obtained by triangulating sources. It has been, then, a fundamental part to carry out the study and continue with the comparative analysis.

The third specific objective of the research was to identify and describe the sociological transformations of post-industrial societies with respect to industrial ones, which has been carried out in chapter 4. Then, the research question that corresponds to this objective is: What are the main sociological transformations of post-industrial societies with respect to industrial ones that can influence the object of study?

The answer to this question corresponds to the contextualization of the problem of study and of the sociological transformations made in this thesis. This has provided additional data to understand the case studies in a holistic way and has made it possible to observe how the changes that occurred at the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, especially related to the work factor and the advent of the information society, are an element that intervenes in the object of study, both in the development of social democratic parties and in the perceptions that citizens have of the problems of political representation. The sociological transformations of postmodern societies, although affecting society as a whole, largely influence the traditional social democratic bases, since they affect classical fundamentals of this ideology, such as the working class and the construction of the welfare state, as well as the changes that take place in the workplace and in the type of employment, among other factors, such as the digitalization of post-industrial societies.

Regarding the fourth specific objective, which was based on a sociohistorical analysis of the evolution of social democracy and the years of PSOE and PS governments, it has also been completed in chapter 4, since it completes the contextual framework by focusing specifically on

social democratic ideology. This has allowed to verify the social and historical dynamics in which the socialist parties of Spain and France are registered. In this way, the question associated with the fourth objective is again twofold: How has modern social democracy evolved? and How was the performance of the PSOE and the PS when they have been in the government within the period of analysis? These questions have advanced the investigation by allowing us to situate the socio-temporal frame of reference in which the social democratic options of Spain and France have been adapting to the changing context of postmodern societies. Therefore, they have made it possible to verify the adaptability of the socialist parties to date to the different sociological transformations, as well as the milestones and problems of their legislatures.

The fifth specific objective of the research was to characterize the decrease in popular or electoral support for social democratic parties based on the description and comparison of the electoral results of the parties that make up the case study. So, the question that is proposed in relation to this objective is: What have been the electoral results of the PSOE and the PS within the period of analysis? This question, in association with the immediately previous ones, allows to verify the electoral weakness that, despite the adaptability of the social democratic forces, these parties suffer during the period of analysis. In the last elections within the study period (2016 in Spain and 2017 in France) the PSOE and the PS have had the worst results of the 21st century.

The achievement of the fifth specific objective has allowed to conclude that, indeed, the socialist parties have lost electoral support in both countries and that most of problems of representation, especially distrust and political discontent, have become more palpable during the socialist governments, as it can be seen in chapter 7.

The sixth specific objective was to carry out a longitudinal reading of the results of the case studies, identifying trends, similarities and differences among the countries examined, by comparing them. For this reason, the research question corresponding to this objective has been delimited to: What tendencies are observed from the results of the case studies?

The fulfilment of the sixth objective has been carried out in chapter 7, where a comparison of the trends found in the two units of analysis with respect to the research problem can be found. In this way, the response of the last research question has allowed us to observe how citizen perceptions have evolved regarding the attributes of the problems of political representation, while they have been related to the electoral results and have been compared in the two countries studied.

Thus, thanks to the analysis carried out, it has been possible to see that the problems related to political representation have intensified between 2008 and 2010, and, in most of them, this aggravation has continued until the end of the analysis period (in the year 2017), regardless of whether there were socialist or non-socialist governments in the case studies during the last years of the analysis period. That is, in Spain, it has been clearly observed that in the second socialist legislature the problems related to political representation are worse compared to previous non-social democratic legislatures. However, the tendency to aggravate the problems continues until the end of the period of analysis, outside the socialist period of government.

In the French case, there is also an upward trend in the main problems of political representation from the year 2010 and 2012, until the end of the period of analysis. In this case, from 2012 and until 2017, the aggravation of the main problems of political representation coincides with the socialist presidency of the country.

In general, it is observed that, throughout the period of analysis, the problems of political representation are sharpened coinciding, also, with the arrival of the economic crisis of 2008 to Europe and the turn towards the austerity policies initiated in 2010. In the prolongation of upward trends in the problems related to political representation until the end of the period of analysis (outside the socialist stage in Spain, but under the socialist presidency in France) can also interfere with the sociological changes of post-industrial societies, which, in turn, have worsened their consequences on traditionally social democratic bases with the consequences of the Great Recession.

The study has shown that the upward trend in problems related to political representation is more serious in Spain than in France. In the Spanish case, the most extreme and radical positions of discontent and distrust have grown more than in France, although in both cases there are the same dynamics of radicalization, concentrated in the fall of moderate positions and in the growth of positions closer to political dissatisfaction.

In both countries, where the same tendencies of problems of political representation occur, the social democratic options have reaped the worst electoral results in the last elections held within the analysis period, with 85 deputies for the PSOE in the 2016 general elections; and, 6% of the electoral support for the social democratic candidate for the French presidency in the elections of 2017. These two electoral defeats were, in addition, the most important that the PSOE and the PS have suffered since the middle of the 20th century and the 21st century.

At the beginning of the investigation three hypotheses were raised, which have been proven throughout the different phases of the study. None of them has been refuted.

In the first place, it was asked if the key problems related to political representation had a negative impact on the electoral results of the classic social democratic options in Spain and France. As it has been seen, abstentionism is the problem related to political representation that most clearly negatively influences the results of the PSOE and the PS during the period of analysis. Furthermore, in the socialist stages in both countries, it has been observed that discontent and political distrust are aggravated. Regarding the problem of corruption, in Spain there is an incipiently negative perception of political corruption towards the second socialist legislature, following the trend of other problems of political representation; but, in the case of France, the perception of corruption remains stable. According to the data available for the period of analysis, although the problems related to political representation are becoming more acute, especially towards the last years of the analysis period, it becomes clear that interest in politics does not decline.

Secondly, it was intended to observe whether the sociological transformations that occur in the transition from industrial to post-industrial societies can aggravate the problems of political representation and make it difficult to accept the classical social democratic offer. In this sense, thanks to the qualitative approach it has been possible to apprehend that the sociological transformations that take place at the end of the 20th century and the beginning of the 21st have a lot to do with the work factor, which is directly related to the traditional social democratic bases of support in what represents the arrival of post-Fordism. Social changes affect society, but, in particular, they influence workers, so that political preferences are diversified, as it happens with the identities and expectations of voters. At the same time, sociological transformations also affect political parties and, in the case of social democrats, they must adapt to meet broader and more diffuse expectations of lower and middle classes which may have developed multiple identities, but also of those most affected by the Great Recession, the incipient precarious class, which can create dilemmas difficult to solve when articulating public policies or developing a social democratic offer sufficiently attractive for all socioeconomic and demographic groups.

Thirdly, it has been raised whether the problems of political representation are perceived both in Spain and in France by their respective citizenships and if they have been aggravated by the Great Recession. Indeed, through the research carried out it has been possible to verify that the same problems of political representation are evident both in Spanish and French public opinion, although the level of certain attributes varies according to the unit of analysis. In this way, through the available data, it has been corroborated that, in the Spanish case, the problems

related to political representation are more acute and there is a tendency to radicalize opinions more than in the French case.

In the same way, the study has shown that the arrival of the Great Recession in 2008, but especially the turn towards austerity in 2010, coincides with the worsening of the problems related to political representation, especially discontent and the political distrust. In effect, the last seven years of the analysis period are the ones that register the highest levels of problems related to political representation.

The fact that the perception of the problems of political representation continues to worsen from 2010 to 2017 (although in Spain it does not coincide with socialist governments, but it does in France) opens the possibility that the economic and social consequences of the Great Recession play a role in the phenomenon, because these consequences can aggravate the sensitivity of citizens in relation to these problems. However, this last point of analysis goes beyond the limits of the present study.

9.2. Methodological conclusions

The methodology used in the research, based on the case study with the use of sociohistorical analysis and the collection and systematization of secondary data, has been shown as an optimal method to approach the proposed problem. Specifically, by combining statistical data, which allows to know the opinions of citizens about different topics for several years and, in addition, are valid for comparison; and, the heuristic sources, an essential complement to have a contextualized and truthful approach to the phenomenon studied.

The techniques used and the triangulation of sources have allowed us to check the hypotheses, meet the objectives established at the beginning of the study and answer the research questions.

Likewise, the use of the case study has served to understand the problem in both units of analysis and produce new knowledge, both with the in-depth analysis of each case, and with the comparison method.

The selection of the units of analysis, an intentional and non-probabilistic sample, which has been linked to territorial and sociohistorical factors, has made it possible to observe general shared trends and some differences, such as that related to the perception of corruption. However, despite the differences in the political culture of Spain and France and the

socioeconomic variances, it has been discovered that the problems related to the political representation are shared by both countries. Similarly, the loss of electoral support from the classic social democratic parties of the two countries is tangible.

In this way, we have achieved a global approach to the phenomenon of analysis in the two countries and during the study period, reaching a holistic understanding of the research problem.

Even so, it should be noted that, despite the suitability of the use of aggregated statistical secondary data, its use has been a limitation in specific cases. Although for most of the problems and their attributes there was sufficient data for the entire period of analysis, in other cases, such as, specifically, the problem of credibility, the lack of enough available data has limited the study. In the same sense, the fact that the surveys are done in advance does not allow the researcher to be able to define the questionnaire, which means that the research design has had to adapt to this circumstance.

However, the methodological tools implemented have allowed to deepen the research problem. Likewise, they have also made it possible to relate the problems of political representation and the results of the social democratic parties, as well as to compare the two units of analysis, which has led to new knowledge on the theme chosen and, perhaps, to open new paths of research in the future.

9.3. Future trends

The research has allowed us to observe how the study problem has changed during the analysis period, which finishes in 2017, and thus establish a longitudinal evolution that covers the entire 21st century. The different tendencies about public opinion on the problems of political representation have been described and compared and have been put in relation with modern social democracy. However, these are social phenomena in constant evolution and subject to so many factors that making predictions of the future is not a simple task. To the aforementioned problems, other elements which can affect the investigation problem can be added, such as electoral volatility, the appearance of new parties or the particularities of each political culture and each political system, as well as, more extensively, the influence of globalization. All these make it difficult to predict the development of the problems related to political representation, as well as the future of social democracy.

The general trends pointed out, that is, the worsening of the problems of political representation since the second socialist legislature in Spain, which continues after the PSOE government, until 2017; and, during the social democratic presidency in France; or, in a more general way, since the years 2008 and 2010, allow us to see that there is no tendency to fall, but to have high levels of discontent and political distrust, as well as corruption in the Spanish case until 2017. At the same time, there has also been a growing interest in politics and it has been shown that a high abstention in elections damages social democratic results.

The scarcity of data for the entire period of analysis makes the evidence not so strong about the problem of distance between representatives and represented, oligarchization and disaffection, but with the study done it becomes clear that these problems have existed during the period of analysis in both countries.

Thus, as most problems of political representation have continued upwards until 2017, it is likely that, if the political, social and economic conditions remain similar, the trend will not reverse in the immediate future. Hence, the social democratic parties are in a position to reflect on the strategies for capturing votes in the near future.

In addition, technological, economic, political and sociological changes are constantly evolving, which also forces a deep reflection on the aggregation of preferences by political parties, the notion of the common interest, the functioning of advanced democracies and the offer of European socialdemocracy.

Regarding public opinion about political disenchantment, disaffection and mistrust, as well as other problems of political representation, it is inescapable that in the future decision-makers consider these perceptions and articulate responses to revert the aforementioned problems, because this would contribute to achieve a higher quality democracy and greater citizen satisfaction. As seen in the research, interest in politics has not fallen, which indicates that despite participating in the system distrusting it, a good part of citizens is aware of the importance of politics.

The research, limited to 2017 and to two countries of the European Union, constitutes a contribution to the debate on the problems of representation and on the evolution of socialdemocracy, which may mean a step to continue investigating about the issue in the future.

In this way, the study could be extended as time passes, spreading the period of analysis, so that the longitudinal design will be prolonged. Moreover, future research could incorporate more countries, in which the decline of social democratic options has become visible in recent years

(like, for example, Italy and Greece), in such a way that the comparative method would be wider and the study could show results in a European level. If the research were raised with more resources, it could expand the analysis radius and include not only the social democratic options, but also other political parties and see how the object of study is transformed, with the design adaptation that would entail.

Therefore, it is clear that the present research does not exhaust the field of study at all, but it constitutes a step forward to generate academic debate.

BIBLIOGRAFÍA

- Abberger, K., Nierhaus, W. (2008). How to define a Recession? *CESifo Forum*. 4. 74-76.
- Aguirre, M. E. (1981). *El sistema caciquil en España 1876 - 1923*. Madrid: Arbor.
- Alarcón, R. (2016). Crisis y descontento. El aumento de la abstención crítica en el sur de Europa, 2002-2012. *Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales*, 12, 88 - 110.
- Albentosa, L. (1985). La política de ajuste aplazada: reconversión industrial, *Información Comercial Española (ICE)*, nº 617-618.
- Alesina, A. (1988). Credibility and Politics. *European Economic Review*, 32 (2-3), 542-550.
- Allard, C. (2011). Más Europa, no menos. *Finanzas & Desarrollo*. Septiembre. 52-54.
- Alonso, L. E. (2007). *La crisis de la ciudadanía laboral*. Barcelona: Anthropos Editorial.
- Alonso, L. E., Fernández, C. (2013). *Los discursos del presente. Un análisis de los imaginarios sociales contemporáneos*. Madrid: Siglo XXI.
- Álvarez-Uría, F. (2001). Neoliberalismo, tercera vía y socialdemocracia. *Claves de razón práctica*, (111), 31-39.
- Andrade, J. A. (2009). Del socialismo autogestionario a la OTAN: notas sobre el cambio ideológico en el PSOE durante la Transición a la democracia. *Historia actual online*, (14), 97-106.
- Anduiza, E. (2002). Individual characteristics, institutional incentives and electoral abstention in Western Europe. *European Journal of Political Research*, 41, 643-673.
- Armingeon, K. (1994). Ante el final de la socialdemocracia. Los partidos socialdemócratas en el poder: evolución desde una perspectiva comparada, 1945-1990. En Merkel, W. (ed.). *Entre la modernidad y el postmaterialismo: la socialdemocracia europea a finales del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.
- Aróstegui, J. (1999). La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996). En J. Martínez, (coord.). *Historia de España. Siglo XX. 1939- 1996*. Madrid: Cátedra.
- Artés, J. (2011). Do Spanish politicians keep their promises? *Party Politics*, 19 (1), 143-158.
- Barreiro, B. (1998). Justificaciones, responsabilidad y cumplimiento de promesas electorales. *Revista Española de Ciencia Política*, 1 (1), 149-169.
- Bartolini, S. y Mair, P. (2008). *Identity, Competition and Electoral Availability: The Stabilization of European Electorates, 1885-1985*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Barnechea, A. (2001). *Para salir del laberinto: del neoliberalismo a la nueva socialdemocracia*. Madrid: Santillana.
- Bauman, Z. (2005). *Modernidad y ambivalencia*. Barcelona: Anthropos.

- Bauman, Z. (2006). *Vida líquida*. Barcelona: Paidós.
- Bauman, Z. (2007). *Vida de consumo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Bell, D. (1976) [1973]. *El advenimiento de la sociedad post industrial*. Madrid: Alianza Editorial.
- Bell, D. (1980). The Social Framework of the Information Society. En: T. Forester (ed.), *The information Technology Revolution*. Oxford: MIT Press.
- Benedicto, J. (2006). La construcción de la ciudadanía democrática en España (1977-2004): de la institucionalización a las prácticas. *Reis*, 114/06, 103-138.
- Bentham, J. (1817). *Plan of parliamentary reform*. London: Printed for R. Hunter, successor to Mr. Johnson.
- Bernstein, E. (1982). *Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia: problemas del socialismo: el revisionismo en la socialdemocracia*. México: Siglo XXI.
- Bernstein, E. (1997) [1898]. *Socialismo democrático*. Madrid: Movimiento Cultural Cristiano.
- Bernstein, R. A. (1989). *Elections, Representation and Congressional Voting Behaviour: The Myth of Constituency Control*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Bhagwati, J. (2005). *En defensa de la globalización*. Barcelona: Debate.
- Blair, T. (1998). *La tercera vía*. Madrid: El País/Aguilar.
- Blais, A. (2007). Turnout and Elections, 621-635, en Dalton, R. y Klingemann, H.D. Oxford *Handbook of Political Behaviour*. Oxford: Oxford University Press.
- Bobbio, N. (1985). *El futuro de la democracia*. Barcelona: Ariel.
- Bologna, S. (2006). *Crisis de la clase media y posfordismo*. Madrid: Akal.
- Bosco, A. (2013). The long adiós: the PSOE and the end of the Zapatero era. En *Politics and Society in Contemporary Spain* (pp. 21-39). Palgrave Macmillan US.
- Boyer, R. (1987). La crisis económica actual. Su dinámica y sus implicaciones para Francia. En G. Ross, S. Hoffman y S. Malzacher (coords.), *El experimento Mitterrand* (pp. 55-81). València: Edicions Alfons el Magnànim.
- Brouard, S., Kerrouche, E., Deiss-Helbig, E. y Costa, O. (2013). From Theory to Practice: Citizens' Attitudes about Representation in France. *The Journal of Legislative Studies*, 19 (2), 178-195.
- Brunet, P. (2012). Acerca del concepto de representación política. *Revista internacional de pensamiento político*. I Época, vol. 7, 245-261.
- Burke, E. (1790). *Reflections on the Revolution in France*. Recuperado en <http://socserv2.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/burke/revfrance.pdf>. Consultado el 19/06/2017.

- Burke, E. (1791). *An appeal from the new to the old Whigs*. London: Printed for J. Dodsley. Recuperado en <https://archive.org/details/appealfromnewtoo00burkiala>. Consultado en 19/06/2017.
- Burke, E. (1792). A Letter to Sir Hercules Langrishe en *Works of the Right Honourable Edmund Burke*, Vol. IV, 241-306.
- Burke, E. (2005) [1774]. Speech to the electors of Bristol. *Miscellaneous writings. Select Works*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Callejo, J. et al. (2015). *Introducción a las técnicas de investigación social*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Caínzos, M., y Jiménez, F. (2000). El impacto de los escándalos de corrupción sobre el voto en las elecciones generales de 1996. *Historia y política*, (04).
- Cardona, M. et al. (2017). *Predict 2017 Country Factsheets, EU Member States-Purchasing Power Standard*. JRC Technical Report. Luxemburgo: Oficina de la Unión Europea.
- Castells, M. (1997). *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. Vol. I: *La sociedad red*. Madrid: Alianza Editorial.
- Castells, M. (Ed.) (2005). *La sociedad red: una visión global*. Madrid: Alianza Editorial.
- Castells, M. 2009. *Communication Power*. New York, NY: Oxford University Press.
- Cayrol, R. (1978). La direction du Parti socialiste: organisation et fonctionnement. En: *Revue française de science politique*, 28^e année, n°2, 201-219.
- Centro de Economía Internacional. (1998). *Japón: Del estancamiento a la recesión*. Asia & Argentina.
- Chadwick, A. (2006). *Internet politics*. Nueva York: Oxford University Press.
- Chadwick, A. (2009). Web 2.0: New Challenges for the Study of E-Democracy in an Era of Informational Exuberance. *Journal of Law and Policy for the Information Society*, 5(1), 1-32.
- Clift, B., y Kuhn, R. (2014). The Hollande Presidency, 2012–14. *Modern and Contemporary France*. Vol. 22, 4, 125-434.
- Cohen, J. y Arato, A. (2000). *Sociedad civil y teoría política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Coll, F. R. (1991). Teoría crítica y estado social: neokantismo y socialdemocracia. En *J. Habermas* (Vol. 30). Barcelona: Anthropos Editorial.
- Claessens, S., Kose, A. M. (2009). ¿Qué es una recesión? *Finanzas & Desarrollo*. Marzo. 52-53.
- Clarke, S. (1991). Crise do fordismo ou crise da social-democracia?. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, (24), 117-150.

- Constant, B. (2013) [1819]. Sobre la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos. *Libertades*, 83-95.
- Constitución francesa de 1791 [Const.]. (1791). Recuperado de <http://aajc.com.ar/home/wp-content/uploads/2016/07/Constituci%C3%B3n-Francesa-de-1791.pdf> (consultado el 19/06/2017).
- Converse, P. y Pierce, R. (1986). *Political Representation in France*. United States: Harvard College.
- Cordero, G., y Martín, I. (2011). *Quiénes son y cómo votan los españoles de izquierdas*. Madrid: Catarata.
- Costa, O., Lefébure, P., Rozenberg, O., Schnatterer, T., Kerrouche, E. (2012). Far Away, So Close: Parliament and Citizens in France. *The Journal of Legislative Studies*, 18 (3–4), 294 – 313.
- Costa, P. (2004). El problema de la representación política: una perspectiva histórica. *AFDUAM*, 8, 15-61.
- Costas-Pérez, E., Solé-Ollé, A., y Sorribas-Navarro, P. (2012). Corruption scandals, voter information, and accountability. *European Journal of Political Economy*, 28(4), 469 – 484.
- Criado de Diego, M. (2012). Sobre el concepto de representación política: lineamientos para un estudio de las transformaciones de la democracia representativa, *Revista de derecho del Estado*, 28, 77-114.
- Christensen, H. (2015). Power sharing and political dissatisfactions: A multilevel analysis of the impact of institutional power sharing on kinds of political dissatisfaction in 24 European democracies. *European Politics and Society*. 16 (2). 280 - 300.
- Creswell, J. (1998). *Qualitative inquiry and research designs: choosing harmony among five traditions*. Thousand Oaks: Sage.
- Crosland, A. (1975). La socialdemocracia en Europa. *Revista Política y Cultural Nueva Sociedad Limitada*.
- Crouch, C. (2004). *Posdemocracia*. Madrid: Taurus.
- Cuono, M. (2013). Representación política. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, Nº 4, marzo – agosto, 163-171.
- Daloz, J. P. (2008). Between Majesty and Proximity: The enduring ambiguities of political representation in France. *French Politics*, 6, 302–320.
- Del Campo, E., y Ramos, M. (1997). La paradoja partidista: institucionalización y representación en los partidos políticos latinoamericanos. *América Latina Hoy*, 16, 29-40.
- Del Campo, E. (2000). Los grupos de interés en España y la Unión Europea. *La Europeización del Sistema Político Español*. Madrid: Istmo – Akal.

- Del Campo, E. (2001). Los grupos de presión. En Román, P. *Sistema político español*, 155-181. España: McGraw Hill.
- Del Campo, E. (2009). *Democracia y rendición de cuentas en Bolivia y Colombia*. Madrid: Catarata.
- Del Campo, E. (2013). Transiciones inacabadas, reformas estructurales e incertidumbres institucionales, el caso de América Latina. *Res publica: revista de filosofía política*. 30, 93-114.
- Del Campo, E. (2014). Gobernanza, democracia y políticas públicas. En *Teoría y práctica de las políticas públicas* (413-435). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Del Campo, E., Güemes, M.C., Paramio, L. (2017). I can't get no satisfaction. Servicios públicos, democracia y clases medias en América Latina. *América Latina hoy: Revista de ciencias sociales*. 77, 161-187.
- De Lima, M. B. O., y Del Campo, E. (2008). Buen gobierno, rendimiento institucional y participación en las democracias contemporáneas. *Sistema: Revista de ciencias sociales*, (203), 55-69.
- Del Río, O. (2011). El proceso de investigación: etapas y planificación de la investigación. En Vilches, L. (coord.). *La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital*. Barcelona: Gedisa.
- Delwit, Pascal. (2005). *Social Democracy in Europe*. Bruxelles: Editions de l'Université de Bruxelles.
- De Vega García, P. (1985). Significado constitucional de la representación política. *Revista de Estudios políticos*, (44), 25-46.
- De Vries, C. y Solaz, H. (2017). The Electoral Consequences of Corruption. *The Annual Review of Political Science*. 20. 391 – 408.
- Dos Santos, M. R. (1992). *¿Qué queda de la representación política?*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Dotti, J. (2014). La representación teológico-política en Carl Schmitt. *Avatares filosóficos*, 1, 27-54.
- Drucker, P. (1969). *The Age of Discontinuity*. London: Heinemann.
- Duhamel, O. (1987). La Quinta República durante el mandato de François Mitterrand. Evolución y perspectivas. En G. Ross, S. Hoffman y S. Malzacher (coords.), *El experimento Mitterrand*. València: Edicions Alfons el Magnànim.
- Dunn, J. (1999). Situating Democratic Political Accountability. En A. Przeworski, S. Stokes, B. Manin (coords.), *Democracy, Accountability and Representation* (pp. 329-344). New York: Cambridge University Press.

- Durá, J. F. (2012). España en Crisis. Balance de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero/Años de cambios, años de crisis. Ocho años de gobiernos socialistas, 2004-2011. *Revista Española de Ciencia Política*, (30), 153-161.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: Weley.
- Easton, D. (1975). A Re-Assessment of the Concept of Political Support. *British Journal of Political Science*, 5 (4), 435 - 457.
- EFE. (10/06/2016). La OCDE pide el fin de la austeridad en Europa. *Cinco Días*.
- Escribano, J. J, y Ortiz, P. (2006). “Los españoles ante la política y las instituciones de la democracia representativa” en Martínez, A. (2006). (ed.). *Representación y calidad de la democracia en España*. Madrid: Tecnos.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Esping-Andersen, G. (2000). *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*. Barcelona: Ariel.
- Esping-Andersen, G. y Palier, B. (2010). *Los tres grandes retos del estado del bienestar*. Barcelona: Ariel.
- Esping-Andersen, G. (2012). Igualdad con una burguesía feliz. La vía socialdemocrática hacia la igualdad. En: A. Przeworski e I. Sánchez-Cuenca, (eds). *Democracia y Socialdemocracia*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis*. London: Logman.
- Fearon, J. D. (1999). Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance. En A. Przeworski, S. Stokes, B. Manin (coords.), *Democracy, Accountability and Representation* (pp. 55-97). New York: Cambridge University Press.
- Ferejohn, J. (1999). Accountability and Authority: Toward a Theory of Political Accountability. En A. Przeworski, S. Stokes, B. Manin (coords.), *Democracy, Accountability and Representation* (pp. 131-153). New York: Cambridge University Press.
- Fernández-Albertos, J. (2012). *Democracia intervenida. políticas económicas en la gran recesión*. Madrid: Catarata.
- Fernández-Vázquez, P. and G. Rivero (2011). Consecuencias electorales de la corrupción, 2003–2007. *Estudios de Progreso*, Fundación Alternativas.
- Ferrándiz, J.P (2016). Pulso Electoral: muchas mujeres y jubilados, pocos estudiantes; el votante del PSOE. *Metroscopia.org*. España. Recuperado de <http://metroscopia.org/muchas-mujeres-y-jubilados-pocos-estudiantes-el-votante-del-psoe/>.

- Fetscher, I. (1977). *El Socialismo: de la lucha de clases al estado providencia: textos, ilustraciones y documentos*. Barcelona: Plaza & Janés.
- Fetscher, I. (1983). *El Marxismo, su historia en documentos*. Bilbao: Zero.
- Field, B. N. (Ed.). (2013). *Spain's 'second transition'?: the socialist government of José Luis Rodríguez Zapatero*. London: Routledge.
- Financial Crisis Inquiry Commission. (2011). *Conclusions*. United States of America: Rock Center for Corporate Governance.
- Flores, J. (2013). Emmanuel Joseph Sieyès: el gobierno representativo. *Política y cultura*, (39), 53-72.
- Franzé, J. (1994). La sociedad civil frente a la crisis de la política. Control y desentimiento. *Nueva Sociedad*, 134, 102-117.
- Gaffney, J. (2015). *France in the Hollande Presidency: The Unhappy Republic*. London: Palgrave Macmillan.
- García, J. J. (1998). *El Poder Ausente: un análisis de la abstención electoral en la Región de Murcia*. Universidad de Murcia.
- García, C. (1976). *Crisis de la socialdemocracia y orígenes de la tercera internacional en España*. Tesis doctoral.
- García, E. (2001). Crisis de la representación política: las exigencias de la política de la presencia. *Revista de Estudios Políticos*, enero - marzo.
- García, E. (2004). El significado de la representación política. *Afduam*, 8, 109-120.
- García, R. C. (2013). La crisis de la socialdemocracia. *Atlántica XXII: Revista Asturiana De Información y Pensamiento*, (25), 43-45.
- García, T. F., y Sánchez, M. M. (2002). Estado de bienestar y socialdemocracia: ideas para el debate. *Servicios sociales y política social*, (56), 157.
- Garrorena, A. (1991). *Representación política y Constitución democrática*. Madrid: Civitas.
- Gerring, J. (2007). *Case Study Research. Principles and practices*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Giddens, A. (2002). *El nou progressisme: Praxi política de la Tercera Via*. Valls: Pòrtic.
- Giddens, A. (1997 [1990]). *Las consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Giddens, A. (1999). *La renovación de la socialdemocracia*. Madrid: Taurus.
- Giddens, A., Cifuentes Huertas, P. (2003). *La tercera vía: La renovación de la socialdemocracia*. Madrid: Taurus.
- Giddens, A. (2000). *The third way and its critics*. Cornwall: Polity Press.
- Gillham, B. (2000). *Case study research methods*. London: Continuum.

- Godoy, O. (1995). Selección de textos políticos de Benjamin Constant. *Estudios Públicos*, 59, 1-68.
- Giraldo, S. (2012). *El uso de las páginas web de los parlamentos nacionales como recurso comunicativo para promover la participación política de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas* (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona, España.
- Gombert, T. (2009). *Foundations of social democracy*. Berlín: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Gourevitch, P. (1986). *Politics in Hard Times. Comparative responses to international economic crises*. United States: Cornell University Press.
- Gray, J. (2000 [1998]). *Falso amanecer*. Madrid: Paidós.
- Gramlich, E. (2004). *Remarks by Governor Edward M. Gramlich*. Chicago.
- Gramsci, A. (1950). *Americanismo e fordismo*. Universale economica.
- Grunberg, G. y Schweisguth, E. (1984). Las capas medias asalariados y la evolución de los comportamientos electorales en Francia 1967-1984. En: *Reis: Revista española de investigaciones sociológicas*, Nº 26, 151-166.
- Grunberg, G. (2014). Le Socialisme français en crise. En: *Modern and Contemporary France*. Vol. 22 (4), 459-471.
- Grunsky, D. Western, B. Wimer, C. (2011). *The Great Recession*. New York: Russell Sage Foundation.
- Guibernau, M. (2002). Conèixer Anthony Giddens. *El nou progressisme: Praxi política de la Tercera Via*. Valls: Pòrtic.
- Guitián, E. G. (2001). Crisis de la representación política: las exigencias de la política de la presencia. *Revista de Estudios Políticos*, (111), 215-226.
- Habermas, J. (1972). *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Habermas, J. (1998). *Facticidad y Validez*. Madrid: Trotta.
- Habermas, J. (2005). Tres modelos de democracia. Sobre el concepto de democracia política deliberativa. *Polis. Revista de la Universidad Bolivariana*. 4 (010).
- Habermas, J. (2008). Comunicación política en la sociedad mediática. El impacto de la teoría normativa en la investigación empírica. *Revista Libero*. XI (21), 9-22.
- Haidar, J. I. (2012). Sovereign Credit Risk in the Eurozone. *World Economics*. Enero. Vol. 13, 123-136.
- Hall, P. (1987). La evolución de la política económica. En G. Ross, S. Hoffman y S. Malzacher (coords.), *El experimento Mitterrand* (pp. 82-108). València: Edicions Alfons el Magnànim.

- Hallin, D. Mancini, P. (2007). *Sistemas Políticos Comparados: tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política*. Barcelona: Hacer.
- Hamilton, A., Jay, J., Madison, J. (2001) [1788]. *The Federalist*. Indianapolis: Liberty Fund.
- Hernández, R; Fernández, R. y Baptista, P. (2006) [1997]. *Metodología de la investigación*. Bogotá: McGraw-Hill.
- Hibbs, D. (1987): *The political economy of industrial democracies*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hildebrandt, Ernst. (2009). La crisis de la izquierda europea y la necesidad de construir un nuevo paradigma para el siglo XXI. *Nueva Sociedad*. Noviembre – Diciembre.
- Hinkelammert, F. J. (1981). Socialdemocracia y democracia cristiana: las reformas y sus limitaciones. *El juego de los reformismos frente a la revolución en Centroamérica. Materiales sobre la socialdemocracia, la democracia cristiana, el reformismo yanqui*, 13-56.
- Hurwitz, R. (2003). “Who Needs Politics? Who Needs People? The Ironies in Cyberspace”. En H. Jenkins y D. Thorburn. *Democracy and New Media*. Londres: MIT Press.
- Hobbes, T. (2009) [1651]. *Leviatán*. Madrid: Alianza Editorial.
- Hobsbawm, E. (2000). *Política para una izquierda racional*. Barcelona: Crítica.
- Holloway, J. (2005). *Keynesianismo, una peligrosa ilusión. Un aporte al debate de la teoría del cambio social*. Buenos Aires: Ediciones Herramienta.
- Iglesias, P. (1910). *Diario de sesiones del congreso de los Diputados*. Madrid. 433.
- Ignazi, P. (2014). Power and the (il)legitimacy of political parties: An unavoidable paradox of contemporary democracy? *Party Politics*, 20 (2), 160 - 169.
- Internacional Comunista. (1920). Estatutos.
- International Monetary Fund. (2009). *World Economic Outlook. Crisis and Recovery*. Washington: IMF.
- Internacional Socialista. (1989). *Declaración de principios*. Estocolmo.
- Internacional Socialista. (2003). *Carta ética*. São Paulo.
- Jameson, F. (1991). *Teoría de la posmodernidad*. Madrid: Editorial Trotta.
- Jenkins, H., Thorburn, D. (2003). *Democracy and New Media*. Londres: MIT Press.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Paidós.
- Jiménez, F. (2007). Luces y sombras en el control de la corrupción: las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007. *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 6(2), 43 – 76.
- Katz, R. S., Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy. *Party Politics*, 1 (1), 5-28.
- Kelsen, H. (2006). *De la esencia y valor de la democracia*. Oviedo: KRK Ediciones.

- Kingdon, J. (1981). *Congressmen's voting decisions*. New York: Harper and Row.
- Kitschelt, H. (1994). *The transformation of European Social Democracy*. United States: Cambridge University Press.
- Kitschelt, H. (2000). Citizens, politicians, and party cartellization: Political representation and state failure in post-industrial democracies. *European Journal of Political Research*, 37, 149-179.
- Kirchheimer, O. (1966). The transformation of the Western European party systems. *Political parties and political development*, 177-200.
- Krysik, J. L. (2005). Secondary analysis. En Grinnell, R. y Unrau, Y. (eds.). *Social work: Research and evaluation. Quantitative and qualitative approaches*. Nueva York: Oxford University Press.
- Kuhn, R. (2014). Mister Unpopular: François Hollande and the Exercise of Presidential Leadership, 2012–14. En: *Modern and Contemporary France*. Vol. 22 (4), 435-457.
- Kuisel, R. (1987). El crecimiento económico de la posguerra en Francia. Una perspectiva histórica de los Trente glorieuses. En G. Ross, S. Hoffman y S. Malzacher (coords.), *El experimento Mitterrand* (pp. 36-54). València: Edicions Alfons el Magnànim.
- Ladrech, R. and Marlière, P. (Eds.) (1999). *Social Democratic Parties in the European Union. History, Organization, Policies*. Great Britain: MacMillan Press LTD.
- Laguna, A. (2011). Liderazgo y Comunicación: la personalización de la política. *Anàlisi*. (43). 45-57.
- Lapavistas, C. et al. (2011). Crisis en la zona euro: perspectiva de un impago en la periferia y la salida de la moneda común. *Revista de Economía Crítica*. 11. 131-171.
- Lash, S. (1984). *The militant worker. Class and radicalism in France and America*. Great Britain: Heinemann Educational Books.
- Lash, S. y Urry, J. (1988). *The end of organized capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Lash, S. (1997). *Sociología del posmodernismo*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- Laver, M., Shepsle, K. A. (1999). Government Accountability in Parliamentary Democracy. En A. Przeworski, S. Stokes, B. Manin (coords.), *Democracy, Accountability and Representation* (pp. 279-296). New York: Cambridge University Press.
- Le Bart, C. y Lefebvre, R. (2005). *La proximité en politique: Usages, rhétoriques, pratiques*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- Lee, B. y Saunders, M. (2017). *Conducting Case Study Research for business and management students*. London: Sage.

- Leibholz, G. (1929). *Das wesen der repräsentation unter besonderer berücksichtigung des repräsentativsystems: ein beitrag zur allgemeinen staats- und verfassungslehre*. Berlin: W. de Gruyter & co.
- León, O. G. y Montero, I. (2003). *Métodos de investigación en psicología y educación*. Madrid: McGraw-Hill.
- Letamendia, F. (2009). *Estructura política del mundo del trabajo: fordismo y posfordismo*. Madrid: Tecnos.
- Lévy, P. (2002). *Ciberdemocracia. Ensayo sobre filosofía política*. Barcelona: Editorial UOC.
- Lipietz, A. (1993). From althusserianism to Regulation Theory. En: E. Kaplan y M. Sprinker, *The althusserian legacy*. Londres: Verso.
- Lindvall, J. The electoral consequences of two great crises. *European Journal of Political Research*. 53:747-765, 2014.
- López Aguilar, J. F. (2013). *La socialdemocracia y el futuro de Europa*. Madrid: Catarata.
- Luxemburg, R. (1976). *La crisis de la socialdemocracia*. Barcelona: Anagrama.
- Luxemburg, R. (2002). *Reforma o revolución*. Madrid: Fundación Federico Engels.
- Lyon, D. (1994). *Postmodernidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Lyotard, J. F. (1984). *The Postmodern Condition*. Manchester: Manchester University Press.
- Mair, P. y Katz, R. S. (2009). The Cartel Party Thesis: A Restatement. *Perspectives on Politics*. 7 (4), 753-766.
- Mair, P. (2013). *Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mair, P. (2005). "Democracy Beyond Parties" Center for the Study of Democracy, consultado el 11/07/17. <http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/3291/viewcontent.pdf>
- Manin, B. (1987). On legitimacy and Political Deliberation. *Political Theory*, 15 (3), 338-368.
- Manin, B. (1997). *The Principles of Representative Government*. New York: Cambridge University Press.
- Mansbridge, J. (2003). Rethinking Representation. *American Political Science Review*, 97 (4), 515-528.
- Mansbridge, J. (2011). Clarifying the Concept of Representation. *American Political Science Review*, 105 (3), 621-630.
- Maravall, J. M. et al. (1992). *Socialist Parties in Europe*. Barcelona: Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona.
- Maravall, J.M. (1995). *Los resultados de la democracia*. Madrid: Alianza Editorial.

- Maravall, J. M. (1999). Accountability and Manipulation. En A. Przeworski, S. Stokes, B. Manin (coords.), *Democracy, Accountability and Representation* (pp. 154-196). New York: Cambridge University Press.
- Maravall, J. M. (2012). Promesas cambiantes. Un análisis de la socialdemocracia. En Przeworski, A. y Sánchez-Cuenca, I: *Democracia y socialdemocracia*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Martínez, M. A. (2004). La representación política y la calidad de la democracia. *Revista Mexicana de Sociología*, 66 (4).
- Martínez, A. (2006). (ed.). *Representación y calidad de la democracia en España*. Madrid: Tecnos.
- Martorell, M.; Juliá, S. (2012). *Manual de historia política y social de España (1808-2011)*. Barcelona: RBA.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marx, K. ([2001] 1864). *Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores*. Marxists Internet Archive.
- Marx, K. (1974). *Capital*. New York: International Publishers.
- Marx, K. (1975). *Early writings*. London: Penguin.
- Marx, K. (2015 [1852]). *El 18 Brumario de Luis Bonaparte*. Madrid: Alianza Editorial.
- Marín, J. M. (2000). Diez años de gobierno del PSOE (1982-1992). *Espacio, Tiempo y Forma*. Serie V, 189-209.
- Marín, J. M. (2008). Los Socialistas en el poder (1982-1996). *Historia y Política*, (20), 43-71.
- Masuda, Y. (1984). *La sociedad informatizada como sociedad post-industrial*. Madrid: Fundesco – Tecnos.
- Mattelart, A. (1998). “Los paraísos de la comunicación”, en: Ramonet, I. (Coord.) *Internet: El mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mclean, M. (1998). *The Mitterrand Years: Legacy and Evaluation*. London: Macmillan Press.
- McLuhan, M. (1969). *La galaxia Gutenberg: génesis del "homo typographicus"*. Madrid: Aguilar.
- McMann, K., Seim, B., Teorell, J. y Lindberg, S. (2017). *Democracy and Corruption: A Global Time-Series Analysis with V-Dem Data*. University of Gothenburg.
- Mejía, O. (2013). *Curso de filosofía política*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Merkel, W. (1994). *Entre la modernidad y el postmaterialismo. la socialdemocracia europea a finales del siglo XX*. Madrid: Alianza Universidad.

- Merkel, W. (1995). *¿Final de la socialdemocracia? recursos de poder y política de gobierno de los partidos socialdemócratas en Europa occidental*. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
- Merkel, W. (2008). La socialdemocracia en Europa: Un análisis de su capacidad de reforma. *Nueva Sociedad*, 217, 99-118.
- Merkel, W. (2014). Is There a Crisis of Democracy? *Democratic Theory*, 1 (2), 11 - 25.
- Mestre, T. V. (2007). *Partidos y representación política: las dimensiones del cambio en los partidos políticos españoles, 1976-2006* (Vol. 249). CIS.
- Mertens, D.M. (2005). *Research and evaluation in Education and Psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed methods*. Thousand Oaks: Sage.
- Mexendau, L. (2005). *Histoire du Parti Socialiste*. Paris: Tallandier Editions.
- Mian, A. Sufi, A. (2015). *House of debt*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Ministère de l'Economie et des Finances. (2017). *Chiffres clés du numérique*. Ivry-sur-Seine: Direction Générale des Entreprises.
- Ministerio de Economía, industria y competitividad. (2016). *Spain. Investment opportunities. ICT Sector*.
- Monereo, J. L. (2012). *La crisis de la socialdemocracia europea: Eduard Bernstein y las premisas del socialismo reformista*. Mataró: El Viejo Topo.
- Montero, J. R., Gunther, R. y Torcal, M. (1998). Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección. *Reis*, 83, 9-49.
- Muir, E. (1997). *Ritual in Early Modern Europe*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Mukherjee, S., Ramaswamy, S. (1995). *Edmund Burke*. New Delhi: Deep & Deep Publications.
- Nadales, A. J. (1996). *El debate sobre la crisis de la representación política*. Madrid: Tecnos.
- Navajas, C. (2006). No más golpes de Estado. La política de defensa de Narcís Serra (1982-1986). *Historia del presente*, (8), 103-120.
- Navarro, J. (2001). *El nuevo socialismo. La visión de José Luis Rodríguez Zapatero*. Barcelona: Planeta de Agostini.
- Navarro, V. (2000). Globalización y socialdemocracia. *Zona abierta*, (92/93), 61-94.
- Nohlen, D. (1995). *Elecciones y sistemas electorales*. Alemania: Fundación Friedrich Ebert.
- Norris, P. (Ed.). (1999). *Critical citizens: Global support for democratic government*. Oxford: OUP.
- Novak, M. (1999). La crisis de la socialdemocracia. *Estudios públicos*, 74, 5-32.
- Novaro, M. (1995). El debate contemporáneo sobre la representación política. *Desarrollo Económico*, 145-157.
- OECD (2016). *OECD Economic Outlook*, Volume 2016, Issue 1. Paris: OECD Publishing.

- Pallarés, F., Bosso, A., y Muñoz, J. (2004). Las elecciones generales de 2004 en España. *Instituto de Derecho Público, Informe Comunidades Autónomas*.
- Palley, T. (2005). *Del keynesianismo al neoliberalismo: paradigmas cambiantes en economía*. México: Economía UNAM.
- Papell, A. (2008). *Zapatero 2004-2008: la legislatura de la crispación* (Vol. 90). Ediciones AKAL.
- Papell, A. (2012). *El futuro de la socialdemocracia: Ideas para una nueva izquierda*. Madrid: Foca.
- Paramio, L. (1988). *Tras el diluvio. La izquierda ante el fin de siglo*. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Paramio, L. (1989). Los principios del socialismo democrático. *Leviatán: Revista de hechos e ideas*. 38, 117-120.
- Paramio, L. (1999). Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de preferencias. *Revista Española de Ciencia Política*, 1, 81-95.
- Paramio, L. (2003). Frustración de los electores y crisis de la democracia. *Circunstancia: revista de ciencias sociales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset*, 2.
- Paramio, L. (2012). *La socialdemocracia maniatada: De los orígenes y la edad de oro a la trampa de la crisis de la eurozona*. Madrid: Catarata.
- Paramio, L. (2015 a). Sin confianza no hay democracia: electores e identidades políticas. *Apuntes Electorales*, (3).
- Paramio, L. (2015 b). Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de las preferencias. *Apuntes Electorales*, (2).
- Paramio, L. (2016). El tiempo de los economistas. En *Sociólogos contra el economicismo*, E. Gil (ed.). Madrid: Catarata.
- Partido Socialdemócrata Alemán. (1959). Programa de Godesberg.
- Partido Socialista francés. (1972). Programa Común. *Fundación Jean Jaurès*. Recuperado de: <https://jean-jaures.org/nos-productions/27-Juin-1972-la-signature-du-Programme-commun-de-gouvernement>.
- Pelayo, M. G. (1996). *El Estado de partidos*. Madrid: Alianza editorial.
- Pérez, J. (2011). Una sociedad en transformación (1982-1996). *Ayer*, (84), 99-127.
- Pérez, P. (2005). La integración económica de España en la Unión Europea (1986-1995). *Información Comercial Española*, 826, 107.
- Perona, A. J. (1993). *Entre el liberalismo y la socialdemocracia: Popper y la sociedad abierta*. Barcelona: Anthropos Editorial.

- Pfaller, A. (2002). *La socialdemocracia en la sociedad globalizada post-industrial*. Alemania: Fundación Friedrich Ebert.
- Pettit, P. (2008). Examen a Zapatero. *Sociedad y Discurso*, (13).
- Pharr, J., y Putnam, R. (eds.) (2000). *Disaffected democracies: What's wrong with the Trilateral Democracies*. Princeton: Princeton University Press.
- Philips, A. (1995). *The Politics of Presence*. Oxford: Clarendon.
- Piedrafita, S., Steinberg, F., y Torreblanca, J. I. (2007). *La Europeización de España (1986-2006)*. Real Instituto Elcano.
- Pitkin, H. (1985). *El concepto de representación*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- Pitkin, H. (2004). Representation and Democracy: Uneasy Alliance. *Scandinavian Political Studies*, 27 (3), 335-342.
- Porat, M. (1977) *The Information Economy*. Washington, DC: US Department of Commerce.
- Portelli, H. (1984). L'intégration du Parti socialiste à la Cinquième République. En: *Revue française de science politique*, 34^e année, n°4-5, 816-827.
- Portero, J. A. (1991). Sobre la representación política. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, número 10, septiembre – diciembre, 89 – 119.
- Poster, M. (1993). The Net as a Public Sphere? *Wired Magazine*, 3 (11).
- Putnam, R. D. (2002). *Solo en la bolera: colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana*. Barcelona: Galaxia Gutenberg: Círculo de Lectores.
- Przeworski, A. y Sprague, J. (1989). *Paper Stones: A History of Electoral Socialism*. Chicago: University of Chicago Press.
- Przeworski, A., Stokes, S., Manin, B. (1999). *Democracy, Accountability and Representation*. New York: Cambridge University Press.
- Przeworski, A. (2003). How many ways can be third? En A. Glyn (Ed.), *Social democracy in neoliberal times* (pp. 312). Oxford: Oxford University Press.
- Ramonet, I. (2004). *¿Qué es la globalización?: ¿A quiénes beneficia, a quiénes perjudica?* Madrid: Editorial Aun Creemos en los Sueños.
- Ramonet, I. (1998). *Internet: El mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Ramos, M. L., Del Campo, E. (1997). La paradoja partidista, institucionalización y representación en los partidos políticos latinoamericanos. *América Latina hoy: Revista de ciencias sociales*. 16, 29-40.
- Rehfeld, A. (2006). Towards a General Theory of Political Representation. *The Journal of Politics*, 68 (1), 1-21.

- Reniu, J. M. (2009). *Diccionario Crítico de Ciencias Sociales*, Tomos 1-4. Madrid: Plaza y Valdés.
- Requejo, F. (1991). *Teoría crítica y estado social. neokantismo y socialdemocracia en J. Habermas*. Barcelona: Anthropos.
- Riera, P., Barberá, P., Gómez, R., Mayoral, J. A. y Montero, J. R. (2013). The electoral consequences of corruption scandals in Spain. *Crime Law Soc Change*, 60, 515 – 534.
- Rodríguez, J. J. (2005). *La nueva fase de desarrollo económico y social del capitalismo mundial*. Tesis doctoral.
- Rosanvallon, P. (1998). *Le peuple introuvable*. Francia: Folio Histoire.
- Rosenberg, A. (1981). *Democracia y socialismo. Historia política de los últimos ciento cincuenta años (1789-1937)*. México: Ediciones Pasado y Presente.
- Ross, G. (1987). De una izquierda a otra: lo social en la Francia de Mitterrand. En G. Ross, S. Hoffman y S. Malzacher (coords.), *El experimento Mitterrand* (pp. 256-278). València: Edicions Alfons el Magnànim.
- Ross, G., Hoffmann, S., Malzacher, S. (1987). *El experimento Mitterrand*. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
- Ruiz Miguel, Alfonso (2002) [1991]. La socialdemocracia. En F. Vallespín. *Historia de la Teoría Política, 4. Historia, progreso y emancipación*. Madrid: Alianza Editorial. 207–257.
- Ruiz-Rufino, R. et al. (2016). *Informe sobre la democracia en España*. Madrid: Fundación Alternativas.
- Sanmartín, I. (2004). Las "terceras vías" de la socialdemocracia durante los años 90. *Cuadernos De Estudios Gallegos*, 51 (117), 375-403.
- Sartori, G. (1968). "Representational Systems" en la voz "Representation", en la *International Encyclopedia of the Social Sciences*. New York: Macmillan and Free Press.
- Sartori, G. (1999). En defensa de la representación política. *Claves de la razón práctica*. 91, 2-6.
- Sassoon, D. (2001). *Cien años de socialismo*. Barcelona: Edhasa.
- Schmitt, C. (2011) [1928]. *Teoría de la constitución*. Madrid: Alianza Editorial.
- Schmitt, H. y Thomassen, J. (1999). *Political Representation and Legitimacy in the European Union*. Oxford: University Press.
- Schumpeter, J. (1943). *Capitalismo, socialismo y democracia*. Barcelona: Folio.
- Schweber, H. (2016). The Limits of Political Representation. *American Political Science Review*, 110 (2), 382-396.
- Sejersted, F. (2011). *The Age of Social Democracy. Norway and Sweden in the Twentieth Century*. Princeton: Princeton University Press.

- Sieppert, J. D, McMurtry, S.L. y McClelland, R. (2005). Utilizing existing statistics. En Grinnell, R. y Unrau, Y. (eds.). *Social work: Research and evaluation. Quantitative and qualitative approaches*. Nueva York: Oxford University Press.
- Smith, A. (2015) [1776]. *La riqueza de las naciones*. Epub Titivillus. Recuperado de <http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/04/Smith-Adam-La-Riqueza-de-las-Naciones.pdf> (consultado el 19/06/2017).
- Sodaro, M. (2010). *Política y ciencia política*. Madrid: McGraw Hill.
- Solchaga, C. (1997). *El final de la edad dorada*. Madrid: Taurus.
- Stagliano, R. (1998). ¿Hacia una democracia electrónica? En I., Ramonet (coord). *Internet: El mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Stake, R. (2000). Case study. En Denzin, N. y Lincoln, Y (eds.). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks: Sage.
- Stimson, J. A. et al. (1995). Dynamic representation. *American Political Science Review*, 89, 543-565.
- Stuart Mill, J. (1878). *El gobierno representativo*. Recuperado de <http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/gobiernoRepresentativo.pdf> (consultado el 19/06/2017).
- Stoker, G. (2006) *Why Politics Matters – Making Democracy Work*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Stoker, G. (2010) 'The Rise of Political Disenchantment', en C. Hay (ed.) *New Directions in Political Science: Responding to the Challenges of an Interdependent World*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 43-63.
- Tarrow, S. (2016). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.
- Temin, P. (2010). The Great Recession and the Great Depression. *Daedalus*, vol. 139 (4), 115-124.
- Tezanos, J. F. (2013). *La explicación sociológica: Una introducción a la sociología*. Madrid: UNED.
- Tezanos, J. F. (2013). *La sociedad dividida. estructuras de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Tiberj, V. (2012). La politique des deux axes. *Revue française de science politique*. 2012/1. Vol 62, 71-106.
- Tiberj, V. (2013). Values and the Votes from Mitterand to Hollande: The Rise of The Two-axis Politics. *Parliamentary Affairs*, 66, 69-86.
- Tiberj, V. y Kerrouche, E. (2013). Up and Down, Old and New: Value and Value Systems of MPs and Voters in France. *The Journal of Legislative Studies*, Vol. 19, 2, 160-177.

- Titmuss, R. (1958). *Essays on the Welfare State*. London: Allen and Unwin.
- Torcal, M. y Montero, J.R. (eds.). (2006). *Political Disaffection in Contemporary Democracies*. London: Routledge.
- Torcal, M. (2014). The Decline of Political Trust in Spain and Portugal: Economic Performance or Political Responsiveness? *American Behavioral Scientist*. 58 (12), 1542-1567.
- Torreblanca, J. I. (2010). La globalización. En M. Sodaro, *Política y ciencia política*. Madrid: McGraw-Hill.
- Torres, A. (1998). Los imperios multimedia en busca de nuevos clientes. En I. Ramonet (Coord.) *Internet: El mundo que llega. Los nuevos caminos de la comunicación*. Madrid: Alianza Editorial.
- Tormey, S. (2015). The end of representative politics. *Contemporary Political Theory*. 15.
- Touraine, A. (1971) [1969]. *La sociedad post industrial*. Barcelona: Ariel.
- Touraine, A. (1988). *Return of the Actor*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Touraine, A. (2005). *Un Nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*. Barcelona: Paidós.
- Turkle, S. (1997). *La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de internet*. Barcelona: Paidós.
- United States General Accounting Office. (1990). *Case Study Evaluations*. Washington: GAO.
- Urbinati, N., Warren, M. E. (2008). The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory. *The Annual Review of Political Science*, 11, 387-412.
- Urquizu, I. (2012). *La crisis de la socialdemocracia: ¿qué crisis?*. Madrid: Catarata.
- Urquizu, I. (2016). *La crisis de representación en España*. Madrid: Los libros de la Catarata.
- Van Dijk, T. (2000). *El discurso como estructura y proceso*. Barcelona: Gedisa.
- Van Dijk, T. (2000). *El discurso como interacción social*. Barcelona: Gedisa.
- Van de Donk, W.; Snellen, I.; Tops, P. (Eds). (1995). *Orwell in Athens. A perspective on informatization and democracy*. Nueva York: IOS Press.
- Varela, J. (2001). *Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo 1875 - 1900*. Madrid: Marcial Pons.
- Varoufakis, Y. (2015). *El Minotauro Global*. Barcelona: Debolsillo.
- Velasco, L. (1996). *Políticas del PSOE 1982-1995. Del cambio a la decepción*. Barcelona: Icaria.
- Velázquez, T., Del Río, O. (2005). Planificación de la investigación en comunicación. *Investigar en Comunicación: Guía Práctica De Métodos y Técnicas De Investigación Social*. págs. 43-76.

- Verba, S. y Nie, N.H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. New York: Harper & Row.
- Verge, T. (2007). *Partidos y representación política: las dimensiones del cambio en los partidos políticos españoles, 1976-2006*. Madrid: CIS.
- Voinot, P. (2015). *La transformación de la socialdemocracia europea entre 1973 y 1997: de la crisis del proyecto de la segunda posguerra mundial a la Tercera Vía*. Universidad de Cantabria.
- Wiersma, W. y Jurs, S.G. (2005). *Research methods in education*. Boston: Pearson.
- Wilensky, H.; Labeaux, C. (1958). *Industrial Society and Welfare*. New York: Russell Sage Foundation.
- Williams, M., Grinnell, R. M. y Unrau, Y.A. (2005). The qualitative research approach. En Grinnell, R.M. y Unrau, Y. A. (eds.). *Social work: Research and evaluation. Quantitative and qualitative approaches*. Nueva York: Oxford University Press.
- Wodak, R. Meyer, M. (2013). *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage.
- Yin, R. (2014). *Case Study Research. Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage.
- Ysàs, P. (2011). Cambio y continuidades: tres lustros de gobiernos socialistas. *Ayer*, 23-49.
- Zabaleta, A. et al. (2014). *Introducción a la economía*. Madrid: Pearson.
- Zapperi, R. (1985). *Emmanuel-Joseph Sieyès. Ecrits politiques*. Paris: Editions des Archives Contemporaines.
- Žizek, S. (2006). *Lacrimae rerum*. Barcelona: Debate.